I N D I C E
PRIMERA SECCION
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION

Declaratoria de Desastre Natural para efectos de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) vigentes, en virtud de los daños provocados por las lluvias atípicas e impredecibles que se presentaron del 22 al 24 de septiembre de 2002, ocasionadas por la presencia del huracán Isidore, que afectaron al Patrimonio Cultural (monumentos arqueológicos e históricos) de diversos municipios de los estados de Quintana Roo y Tabasco, solicitada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 2

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Anexo número 6 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Coahuila 3

Anexo número 6 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Durango 7

Anexo número 6 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Guanajuato 11

Anexo número 6 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Tlaxcala 15

Resolución por la que se modifican las cuotas mensual y anual que deberán cubrir las uniones de crédito por concepto de gastos de inspección y vigilancia, correspondientes al año 2002 19

Reglas de carácter general para normar en lo conducente lo dispuesto por el artículo 32 primer párrafo, en relación con el 9 último párrafo, y 36 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular 24

Acuerdo mediante el cual se modifica la base II de la autorización otorgada a B y B Casa de Cambio, S.A. de C.V., Actividad Auxiliar del Crédito, por aumento de capital fijo pagado 36

Oficio mediante el cual se modifica la parte inicial, así como los artículos primero y tercero, primer párrafo, base I, de la autorización otorgada a Royal & SunAlliance Seguros (México), S.A. de C.V., por cambio de su denominación y de entidad financiera del exterior 37

SECRETARIA ECONOMIA

Acuerdo por el que se establecen requisitos específicos para la importación temporal de mercancías 39

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION

Reglamento de operación y funcionamiento interno del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal 47

Circular número 081 sobre la vigencia de los acuerdos relativos a las medidas de emergencia establecidas para prevenir la introducción de fiebre aftosa a los Estados Unidos Mexicanos 58

Modificación al calendario de apertura y cierre de ventanillas y entrega de los apoyos para el ciclo primavera-verano 2002, en el Estado de Chiapas 60

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Decreto por el que se declara de utilidad pública la construcción de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla, tramo Las Choapas-Raudales y del Entronque Las Choapas I, y se expropian las superficies de 114,602.27 m^2 y 889,607.75 m^2. (Segunda publicación) 61

Norma Oficial Mexicana NOM-035-SCT4-1999, Equipo de protección personal y de seguridad para la atención de incendios, accidentes e incidentes que involucren mercancías peligrosas en embarcaciones y artefactos navales 68

PODER JUDICIAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Lista de personas admitidas al Primer Concurso de Oposición Libre para la Designación de Magistrados de Circuito, ordenada por el Acuerdo General 42/2002 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 75

Lista de personas admitidas al Segundo Concurso de Oposición Libre para la Designación de Jueces de Distrito, ordenada por el Acuerdo General 43/2002 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 76

BANCO DE MEXICO

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana 87

Tasas de interés de instrumentos de captación bancaria en moneda nacional 87

Tasa de interés interbancaria de equilibrio 88

Información semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 18 de octubre de 2002 88

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

Sentencia pronunciada en el juicio agrario 12/2002, relativo a la ampliación de ejido por incorporación de tierras al régimen ejidal, a favor del poblado Castamay, Municipio de Campeche, Camp. 89

SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA SALUD

Norma Oficial Mexicana NOM-184-SSA1-2002, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado. Especificaciones sanitarias 1

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la procedencia constitucional y legal de la Proyección de Principios de Doctrina 2002 que presenta el Partido Acción Nacional y que se adiciona al documento vigente de principios de doctrina 55

AVISOS

Judiciales y generales 79

TERCERA SECCION
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE ENERGIA

Norma Oficial Mexicana NOM-010-SECRE-2002, Gas natural comprimido para uso automotor. Requisitos mínimos de seguridad para estaciones de servicio 1

Norma Oficial Mexicana NOM-011-SECRE-2000, Gas natural comprimido para uso automotor. Requisitos mínimos de seguridad en instalaciones vehiculares 24

PODER JUDICIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

Sentencia relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 16/2002, promovida por el Partido Acción Nacional, en contra de la Quincuagésima Sexta Legislatura y del Gobernador, ambos del Estado de San Luis Potosí 40

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
ALEJANDRO LÓPEZ GONZÁLEZ, *Director.*
Río Amazonas No. 62, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Tel. 5093-3200 extensiones: *Dirección* 35006, *Producción* 35094 y 35100,
Inserciones 35079, 35080, 35081 y 35082; Fax 35068
Suscripciones y *quejas:* 35054 y 35056
Correo electrónico: *dof@segob.gob.mx.* Dirección electrónica: *www.gobernacion.gob.mx*
Impreso en Talleres Gráficos de México—México

Esta edición consta de tres secciones

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION

Tomo DLXXXIX No. 20 México, D. F., Miércoles 23 de octubre de 2002

CONTENIDO

SECRETARIA DE GOBERNACION
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
SECRETARIA ECONOMIA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
BANCO DE MEXICO
TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO
SECRETARIA SALUD
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
AVISOS
SECRETARIA DE ENERGIA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION

DECLARATORIA de Desastre Natural para efectos de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) vigentes, en virtud de los daños provocados por las lluvias atípicas e impredecibles que se presentaron del 22 al 24 de septiembre de 2002, ocasionadas por la presencia del huracán Isidore, que afectaron al Patrimonio Cultural (monumentos arqueológicos e históricos) de diversos municipios de los estados de Quintana Roo y Tabasco, solicitada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.

DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL PARA EFECTOS DE LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) VIGENTES, EN VIRTUD DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LAS LLUVIAS ATIPICAS E IMPREDECIBLES QUE SE PRESENTARON DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2002, OCASIONADAS POR LA PRESENCIA DEL HURACAN "ISIDORE", QUE AFECTARON AL PATRIMONIO CULTURAL (MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS E HISTORICOS) DE DIVERSOS MUNICIPIOS DE LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO Y TABASCO, SOLICITADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA (INAH).

SANTIAGO CREEL MIRANDA, Secretario de Gobernación, asistido por María del Carmen Segura Rangel, Coordinadora General de Protección Civil de dicha Secretaría, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 12 fracción IX y 29 al 37 de la Ley General de Protección Civil; 5, fracciones I y XXIV y 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, y numerales 45, 46, 47, Capítulo IV, Sección IV y Anexo IX del Acuerdo que establece las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) vigentes, y

CONSIDERANDO

Que el Acuerdo que establece las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) vigentes, precisa que el FONDEN tiene como objetivo atender los efectos de desastres naturales imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades federales, así como de las entidades federativas y que es un complemento de las acciones que deben llevarse a cabo para la atención de desastres naturales.

Que por petición escrita a la Secretaría de Gobernación, el C. Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), mediante oficios número 401-1-300, 401-1-301, 401-1-302, 401-1-303
y 401-1-304 recibidos con fecha 1 de octubre de 2002, solicitó la emisión de la Declaratoria de Desastre Natural para 4 municipios del Estado de Quintana Roo; 11 del Estado de Campeche; 3 del Estado de Tabasco; 1 del Estado de Veracruz y 85 del Estado de Yucatán, respectivamente, en virtud de los daños ocasionados por el Huracán Isidore, fenómeno atípico e impredecible ocurrido los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2002, en dichas entidades federativas.

Asimismo, en la referida petición el C. Director General del INAH, manifiesta que la atención de los daños superan la capacidad operativa y financiera de ese Instituto.

De igual forma, expresa que dicho Instituto cuenta con una póliza de seguro que cubre los bienes culturales contra todos los riesgos, y una vez que la empresa aseguradora cubra las indemnizaciones correspondientes, se reintegrarán estos recursos al FONDEN, de acuerdo con lo establecido en el numeral 9, fracción VI de las Reglas de Operación del FONDEN vigentes.

Que para efectos de emitir la presente Declaratoria, en acatamiento al numeral 47 de las Reglas de Operación del FONDEN vigentes, la Secretaría de Gobernación solicitó con fecha 3 de octubre de 2002, la opinión de la Comisión Nacional del Agua (CNA), misma que mediante oficio número BOO.-1324 recibido con fecha 14 de octubre de 2002, señaló que ocurrieron lluvias atípicas e impredecibles los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2002, en 4 municipios del Estado de Quintana Roo; 11 del Estado de Campeche; 3 del Estado de Tabasco y 85 del Estado de Yucatán.

Con base en lo anterior y en virtud de que algunos de los municipios ya fueron declarados como zona de desastre natural, de acuerdo con las Declaratorias de Desastre Natural publicadas en el **Diario Oficial de la Federación**, los días 4 y 16 de octubre de 2002, se determinó procedente declarar como Zona de Desastre a los municipios de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, y Centla, Paraíso y Huimanguillo del Estado de Tabasco, por lo que esta dependencia ha tenido a bien expedir la siguiente:

DECLARATORIA DE DESASTRE NATURAL PARA EFECTOS DE LAS REGLAS DE OPERACION DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) VIGENTES, EN VIRTUD DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR LAS LLUVIAS ATIPICAS E IMPREDECIBLES QUE SE PRESENTARON DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2002, OCASIONADAS POR LA PRESENCIA DEL HURACAN "ISIDORE", QUE AFECTARON AL PATRIMONIO CULTURAL (MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS E HISTORICOS)
DE DIVERSOS MUNICIPIOS DE LOS ESTADOS DE QUINTANA ROO Y TABASCO, SOLICITADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA (INAH)

Artículo 1o.- Para efectos de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) vigentes, se declara como zona de desastre, afectados por las lluvias atípicas e impredecibles que se presentaron del 22 al 24 de septiembre de 2002, a los municipios de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, y Centla, Paraíso y Huimanguillo del Estado de Tabasco, mismos que, una vez que sean evaluados los daños, se precisarán por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el ámbito de su competencia.

La atención de los daños en los monumentos arqueológicos e históricos sitos en los municipios de los Estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que no se contemplan en la presente Declaratoria, quedará amparada bajo las Declaratorias de Desastre Natural publicadas en el **Diario Oficial de la Federación**, los días 4 de octubre de 2002 para las dos primeras entidades y 16 de octubre del mismo año para la última entidad.

Artículo 2o.- La presente Declaratoria de Desastre Natural se expide exclusivamente para efectos de acceder a los recursos con cargo al presupuesto autorizado al FONDEN, así como a los recursos fideicomitidos en el Fideicomiso FONDEN por lo que corresponde a monumentos arqueológicos e históricos a cargo del INAH, según lo dispuesto en el numeral 34 de las Reglas de Operación del FONDEN vigentes, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002, a la Ley General de Protección Civil y a las Reglas de Operación vigentes de dicho Fondo.

Artículo 3o.- La determinación de los daños a mitigar en los municipios antes mencionados de los estados de Quintana Roo y Tabasco, se hará en los términos de los numerales 34 al 37, 47, 49, 50 y anexo IX de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales vigentes.

Artículo 4o.- La presente Declaratoria se publicará en el **Diario Oficial de la Federación** y en uno de los diarios de mayor circulación en los estados de Quintana Roo y Tabasco.

México, Distrito Federal, a dieciocho de octubre de dos mil dos.- El Secretario de Gobernación, **Santiago Creel Miranda**.- Rúbrica.- La Coordinadora General de Protección Civil, **María del Carmen Segura Rangel**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ANEXO número 6 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Coahuila.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.

ANEXO No. 6 AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL QUE CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO,
Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA.

El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Coahuila tienen celebrado Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que entró en vigor el 1 de enero de 1997;

El H. Congreso de la Unión aprobó en diciembre de 2001 diversas disposiciones fiscales, entre las cuales se encuentra el establecimiento del impuesto sustitutivo del crédito al salario y del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios, por lo que se hace necesaria la celebración de un Anexo mediante el cual las entidades federativas asuman funciones de comprobación en materia de dichos impuestos, de conformidad con lo dispuesto en la legislación federal a que se refiere el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, vigente a partir del 1 de enero de 1997 y modificado por acuerdos publicados en el **Diario Oficial de la Federación** de 14 de agosto de 1997, 5 de octubre de 2001 y 29 de julio de 2002, así como en los artículos tercero y cuarto del Decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y octavo de los transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, ambos publicados en el **Diario Oficial de la Federación** de 1 de enero de 2002 y Fe de Erratas publicada en dicho órgano de difusión oficial el 24 de enero de 2002;

Por otra parte, el Ejecutivo Federal dictó un Decreto, mismo que fue publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de 5 de marzo de 2002, en cuyo artículo quinto se establece que se exime totalmente a los contribuyentes del pago del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios que se cause por la enajenación de los conceptos ahí detallados, siempre que dicha enajenación se efectúe con el público en general, cuando se realice por residentes en el Estado de Baja California y en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales del norte y sur del país, siempre que la entrega material de los bienes se lleve a cabo en los lugares geográficos citados;

Por lo expuesto, la Secretaría y el Estado han acordado suscribir el presente Anexo al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal para adicionar las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- La Secretaría y el Estado convienen en coordinarse para que éste ejerza funciones de comprobación en materia del impuesto sustitutivo del crédito al salario a que se refieren los artículos tercero y cuarto del Decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios establecido en el artículo octavo de los transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, ambos publicados en el **Diario Oficial de la Federación** de 1 de enero de 2002 y Fe de Erratas publicada en dicho órgano de difusión oficial el 24 de enero de 2002, de conformidad con lo establecido en dichas disposiciones, en la legislación federal aplicable y en las cláusulas siguientes.

SEGUNDA.- En el ejercicio de las facultades de comprobación, el Estado tendrá las atribuciones relativas a la verificación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, incluyendo las de ordenar y practicar visitas e inspecciones en el domicilio fiscal o establecimientos de los contribuyentes, de los responsables solidarios y de los terceros relacionados con ellos, así como en las oficinas de la autoridad competente. Asimismo, el Estado tendrá las siguientes obligaciones:

I. Realizar actos de verificación para mantener actualizado el padrón de contribuyentes, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I de la cláusula octava del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

II. Cumplir con el programa operativo anual que determine la Secretaría, previamente concertado con el Estado.

III. Llevar a cabo los actos de comprobación a que se refiere este Anexo, conforme al programa operativo anual a que se refiere la fracción anterior, en los términos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones federales aplicables.

TERCERA.- El Estado ejercerá, además de lo establecido en la cláusula anterior, las siguientes facultades:

I. En materia de determinación de los impuestos omitidos y su actualización, sus accesorios e imposición de multas:

a). Determinar los impuestos omitidos, su actualización, así como sus accesorios a cargo de los contribuyentes fiscalizados por el propio Estado, responsables solidarios y demás obligados con base en hechos que conozca, derivado del ejercicio de sus facultades de comprobación, conforme a la legislación fiscal federal aplicable.

b). Imponer las multas que correspondan por infracciones al Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales federales, que conforme a este Anexo corresponda aplicar a las autoridades fiscales del Estado.

c). Condonar y reducir las multas que imponga en el ejercicio de sus facultades delegadas de comprobación de los impuestos.

d). Notificar las resoluciones que determinen los créditos fiscales que se generen con motivo del ejercicio de las facultades a que se refiere esta cláusula.

II. En materia de recaudación:

a). Recaudar el importe de los pagos que se obtengan como resultado de sus actuaciones, así como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores aritméticos y sus accesorios.

b). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, a fin de que se hagan efectivos los créditos y sus accesorios que se generen con motivo de los actos a que se refiere esta fracción y la anterior de la presente cláusula.

Las cantidades que se generen como resultado de las acciones del Estado en materia de comprobación de estos impuestos serán pagadas en las instituciones de crédito o en las oficinas recaudadoras que al efecto autorice el mismo.

III. En materia de autorizaciones:

a). Recibir y resolver las solicitudes presentadas por los contribuyentes, de devolución de cantidades pagadas indebidamente al Estado o cuando legalmente así proceda, verificar, determinar y cobrar las devoluciones improcedentes e imponer las multas correspondientes.

b). Otorgar las correspondientes al pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del interés fiscal, en términos del Código Fiscal de la Federación.

IV. Revisar y, en su caso, modificar o revocar las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular, en los términos del penúltimo y último párrafos del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación.

V. En materia de recursos administrativos, el Estado tramitará y resolverá los establecidos en el Código Fiscal de la Federación, en relación con actos o resoluciones del propio Estado, emitidos en ejercicio de las facultades que le confiere este Anexo.

VI. En materia de juicios, el Estado intervendrá como parte en los que se susciten con motivo del ejercicio de las facultades delegadas. De igual manera, éste asumirá la responsabilidad en la defensa de los mismos, sin perjuicio de la intervención que corresponde a la Secretaría. Para estos efectos, el Estado contará con la asesoría legal de la Secretaría, en la forma y términos que se le soliciten.

El Estado informará periódicamente a la Secretaría, de acuerdo con los lineamientos que al efecto señale ésta, la situación en que se encuentren los juicios en que haya intervenido y de las resoluciones que recaigan sobre los mismos.

CUARTA.- Quedan excluidos del ejercicio de las facultades previstas en la cláusula anterior, en materia del impuesto sustitutivo del crédito al salario y del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios, los siguientes contribuyentes:

I. Los que integran el sistema financiero a que se refiere el último párrafo del artículo 8o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

II. Las sociedades mercantiles que cuenten con autorización de la Secretaría para operar como controladoras y las controladas, en los términos del capítulo VI del título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

III. Los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria de la Federación, sujetas a control presupuestal.

IV. Las otras entidades y sujetos respecto de los cuales no tengan competencia las administraciones locales del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría.

QUINTA.- Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones en materia del impuesto sustitutivo del crédito al salario y del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios, no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, el Estado ejercerá las facultades que establece el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, para lo cual se estará a lo siguiente:

I. El Estado exigirá de los contribuyentes la presentación de la declaración o documento respectivo en materia del impuesto sustitutivo del crédito al salario y del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios.

II. La Secretaría proporcionará al Estado los datos de los contribuyentes que no presentaron sus declaraciones en los plazos señalados por las disposiciones fiscales a efecto de que el Estado exija su cumplimiento.

III. El Estado ejercerá las siguientes facultades:

a). Emitir requerimientos a través de los cuales exija la presentación de declaraciones y, en su caso, el pago del impuesto omitido, su actualización y accesorios.

b). Notificar los requerimientos que se emitan y las demás resoluciones a que se refiere esta cláusula.

c). Imponer las multas previstas en el Código Fiscal de la Federación por presentar previo requerimiento, una declaración extemporánea, así como por no cumplir con los requerimientos o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos.

d). Hacer efectiva al contribuyente o responsable solidario que haya incurrido en la omisión, una cantidad igual a la contribución que hubiere determinado en la última o cualquiera de las seis últimas declaraciones de que se trate, o la que resulte para dichos periodos de la determinación formulada por la autoridad, según corresponda, cuando haya omitido presentar oportunamente alguna declaración subsecuente para el pago de los impuestos.

e). Hacer efectiva al contribuyente, con carácter provisional, una cantidad igual a la que a éste corresponda determinar, cuando la omisión sea de una declaración de la que se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota.

f). Embargar precautoriamente bienes o negociaciones cuando el contribuyente haya omitido presentar declaraciones en los últimos tres ejercicios o cuando no atienda el requerimiento de la autoridad.

g). Condonar y reducir las multas en términos de las disposiciones fiscales, que imponga en el ejercicio de sus facultades delegadas en materia de vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales a que se refiere esta cláusula.

h). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, a fin de que se hagan efectivos los créditos y sus accesorios legales, que se generen con motivo de los actos a que se refieren los incisos c, d y f) de esta fracción.

IV. En materia de recaudación, el Estado recibirá, por conducto de las instituciones de crédito o de las oficinas recaudadoras que autorice el mismo, las declaraciones, las contribuciones y sus accesorios; asimismo, determinará y cobrará las diferencias que provengan de errores aritméticos.

V. El Estado autorizará el pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del interés fiscal, en los términos del Código Fiscal de la Federación.

VI. El Estado proporcionará a la Secretaría, en la forma y términos que ésta señale en la normatividad que emita al respecto, la información sobre los resultados que obtenga con motivo de su actuación.

SEXTA.- El Estado informará en todos los casos a la Secretaría sobre la presunta comisión de cualquier delito fiscal federal de que tenga conocimiento con motivo de sus actuaciones, en los términos de lo dispuesto en la cláusula quinta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

SEPTIMA.- El Estado percibirá por la realización de las funciones a que se refiere este Anexo en materia del impuesto sustitutivo del crédito al salario y del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios y sus correspondientes accesorios, lo siguiente:

I. 100% del monto efectivamente pagado de los créditos determinados y que hayan quedado firmes, con base en la acción fiscalizadora en dichos gravámenes.

II. 100% de las multas que el mismo imponga, efectivamente pagadas y que hayan quedado firmes, así como de los honorarios de notificación que se generen, por los requerimientos de solicitudes de inscripción y avisos al Registro Federal de Contribuyentes, derivados de la realización de actos de verificación para mantener actualizado el padrón de contribuyentes.

III. 100% del monto efectivamente pagado y que haya quedado firme, cuando en el dictamen fiscal correspondiente se hayan reflejado omisiones en las obligaciones del contribuyente.

IV. 100% de las multas efectivamente pagadas y que hayan quedado firmes, de aquellos contribuyentes que no hayan presentado dictamen fiscal en materia de los impuestos a que se refiere este Anexo y dicha omisión haya sido descubierta por el Estado.

V. Por la realización de los actos de vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales:

a). 50% sobre el monto del impuesto y recargos que se recauden por el Estado, con motivo de los requerimientos formulados por el mismo. El 50% restante corresponderá a la Federación y será enterado a ésta en los términos de la Sección IV del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

b). 100% de las multas que el mismo imponga, efectivamente pagadas y que hayan quedado firmes.

c). 100% de los honorarios que se recauden por la notificación de requerimientos para el cumplimiento de obligaciones fiscales, en términos del artículo 137 último párrafo del Código Fiscal de la Federación.

d). 100% de los gastos de ejecución que se recauden en términos del artículo 150 fracciones I, II y III del Código Fiscal de la Federación, por la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos que se determinen.

La aplicación de los incentivos a que se refiere esta cláusula, sólo procederá cuando se paguen efectivamente los créditos respectivos y siempre que se cumpla con el procedimiento establecido en el primer párrafo de la cláusula vigésima primera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

OCTAVA.- La Secretaría se reserva el ejercicio de las facultades de planeación, programación, normatividad y evaluación de las acciones de verificación y el Estado observará lo que a este respecto señale la propia Secretaría.

Para los efectos de programación de los actos de verificación a que se refiere este Anexo, se estará a lo dispuesto en la cláusula vigésima primera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

NOVENA.- Para la rendición de la cuenta comprobada se estará en lo conducente, a lo dispuesto en la Sección IV del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

TRANSITORIAS

PRIMERA.- El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y, por lo tanto, le son aplicables, en todo lo conducente sus disposiciones, así como las de la legislación fiscal federal correspondiente.

Este Anexo, deberá ser publicado tanto en el Periódico Oficial del Estado como en el **Diario Oficial de la Federación** y entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en este último.

SEGUNDA.- Para los efectos de este Anexo, se estará a lo dispuesto en el artículo quinto del Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el **Diario Oficial de la Federación** de 5 de marzo de 2002.

México, D.F., a 4 de septiembre de 2002.- Por el Estado: el Gobernador Constitucional, **Enrique Martínez y Martínez**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobierno, **José Jesús Raúl Sifuentes Guerrero**.- Rúbrica.-
El Secretario de Finanzas, **Javier Guerrero García**.- Rúbrica.- Por la Secretaría: el Secretario de Hacienda y Crédito Público, **José Francisco Gil Díaz**.- Rúbrica.

ANEXO número 6 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Durango.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ANEXO NUMERO 6 AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL QUE CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO.

El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Durango tienen celebrado Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que entró en vigor el 1 de enero de 1997;

El H. Congreso de la Unión aprobó en diciembre de 2001 diversas disposiciones fiscales, entre las cuales se encuentra el establecimiento del impuesto sustitutivo del crédito al salario y del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios, por lo que se hace necesaria la celebración de un Anexo mediante el cual las entidades federativas asuman funciones de comprobación en materia de dichos impuestos, de conformidad con lo dispuesto en la legislación federal a que se refiere el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, vigente a partir del 1 de enero de 1997 y modificado por acuerdos publicados en el **Diario Oficial de la Federación** de 1 de agosto de 1997, 3 de diciembre de 1999 y 8 de mayo de 2001, así como en los artículos tercero y cuarto del Decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y octavo de los transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, ambos publicados en el **Diario Oficial de la Federación** de 1 de enero de 2002 y Fe de Erratas publicada en dicho órgano de difusión oficial el 24 de enero de 2002;

Por lo expuesto, la Secretaría y el Estado han acordado suscribir el presente Anexo al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal para adicionar las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA.- La Secretaría y el Estado convienen en coordinarse para que éste ejerza funciones de comprobación en materia del impuesto sustitutivo del crédito al salario a que se refieren los artículos tercero y cuarto del Decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios establecido en el artículo octavo de los transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, ambos publicados en el **Diario Oficial de la Federación** de 1 de enero de 2002 y Fe de Erratas publicada en dicho órgano de difusión oficial el 24 de enero de 2002, de conformidad con lo establecido en dichas disposiciones, en la legislación federal aplicable y en las cláusulas siguientes.

SEGUNDA.- En el ejercicio de las facultades de comprobación, el Estado tendrá las atribuciones relativas a la verificación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, incluyendo las de ordenar y practicar visitas e inspecciones en el domicilio fiscal o establecimientos de los contribuyentes, de los responsables solidarios y de los terceros relacionados con ellos, así como en las oficinas de la autoridad competente. Asimismo, el Estado tendrá las siguientes obligaciones:

I. Realizar actos de verificación para mantener actualizado el padrón de contribuyentes, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I de la cláusula octava del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

II. Cumplir con el programa operativo anual que determine la Secretaría, previamente concertado con el Estado.

III. Llevar a cabo los actos de comprobación a que se refiere este Anexo, conforme al programa operativo anual a que se refiere la fracción anterior, en los términos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones federales aplicables.

TERCERA.- El Estado ejercerá, además de lo establecido en la cláusula anterior, las siguientes facultades:

I. En materia de determinación de los impuestos omitidos y su actualización, sus accesorios e imposición de multas:

a). Determinar los impuestos omitidos, su actualización, así como sus accesorios a cargo de los contribuyentes fiscalizados por el propio Estado, responsables solidarios y demás obligados con base en hechos que conozca, derivado del ejercicio de sus facultades de comprobación, conforme a la legislación fiscal federal aplicable.

b). Imponer las multas que correspondan por infracciones al Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales federales, que conforme a este Anexo corresponda aplicar a las autoridades fiscales del Estado.

c). Condonar y reducir las multas que imponga en el ejercicio de sus facultades delegadas de comprobación de los impuestos.

d). Notificar las resoluciones que determinen los créditos fiscales que se generen con motivo del ejercicio de las facultades a que se refiere esta cláusula.

II. En materia de recaudación:

a). Recaudar el importe de los pagos que se obtengan como resultado de sus actuaciones, así como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores aritméticos y sus accesorios.

b). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, a fin de que se hagan efectivos los créditos y sus accesorios que se generen con motivo de los actos a que se refiere esta fracción y la anterior de la presente cláusula.

Las cantidades que se generen como resultado de las acciones del Estado en materia de comprobación de estos impuestos serán pagadas en las instituciones de crédito o en las oficinas recaudadoras que al efecto autorice el mismo.

III. En materia de autorizaciones:

a). Recibir y resolver las solicitudes presentadas por los contribuyentes, de devolución de cantidades pagadas indebidamente al Estado o cuando legalmente así proceda, verificar, determinar y cobrar las devoluciones improcedentes e imponer las multas correspondientes.

b). Otorgar las correspondientes al pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del interés fiscal, en términos del Código Fiscal de la Federación.

IV. Revisar y, en su caso, modificar o revocar las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular, en los términos del penúltimo y último párrafos del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación.

V. En materia de recursos administrativos, el Estado tramitará y resolverá los establecidos en el Código Fiscal de la Federación, en relación con actos o resoluciones del propio Estado, emitidos en ejercicio de las facultades que le confiere este Anexo.

VI. En materia de juicios, el Estado intervendrá como parte en los que se susciten con motivo del ejercicio de las facultades delegadas. De igual manera, éste asumirá la responsabilidad en la defensa de los mismos, sin perjuicio de la intervención que corresponde a la Secretaría. Para estos efectos, el Estado contará con la asesoría legal de la Secretaría, en la forma y términos que se le soliciten.

El Estado informará periódicamente a la Secretaría, de acuerdo con los lineamientos que al efecto señale ésta, la situación en que se encuentren los juicios en que haya intervenido y de las resoluciones que recaigan sobre los mismos.

CUARTA.- Quedan excluidos del ejercicio de las facultades previstas en la cláusula anterior, en materia del impuesto sustitutivo del crédito al salario y del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios, los siguientes contribuyentes:

I. Los que integran el sistema financiero a que se refiere el último párrafo del artículo 8o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

II. Las sociedades mercantiles que cuenten con autorización de la Secretaría para operar como controladoras y las controladas, en los términos del Capítulo VI del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

III. Los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria de la Federación, sujetas a control presupuestal.

IV. Las otras entidades y sujetos respecto de los cuales no tengan competencia las administraciones locales del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría.

QUINTA.- Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones en materia del impuesto sustitutivo del crédito al salario y del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios, no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, el Estado ejercerá las facultades que establece el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, para lo cual se estará a lo siguiente:

I. El Estado exigirá de los contribuyentes la presentación de la declaración o documento respectivo en materia del impuesto sustitutivo del crédito al salario y del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios.

II. La Secretaría proporcionará al Estado los datos de los contribuyentes que no presentaron sus declaraciones en los plazos señalados por las disposiciones fiscales a efecto de que el Estado exija su cumplimiento.

III. El Estado ejercerá las siguientes facultades:

a). Emitir requerimientos a través de los cuales exija la presentación de declaraciones y, en su caso, el pago del impuesto omitido, su actualización y accesorios.

b). Notificar los requerimientos que se emitan y las demás resoluciones a que se refiere esta cláusula.

c). Imponer las multas previstas en el Código Fiscal de la Federación por presentar previo requerimiento, una declaración extemporánea, así como por no cumplir con los requerimientos o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos.

d). Hacer efectiva al contribuyente o responsable solidario que haya incurrido en la omisión, una cantidad igual a la contribución que hubiere determinado en la última o cualquiera de las seis últimas declaraciones de que se trate, o la que resulte para dichos periodos de la determinación formulada por la autoridad, según corresponda, cuando haya omitido presentar oportunamente alguna declaración subsecuente para el pago de los impuestos.

e). Hacer efectiva al contribuyente, con carácter provisional, una cantidad igual a la que a éste corresponda determinar, cuando la omisión sea de una declaración de la que se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota.

f). Embargar precautoriamente bienes o negociaciones cuando el contribuyente haya omitido presentar declaraciones en los últimos tres ejercicios o cuando no atienda el requerimiento de la autoridad.

g). Condonar y reducir las multas en términos de las disposiciones fiscales, que imponga en el ejercicio de sus facultades delegadas en materia de vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales a que se refiere esta cláusula.

h). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, a fin de que se hagan efectivos los créditos y sus accesorios legales, que se generen con motivo de los actos a que se refieren los incisos c, d y f) de esta fracción.

IV. En materia de recaudación, el Estado recibirá, por conducto de las instituciones de crédito o de las oficinas recaudadoras que autorice el mismo, las declaraciones, las contribuciones y sus accesorios; asimismo, determinará y cobrará las diferencias que provengan de errores aritméticos.

V. El Estado autorizará el pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del interés fiscal, en los términos del Código Fiscal de la Federación.

VI. El Estado proporcionará a la Secretaría, en la forma y términos que ésta señale en la normatividad que emita al respecto, la información sobre los resultados que obtenga con motivo de su actuación.

SEXTA.- El Estado informará en todos los casos a la Secretaría sobre la presunta comisión de cualquier delito fiscal federal de que tenga conocimiento con motivo de sus actuaciones, en los términos de lo dispuesto en la cláusula quinta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

SEPTIMA.- El Estado percibirá por la realización de las funciones a que se refiere este Anexo en materia del impuesto sustitutivo del crédito al salario y del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios y sus correspondientes accesorios, lo siguiente:

I. 100% del monto efectivamente pagado de los créditos determinados y que hayan quedado firmes, con base en la acción fiscalizadora en dichos gravámenes.

II. 100% de las multas que el mismo imponga, efectivamente pagadas y que hayan quedado firmes, así como de los honorarios de notificación que se generen, por los requerimientos de solicitudes de inscripción y avisos al Registro Federal de Contribuyentes, derivados de la realización de actos de verificación para mantener actualizado el padrón de contribuyentes.

III. 100% del monto efectivamente pagado y que haya quedado firme, cuando en el dictamen fiscal correspondiente se hayan reflejado omisiones en las obligaciones del contribuyente.

IV. 100% de las multas efectivamente pagadas y que hayan quedado firmes, de aquellos contribuyentes que no hayan presentado dictamen fiscal en materia de los impuestos a que se refiere este Anexo y dicha omisión haya sido descubierta por el Estado.

V. Por la realización de los actos de vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales:

a). 50% sobre el monto del impuesto y recargos que se recauden por el Estado, con motivo de los requerimientos formulados por el mismo. El 50% restante corresponderá a la Federación y será enterado a ésta en los términos de la Sección IV del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

b). 100% de las multas que el mismo imponga, efectivamente pagadas y que hayan quedado firmes.

c). 100% de los honorarios que se recauden por la notificación de requerimientos para el cumplimiento de obligaciones fiscales, en términos del artículo 137 último párrafo del Código Fiscal de la Federación.

d). 100% de los gastos de ejecución que se recauden en términos del artículo 150 fracciones I, II y III del Código Fiscal de la Federación, por la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos que se determinen.

La aplicación de los incentivos a que se refiere esta cláusula, sólo procederá cuando se paguen efectivamente los créditos respectivos y siempre que se cumpla con el procedimiento establecido en el primer párrafo de la cláusula vigésima primera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

OCTAVA.- La Secretaría se reserva el ejercicio de las facultades de planeación, programación, normatividad y evaluación de las acciones de verificación y el Estado observará lo que a este respecto señale la propia Secretaría.

Para los efectos de programación de los actos de verificación a que se refiere este Anexo, se estará a lo dispuesto en la cláusula vigésima primera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

NOVENA.- Para la rendición de la cuenta comprobada, se estará en lo conducente, a lo dispuesto en la Sección IV del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

TRANSITORIA

UNICA.- El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, y por lo tanto le son aplicables, en todo lo conducente sus disposiciones, así como las de la legislación fiscal federal correspondiente.

Este Anexo deberá ser publicado tanto en el Periódico Oficial del Estado como en el **Diario Oficial de la Federación** y entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en este último.

México, D.F., a 27 de agosto de 2002.- Por el Estado: el Gobernador Constitucional, **Angel Sergio Guerrero Mier**.- Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, **José Miguel Castro Carrillo**.- Rúbrica.- El Secretario de Finanzas y de Administración, **Francisco Luis Monárrez Rincón**.- Rúbrica.- Por la Secretaría: el Secretario de Hacienda y Crédito Público, **José Francisco Gil Díaz**.- Rúbrica.

ANEXO número 6 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Guanajuato.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.

ANEXO No. 6 AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL QUE CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO,
Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.

El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Guanajuato tienen celebrado Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que entró en vigor el 1 de enero de 1997;

El H. Congreso de la Unión aprobó en diciembre de 2001 diversas disposiciones fiscales, entre las cuales se encuentra el establecimiento del impuesto sustitutivo del crédito al salario y del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios, por lo que se hace necesaria la celebración de un Anexo mediante el cual las entidades federativas asuman funciones de comprobación en materia de dichos impuestos, de conformidad con lo dispuesto en la legislación federal a que se refiere el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, vigente a partir del 1 de enero de 1997 y modificado por acuerdos publicados en el **Diario Oficial de la Federación** de 22 de agosto de 1997, 7 de enero de 2000 y 10 de diciembre de 2001, así como en los artículos tercero y cuarto del Decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y octavo de los transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, ambos publicados en el **Diario Oficial de la Federación** de 1 de enero de 2002 y Fe de Erratas publicada en dicho órgano de difusión oficial el 24 de enero de 2002;

Por lo expuesto, la Secretaría y el Estado han acordado suscribir el presente Anexo al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal para adicionar las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- La Secretaría y el Estado convienen en coordinarse para que éste ejerza funciones de comprobación en materia del impuesto sustitutivo del crédito al salario a que se refieren los artículos tercero y cuarto del Decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios establecido en el artículo octavo de los transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, ambos publicados en el **Diario Oficial de la Federación** de 1 de enero de 2002 y Fe de Erratas publicada en dicho órgano de difusión oficial el 24 de enero de 2002, de conformidad con lo establecido en dichas disposiciones, en la legislación federal aplicable y en las cláusulas siguientes.

SEGUNDA.- En el ejercicio de las facultades de comprobación, el Estado tendrá las atribuciones relativas a la verificación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, incluyendo las de ordenar y practicar visitas e inspecciones en el domicilio fiscal o establecimientos de los contribuyentes, de los responsables solidarios y de los terceros relacionados con ellos, así como en las oficinas de la autoridad competente. Asimismo, el Estado tendrá las siguientes obligaciones:

I. Realizar actos de verificación para mantener actualizado el padrón de contribuyentes, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I de la cláusula octava del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

II. Cumplir con el programa operativo anual que determine la Secretaría, previamente concertado con el Estado.

III. Llevar a cabo los actos de comprobación a que se refiere este Anexo, conforme al programa operativo anual a que se refiere la fracción anterior, en los términos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones federales aplicables.

TERCERA.- El Estado ejercerá, además de lo establecido en la cláusula anterior, las siguientes facultades:

I. En materia de determinación de los impuestos omitidos y su actualización, sus accesorios e imposición de multas:

a). Determinar los impuestos omitidos, su actualización, así como sus accesorios a cargo de los contribuyentes fiscalizados por el propio Estado, responsables solidarios y demás obligados con base en hechos que conozca, derivado del ejercicio de sus facultades de comprobación, conforme a la legislación fiscal federal aplicable.

b). Imponer las multas que correspondan por infracciones al Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales federales, que conforme a este Anexo corresponda aplicar a las autoridades fiscales del Estado.

c). Condonar y reducir las multas que imponga en el ejercicio de sus facultades delegadas de comprobación de los impuestos.

d). Notificar las resoluciones que determinen los créditos fiscales que se generen con motivo del ejercicio de las facultades a que se refiere esta cláusula.

II. En materia de recaudación:

a). Recaudar el importe de los pagos que se obtengan como resultado de sus actuaciones, así como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores aritméticos y sus accesorios.

b). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, a fin de que se hagan efectivos los créditos y sus accesorios que se generen con motivo de los actos a que se refiere esta fracción y la anterior de la presente cláusula.

Las cantidades que se generen como resultado de las acciones del Estado en materia de comprobación de estos impuestos serán pagadas en las instituciones de crédito o en las oficinas recaudadoras que al efecto autorice el mismo.

III. En materia de autorizaciones:

a). Recibir y resolver las solicitudes presentadas por los contribuyentes, de devolución de cantidades pagadas indebidamente al Estado o cuando legalmente así proceda, verificar, determinar y cobrar las devoluciones improcedentes e imponer las multas correspondientes.

b). Otorgar las correspondientes al pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del interés fiscal, en términos del Código Fiscal de la Federación.

IV. Revisar y, en su caso, modificar o revocar las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular, en los términos del penúltimo y último párrafos del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación.

V. En materia de recursos administrativos, el Estado tramitará y resolverá los establecidos en el Código Fiscal de la Federación, en relación con actos o resoluciones del propio Estado, emitidos en ejercicio de las facultades que le confiere este Anexo.

VI. En materia de juicios, el Estado intervendrá como parte en los que se susciten con motivo del ejercicio de las facultades delegadas. De igual manera, éste asumirá la responsabilidad en la defensa de los mismos, sin perjuicio de la intervención que corresponde a la Secretaría. Para estos efectos, el Estado contará con la asesoría legal de la Secretaría, en la forma y términos que se le soliciten.

El Estado informará periódicamente a la Secretaría, de acuerdo con los lineamientos que al efecto señale ésta, la situación en que se encuentren los juicios en que haya intervenido y de las resoluciones que recaigan sobre los mismos.

CUARTA.- Quedan excluidos del ejercicio de las facultades previstas en la cláusula anterior, en materia del impuesto sustitutivo del crédito al salario y del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios, los siguientes contribuyentes:

I. Los que integran el sistema financiero a que se refiere el último párrafo del artículo 8o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

II. Las sociedades mercantiles que cuenten con autorización de la Secretaría para operar como controladoras y las controladas, en los términos del capítulo VI del título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

III. Los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria de la Federación, sujetas a control presupuestal.

IV. Las otras entidades y sujetos respecto de los cuales no tengan competencia las administraciones locales del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría.

QUINTA.- Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones en materia del impuesto sustitutivo del crédito al salario y del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios, no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, el Estado ejercerá las facultades que establece el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, para lo cual se estará a lo siguiente:

I. El Estado exigirá de los contribuyentes la presentación de la declaración o documento respectivo en materia del impuesto sustitutivo del crédito al salario y del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios.

II. La Secretaría proporcionará al Estado los datos de los contribuyentes que no presentaron sus declaraciones en los plazos señalados por las disposiciones fiscales a efecto de que el Estado exija su cumplimiento.

III. El Estado ejercerá las siguientes facultades:

a). Emitir requerimientos a través de los cuales exija la presentación de declaraciones y, en su caso, el pago del impuesto omitido, su actualización y accesorios.

b). Notificar los requerimientos que se emitan y las demás resoluciones a que se refiere esta cláusula.

c). Imponer las multas previstas en el Código Fiscal de la Federación por presentar previo requerimiento, una declaración extemporánea, así como por no cumplir con los requerimientos o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos.

d). Hacer efectiva al contribuyente o responsable solidario que haya incurrido en la omisión, una cantidad igual a la contribución que hubiere determinado en la última o cualquiera de las seis últimas declaraciones de que se trate, o la que resulte para dichos periodos de la determinación formulada por la autoridad, según corresponda, cuando haya omitido presentar oportunamente alguna declaración subsecuente para el pago de los impuestos.

e). Hacer efectiva al contribuyente, con carácter provisional, una cantidad igual a la que a éste corresponda determinar, cuando la omisión sea de una declaración de la que se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota.

f). Embargar precautoriamente bienes o negociaciones cuando el contribuyente haya omitido presentar declaraciones en los últimos tres ejercicios o cuando no atienda el requerimiento de la autoridad.

g). Condonar y reducir las multas en términos de las disposiciones fiscales, que imponga en el ejercicio de sus facultades delegadas en materia de vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales a que se refiere esta cláusula.

h). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, a fin de que se hagan efectivos los créditos y sus accesorios legales, que se generen con motivo de los actos a que se refieren los incisos c, d y f) de esta fracción.

IV. En materia de recaudación, el Estado recibirá, por conducto de las instituciones de crédito o de las oficinas recaudadoras que autorice el mismo, las declaraciones, las contribuciones y sus accesorios; asimismo, determinará y cobrará las diferencias que provengan de errores aritméticos.

V. El Estado autorizará el pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del interés fiscal, en los términos del Código Fiscal de la Federación.

VI. El Estado proporcionará a la Secretaría, en la forma y términos que ésta señale en la normatividad que emita al respecto, la información sobre los resultados que obtenga con motivo de su actuación.

SEXTA.- El Estado informará en todos los casos a la Secretaría sobre la presunta comisión de cualquier delito fiscal federal de que tenga conocimiento con motivo de sus actuaciones, en los términos de lo dispuesto en la cláusula quinta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

SEPTIMA.- El Estado percibirá por la realización de las funciones a que se refiere este Anexo en materia del impuesto sustitutivo del crédito al salario y del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios y sus correspondientes accesorios, lo siguiente:

I. 100% del monto efectivamente pagado de los créditos determinados y que hayan quedado firmes, con base en la acción fiscalizadora en dichos gravámenes.

II. 100% de las multas que el mismo imponga, efectivamente pagadas y que hayan quedado firmes, así como de los honorarios de notificación que se generen, por los requerimientos de solicitudes de inscripción y avisos al Registro Federal de Contribuyentes, derivados de la realización de actos de verificación para mantener actualizado el padrón de contribuyentes.

III. 100% del monto efectivamente pagado y que haya quedado firme, cuando en el dictamen fiscal correspondiente se hayan reflejado omisiones en las obligaciones del contribuyente.

IV. 100% de las multas efectivamente pagadas y que hayan quedado firmes, de aquellos contribuyentes que no hayan presentado dictamen fiscal en materia de los impuestos a que se refiere este Anexo y dicha omisión haya sido descubierta por el Estado.

V. Por la realización de los actos de vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales:

a). 50% sobre el monto del impuesto y recargos que se recauden por el Estado, con motivo de los requerimientos formulados por el mismo. El 50% restante corresponderá a la Federación y será enterado a ésta en los términos de la Sección IV del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

b). 100% de las multas que el mismo imponga, efectivamente pagadas y que hayan quedado firmes.

c). 100% de los honorarios que se recauden por la notificación de requerimientos para el cumplimiento de obligaciones fiscales, en términos del artículo 137 último párrafo del Código Fiscal de la Federación.

d). 100% de los gastos de ejecución que se recauden en términos del artículo 150 fracciones I, II y III del Código Fiscal de la Federación, por la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos que se determinen.

La aplicación de los incentivos a que se refiere esta cláusula, sólo procederá cuando se paguen efectivamente los créditos respectivos y siempre que se cumpla con el procedimiento establecido

en el primer párrafo de la cláusula vigésima primera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

OCTAVA.- La Secretaría se reserva el ejercicio de las facultades de planeación, programación, normatividad y evaluación de las acciones de verificación y el Estado observará lo que a este respecto señale la propia Secretaría.

Para los efectos de programación de los actos de verificación a que se refiere este Anexo, se estará a lo dispuesto en la cláusula vigésima primera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

NOVENA.- Para la rendición de la cuenta comprobada se estará en lo conducente, a lo dispuesto en la Sección IV del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

TRANSITORIA

UNICA.- El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y, por lo tanto, le son aplicables, en todo lo conducente sus disposiciones, así como las de la legislación fiscal federal correspondiente.

Este Anexo deberá ser publicado tanto en el Periódico Oficial del Estado como en el **Diario Oficial de la Federación** y entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en este último.

México, D.F., a 3 de septiembre de 2002.- Por el Estado: el Gobernador Constitucional, **Juan Carlos Romero Hicks**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobierno, **Juan Manuel Oliva Ramírez**.- Rúbrica.- El Secretario de Finanzas y Administración, **José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano**.- Rúbrica.- Por la Secretaría: el Secretario de Hacienda y Crédito Público, **José Francisco Gil Díaz**.- Rúbrica.

ANEXO número 6 al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de Tlaxcala.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ANEXO NUMERO 6 AL CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL QUE CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.

El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Estado de Tlaxcala tienen celebrado Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que entró en vigor el 1 de enero de 1997;

El H. Congreso de la Unión aprobó en diciembre de 2001 diversas disposiciones fiscales, entre las cuales se encuentra el establecimiento del impuesto sustitutivo del crédito al salario y del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios, por lo que se hace necesaria la celebración de un Anexo mediante el cual las entidades federativas asuman funciones de comprobación en materia de dichos impuestos, de conformidad con lo dispuesto en la legislación federal a que se refiere el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, vigente a partir del 1 de enero de 1997 y modificado por acuerdos publicados en el **Diario Oficial de la Federación** de 10 de febrero de 1998, 30 de noviembre de 2001 y 15 de octubre de 2001, así como en los artículos tercero y cuarto del Decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y octavo de los transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, ambos publicados en el **Diario Oficial de la Federación** de 1 de enero de 2002 y Fe de Erratas publicada en dicho órgano de difusión oficial el 24 de enero de 2002;

Por lo expuesto, la Secretaría y el Estado han acordado suscribir el presente Anexo al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal para adicionar las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- La Secretaría y el Estado convienen en coordinarse para que éste ejerza funciones de comprobación en materia del impuesto sustitutivo del crédito al salario a que se refieren los artículos tercero y cuarto del Decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios establecido en el artículo octavo de los transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, ambos publicados en el **Diario Oficial de la Federación** de 1 de enero de 2002 y Fe de Erratas publicada en dicho órgano de difusión oficial el 24 de enero de 2002, de conformidad con lo establecido en dichas disposiciones, en la legislación federal aplicable y en las cláusulas siguientes.

SEGUNDA.- En el ejercicio de las facultades de comprobación, el Estado tendrá las atribuciones relativas a la verificación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, incluyendo las de ordenar y practicar visitas e inspecciones en el domicilio fiscal o establecimientos de los contribuyentes, de los responsables solidarios y de los terceros relacionados con ellos, así como en las oficinas de la autoridad competente. Asimismo, el Estado tendrá las siguientes obligaciones:

I. Realizar actos de verificación para mantener actualizado el padrón de contribuyentes, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I de la cláusula octava del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

II. Cumplir con el programa operativo anual que determine la Secretaría, previamente concertado con el Estado.

III. Llevar a cabo los actos de comprobación a que se refiere este Anexo, conforme al programa operativo anual a que se refiere la fracción anterior, en los términos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones federales aplicables.

TERCERA.- El Estado ejercerá, además de lo establecido en la cláusula anterior, las siguientes facultades:

I. En materia de determinación de los impuestos omitidos y su actualización, sus accesorios e imposición de multas:

a). Determinar los impuestos omitidos, su actualización, así como sus accesorios a cargo de los contribuyentes fiscalizados por el propio Estado, responsables solidarios y demás obligados con base en hechos que conozca, derivado del ejercicio de sus facultades de comprobación, conforme a la legislación fiscal federal aplicable.

b). Imponer las multas que correspondan por infracciones al Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones fiscales federales, que conforme a este Anexo corresponda aplicar a las autoridades fiscales del Estado.

c). Condonar y reducir las multas que imponga en el ejercicio de sus facultades delegadas de comprobación de los impuestos.

d). Notificar las resoluciones que determinen los créditos fiscales que se generen con motivo del ejercicio de las facultades a que se refiere esta cláusula.

II. En materia de recaudación:

a). Recaudar el importe de los pagos que se obtengan como resultado de sus actuaciones, así como revisar, determinar y cobrar las diferencias que provengan de errores aritméticos y sus accesorios.

b). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, a fin de que se hagan efectivos los créditos y sus accesorios que se generen con motivo de los actos a que se refiere esta fracción y la anterior de la presente cláusula.

Las cantidades que se generen como resultado de las acciones del Estado en materia de comprobación de estos impuestos serán pagadas en las instituciones de crédito o en las oficinas recaudadoras que al efecto autorice el mismo.

III. En materia de autorizaciones:

a). Recibir y resolver las solicitudes presentadas por los contribuyentes, de devolución de cantidades pagadas indebidamente al Estado o cuando legalmente así proceda, verificar, determinar y cobrar las devoluciones improcedentes e imponer las multas correspondientes.

b). Otorgar las correspondientes al pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del interés fiscal, en términos del Código Fiscal de la Federación.

IV. Revisar y, en su caso, modificar o revocar las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular, en los términos del penúltimo y último párrafos del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación.

V. En materia de recursos administrativos, el Estado tramitará y resolverá los establecidos en el Código Fiscal de la Federación, en relación con actos o resoluciones del propio Estado, emitidos en ejercicio de las facultades que le confiere este Anexo.

VI. En materia de juicios, el Estado intervendrá como parte en los que se susciten con motivo del ejercicio de las facultades delegadas. De igual manera, éste asumirá la responsabilidad en la defensa de los mismos, sin perjuicio de la intervención que corresponde a la Secretaría. Para estos efectos, el Estado contará con la asesoría legal de la Secretaría, en la forma y términos que se le soliciten.

El Estado informará periódicamente a la Secretaría, de acuerdo con los lineamientos que al efecto señale ésta, la situación en que se encuentren los juicios en que haya intervenido y de las resoluciones que recaigan sobre los mismos.

CUARTA.- Quedan excluidos del ejercicio de las facultades previstas en la cláusula anterior, en materia del impuesto sustitutivo del crédito al salario y del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios, los siguientes contribuyentes:

I. Los que integran el sistema financiero a que se refiere el último párrafo del artículo 8o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

II. Las sociedades mercantiles que cuenten con autorización de la Secretaría para operar como controladoras y las controladas, en los términos del Capítulo VI del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

III. Los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria de la Federación, sujetas a control presupuestal.

IV. Las otras entidades y sujetos respecto de los cuales no tengan competencia las administraciones locales del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría.

QUINTA.- Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones en materia del impuesto sustitutivo del crédito al salario y del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios, no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, el Estado ejercerá las facultades que establece el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación, para lo cual se estará a lo siguiente:

I. El Estado exigirá de los contribuyentes la presentación de la declaración o documento respectivo en materia del impuesto sustitutivo del crédito al salario y del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios.

II. La Secretaría proporcionará al Estado los datos de los contribuyentes que no presentaron sus declaraciones en los plazos señalados por las disposiciones fiscales a efecto de que el Estado exija su cumplimiento.

III. El Estado ejercerá las siguientes facultades:

a). Emitir requerimientos a través de los cuales exija la presentación de declaraciones y, en su caso, el pago del impuesto omitido, su actualización y accesorios.

b). Notificar los requerimientos que se emitan y las demás resoluciones a que se refiere esta cláusula.

c). Imponer las multas previstas en el Código Fiscal de la Federación por presentar previo requerimiento, una declaración extemporánea, así como por no cumplir con los requerimientos o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos.

d). Hacer efectiva al contribuyente o responsable solidario que haya incurrido en la omisión, una cantidad igual a la contribución que hubiere determinado en la última o cualquiera de las seis últimas declaraciones de que se trate, o la que resulte para dichos periodos de la determinación formulada por la autoridad, según corresponda, cuando haya omitido presentar oportunamente alguna declaración subsecuente para el pago de los impuestos.

e). Hacer efectiva al contribuyente, con carácter provisional, una cantidad igual a la que a éste corresponda determinar, cuando la omisión sea de una declaración de la que se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota.

f). Embargar precautoriamente bienes o negociaciones cuando el contribuyente haya omitido presentar declaraciones en los últimos tres ejercicios o cuando no atienda el requerimiento de la autoridad.

g). Condonar y reducir las multas en términos de las disposiciones fiscales, que imponga en el ejercicio de sus facultades delegadas en materia de vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales a que se refiere esta cláusula.

h). Llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, a fin de que se hagan efectivos los créditos y sus accesorios legales, que se generen con motivo de los actos a que se refieren los incisos c, d y f) de esta fracción.

IV. En materia de recaudación, el Estado recibirá, por conducto de las instituciones de crédito o de las oficinas recaudadoras que autorice el mismo, las declaraciones, las contribuciones y sus accesorios; asimismo, determinará y cobrará las diferencias que provengan de errores aritméticos.

V. El Estado autorizará el pago de créditos fiscales a plazo, ya sea diferido o en parcialidades, con garantía del interés fiscal, en los términos del Código Fiscal de la Federación.

VI. El Estado proporcionará a la Secretaría, en la forma y términos que ésta señale en la normatividad que emita al respecto, la información sobre los resultados que obtenga con motivo de su actuación.

SEXTA.- El Estado informará en todos los casos a la Secretaría sobre la presunta comisión de cualquier delito fiscal federal de que tenga conocimiento con motivo de sus actuaciones, en los términos de lo dispuesto en la cláusula quinta del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

SEPTIMA.- El Estado percibirá por la realización de las funciones a que se refiere este Anexo en materia del impuesto sustitutivo del crédito al salario y del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios y sus correspondientes accesorios, lo siguiente:

I. 100% del monto efectivamente pagado de los créditos determinados y que hayan quedado firmes, con base en la acción fiscalizadora en dichos gravámenes.

II. 100% de las multas que el mismo imponga, efectivamente pagadas y que hayan quedado firmes, así como de los honorarios de notificación que se generen, por los requerimientos de solicitudes de inscripción y avisos al Registro Federal de Contribuyentes, derivados de la realización de actos de verificación para mantener actualizado el padrón de contribuyentes.

III. 100% del monto efectivamente pagado y que haya quedado firme, cuando en el dictamen fiscal correspondiente se hayan reflejado omisiones en las obligaciones del contribuyente.

IV. 100% de las multas efectivamente pagadas y que hayan quedado firmes, de aquellos contribuyentes que no hayan presentado dictamen fiscal en materia de los impuestos a que se refiere este Anexo y dicha omisión haya sido descubierta por el Estado.

V. Por la realización de los actos de vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales:

a). 50% sobre el monto del impuesto y recargos que se recauden por el Estado, con motivo de los requerimientos formulados por el mismo. El 50% restante corresponderá a la Federación y será enterado a ésta en los términos de la Sección IV del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

b). 100% de las multas que el mismo imponga, efectivamente pagadas y que hayan quedado firmes.

c). 100% de los honorarios que se recauden por la notificación de requerimientos para el cumplimiento de obligaciones fiscales, en términos del artículo 137 último párrafo del Código Fiscal de la Federación.

d). 100% de los gastos de ejecución que se recauden en términos del artículo 150 fracciones I, II y III del Código Fiscal de la Federación, por la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivos los créditos que se determinen.

La aplicación de los incentivos a que se refiere esta cláusula, sólo procederá cuando se paguen efectivamente los créditos respectivos y siempre que se cumpla con el procedimiento establecido en el primer párrafo de la cláusula vigésima primera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

OCTAVA.- La Secretaría se reserva el ejercicio de las facultades de planeación, programación, normatividad y evaluación de las acciones de verificación y el Estado observará lo que a este respecto señale la propia Secretaría.

Para los efectos de programación de los actos de verificación a que se refiere este Anexo, se estará a lo dispuesto en la cláusula vigésima primera del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

NOVENA.- Para la rendición de la cuenta comprobada, se estará en lo conducente, a lo dispuesto en la Sección IV del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

TRANSITORIA

UNICA.- El presente Anexo forma parte integrante del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, y por lo tanto le son aplicables, en todo lo conducente sus disposiciones, así como las de la legislación fiscal federal correspondiente.

Este Anexo deberá ser publicado tanto en el Periódico Oficial del Estado como en el **Diario Oficial de la Federación** y entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en este último.

México, D.F., a 19 de agosto de 2002.- Por el Gobierno del Estado de Tlaxcala: el Gobernador Constitucional del Estado, **Alfonso Abraham Sánchez Anaya**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobierno, **Gelacio Montiel Fuentes**.- Rúbrica.- La Secretaria de Finanzas, **Minerva Hernández Ramos**.- Rúbrica.-

Por la Secretaría: el Secretario de Hacienda y Crédito Público, **José Francisco Gil Díaz**.- Rúbrica.

RESOLUCION por la que se modifican las cuotas mensual y anual que deberán cubrir las uniones de crédito por concepto de gastos de inspección y vigilancia, correspondientes al año 2002.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.- Dirección General de Seguros y Valores.- Dirección de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.- 366-I-A-965.- 396.4/303928.

CUOTAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA.- Se modifica el listado de las cuotas mensuales y anual, publicada el 29 de abril de 2002.

A las uniones de crédito:

Esta Secretaría, con base en el artículo 32 fracción XVIII de su Reglamento Interior y con fundamento en el artículo 1o. cuarto párrafo, 29-A, 29-K, 29-U, 29-V y 29-W de la Ley Federal de Derechos, en relación con el 18 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el 56 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y considerando que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha solicitado a esta Secretaría modificar las cuotas anual y mensual a cargo de ciertas uniones de crédito, que por concepto de inspección y vigilancia éstas deben cubrir por el ejercicio fiscal del año 2002, mismas que fueron dadas a conocer mediante publicación en el **Diario Oficial de la Federación** el 29 de abril de 2002; y con el objeto de que las referidas cuotas, en todo momento se ajusten a lo establecido en el citado artículo 29-A de la mencionada Ley Federal de Derechos, ha resuelto dar a conocer la siguiente:

RESOLUCION POR LA QUE SE MODIFICAN LAS CUOTAS MENSUAL Y ANUAL QUE DEBERAN CUBRIR POR CONCEPTO DE GASTOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2002, LAS UNIONES DE CREDITO

PRIMERO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para efectos administrativos y con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, modifica las cuotas anual y mensual que por concepto de gastos de inspección y vigilancia correspondientes al año 2002, deberán cubrir las uniones de crédito señaladas en la relación que a continuación se presenta, conforme al orden que se contiene en la lista que como facilidad administrativa fuera publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 29 de abril de 2002, para quedar como en la relación anexa al presente se indica.

SEGUNDO.- Las uniones de crédito que a la fecha de publicación de la presente Resolución se encuentran en la relación a que se refiere el numeral primero y que ya hubieran realizado el entero del derecho por concepto de inspección y vigilancia correspondiente a los meses de enero a junio del año 2002, deberán considerar los nuevos importes y enterar, en su caso, el diferencial actualizado que resulte de conformidad con los artículos 17-A, 17-B y 21 del Código Fiscal de la Federación.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 5 de agosto de 2002.- El Director General, **Guillermo Babatz Torres**.- Rúbrica.

CUOTAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA
(PESOS)

No.	UNIONES DE CREDITO	ANUAL	MENSUAL
001	MIXTA DE ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V.	34,944.00	2,912.00
002	AGRICOLA DEL MAYO, S.A. DE C.V.	34,944.00	2,912.00
003	IMPULSORA DEL DESARROLLO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	35,292.00	2,941.00
004	AGRICOLA E INDUSTRIAL DEL RIO FUERTE SUR, S.A. DE C.V.	34,944.00	2,912.00
005	AGROPECUARIO E INDUSTRIAL DEL VALLE DEL YAQUI, S.A. DE C.V.	34,944.00	2,912.00
006	DE LA PEQUEÑA EMPRESA E INDUSTRIA DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	76,512.00	6,376.00
007	DE LA INDUSTRIA DE LA CURTIDURIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V.	34,944.00	2,912.00
008	CYMA, UNION DE CREDITO, S.A. DE C.V.	38,064.00	3,172.00
009	DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	34,944.00	2,912.00
010	DEL NORTE, S.A. DE C.V.	51,276.00	4,273.00
011	COMERCIAL DE SINALOA, S.A. DE C.V.	51,216.00	4,268.00
012	DE URUAPAN, S.A. DE C.V.	34,944.00	2,912.00
013	MIXTA DE OAXACA, S.A. DE C.V.	34,944.00	2,912.00
014	PARA LA CONTADURIA PUBLICA, S.A. DE C.V.	47,904.00	3,992.00

015	MONTERREY, S.A. DE C.V.	43,896.00	3,658.00
016	DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	34,944.00	2,912.00
017	CORPORATIVA, S.A. DE C.V.	36,660.00	3,055.00
018	GRUPO INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCION DE SINALOA, S.A. DE C.V.	45,792.00	3,816.00
019	DEL SUR DE JALISCO, S.A. DE C.V.	34,944.00	2,912.00
020	INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE OAXACA, S.A. DE C.V.	41,844.00	3,487.00
021	MIXTA DEL CARMEN, S.A. DE C.V.	34,944.00	2,912.00
022	AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DEL CENTRO DEL ESTADO CHIAPAS, S.A. DE C.V.	34,944.00	2,912.00
023	GENERAL DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	40,248.00	3,354.00
024	EJIDAL DEL YAQUI Y MAYO, S.A. DE C.V.	34,944.00	2,912.00
025	COMERCIAL Y DE SERVICIOS DEL ESTADO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	34,944.00	2,912.00
026	UNION REGIONAL DE CREDITO GANADERO DE DURANGO, S.A. DE C.V.	34,944.00	2,912.00
027	MIXTA "PLAN PUEBLA", S.A. DE C.V.	41,340.00	3,445.00
028	DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.	34,944.00	2,912.00
029	GENERAL, S.A. DE C.V.	40,812.00	3,401.00
030	MONARCA, S.A. DE C.V.	34,944.00	2,912.00
031	AGRICOLA DE COREREPE, S.A. DE C.V.	36,996.00	3,083.00
032	DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	40,368.00	3,364.00
033	AGROPECUARIA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DEL ESTADO DE COLIMA, S.A. DE C.V.	34,944.00	2,912.00
034	AGRICOLA, GANADERO DEL ESTADO DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	34,944.00	2,912.00
035	DE INDUSTRIALES DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.	35,508.00	2,959.00
036	IMPULSA, S.A. DE C.V.	39,696.00	3,308.00
037	EMPRESARIAL DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.	34,944.00	2,912.00
038	GANADEROS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	34,944.00	2,912.00
039	AGRICOLA DE NAVOJOA, S.A. DE C.V.	39,072.00	3,256.00
040	CREDIFOMENTO UNION DE CREDITO, S.A. DE C.V.	39,012.00	3,251.00
041	MIXTA DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	40,668.00	3,389.00
042	COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.	37,932.00	3,161.00
043	EMPRESARIAL MEXICANO, S.A. DE C.V.	37,920.00	3,160.00
044	UNAGRA, S.A. DE C.V.	46,260.00	3,855.00
045	CREDITUR, S.A. DE C.V. UNION DE CREDITO	34,944.00	2,912.00
046	COMERCIAL DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V	34,944.00	2,912.00
047	INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS DEL D.F., S.A. DE C.V.	34,944.00	2,912.00
048	EMPRESARIAL DE NORTE DE QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.	37,392.00	3,116.00
049	DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO Y DEL BORDADO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	34,944.00	2,912.00
050	DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	34,944.00	2,912.00
051	PROGRESO, S.A. DE C.V.	42,300.00	3,525.00
052	INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE LA CONSTRUCCION DEL NORTE DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	34,944.00	2,912.00
053	INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE CANCUN, S.A. DE C.V.	34,944.00	2,912.00
054	AGRICOLA DE CAJEME, S.A. DE C.V.	36,636.00	3,053.00
055	.....	.....	.....
056	DE ALLENDE, S.A. DE C.V.	48,396.00	4,033.00
057	.....	.....	.....
058	AGRICOLA DEL YAQUI, S.A. DE C.V.	40,092.00	3,341.00
059	.....	.....	.....
060	.....	.....	.....
061	.....	.....	.....
062	.....	.....	.....
063	.....	.....	.....
064	INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	176,652.00	14,721.00
065	.....	.....	.....
066	.....	.....	.....
067	.....	.....	.....

068	.....	.....	.....
069	.....	.....	.....
070	.....	.....	.....
071	.....	.....	.....
072	.....	.....	.....
073	ALPURA, S.A. DE C.V.	61,992.00	5,166.00
074	.....	.....	.....
075	.....	.....	.....
076	.....	.....	.....
077	.....	.....	.....
078	.....	.....	.....
079	.....	.....	.....
080	.....	.....	.....
081	AGROPECUARIA, COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ATLACOMULCO, S.A. DE C.V.	36,684.00	3,057.00
082	.....	.....	.....
083	.....	.....	.....
084	.....	.....	.....
085	.....	.....	.....
086	AGROPECUARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE SOMBRERETE, S.A. DE C.V.	35,868.00	2,989.00
087	DE DISTRIBUIDORES DE MAQUINARIA AGRICOLA, S.A. DE C.V.	35,244.00	2,937.00
088	.....	.....	.....
089	EMPRESARIAL METROPOLITANO, S.A. DE C.V.	58,704.00	4,892.00
090	.....	.....	.....
091	.....	.....	.....
092	.....	.....	.....
093	AGROPECUARIA CONSTITUCION, S.A. DE C.V.	51,216.00	4,268.00
094	.....	.....	.....
095	.....	.....	.....
096	.....	.....	.....
097	.....	.....	.....
098	.....	.....	.....
099	.....	.....	.....
100	.....	.....	.....
101	.....	.....	.....
102	.....	.....	.....
103	.....	.....	.....
104	CREDICOR MEXICANO, S.A. DE C.V.	34,992.00	2,916.00
105	DE TAMPICO, S.A. DE C.V.	41,892.00	3,491.00
106	.....	.....	.....
107	.....	.....	.....
108	.....	.....	.....
109	.....	.....	.....
110	.....	.....	.....
111	.....	.....	.....
112	.....	.....	.....
113	.....	.....	.....
114	.....	.....	.....
115	.....	.....	.....
116	.....	.....	.....
117	EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	49,320.00	4,110.00
118	DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	37,860.00	3,155.00
119	.....	.....	.....
120	.....	.....	.....
121	.....	.....	.....
122	.....	.....	.....

123	.....	.....	.....
124	.....	.....	.....
125	.....	.....	.....
126	.....	.....	.....
127	PARA EL AUTOTRANSPORTE, S.A. DE C.V.	39,276.00	3,273.00
128	.....	.....	.....
129	.....	.....	.....
130	.....	.....	.....
131	.....	.....	.....
132	PROMOCION EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	37,716.00	3,143.00
133	.....	.....	.....
134	AGROPECUARIO DEL RIO YAQUI, S.A. DE C.V.	39,516.00	3,293.00
135	.....	.....	.....
136	.....	.....	.....
137	.....	.....	.....
138	DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.	46,788.00	3,899.00
139	.....	.....	.....
140	.....	.....	.....
141	.....	.....	.....
142	.....	.....	.....
143	.....	.....	.....
144	.....	.....	.....
145	.....	.....	.....
146	.....	.....	.....
147	GANADERO DE TABASCO, S.A. DE C.V.	35,856.00	2,988.00
148	AVICOLA DE JALISCO, S.A. DE C.V.	35,808.00	2,984.00
149	.....	.....	.....
150	INTERSECTORIAL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	52,584.00	4,382.00
151	DE LA INDUSTRIA LITOGRAFICA, S.A. DE C.V.	43,500.00	3,625.00
152	.....	.....	.....
153	.....	.....	.....
154	FICEIN, S.A. DE C.V.	42,804.00	3,567.00
155	.....	.....	.....
156	AL CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	40,596.00	3,383.00
157	.....	.....	.....
158	.....	.....	.....
159	.....	.....	.....
160	.....	.....	.....
161	.....	.....	.....
162	.....	.....	.....
163	.....	.....	.....
164	.....	.....	.....
165	.....	.....	.....
166	.....	.....	.....
167	.....	.....	.....
168	AGROINDUSTRIAL, PESQUERA Y DE SERVICIOS DEL SUR DE SINALOA, S.A. DE C.V.	38,400.00	3,200.00
169	.....	.....	.....
170	DEL COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	41,088.00	3,424.00
171	.....	.....	.....
172	.....	.....	.....
173	AGROPECUARIA INDUSTRIAL DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	40,404.00	3,367.00
174	.....	.....	.....
175	.....	.....	.....
176	.....	.....	.....

177	.....	.....	.....
178	.....	.....	.....
179	.....	.....	.....
180	.....	.....	.....
181	.....	.....	.....
182	.....	.....	.....
183	.....	.....	.....
184	AGRICOLA DE HUATABAMPO, S.A. DE C.V.	36,672.00	3,056.00
185	.....	.....	.....
186	AGRICULTORES DE CUAUHTEMOC, S.A. DE C.V	53,280.00	4,440.00
187	.....	.....	.....
188	.....	.....	.....
189	AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL DE TIZAYUCA, S.A. DE C.V.	35,592.00	2,966.00
190	.....	.....	.....
191	.....	.....	.....
192	.....	.....	.....
193	.....	.....	.....
194	.....	.....	.....
195	.....	.....	.....
196	.....	.....	.....
197	.....	.....	.....
198	.....	.....	.....
199	FINCOMUN, SERVICIOS FINANCIEROS COMUNITARIOS, S.A. DE C.V.	37,392.00	3,116.00
200	.....	.....	.....
201	.....	.....	.....
202	.....	.....	.....
203	.....	.....	.....
204	.....	.....	.....
205	.....	.....	.....
206	.....	.....	.....
207	.....	.....	.....
208	.....	.....	.....
209	.....	.....	.....
210	.....	.....	.....
211	.....	.....	.....
212	.....	.....	.....
213	.....	.....	.....
214	.....	.....	.....
215	.....	.....	.....
216	.....	.....	.....
217	.....	.....	.....
218	.....	.....	.....
219	.....	.....	.....
220	.....	.....	.....
221	.....	.....	.....
222	.....	.....	.....
223	.....	.....	.....
224	.....	.....	.....
225	.....	.....	.....

	TOTAL	8,412,336.00	701,028.00

RESULTADOS DE LAS FRACCIONES II, IV Y VI DEL ARTICULO 29-A DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS RESPECTO DE LAS UNIONES DE CREDITO

FRACCION II	50,049,552
FRACCION IV	6,859,633,952
FRACCION VI	549,920

REGLAS de carácter general para normar en lo conducente lo dispuesto por el artículo 32 primer párrafo, en relación con el 9 último párrafo, y 36 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

REGLAS DE CARACTER GENERAL PARA NORMAR EN LO CONDUCENTE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32 PRIMER PARRAFO, EN RELACION CON EL 9 ULTIMO PARRAFO, Y 36 DE LA LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32 primer párrafo, en relación con el 9 último párrafo, y 36 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como 4o. fracción XXXVI y 16 fracción I de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, habiendo escuchado la opinión del Banco de México en términos del artículo 120 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, y

CONSIDERANDO

Que en términos de lo dispuesto por la Ley de Ahorro y Crédito Popular, esta Comisión debe establecer los criterios que permitan asignar el Nivel de Operaciones de cada Entidad de Ahorro y Crédito Popular, debiendo considerar, entre otros elementos, el monto de activos y pasivos de la Entidad, el número de Socios o Clientes, el ámbito geográfico de las operaciones y la capacidad técnica y operativa de la Entidad;

Que las sociedades que inicien operaciones al amparo de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, no estarán en condiciones de acreditar todos los elementos mencionados por la misma, tales como el número de Clientes, el monto de los pasivos, y estrictamente la capacidad técnica y operativa de la Entidad, por lo que es necesario establecer, como medida prudencial y en protección del adecuado desarrollo del Sistema de Ahorro y Crédito Popular, que las sociedades de nueva creación se ubiquen inicialmente en el Nivel de Operaciones I;

Que tratándose de las sociedades que en términos de dicha Ley puedan transformarse en Entidades de Ahorro y Crédito Popular, inicialmente no podrán ubicarse en el Nivel de Operaciones IV, sino después de transcurrido un tiempo que permita evaluar su funcionamiento y operación;

Que en términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores debe determinar las operaciones activas, pasivas y de servicios que las Entidades de Ahorro y Crédito Popular podrán realizar de acuerdo con el Nivel de Operaciones que les sea asignado, así como las características de dichas operaciones, y

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, se obtuvo la opinión del Banco de México respecto de las disposiciones en materia de operaciones en moneda extranjera, esta Comisión ha resuelto expedir las siguientes:

REGLAS DE CARACTER GENERAL PARA NORMAR EN LO CONDUCENTE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 32 PRIMER PARRAFO, EN RELACION CON EL 9 ULTIMO PARRAFO, Y 36 DE LA LEY DE AHORRO Y CREDITO POPULAR

PRIMERA.- Para los efectos de estas Reglas, serán aplicables las definiciones señaladas en el artículo 3o. de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y, adicionalmente, se entenderá por:

I. CCP, al Costo de Captación a Plazo de pasivos denominados en moneda nacional que da a conocer el Banco de México a través del **Diario Oficial de la Federación**;

II. CETES, a la tasa anual de rendimiento, equivalente a la de descuento, de los Certificados de la Tesorería de la Federación en moneda nacional emitidos a plazo de 28 días o al plazo que sustituya a éste en caso de días inhábiles, en colocación primaria. La tasa anual de rendimiento equivalente a la de descuento será la que semanalmente da a conocer el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante avisos en los periódicos de mayor circulación en el país;

III. Confederaciones, en singular o plural, a las Confederaciones a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular;

IV. Federaciones, en singular o plural, a las Federaciones a que se refiere la Ley de Ahorro y Crédito Popular;

V. Ley, a la Ley de Ahorro y Crédito Popular publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 4 de junio de 2001;

VI. TIIE, a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio que da a conocer el Banco de México a través del **Diario Oficial de la Federación**, y

VII. UDI, en singular o plural, a la unidad de inversión a la que se refiere el decreto publicado en el **Diario Oficial de la Federación** del 1 de abril de 1995.

SEGUNDA.- Para efectos de lo dispuesto en las Reglas tercera y cuarta siguientes, se entenderá por ámbito local cuando una Entidad opere en uno o varios municipios, colindantes o no, de alguna Entidad Federativa de la República Mexicana; por ámbito regional cuando una Entidad opere como máximo en cuatro Entidades Federativas colindantes o no, y por ámbito multirregional cuando una Entidad opere en cinco o más Entidades Federativas, colindantes o no.

TERCERA.- La Federación correspondiente, en su dictamen respecto de la procedencia de la solicitud de alguna sociedad de nueva creación para operar como Entidad, sólo podrá proponer a la Comisión asignarle el Nivel de Operaciones I, en el entendido de que estas Entidades únicamente operarán en un ámbito geográfico local o regional.

Para efectos de las presentes Reglas, se entenderá por sociedad de nueva creación a las sociedades diferentes a las que se refiere el artículo Segundo Transitorio de la Ley, así como aquellas que operen al amparo de lo dispuesto por el artículo 38-P de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, constituidas con posterioridad al 4 de junio de 2001, y que pretendan sujetarse a la Ley para operar como Entidades.

CUARTA.- Tratándose del dictamen respecto de la procedencia de la solicitud para operar como Entidad, presentada por sociedades ya constituidas que pretendan transformarse en Entidades de conformidad con el artículo Segundo Transitorio de la Ley, así como aquellas que operen al amparo de lo dispuesto por el artículo 38-P de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, constituidas con anterioridad al 4 de junio de 2001, y que también pretendan transformarse en Entidades, la Federación correspondiente propondrá a la Comisión el Nivel de Operaciones de la probable Entidad, considerando

el número de Socios o Clientes, el ámbito geográfico de las operaciones y el monto de activos y pasivos, de acuerdo con lo siguiente:

	ACTIVOS			
SOCIOS/CLIENTES Y AMBITO GEOGRAFICO	**De 100 mil UDIs a menos de 5 millones de UDIs**	**De 5 millones de UDIs a menos de 30 millones de UDIs**	**De 30 millones de UDIs a menos de 300 millones de UDIs**	**Más de 300 millones de UDIs**
Menor o igual de 5,000 y Ambito Local	Nivel I	Nivel I	Nivel II	Nivel III
Menor o igual de 5,000 y Ambito Regional	Nivel I	Nivel II	Nivel III	Nivel III
Menor o igual de 5,000 y Ambito Multirregional	Nivel II	Nivel II	Nivel III	Nivel III
De 5,001 a 10,000 y Ambito Local	Nivel I	Nivel I	Nivel II	Nivel III
De 5,001 a 10,000 y Ambito Regional	Nivel I	Nivel II	Nivel III	Nivel III
De 5,001 a 10,000 y Ambito Multirregional	Nivel II	Nivel II	Nivel III	Nivel III
De 10,001 a 100,000 y Ambito Local	Nivel I	Nivel II	Nivel III	Nivel III
De 10,001 a 100,000 y Ambito Regional	Nivel II	Nivel II	Nivel III	Nivel IV
De 10,001 a 100,000 y Ambito Multirregional	Nivel II	Nivel II	Nivel III	Nivel IV
Más de 100,000 y Ambito Local	Nivel II	Nivel II	Nivel III	Nivel IV
Más de 100,000 y Ambito Regional	Nivel II	Nivel II	Nivel III	Nivel IV
Más de 100,000 y Ambito Multirregional	Nivel II	Nivel III	Nivel IV	Nivel IV

Lo anterior, en el entendido de que a estas sociedades, en caso de ser autorizadas para operar como Entidades, sólo se les podrá asignar inicialmente el Nivel de Operaciones I, II o III.

QUINTA.- Sin perjuicio de lo señalado en las Reglas tercera y cuarta anteriores, la Federación, para efectos de proponer a la Comisión el Nivel de Operaciones que podrá asignarse, en su caso, a la Entidad, analizará el monto de sus pasivos o la proyección de éstos presentada conforme a lo dispuesto en el Anexo 1 de las Reglas de carácter general para normar en lo conducente lo dispuesto por los artículos 10 fracción X, y 51 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular emitidas por la Comisión, publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** el 27 de marzo de 2002, en relación con el capital contable de dicha Entidad.

Asimismo, analizará la capacidad técnica y operativa de la probable Entidad, así como el cumplimiento de los requisitos legales de los miembros de sus consejos de administración y vigilancia, comisarios y funcionarios, en términos de lo dispuesto por las Reglas de carácter general para normar en lo conducente lo dispuesto por los artículos 10 fracción VII, 31, 71 y 104 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que al efecto emita la Comisión, con el objeto de ratificar o modificar el nivel que resulte de aplicar los criterios anteriores, considerando tanto las bases relativas a la organización y control interno que la Entidad presente en términos del artículo 10 fracción III de la Ley, como los aspectos siguientes:

I. Sistemas de información;

II. Manuales de operación, y

III. Sistemas de cómputo.

Si una vez evaluados los aspectos anteriores, a juicio de la Federación la Entidad no cuenta con la capacidad técnica para llevar a cabo las operaciones, la Federación podrá modificar dicho nivel y proponer un nivel inferior. Si por el contrario, la Federación considera que la Entidad cuenta con la capacidad técnica adecuada para su nivel, ratificará el resultado arrojado por la tabla referida. En ningún caso la Federación podrá determinar por sí misma un nivel superior al que resulte aplicando los criterios anteriores.

SEXTA.- Las Entidades sólo podrán cambiar al Nivel de Operaciones inmediato siguiente, siempre y cuando hayan transcurrido por lo menos dos años desde la fecha de la asignación del Nivel de Operaciones anterior.

Excepcionalmente, y siempre que acrediten a la Comisión que cumplen con los requisitos necesarios, la Comisión podrá asignar a las Entidades un Nivel de Operaciones superior del que tengan asignado. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de la Comisión y de la Federación respectiva para que, en el ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, la propia Comisión pueda asignar un Nivel de Operaciones inferior distinto al originalmente asignado, por no cumplir con los criterios y requisitos necesarios.

Para efectos del cambio de Nivel de Operaciones, serán aplicables los procedimientos y criterios previstos en la Regla cuarta que antecede.

SEPTIMA.- Atendiendo al Nivel de Operaciones que les sea asignado, las Entidades podrán realizar las operaciones siguientes:

I. Entidades con Nivel de Operaciones I:

a) Recibir depósitos a la vista, de ahorro, a plazo y retirables en días preestablecidos;

b) Recibir préstamos y créditos de instituciones de crédito nacionales o extranjeras, fideicomisos de fomento y organismos e instituciones financieras internacionales, así como de sus proveedores nacionales y extranjeros;

c) Otorgar a las Entidades afiliadas a su Federación, previa aprobación del Consejo de Administración de ésta y con cargo a sus excedentes de capital, préstamos de liquidez, mismos que deberán descontar de su capital, debiendo sujetarse a los requisitos y condiciones que mediante reglas de carácter general establezca la Comisión;

d) Recibir créditos de las Federaciones a las que se encuentren afiliadas, en términos del artículo 52 fracción III de la Ley;

e) Celebrar, como arrendatarias, contratos de arrendamiento financiero sobre equipos de cómputo, transporte y demás que sean necesarios para el cumplimiento de su objeto social, y adquirir los bienes que sean objeto de tales contratos;

f) Celebrar como arrendatarias, contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles para la consecución de su objeto;

g) Prestar su garantía en términos del artículo 92 de la Ley;

h) Recibir órdenes de pago en moneda nacional, así como recibir dichas órdenes en moneda extranjera salvo buen cobro, únicamente para abono en cuenta en moneda nacional;

i) Descontar, dar en garantía o negociar títulos de crédito y afectar los derechos provenientes de los contratos de financiamiento que realicen con sus Socios o Clientes o de las operaciones autorizadas con las personas de las que reciban financiamiento, únicamente con fideicomisos de fomento o con instituciones de banca de desarrollo. Cuando los recursos recibidos a través de operaciones de descuento en términos de este numeral, sean destinados a otorgar préstamos o créditos, y exista congruencia entre los plazos de ambas operaciones,
los préstamos o créditos otorgados por la Entidad podrán ser de mediano plazo;

j) Constituir depósitos a la vista o a plazo en instituciones de crédito;

k) Otorgar préstamos o créditos a corto plazo a sus Socios o Clientes;

l) Invertir sus excedentes de efectivo, directamente o a través de reportos, en valores gubernamentales, Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento, suscritos por instituciones de crédito y en sociedades de inversión cuyos activos objeto de inversión sean únicamente los valores antes mencionados;

m) Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de su objeto y enajenarlos cuando corresponda;

n) Otorgar créditos de carácter laboral a sus trabajadores, y

ñ) Recibir donativos.

II. Las Entidades con Nivel de Operaciones II, además de las operaciones señaladas en la fracción I, podrán efectuar las siguientes:

a) Emitir órdenes de pago y transferencias en moneda nacional, así como recibir estas últimas. Emitir órdenes de pago y transferencias en moneda extranjera, así como recibir estas últimas únicamente para abono en cuenta en moneda nacional, siendo necesaria en estos casos la autorización previa de la Comisión;

b) Descontar, dar en garantía o negociar títulos de crédito y afectar los derechos provenientes de los contratos de financiamiento que realicen con sus Socios o Clientes o de las operaciones autorizadas con las personas de las que reciban financiamiento, únicamente con fideicomisos de fomento o con instituciones de banca de desarrollo. Cuando los recursos recibidos a través de operaciones de descuento en términos de este numeral, sean destinados a otorgar préstamos o créditos, y exista congruencia entre los plazos de ambas operaciones, los préstamos o créditos otorgados por la Entidad podrán ser de largo plazo;

c) Realizar, por cuenta de sus Socios o Clientes, operaciones con empresas de factoraje financiero;

d) Otorgar préstamos o créditos a corto y mediano plazo a sus Socios o Clientes;

e) Invertir sus excedentes de efectivo, directamente o a través de reportos, en títulos bancarios y en sociedades de inversión cuyos activos objeto de inversión sean únicamente valores gubernamentales y/o títulos bancarios;

f) Prestar servicios de caja de seguridad;

g) Ofrecer el servicio de abono y descuento en nómina;

h) Fungir como receptor de pago de servicios por cuenta de terceros, siempre que lo anterior no implique para la sociedad la aceptación de obligaciones directas o contingentes,

i) Realizar la compraventa de divisas por cuenta de terceros.

III. Las Entidades con Nivel de Operaciones III, además de las operaciones señaladas en las fracciones I y II, podrán efectuar las siguientes:

a) Otorgar préstamos o créditos a corto, mediano y largo plazo a sus Socios o Clientes;

b) Invertir sus excedentes de efectivo, directamente o a través de reportos, en valores, pero tratándose de inversiones en capital únicamente a través de sociedades de inversión;

c) Realizar inversiones permanentes de capital en otras sociedades mercantiles, siempre y cuando les presten servicios auxiliares, complementarios o de tipo inmobiliario;

d) Celebrar, como arrendador, contratos de arrendamiento financiero;

e) Expedir y operar tarjetas de débito, y

f) Prestar servicios de caja y tesorería.

IV. Las Entidades con Nivel de Operaciones IV, además de las operaciones señaladas en las fracciones I, II y III, podrán efectuar las siguientes:

a) Descontar, dar en garantía o negociar títulos de crédito, y afectar los derechos provenientes de los contratos de financiamiento que realicen con sus Socios o Clientes o de las operaciones autorizadas con las personas de las que reciban financiamiento, con cualquier persona física o moral;

b) Emitir títulos de crédito, en serie o en masa, para su colocación entre el gran público inversionista;

c) Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos, a través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito;

d) Otorgar descuentos de toda clase, reembolsables a plazos congruentes con los de las operaciones pasivas que celebren;

e) Realizar inversiones en todo tipo de valores;

f) Expedir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente, y

g) Actuar como representante común de los tenedores de títulos de crédito.

OCTAVA.- Las Entidades, en la contratación de las operaciones señaladas en la Regla séptima anterior, habrán de sujetarse a los términos y condiciones que se indican a continuación y a las demás disposiciones que resulten aplicables.

PRIMERA SECCION: OPERACIONES PASIVAS.

I. Recibir depósitos a la vista, de ahorro, a plazo y retirables en días preestablecidos.

I.I. Depósitos a la vista.

a) Cuentahabientes.

Estos depósitos podrán recibirse de personas físicas y morales.

b) Montos.

Las Entidades podrán pactar libremente con sus cuentahabientes, los montos y saldos mínimos a los cuales estén dispuestas a recibir y mantener estos depósitos, aplicando las políticas generalmente usadas.

c) Rendimientos.

En los depósitos con interés, las Entidades podrán pactar libremente con su clientela las tasas de interés que devenguen los mismos, las cuales podrán ser distintas para diferentes tipos de cuentahabientes. Las Entidades deberán reservarse invariablemente el derecho de ajustar diariamente la tasa pactada. Las tasas se aplicarán sobre el promedio de saldos diarios del periodo en el cual hayan estado vigentes. Las Entidades podrán pactar libremente la periodicidad de pago de los intereses.

d) Retiros.

Estos depósitos serán retirables a la vista.

e) Estados de cuenta.

Las Entidades deberán proporcionar a los depositantes, con la periodicidad que libremente determinen, un estado de cuenta o su equivalente, en el que aparezcan los movimientos efectuados en el periodo correspondiente y, en su caso, las comisiones cargadas. Tratándose de depósitos que devenguen intereses deberá además indicarse el promedio de saldos diarios de cada periodo, así como el rendimiento respectivo en cantidad y porcentaje.

I.II. Depósitos en cuenta corriente asociados a tarjetas de débito o de crédito.

Para los conceptos de cuentahabientes y montos son aplicables los incisos a) y b) de la operación descrita en la fracción I.I. anterior.

a) Revolvencia.

El depositante podrá, durante la vigencia de su contrato, efectuar uno o más abonos y realizar uno o más retiros del saldo a su favor.

b) Rendimientos.

Las Entidades podrán pactar libremente con su clientela, las tasas de interés que devenguen estos depósitos, las cuales podrán ser distintas para diferentes tipos de cuentahabientes y deberán reservarse el derecho de ajustar diariamente la tasa de interés pactada. Las tasas se aplicarán sobre el promedio de saldos diarios del periodo en el cual hayan estado vigentes.

Las Entidades podrán pactar libremente la periodicidad de pago de los intereses.

c) Retiros.

Estos depósitos serán retirables a la vista.

Al efecto, será necesaria la presentación de una tarjeta de plástico específica para la identificación del depositante. Con dicha tarjeta podrán efectuarse retiros: **a)** por ventanilla en las oficinas o sucursales de la Entidad; **b)** a través de equipos y sistemas automatizados, hasta por la cantidad diaria previamente señalada por la Entidad depositaria; **c)** mediante adquisiciones de bienes y servicios y, en su caso, disposiciones de efectivo hasta por la cantidad diaria que la Entidad haya pactado con los negocios afiliados al servicio de la tarjeta; y/o bien, **d)** mediante órdenes de traspaso a la tarjeta del propio depositante, exclusivamente para cubrir saldos a su cargo.

La adquisición de bienes y servicios, así como los retiros en los negocios afiliados a la tarjeta que corresponda a este tipo de depósitos, se harán en los términos previstos en las Reglas a las que habrán de sujetarse las Entidades en la emisión y operación de tarjetas de crédito, que se señalan en la fracción VII de esta misma Regla. El importe de los documentos con que se formalicen estas operaciones, deberá cargarse a la cuenta del depositante el mismo día en que, a su vez, la Entidad los cubra a establecimientos afiliados.

d) Créditos a cuentahabientes de tarjetas de débito.

Para evitar posibles sobregiros, al permitir adquisiciones de bienes y servicios en establecimientos afiliados, la Entidad depositaria podrá otorgar créditos a los cuentahabientes. Las características de estos créditos podrán ser determinadas libremente por la Entidad acreditante.

e) Estados de cuenta.

Las Entidades deberán proporcionar a los depositantes, con la periodicidad que libremente determinen, un estado de cuenta o su equivalente, en el que aparezcan los movimientos efectuados en el periodo correspondiente, el promedio de saldos diarios de cada periodo de interés, el rendimiento correspondiente a cada periodo de interés en cantidad y porcentaje, así como, en su caso, las comisiones cargadas.

I.III. Depósitos retirables en días preestablecidos.

a) Cuentahabientes.

Estos depósitos podrán recibirse de personas físicas y morales.

b) Montos.

Las Entidades podrán pactar libremente con sus cuentahabientes, los montos y saldos mínimos a los cuales estén dispuestas a recibir y mantener estos depósitos.

Las Entidades deberán reservarse invariablemente el derecho de no recibir nuevos depósitos en la cuenta de que se trate.

c) Rendimientos.

Las Entidades podrán pactar libremente las tasas de interés que devenguen estos depósitos, las cuales podrán ser distintas para cada tipo de inversionista que determine la propia Entidad.

La tasa pactada sólo podrá revisarse y, en su caso, ajustarse, en los días preestablecidos en que el depositante pueda efectuar retiros.

Las tasas se aplicarán sobre el promedio de los saldos diarios del periodo en el cual hayan estado vigentes.

Las Entidades podrán pactar libremente la periodicidad de pago de los intereses.

d) Retiros.

Estos depósitos sólo podrán ser retirables en los días pactados en el contrato respectivo.

Cuando alguno de los días de retiro sea inhábil, el depósito podrá retirarse el día hábil bancario inmediato siguiente. En este caso, los rendimientos continuarán devengándose hasta el día de pago, a la tasa de interés originalmente pactada.

Las Entidades podrán pactar en los contratos respectivos que de presentarse el supuesto en el párrafo precedente, que el depósito pueda retirarse el día hábil bancario inmediato anterior. En los contratos también podrá establecerse que el retiro pueda efectuarse a elección del depositante en cualquiera de las dos opciones mencionadas.

Las Entidades se abstendrán de atender retiros en días distintos a los expresamente señalados en el contrato respectivo.

No obstante lo anterior, las Entidades podrán pactar que estos depósitos sea retirables también con previo aviso. En este caso, en el contrato correspondiente deberá establecerse el plazo con el cual deberá darse el previo aviso para los retiros y el monto máximo de éstos.

I.IV. Depósitos de ahorro.

a) Cuentahabientes.

Estos depósitos podrán recibirse de personas físicas y morales.

b) Montos.

Las Entidades podrán pactar libremente con sus cuentahabientes, mediante políticas de carácter general los montos y saldos mínimos a los cuales estén dispuestas a recibir y mantener estos depósitos.

c) Rendimientos.

Estos depósitos devengarán intereses a la tasa que libremente determine la Entidad depositaria. La tasa así determinada se aplicará de manera uniforme a todos los depositantes.

Dicha tasa deberá revisarse y, en su caso, ajustarse por periodos mensuales.

La tasa determinada para cada periodo mensual será aplicable al promedio de los saldos diarios en el propio periodo. Los intereses se pagarán por mensualidades vencidas, mediante abonos en la propia cuenta.

d) Retiros.

El ahorrador podrá disponer:

d.1. A la vista, de la cantidad equivalente a 30 días de salario mínimo diario general en el Distrito Federal, o del treinta por ciento del saldo de la cuenta cuando la suma correspondiente a este porcentaje sea superior a dicha cantidad; entre un retiro a la vista y otro, deberán transcurrir cuando menos 30 días;

d.2. Mediante un aviso previo de 15 días, del cincuenta por ciento del saldo de su cuenta, y con otro aviso de 15 días más, podrán retirar el resto de sus ahorros.

No obstante lo establecido en este numeral, la Entidad podrá pagar a la vista hasta el cien por ciento del importe de la cuenta.

I.V. Depósitos a plazo fijo.

a) Cuentahabientes.

Estos depósitos podrán recibirse de personas físicas y morales.

b) Montos.

Las Entidades podrán pactar libremente con sus cuentahabientes, los montos mínimos a partir de los cuales estén dispuestas a recibir estos depósitos.

c) Rendimientos.

Al constituirse estos depósitos, las partes pactarán libremente, en cada caso, la tasa de interés.

Las Entidades determinarán libremente la periodicidad con que vayan a pagar los intereses.

Tratándose de renovaciones automáticas, la tasa aplicable en cada renovación deberá ser la señalada por la Entidad para depósitos con las mismas características en la fecha valor de
la renovación.

d) Plazos.

Al constituirse estos depósitos las partes pactarán, en cada caso, el plazo de los mismos. El plazo se pactará por días naturales, no debiendo ser menor a un día, y será forzoso para ambas partes.

e) Retiros.

Estos depósitos sólo serán retirables al vencimiento del plazo contratado. Cuando alguno de los días de retiro sea inhábil el depósito podrá retirarse el día hábil inmediato siguiente. En este caso, los rendimientos continuarán devengándose hasta el día del pago, a la tasa de interés originalmente pactada. En el mismo supuesto de día inhábil, se podrá pactar en el contrato que el depósito pueda retirarse el día hábil inmediato anterior o en cualquiera de las dos opciones mencionadas a elección del depositante.

f) Documentación.

Estos depósitos se documentarán en certificados de depósito a plazo, o bien, en constancias de depósito a plazo.

Los certificados y las constancias, llevarán anotado el número progresivo que a cada uno le corresponda, el cual deberá ser distinto tanto para los certificados como para las constancias.

Los certificados de depósito a plazo son títulos de crédito nominativos. Los depósitos documentados en tales certificados no podrán renovarse al vencimiento.

Los depósitos documentados en constancias podrán ser renovados automáticamente a su vencimiento, y los derechos que amparen tales constancias no deberán ser cedidos a instituciones de crédito o a otras Entidades.

Para cualquier tipo de depósito descrito en esta fracción I, las Entidades podrán determinar libremente, mediante políticas generales el importe de las comisiones a cargo del cuentahabiente. Tratándose del pago por rendimientos a personas físicas o morales, para efectos del Impuesto Sobre la Renta deberá observarse lo dispuesto en la legislación fiscal aplicable.

Asimismo, las Entidades deberán informar a los diferentes tipos de cuentahabientes, mediante avisos colocados en un lugar visible de las sucursales, la tasa de interés y las comisiones de cada uno de los instrumentos respectivos.

II. Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos concedidos a través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito.

II.I. Aceptaciones.

Las Entidades podrán aceptar letras de cambio en moneda nacional, las cuales podrán ser giradas por las propias Entidades, o por personas físicas o morales.

a) Titulares.

Podrán ser adquiridas por personas físicas y morales.

b) Emisión.

Las aceptaciones que sean giradas por personas físicas o morales deberán ser suscritas con base en aperturas de crédito que la Entidad aceptante otorgue a aquéllas. Estas aceptaciones serán giradas a la orden del propio girador.

c) Rendimientos.

El rendimiento de las aceptaciones estará referido a su colocación a descuento. Las Entidades determinarán libremente la tasa de descuento respectiva.

d) Plazos.

Las aceptaciones podrán emitirse al plazo que libremente determine la Entidad suscriptora, no debiendo ser menor a un día.

II.II. Títulos de crédito avalados.

a) Titulares.

Podrán ser adquiridos por personas físicas y morales.

b) Emisión.

Los avales sobre títulos de crédito se otorgarán con base en aperturas de crédito que la Entidad avalista otorgue al suscriptor de los títulos.

Atento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no es necesario que, precisamente en la fecha de suscripción de un pagaré, se indique el nombre del beneficiario. Por lo tanto, las instituciones podrán avalar títulos de crédito sin la mención del beneficiario siempre y cuando, también conforme al precepto citado, se cumpla con dicho requisito con anterioridad a la presentación de los títulos para su pago.

Los acreedores, beneficiarios de los pagarés y los deudores, suscriptores de los títulos, podrán ser puestos en contacto por la institución que otorgue el aval.

c) Rendimientos.

Las tasas de rendimiento de los pagarés serán pactadas libremente por acreedores y deudores.

d) Plazos.

Serán los que convengan las partes, no debiendo ser menor a un día.

e) Documentación.

Los títulos de crédito avalados serán cualquier crédito en moneda nacional que una persona otorgue a una empresa o bien a una persona física que realice actividades empresariales, siempre y cuando dicho crédito se documente con pagarés sobre los cuales las Entidades otorguen su aval. Para efectos de estas Reglas, se entenderá por empresa a cualquier sociedad mercantil u organismo descentralizado que realice preponderantemente actividades empresariales.

SEGUNDA SECCION: OPERACIONES ACTIVAS.

III. Otorgar préstamos o créditos de todo tipo a corto, mediano y largo plazo a sus Socios o Clientes.

Las Entidades podrán otorgar préstamos o créditos a corto, mediano y largo plazo a sus Socios o Clientes, respetando los límites máximos de plazo y monto de financiamiento que al efecto determine el Consejo de Administración de cada Entidad, los cuales se ajustarán a lo establecido en estas disposiciones.

III.I. Plazos.

Para efectos de las presentes Reglas, se entiende por crédito a corto plazo a aquél otorgado a un plazo no mayor de un año, por crédito a mediano plazo a aquél otorgado a

un plazo no mayor a tres años, y por crédito a largo plazo a aquél otorgado a un plazo mayor a tres años.

Excepcionalmente, los créditos a corto plazo podrán otorgarse hasta por dieciocho meses, siempre que las Entidades reciban en prenda los depósitos que el acreditado tenga en la Entidad de que se trate.

III.II. Tasas de interés.

Deberá pactarse en el contrato de crédito una sola tasa de interés, aclarando las características de esta tasa, la cual estará expresada como una de las opciones siguientes:

a) Puntos porcentuales y/o sus fracciones, fijos;

b) Puntos porcentuales y/o sus fracciones, fijos, que se adicionen a una sola tasa de referencia, que se elija de entre las tasas de referencia nacional o tasas de referencia en UDIS;

c) Estableciendo: **i)** el número de puntos porcentuales máximo y mínimo que podrán sumar a una de las mencionadas tasas de referencia, y **ii)** que dentro del rango resultante de lo anterior, la tasa de interés se determine multiplicando la tasa de referencia por un factor fijo, o

d) Estableciendo: **i)** el número de puntos porcentuales máximo y mínimo que podrán sumar a una de las mencionadas tasas de referencia, y **ii)** que dentro del rango resultante de lo anterior, la tasa de interés se determine multiplicando la tasa de referencia por un factor fijo y sumando al producto un número fijo de puntos porcentuales o sus fracciones.

Las Entidades no podrán pactar tasas alternativas.

Tratándose de aperturas de crédito en las que las Entidades no hayan renunciado al derecho de denunciarlas en cualquier tiempo, las partes podrán pactar en los instrumentos jurídicos en que documenten dichas aperturas de crédito, que la tasa de interés aplicable se fijará en el momento en que se efectúe cada una de las disposiciones del crédito respectivo. En la determinación de dicha tasa de interés, las Entidades deberán ajustarse estrictamente a lo dispuesto en este numeral.

III.III. Modificación de la tasa de interés y de los demás accesorios financieros.

Las Entidades deberán abstenerse de pactar en los instrumentos jurídicos en que documenten sus créditos, mecanismos para modificar durante la vigencia del contrato, la fórmula para determinar la tasa de interés así como los demás accesorios financieros.

Lo dispuesto en el párrafo anterior es sin perjuicio de la facultad que tienen las partes de modificar mediante convenio las cláusulas de los contratos, incluyendo las relativas a la tasa de interés y demás accesorios. En tal caso el consentimiento del acreditado deberá otorgarse por escrito al tiempo de pactarse la modificación.

III.IV. Tasa aplicable y periodo de cómputo de intereses.

En el evento de que las Entidades pacten la tasa de interés con base en una tasa de referencia, también deberán pactar que dicha tasa de referencia deberá ser la última publicada durante el periodo que se acuerde para la determinación de la tasa de interés o la que resulte del promedio aritmético de dichas tasas, publicadas durante el referido periodo. Lo anterior en el entendido de que el periodo de determinación de la tasa de interés, no necesariamente deberá coincidir con el periodo en que los intereses se devenguen.

III.V. Tasas de referencia en moneda nacional.

En las operaciones activas, denominadas en moneda nacional, únicamente se podrá utilizar como tasa de referencia: **a)** la TIIE; **b)** la tasa de rendimiento en colocación primaria de CETES; **c)** el CCP; **d)** la Tasa Nafin (TNF) que se publique en el **Diario Oficial de la Federación**, únicamente en los créditos que sean objeto de descuento con

Nacional Financiera, S.N.C., o que sean otorgados con recursos provenientes de esa institución de banca de desarrollo, o **e)** la tasa que se hubiese pactado en los instrumentos que documenten créditos recibidos de la banca de desarrollo o de fideicomisos públicos de fomento económico, únicamente en los créditos que sean objeto de descuento con tales instituciones de banca de desarrollo o de esos fideicomisos, o que sean otorgados con recursos provenientes de dichas instituciones o fideicomisos. Tratándose de las tasas de referencia previstas en los incisos a) y b) deberá indicarse el plazo de la TIIE o el plazo de los CETES al que esté referida la tasa de las operaciones.

III.VI. Tasas de referencia en UDIS.

En las operaciones activas denominadas en UDIS únicamente podrá utilizarse como referencia la tasa de rendimiento en colocación primaria de los instrumentos emitidos por el Gobierno Federal denominados en UDIS.

III.VII. Tasas de referencia sustitutivas.

Las Entidades deberán pactar una o más tasas de referencia sustitutivas, para el evento de que deje de existir la tasa de referencia originalmente pactada.

Las Entidades que pacten tasas de referencia sustitutivas deberán además convenir el número de puntos porcentuales o sus fracciones que, en su caso, se sumen a la tasa sustitutiva que corresponda, así como el orden en que dichas tasas de referencia sustituirían a la originalmente pactada.

Los acuerdos mencionados deberán quedar claramente establecidos desde el momento en que se otorgue el crédito correspondiente y sólo podrán modificarse conforme a lo previsto
en el numeral III.III. anterior.

IV. Realizar inversiones en todo tipo de valores.

a) Valores gubernamentales.

Se entenderá por valores gubernamentales a los emitidos o avalados por: el Gobierno Federal, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y el Banco de México.

Las operaciones de compraventa con valores gubernamentales deberán denominarse en moneda nacional, salvo tratándose de las que se celebren con aquellos instrumentos denominados en UDIS.

b) Títulos bancarios.

Se entenderá por títulos bancarios: los certificados de depósito a plazo, las aceptaciones bancarias, los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, el papel comercial con aval bancario, y a los bonos bancarios.

c) Valores.

Para efectos de lo dispuesto por el inciso b) de la fracción III de la Regla séptima anterior, se entenderán por valores: las acciones, obligaciones, bonos, certificados y demás títulos de crédito y documentos que se emitan en serie o en masa en los términos de las leyes que los rijan, destinados a circular en el mercado de valores, incluyendo las letras de cambio, pagarés y títulos opcionales que se emitan en la forma antes citada y, en su caso, al amparo de un acta de emisión, cuando por disposición de ley o de la naturaleza de los actos que en la misma se contengan, así se requiera.

Las Entidades con Nivel de Operaciones I, II y III únicamente podrán realizar inversiones según lo señalado en el inciso l) de la fracción I inciso e) de la fracción II e inciso b) de la fracción III, respectivamente, de la Regla séptima anterior, por lo que no podrán hacerlas con propósitos especulativos.

V. Operaciones de descuento con fideicomisos de fomento o con instituciones de banca de desarrollo.

Las Entidades podrán ceder o descontar su cartera de créditos, con o sin su responsabilidad, con fideicomisos de fomento o con instituciones de banca de desarrollo.

VI. Operaciones de descuento con cualquier persona física o moral nacional o extranjera, distinta a las señaladas en la fracción V anterior.

Las Entidades podrán ceder o descontar su cartera de créditos, sin su responsabilidad, con cualquier persona física o moral nacional o extranjera, con la salvedad prevista en el inciso k) de esta fracción.

En los contratos en que se documenten las operaciones de cesión o descuento de cartera a que se refiere el párrafo inmediato anterior, no podrán pactarse mecanismos de cargo a la Entidad cedente o descontataria por virtud de los cuales se asegure el pago de la cartera cedida o descontada, ni cualquier otro tipo de estipulación que implique la garantía de la Entidad de que se trate para el pago de la cartera objeto de la cesión o descuento, o bien la asunción del riesgo de recuperación de los créditos cedidos o descontados por parte de la Entidad cedente o descontataria.

Las Entidades que lleven a cabo cesiones o descuentos de cartera con personas físicas o morales nacionales o extranjeras, deberán observar las directrices siguientes:

a) La Entidad cedente o descontataria no podrá otorgar, directa o indirectamente financiamiento alguno para la adquisición o descuento de dicha cartera, salvo que:

a.1. El crédito se otorgue en condiciones de mercado incluyendo, en su caso, las garantías respectivas, y su pago no esté sujeto ni condicionado a la recuperación y cobranza de la cartera crediticia materia de la transacción. Bajo ningún supuesto se podrá dar en garantía del pago del crédito, la cartera cedida o descontada, y

a.2. La mencionada cesión o descuento de cartera y el financiamiento de que se trate, no se encuentren vinculados en forma alguna a otras operaciones de cualquier naturaleza con la contraparte acreditada.

La Entidad cedente o descontataria, tendrá prohibido pactar como parte de la operación de cesión o descuento de cartera correspondiente, la obligación de adquirir o readquirir, según se trate, la cartera cedida o descontada;

b) Haber cumplido con todos y cada uno de sus procedimientos internos para aprobar la cesión o descuento de cartera de que se trate;

c) Las transacciones de cesión o descuento de cartera que tengan por objeto operaciones que a la fecha de la transacción sean consideradas como operaciones con personas relacionadas definidas en términos de lo previsto por el artículo 35 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como aquellas que se celebren con cualquiera de las personas a que se refiere dicho artículo, deberán ser previamente aprobadas por el Consejo de Administración de la Entidad cedente o descontataria, de conformidad y con sujeción a los requisitos que para la celebración de dichas operaciones se establecen en el propio artículo 35;

d) Deberán contar con un precio de referencia con el objeto de que éste se tome en cuenta para estimar el valor que se recibirá por la cartera materia de la transacción;

e) La cesión o descuento de cartera deberá realizarse por el importe total de cada crédito;

f) La Entidad deberá dar a conocer a la Federación a la que esté afiliada o aquella que la supervise de manera auxiliar, los créditos que se cedan o descuenten, indicando el estado en que se encuentran dichos créditos a la fecha de la cesión o descuento respectivo;

g) La Entidad cedente o descontataria deberá pactar en los contratos que instrumenten cada cesión o descuento de cartera la obligación a cargo del cesionario o descontador de informar oportunamente, de forma periódica y por escrito a las Sociedades de Información Crediticia la situación de los créditos objeto de la transacción, en los términos de las disposiciones o estipulaciones aplicables a dichas Sociedades;

h) Las Entidades deberán obtener de la persona que pretenda actuar como cesionario o descontador, con anterioridad a la celebración de la transacción, constancia por escrito en la que el pretendido descontador o cesionario manifieste, bajo protesta de decir verdad, por sí mismo o a través de persona legalmente autorizada para realizar actos de administración,
lo siguiente:

h.1. Que ha hecho del conocimiento oportuno de la Sociedad de Información Crediticia correspondiente, las modificaciones registradas en la situación de los créditos que hayan adquirido por virtud de operaciones de cesión o descuento de cartera celebradas al amparo de las presentes Reglas y con anterioridad a la transacción de que se trate, con entidades financieras o con cualquier otra persona considerada como Usuario en términos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 15 de enero de 2002, o bien

h.2. Que no ha participado con anterioridad en transacción alguna realizada en términos de lo previsto en las presentes Reglas, que implique la adquisición de créditos originalmente otorgados por entidad financiera legalmente autorizada u otra persona que de conformidad con la Ley citada en el inciso anterior, pueda ser considerada como Usuario del servicio de información sobre operaciones activas y otras de naturaleza análoga, así como que, no obstante lo anterior, dará cumplimiento a la obligación contenida en el inciso g) de esta fracción.

i) Las Entidades deberán corroborar con las Sociedades de Información Crediticia lo señalado en el inciso h.1. de esta fracción y abstenerse de realizar la operación de cesión o descuento de cartera correspondiente, cuando detecten que el pretendido cesionario no ha proporcionado oportunamente a las referidas Sociedades la información correspondiente;

j) La Entidad cedente o descontataria deberá notificar mediante comunicación escrita, la cesión o descuento de cartera de que se trate, a aquellas personas que por virtud de los créditos objeto de la cesión o descuento sean sus deudores, siempre que los créditos en cuestión sean considerados vigentes de conformidad con la normativa contable correspondiente, y

k) Asimismo, deberán cerciorarse con los medios que tengan a su disposición que las cesiones o descuentos se celebren con personas que utilicen prácticas de cobranza razonables y apegadas a derecho, y que se guarde la debida confidencialidad respecto de la información relacionada con la cartera objeto de la cesión o descuento.

Las Entidades que pretendan efectuar operaciones de cesión o descuento de cartera sin su responsabilidad, conforme a lo establecido en esta fracción, deberán dar aviso de los términos y condiciones generales de la operación a la Federación a la que estén afiliadas o a aquella que ejerza sobre las mismas facultades de supervisión auxiliar, con una anticipación de cinco días hábiles bancarios a la fecha en que pretendan llevar a cabo la transacción. Tratándose de operaciones de cesión o descuento de cartera con responsabilidad, deberán dar aviso además a la Comisión, en el plazo señalado anteriormente.

Las Entidades que deseen ceder o descontar su cartera o en general transmitir o afectar la propiedad de la misma en términos distintos a los establecidos en las presentes Reglas, deberán solicitar autorización a la Comisión, por conducto de la Vicepresidencia de Normatividad.

VII. Emitir tarjetas de crédito con base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente.

Las Entidades deberán sujetarse a las Reglas de Emisión y Operación de Tarjetas de Crédito, aplicables a las instituciones de banca múltiple, publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** el 18 de diciembre de 1995, así como sus modificaciones, con excepción de lo

relativo a tarjetas internacionales, cuya emisión y operación se encuentra prohibida a las Entidades.

TRANSITORIA

UNICA.- Las presentes Reglas entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

Atentamente

México, D.F., a 27 de septiembre de 2002.- El Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, **Jonathan Davis Arzac**.- Rúbrica.

ACUERDO mediante el cual se modifica la base II de la autorización otorgada a B y B Casa de Cambio, S.A. de C.V., Actividad Auxiliar del Crédito, por aumento de capital fijo pagado.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.- Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.- Dirección General de Seguros y Valores.- Dirección de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.- 366-I-A-926.- 724.2/304311.

AUTORIZACIONES DE CASAS DE CAMBIO.- Se modifica la otorgada a esa sociedad por aumento de capital fijo pagado.

B y B Casa de Cambio, S.A. de C.V.
Actividad Auxiliar del Crédito
Horacio No. 1855, Desp. 203-A
Col. Los Morales Polanco
11560, México, D.F.

Esa sociedad, con el objeto de dar cumplimiento a los puntos cuarto y décimo del Acuerdo por el que se establecen los capitales mínimos pagados con que deberán contar los almacenes generales de depósito, las arrendadoras financieras, uniones de crédito, empresas de factoraje financiero y casas de cambio, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 2 de mayo de 2001, remitió el primer testimonio de la escritura pública número 13,079 del 4 de abril de 2002, otorgada ante la fe del Notario Público número 100, licenciado Manuel Enrique Oliveros Lara, con ejercicio en la Ciudad de México, Distrito Federal, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con el folio mercantil número 108,879, partida 8,534 del 9 de abril de 2002, que contiene la protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de esa sociedad, celebrada el 27 de diciembre pasado, en la que, entre otras cosas, acordaron aumentar su capital social fijo pagado sin derecho a retiro de $21'671,000.00 (veintiún millones seiscientos setenta y un mil pesos 00/100 M.N.) a $25'706,000.00 (veinticinco millones setecientos seis mil pesos 00/100 M.N.), íntegramente suscrito y pagado, modificando en consecuencia la cláusula sexta de sus estatutos sociales; asimismo, resolvieron acogerse al punto cuarto del Acuerdo por el que se establecen los capitales mínimos pagados con los que deberán contar las organizaciones auxiliares del crédito y las casas de cambio, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 2 de mayo de 2001, a fin de dar cabal cumplimiento al mismo, por lo que esta Secretaría, con base en el artículo 6o. fracción XXII de su Reglamento Interior y con fundamento en lo establecido en el tercer párrafo del artículo 81 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, ha resuelto dictar el siguiente:

ACUERDO

Se modifica la base II de la autorización otorgada a esa sociedad con oficio número 102-E-366-DGSV-II-B-c-4030 del 6 de junio de 1988, modificada el 2 de abril de 1998, 16 de octubre de

1998 y 4 de noviembre de 1999, que faculta a B y B Casa de Cambio, S.A. de C.V., Actividad Auxiliar del Crédito, para llevar a cabo las operaciones a que se refiere el artículo 82 fracción I de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, para quedar en los siguientes términos:

I.- .....

II.- El capital social es variable, el capital fijo sin derecho a retiro, totalmente suscrito y pagado es de $25'706,000.00 (veinticinco millones setecientos seis mil pesos 00/100 M.N.).

III.- .....

IV.- .....

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 25 de junio de 2002.- En suplencia por ausencia del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, y de conformidad con el artículo 105 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, **Agustín Guillermo Carstens Carstens**.- Rúbrica.

(R.- 169195)

OFICIO mediante el cual se modifica la parte inicial, así como los artículos primero y tercero, primer párrafo, base I, de la autorización otorgada a Royal & SunAlliance Seguros (México), S.A. de C.V., por cambio de su denominación y de entidad financiera del exterior.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.- Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.- Dirección General de Seguros y Valores.- Dirección de Seguros y Fianzas.- Subdirección de Seguros.- Departamento de Autorizaciones y Operación de Seguros.- 366-IV-755.- 731.1/32341.

AUTORIZACIONES A INSTITUCIONES DE SEGUROS FILIALES.- Se modifica la otorgada a esa institución en virtud del cambio de su denominación y de entidad financiera del exterior.

Royal & SunAlliance Seguros (México), S.A. de C.V.
Bulevar Adolfo López Mateos No. 2948
Col. Altavista, C.P. 01060
Ciudad.

En virtud de que mediante oficio 366-IV-754 de esta misma fecha, se otorgó aprobación a Seguros BBV-Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV-Probursa para reformar diversos artículos de sus estatutos sociales, con el propósito fundamental de convertirse en filial de The Globe Insurance Company Limited, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y cambiar su denominación por la de Royal & SunAlliance Seguros (México), S.A. de C.V., motivo por lo cual en lo sucesivo dejará de ser filial de
BBV International Investment Corporation, del Estado Libre y Asociado de Puerto Rico, y se desincorporará del Grupo Financiero BBV-Probursa, S.A. de C.V. al que pertenece, conforme a lo acordado en sus asambleas generales extraordinarias de accionistas celebradas el 15 de noviembre y 5 de diciembre pasados, contenidas en los testimonios de las escrituras números 5,155 y 5,156 del 13 de

diciembre último, otorgadas ante la fe del licenciado Francisco I. Hugues Vélez, Notario Público número 212, con ejercicio en el Distrito Federal, esta Secretaría, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5o., 33-B y 33-C de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, les manifiesta que ha resuelto modificar la parte inicial, así como los artículos primero y tercero, primer párrafo, base I de la autorización otorgada con oficio 102-E-366-DGSV-I-B-a-3952 del 21 de septiembre de 1990, modificada con los diversos 102-E-366-DGSV-I-B-a-4873 del 30 de noviembre del mismo año, 102-E-366-DGSV-I-B-a-3394, 102-3-366-DGSV-I-B-a-5420 del 23 de julio y 17 de noviembre de 1992, respectivamente, 366-IV-4059 del 16 de noviembre de 1995, 366-IV-5225 del 13 de septiembre de 1996, 101.-775 del 17 de junio de 1997, 366-IV-6333 del 30 de noviembre de 1998, 366-IV-5383 del 12 de octubre de 1999, 366-IV-3883 del 15 de octubre de 2001, a Seguros BBV-Probursa, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBV-Probursa, filial de BBV International Corporation, del Estado Libre y Asociado de Puerto Rico, que la faculta para practicar operaciones de seguros de vida, comprendiendo los seguros de pensiones, derivados de las leyes de seguridad social, de accidentes y enfermedades, en los ramos de accidentes personales y gastos médicos; de daños, en los ramos de responsabilidad civil y riesgos profesionales, marítimo y transportes, incendio, agrícola y de animales, automóviles, crédito en reaseguro, diversos, así como terremoto y otros riesgos catastróficos, para quedar en la forma siguiente:

"Autorización que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en representación del Gobierno Federal a Royal & SunAlliance Seguros (México), S.A. de C.V., para que opere como institución de seguros filial de The Globe Insurance Company Limited, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en los términos siguientes:

ARTICULO PRIMERO.- En uso de la facultad que los artículos 33-C y 33-I de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros confieren a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se otorga autorización a Royal & SunAlliance Seguros (México), S.A. de C.V., para que opere como institución de seguros filial de The Globe Insurance Company Limited, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

.....

ARTICULO TERCERO.- La institución de seguros filial se sujetará a las disposiciones de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, así como a los que se deriven de la misma, a la Ley General de Sociedades Mercantiles, y a las demás leyes que le sean aplicables y, en particular a las siguientes bases:

I.- La denominación será Royal & SunAlliance Seguros (México), Sociedad Anónima de Capital Variable.

....."

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 30 de enero de 2002.- En ausencia del C. Secretario, y de conformidad con el artículo 105 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, **Agustín Guillermo Carstens Carstens**.- Rúbrica.

(R.- 169194)

SECRETARIA DE ECONOMIA

ACUERDO por el que se establecen requisitos específicos para la importación temporal de mercancías.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

LUIS ERNESTO DERBEZ BAUTISTA, Secretario de Economía, con fundamento en los artículos 34 fracciones I, II, V, VI y XXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 fracción III, 5 fracción III, 16, 17 y 20 de la Ley de Comercio Exterior; 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 16 del Decreto que establece Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación; 16 del Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación, y 4 y 5 fracciones I y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y

CONSIDERANDO

Que los Decretos para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación y el que establece Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación han tenido por objeto fomentar las exportaciones mediante el otorgamiento de facilidades administrativas, respecto del régimen de importación temporal;

Que el artículo 16 del Decreto que establece Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación y del Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación, prevén que la Secretaría podrá determinar mediante Acuerdo publicado en el **Diario Oficial de la Federación** las mercancías que no podrán importarse al amparo de los citados Decretos o que para hacerlo se sujetarán al cumplimiento de requisitos específicos;

Que el 13 de junio de 2001 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el Acuerdo por el que se establecen requisitos específicos para la importación temporal de mercancías, reformado mediante diversos publicados en el citado órgano publicitario del gobierno federal los días 27 de agosto de 2001, 23 de octubre de 2001 y 28 de marzo de 2002;

Que el número reducido de empresas que importan temporalmente las mercancías a que se refiere el Acuerdo citado facilita a las autoridades competentes la administración, control y seguimiento de sus operaciones de comercio exterior;

Que existen empresas que exportan la totalidad de su producción y, por ende, no existen elementos para suponer la posibilidad de que las mismas incurran en desvíos ilegales de mercancías;

Que por su naturaleza, ciertas mercancías, los procesos productivos y las circunstancias especiales de dichas empresas en ocasiones requieren de plazos de vigencia y de permanencia en el país mayores a los establecidos en el Acuerdo por el que se establecen requisitos específicos para la importación temporal de mercancías;

Que dada la importancia que revisten en el país los productos agropecuarios, se requieren para ellos controles adicionales que comprueben el uso adecuado de los que se importan temporalmente y se evite su desvío a territorio nacional, con el consecuente daño a la economía e industria nacional;

Que el Acuerdo para la desregulación y simplificación de los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, y la aplicación de medidas de mejora regulatoria que beneficien a las empresas y los ciudadanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 25 de junio de 2001, establece en su artículo 1o. fracción I que las dependencias y los organismos descentralizados de la Administración

Pública Federal, sujetos al título tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, deberán eliminar trámites obsoletos o innecesarios;

Que la Secretaría de Economía tiene el propósito de simplificar y evitar incurrir en mayores gastos a las empresas con programas de importación temporal para producir artículos de exportación y de maquila de exportación, por la tramitación de autorizaciones de mercancías sujetas al Acuerdo por el que se establecen requisitos específicos para la importación temporal de mercancías;

Que con el objeto de que los particulares consulten el menor número de publicaciones y, en consecuencia, se les facilite la consulta del presente Acuerdo, y

Que en términos del artículo 17 de la Ley de Comercio Exterior, el presente Acuerdo ha sido sometido a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN REQUISITOS ESPECIFICOS PARA LA IMPORTACION TEMPORAL DE MERCANCIAS

ARTICULO 1.- Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:

I. Programas, al Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación y al Registro de la Industria Maquiladora de Exportación, y

II. Secretaría, a la Secretaría de Economía.

El presente Acuerdo sólo es aplicable a las importaciones temporales directas del extranjero, que realicen empresas con programas. Las empresas con programas que exporten la totalidad de su producción sólo estarán sujetas a lo dispuesto en el artículo 2 del presente ordenamiento.

Las empresas que soliciten su inscripción a cualquiera de los programas que exporten la totalidad de su producción y se les autorice la importación de mercancías clasificadas en las fracciones I, II y III del artículo 3 de este Acuerdo, les será aplicable lo dispuesto en la segunda parte del párrafo anterior cuando cuenten con un año de vigencia con el Programa, contado a partir de la autorización del mismo.

ARTICULO 2.- Se excluyen de ser importadas bajo los programas las mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que a continuación se indican:

I.

0209.00.99	Los demás.
0713.33.02	Frijol blanco, excepto lo comprendido en la fracción 0713.33.01.
0713.33.03	Frijol negro, excepto lo comprendido en la fracción 0713.33.01.
0713.33.99	Los demás.
1501.00.01	Grasa de cerdo (incluida la manteca de cerdo) y grasa de ave, excepto las de las partidas 02.09 o 15.03.
1516.10.01	Grasas y aceites, animales, y sus fracciones.
2207.10.01	Alcohol etílico sin desnaturalizar con un grado alcohólico volumétrico superior o igual a 80% vol.
2207.20.01	Alcohol etílico y aguardientes desnaturalizados, de cualquier graduación.
2208.90.01	Alcohol etílico.
2208.90.02	Bebidas alcohólicas de más de 14 grados sin exceder de 23 grados centesimales Gay-Lussac a la temperatura de 15 grados centígrados, en vasijería de barro, loza o vidrio.
6309.00.01	Artículos de prendería.

II. Los bienes de consumo, entendiendo por éstos a los productos que tienen como destino directo la satisfacción de una necesidad inmediata, excepto los que se encuentren en cualquiera de los siguientes casos:

a) Se constituyan en bienes intermedios. Se consideran como tales cuando se introduzcan en calidad de materias primas, partes, componentes, materiales auxiliares, envases, material de empaque, combustibles o lubricantes que se utilicen o se integren en el proceso de producción de las mercancías de exportación de las empresas con programas;

b) Se importen al amparo del artículo 108 fracciones II y III de la Ley Aduanera. No se consideran comprendidos en el presente inciso los bienes a que se refiere el artículo 3 fracción V del presente Acuerdo;

c) Se importen por maquiladoras de servicios;

d) Se importen para efectuar composturas en ellos, habiéndose producido y exportado previamente por la misma empresa, siempre que no hayan sido objeto de modificaciones en el extranjero ni transcurrido más de un año desde su salida del territorio nacional;

e) Se importen para retornar en el mismo estado, se refieran a bienes autorizados como productos
de exportación y correspondan a la actividad productiva registrada por la empresa en el programa respectivo. Las autorizaciones a que se refiere este inciso sólo podrán otorgarse cuando la empresa presente anexo a su solicitud de ampliación un escrito en el que manifieste que los productos a importar se retornarán al extranjero y que se adquirirán para subsanar la falta de producción de los bienes de que se trate. Las importaciones que se realicen al amparo del presente inciso no podrán rebasar el 49 por ciento del valor en dólares de los Estados Unidos de América, de las exportaciones realizadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior, y

f) Los bienes que sean utilizados con fines promocionales y que se acompañen en los productos que se exportan por empresas con programa. Las autorizaciones a que se refiere este inciso sólo podrán otorgarse cuando la empresa presente anexo a su solicitud de ampliación un escrito en el que manifieste que los bienes con fines promocionales tienen un valor menor a los productos
que acompañan y que la promoción de que se trate tendrá una duración máxima de seis meses improrrogables.

Para las mercancías que se importen en los supuestos de los incisos a), b) y c), el plazo de permanencia en el país será el que establezca la Ley Aduanera. Para las mercancías que se importen en los supuestos de los incisos d), e) y f) el plazo de permanencia en el país será de seis meses, el cual se podrá ampliar en los términos del artículo 10 del presente Acuerdo.

En cualquiera de los casos mencionados en la presente fracción se deberá contar con el oficio de autorización o ampliación de programas de importación temporal para producir artículos de exportación o de maquila de exportación, según corresponda, que acredite estar en el supuesto correspondiente.

ARTICULO 3.- Se sujetan al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 4 del presente Acuerdo para ser importadas bajo los programas, las mercancías comprendidas en las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, que a continuación se indican:

I.

0207.13.02	Carcazas.
0207.14.03	Carcazas.
0207.26.02	Carcazas.
0207.27.03	Carcazas.
0207.11.01	Sin trocear, frescos o refrigerados.
0207.12.01	Sin trocear, congelados.
0207.13.01	Mecánicamente deshuesados.
0207.13.99	Los demás.
0207.14.01	Mecánicamente deshuesados.
0207.14.99	Los demás.
0207.24.01	Sin trocear, frescos o refrigerados.
0207.25.01	Sin trocear, congelados.
0207.26.01	Mecánicamente deshuesados.
0207.26.99	Los demás.
0207.27.01	Mecánicamente deshuesados.
0207.27.99	Los demás.
0207.32.01	Sin trocear, frescos o refrigerados.

0207.33.01	Sin trocear, congelados.
0207.35.99	Los demás, frescos o refrigerados.
0207.36.99	Los demás.

II.

0402.10.01	Leche en polvo o en pastillas.
0402.21.01	Leche en polvo o en pastillas.
0407.00.01	Huevo fresco para consumo humano, excepto lo comprendido en la fracción 0407.00.03.
0407.00.03	Huevo fértil.
0901.11.01	Variedad Robusta.
0901.11.99	Los demás.
1005.90.03	Maíz amarillo.
1005.90.04	Maíz blanco (harinero).
1005.90.99	Los demás.
1901.90.03	Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 10% en peso, pero inferior o igual a 50% en peso, excepto los comprendidos en la fracción 1901.90.04.

III.

1701.11.01	Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.4 pero inferior a 99.5 grados.
1701.11.02	Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 96 pero inferior a 99.4 grados.
1701.11.03	Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización inferior a 96 grados.
1701.12.01	Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.4 pero inferior a 99.5 grados.
1701.12.02	Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 96 pero inferior a 99.4 grados.
1701.12.03	Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización inferior a 96 grados.
1701.91.01	Con adición de aromatizante o colorante.
1701.99.01	Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.5 pero inferior a 99.7 grados.
1701.99.99	Los demás.
1702.20.01	Azúcar y jarabe de arce (“maple”).
1702.90.01	Azúcar líquida refinada y azúcar invertido.
1806.10.01	Con un contenido de azúcar igual o superior al 90% en peso.
2106.90.05	Jarabes aromatizados o con adición de colorantes.

IV.

4012.20.01	De los tipos utilizados en vehículos para el transporte en carretera de pasajeros o mercancía, incluyendo tractores, o en vehículos de la partida 87.05.
4412.13.01	Que tenga, por lo menos, una hoja externa de las maderas tropicales siguientes: Dark Red Meranti, Light Red Meranti, White Lauan, Sipo, Limba, Okumé, Obeché, Acajou d'Afrique, Sapelli, Mahogany, Palisandre de Para, Palisandre de Río y Palisandre de Rose.
4412.13.99	Las demás.

4412.22.01 Que tengan, por lo menos, una hoja de las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 1 de este capítulo.

V.

8701.20.01 Tractores de carretera para semirremolques.

8702.10.01 Con carrocería montada sobre chasis, excepto lo comprendido en la fracción 8702.10.03.

8702.10.02 Con carrocería integral, excepto lo comprendido en la fracción 8702.10.04.

8702.10.03 Para el transporte de 16 o más personas, incluyendo el conductor, con carrocería montada sobre chasis.

8702.10.04 Para el transporte de 16 o más personas, incluyendo el conductor, con carrocería integral.

8702.90.01 Trolebuses.

8702.90.02 Con carrocería montada sobre chasis, excepto lo comprendido en la fracción 8702.90.04.

8702.90.03 Con carrocería integral, excepto lo comprendido en la fracción 8702.90.05.

8702.90.04 Para el transporte de 16 o más personas, incluyendo el conductor, con carrocería montada sobre chasis.

8702.90.05 Para el transporte de 16 o más personas, incluyendo el conductor, con carrocería integral.

8703.10.01 Con motor eléctrico, excepto los comprendidos en las fracciones 8703.10.02 y 8703.10.03.

8703.10.03 Motociclos de cuatro ruedas (cuadrimotos) o de tres ruedas equipados con diferencial y reversa (trimotos).

8703.10.99 Los demás.

8703.21.01 Cuadrimotos equipadas con diferencial y reversa, denominadas "todo terreno".

8703.21.99 Los demás.

8703.22.01 De cilindrada superior a 1,000 cm^3 pero inferior o igual a 1,500 cm^3.

8703.23.01 De cilindrada superior a 1,500 cm^3 pero inferior o igual a 3,000 cm^3.

8703.24.01 De cilindrada superior a 3,000 cm^3.

8703.31.01 De cilindrada inferior o igual a 1,500 cm^3.

8703.32.01 De cilindrada superior a 1,500 cm^3, pero inferior o igual a 2,500 cm^3.

8703.33.01 De cilindrada superior a 2,500 cm^3.

8703.90.01 Eléctricos.

8703.90.99 Los demás.

8704.10.01 Tipo “Dumpers” con capacidad útil de carga superior a 30,000 kilogramos.

8704.10.99 Los demás.

8704.21.01 Acarreadores de escoria, excepto para la recolección de basura doméstica.

8704.21.02 De peso total con carga máxima inferior o igual a 2,721 kilogramos.

8704.21.03 De peso total con carga máxima superior a 2,721 kilogramos, pero inferior o igual a 4,536 kilogramos.

8704.21.99 Los demás.

8704.22.01 Acarreadores de escoria, excepto para la recolección de basura doméstica.

8704.22.02 De peso total con carga máxima superior o igual a 5,000 kilogramos, pero inferior o igual a 6,351 kilogramos.

8704.22.03 De peso total con carga máxima superior a 6,351 kilogramos, pero inferior o igual a 7,257 kilogramos.

8704.22.04	De peso total con carga máxima superior a 7,257 kilogramos, pero inferior o igual a 8,845 kilogramos.
8704.22.05	De peso total con carga máxima superior a 8,845 kilogramos, pero inferior o igual a 11,793 kilogramos.
8704.22.06	De peso total con carga máxima superior a 11,793 kilogramos, pero inferior o igual a 14,968 kilogramos.
8704.22.99	Los demás.
8704.23.01	Acarreadores de escoria.
8704.23.99	Los demás.
8704.31.01	Acarreadores de escoria, excepto para la recolección de basura doméstica.
8704.31.03	De peso total con carga máxima superior a 2,721 kg, pero inferior o igual a 4,536 kg, excepto lo comprendido en la fracción 8704.31.04.
8704.31.99	Los demás.
8704.32.01	Acarreadores de escoria, excepto para la recolección de basura doméstica.
8704.32.02	De peso total con carga máxima superior o igual a 5,000 kilogramos, pero inferior o igual a 6,351 kilogramos.
8704.32.03	De peso total con carga máxima superior a 6,351 kilogramos, pero inferior o igual a 7,257 kilogramos.
8704.32.04	De peso total con carga máxima superior a 7,257 kilogramos, pero inferior o igual a 8,845 kilogramos.
8704.32.05	De peso total con carga máxima superior a 8,845 kilogramos, pero inferior o igual a 11,793 kilogramos.
8704.32.06	De peso total con carga máxima superior a 11,793 kilogramos, pero inferior o igual a 14,968 kilogramos.
8704.32.99	Los demás.
8704.90.99	Los demás.
8705.10.01	Camiones-grúa.
8705.20.01	Con equipos hidráulicos de perforación destinados a programas de abastecimiento de agua potable en el medio rural.
8705.20.99	Los demás.
8705.40.01	Camiones hormigonera.
8705.90.01	Con equipos especiales para el aseo de calles.
8705.90.02	Para aplicación de fertilizantes fluidos.
8705.90.99	Los demás.
8706.00.99	Los demás.

En caso de que las mercancías listadas en la presente fracción se importen al amparo del artículo 108 fracción III incisos a) y b) de la Ley Aduanera deberán acompañar a la solicitud respectiva, fotografías o catálogos y especificar en escrito anexo, marca, año, modelo y número de serie de las mercancías cuya importación se solicite. Para este caso no será aplicable lo dispuesto en los artículos 4, 6 fracciones II, III y IV, 7 y 10 del presente Acuerdo y los plazos máximos de permanencia en el país de las mercancías serán los que establezca la Ley Aduanera.

Las mercancías listadas en la presente fracción no podrán internarse al país por su propio impulso ni siendo remolcadas por otro vehículo. Tampoco podrán utilizarse para el transporte de mercancías fuera

de las instalaciones de la empresa importadora y en ningún caso podrán utilizarse para el transporte de personas.

ARTICULO 4.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 3 del presente Acuerdo, el solicitante deberá cumplir con lo siguiente:

I. Presentar un escrito en formato libre donde especifique:

a) Nombre de la empresa;

b) Número de programa autorizado;

c) Datos de la mercancía a importar:

(i) Información señalada en el apartado II numeral 2 del Anexo 24 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente;

(ii) Aduana por la cual se llevará a cabo la importación de las mercancías que solicita, pudiendo señalar como máximo tres aduanas;

(iii) Volumen máximo a importar en el semestre;

(iv) Valor en dólares de los Estados Unidos de América de la mercancía que se pretende importar en el semestre, y

(v) Nombre y número de patente del agente aduanal que realizaría el despacho de las mercancías, pudiendo señalar como máximo tres agentes aduanales.

d) Datos del producto de exportación que se elaborará con las mercancías a que se refiere la fracción I inciso c) de este artículo, cumpliendo para tales efectos con la información señalada en el apartado II numeral 3 del Anexo 24 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente e indicar el porcentaje estimado de desperdicios por cada tipo de mercancía que se genera en el proceso productivo de cada producto de exportación, y

e) Descripción del proceso productivo que incluya la capacidad instalada de la planta para procesar las mercancías a importar y el porcentaje de esa capacidad efectivamente utilizada. Asimismo, se deberá indicar la rotación de inventarios y el tiempo promedio que las mercancías a importar permanecerían en el territorio nacional.

II. Anexar al escrito:

a) Copia simple de la declaración del Impuesto Sobre la Renta más reciente y de las declaraciones provisionales del ejercicio corriente;

b) Reporte de un auditor externo registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que certifique:

(i) La ubicación de las plantas;

(ii) Maquinaria y equipo para realizar el proceso productivo;

(iii) Capacidad de producción instalada para efectuar el proceso productivo, por turno de 8 horas, y

(iv) Productos que elabora y sus marcas de comercialización.

c) Para el caso de las mercancías listadas en la fracción I del artículo 3 del presente Acuerdo, además será necesario presentar la documentación que compruebe que el promovente se encuentra dentro del Sistema Tipo de Inspección Federal (TIF), su capacidad instalada de refrigeración y, en su caso, congelación, así como del documento que demuestre que se cuenta con la autorización de importación emitida por el país al que se va a exportar el producto transformado.

La Secretaría dará respuesta dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

ARTICULO 5.- Una vez presentada la solicitud se estará a lo siguiente:

I. La Secretaría requerirá opinión al Servicio de Administración Tributaria a efecto de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del solicitante;

II. Tratándose de las mercancías a que se refiere el artículo 3 fracciones I, II y III del presente Acuerdo, se requerirá opinión técnica a la Dirección General de Política de Comercio Interior y Abasto de la Secretaría, la que a su vez requerirá opinión de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y

III. Tratándose de las mercancías señaladas en el artículo 3 fracciones IV y V del presente Acuerdo, se requerirá opinión de la Dirección General de Industrias de la Secretaría.

La Dirección General de Política de Comercio Interior y Abasto o la Dirección General de Industrias, según corresponda, emitirán la opinión en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a aquél en que les sea requerida. En caso de que transcurrido el plazo no se hubiere emitido la opinión correspondiente se entenderá contestada en sentido positivo.

ARTICULO 6.- En el oficio de autorización correspondiente se asentarán los datos siguientes:

I. Fracción arancelaria y descripción de la o las mercancías;

II. La cantidad máxima (en la unidad de medida expresada en la solicitud y el valor en dólares de los Estados Unidos de América) que el titular de un programa podrá importar de las mercancías de que se trate, indicando la vigencia de la autorización;

III. Un máximo de tres aduanas por donde se realizará la importación, y

IV. Nombre y número de patente de hasta tres agentes aduanales que realizarán el despacho de las mercancías.

ARTICULO 7.- Para obtener una autorización subsecuente, el solicitante deberá cumplir con lo siguiente:

I. Presentar la información del artículo 4 fracción I incisos a), b) y c), fracción II inciso a), y

II. Presentar un reporte firmado por un representante legal de la empresa, en donde se indique:

a) Volumen y valor de las mercancías importadas mencionadas en el artículo 3 del presente Acuerdo, durante el periodo que se reporta;

b) Volumen y valor de los productos elaborados con las mercancías importadas, mencionando número y fecha de los pedimentos de retorno, adjuntando copia de los mismos;

c) Volumen de las mermas y desperdicios correspondientes al proceso productivo, y

d) Cantidad de cada material, en términos de la unidad de medida elegida en el Apartado II numeral 2.4. del Anexo 24 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior vigente, utilizada en la producción del producto, indicando el porcentaje de mermas.

ARTICULO 8.- Procederá una nueva autorización si la empresa ha exportado al menos el ochenta por ciento del volumen, de uno de los siguientes conceptos:

I. El consignado por la autorización anterior, siempre que éste se hubiere ejercido en su totalidad;

II. El resultante de sumar las autorizaciones emitidas en el trimestre o semestre anterior, según corresponda, y

III. El volumen efectivamente importado, cuando no se haya ejercido la totalidad del volumen consignado en la autorización anterior y su plazo de vigencia haya expirado.

Cuando requiera una nueva autorización sin haber exportado el porcentaje anterior, el solicitante deberá adjuntar a su solicitud de autorización un escrito en el que manifieste las razones por las que requiere importar nueva mercancía sin haber cumplido con el porcentaje. En ningún caso se dará una nueva autorización si no se demuestra haber retornado al menos el sesenta por ciento de lo autorizado en el periodo inmediato anterior.

ARTICULO 9.- Adicionalmente, las empresas que importen las mercancías que se indican en el artículo 3 fracciones I, II y III del presente Acuerdo deberán presentar un reporte emitido por un auditor externo registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el mes de agosto de cada año correspondiente al año inmediato anterior, en donde certifique la información a que se refiere la fracción II del artículo 7 del presente Acuerdo.

ARTICULO 10.- El plazo máximo de la vigencia de las autorizaciones será de seis meses. El plazo de permanencia de las mercancías será de seis meses, excepto para el caso de los productos clasificados en las fracciones I y II del artículo 3 del presente Acuerdo, cuyo plazo de permanencia en el país será de tres meses.

Los plazos citados podrán ampliarse cuando el proceso productivo o las condiciones particulares del solicitante así lo demuestren. Para ello, el solicitante deberá presentar su solicitud en escrito libre manifestando las razones por las cuales requiere de una prórroga, ya sea para la vigencia de la autorización o para el plazo de permanencia de las mercancías en el país. Para tal efecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 5 fracciones II y III del presente ordenamiento.

La Secretaría dará respuesta a la solicitud en un plazo de 10 días hábiles y a falta de respuesta en dicho plazo, se entenderá contestada en sentido afirmativo.

ARTICULO 11.- El incumplimiento a cualquiera de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo dará lugar al inicio de procedimiento de cancelación del programa, independientemente de las sanciones administrativas y penales a que dé lugar dicho incumplimiento.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo por el que se establecen requisitos específicos para la importación temporal de mercancías, publicado y reformado en el **Diario Oficial de la Federación**, los días 13 de junio, 27 de agosto, 23 de octubre de 2001 y 28 de marzo de 2002, respectivamente.

TERCERO.- Las personas que a la fecha de entrada en vigor tuvieren autorizada alguna de las mercancías a que se refiere el artículo 2 fracción I del presente Acuerdo, podrán continuar importándolas siempre que se apeguen a lo establecido en el presente ordenamiento para los bienes a que se refiere el artículo 3 del mismo ordenamiento.

CUARTO.- Las autorizaciones expedidas al amparo del Acuerdo que se abroga, seguirán vigentes en los términos en que fueron expedidas.

México, D.F., a 14 de octubre de 2002.- El Secretario de Economía, **Luis Ernesto Derbez Bautista**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION

REGLAMENTO de operación y funcionamiento interno del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

REGLAMENTO DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL CONSEJO TECNICO CONSULTIVO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL.

La Junta Directiva del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, en su reunión celebrada el 11 de diciembre de 2001, ha tenido a bien aprobar el siguiente Reglamento de Operación y Funcionamiento Interno del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal.

1. Fundamento legal

Artículos 4o. fracción II y 9o. de la Ley Federal de Sanidad Animal, es atribución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en materia de sanidad animal, organizar el Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal (CONASA).

Artículo 49o. fracción XXXVII del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), tendrá las siguientes atribuciones: constituir y participar en el Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, apoyar su funcionamiento y atender sus recomendaciones.

2. Objetivo

Fungir como órgano de consulta de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y apoyo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en la identificación, planeación, programación, operación, seguimiento, control y evaluación de los programas de sanidad y producción animal en el territorio nacional.

3. Funciones

3.1 Proponer planes y programas para el establecimiento de campañas y cuarentenas de prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas de los animales.

3.2 Elaborar programas de capacitación a técnicos de campo y productores pecuarios en materia zoosanitaria y de producción animal.

3.3 Diagnosticar enfermedades y plagas de los animales a nivel de laboratorio y de campo.

3.4 Promover la investigación de nuevas técnicas para el diagnóstico, prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas de los animales, así como de producción animal.

3.5 Instrumentar campañas de divulgación en sanidad y producción animal.

3.6 Intervenir en la problemática de la sanidad y producción animal en el país, emitiendo propuestas de programas y acciones dirigidas a su solución.

3.7 Participar en la elaboración de anteproyectos de normas oficiales mexicanas específicas.

3.8 Opinar sobre importaciones de animales en pie, sus productos o subproductos, desde el punto de vista de riesgo zoosanitario.

3.9 Opinar sobre la conveniencia o inconveniencia sanitaria de registrar biológicos y/o productos químico farmacéuticos desde el punto de vista riesgo zoosanitario, en lo que no se oponga al Decreto que establece las bases de coordinación que las secretarías de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Salud, deberán observar en relación con plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas. CICOPLAFEST.

3.10 Emitir opinión conforme a los estatutos del presente Reglamento en materia de sanidad y producción animal, a solicitud de parte y de la SAGARPA.

4. Integración

4.1 El CONASA se integra por personas de reconocido prestigio en el campo de la sanidad animal como son: Médicos Veterinarios Zootecnistas y otros profesionales, representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Secretaría de Salud, entre otras; de las facultades y escuelas de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias de la SAGARPA, de otros Institutos de Investigación; de la Confederación Nacional Ganadera (CNG) y de otras asociaciones de productores pecuarios; de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, A.C., de la Academia Veterinaria Mexicana y de otras agrupaciones de profesionales; de la Asociación Nacional de Empacadoras Tipo Inspección Federal (ANETIF) y de otras asociaciones de industrias afines; de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica Sección Veterinaria, así como de otras personas que en su ámbito cuenten con experiencia y representatividad en el sector.

4.2 La participación de los miembros del CONASA será a título honorífico.

4.3 Para el desempeño de las funciones que le corresponden, el CONASA estará constituido por los siguientes órganos:

- Junta Directiva
- Comités y Subcomités
- Grupos de Trabajo

- Coordinación General

5. De la sede del CONASA

5.1 La sede del CONASA estará ubicada en la Unidad de Posgrado e Investigación de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, sita en Ciudad Universitaria, Coyoacán, 04510, México, D.F., en la medida en que esta institución proporcione los espacios adecuados para el desarrollo de sus actividades.

6. De la Junta Directiva del CONASA

6.1. La Junta Directiva en sesión de consejo, será el órgano supremo de gobierno del CONASA, solamente supeditada a la Comisión de Etica en lo que respecta a lo mencionado en el artículo 25.0 de este Reglamento y estará integrada por un Presidente, un Vicepresidente y un número variable de Vocales, y un Secretario Ejecutivo.

6.2 El Presidente del Consejo será electo por los integrantes de la Junta Directiva y durará en su encargo dos años, pudiendo ser reelegido por una sola vez, si así lo considera conveniente la Junta Directiva y si el Presidente en funciones está de acuerdo en continuar en su encargo.

6.3 El Vicepresidente será electo por los integrantes de la Junta Directiva, en la siguiente Reunión Ordinaria, a la toma de posesión del Presidente del Consejo. Dicha elección deberá ser de entre los integrantes de la Junta Directiva y dejará el encargo cuando deje la representación por la que es miembro de la Junta Directiva, momento en el cual se deberá elegir nuevamente al Vicepresidente.

6.4 Se invitará a ocupar las vocalías a los mencionados a continuación, además de otros que la Junta Directiva acuerde:

Al Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, al Director General de Salud Animal, al Coordinador General de Ganadería, al Director General de Inspección Fitozoosanitaria en Puertos, Aeropuertos y Fronteras, al Presidente de la Academia Veterinaria Mexicana, al Presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Especialistas de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, A.C.; al Director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, al Presidente de la Confederación Nacional Ganadera, al Presidente de la Unión Nacional de Avicultores, al Presidente del Consejo Mexicano de Porcicultores, al Presidente de la Asociación Nacional de Engordadores de Ganado, al Presidente de la Asociación de Productores de Leche, al Presidente de la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cerdos; al Presidente de la Asociación Nacional de Especialistas en Ciencias Avícolas; al Presidente de la Asociación Nacional de Empacadoras Tipo Inspección Federal; al Presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos; al Presidente de la Sección Industria Farmacéutica Veterinaria de la Cámara Nacional de la Industria Químico-Farmacéutica; y al Director General de Investigación Pecuaria del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de la SAGARPA.

6.5 El Vicepresidente y los Vocales durarán en su cargo como miembros de la Junta Directiva, el tiempo durante el cual estén al frente de las organizaciones o dependencias que representen, en la inteligencia de que cuando dejen dichas representaciones, entregarán la documentación del CONASA a sus sucesores.

6.6 El Secretario Ejecutivo invariablemente será el Director General de Salud Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

7. De las funciones de la Junta Directiva

7.1 Llevar a cabo el proceso de elección del Presidente del Consejo cada dos años.

7.2 Autorizar la constitución de Comités o de Grupos de Trabajo en los que considere apoyarse, así como su disolución.

7.3 Analizar y, en su caso, aprobar por unanimidad y/o por votación mayoritaria, las recomendaciones sugeridas por los Comités o los Grupos de Trabajo, y someter a consideración de la autoridad competente, las propuestas que estime convenientes, incluyendo las generadas en las Reuniones Anuales.

7.4 Procurar la obtención de recursos para la operación del CONASA y su mecanismo de administración.

7.5 Vigilar el buen funcionamiento de la Operación del CONASA.

7.6 Aceptar nuevos integrantes en los Comités, ya sea que hayan sido propuestos por los Coordinadores, o por iniciativa propia de la Junta Directiva.

7.7 Designar a Coordinadores de los Comités, en noviembre o diciembre, si es que no se ha llevado a cabo el procedimiento descrito en los artículos 14.6.2. y 18.14.

7.8 Presentar a la Comisión de Etica cualquier asunto que requiera su revisión.

7.9 Enviar cada año, a las personas propuestas por los Secretarios de los Comités como miembros activos, una carta en la que se les agradezca su participación como tales y donde se les haga una atenta invitación para continuar en los Comités por un año más.

7.10 Enviar a los que han sido designados como eventuales una carta en la que se les notifique de esta nueva designación.

7.11 Notificar a los Comités de las designaciones de Secretarios hechas por el Secretario Ejecutivo.

7.12 Conocer, analizar y someter a votación para su determinación, cualquier asunto que sea de su incumbencia.

7.13 Firmar las minutas de las reuniones mensuales.

8. Del mecanismo para la elección del Presidente del Consejo

8.1 Con dos meses de anticipación a la celebración de la Reunión Anual en que corresponda el cambio del Presidente, la Junta Directiva exhortará a cada Comité, a presentar en un plazo de 30 días naturales, su propuesta para ocupar la Presidencia, solicitándoles se apeguen a los lineamientos para ese objetivo, descritos en el presente Reglamento, en el artículo 8.4.

8.2 Un mes antes de la celebración de la Reunión Anual en que corresponda el cambio de Presidente, la Junta Directiva se reunirá para analizar las propuestas de los Comités, así como para que cada uno de los integrantes presente la propuesta de la organización o dependencia que representa, por escrito.

8.3 Para esta reunión se nombrará a un secretario y a un escrutador que preferentemente no sean parte de la Junta Directiva.

8.4 Los candidatos deberán ser personas que hayan estado vinculadas con el CONASA, por lo menos en los dos últimos años. Podrá ser cualquier persona honorable y distinguida, que esté relacionada con el sector pecuario, pueden ser incluidos el Presidente, si es que no ha sido reelecto, y los demás integrantes de la Junta Directiva del CONASA, a excepción de las personas que tengan la representación de alguna dependencia federal.

8.5 El secretario de la reunión recibirá las propuestas por escrito y plasmará todos los nombres de los propuestos en un pizarrón, entregará las propuestas al escrutador quien irá leyendo en voz alta los nombres mientras que el secretario va anotando en el pizarrón una señal en cada nombre conforme es mencionado, de tal manera que cuantas veces es mencionado un nombre, será el número de votos que acumule.

Si alguno de los candidatos obtiene más de 50% de la votación, se continúa el proceso, de lo contrario, lo dos candidatos con mayor número de votos, se someterán a una segunda vuelta de votación.

En caso de empate se hará un segunda votación.

8.6 La persona que acumule más votos, será el electo para fungir como Presidente del Consejo por un periodo de 2 años.

8.7 En caso de empate en el primer lugar, se dará lugar al análisis de los candidatos empatados, considerando sus ventajas y desventajas y se someterá a nueva votación de la Junta Directiva, si el resultado fuera el mismo se aplicará el artículo 9.3 de este Reglamento, salvo en el caso en que el mismo Presidente sea candidato, en cuyo caso el voto de desempate lo dará el Vicepresidente.

En los casos no previstos, la Junta Directiva decidirá por mayoría de votos, como proceder.

9. De las funciones de Presidente de la Junta Directiva

9.1 Convocar a las sesiones de la Junta Directiva, con la frecuencia que sea necesaria. Las sesiones se celebrarán en el lugar, fecha y hora que señale en la convocatoria respectiva.

9.2 Presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva, las reuniones de Coordinadores y Secretarios de los Comités Técnicos y la Reunión Anual del CONASA.

9.3 Tener voto de calidad, en caso de empate, en la toma de decisiones de la Junta Directiva.

9.4 Firmar todos los documentos que se requieran en el ejercicio de sus atribuciones.

9.5 Coordinar, con el resto de los miembros de la Junta Directiva, las actividades de la misma, así como de los Comités y de los Grupos de Trabajo.

9.6 Representar al CONASA en los lugares o actos que se requieran.

9.7 Rendir un informe de actividades en la Reunión Anual.

9.8 Las demás que sean requeridas para el cumplimiento de las funciones del CONASA.

10. De las funciones del Vicepresidente de la Junta Directiva

10.1 Representar al Presidente y asumir sus obligaciones en caso de ausencia.

10.2 Firmar los documentos que se requieran en el ejercicio de sus atribuciones.

10.3 Las demás que la Junta Directiva le señale.

11. De las Funciones del Secretario Ejecutivo de la Junta Directiva

11.1 Tomar en consideración las recomendaciones que le sean presentadas por los Comités y por los Grupos de Trabajo y someterlas al pleno de la Junta Directiva, para su examen y resolución, en su caso.

11.2 En su calidad de Director General de Salud Animal, llevar al ámbito de la autoridad federal el análisis de las recomendaciones generadas por los Comités, tanto en las Reuniones Anuales como a lo largo del programa de trabajo, y hacer el mejor esfuerzo porque sean ejecutadas, con el compromiso de que cuando estas recomendaciones no puedan ser acatadas se darán a conocer a la Junta Directiva, las razones de la imposibilidad.

11.3 Dar curso y seguimiento a las determinaciones de la Junta Directiva e informar los avances a las instancias correspondientes.

11.4 Someter a consideración del Presidente, el orden del día para las sesiones de la Junta Directiva y levantar las minutas correspondientes a cada reunión, así como preparar la documentación soporte de las reuniones.

11.5 Llevar el registro de las actividades de la Junta Directiva, de los Comités y de los Grupos de Trabajo.

11.6 Dar cuenta y someter a consideración de la Junta Directiva, de la correspondencia, de los documentos de cartera y de las diversas iniciativas que merezcan su atención.

11.7 Mantener estrecha coordinación y comunicación con los miembros de la Junta Directiva, con los Coordinadores y Secretarios de los Comités y con los representantes de los Grupos de Trabajo.

11.8 Designar a los Secretarios de los Comités cada vez que sea necesario o considere conveniente y notificarlo a la Junta Directiva.

11.9 Las demás que la Junta Directiva le señale.

12. De las funciones de los Vocales

12.1 Opinar sobre los asuntos que sean llevados al seno de la Junta Directiva, incluyendo las recomendaciones de los Comités, de los Grupos de Trabajo y proponer las acciones necesarias para su cumplimiento o seguimiento.

12.2 Desempeñar las comisiones que les asigne la mayoría de los integrantes de la Junta Directiva.

13. De las reuniones de la Junta Directiva

13.1 Ordinarias.

13.1.1 La Junta Directiva se reunirá y tendrá sus sesiones, en el lugar, día y hora, conforme al calendario que acuerden sus miembros.

13.1.2 El Presidente de la Junta Directiva expedirá la convocatoria correspondiente a las reuniones con 5 días de anticipación. La convocatoria contendrá la fecha, el lugar, la hora de la reunión y el orden del día tentativo y la enviará a cada uno de los integrantes de la Junta Directiva, con los documentos soporte disponibles para la reunión, así como con la minuta de la reunión anterior.

13.1.3 Las ausencias de algún Titular de la Junta Directiva, serán cubiertas por un Suplente fijo, nombrado por el titular y autorizado por la Junta Directiva.

13.1.4 La Junta Directiva del CONASA funcionará legalmente con la mitad más uno de sus integrantes, excepto en los casos previstos por el artículo siguiente.

13.1.5 Si por falta de quórum no tuviera verificativo la reunión, a los 15 minutos de la hora señalada se convocará a una segunda sesión, que se celebrará en ese momento con el número de miembros que concurra, siendo válidas sus decisiones.

13.1.6 Los miembros de la Junta Directiva presidirán la Reunión Anual del Consejo, la que podrá celebrarse en los meses de septiembre, octubre o noviembre, de acuerdo a la disponibilidad de espacio y al calendario de eventos nacionales relacionados con el sector, en el lugar expresamente aprobado por la Junta Directiva, debiendo presentarse en ese evento un informe de labores al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a todos los asistentes. Asimismo, presidirán las reuniones de Coordinadores y Secretarios de los Comités que se celebren con base en la convocatoria que se haga al respecto.

13.2 Extraordinarias.

13.2.1 Se efectuarán cuando se considere necesario, a solicitud del Presidente, o de dos o más de los miembros de la Junta Directiva, o del Coordinador de alguno de los Comités, previa aprobación de los integrantes de éstos, presentada por escrito, firmada por la mayoría de ellos.

13.2.2 La Junta Directiva del CONASA funcionará legalmente con la mitad más uno de sus integrantes, excepto en los casos previstos por el artículo siguiente.

13.2.3 Si por falta de quórum no tuviera verificativo la reunión, a los 15 minutos de la hora señalada se convocará a una segunda sesión que se celebrará en ese momento, con el número de miembros que concurra, siendo válidas sus decisiones.

14. De los Comités

14.1. Los Comités son los órganos de carácter técnico-consultivo del CONASA, mismos que pueden variar en número de acuerdo a las necesidades que considere la Junta Directiva. Para el caso de los Comités orientados a la atención de una especie o grupo de especies, tratarán asuntos relacionados con enfermedades, movilización, importaciones, exportaciones y producción. Los Comités que traten otros aspectos de la sanidad animal, orientarán su atención a los temas relacionados con la especialidad del Comité, existiendo en todos los casos la posibilidad de interactuar cuando la situación lo demande.

De manera enunciativa, pero no limitativa, están integrados los siguientes Comités:

Comité 1.- Salud y producción Bovina

Comité 2.- Salud y producción Porcina

Comité 3.- Salud y producción Avícola

Comité 4.- Salud y producción Ovina y Caprina

Comité 5.- Salud y producción Equina

Comité 6.- Salud y producción de la Fauna Silvestre y Animales de Zoológico

Comité 7.- Salud y producción Apícola

Comité 8.- Salud y producción de Especies Menores

Comité 9.- Zoonosis

Comité 10.- Aprobación de Médicos Veterinarios Zootecnistas

Comité 11.- Productos Químico-Farmacéuticos y Plaguicidas

Comité 12.- Productos Biológicos y Derivados de la Biotecnología

Comité 13.- Inocuidad de los Alimentos

Comité 14.- Vigilancia Epidemiológica

Comité 15.- Laboratorios de Diagnóstico en Sanidad Animal

Comité 16.- Semen y Embriones

Comité 17.- Bienestar Animal

14.2 La duración de los Comités será indefinida, podrán constituirse por un mínimo de cinco miembros que deberán ser aprobados por mayoría de votos de los integrantes de la Junta Directiva.

14.2.1 El personal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), no podrá exceder de 30% de los integrantes activos de los Comités.

14.2.2 Los Comités podrán tener comunicación y asesoría entre sí, cada vez que lo consideren necesario, para lo cual deberá solicitarse al Coordinador General su intervención, ya sea que se realice alguna reunión o se hagan las consultas necesarias por escrito.

14.2.3 Habrá dos tipos de integrantes: activos y eventuales.

14.2.4 Los integrantes activos son aquellos que asistan por lo menos al 51% de las reuniones que realice su Comité al año y su voto será contabilizado en todas las decisiones del Comité.

14.2.5 Los eventuales son aquellos que no pueden asistir a todas las reuniones de los Comités, por la naturaleza de sus actividades, por residir fuera de la Ciudad de México o por otras razones, pero que tienen la experiencia y conocimientos sobre el tema y la voluntad de participar en consultas específicas, a través de correo electrónico, vía fax o personalmente.

14.2.6 Su voto será considerado solamente en las ocasiones en que se le haya consultado y en la elección de Coordinador del Comité, ya sea que su voto lo emita personalmente o por fax.

14.3 Cada Comité elegirá por mayoría de votos de entre sus miembros, a un Coordinador, existiendo impedimento únicamente para aquellos que son funcionarios o empleados del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). Los resultados de la votación serán presentados a la Junta Directiva por escrito a lo que la Junta Directiva, en su caso, dará el visto bueno.

14.4 En los casos en que los integrantes de los Comités no lleguen a consenso, la Junta Directiva designará al Coordinador.

14.5 El Secretario Ejecutivo designará los Secretarios de los Comités, cargo que recaerá en un funcionario público, y los reemplazará cuando lo considere conveniente, presentando sus determinaciones a la Junta Directiva, la que lo notificará por escrito a los Comités.

14.6 Se perderá la calidad de integrante activo de un Comité, por la inasistencia a más del cincuenta por ciento de las reuniones en el año, en cuyo caso, si la Junta Directiva lo considera conveniente, pasará a ser integrante eventual; por separación voluntaria presentada por escrito a la Junta Directiva; o por decisión de la Comisión de Etica, cuando considere que su participación ha dejado de ser benéfica para el Consejo o por alguna conducta indeseable.

14.6.1 Se perderá la calidad de integrante eventual del Comité, por separación voluntaria presentada por escrito a la Junta Directiva, o por decisión de la Comisión de Etica.

14.6.2 Los Coordinadores de los Comités dejarán de serlo al término de las Reuniones Anuales o, en su defecto, podrán permanecer en el cargo solamente por un año más, siempre y cuando acepten y cuenten con el apoyo mayoritario de los miembros activos y eventuales del Comité a su cargo, manifestado por escrito y con firmas de los integrantes, a la Junta Directiva, misma que ratificará esos nombramientos.

15. De las funciones de los Comités

15.1 Los Comités tendrán las siguientes funciones en las áreas de su competencia técnica:

15.1.1 Analizar la legislación de sanidad animal vigente y presentar las sugerencias de reforma y adiciones a la Junta Directiva.

15.1.2 Opinar, sugerir y denunciar, en su caso, irregularidades en la aplicación de la Ley Federal de Sanidad Animal, así como de las normas oficiales mexicanas, ante las autoridades correspondientes de la SAGARPA, en relación con el área de su competencia, a través de la Junta Directiva.

15.1.3 Discutir y formular sugerencias sobre las programas zoosanitarios y de producción animal que lleva a cabo la SAGARPA, y proponer recomendaciones a la Junta Directiva sobre programas susceptibles de aplicarse en el territorio nacional.

15.1.4 Hacer un diagnóstico de los problemas zoosanitarios y de producción que se presenten en el país, analizarlos y sugerir medidas de control y erradicación.

15.1.5 Opinar sobre programas y proyectos de investigación científica, tecnológica y de formación de recursos humanos en el campo de la sanidad y producción animal, así como en la importación de animales y productos pecuarios o adopción de tecnología.

15.1.6 Proponer las acciones necesarias para prevenir la introducción de enfermedades de plagas exóticas al territorio nacional, teniendo como base la información zoosanitaria internacional.

15.1.7 Proponer los mecanismos para la obtención de recursos financieros, utilizables en la instrumentación de los programas prioritarios en materia de sanidad animal.

15.1.8 Proponer acciones de educación y difusión en materia de sanidad y producción animal que propicien la incorporación de éstas como elemento cultural de la población.

15.1.9 Proponer acciones que promuevan la participación de la comunidad y de los productores en relación a las campañas zoosanitarias.

15.1.10 Proponer métodos de seguimiento y evaluación de los avances de los programas de sanidad y producción animal, para su optimización, mejoramiento y control.

15.1.11 Proponer estrategias de comunicación intersectorial que aseguren el impacto de los programas de sanidad y producción animal.

15.1.12 Proponer los mecanismos de coordinación entre autoridades federales, estatales, municipales y de concertación con productores, con el fin de que se adopten las medidas necesarias en apoyo a los programas de sanidad y producción animal.

15.1.13 Participar en la elaboración de proyectos de normas oficiales mexicanas de sanidad animal.

15.1.14 Proponer la creación de Subcomités que sean requeridos, mismos que serán puestos a consideración de la Junta Directiva, para su aprobación.

15.1.14.1 Los Subcomités tendrán un representante que será designado por el Coordinador del Comité y puesto a consideración de la Junta Directiva.

15.1.14.2 Los Subcomités se reunirán a solicitud del Coordinador del Comité, para tratar algún tema de su especialidad y rendirán un informe de los acuerdos tomados al Secretario del Comité, quien lo informará a la Junta Directiva.

15.1.15 Los Comités no podrán manejarse en forma autónoma, toda comunicación que deseen externar hacia fuera del CONASA deberá ser consultada con la Junta Directiva, la que la emitirá si lo considera conveniente.

15.1.16 Las demás que sean necesarias para que cada Comité cumpla sus funciones.

16. Del Programa de Trabajo de los Comités

16.1 Los Comités establecerán sus programas de trabajo, de acuerdo a las necesidades de la problemática sanitaria existente, a lo sugerido por la Junta Directiva, o por la SAGARPA.

16.1.2 La obligación de llevar a cabo estos programas, será de los miembros de los Comités, así como de informar a la Junta Directiva sobre los avances y logros de los mismos.

16.2 Presentar sus propuestas de temas a desarrollar en cada Reunión Anual y determinarlos en acuerdo con las autoridades de la SAGARPA, a través de la Junta Directiva.

17. De las funciones de los Coordinadores de los Comités

17.1 Presentar el Programa Anual de Actividades y el calendario de reuniones del Comité que coordina, a la Junta Directiva.

17.2 Coordinar y Presidir las sesiones del Comité respectivo.

17.3 Aprobar con anticipación la propuesta de orden del día que le presente el Secretario del Comité.

17.4 Presentar a los integrantes activos de los Comités, los temas a discutirse a las solicitudes de opinión de la SAGARPA. En el caso de que se trate de un tema en el que algún integrante eventual sea experto o posea destacada experiencia, el Coordinador se encargará de que esa persona sea consultada especialmente, vía fax o correo electrónico y en ese caso su voto será considerado para alguna decisión.

17.5 Someter a consenso las propuestas de resoluciones que se tomen en las sesiones del Comité, tener voto de calidad en caso de empate y turnar las recomendaciones emitidas, mediante propuesta formal presentada por escrito a la Junta Directiva del CONASA, con fundamento técnico y apoyo bibliográfico, en su caso.

17.6 Elaborar junto con el Secretario del Comité, las comunicaciones que se generen con base en los acuerdos que tome el Comité.

17.7 Firmar y enviar a la Junta Directiva, documentos que expida el Comité en ejercicio de sus atribuciones.

17.8 Representar al Comité ante la Junta Directiva y en los lugares o actos que se requiera.

17.9 Presentar, a solicitud de la Junta Directiva, los trabajos que se consideren convenientes para la elaboración del Informe Anual de ese organismo.

17.10 Realizar las funciones del Secretario, cuando éste no pueda asistir a las reuniones ordinarias y/o extraordinarias del Comité, o bien nombrar de entre los integrantes, alguien que desarrolle esas funciones.

17.11 Las demás que la Junta Directiva señale.

18. De las funciones de los Secretarios de los Comités

18.1 Llevar el registro y directorio de los miembros del Comité.

18.2 Llevar el registro de las actividades del Comité, así como de las reuniones que se realicen y su archivo.

18.3 Convocar por escrito, a reunión ordinaria a los miembros del Comité, por lo menos con 5 días hábiles de anticipación y en el caso de las extraordinarias, con 3 días hábiles de antelación, en ambos casos se deberá anexar el orden del día correspondiente.

18.4 Elaborar el orden del día y proponerlo al Coordinador.

18.5 Llenar el formato de informe de las sesiones del Comité, y mantener los expedientes de las reuniones completos con su seguimiento. Los formatos se entregarán a la Junta Directiva a mas tardar 5 días hábiles posteriores a la reunión.

18.6 Firmar los formatos de informe de las sesiones conjuntamente con el Coordinador.

18.7 Enviar los formatos de informe y comunicaciones a los miembros del Comité, para su conocimiento.

18.8 Recibir y contestar oficios y comunicados a la Junta Directiva de común acuerdo con el Coordinador.

18.9 Dar seguimiento a todo lo acordado en las diferentes reuniones, hasta su aplicación o resolución.

18.10 Mantener estrecha coordinación y comunicación con los miembros del Comité.

18.11 Orientar a los integrantes de los Comités en cuanto a las funciones y estructura de la SAGARPA,
a fin de enriquecer los planteamientos y recomendaciones que generen.

18.12 En diciembre de cada año, el Secretario hará un conteo de asistencia de cada uno de los integrantes activos a las reuniones de los Comités, y en enero siguiente hará una propuesta a la Junta Directiva, concertada con el Coordinador del Comité, de los candidatos a continuar como tales y de los que podrán ser considerados como integrantes eventuales.

18.13 Encargarse de la sucesión del Coordinador al término de la Reunión Anual, ya sea que el Coordinador en funciones desee continuar en el cargo, en cuyo caso el Secretario se encargará de consultar a los integrantes tanto activos como eventuales al respecto (siempre y cuando sea la primera vez que se reelija) o de someter a consideración de los integrantes la elección de un nuevo Coordinador.

18.14 Notificar, por escrito, a la Junta Directiva, a más tardar un mes después de haber concluido la Reunión Anual, la elección de Coordinador que haya hecho el Comité.

18.15 Vigilar que se realicen las consultas a los integrantes eventuales, cuando haya algún tema que tratar en el que ellos sean expertos o posean destacada experiencia y que su voto u opinión sea considerada.

18.16 Entregar el archivo del Comité cuando sea reemplazado en su función como Secretario, a quien haya sido designado para tal fin.

18.17 Desarrollar las funciones de Secretario en la(s) Mesa(s) de Trabajo que le correspondan en las Reuniones Anuales.

18.18 Las demás que la Junta Directiva señale.

19. De las funciones de los demás miembros de los Comités

19.1 Activos.

19.1.1 Asistir puntualmente a las reuniones que celebre el Comité correspondiente.

19.1.2 Sustituir en su ausencia, al Coordinador para presidir las reuniones, ya sea por mayoría de votos o por delegación del mismo.

19.1.3 Proporcionar asesoría técnica, en los aspectos de la sanidad y producción animal que se le solicite.

19.1.4 Desempeñar las demás funciones que les asignen la Junta Directiva del CONASA y el Coordinador del Comité respectivo.

19.2 Eventuales.

19.2.1 Proporcionar asesoría técnica en los aspectos de salud y producción animal que se le solicite, ya sea vía telefónica, fax, correo electrónico o personalmente.

19.2.2 Participar en la elección del Coordinador del Comité cuando suceda el cambio del mismo, emitiendo su voto, vía fax, correo electrónico o personalmente.

19.3 En lo referente a la asesoría técnica, en los temas de sanidad y producción animal que se les solicite, tanto los integrantes activos como eventuales, deberán de presentar por escrito, la justificación técnico-científica, bibliografía, referencias, documentación de soporte o, en su caso, el sustento técnico que sea equivalente, de sus afirmaciones u opiniones, en la inteligencia de que si no lo hicieran éstas no serán tomadas en consideración.

19.4 Tanto los integrantes activos como eventuales podrán someter a consideración de la Comisión de Etica, los asuntos que consideren necesarios, relacionados con las atribuciones y funciones de la misma, a través de la Junta Directiva o de la Coordinación General.

20. De las reuniones de los Comités

20.1 Las reuniones serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias podrán ser cada mes y el mismo Comité acordará su calendario de reuniones, día, hora y lugar, lo cual hará del conocimiento de la Junta Directiva. Las extraordinarias se efectuarán cuando las circunstancias así lo requieran, o a propuesta de una tercera parte de sus miembros, quienes lo solicitarán al Coordinador, así como a solicitud de la Junta Directiva.

20.2 Para que las reuniones ordinarias y extraordinarias se consideren legalmente instaladas y sus resoluciones sean válidas, se requerirá de cuando menos la mitad más uno de su miembros activos, debiendo encontrarse entre ellos el coordinador y/o el secretario; de no integrarse el quórum correspondiente, se convocará a una segunda sesión en ese momento, a realizarse a los 15 minutos de la hora señalada y sus resoluciones serán válidas. Podrán asumir cualquiera de los miembros las funciones del Coordinador y del Secretario, en su ausencia.

20.3 Los acuerdos y propuestas se tomarán por mayoría de votos de los miembros; en caso de empate, el Coordinador o quien presida la reunión resolverá con voto de calidad. Los invitados a las sesiones no tendrán derecho a voto.

20.4 Por cada reunión efectuada se llenará el formato diseñado para tal fin, que deberá firmar el Coordinador y el Secretario, y ser enviado a la Junta Directiva, dentro de los cinco días posteriores a la reunión, conteniendo los siguientes datos:

- Fecha
- Nombre del Comité
- Acuerdo
- Responsable de ejecutarlo
- Comentarios
- Lista de asistentes

21. De la admisión de nuevos miembros a los Comités

21.1 Para la admisión de nuevos miembros a los Comités, los interesados presentarán una carta de intención, en la que manifiesten los motivos de su interés por incorporarse al Comité, conocer el Reglamento de Operación y Funcionamiento Interno del Consejo y comprometerse a su cumplimiento, dirigida al Presidente del Consejo, acompañada de su curriculum vitae, quien la pondrá a consideración de los integrantes de la Junta Directiva, quienes analizarán dichos documentos y decidirán sobre su admisión.

Una vez que se apruebe la admisión de alguien, el Presidente enviará una carta al Coordinador del Comité correspondiente, donde notifique de la aceptación del candidato en el Comité, acompañada del Curriculum vitae, para conocimiento de los integrantes del Comité.

22. De la duración de los Comités

22.1 Estos tendrán la duración que determine la Junta Directiva del CONASA.

23. De los Grupos de Trabajo

23.1 Se integrarán por acuerdo de la Junta Directiva del CONASA y con el número de miembros que se estime conveniente, para analizar y opinar sobre asuntos específicos prioritarios en materia de sanidad y producción animal.

23.2 Tendrán un representante que será designado por la Junta Directiva al momento de su creación.

23.3 Los Grupos de Trabajo, someterán a votación de sus integrantes las resoluciones que se tomen, y las turnarán, a través de su representante, a la Junta Directiva del CONASA, mediante propuesta formal, por escrito, con fundamento técnico y apoyo bibliográfico, en su caso.

23.5 Tendrán la duración que determine la Junta Directiva.

24. De los Consejos Técnicos Consultivos Estatales o Regionales de Sanidad Animal

24.1 Los Consejos Técnicos Consultivos Estatales o Regionales de Sanidad Animal, serán los organismos de apoyo de carácter técnico consultivo del CONASA, que analizarán los aspectos específicos de la sanidad y producción animal del área de su jurisdicción, actuando como foros de consulta y asesoría de dicho organismo, y se constituirán de la misma manera que el CONASA.

24.1.1 Se constituirán en los estados en que haya interés y capacidad para hacerlo.

24.2 Los Consejos Técnicos Consultivos Regionales de Sanidad Animal tendrán por jurisdicción, la que expresamente les asigne la Junta Directiva del CONASA.

24.3 Los Consejos Estatales o Regionales de Sanidad Animal, estarán integrados por los representantes de las instituciones u organismos equivalentes que existan en el área de su jurisdicción, relacionados con la sanidad y producción animal y su estructura será semejante a la del CONASA.

24.4 La duración de los Consejos Técnicos Consultivos Regionales, será determinada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, oyendo la opinión de la Junta Directiva del CONASA, de acuerdo a la necesidad de asesoría de los mismos.

24.5 Una vez constituidos elaborarán su reglamento respectivo, tomando como base este Reglamento.

24.6 Los Consejos Técnicos Consultivos Estatales o Regionales de Sanidad Animal, establecerán por consenso de sus integrantes, sus programas de trabajo, de conformidad con la situación y problemática relativa a la sanidad y producción animal, o a la sugerida por la Junta Directiva del CONASA, o por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

24.7 Los Consejos Técnicos Consultivos Estatales o Regionales de Sanidad Animal, deberán tener estrecha relación con la Junta Directiva del CONASA, e informarán a ésta de sus actividades en forma mensual.

24.8 El conducto de gestión de todas las recomendaciones emanadas de los Consejos Técnicos Consultivos Estatales o Regionales de Sanidad Animal ante las autoridades correspondientes, será a través de la Junta Directiva del CONASA, a efecto de unificar criterios.

25. De la Comisión de Etica

25.1 Será la instancia que se encargue de vigilar que la conducta de los integrantes de los Comités, de los Grupos de Trabajo y de la Junta Directiva no afecte negativamente el funcionamiento e imagen del CONASA y de que no se pierda de vista el objetivo para el cual fue creado, cuidando que las opiniones y recomendaciones generadas, sean en beneficio de la Ganadería Nacional.

Le corresponderá el análisis de los casos y asuntos sometidos a su consideración, principalmente por la Junta Directiva, y determinar lo que corresponda conforme a la conducta infractora.

25.2 El presidente del CONASA, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser sometido a consideración de la Comisión de Etica en los siguientes casos:

a) Abstenerse de ejercer las funciones conferidas en el presente Reglamento, sin mediar motivo o causa que lo justifique.

b) Que su actuar sea contrario al objetivo del CONASA.

En este supuesto, el Presidente del CONASA, por única vez, no formará parte de la Comisión de Etica, y los demás integrantes de la misma elegirán de entre sus miembros, a quien presidirá esa reunión
en especial.

En el caso de que proceda su exclusión, se presentarán al Secretario del Ramo, las consideraciones del caso debidamente fundadas y motivadas, sometiendo para su elección, la nueva terna de candidatos a Presidente.

25.3 Estará integrada por el Presidente del CONASA quien la presidirá, el Director General de Salud Animal del SENASICA y el titular de la Unidad Jurídica del SENASICA.

Además se invitará a integrar esta Comisión a los ex Presidentes del CONASA, y a los veterinarios que hayan recibido el Premio Nacional de Sanidad Animal.

Opcionalmente, se puede aceptar la sugerencia de que se incorporen a dicha Comisión, algunos de los maestros de escuelas y facultades de Medicina Veterinaria y Zootecnia del país, que hayan recibido de su respectiva Universidad, la más alta distinción académica o el reconocimiento de sobresaliente o excepcional, cuya integración a la Comisión de Etica será, en su caso, aprobada por la misma.

Las decisiones serán tomadas por mayoría de votos y serán inapelables.

25.4 La Comisión de Etica se reunirá a petición del Presidente de la Junta Directiva, o de la mitad más uno de los integrantes de la Junta Directiva, o por mitad más uno de los Coordinadores de los Comités.

26. De la Coordinación General

Los gastos derivados de la operación del Consejo, tales como: nómina del personal técnico y administrativo que se requiera, gastos de operación, adquisición de equipo, mantenimiento del que existe, organización de reuniones ordinarias y extraordinarias de los Comités, organización de las Reuniones Anuales, organización de cursos, apoyo a los Comités para que eventualmente sesionen fuera del Distrito Federal, etcétera; serán cubiertos, entre otros, mediante fideicomisos que para tal efecto se instrumenten.

26.1 De las funciones de la Coordinación General:

26.1.1 Ser el enlace entre la SAGARPA, la Junta Directiva y los Comités.

26.1.2 Ejecutar las actividades que sean acordadas por la Junta Directiva.

26.1.3 Hacer el seguimiento de los asuntos emanados de la SAGARPA, la Junta Directiva y los Comités.

26.1.4 Llevar el archivo y directorio de los Comités y de los asuntos de la Junta Directiva.

26.1.5 Brindar las facilidades para que se realicen las reuniones de trabajo de los Comités y coordinar las de los Coordinadores y Secretarios con la Junta Directiva.

2.6.1.6 Someter a consideración de la Junta Directiva, las propuestas o solicitudes de los Comités, así como de otras instancias.

26.1.7 Realizar las propuestas que la Junta Directiva o el Presidente de la misma le indique, a las autoridades zoosanitarias.

26.1.8 Organizar las propuestas que la Junta Directiva o el Presidente de la misma le indique, a las autoridades zoosanitarias.

26.1.9 Emitir los comunicados necesarios hacia los Coordinadores, Secretarios, Junta Directiva, autoridades de la SAGARPA y otras instancias, cuando se trate de asuntos administrativos, de trámite o notificaciones rutinarias.

26.1.10 Rendir los informes y remitir la información que les sea solicitada por las autoridades zoosanitarias.

26.1.11 Realizar las acciones administrativas necesarias para el buen funcionamiento de la oficina.

26.1.12 Coordinar la realización de las reuniones mensuales de la Junta Directiva y preparar las carpetas correspondientes.

26.1.13 Elaborar las minutas de las reuniones mensuales de la Junta Directiva y las de la Junta Directiva con los Coordinadores y Secretarios de los Comités.

26.1.14 Presentar las propuestas de los diseños de imagen corporativa de las reuniones anuales.

26.1.15 Promover las reuniones anuales en los diversos eventos nacionales relacionadas con el sector.

26.1.16 Proponer a la Junta Directiva las opciones de lemas para las reuniones anuales, de donde la Junta Directiva elegirá una cada año.

26.1.17 Coordinar la publicación de la Memoria de cada reunión anual, así como cualquier otra promovida por el CONASA.

26.1.18 Preparar la convocatoria, orden del día y minuta de las reuniones mensuales de la Junta Directiva, así como las de las reuniones de la Junta Directiva con Coordinadores y Secretarios y otras que se requiera realizar.

26.1.19 Preparar cada año, la notificación de haber sido designados como integrantes eventuales a los miembros que así lo establezca la Junta Directiva, o bien, el agradecimiento a los activos y la invitación a continuar participando por un periodo más.

26.1.20 Apoyar a los Comités en las tareas que éstos le soliciten relacionadas con sus funciones dentro del CONASA.

26.1.21 Preparar los documentos necesarios para el presupuesto anual y otros relacionados con este aspecto que sean solicitados por las autoridades zoosanitarias.

26.1.22 Preparar la documentación que firme el Presidente o el Secretario Ejecutivo.

26.1.23 Representar al CONASA en los actos que le instruya el Presidente o el Secretario Ejecutivo.

26.1.24 Firmar por ausencia, en nombre del Presidente o del Secretario Ejecutivo, para asuntos relacionados con el Consejo, cuando sea necesario.

26.1.25 Vigilar que la página de Internet del CONASA, permanezca actualizada con la información correspondiente.

26.1.26 Las demás que le asigne la Junta Directiva o las autoridades zoosanitarias.

27. De las declaraciones a nombre del CONASA

27.1 Las declaraciones de cualquier índole a nombre del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, sólo las podrán hacer el Presidente y/o el Vicepresidente del mismo.

Se suscribe el presente documento en tres ejemplares por todas las partes que intervienen a los once días del mes de diciembre de dos mil uno.- El Presidente, **Luis Alberto Zarco Quintero**.- Rúbrica.-
El Representante Vicepresidente, **Héctor Rodríguez Licea**.- Rúbrica.- El Secretario Ejecutivo, **José Angel del Valle Molina**.- Rúbrica.- El Representante FMVZ, UNAM, **Francisco Trigo Tavera**.- Rúbrica.- El Vocal INIFAP, **Carlos Agustín Vega y Murguía**.- Rúbrica.- El Representante CNG, **Juan Ramón González Sáenz Pardo**.- Rúbrica.- El Vocal SENASICA, **Javier Trujillo Arriaga**.- Rúbrica.- El Vocal AVM, **Francisco Suárez Güemes**.- Rúbrica.- El Vocal AMMVEB, **Jorge Avila García**.- Rúbrica.- El Representante Vocal ANECA, **Roberto Señas Cuesta**.- Rúbrica.- El Representante Vocal FedMVZ, **Eduardo Posadas Manzano**.- Rúbrica.- El Representante Vocal INFARVET, **Mario Pérez Leyton**.- Rúbrica.- El Vocal AMVEC, **Joaquín Becerril Angeles**.- Rúbrica.- El Representante Vocal CMP, **Enrique Domínguez Lucero**.- Rúbrica.-
El Representante Vocal UNA, **Carlos Sánchez Widmann**.- Rúbrica.

CIRCULAR número 081 sobre la vigencia de los acuerdos relativos a las medidas de emergencia establecidas para prevenir la introducción de fiebre aftosa a los Estados Unidos Mexicanos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

CIRCULAR NUMERO 081

SOBRE LA VIGENCIA DE LOS ACUERDOS RELATIVOS A LAS MEDIDAS DE EMERGENCIA ESTABLECIDAS PARA PREVENIR LA INTRODUCCION DE FIEBRE AFTOSA A LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Al Coordinador General de Ganadería, Director en Jefe y Directores Generales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Delegados Estatales, Jefes de Unidades Jurídicas y Jefes de Distrito de Desarrollo Rural.

Dada la importancia que representa para la sanidad nacional, así como para el ejercicio de las atribuciones que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tiene conferidas en cuanto a la observancia estricta de las disposiciones jurídicas cuya aplicación le corresponde en dicho ámbito, esta Coordinación General Jurídica, después del análisis sistemático-jurídico de los Acuerdos relativos a las medidas de emergencia para prevenir la introducción de la fiebre aftosa a los Estados Unidos Mexicanos por los brotes ocurridos en diversos países del mundo, y con fundamento en los artículos 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 15 fracción III del Reglamento Interior de esta dependencia, se expide la presente Circular, con la finalidad de aclarar los alcances, vigencia y aspectos relevantes de los ordenamientos jurídicos que regulan las medidas establecidas para prevenir la entrada al país de la fiebre aftosa.

I.- ANTECEDENTES

A) Con fecha del 5 de abril de 2001 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación**, el Acuerdo por el que se establecieron las medidas de emergencia para prevenir la introducción de la fiebre aftosa a los Estados Unidos Mexicanos, por los brotes ocurridos en diversos lugares del mundo, debido a que en países o grupos de éstos, como el Reino Unido, Francia, Países Bajos, República de Irlanda y Argentina, surgieron brotes de fiebre aftosa durante el periodo comprendido entre el 21 de febrero y 22 de marzo del año 2001.

En dicho instrumento se reconocieron como países o grupos de países libres de fiebre aftosa a los siguientes: Australia, Canadá, Centroamérica, El Caribe, Chile, Estados Unidos de América, Japón, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda y Singapur.

Además en el acuerdo de referencia se reconocieron como países libres pero de riesgo por Fiebre Aftosa a: Alemania, Austria, Bélgica, Belice, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Finlandia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia, Suiza, Ucrania, Uruguay y Vanuatu.

Asimismo, en el Acuerdo en mención, se establecieron medidas zoosanitarias de emergencia para minimizar el riesgo de ingreso de fiebre aftosa al territorio nacional, prohibiendo la introducción de animales vivos susceptibles de dicha enfermedad, originarios o procedentes de los países afectados y que no estén enlistados en el grupo de países reconocidos por México como libres o considerados de riesgo por Fiebre Aftosa, así como una serie de medidas de seguridad, prohibiciones, obligaciones y requisitos necesarios para introducir al territorio nacional tanto animales como productos derivados de éstos. Se estableció reforzar la inspección física por parte de la Secretaría, con el objeto de buscar activamente productos y subproductos que por su naturaleza puedan ser considerados de riesgo por fiebre aftosa.

B) El día 2 de enero de 2001 se publicó en el **Diario Oficial de la Federación**, el Acuerdo de cancelación del Acuerdo por el que se establecen medidas de emergencia para prevenir la introducción de la fiebre aftosa a los Estados Unidos Mexicanos, dejando sin efecto la aplicación de las medidas de emergencia implementadas, únicamente respecto de los países que nuestro país reconoce como libres de la enfermedad, por lo que quedaron también sin efectos, respecto de esos países, las adecuaciones efectuadas a las hojas de requisitos zoosanitarios derivadas de las modificaciones de la situación de la fiebre aftosa en las diferentes regiones o países del mundo.

Asimismo, en dicho Acuerdo se estableció que el Acuerdo inicial, es decir el citado en el inciso A) de la presente Circular, continuará aplicándose en los países donde la fiebre aftosa es endémica o que no han sido reconocidos por nuestro país como libres de la enfermedad, hasta en tanto se realice la revisión de la situación que guardan dichos países.

II.- ACLARACION SOBRE LA VIGENCIA DE LOS ACUERDOS

Jurídicamente es posible que un Instrumento Normativo deje sin efectos total o parcialmente a otro anterior, como es el caso que nos ocupa; sin embargo y pese a que el Acuerdo de fecha 2 de enero de 2002, lleva como nombre el de “Acuerdo de cancelación del diverso por el que se establecen medidas de emergencia para prevenir la introducción de fiebre aftosa a los Estados Unidos Mexicanos” (es decir del Acuerdo inicial de fecha 5 de abril de 2001), esto no significa que dicho Acuerdo quede sin efecto en su totalidad, es decir, que quedase abrogado absolutamente.

Lo anterior atiende al contenido del artículo Segundo Transitorio del Acuerdo del 2 de enero de 2002, en el que a la letra se establece lo siguiente:

> “Las disposiciones contenidas en el ‘Acuerdo por el que se establecen las medidas de emergencia para prevenir la introducción de la fiebre aftosa a los Estados Unidos Mexicanos por los brotes recientemente ocurridos en diversos países del mundo’, continuarán aplicándose en los países en donde la fiebre aftosa es endémica o que no han sido reconocidos por nuestro país como libres de la enfermedad, hasta en tanto se realiza la revisión de la situación que guardan dichos países.”

De lo anterior desprendemos que la cancelación a la que dicho Acuerdo se refiere, relacionada a las medidas zoosanitarias de emergencia para minimizar el riesgo de ingreso de fiebre aftosa al territorio nacional y de las medidas de bioseguridad, prohibiciones, obligaciones y requisitos necesarios para introducir tanto animales como productos derivados de éstos al país, está única y exclusivamente dirigida a dejarlas sin efectos, respecto de los países reconocidos como libres de la enfermedad, es decir solamente los siguientes: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Belice, Bulgaria, Canadá, Centroamérica, El Caribe, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Ex República Yugoslava de Macedonia, Finlandia, Hungría, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Rumania, Singapur, Suecia, Suiza, Ucrania, Uruguay y Vanuatu.

De lo anterior se colige de manera clara y precisa, que la regulación contenida en el "Acuerdo por el que se establecieron las medidas de emergencia para prevenir la introducción de la fiebre aftosa a los Estados Unidos Mexicanos", continúa en plena vigencia para todos aquellos países en donde la fiebre aftosa es endémica y para aquellos que no han sido reconocidos por México como libres de la enfermedad, debido a que el "Acuerdo de cancelación del diverso por el que se establecen medidas de emergencia para prevenir la introducción de fiebre aftosa a los Estados Unidos Mexicanos", fue creado con el único fin de eliminar las medidas preventivas de Fiebre Aftosa para aquellos países reconocidos como libres de la enfermedad, es decir todos los enunciados en el párrafo anterior.

Finalmente, y con el objeto de aclarar el alcance jurídico del artículo segundo del "Acuerdo de cancelación del diverso por el que se establecieron medidas de emergencia para prevenir la introducción de fiebre aftosa a los Estados Unidos Mexicanos", cabe señalar que dicha disposición deja sin efecto las adecuaciones efectuadas a las hojas de requisitos zoosanitarios establecidos por la Dirección General de Salud Animal de la Secretaría, derivadas de las modificaciones de la situación de la fiebre aftosa en las diferentes regiones o países del mundo, única y exclusivamente respecto de los países que México reconoce como libres de la enfermedad, por lo que a *contrario sensu*, siguen aplicándose para todos aquellos países o grupo de éstos, en donde la fiebre aftosa es endémica o que no han sido reconocidos por México como libres de dicha enfermedad.

Sin detrimento de lo anterior, las hojas de requisitos zoosanitarios establecidas por la Dirección General de Salud Animal, derivadas de la legislación aplicable, continúan vigentes para todos los países o grupos de países, sin importar sin son considerados o no libres de la enfermedad de la fiebre aftosa, lo cual indica que solamente las adecuaciones efectuadas a dichas hojas, aplican únicamente, para los países o grupo de éstos, en donde la fiebre aftosa es endémica o que no han sido reconocidos por nuestro país como libres de la enfermedad en comento.

En razón de lo expuesto:

PRIMERO.- Estese a lo dispuesto por la presente Circular;

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento de todo el personal de las unidades administrativas a las que está dirigida la aclaración dispuesta en el presente instrumento;

TERCERO.- Publíquese en el **Diario Oficial de la Federación** para el efecto de que los particulares interesados en el tema abordado en este documento, puedan esclarecer sus dudas, y

CUARTO.- Cúmplase.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Expedida en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los quince días del mes de octubre de dos mil dos.- La Coordinadora General Jurídica, **Lilia Isabel Ochoa Muñoz**.- Rúbrica.

MODIFICACION al calendario de apertura y cierre de ventanillas y entrega de los apoyos para el ciclo primavera-verano 2002, en el Estado de Chiapas.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

LILIA ISABEL OCHOA MUÑOZ, Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con las atribuciones que me confiere el artículo 15 fracciones IV y XXXI del Reglamento Interior de esta Secretaría, y en cumplimiento en lo dispuesto por el artículo 69 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2002 y tomando en consideración que se presentaron condiciones climatológicas adversas en algunas regiones del país, resulta necesario ajustar el calendario de entrega de apoyos en el Estado de Chiapas, correspondiente a la apertura y cierre de ventanillas y entrega del apoyo condicionado al requisito de siembra para el ciclo agrícola primavera-verano 2002, de acuerdo con las modificaciones siguientes:

PROCAMPO

MODIFICACION AL CALENDARIO DE APERTURA Y CIERRE DE VENTANILLAS Y ENTREGA DE LOS APOYOS PARA EL CICLO PRIMAVERA-VERANO 2002

	APERTURA Y CIERRE DE VENTANILLAS		CALENDARIO DE ENTREGA DE APOYOS	
DELEGACION	**PRIMERA APERTURA**	**ULTIMO CIERRE**	**PRIMERA**	**ULTIMA**
Chiapas	Junio, 2002	Octubre, 2002	Julio, 2002	Noviembre, 2002

México, Distrito Federal, a primero de octubre de dos mil dos.- La Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, **Lilia Isabel Ochoa Muñoz**.- Rúbrica.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DECRETO por el que se declara de utilidad pública la construcción de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla, tramo Las Choapas-Raudales y del Entronque Las Choapas I, y se expropian las superficies de 114,602.27 m^2 y 889,607.75 m^2. (Segunda publicación)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 27, párrafo segundo, de la propia Constitución; 1o., 2o., fracciones I, III y XIV, 3o., y 22 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 2o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación; 14 y 63, fracción II, de la Ley General de Bienes Nacionales; 1o., fracciones II y XII, 2o., 3o., 4o., 10, 19 y 20 de la Ley de Expropiación; 31, 36 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y

CONSIDERANDO

Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, está llevando a cabo la adquisición de los terrenos necesarios para la construcción de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla, tramo Las Choapas-Raudales, y su respectivo derecho de vía, así como del Entronque Las Choapas I, ubicados en los municipios de Las Choapas y Coatzacoalcos, Estado de Veracruz;

Que la autopista de referencia es una vía general de comunicación que forma parte de la red de ejes troncales con los que se está comunicando al país; que garantizará el desplazamiento más rápido y seguro de personas y bienes entre las ciudades de Cosoleacaque y Tuxtla Gutiérrez, permitiendo la comunicación en forma directa hacia el centro de la República, a través de la autopista Minatitlán-La Tinaja-Puebla y el Distrito Federal, así como al sureste del país vía Escárcega en el Estado de Campeche; permitirá dar salida en forma eficiente a la producción agropecuaria de los estados de Chiapas y Veracruz; apoyará al turismo que por vía terrestre recorre dichas entidades federativas y descongestionará el tránsito vehicular de la actual carretera federal que cruza las ciudades de Ocozocoautla, Pichucalco, Reforma, Tapanatepec, Arriaga y Chiapa de Corzo, disminuyendo la contaminación ambiental que afecta las áreas urbanas de estos poblados;

Que el entronque de referencia es parte integrante de la vía a que se refiere el considerando que antecede, que permitirá enlazar la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa y la autopista Las Choapas-Ocozocoautla, con las diversas poblaciones de la zona, facilitando la incorporación y la salida de vehículos de una manera sencilla y segura a través de los carriles de aceleración y desaceleración que conforman el entronque y brindará seguridad al usuario en la elección de la autopista o de la carretera federal, lo que justifica la utilidad pública para la adquisición de los terrenos que se mencionan en el considerando primero;

Que la autoridad integró el expediente de expropiación número 02/VER/2001, en el cual constan los elementos técnicos que justifican la idoneidad de los bienes, materia de la presente expropiación, para atender la causa de utilidad pública señalada en el artículo primero de este ordenamiento, y

Que para la atención de las necesidades de interés general, que deben ser satisfechas de manera prioritaria, el Gobierno Federal requiere adquirir las superficies necesarias mediante la expropiación correspondiente, cubriendo la indemnización a las personas que acrediten su legítimo derecho, he tenido a bien expedir el siguiente

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara de utilidad pública la construcción de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla, tramo Las Choapas-Raudales y del Entronque Las Choapas I, por lo que se expropian a favor de la Federación las siguientes superficies:

1.- La superficie de 114,602.27 metros cuadrados, destinada a la construcción del Entronque Las Choapas I, ubicada en el Municipio de Coatzacoalcos, Estado de Veracruz, localizada a la altura del kilómetro 0+565.00, con origen de cadenamiento en el kilómetro 21+370.00 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, Estado de Veracruz, y cuyos datos de localización son los siguientes:

Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 16, ubicado en el eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el PSC=0+565.00, continúa tangente de 171.52 m. y Rac=S 43°45'51" W hasta el vértice 1, continúa tangente de 72.37 m. y Rac=S 85°11'35" E hasta el vértice 2, continúa tangente de 54.69 m. y Rac=S 76°59'09" E hasta el vértice 3, continúa tangente de 242.45 m. y Rac=S 50°53'50" E hasta el vértice 4, continúa tangente de 31.38 m. y Rac=S 23°30'51" E hasta el vértice 5, continúa tangente de 72.64 m. y Rac=S 32°07'08" E hasta el vértice 6, continúa tangente de 31.82 m. y Rac=S 40°36'07" E hasta el vértice 7, continúa tangente de 551.17 m. y Rac=S 29°13'36" E hasta el vértice 8, continúa tangente de 68.27 m. y Rac=N 89°16'13" E hasta el vértice 9, continúa tangente de 584.74 m. y Rac=N 29°13'37" W hasta el vértice 10, continúa tangente de 41.69 m. y Rac=N 12°59'23" W hasta el vértice 11, continúa tangente de 40.55 m. y Rac=N 26°53'26" W hasta el vértice 12, continúa tangente de 56.43 m. y Rac=N 42°19'18" W hasta el vértice 13, continúa tangente de 36.13 m. y Rac=N 27°34'19" W hasta el vértice 14, continúa tangente de 306.30 m. y Rac=N 41°41'15" E hasta el vértice 15, continúa tangente de 439.50 m. y Rac=N 89°29'11" E hasta el vértice 16, lugar donde cierra la poligonal de afectación.

2.- La superficie de 889,607.75 metros cuadrados, destinada a la construcción de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla, tramo Las Choapas-Raudales, ubicada en el Municipio de Las Choapas, Estado de Veracruz, comprendida en veintiocho fracciones, localizada entre los kilómetros 1+682.38 al 595+443.09, con origen de cadenamiento en el kilómetro 21+370.00 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, Estado de Veracruz, y cuyos datos de localización son los siguientes:

FRACCIÓN I.

Se afecta una superficie de 2,644.89 metros cuadrados. Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 1, ubicado a 30.00 m. a la derecha del eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el PST=1+682.38, continúa tangente de 88.16 m. y Rac=S 29°13'36" E hasta el vértice 2, continúa tangente de 81.79 m. y Rac=N 17°57'30" E hasta el vértice 3, continúa tangente de 68.27 m. y Rac=S 89°16'13" W hasta el vértice 1, lugar donde cierra la poligonal de afectación;

FRACCIÓN II.

Se afecta una superficie de 35,054.89 metros cuadrados. Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 1, ubicado a 30.00 m. a la izquierda del eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el PST=14+834.59, continúa tangente de 110.12 m. y Rac=S 04°34'26" E hasta el vértice 2, continúa tangente de 55.06 m. y Rac=S 04°34'26" E hasta el vértice 3, continúa tangente de 56.70 m. y Rac=S 25°52'26" E hasta el vértice 4, continúa tangente de 20.63 m. y Rac=S 11°40'21" E hasta el vértice 5, continúa tangente de 60.00 m. y Rac=S 26°11'52" E hasta el vértice 6, continúa tangente de 20.55 m. y Rac=S 39°09'30" E hasta el vértice 7, continúa tangente de 325.55 m. y Rac=S 25°52'26" E hasta el vértice 8, continúa tangente de 23.51 m. y Rac=S 84°10'26" E hasta el vértice 9, continúa tangente de 47.01 m. y Rac=S 84°10'26" E hasta el vértice 10, continúa tangente de 673.20 m. y Rac=N 25°52'26" W hasta el vértice 1, lugar donde cierra la poligonal de afectación;

FRACCIÓN III.

Se afecta una superficie de 17,279.52 metros cuadrados. Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 1, ubicado a 30.00 m. a la derecha del eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el PST=25+809.74, continúa tangente de 298.57 m. y Rac=S 34°15'14" E hasta el vértice 2, continúa tangente de 74.52 m. y Rac=N 24°30'46" E hasta el vértice 3, continúa tangente de 9.72 m. y Rac=N 33°04'46" W hasta el vértice 4, continúa tangente de 20.00 m. y Rac=N 33°35'42" W hasta el vértice 5, continúa tangente de 20.43 m. y Rac=N 45°58'35" W hasta el vértice 6, continúa tangente de 40.00 m. y Rac=N 34°15'14" W hasta el vértice 7, continúa tangente de 20.36 m. y Rac=N 23°31'25" W hasta el vértice 8, continúa tangente de 20.01 m. y Rac=N 32°16'41" W hasta el vértice 9, continúa tangente de 20.48 m. y Rac=N 21°52'26" W hasta el vértice 10, continúa tangente de 60.32 m. y Rac=N 28°21'15" W hasta el vértice 11, continúa tangente de 16.90 m. y Rac=N 55°14'09" W hasta el vértice 12, continúa tangente de 77.13 m. y Rac=S 82°15'46" W hasta el vértice 1, lugar donde cierra la poligonal de afectación;

FRACCIÓN IV.

Se afecta una superficie de 3,744.09 metros cuadrados. Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 4, ubicado a 30.00 m. a la izquierda del eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el PST=26+064.10, continúa tangente de 10.29 m. y Rac=N 33°04'46" W hasta el vértice 5, continúa tangente de 72.96 m. y Rac=S 24°30'46" W hasta el vértice 1, continúa tangente de 107.23 m. y Rac=S 67°25'14" E hasta el vértice 2, continúa tangente de 97.30 m. y Rac=N 34°15'14" W hasta el vértice 3, continúa tangente de 20.31 m. y Rac=N 24°18'00" W hasta el vértice 4, lugar donde cierra la poligonal de afectación;

FRACCIÓN V.

Se afecta una superficie de 71,463.43 metros cuadrados. Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 4, ubicado a 30.00 m. a la izquierda del eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el PST=30+283.30, continúa tangente de 66.69 m. y Rac=S 73°28'47" W hasta el vértice 1, continúa tangente de 1,196.14 m. y Rac=S 42°24'26" E hasta el vértice 2, continúa tangente de 62.92 m. y Rac=N 65°07'46" E hasta el vértice 3, continúa tangente de 1,185.95 m. y Rac=N 42°24'26" W hasta el vértice 4, lugar donde cierra la poligonal de afectación;

FRACCIÓN VI.

Se afecta una superficie de 11,023.28 metros cuadrados. Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 6, ubicado en el eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el PST=32+719.00, continúa tangente de 47.27 m. y Rac=N 15°23'54" E hasta el vértice 1, continúa tangente de 191.89 m. y Rac=S 42°24'26" E hasta el vértice 2, continúa tangente de 42.48 m. y Rac=S 27°55'20" W hasta el vértice 3, continúa tangente de 21.24 m. y Rac=S 27°55'20" W hasta el vértice 4, continúa tangente de 175.56 m. y Rac=N 42°24'28" W hasta el vértice 5, continúa tangente de 23.63 m. y Rac=N 15°23'54" E hasta el vértice 6, lugar donde cierra la poligonal de afectación;

FRACCIÓN VII.

Se afecta una superficie de 10,251.10 metros cuadrados. Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 12, ubicado en el eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el PST=32+903.00, continúa tangente de 42.48 m. y Rac=N 27°55'20" E hasta el vértice 7, continúa tangente de 195.91 m. y Rac=S 42°24'26" E hasta el vértice 8, continúa tangente de 44.43 m. y Rac=S 73°07'34" W hasta el vértice 9, continúa tangente de 22.16 m. y Rac=S 73°07'34" W hasta el vértice 10, continúa tangente de 145.80 m. y Rac=N 42°24'26" W hasta el vértice 11, continúa tangente de 21.24 m. y Rac=N 27°55'20" E hasta el vértice 12, lugar donde cierra la poligonal de afectación;

FRACCIÓN VIII.

Se afecta una superficie de 66,337.80 metros cuadrados. Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 1, ubicado a 30.00 m. a la derecha del eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el PST=39+195.60, continúa tangente de 262.92 m. y Rac=S 26°56'07" E hasta el vértice 2, continúa tangente de 21.73 m. y Rac=S 03°54'35" E hasta el vértice 3, continúa tangente de 20.18 m. y Rac=S 19°14'49" E hasta el vértice 4, continúa tangente de 20.00 m. y Rac=S 26°03'47" E hasta el vértice 5, continúa tangente de 23.07 m. y Rac=S 56°50'38" E hasta el vértice 6, continúa tangente de 496.44 m. y Rac=S 26°56'07" E hasta el vértice 7, continúa tangente de 64.06 m. y Rac=S 26°09'21" E hasta el vértice 8, continúa tangente de 222.34 m. y Rac=S 37°28'29" E hasta el vértice 9, continúa tangente de 66.37 m. y Rac=N 20°01'38" E hasta el vértice 10, continúa tangente de 175.91 m. y Rac=N 36°28'57" W

hasta el vértice 11, continúa tangente de 63.87 m. y Rac=N 29°09'12" E hasta el vértice 12, continúa tangente de 829.17 m. y Rac=N 26°56'07" W hasta el vértice 13, continúa tangente de 7.42 m. y Rac=S 30°02'27" W hasta el vértice 14, continúa tangente de 55.63 m. y Rac=S 77°53'42" W hasta el vértice 1, lugar donde cierra la poligonal de afectación;

FRACCIÓN IX.

Se afecta una superficie de 4,628.59 metros cuadrados. Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 3, ubicado a 30.00 m. a la izquierda del eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el PST=51+244.08, continúa tangente de 61.75 m. y Rac=S 12°03'53" W hasta el vértice 1, continúa tangente de 150.20 m. y Rac=S 74°26'26" E hasta el vértice 2, continúa tangente de 165.84 m. y Rac=N 52°37'27" W hasta el vértice 3, lugar donde cierra la poligonal de afectación;

FRACCIÓN X.

Se afecta una superficie de 30,873.40 metros cuadrados. Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 1, ubicado a 30.00 m. a la izquierda del eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el PST=53+607.00, continúa tangente de 505.67 m. y Rac=S 52°37'27" E hasta el vértice 2, continúa tangente de 62.59 m. y Rac=S 53°55'33" W hasta el vértice 3, continúa tangente de 521.24 m. y Rac=S 52°37'27" W hasta el vértice 4, continúa tangente de 68.67 m. y Rac=N 66°27'39" E hasta el vértice 1, lugar donde cierra la poligonal de afectación;

FRACCIÓN XI.

Se afecta una superficie de 128.74 metros cuadrados. Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 1, ubicado a 30.00 m. a la derecha del eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el PST=54+094.56, continúa tangente de 22.65 m. y Rac=S 52°37'27" E hasta el vértice 2, continúa tangente de 22.37 m. y Rac=N 22°05'09" W hasta el vértice 3, continúa tangente de 11.86 m. y Rac=S 53°55'33" W hasta el vértice 1, lugar donde cierra la poligonal de afectación;

FRACCIÓN XII.

Se afecta una superficie de 30,050.35 metros cuadrados. Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 1, ubicado a 40.00 m. a la izquierda del eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el PST=80+347.37 continúa tangente de 78.06 m. y Rac=N 85°29'00" W hasta el vértice 2, continúa tangente de 7.29 m. y Rac=N 81°29'00" W hasta el vértice 3, continúa tangente de 7.34 m. y Rac=S 29°22'00" E hasta el vértice 4, continúa tangente de 14.00 m. y Rac=S 32°50'00" E hasta el vértice 5, continúa tangente de 6.00 m. y Rac=S 32°52'00" E hasta el vértice 6, continúa tangente de 20.02 m. y Rac=S 28°36'00" E hasta el vértice 7, continúa tangente de 20.00 m. y Rac=S 30°05'00" E hasta el vértice 8, continúa tangente de 20.04 m. y Rac=S 28°10'00" E hasta el vértice 9, continúa tangente de 20.00 m. y Rac=S 30°34'00" E hasta el vértice 10, continúa tangente de 21.73 m. y Rac=S 54°23'00" E hasta el vértice 11, continúa tangente de 80.00 m. y Rac=S 31°24'00" E hasta el vértice 12, continúa tangente de 24.22 m. y Rac=S 02°58'00" W hasta el vértice 13, continúa tangente de 20.22 m. y Rac=S 22°50'00" E hasta el vértice 14, continúa tangente de 20.05 m. y Rac=S 35°29'00" E hasta el vértice 15, continúa tangente de 20.01 m. y Rac=S 32°41'00" E hasta el vértice 16, continúa tangente de 14.41 m. y Rac=S 30°42'00" E hasta el vértice 17, continúa tangente de 5.61 m. y Rac=S 35°51'00" E hasta el vértice 18, continúa tangente de 20.12 m. y Rac=S 38°10'00" E hasta el vértice 19, continúa tangente de 8.32 m. y Rac=S 48°33'00" E hasta el vértice 20, continúa tangente de 4.96 m. y Rac=S 57°37'00" E hasta el vértice 21, continúa tangente de 10.76 m. y Rac=S 77°37'00" E hasta el vértice 22, continúa tangente de 40.00 m. y Rac=S 30°04'00" E hasta el vértice 23, continúa tangente de 24.56 m. y Rac=S 04°20'00" W hasta el vértice 24, continúa tangente de 17.03 m. y Rac=S 27°42'00" E hasta el vértice 25, continúa tangente de 2.97 m. y Rac=S 27°37'00" E hasta el vértice 26, continúa tangente de 6.91 m. y Rac=S 30°59'00" E hasta el vértice 27, continúa tangente de 105.93 m. y Rac=S 72°09'00" E hasta el vértice 28, continúa tangente de 212.96 m. y Rac=N 29°18'00" W hasta el vértice 29, continúa tangente de 246.84 m. y Rac=N 31°24'00" W hasta el vértice 1, lugar donde cierra la poligonal de afectación;

FRACCIÓN XIII.

Se afecta una superficie de 38,777.56 metros cuadrados. Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 1, ubicado a 32.00 m. a la derecha del eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el

PSC=80+731.75, continúa tangente de 18.14 m. y Rac=S 64°11'58" E hasta el vértice 2, continúa tangente de 29.79 m. y Rac=S 54°36'38" E hasta el vértice 3, continúa tangente de 40.74 m. y Rac=S 40°22'49" E hasta el vértice 4, continúa tangente de 14.49 m. y Rac=S 63°17'31" E hasta el vértice 5, continúa tangente de 48.13 m. y Rac=S 75°32'34" E hasta el vértice 6, continúa tangente de 99.54 m. y Rac=S 51°57'04" E hasta el vértice 7, continúa tangente de 20.89 m. y Rac=S 33°46'01" E hasta el vértice 8, continúa tangente de 19.90 m. y Rac=S 44°52'04" E hasta el vértice 9, continúa tangente de 29.98 m. y Rac=S 65°19'44" E hasta el vértice 10, continúa tangente de 10.65 m. y Rac=S 49°27'21" E hasta el vértice 11, continúa tangente de 20.91 m. y Rac=S 31°57'30" E hasta el vértice 12, continúa tangente de 20.91 m. y Rac=S 65°55'58" E hasta el vértice 13, continúa tangente de 172.95 m. y Rac=S 46°48'03" E hasta el vértice 14, continúa tangente de 21.21 m. y Rac=S 25°14'22" E hasta el vértice 15, continúa tangente de 21.23 m. y Rac=S 64°15'07" E hasta el vértice 16, continúa tangente de 65.59 m. y Rac=S 44°39'22" E hasta el vértice 17, continúa tangente de 60.00 m. y Rac=N 45°20'39" E hasta el vértice 18, continúa tangente de 85.59 m. y Rac=N 44°39'22" W hasta el vértice 19, continúa tangente de 497.76 m. y Rac=N 49°34'17" W hasta el vértice 20, continúa tangente de 101.89 m. y Rac=S 79°09'44" W hasta el vértice 1, lugar donde cierra la poligonal de afectación;

FRACCIÓN XIV.

Se afecta una superficie de 32,885.55 metros cuadrados. Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 2, ubicado a 20.00 m. a la derecha del eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el PST=81+400.00, continúa tangente de 39.95 m. y Rac=S 44°40'00" E hasta el vértice 3, continúa tangente de 20.92 m. y Rac=S 27°30'00" E hasta el vértice 4, continúa tangente de 15.32 m. y Rac=S 32°50'00" E hasta el vértice 5, continúa tangente de 4.47 m. y Rac=S 59°42'00" E hasta el vértice 6, continúa tangente de 1.03 m. y Rac=S 03°15'00" W hasta el vértice 7, continúa tangente de 20.11 m. y Rac=S 50°27'00" E hasta el vértice 8, continúa tangente de 21.17 m. y Rac=S 63°38'00" E hasta el vértice 9, continúa tangente de 140.00 m. y Rac=S 44°40'00" E hasta el vértice 10, continúa tangente de 21.65 m. y Rac=S 21°59'00" E hasta el vértice 11, continúa tangente de 21.69 m. y Rac=S 67°18'00" E hasta el vértice 12, continúa tangente de 20.00 m. y Rac=S 44°40'00" E hasta el vértice 13, continúa tangente de 13.46 m. y Rac=S 17°35'00" E hasta el vértice 14, continúa tangente de 28.68 m. y Rac=S 57°00'00" E hasta el vértice 15, continúa tangente de 47.00 m. y Rac=S 44°40'00" E hasta el vértice 16, continúa tangente de 13.29 m. y Rac=S 03°18'00" E hasta el vértice 17, continúa tangente de 9.97 m. y Rac=S 43°56'00" E hasta el vértice 18, continúa tangente de 14.26 m. y Rac=S 20°29'00" E hasta el vértice 19, continúa tangente de 24.88 m. y Rac=S 81°01'00" E hasta el vértice 20, continúa tangente de 65.04 m. y Rac=S 44°40'00" E hasta el vértice 21, continúa tangente de 27.73 m. y Rac=N 89°11'00" E hasta el vértice 22, continúa tangente de 54.59 m. y Rac=N 02°27'00" E hasta el vértice 23, continúa tangente de 507.04 m. y Rac=N 44°00'00" W hasta el vértice 1, continúa tangente de 60.00 m. y Rac=S 45°20'00" W hasta el vértice 2, lugar donde cierra la poligonal de afectación;

FRACCIÓN XV.

Se afecta una superficie de 844.59 metros cuadrados. Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 1, ubicado a 20.00 m. a la derecha del eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el PST=81+944.20, continúa tangente de 32.68 m. y Rac=S 27°29'48" E hasta el vértice 2, continúa tangente de 18.87 m. y Rac=S 54°04'52" E hasta el vértice 3, continúa tangente de 44.24 m. y Rac=N 02°27'00" E hasta el vértice 4, continúa tangente de 32.40 m. y Rac=S 82°38'50" W hasta el vértice 1, lugar donde cierra la poligonal de afectación;

FRACCIÓN XVI.

Se afecta una superficie de 59,709.25 metros cuadrados. Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 1, ubicado a 20.00 m. a la derecha del eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el PST=82+174.00, continúa tangente de 6.00 m. y Rac=S 44°39'21" E hasta el vértice 2, continúa tangente de 26.64 m. y Rac=S 03°18'29" E hasta el vértice 3, continúa tangente de 14.21 m. y Rac=S 83°56'43" E hasta el vértice 4, continúa tangente de 30.24 m. y Rac=S 61°10'25" E hasta el vértice 5, continúa tangente de 20.00 m. y Rac=S 44°39'21" E hasta el vértice 6, continúa tangente de 28.90 m. y Rac=S 26°14'03" E hasta el vértice 7, continúa tangente de 12.51 m. y Rac=S 46°58'09" E hasta el vértice 8, continúa tangente de 21.79 m. y Rac=S 68°03'20" E hasta el vértice 9, continúa tangente de 40.00 m. y Rac=S 44°39'21" E hasta el vértice 10, continúa tangente de 44.58 m. y Rac=S 18°26'50" E hasta el vértice 11,

continúa tangente de 10.03 m. y Rac=S 40°01'30" E hasta el vértice 12, continúa tangente de 36.33 m. y Rac=S 79°00'07" E hasta el vértice 13, continúa tangente de 17.00 m. y Rac=S 44°39'21" E hasta el vértice 14, continúa tangente de 26.51 m. y Rac=S 14°49'22" E hasta el vértice 15, continúa tangente de 30.95 m. y Rac=S 69°52'47" E hasta el vértice 16, continúa tangente de 91.00 m. y Rac=S 44°39'21" E hasta el vértice 17, continúa tangente de 21.11 m. y Rac=S 25°57'21" E hasta el vértice 18, continúa tangente de 26.20 m. y Rac=S 59°37'29" E hasta el vértice 19, continúa tangente de 33.18 m. y Rac=S 44°39'21" E hasta el vértice 20, continúa tangente de 27.16 m. y Rac=S 10°34'47" E hasta el vértice 21, continúa tangente de 27.57 m. y Rac=S 78°09'03" E hasta el vértice 22, continúa tangente de 31.00 m. y Rac=S 44°39'24" E hasta el vértice 23, continúa tangente de 74.44 m. y Rac=S 35°31'11" E hasta el vértice 24, continúa tangente de 32.50 m. y Rac=S 45°12'11" E hasta el vértice 25, continúa tangente de 41.62 m. y Rac=S 60°42'33" E hasta el vértice 26, continúa tangente de 24.42 m. y Rac=S 08°17'32" E hasta el vértice 27, continúa tangente de 42.54 m. y Rac=S 64°33'23" E hasta el vértice 28, continúa tangente de 21.39 m. y Rac=S 23°49'29" E hasta el vértice 29, continúa tangente de 20.09 m. y Rac=S 39°06'54" E hasta el vértice 30, continúa tangente de 41.12 m. y Rac=S 58°05'03" E hasta el vértice 31, continúa tangente de 40.00 m. y Rac=S 44°39'21" E hasta el vértice 32, continúa tangente de 11.75 m. y Rac=S 19°52'59" E hasta el vértice 33, continúa tangente de 65.50 m. y Rac=N 57°56'18" E hasta el vértice 34, continúa tangente de 925.00 m. y Rac=N 44°39'71" E hasta el vértice 35, continúa tangente de 60.00 m. y Rac=S 45°20'37" W hasta el vértice 1, lugar donde cierra la poligonal de afectación;

FRACCIÓN XVII.

Se afecta una superficie de 50,028.23 metros cuadrados. Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 1, ubicado a 23.00 m. a la derecha del eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el PST=83+090.68, continúa tangente de 10.27 m. y Rac=S 19°52'59" E hasta el vértice 2, continúa tangente de 22.03 m. y Rac=S 69°25'46" E hasta el vértice 3, continúa tangente de 100.00 m. y Rac=S 44°39'21" E hasta el vértice 4, continúa tangente de 21.89 m. y Rac=S 20°41'28" E hasta el vértice 5, continúa tangente de 6.16 m. y Rac=S 31°42'07" E hasta el vértice 6, continúa tangente de 22.48 m. y Rac=S 71°50'11" E hasta el vértice 7, continúa tangente de 676.24 m. y Rac=S 44°39'21" E hasta el vértice 8, continúa tangente de 71.95 m. y Rac=N 11°50'38" E hasta el vértice 9, continúa tangente de 803.19 m. y Rac=N 44°39'21" W hasta el vértice 10, continúa tangente de 65.50 m. y Rac=S 52°56'18" W hasta el vértice 1, lugar donde cierra la poligonal de afectación;

FRACCIÓN XVIII.

Se afecta una superficie de 29,885.70 metros cuadrados. Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 1, ubicado a 20.00 m. a la derecha del eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el PST=83+942.24, continúa tangente de 497.78 m. y Rac=S 44°39'21" E hasta el vértice 2, continúa tangente de 71.59 m. y Rac=N 12°16'59" E hasta el vértice 3, continúa tangente de 498.44 m. y Rac=N 44°39'21" W hasta el vértice 4, continúa tangente de 71.95 m. y Rac=S 11°50'38" W hasta el vértice 1, lugar donde cierra la poligonal de afectación;

FRACCIÓN XIX.

Se afecta una superficie de 60,525.78 metros cuadrados. Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 1, ubicado a 20.00 m. a la derecha del eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el PST=84+440.02, continúa tangente de 30.48 m. y Rac=S 44°39'21" E hasta el vértice 2, continúa tangente de 21.12 m. y Rac=S 25°52'41" E hasta el vértice 3, continúa tangente de 9.81 m. y Rac=S 30°08'18" E hasta el vértice 4, continúa tangente de 10.51 m. y Rac=S 47°26'13" E hasta el vértice 5, continúa tangente de 21.83 m. y Rac=S 68°17'08" E hasta el vértice 6, continúa tangente de 148.08 m. y Rac=S 44°39'21" E hasta el vértice 7, continúa tangente de 20.63 m. y Rac=S 30°25'53" E hasta el vértice 8, continúa tangente de 20.54 m. y Rac=S 57°50'52" E hasta el vértice 9, continúa tangente de 121.84 m. y Rac=S 44°36'41" E hasta el vértice 10, continúa tangente de 22.44 m. y Rac=S 18°51'18" E hasta el vértice 11, continúa tangente de 23.17 m. y Rac=S 43°30'38" E hasta el vértice 12, continúa tangente de 22.91 m. y Rac=S 75°20'33" E hasta el vértice 13, continúa tangente de 32.64 m. y Rac=S 46°41'39" E hasta el vértice 14, continúa tangente de 25.76 m. y Rac=S 32°40'37" E hasta el vértice 15, continúa tangente de 11.21 m. y Rac=S 52°04'39" E hasta el vértice 16, continúa tangente de 20.76 m. y Rac=S 73°00'45" E hasta el vértice 17, continúa tangente de 344.27 m. y Rac=S 50°19'27" E hasta el vértice 18, continúa tangente de 21.04 m. y Rac=S 35°03'51" E hasta el vértice 19, continúa tangente de 29.79 m. y Rac=S 65°58'24" E hasta el vértice 20, continúa tangente de 19.85 m. y Rac=S 53°45'18" E

hasta el vértice 21, continúa tangente de 62.11 m. y Rac=N 51°00'25" E hasta el vértice 22, continúa tangente de 712.20 m. y Rac=N 48°46'03" W hasta el vértice 23, continúa tangente de 297.61 m. y Rac=N 44°39'21" W hasta el vértice 24, continúa tangente de 71.59 m. y Rac=S 12°16'59" W hasta el vértice 1, lugar donde cierra la poligonal de afectación;

FRACCIÓN XX.

Se afecta una superficie de 32,126.41 metros cuadrados. Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 13, ubicado a 20.00 m. a la izquierda del eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el PST=86+345.90, continúa tangente de 23.68 m. y Rac=S 31°51'11" W hasta el vértice 1, continúa tangente de 454.13 m. y Rac=S 57°29'42" E hasta el vértice 2, continúa tangente de 742.87 m. y Rac=S 58°23'02" E hasta el vértice 3, continúa tangente de 19.36 m. y Rac=N 35°51'46" E hasta el vértice 4, continúa tangente de 193.21 m. y Rac=N 56°13'42" W hasta el vértice 5, continúa tangente de 24.62 m. y Rac=N 58°08'49" W hasta el vértice 6, continúa tangente de 21.61 m. y Rac=N 35°54'09" W hasta el vértice 7, continúa tangente de 21.61 m. y Rac=N 80°23'29" W hasta el vértice 8, continúa tangente de 846.29 m. y Rac=N 58°08'49" W hasta el vértice 9, continúa tangente de 20.68 m. y Rac=N 43°26'19" W hasta el vértice 10, continúa tangente de 6.21 m. y Rac=N 59°20'46" E hasta el vértice 11, continúa tangente de 20.64 m. y Rac=N 72°30'23" W hasta el vértice 12, continúa tangente de 48.10 m. y Rac=N 58°08'49" W hasta el vértice 13, lugar donde cierra la poligonal de afectación;

FRACCIÓN XXI.

Se afecta una superficie de 27,239.43 metros cuadrados. Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 1, ubicado a 40.00 m. a la derecha del eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el PST=88+554.98, continúa tangente de 425.02 m. y Rac=S 44°36'52" E hasta el vértice 2, continúa tangente de 60.00 m. y Rac=N 45°23'08" E hasta el vértice 3, continúa tangente de 260.00 m. y Rac=N 44°36'52" W hasta el vértice 4, continúa tangente de 21.06 m. y Rac=N 26°22'39" W hasta el vértice 5, continúa tangente de 10.75 m. y Rac=N 02°42'06" W hasta el vértice 6, continúa tangente de 14.10 m. y Rac=N 76°18'35" W hasta el vértice 7, continúa tangente de 5.66 m. y Rac=N 10°11'40" W hasta el vértice 8, continúa tangente de 15.81 m. y Rac=N 30°31'00" W hasta el vértice 9, continúa tangente de 20.06 m. y Rac=N 48°54'13" W hasta el vértice 10, continúa tangente de 23.28 m. y Rac=N 75°23'18" W hasta el vértice 11, continúa tangente de 80.00 m. y Rac=N 44°36'52" W hasta el vértice 12, continúa tangente de 17.09 m. y Rac=N 24°05'49" W hasta el vértice 13, continúa tangente de 72.90 m. y Rac=S 20°14'05" W hasta el vértice 1, lugar donde cierra la poligonal de afectación;

FRACCIÓN XXII.

Se afecta una superficie de 53,295.01 metros cuadrados. Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 1, ubicado a 50.00 m. a la derecha del eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el PSC=591+367.00, continúa tangente de 332.87 m. y Rac=S 20°48'54" E hasta el vértice 2, continúa tangente de 188.08 m. y Rac=S 14°21'40" E hasta el vértice 3, continúa tangente de 100.00 m. y Rac=N 75°38'20" E hasta el vértice 4, continúa tangente de 188.08 m. y Rac=N 14°21'40" W hasta el vértice 5, continúa tangente de 355.39 m. y Rac=N 17°29'35" W hasta el vértice 6, continúa tangente de 100.00 m. y Rac=S 62°51'16" W hasta el vértice 1, lugar donde cierra la poligonal de afectación;

FRACCIÓN XXIII.

Se afecta una superficie de 28,000.00 metros cuadrados. Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 1, ubicado a 50.00 m. a la derecha del eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el PST=591+900.00, continúa tangente de 280.00 m. y Rac=S 14°21'40" E hasta el vértice 2, continúa tangente de 100.00 m. y Rac=N 75°38'20" E hasta el vértice 3, continúa tangente de 280.00 m. y Rac=N 14°21'14" W hasta el vértice 4, continúa tangente de 100.00 m. y Rac=S 75°38'20" W hasta el vértice 1, lugar donde cierra la poligonal de afectación;

FRACCIÓN XXIV.

Se afecta una superficie de 26,692.93 metros cuadrados. Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 1, ubicado a 50.00 m. a la derecha del eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el PSC=592+180.00, continúa tangente de 62.67 m. y Rac=S 14°21'40" E hasta el vértice 2, continúa

tangente de 157.25 m. y Rac=S 17°10'58" E hasta el vértice 3, continúa tangente de 147.79 m. y Rac=S 64°42'39" E hasta el vértice 4, continúa tangente de 252.28 m. y Rac=N 19°15'27" W hasta el vértice 5, continúa tangente de 62.67 m. y Rac=N 14°21'40" W hasta el vértice 6, continúa tangente de 100.00 m. y Rac=S 75°38'20" W hasta el vértice 1, lugar donde cierra la poligonal de afectación;

FRACCIÓN XXV.

Se afecta una superficie de 21,448.45 metros cuadrados. Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 10, ubicado a 50.00 m. a la izquierda del eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el PST=594+108.05, continúa tangente de 18.23 m. y Rac=S 38°49'09" W hasta el vértice 1, continúa tangente de 212.18 m. y Rac=S 28°27'30" E hasta el vértice 2, continúa tangente de 100.16 m. y Rac=S 28°00'54" E hasta el vértice 3, continúa tangente de 40.01 m. y Rac=S 28°23'28" E hasta el vértice 4, continúa tangente de 120.54 m. y Rac=S 28°05'03" E hasta el vértice 5, continúa tangente de 40.33 m. y Rac=S 26°13'37" E hasta el vértice 6, continúa tangente de 163.79 m. y Rac=S 27°31'16" E hasta el vértice 7, continúa tangente de 29.34 m. y Rac=N 54°06'40" E hasta el vértice 8, continúa tangente de 252.31 m. y Rac=N 25°11'54" W hasta el vértice 9, continúa tangente de 428.85 m. y Rac=N 31°14'31" W hasta el vértice 10, lugar donde cierra la poligonal de afectación;

FRACCIÓN XXVI.

Se afecta una superficie de 45,351.55 metros cuadrados. Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 1, ubicado a 50.00 m. a la derecha del eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el PST=594+138.18, continúa tangente de 392.57 m. y Rac=S 31°15'12" E hasta el vértice 2, continúa tangente de 261.23 m. y Rac=S 24°24'30" E hasta el vértice 3, continúa tangente de 75.72 m. y Rac=N 54°06'40" E hasta el vértice 4, continúa tangente de 163.79 m. y Rac=N 27°31'16" W hasta el vértice 5, continúa tangente de 40.33 m. y Rac=N 26°13'37" W hasta el vértice 6, continúa tangente de 120.54 m. y Rac=N 28°05'03" W hasta el vértice 7, continúa tangente de 40.05 m. y Rac=N 28°23'28" W hasta el vértice 8, continúa tangente de 100.16 m. y Rac=N 28°02'54" W hasta el vértice 9, continúa tangente de 212.18 m. y Rac=N 28°27'30" W hasta el vértice 10, continúa tangente de 88.23 m. y Rac=S 38°49'09" W hasta el vértice 1, lugar donde cierra la poligonal de afectación;

FRACCIÓN XXVII.

Se afecta una superficie de 65,240.00 metros cuadrados. Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 1, ubicado a 50.00 m. a la derecha del eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el PSC=594+804.47, continúa tangente de 150.79 m. y Rac=S 13°37'05" E hasta el vértice 2, continúa tangente de 23.00 m. y Rac=S 09°40'16" E hasta el vértice 3, continúa tangente de 257.30 m. y Rac=S 09°40'16" E hasta el vértice 4, continúa tangente de 203.25 m. y Rac=S 11°20'25" E hasta el vértice 5, continúa tangente de 100.14 m. y Rac=N 74°01'51" E hasta el vértice 6, continúa tangente de 192.25 m. y Rac=N 11°17'47" W hasta el vértice 7, continúa tangente de 262.49 m. y Rac=N 09°40'16" W hasta el vértice 8, continúa tangente de 17.82 m. y Rac=N 09°40'16" W hasta el vértice 9, continúa tangente de 197.43 m. y Rac=N 14°24'29" W hasta el vértice 10, continúa tangente de 104.86 m. y Rac=S 54°06'38" E hasta el vértice 1, lugar donde cierra la poligonal de afectación, y

FRACCIÓN XXVIII.

Se afecta una superficie de 34,077.23 metros cuadrados. Se inicia la poligonal de afectación en el vértice 1, ubicado a 50.00 m. a la derecha del eje de la autopista Las Choapas-Ocozocoautla en el PSC=595+443.09, continúa tangente de 232.92 m. y Rac=S 05°56'15" E hasta el vértice 2, continúa tangente de 107.26 m. y Rac=S 07°50'53" E hasta el vértice 3, continúa tangente de 100.00 m. y Rac=N 82°09'07" E hasta el vértice 4, continúa tangente de 107.26 m. y Rac=N 07°50'53" W hasta el vértice 5, continúa tangente de 44.30 m. y Rac=N 07°28'42" W hasta el vértice 6, continúa tangente de 20.85 m. y Rac=N 09°40'27" E hasta el vértice 7, continúa tangente de 20.85 m. y Rac=N 23°12'10" W hasta el vértice 8, continúa tangente de 147.36 m. y Rac=N 05°10'36" W hasta el vértice 9, continúa tangente de 100.14 m. y Rac=S 82°53'41" W hasta el vértice 1, lugar donde cierra la poligonal de afectación.

La amplitud del derecho de vía del kilómetro 1+682.38 al 88+554.98 es de 60.00 m. en forma constante, correspondiendo 30.00 m. a cada lado del eje del camino y del kilómetro 591+367.00 al 595+443.09 es de 100.00 m. en forma constante, correspondiendo 50.00 m. a cada lado del eje del camino.

Los planos de las áreas a que se refiere el presente artículo y el expediente formado con motivo de la presente expropiación, están a disposición de los interesados en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La expropiación de los terrenos a que se refiere el artículo anterior incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los propios terrenos y que formen parte de ellos.

ARTÍCULO TERCERO.- El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, tomará posesión de las superficies expropiadas y las pondrá a disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para destinarlas a las referidas obras.

ARTÍCULO CUARTO.- El Gobierno Federal, por conducto de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, fijará el monto de las indemnizaciones que deban cubrirse, en los términos de ley, a quienes acrediten su legítimo derecho.

ARTÍCULO QUINTO.- Una vez fijado el monto de las indemnizaciones y los términos de éstas, se procederá al pago de las mismas por conducto y con cargo al presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente a los interesados en el domicilio que de ellos conste en el expediente de expropiación. En caso de que el domicilio ya no corresponda, o bien, no se tenga registrado, efectúese una segunda publicación en el **Diario Oficial de la Federación** para que surta efectos de notificación personal.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiún días del mes de junio de dos mil dos.- **Vicente Fox Quesada**.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, **José Francisco Gil Díaz**.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, **Pedro Cerisola y Weber**.- Rúbrica.- El Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo, **Francisco Javier Barrio Terrazas**.- Rúbrica.

NORMA Oficial Mexicana NOM-035-SCT4-1999, Equipo de protección personal y de seguridad para la atención de incendios, accidentes e incidentes que involucren mercancías peligrosas en embarcaciones y artefactos navales.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-035-SCT4-1999, EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y DE SEGURIDAD PARA LA ATENCION DE INCENDIOS, ACCIDENTES E INCIDENTES QUE INVOLUCREN MERCANCIAS PELIGROSAS EN EMBARCACIONES Y ARTEFACTOS NAVALES.

FRANCISCO JUAN AVILA CAMBEROS, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, con fundamento en los artículos 36 fracciones I, XII y XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1o., 38 fracción II, 40 fracciones XIII y XVI y 43 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o., 7o. fracciones V y VII y 60 de la Ley de Navegación; 4o., 6o. fracción XIII y 28 fracción XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

CONSIDERANDO

Que con fecha 23 de abril de 1999, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se presentó al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos para su aprobación, el anteproyecto de Norma Oficial Mexicana;

Con fecha 2 de marzo de 2001, una vez aprobado por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el **Diario Oficial de la Federación**, el proyecto de la presente Norma Oficial Mexicana, a efecto de que dentro de los siguientes 60 días naturales posteriores a dicha publicación, los interesados presentaran sus comentarios al mencionado Comité Consultivo;

Con fecha 24 de julio de 2002, se publicaron en el **Diario Oficial de la Federación**, las respuestas a los comentarios recibidos al proyecto, en los términos del artículo 47 fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

Y en atención a las anteriores consideraciones, contando con la aprobación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, he tenido a bien expedir la siguiente:

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-035-SCT4-1999, EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL Y DE SEGURIDAD PARA LA ATENCION DE INCENDIOS, ACCIDENTES E INCIDENTES QUE INVOLUCREN MERCANCIAS PELIGROSAS EN EMBARCACIONES Y ARTEFACTOS NAVALES

Que tiene por objetivo, establecer los requisitos y especificaciones que deben cumplir los equipos de protección personal y de seguridad para el combate de incendios, accidentes e incidentes que involucren mercancías peligrosas a bordo de embarcaciones y artefactos navales que operen en aguas de jurisdicción nacional.

INDICE

1. Objetivo y campo de aplicación

2. Referencias

3. Definiciones

4. Requisitos generales

5. Procedimientos

6. Vigilancia

7. Bibliografía

8. Concordancia con normas internacionales

9. Vigencia

PREFACIO

En la elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana, participaron las siguientes dependencias, cámaras, asociaciones, institutos y empresas:

Dependencias:

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
Subsecretaría de Transporte
Dirección General de Marina Mercante
Dirección General de Capitanías
Dirección General de Puertos
Coordinación de Administraciones Portuarias Integrales
Comisión Intersecretarial de Seguridad y Vigilancia Marítima y Portuaria

SECRETARIA DE ENERGIA
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias

SECRETARIA DE SALUD
Dirección General de Salud Ambiental

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo

Cámaras:
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE MARITIMO

CAMARA NACIONAL DE AUTOTRANSPORTE DE CARGA

Asociaciones:
ASOCIACION NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUIMICA, A.C.

Institutos:
INSTITUTO MEXICANO DEL PETROLEO
INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE

Empresas:
GRUPO T.M.M., S.A. DE C.V.

Pemex Refinación
Dirección Corporativa de Sistemas de Seguridad Industrial
Gerencia de Operación y Mantenimiento Marítimo

SEGURIDAD MARITIMA DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

TECNO FIRE, S.A. DE C.V.

1. Objetivo y campo de aplicación

Esta Norma Oficial Mexicana establece los requisitos y especificaciones que deben cumplir los equipos de protección personal y de seguridad para el combate de incendios, accidentes e incidentes que involucren mercancías peligrosas a bordo de embarcaciones y artefactos navales que operen en aguas
de jurisdicción nacional.

2. Referencias

Para una mejor aplicación de esta Norma Oficial Mexicana, es necesario consultar las siguientes normas oficiales mexicanas:

NOM-002-STPS-2000	Condiciones de seguridad-prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.
NOM-002-SCT2-1994	Listado de las sustancias y materiales peligrosos más usualmente transportados.
NOM-009-SCT4-1994	Terminología y clasificación de mercancías peligrosas transportadas en embarcaciones.
NOM-012-SCT4-1994	Lineamientos para la elaboración del plan de contingencias para embarcaciones que transportan mercancías peligrosas.
NOM-023-SCT4-1995	Condiciones para el manejo y almacenamiento de mercancías peligrosas en puertos, terminales y unidades mar adentro.
NOM-025-SCT4-1995	Detección, identificación, prevención y sistemas contraincendios para embarcaciones que transportan hidrocarburos, químicos y petroquímicos de alto riesgo.
NOM-027-SCT4-1995	Requisitos que deben cumplir las mercancías peligrosas para su transporte en embarcaciones.
NOM-028-SCT4-1996	Documentación para mercancías peligrosas y transportadas en embarcaciones. Requisitos y especificaciones.
NOM-030-SCT4-1996	Condiciones de seguridad para la estiba y trincado de carga en embarcaciones sobre cubierta y en bodegas.
NOM-033-SCT4-1996	Lineamientos para el ingreso de mercancías peligrosas a instalaciones portuarias.

3. Definiciones

Para los fines de la presente Norma Oficial Mexicana se entenderá por:

3.1 Accidentes

Son aquellos sucesos que involucran lesiones o daños a la vida humana, al medio ambiente, a la embarcación, al artefacto naval o a su cargamento.

3.2 Autoridad Marítima

La Dirección General de Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

3.3 Artefacto naval

Toda construcción flotante o fija que no estando destinada a navegar, cumple funciones de complemento o apoyo en el agua a las actividades marítimas, fluviales o lacustres, o de exploración y explotación de recursos naturales, incluyendo a las plataformas fijas, con excepción de las instalaciones portuarias aunque se internen en el mar.

3.4 Embarcación

Toda construcción destinada a navegar, cualesquiera que sea su clase y dimensión.

3.5 Incendio

Fuego que se desarrolla sin control en el tiempo y en el espacio.

3.6 Incidente

Acontecimiento que ocasiona o puede ocasionar una fuga o derrame de sustancias nocivas al medio ambiente (incluyendo hidrocarburos) o sustancias clasificadas como peligrosas de acuerdo con la normatividad vigente.

4. Requisitos generales

Las medidas relativas a los equipos de protección personal comprenden dos rubros principales: el combate y extinción de incendios, y las prescripciones aplicables a los riesgos inherentes al manejo y transporte de mercancías peligrosas en:

- Embarcaciones de carga general, portacontenedores y artefactos navales.
- Embarcaciones que transportan químicos peligrosos a granel (buquetanques quimiqueros).
- Embarcaciones que transportan gases licuados a granel (buquetanques gaseros).

4.1 Embarcaciones de carga general y portacontenedores.

4.1.1 Para el combate y extinción de incendios, en general, todas las embarcaciones y artefactos navales deben llevar a bordo por lo menos dos equipos de bombero que cumplan con los siguientes elementos:

4.1.1.1 Un equipo individual compuesto de:

- Indumentaria protectora, de un material que preserve la piel contra el calor irradiado por el fuego y contra las quemaduras y escaldaduras que pudiera causar el vapor, siendo impermeable por su cara exterior.
- Botas y guantes de goma o de otro material que no sea electroconductor.
- Un casco rígido que proteja eficazmente contra golpes.
- Una lámpara eléctrica de seguridad (linterna de mano) de un tipo aprobado, que tenga un periodo mínimo de funcionamiento de tres horas.
- Un hacha con las siguientes características: de 1 kilogramo y 32 centímetros de largo, aproximadamente, mango con aislante de neopreno.

4.1.1.2 Un aparato respiratorio de un tipo aprobado, que podrá ser:

- Un casco o máscara antihumo provisto de una bomba de aire adecuada y un tubo o manguera flexible para aire, lo bastante largo como para alcanzar desde una posición de la cubierta

expuesta bien distanciada de las escotillas y puertas, cualquier parte de las bodegas o de los espacios
de máquinas. Si para cumplir con lo dispuesto en el presente apartado se necesitara un tubo o manguera flexible de más de 36 metros para aire, se empleará, ya en sustitución de este tubo o manguera, o además del mismo, según decida la Autoridad Marítima, un aparato respiratorio autónomo, o bien:

- Un aparato respiratorio autónomo accionado por aire comprimido, cuyas botellas o cilindros tengan una capacidad de 1,200 litros de aire por lo menos, u otro aparato respiratorio autónomo que pueda funcionar durante 30 minutos como mínimo.
- Debe haber a bordo la cantidad suficiente de cargas de respeto apropiadas, para su disposición y utilización con los aparatos provistos (cuando menos una por cada aparato).

4.1.1.3 Cada aparato respiratorio llevará un cable de seguridad ignífugo de resistencia y longitud suficiente, susceptible de quedar sujeto a un gancho con muelle al arnés del aparato a un cinturón separado, con objeto de impedir que el aparato se suelte cuando se maneje el cable de seguridad.

4.1.2 La Autoridad Marítima podrá exigir que se lleven juegos adicionales de equipo individual y aparatos respiratorios, teniendo debidamente en cuenta las dimensiones, el tipo de embarcación y el volumen del producto transportado.

4.1.3 Los equipos de bombero se deben guardar, listos para su utilización inmediata, en gabinetes especiales y fácilmente accesibles; en los casos en que proceda, uno de los equipos se guardará en un sitio fácilmente accesible de cualquiera de las cubiertas de helicópteros.

4.1.4 Equipo de protección personal aplicable al manejo y transporte de mercancías peligrosas.

4.1.4.1 En adición a los equipos de bombero mencionados en el punto 4.1.1, se debe contar con cuatro equipos de protección personal consistentes en delantales largos, guantes de manga larga, zapatos de seguridad, overoles y gafas de ajuste seguro, caretas de protección, o ambas, todos ellos contra sustancias químicas. La indumentaria protectora y el equipo deben cubrir toda la piel de tal manera que ninguna parte del cuerpo quede sin protección.

4.1.4.2 Debe haber por lo menos dos aparatos respiratorios autónomos además de los prescritos en el punto 4.1.1.2.

4.2 Embarcaciones que transportan químicos peligrosos a granel (buquetanques y buquetanques quimiqueros).

4.2.1 Las embarcaciones deben tener a bordo equipo de protección personal como lo establecido en el punto 4.1.4.1.

4.2.2 La ropa de trabajo y el equipo de protección se deben guardar en gabinetes especiales y fácilmente accesibles, colocados en lugares estratégicos y aprobados por la Autoridad Marítima.

4.2.3 El equipo de protección debe usarse en cualquier operación que pueda implicar un riesgo al personal.

4.2.4 Las embarcaciones que transporten productos químicos peligrosos, deben contar a bordo por lo menos con tres juegos completos de equipo de protección personal para trabajar en espacios confinados, cada uno de los cuales debe permitir al personal ingresar a esos lugares por lo menos durante 20 minutos.

4.2.4.1 Cada juego completo de equipo de protección debe consistir de:

- Un aparato respiratorio autónomo (que no funcione con oxígeno almacenado).
- Indumentaria protectora, botas, guantes y gafas de ajuste seguro.
- Un cable de rescate ignífugo resistente a los productos transportados.
- Una lámpara antideflagrante.

4.2.5 Para el equipo de protección requerido en el párrafo 4.2.4.1, todas las embarcaciones deben llevar lo siguiente, ya sea:

- Un juego de botellas o cilindros de aire comprimido de respeto totalmente cargados por cada aparato respiratorio.
- Un compresor de aire especial adecuado para suministrar aire a alta presión de la pureza necesaria.
- Un colector de carga que pueda llenar suficientes botellas o cilindros de aire comprimido de respeto para el aparato respiratorio, o
- Botellas o cilindros de aire comprimido de respeto totalmente cargadas, cuya capacidad total de aire sea por lo menos de 6,000 litros por cada aparato respiratorio.

4.2.6 En el caso de embarcaciones que transportan productos químicos peligrosos a granel, que requieran en el cuarto de bombas, un equipo de detección de vapores tóxicos y que éste no se encuentre disponible, deben tener:

- Un sistema de conductos de aire a baja presión con conexiones adecuadas para la utilización de los aparatos respiratorios prescritos en el punto 4.2.4.1; este sistema debe tener una capacidad de aire a alta presión suficiente para suministrar, mediante dispositivos reductores de presión, aire a baja presión en la cantidad necesaria para permitir que dos hombres puedan trabajar en un espacio peligroso a causa del gas durante una hora al menos, sin utilizar las botellas o cilindros del aparato respiratorio. Se deben proveer medios que permitan recargar las botellas o cilindros de aire fijos y las botellas o cilindros de los aparatos respiratorios utilizando un compresor especial de aire adecuado para suministrar aire a alta presión de la pureza necesaria, o
- Una cantidad equivalente de cilindros de aire de respeto en lugar de la línea de aire de baja presión.

4.2.7 Por lo menos un juego de equipo de protección requerido en el párrafo 4.2.4.1, se debe guardar en un gabinete adecuado, identificado y fácilmente accesible cerca del cuarto de bombas. Los otros juegos del equipo de seguridad se deben guardar también en gabinetes adecuados, identificados y fácilmente accesibles.

4.2.8 Los aparatos de respiración deben ser inspeccionados por lo menos una vez al mes por el oficial responsable y registrar los resultados en el cuaderno de bitácora. Además, éstos deben ser objeto de dos mantenimientos, uno preventivo semestralmente y otro correctivo cada doce meses, siempre de conformidad con las instrucciones del fabricante, por empresas que certifiquen el servicio de mantenimiento y cuenten con autorización vigente por parte de la Autoridad Marítima.

4.2.9 Se debe colocar en un lugar de fácil acceso una camilla de uso marino, que pueda ser utilizada para izar una persona lesionada, de espacios tales como el cuarto de bombas.

4.2.10 Las embarcaciones que se utilicen para el transporte de productos químicos peligrosos, deben estar provistas con equipo de protección respiratoria y visual adecuada y suficiente para cada persona a bordo en casos de escape de emergencia (de lugares específicos), sujeto a lo siguiente:

- No es aceptable una protección respiratoria a base de filtros contra partículas.
- El aparato respiratorio autónomo debe tener por lo menos una duración de servicio de 15 minutos.
- La protección respiratoria para escape de emergencia no debe ser usada para el combate de incendios o manejo de carga, y debe ser debidamente marcada para tal efecto.

4.2.11 La embarcación debe tener a bordo equipo médico de primeros auxilios incluyendo equipo para resucitación por oxígeno y antídotos contra los efectos dañinos que produzcan los productos que son transportados.

4.2.12 Se deben tener disponibles en cubierta, regaderas para descontaminación y lavaojos adecuadamente señalados y en lugares convenientes.

4.3 Embarcaciones que transportan gases licuados a granel (buquetanques gaseros).

4.3.1 Para la protección de los tripulantes ocupados en las operaciones de carga y descarga se proveerá de equipo de protección personal específico que los proteja de los riesgos inherentes al manejo de esas sustancias, que proteja también los ojos, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos de que se trate.

4.3.2 Los espacios confinados y en los que pueda haber fugas de líquidos o de vapores inflamables, como los cuartos de bombas y compresores para la carga, deben estar provistos de una instalación fija que pueda extinguir un incendio declarado en dichos espacios. Además, este sistema u otro sistema fijo debe poder inertizar el espacio de que se trate después de un incendio para que éste no vuelva a producirse (suponiendo que los límites del espacio permanecen intactos). Se deben evitar los sistemas extintores
por anhídrido carbónico y vapor, a menos que se estudie como es debido, el riesgo originado por la electricidad estática.

Asimismo, se deben tomar las medidas necesarias para que las aberturas de ventilación y de cualquier otra índole del espacio de que se trate quede cerrada y para que, en los casos necesarios, suene en dicho espacio una señal de alarma que permita al personal que se encuentre en su interior, efectuar una evacuación de emergencia antes de que se dé entrada al agente inertizador o extintor.

4.3.3 De acuerdo con su capacidad total de carga, toda embarcación que transporte productos inflamables debe llevar equipos de bombero en la proporción que a continuación se indica:

- Inferior a 2,000 metros cúbicos: 2 equipos.
- Entre 2,000 y 5,000 metros cúbicos: 4 equipos.
- Superior a 5,000 metros cúbicos: 5 equipos.

4.3.4 Además de los equipos de bombero prescritos en el párrafo anterior, se debe proveer un número suficiente que nunca será inferior a dos juegos completos de equipo de seguridad, cada uno de los cuales habrá de permitir al personal entrar en un espacio lleno de gas y trabajar en él. Dichos juegos se ajustarán a lo prescrito en los párrafos 4.2.4 y 4.2.5, excepto por la capacidad de aire del equipo autónomo de protección respiratoria, que será de 1,200 litros por lo menos.

4.3.5 Como posibilidad distinta, la Autoridad Marítima puede aceptar un sistema de conductos de aire, como el descrito en el párrafo 4.2.6.

4.3.6 El equipo de protección personal prescrito en los apartados 4.3.1 y 4.3.3 se debe guardar en gabinetes adecuados, señalizados y fácilmente accesibles.

5. Procedimientos

5.1 La embarcación o artefacto naval debe contar con un Sistema de Administración de Seguridad, que incluya el empleo de los equipos de protección personal a bordo y los oficiales y tripulantes deben estar familiarizados con la ubicación y el empleo de los mismos.

5.2 Se deben establecer los procedimientos para utilizar el equipo de protección personal en caso de presentarse una situación de incendio, accidente o incidente a bordo de embarcaciones que transporten mercancías peligrosas, de acuerdo a lo que enuncian los siguientes lineamientos:

- Los procedimientos de emergencia (FEM) contenidos en el Suplemento del Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG), y para los cuales el número de ficha de emergencia correspondiente a cada producto o grupo de productos se indica en el Indice General del
  Código IMDG.
- Las fichas de emergencia que para cada producto transportado debe proporcionar el embarcador, mismas que en su punto número 8 señalan el equipo de protección a ser utilizado para la atención de un incendio, accidente o incidente que involucre a tal producto.

5.3 Una vez que el suceso se ha dado por terminado, se debe proceder con la limpieza del equipo que
así lo amerite, o con la sustitución de aquel equipo que por su uso o características no sea

recomendable
su reutilización.

6. Vigilancia

La dependencia encargada de la vigilancia y verificar el cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por conducto de la Dirección General de Marina Mercante.

7. Bibliografía

- Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 1974/78 (SOLAS 74/78), en su forma enmendada, reglas 17 y 54, capítulos II-2 y IX.
- Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que Transporten Gases Licuados a Granel (CIG), Capítulo 14.
- Código Internacional para la Construcción y el Equipo de Buques que Transporten Productos Químicos Peligrosos a Granel (Código CIQ), Capítulo 17.
- Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG), Enmienda 29-98.
- Código para la Construcción y el Equipo de Unidades Móviles de Perforación Mar Adentro (Código MODU), Capítulo 9.
- Manual de prevención contra incendios a bordo de los buques. U.S. Maritime Administration. Traducción de Petróleos Mexicanos,1984.
- Resolución A. 602 (15) Directrices revisadas aplicables a los extintores portátiles de incendios para usos marinos, aprobada por la Asamblea de la Organización Marítima Internacional (OMI), el 19 de noviembre de 1987.

8. Concordancia con normas internacionales

Esta Norma Oficial Mexicana no concuerda con normas internacionales por no existir éstas en el momento de su elaboración.

9. Vigencia

Esta Norma Oficial Mexicana entrará en vigor 60 días naturales, posteriores a su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

México, D.F., a 23 de agosto de 2002.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Marítimo y Puertos, **Francisco Juan Avila Camberos**.- Rúbrica.

PODER JUDICIAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

LISTA de personas admitidas al Primer Concurso de Oposición Libre para la Designación de Magistrados de Circuito, ordenada por el Acuerdo General 42/2002 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura Federal.- Secretaría Ejecutiva del Pleno.

LISTA DE PERSONAS ADMITIDAS AL PRIMER CONCURSO DE OPOSICION LIBRE PARA LA DESIGNACION DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO, ORDENADA POR EL ACUERDO GENERAL 42/2002 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en sesión de cuatro de septiembre de dos mil dos, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Acuerdo General 42/2002, mediante el cual se fijaron las bases del Primer Concurso de Oposición Libre para la Designación de Magistrados de Circuito;

SEGUNDO.- Que en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en términos del punto primero del acuerdo general citado en el considerando que antecede, se ordenó emitir la convocatoria correspondiente dirigida a las personas que estuvieran interesadas en participar en el referido concurso y cumplieran con los requisitos establecidos para ello;

TERCERO.- Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 114, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el punto segundo del acuerdo general en cita, la convocatoria se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** y por dos veces en uno de los diarios de mayor circulación nacional, con un intervalo de cinco días hábiles entre cada una de estas últimas publicaciones; por lo que una vez recibidas las solicitudes de los aspirantes con la documentación respectiva, el Instituto de la Judicatura Federal llevó a cabo el análisis correspondiente y elaboró la lista de las personas que presentaron la documentación relativa para intervenir en el citado concurso de oposición, la cual puso a la consideración de la Comisión de Carrera Judicial, según lo ordenado por el punto sexto del acuerdo en cita;

CUARTO.- Que en sesión de tres de octubre de dos mil dos, con apoyo en el citado punto sexto del Acuerdo General 42/2002, la Comisión de Carrera Judicial dispuso que el Director del Instituto de la Judicatura Federal compareciera ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y presentara la lista de las personas que exhibieron la documentación relativa para participar en el Primer Concurso de Oposición Libre para la Designación de Magistrados de Circuito; lista que debería contener las observaciones que en relación con la misma se hicieron por parte de la Comisión de Carrera Judicial;

QUINTO.- Que en sesión de dieciséis de octubre de dos mil dos, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal recibió la lista de las personas que presentaron documentos para participar en el Primer Concurso de Oposición Libre para la Designación de Magistrados de Circuito y determinó las personas que podrán participar en el Concurso de Oposición Libre de que se trata;

SEXTO.- Que de conformidad con lo que se establece en el tercer párrafo del punto sexto del Acuerdo General 42/2002, la lista de las personas admitidas al Primer Concurso de Oposición Libre para la Designación de Magistrados de Circuito debe publicarse en el **Diario Oficial de la Federación**, así como en un diario de circulación nacional, dándose a la publicación señalada en primer término el carácter de notificación para todos los participantes.

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones señaladas, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ordena publicar la

LISTA DE PERSONAS ADMITIDAS AL PRIMER CONCURSO DE OPOSICION LIBRE PARA LA DESIGNACION DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO, ORDENADA POR EL ACUERDO GENERAL 42/2002 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

La participación de las personas enlistadas estará sujeta a lo dispuesto en los puntos quinto, inciso 7), y decimoprimero del Acuerdo General 42/2002 que fija las bases del Primer Concurso Libre de Oposición para la Designación de Magistrados de Circuito.

1 Alarcón Meixueiro Edith Encarnación

2 Alcázar Martínez Fernando

3 André Nalda José Neals

4 Archundia Ortiz Agustín

5 Barbosa Alanís Ricardo Hiram

6 Be Herrera Mirza Estela

7 Chiñas Fuentes Amado

8 Figueroa Salmorán Jacinto

9 García Anzures Gerardo Eduardo

10 González García Antonio

11 Maycott Morales Oscar Mauricio

12 Padilla Gómez Francisco Miguel

13 Rocca Valdez Francisco Javier

14 Rodríguez Celaya Armida Elena

15 Rodríguez Jara Myriam del Perpetuo Socorro

16 Valdivia Hernández Antonio

17 Valle Hernández José

Los participantes que hayan cursado la Especialidad en Administración de Justicia en Tribunales de Circuito, Primera, Segunda, Tercera o Cuarta Generaciones, impartidas por el Instituto de la Judicatura Federal, estarán exentos de presentar la primera y segunda fases de la primera etapa del Concurso, no así del análisis de sus antecedentes curriculares a que se refiere la fase tercera de la misma etapa.

TRANSITORIO

UNICO.- Publíquese la presente lista en el **Diario Oficial de la Federación**, así como en un diario de circulación nacional, otorgándose a la primera de las publicaciones señaladas, el carácter de notificación para todos los participantes.

EL LICENCIADO **GUILLERMO ANTONIO MUÑOZ JIMENEZ**, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CERTIFICA: Que la Lista de Personas Admitidas al Primer Concurso de Oposición Libre para la Designación de Magistrados de Circuito, Ordenada por el Acuerdo General 42/2002 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, fue sancionada por el propio Pleno, en sesión de dieciséis de octubre de dos mil dos, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: Presidente Ministro **Genaro David Góngora Pimentel**, **Adolfo O. Aragón Mendía**, **Manuel Barquín Alvarez**, **Jaime Manuel Marroquín Zaleta**, **José Guadalupe Torres Morales** y **Sergio Armando Valls Hernández.-** México, Distrito Federal, a dieciséis de octubre de dos mil dos.- Conste.- Rúbrica.

LISTA de personas admitidas al Segundo Concurso de Oposición Libre para la Designación de Jueces de Distrito, ordenada por el Acuerdo General 43/2002 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Consejo de la Judicatura Federal.- Secretaría Ejecutiva del Pleno.

LISTA DE PERSONAS ADMITIDAS AL SEGUNDO CONCURSO DE OPOSICION LIBRE PARA LA DESIGNACION DE JUECES DE DISTRITO, ORDENADA POR EL ACUERDO GENERAL 43/2002 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que en sesión de cuatro de septiembre de dos mil dos, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Acuerdo General 43/2002, mediante el cual se fijaron las bases del Segundo Concurso de Oposición Libre para la Designación de Jueces de Distrito;

SEGUNDO.- Que en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en términos del punto primero del acuerdo general citado en el considerando que antecede, se ordenó emitir la convocatoria correspondiente dirigida a las personas que estuvieran interesadas en participar en el referido concurso y cumplieran con los requisitos establecidos para ello;

TERCERO.- Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 114, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el punto segundo del acuerdo general en cita, la convocatoria se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** y por dos veces en uno de los diarios de mayor circulación nacional, con un intervalo de cinco días hábiles entre cada una de estas últimas publicaciones; por lo que una vez recibidas las solicitudes de los aspirantes con la documentación respectiva, el Instituto de la Judicatura Federal llevó a cabo el análisis correspondiente y elaboró la lista de las personas que presentaron la documentación relativa para intervenir en el citado concurso de

oposición, la cual puso a la consideración de la Comisión de Carrera Judicial, según lo ordenado por el punto sexto del acuerdo en cita;

CUARTO.- Que en sesión de tres de octubre de dos mil dos, con apoyo en el citado punto sexto del Acuerdo General 43/2002, la Comisión de Carrera Judicial dispuso que el Director del Instituto de la Judicatura Federal compareciera ante el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y presentara la lista de las personas que exhibieron la documentación relativa para participar en el Segundo Concurso de Oposición Libre para la Designación de Jueces de Distrito; lista que debería contener las observaciones que en relación con la misma se hicieron por parte de la Comisión de Carrera Judicial;

QUINTO.- Que en sesión de dieciséis de octubre de dos mil dos, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal recibió la lista de las personas que presentaron documentos para participar en el Segundo Concurso de Oposición Libre para la Designación de Jueces de Distrito y determinó las personas que podrán participar en el Concurso de Oposición Libre de que se trata;

SEXTO.- Que de conformidad con lo que se establece en el tercer párrafo del punto sexto del Acuerdo General 43/2002, la lista de las personas admitidas al Segundo Concurso de Oposición Libre para la Designación de Jueces de Distrito debe publicarse en el **Diario Oficial de la Federación**, así como en un diario de circulación nacional, dándose a la publicación señalada en primer término, el carácter de notificación para todos los participantes.

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones señaladas, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal ordena publicar la

LISTA DE PERSONAS ADMITIDAS AL SEGUNDO CONCURSO DE OPOSICION LIBRE PARA LA DESIGNACION DE JUECES DE DISTRITO, ORDENADA POR EL ACUERDO GENERAL 43/2002 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

La participación de las personas enlistadas estará sujeta a lo dispuesto en los puntos quinto, inciso 7), y decimoprimero del Acuerdo General 43/2002 que fija las bases del Segundo Concurso Libre de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito.

1.- Abalos Leos Martín
2.- Abaunza Aguado José Francisco
3.- Acevedo Alonso José Marcelino Anastasio
4.- Acevedo Castro José Antonio
5.- Aceves Pacheco Cecilia
6.- Acosta González Roberto
7.- Adame Muñoz Beatriz
8.- Aguilar Chávez Nava Alma Delia
9.- Aguilar Espinosa Hugo Arnoldo
10.- Aguilar Hernández Rafael
11.- Aguilar Lemus María Ofelia *****
12.- Aguilar Rodríguez Juan
13.- Aguilar Rosete Felipe Eduardo *****
14.- Aguirre Hinojoza Saúl
15.- Alarcón Ayala Concepción Héctor
16.- Alatorre Rodríguez Francisco Javier
17.- Albarrán Corona Raymundo
18.- Alcántar Anguiano Arturo
19.- Alcaraz Bustillos Vera Dionicia
20.- Alcocer Enríquez Silvia Beatriz
21.- Alejandre Rodríguez Silvia
22.- Alemán Mundo Ma. del Rosario
23.- Alemán Mundo Marcial
24.- Alfaro Victoria Guillermo
25.- Almazán Barrera Luis
26.- Almazán Cervantes Salvador
27.- Alquicira Sánchez Gabriela Esperanza
28.- Alvarado Estrada Raúl *****
29.- Alvarez Cañedo Araceli
30.- Alvarez Sánchez Silvia Mírthala
31.- Alvarez Villanueva Salvador
32.- Amaro Cázarez Arturo
33.- Amaya Salvador Arturo Ramiro
34.- Ambriz López Vladimiro
35.- Amezcua Serrallonga Jesús Alberto
36.- Anaya García Abel
37.- Andrade Bujanda Rafael

38.- Angel Becerra David
39.- Angel Ramírez Marcelina
40.- Angulo Garfias Raúl
41.- Aponte Sosa Carlos Manuel
42.- Aranda Llamas Raúl
43.- Araya Valdés Víctor Manuel
44.- Arciniega Franco Jorge
45.- Arellano Valdez José de Jesús
46.- Argumosa López Rosalía
47.- Arias Rodríguez Socorro
48.- Arias Vázquez Jorge Dimas
49.- Arredondo Gallegos Jorge Cristóbal
50.- Arredondo Jiménez Gonzalo
51.- Arreguín Hernández Adriana
52.- Arreola Chávez Francisco de Jesús
53.- Arriaga Farías José Alberto
54.- Atilano Villagarcía Trinidad
55.- Avalos Mendoza Miguel
56.- Avalos Rodríguez María Elena
57.- Avecia Solano Gloria
58.- Avila Negrón Santiago
59.- Avila Rojas Norma María Magdalena
60.- Avila Santacruz Juan Antonio
61.- Bacab Pech Guillermo
62.- Baeza León Constantino
63.- Ballinas Becerra Julio César
64.- Baltazar Calderón Arturo
65.- Banda Martínez Jacinto
66.- Banderas Trigos Vicente Cuauhtémoc
67.- Bañales Sánchez José de Jesús
68.- Barajas Villa Mauricio
69.- Baray Sánchez Carlos Natividad
70.- Barba Crosby Sergio Rafael
71.- Barba Ramírez María Oralia
72.- Barraza Uribe Enrique Luis
73.- Barredo Villanueva David Alberto
74.- Barrientos Veliz Francisco
75.- Barrios Carballo Iberia Esperanza
76.- Barrios Solís Marta Elena
77.- Bautista Renedo Rodrigo
78.- Bautista Vázquez Juan Miguel de Jesús
79.- Becerra Castellanos Guillermo
80.- Becerril Marañón Arturo Patricio
81.- Bermúdez Hernández Alfonso
82.- Bernal Escalante Humberto
83.- Bernal Juárez José de Jesús
84.- Betancourt Vázquez Miguel Angel
85.- Blanco Salazar Isidro Rafael
86.- Bolaños Espino Alma Rosa
87.- Bolaños Martín Luis
88.- Bolaños Valadez Octavio *****
89.- Borrego Dorantes Martín
90.- Bravo Melgoza Víctor Miguel
91.- Brieba De Castro Juan Mateo *****
92.- Brión Ibarra José Angel
93.- Briseño Arias Abel
94.- Briseño Sáinz Germán
95.- Bucio Méndez Ricardo Alejandro
96.- Buenfil Díaz Iván
97.- Bueno Abitia María de los Angeles
98.- Burgoa Domínguez Marco Tulio *****
99.- Burguet Franco Vicente David
100.- Caballero Salas Rubén
101.- Cabrera Garnica Juan Francisco
102.- Calleja López Rigoberto
103.- Caloca Cortés Juan Carlos
104.- Camacho Arellano Martha
105.- Camacho Camacho Luis Armando
106.- Camacho Rivera Fidelia
107.- Campos Bedolla María del Carmen
108.- Campos Sauceda Ramona Manuela
109.- Campuzano Caballero María Claudia
110.- Campuzano Rodríguez Antonio
111.- Cano Martínez José Luis Rafael
112.- Canseco Girón Jorge
113.- Cantú Alvarez Jaime
114.- Cantú Treviño Juan José
115.- Cantú Treviño Mario
116.- Caravantes Sánchez Manuel
117.- Cárdenas Cornejo Marco Antonio

118.- Cardoso Capistrán Laura Olivia
119.- Carmona Arcos Teresa
120.- Carranza Ochoa Pedro
121.- Carreño Caballero Javier
122.- Carrera Carrera José Antonio
123.- Carrillo De León Gonzalo Higinio
124.- Casas Bastida Alejandro
125.- Cassellis Vázquez Carlos
126.- Cassou Ruiz Jorge Esteban
127.- Castañeda Bonfil Arturo
128.- Castañeda Leos Armando
129.- Castañeda Niebla Miguel Angel
130.- Castañón Gutiérrez Baltazar
131.- Castellanos Aguilar Salvador de Jesús
132.- Castellanos Chargoy Javier
133.- Castillo Hernández Teresa
134.- Castillo López Enrique Alfonso
135.- Castillo Martínez Gerardo
136.- Castrejón Miranda Pedro Isaías
137.- Castro Heredia Felizardo
138.- Caudillo Peña Irma
139.- Cedeño Muñoz Espartaco
140.- Cepeda Treviño Rogelio
141.- Cerezo Vélez José Félix
142.- Cervantes Gutiérrez Javier Alfredo
143.- Chan Caamal María Guadalupe *****
144.- Chan Cota Enrique
145.- Chávez Montes Juan José
146.- Chávez Orona Ydolina
147.- Chávez Rodríguez Rafael Alberto
148.- Cifuentes Bazán Lourdes Minerva
149.- Cisneros Delgado Roberto
150.- Cisneros Vargas Isabel
151.- Clemente Cervantes José
152.- Coello Avendaño Víctor Hugo
153.- Contreras Balderas Serafín
154.- Contreras García Martín
155.- Contreras Jurado María Guadalupe
156.- Cordero Avilez Eusebio Manuel Rafael
157.- Cordero Carrera Roberto Martín
158.- Córdoba Hernández Felipe
159.- Córdova Becerril José Roberto
160.- Córdova Díaz Amelia
161.- Corona Leurette Samuel Eduardo
162.- Corona Ortíz Angel
163.- Coronado Medina Julio Rogelio *****
164.- Corral Vera Gabriela Guadalupe
165.- Cortés Esponda Leopoldo de Jesús
166.- Cortés Martínez David *****
167.- Cortez Arias Baltazar
168.- Corzo Sosa Edgar
169.- Coss Trueba Sergio Javier
170.- Costilla Hernández Gabriel
171.- Cova Castillo Judith
172.- Covarrubias Reyes Román
173.- Covián Ramírez Silvia Marinella
174.- Cruz Carmona Sergio Ignacio
175.- Cruz Pérez Oscar
176.- Cruz Puga Ignacio
177.- Cruz Ricárdez Julio César
178.- Cuayahuitl Orozco Jaime Arturo
179.- Cuenca Zamora Ignacio
180.- Cueto López Gilberto
181.- De Anda García Claudia
182.- De la Cruz Moreno Alfredo
183.- De la Rosa Baraibar Alberto Augusto *****
184.- De la Rosa Hernández Ramón
185.- De la Rosa Ortega María Catalina
186.- De Loza Cruz Benjamín
187.- Del Razo Ruiz Armando
188.- Del Río Montoya Camila
189.- Del Toro Valencia María Angélica
190.- Díaz Cruz Carlos
191.- Díaz Cuevas Francisco Javier
192.- Díaz Mora Ricardo Horacio
193.- Díaz Nárez René
194.- Díaz Zepeda Hilda Angelia
195.- Domínguez Avilán Carlos Rafael
196.- Domínguez Balboa Hugo
197.- Domínguez Gámez Manuel de Jesús

198.- Duarte Briz Zirahuén
199.- Duarte Prieto Jesús de la Caridad
200.- Durán De Jesús Julián
201.- Durán Martínez Elia Aurora
202.- Escalera Soto Francisco Javier
203.- Escandón Carrillo Yolanda Leticia
204.- Escudero Contreras Francisco Octavio
205.- Espejel Ramírez David
206.- Espinosa Hernández Delia
207.- Esponda Rincón José Alejandro *****
208.- Esquer Limón Cuauhtémoc
209.- Esquinca Gutiérrez José Rodulfo
210.- Esquivel Martínez Oscar
211.- Esquivel Pérez Elvia Lidia
212.- Esquivel Posada Jesús Alberto
213.- Estrada Haro Heriberto
214.- Estrever Escamilla Martha
215.- Faz Mendoza Ma. Cira
216.- Félix Brasil Jesús Arcadio
217.- Félix Ruiz Agapito
218.- Fernández Castillo Raúl
219.- Ferrer Chávez María Manuela
220.- Ferreyra González Jesús Armando
221.- Figueroa Soto César Augusto
222.- Flamand Merino Eduardo
223.- Flores Belmont Juan Manuel
224.- Flores Carmona Salvador
225.- Flores Fuentes Juan José
226.- Flores Gutiérrez Alberto Caridad
227.- Flores Jiménez Héctor Marcelino
228.- Flores Rodríguez Alfredo
229.- Flota Ocampo Nilvia Josefina
230.- Fong Hernández Francisco
231.- Forment Hernández María Antonieta
232.- Fortuny Valdivia Ensueño
233.- Franco Avalos Julio César
234.- Franco Flores Rafaela Reyna
235.- Frisby Vega Braulio Pelayo
236.- Fuentes Muñoz Hugo Armando
237.- Fuentes Sánchez Blanca
238.- Fuerte Cortés Gloria
239.- Galván Mendioza Juan Manuel
240.- Gamboa De la Peña Jorge Arturo
241.- Garcés Yépez Raymundo
242.- García Aldaz Arturo
243.- García Astudillo Faustino
244.- García Baeza Edwin Noé
245.- García Barrón Gildardo
246.- García Campos Elías
247.- García Franco Aída
248.- García Galicia Alicia
249.- García Gámez María Antonia
250.- García Hernández Daniel Juan
251.- García Jiménez Arturo
252.- García Malo Carlos Francisco
253.- García Malo Juan Miguel
254.- García Martínez Beatriz
255.- García Martínez Rolando Javier
256.- García Martínez Susana
257.- García Monroy Martín Jesús
258.- García Nieto Lourdes
259.- García Núñez Alejandro
260.- García Palacios José Alfredo
261.- García Ponce Roberto
262.- García Quiroz José Fernando
263.- García Ramos Raúl
264.- García Rodríguez Manuel
265.- García Rodríguez Ramón Eusebio
266.- García Salas Irma Graciela
267.- García Torres José Alberto
268.- García Valdés Manuel
269.- García Verdín Jorge
270.- Garduño Rosales Ricardo
271.- Garibay García Pedro
272.- Garza Chávez Leonor
273.- Garza Ríos María de la Luz
274.- Gaytán Marbán Sergio
275.- Germán Cárdenas Rosana Violeta
276.- Godínez Roldán Daniel
277.- Gómez Avilés Eloy

278.- Gómez Curiel Ricardo Brígido
279.- Gómez Espinosa Flor del Carmen
280.- Gómez Garza Rebeca del Carmen
281.- Gómez López María Concepción
282.- Gómez Mendoza Enrique
283.- Gómez Vega María del Carmen
284.- Gómez Luna Zepeda Antonio *****
285.- González Acosta Héctor Agustín
286.- González Dávalos Carlos Eusebio
287.- González Díaz Berenice
288.- González Díaz María Inocencia
289.- González García Nelda Gabriela
290.- González González María Dolores
291.- González Hernández Martha
292.- González Hernández Susana
293.- González Marañón José Luis
294.- González Medrano Blanca Isabel
295.- González Meyenberg Enrique Claudio *****
296.- González Palacios Cecilia
297.- González Ramos Nancy Dolores
298.- González Robledo J. Jesús
299.- González Rodríguez Susana Magdalena
300.- González Sánchez Celso Efraín
301.- Gordillo Solís Walberto
302.- Granados Guerrero Laura
303.- Guel De la Cruz Víctor Hugo
304.- Guerrero Herrera Hilda Irma
305.- Guerrero Láscarez Waldo
306.- Gutiérrez Arredondo Omar René
307.- Gutiérrez Martínez José Martín
308.- Gutiérrez Muñoz Pedro
309.- Guzmán Samuel René
310.- Guzmán Marín Sergio
311.- Hariz Piña Jaime Salomón
312.- Hernández Castrejón Martha Norma
313.- Hernández Flores Ismael
314.- Hernández García Gloria Teresa
315.- Hernández García Lorenzo
316.- Hernández García María Juana
317.- Hernández González Artemio *****
318.- Hernández Guerrero Héctor Rafael
319.- Hernández Guerrero María del Carmen Leticia
320.- Hernández Hernández Luis Angel
321.- Hernández Hernández Salvador
322.- Hernández Hernández Saulo
323.- Hernández Lima José Ybraín *****
324.- Hernández Loyo Sergio
325.- Hernández Martínez Miguelina
326.- Hernández Meza Antonio
327.- Hernández Ortiz María Guadalupe
328.- Hernández Páez Juan Manuel
329.- Hernández Rivera Juvenal
330.- Hernández Ruiz Julio Arturo
331.- Hernández Sánchez Miguel
332.- Hernández Tirado Marco Antonio
333.- Hernández Torres Héctor Enrique
334.- Hernández Trejo José Antonio
335.- Hernández Zamora Zeus
336.- Herrejón Saucedo Dora Elia
337.- Herrera Gómez Manuel Alejandro
338.- Herrera Hernández Mario Augusto
339.- Herrera Sánchez Javier Amaury
340.- Herrera Muzgo Rebollo Alejandro José
341.- Ibáñez Méndez José Carlos
342.- Ibarra Navarrete Luis Alberto
343.- Interián Parra Luis Enrique
344.- Inzunza Leyva Eduardo Lamberto
345.- Iñiguez Delgadillo Orlando
346.- Islas Hernández Yolanda
347.- Jácome Maldonado Rosario
348.- Jáuregui Arroyo Pablo
349.- Jerezano Treviño Luis Armando
350.- Jiménez Aguilar Elisa *****
351.- Jiménez Chávez Ramón Alejandro
352.- Jiménez Jiménez Román
353.- Jiménez Martínez Javier
354.- Joachin Gómez Arnulfo
355.- Juárez Espinoza José Ricardo
356.- Juárez García Gloria Angélica
357.- Juárez Hernández Guadalupe Patricia

358.- Ladrón de Guevara de la Tejera Juan Manuel

359.- Lagunas Vázquez Luz María

360.- Lara Dávila José Caín

361.- Larios Velázquez Iván Benigno *****

362.- Larumbe Radilla Livia Lizbeth

363.- Lázaro Guzmán Héctor

364.- Leal Alba Rubén Rogelio

365.- Legorreta Garibay José Luis *****

366.- Lemus Quintero Amado

367.- Lerma Moreno Eligio Nicolás

368.- Leyva Zetina Yolanda

369.- Leza Juárez Leticia

370.- Lim Aguirre Carlos Ariel

371.- Lobo Domínguez Blanca

372.- López Chávez Gerardo

373.- López Corona Gilberto Apolonio

374.- López Cruz Carlos

375.- López Espíndola Leticia Araceli

376.- López Espinoza Gustavo Eduardo

377.- López García Julio

378.- López Morales Mario Alberto

379.- López Quiroz Juana Martha

380.- López Rentería Antonio

381.- López Rodríguez Ricardo

382.- López Torres José de Jesús

383.- López Valdivieso Héctor

384.- López Villarreal María del Socorro

385.- Loranca Ventura Nelson

386.- Lozano Martínez Javier Rubén

387.- Lugo Arellano Rafael

388.- Lugo González José Maximiano

389.- Lugo Selvera Severo

390.- Luján Hidalgo Sergio

391.- Luna Beltrán José Ubaldo

392.- Luna Vargas Víctor Hugo

393.- Luque Gómez Juan Carlos

394.- Magallón Trujillo Miguel César

395.- Magaña Díaz Enrique

396.- Magaña Valencia María Mercedes

397.- Magdaleno Añorve Tomás Antonio

398.- Maldonado Cruz Antonio Artemio

399.- Maldonado Morales Omar

400.- Maldonado Porras Rafael

401.- Maldonado Trenado Adalberto

402.- Maldonado Vera Francisco

403.- Marcelo Iniesta José Felipe

404.- Mares Velázquez María Guadalupe

405.- Marmolejo Serrano Leonardo

406.- Márquez López José Manuel

407.- Martínez Carrillo Gerardo

408.- Martínez Cerda Juliana

409.- Martínez Cisneros Germán *****

410.- Martínez Cruz Fausto Amador

411.- Martínez De la Vega Eva Elena

412.- Martínez Garza Bertha Beatriz

413.- Martínez Garza Carlos Eugenio

414.- Martínez Guzmán Enrique

415.- Martínez Hernández Germán

416.- Martínez Luis José Luis

417.- Martínez Martínez Raúl *****

418.- Martínez Mendoza Vidal Oscar

419.- Martínez Prado Juan Ruperto

420.- Martínez Tejeda Tomás

421.- Martínez Vanoye Jesús

422.- Martínez Vega José Javier

423.- Martínez Vidal Sergio Armando

424.- Martínez Zarzoza Julián

425.- Mason Cal y Mayor Jorge

426.- Mata Cano Felipe Fernando

427.- Mata Del Angel Julio

428.- Mateos García Arnulfo

429.- Mayorquín Trejo Martín

430.- Medécigo Rodríguez Miguel Angel

431.- Medina Arellano Luis Humberto

432.- Medina Montes Miguel Angel

433.- Medina Montoya Arturo

434.- Medina Ramos Hugo René

435.- Medrano García Carlos

436.- Mejía Gutiérrez Antonio Cosme

437.- Mejía Perea Jorge Luis

438.- Meléndez Valerio María del Carmen
439.- Mena Cardeña Leticia
440.- Méndez Palacios Carlos Alberto
441.- Mendieta Núñez Adilia
442.- Mendoza Avila Heriberto
443.- Mendoza Suárez Vinicio
444.- Meneses Tepepa Raymundo
445.- Meraz Fitzmaurice Armando Rafael
446.- Meza Camacho Rolando
447.- Moctezuma Barragán Gonzalo
448.- Moguel Acheyta Beatriz
449.- Mojica Sosa J. Arturo
450.- Molina Pérez Mario
451.- Mondragón Rosas Alonso
452.- Mondragón Quintana Leticia
453.- Monreal Cuéllar Juan de Dios
454.- Montalvo Vázquez Miguel Angel
455.- Montes Gutiérrez Jorge Erik
456.- Montes de Oca Domínguez Claudia Luvia
457.- Montesano Villamil René
458.- Montiel Torres Cruz
459.- Montoya García José Antonio
460.- Montoya Gutiérrez José Alberto
461.- Montoya Rodríguez Rogelio Alberto
462.- Mora Dorantes Josefina del Carmen
463.- Mora Rodríguez Raquel
464.- Morales Arreola Alfonso Bernabé
465.- Morales Morales José Martín
466.- Morales Romero Yolanda
467.- Morales Sosa Judith de la Concepción
468.- Morán González Darío
469.- Moreno Flores Arnulfo
470.- Moreno Miramontes Jorge
471.- Moreno Solé Juan José
472.- Moreyra Lovillo Susana
473.- Morrison Pérez Margarita
474.- Mota Guzmán Efraín
475.- Mota Velasco Sánchez Sandra
476.- Muñiz Cárdenas Marco Antonio
477.- Muñoz Aguilar Elia
478.- Muñoz González Jaime
479.- Muñoz Macías María Dolores
480.- Muñoz Torres Amador
481.- Murillo Aceves Oscar Javier
482.- Muro Arellano Martha Leticia *****
483.- Murrieta López José de Jesús *****
484.- Nájera Flores Laura Ivón
485.- Naranjo Espinosa Gustavo
486.- Narváez Solís Abel Aureliano *****
487.- Navarro Ledesma David Alberto
488.- Navarro Plata Arturo
489.- Navarro Sánchez Ramos
490.- Negreros Castillo Paulina
491.- Nieto Chacón Rebeca
492.- Nieto Mendoza Rosendo
493.- Noguera Gregoire Rubén Darío
494.- Noriega Sánchez María del Socorro
495.- Núñez Cajigal Sergio Raúl
496.- Núñez Cháirez Alfonso
497.- Núñez González Salvador
498.- Núñez Ortega Irene
499.- Núñez Sandoval Luis
500.- Ochoa Alcaraz José
501.- Ochoa Murillo Rigoberto
502.- Oficial Huesca Isaías Nicolás
503.- Ojeda Arellano Olga María Josefina
504.- Olea Elizalde Pedro
505.- Oliva Pérez Ariel
506.- Olivares López Jorge Luis
507.- Omaña Ramírez María Dolores
508.- Orbe De la O Everardo
509.- Orduña Martínez José Luis
510.- Ornelas Palomino Jorge Alfredo
511.- Orozco Baltazar María de la Luz
512.- Orta Méndez José Guadalupe *****
513.- Ortega Velázquez Eugenio Fernando
514.- Ortega Zamora María Trifonía
515.- Ortiz Brena Martha Llamile
516.- Ortiz Cobos Leonardo Julio
517.- Ortiz Adame Raúl

518.- Ortiz Alcaráz Cayetano Manuel
519.- Ortiz Iribe Julia
520.- Ovando Santos Marco Antonio
521.- Padró Ramírez Rogelio
522.- Padrón Nares Nora Esther
523.- Páez Alcalá Edmundo
524.- Pallares Chacón José Luis
525.- Pallares Peralta Manuel
526.- Palomares Martínez Gerardo Manuel
527.- Parada Ruiz María del Rosario
528.- Pardo Castañeda Pablo
529.- Paredes Salazar Julio
530.- Parra García Rosa María
531.- Parra González Jorge Iván
532.- Peña Martínez Miguel Angel
533.- Peñaloza Mendoza José Francisco
534.- Pérez Aguirre Ignacio
535.- Pérez Hernández Juan Carlos
536.- Pérez Marroquín Jaime
537.- Pérez Patiño Eduardo
538.- Pérez Ramírez Eduardo *****
539.- Pérez Rodríguez José Merced
540.- Pérez Romero Ma. Luisa
541.- Pérez Telles Aureliano
542.- Pescador Cano Luis Hannibal
543.- Pineda Pineda María de la Luz
544.- Pita Balansar Darío
545.- Pleités Morales Raúl Ernesto
546.- Ponce Castillo Priscila
547.- Ponce Martínez Lorenzo
548.- Ponce Peña Angel
549.- Ponce Silva María del Carmen
550.- Priego Enríquez Ana Luisa Hortensia
551.- Quero Mijangos Luis Rafael del Carmen
552.- Quijano Anaya Rodolfo
553.- Quintanilla Vega José Merced
554.- Quinto Camacho Alberto
555.- Quiñones Rodríguez Pablo
556.- Quistián Espericueta José Manuel
557.- Rabanales Sevilla Ciro Alonso
558.- Ramírez Alvarado Julia
559.- Ramírez Cuevas Francisco
560.- Ramírez Gálvez Néstor
561.- Ramírez Gámez Enrique
562.- Ramírez González Miguel Angel
563.- Ramírez Hernández José Arturo
564.- Ramírez Hernández Martha Lilia
565.- Ramírez Huerta Mercedes
566.- Ramírez Ibarra Juan Martín
567.- Ramírez Leyva José Alberto
568.- Ramírez Mendívil Luis Lucendo
569.- Ramírez Morales María del Carmen
570.- Ramírez Rangel José Roberto
571.- Ramírez Rivera Irma
572.- Ramírez Romero Luisa
573.- Ramos Bonifaz José Angel
574.- Ramos Pérez Miguel Angel
575.- Rangel Cervantes J. Martín
576.- Rayas Vázquez Ricardo Alejandro
577.- Rebolledo Peña Francisco Javier
578.- Rebollo Torres Antonio *****
579.- Regalado Zamora Miguel Angel
580.- Rentería Dávalos Jesús
581.- Resendis Ramírez Rogelio
582.- Revuelta López María Guadalupe
583.- Reyes Gálvez José Eliseo
584.- Reyes Medina Jaime Alonso
585.- Reyes Preciado María del Socorro
586.- Reyna Soria Gabriela
587.- Rico Ibarra Antonio
588.- Rincón Gordillo Carlos Ramón
589.- Rivera Díaz Domingo Maximino
590.- Rivera Durón Rafael
591.- Rodarte Magdaleno Mercedes
592.- Rodríguez Escárcega Fernando
593.- Rodríguez García Judith
594.- Rodríguez González María Lilia
595.- Rodríguez Hernández Santiago Felipe
596.- Rodríguez López Martha Lilia
597.- Rodríguez Menchaca José Miguel

598.- Rodríguez Mozqueda Ruber Alberto
599.- Rodríguez Olivares Jaime Francisco
600.- Rodríguez Ortiz Mario
601.- Rodríguez Pacheco Job
602.- Rodríguez Salazar José
603.- Rodríguez Sánchez Marco Antonio
604.- Rodríguez Soberano José del Carmen
605.- Rojas Bonilla Aurora
606.- Rojas Bravo Yolanda
607.- Rojas Letechipia María del Carmen
608.- Rojas Leyva Ricardo Antonio
609.- Rojas López Felipe
610.- Rojas Novelo Rogerio Ariel
611.- Romay Puga Rogelio
612.- Romero Guzmán Gilberto
613.- Romero Hernández Víctor Ausencio
614.- Romero Romero Jaime
615.- Roque Leyva Gustavo
616.- Rosales Bernal Teresita
617.- Rosales Escudero Rodolfo
618.- Rubio Pedroza Ernesto
619.- Rueda Aguilar Dolores
620.- Rueda Vásquez Jorge Luis
621.- Ruiz Marinero María de Jesús
622.- Ruiz Márquez María Gabriela
623.- Ruiz Morales Daniel
624.- Ruiz Pérez Ernesto
625.- Ruiz Pérez Ernesto Jaime
626.- Ruiz Rubio Jaime
627.- Ruiz Sánchez José Luis
628.- Ruiz Matías Alberto Miguel
629.- Sáenz Horta Griselda
630.- Sáenz Hernández Eduardo Javier
631.- Sáinz Pérez María del Carmen
632.- Salas Juárez Juan Carlos
633.- Salazar Zavaleta Hilario
634.- Saldaña Rodríguez Juan
635.- Salvador Pérez Laurentino
636.- Samaniego Ramírez Ricardo
637.- Sánchez Alcántara Jorge
638.- Sánchez Alonso Martha Gabriela
639.- Sánchez Baltazar Rafael
640.- Sánchez Cerón Maura
641.- Sánchez De la Cerda Arnoldo Guillermo
642.- Sánchez Guzmán Gricelda Guadalupe
643.- Sánchez Medellín Teresa
644.- Sánchez Mercado Eduardo
645.- Sánchez Planells Juan Francisco
646.- Sánchez Rosas Roberto Javier
647.- Sánchez Zepeda Enedino Cándido
648.- Sánchez Zepeda Rodolfo
649.- Santiago Martínez Javier Leonel
650.- Sarabia Ascencio Francisco Javier
651.- Sáyago Vargas José Pablo
652.- Schettino Reyna Humberto
653.- Serrano Cruz José Raúl
654.- Serrano Ruiz Adolfo Eduardo
655.- Shibya Soto Eunice Sayuri
656.- Silva Adaya Juan Carlos
657.- Soberón Zúñiga José Luis
658.- Solís García José Herminio
659.- Sosa Escudero Mario de Jesús
660.- Sosa Luna María Eufemia
661.- Soto Gámez José Samuel
662.- Soto López Misael David
663.- Soto Ortiz Martín
664.- Soto Sánchez Benjamín
665.- Tafoya Hernández Guillermo
666.- Takata Gutiérrez María Isabel Haruno *****
667.- Talavera Campos Gustavo Adolfo
668.- Tapia García Rosenda
669.- Téllez García María Cristina
670.- Téllez Guerrero Rocío Carolina
671.- Tello Espíndola Agustín
672.- Tenorio Pastrana Jaime Javier
673.- Tinajero Jiménez Joel Fernando
674.- Torreblanca Cortés José Alberto
675.- Torres Angel José Manuel
676.- Torres Armenta Edelmira
677.- Torres Miranda Erico *****

678.- Torres Trejo Rodolfo
679.- Torres Valdez Rafael Roberto
680.- Torres Zamarrón Angel
681.- Trenado Ríos Alfonso Francisco
682.- Triana Martínez Ruperto
683.- Trujillo Salceda José Miguel
684.- Urzúa Hernández Sergio
685.- Vaca Murillo Rubén
686.- Valdés Villegas José
687.- Valdez Perales Javier
688.- Valdez Salvador Elías
689.- Valdez Jaime Luis Alberto *****
690.- Valenzuela Caperón Víctor Manuel
691.- Valenzuela Fuentes Victoria Ignacia
692.- Valenzuela Pernas Fernando
693.- Valerio Ramírez Raúl
694.- Vallejo Medina Raúl
695.- Valtierra Nieves Raymundo
696.- Vargas Magallanes Luis
697.- Vargas Pedraza José Martín
698.- Vázquez Fernández de Lara Juan Manuel
699.- Vázquez González Orlando José
700.- Vázquez Pedraza Felipe Gilberto
701.- Vázquez Vázquez Carlos Enrique
702.- Vega Cortez José
703.- Vega De Jesús Georgina
704.- Vega Rivera Enriqueta del Carmen
705.- Velarde Ramírez Miguel Angel
706.- Velasco Contreras Luis Enrique
707.- Velasco Ríos Virginia Cecilia
708.- Velasco Rodríguez Margarita Bertha
709.- Velasco Santiago David Jesús
710.- Velasco Velasco Ponciano
711.- Velázquez Santillán Gerardo Alejandro
712.- Ventura Guerrero Martín
713.- Vera Baltazar Fidencio
714.- Vera Peña Ramón
715.- Vergara Ortiz J. Trinidad
716.- Vergara Ortiz Néstor
717.- Vidal Hidalgo José Guadalupe
718.- Vieyra Santamarina Inocente Guillermo
719.- Villa López Jesús Humberto
720.- Villa Olmos Pascual
721.- Villafuerte Coello Gabriela
722.- Villafuerte Coello Mayra del Socorro
723.- Villalpando Bravo Jorge
724.- Villanueva Grimaldo Víctor Ignacio
725.- Villar Castillo Gerardo Manuel *****
726.- Villarreal Reyes Alma Ruby
727.- Villarreal Salgado Carlos Alberto
728.- Villaseñor Pérez Antonio
729.- Villicaña Buenrostro Luis Enrique
730.- Virelas Efraín
731.- Virgen Noguera Francisco
732.- Viveros Gutiérrez José Carlos
733.- Vizcarra González Luis Enrique
734.- Zamudio Rangel Luz Soledad
735.- Zapata Huesca José
736.- Zapién García Marco Antonio
737.- Zárate Ruiz José Francisco
738.- Zárate Silva Eusebio Paciano
739.- Zarazúa Galdeano Hilario
740.- Zayas Roldán José Luis
741.- Zenteno Garduño Arturo Eduardo
742.- Zepeda Lievano Luis Omar
743.- Zepeda Reyes Víctor
744.- Zerpa Durán Carlos Alberto
745.- Zúñiga Roque Gabriel
746.- Zúñiga Vera Ramón

***** Participante que cursó la Especialidad en Administración de Justicia en Juzgados de Distrito, Primera, Segunda o Tercera generaciones, impartidas por el Instituto de la Judicatura Federal, exento de presentar la primera etapa del Concurso, y que participará directamente en la segunda y tercera etapas del mismo.

TRANSITORIO

UNICO.- Publíquese la presente lista en el **Diario Oficial de la Federación**, así como en un diario de circulación nacional, otorgándose a la primera de las publicaciones señaladas, el carácter de notificación para todos los participantes.

EL LICENCIADO **GUILLERMO ANTONIO MUÑOZ JIMENEZ**, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CERTIFICA: Que la Lista de Personas Admitidas al Segundo Concurso de Oposición Libre para la Designación de Jueces de Distrito, Ordenada por el Acuerdo General 43/2002 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, fue sancionada por el propio Pleno, en sesión de dieciséis de octubre de dos mil dos, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: Presidente Ministro **Genaro David Góngora Pimentel**, **Adolfo O. Aragón Mendía**, **Manuel Barquín Alvarez**, **Jaime Manuel Marroquín Zaleta**, **José Guadalupe Torres Morales** y **Sergio Armando Valls Hernández.-** México, Distrito Federal, a dieciséis de octubre de dos mil dos.- Conste.- Rúbrica.

BANCO DE MEXICO

TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPUBLICA MEXICANA

Con fundamento en el artículo 35 de la Ley del Banco de México; en los artículos 8o. y 10o. del Reglamento Interior del Banco de México, y en los términos del numeral 1.2 de las Disposiciones Aplicables
a la Determinación del Tipo de Cambio para Solventar Obligaciones Denominadas en Moneda Extranjera Pagaderas en la República Mexicana, publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** el 22 de marzo de 1996, el Banco de México informa que el tipo de cambio citado obtenido el día de hoy conforme
al procedimiento establecido en el numeral 1 de las Disposiciones mencionadas, fue de $9.9723 M.N. (NUEVE PESOS CON NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES DIEZMILESIMOS MONEDA NACIONAL) por un dólar de los EE.UU.A.

La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones de crédito del país.

Atentamente
México, D.F., a 22 de octubre de 2002.
BANCO DE MEXICO

Director de Disposiciones de Banca Central	Gerente de Operaciones Nacionales
Fernando Corvera Caraza	**Jaime Cortina Morfin**
Rúbrica.	Rúbrica.

TASAS de interés de instrumentos de captación bancaria en moneda nacional.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TASAS DE INTERES DE INSTRUMENTOS DE CAPTACION BANCARIA EN MONEDA NACIONAL

	TASA BRUTA		**TASA BRUTA**

I. DEPOSITOS A PLAZO FIJO		II. PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO	
A 60 días		A 28 días	
Personas físicas	3.82	Personas físicas	3.39
Personas morales	3.82	Personas morales	3.39
A 90 días		A 91 días	
Personas físicas	3.93	Personas físicas	3.73
Personas morales	3.93	Personas morales	3.73
A 180 días		A 182 días	
Personas físicas	4.09	Personas físicas	4.02
Personas morales	4.09	Personas morales	4.02

Las tasas a que se refiere esta publicación, corresponden al promedio de las determinadas por las instituciones de crédito para la captación de recursos del público en general a la apertura del día 22 de octubre de 2002. Se expresan en por ciento anual y se dan a conocer para los efectos a que se refiere la publicación de este Banco de México en el **Diario Oficial de la Federación** de fecha 11 de abril de 1989.

México, D.F., a 22 de octubre de 2002.

BANCO DE MEXICO

Director de Disposiciones de Banca Central	Director de Información del Sistema Financiero
Fernando Corvera Caraza	**Cuauhtémoc Montes Campos**
Rúbrica.	Rúbrica.

(R.- 169551)

TASA de interés interbancaria de equilibrio.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO

Según resolución de Banco de México publicada en el **Diario Oficial de la Federación** del 23 de marzo
de 1995, y de conformidad con lo establecido en el Anexo 1 de la Circular 2019/95, modificada mediante Circular-Telefax 4/97 del propio Banco del 9 de enero de 1997, dirigida a las instituciones de banca múltiple,
se informa que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo de 27 días, obtenida el día de hoy, fue de 8.2300 por ciento.

La tasa de interés citada se calculó con base a las cotizaciones presentadas por: BBVA Bancomer, S.A., Banca Serfin S.A., Banco Internacional S.A., Banco Nacional de México S.A., Banco Interacciones S.A., Banco Invex S.A., Banco J.P.Morgan S.A., ING Bank México S.A., Banco Credit Suisse First Boston (México),
S.A., ScotiaBank Inverlat, S.A. y Banco Mercantil Del Norte S.A.

México, D.F., a 22 de octubre de 2002.

BANCO DE MEXICO

Director de Disposiciones de Banca Central	Gerente de Operaciones Nacionales
Fernando Corvera Caraza	**Jaime Cortina Morfin**
Rúbrica.	Rúbrica.

INFORMACION semanal resumida sobre los principales renglones del estado de cuenta consolidado al 18 de octubre de 2002.

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 41 del Reglamento Interior del Banco de México, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 16 de marzo de 1995, se proporciona la:

INFORMACION SEMANAL RESUMIDA SOBRE LOS PRINCIPALES RENGLONES
DEL ESTADO DE CUENTA CONSOLIDADO AL 18 DE OCTUBRE DE 2002.

(Cifras preliminares en millones de pesos)

A C T I V O	
Reserva Internacional [1/]	445,216
Crédito al Gobierno Federal	0
Valores Gubernamentales [2/]	0
Crédito a Intermediarios Financieros y	

Deudores por Reporto 3/	156,048
Crédito a Organismos Públicos 4/	76,252
PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	
Fondo Monetario Internacional	0
Base Monetaria	212,737
Billetes y Monedas en Circulación	212,737
Depósitos Bancarios en Cuenta Corriente 5/	0
Bonos de Regulación Monetaria	219,521
Depósitos del Gobierno Federal	94,554
Depósitos de Regulación Monetaria	35,854
Depósitos de Intermediarios Financieros y Acreedores por Reporto 3/	158,114
Otros Pasivos y Capital Contable 6/	(43,264)

1/ Según se define en el Artículo 19 de la Ley del Banco de México.

2/ Neto de depósitos de regulación monetaria.- En caso de saldo neto acreedor, éste se presenta en el rubro de Depósitos de Regulación Monetaria.

3/ Incluye banca múltiple, banca de desarrollo, fideicomisos de fomento y operaciones de reporto con casas de bolsa.

4/ Créditos asumidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario.

5/ Se consigna el saldo neto acreedor del conjunto de dichas cuentas, en caso de saldo neto deudor éste se incluye en el rubro de Crédito a Intermediarios Financieros y Deudores por Reporto.

6/ Neto de otros activos.

México, D.F., a 22 de octubre de 2002.
BANCO DE MEXICO
Director de Contabilidad
Gerardo Zúñiga Villarce
Rúbrica.

(R.- 169552)

TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario 12/2002, relativo a la ampliación de ejido por incorporación de tierras al régimen ejidal, a favor del poblado Castamay, Municipio de Campeche, Camp.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

Visto para resolver el juicio agrario 12/2002 que corresponde al expediente 23/7857, de la Secretaría de la Reforma Agraria, relativo a la Ampliación de Ejido por incorporación de tierras al régimen ejidal, del ejido “Castamay”, Municipio de Campeche, Estado de Campeche, por conducto de su Comisariado Ejidal, y

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por Resolución Presidencial de veinticuatro de septiembre de mil novecientos treinta y cinco, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** correspondiente al siete de diciembre del mismo año, se concedió al poblado “Castamay”, Municipio y Estado de Campeche, por concepto de dotación de ejido, una superficie total de 2,600-00-00 (dos mil seiscientas hectáreas), para beneficiar a sesenta y cuatro campesinos con capacidad agraria individual y la parcela ejidal, que fue ejecutada en todos sus términos el treinta de noviembre de mil novecientos cuarenta y dos, según acta de posesión, deslinde y amojonamiento de esa fecha.

SEGUNDO.- Mediante Acuerdo Presidencial de diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta, se resolvió la adquisición de los terrenos pertenecientes a la finca “Kastamay”, incluyendo el casco de la misma, autorizándose en dicho acuerdo al entonces Departamento Agrario, para que lo entregara al ejido de “Castamay”.

TERCERO.- En cumplimiento del Acuerdo Presidencial citado antes, el Director General de Bienes Nacionales, de la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, en representación del Gobierno Federal, adquirió del Banco Hipotecario de Crédito Territorial Mexicano, Sociedad Anónima, la finca rústica denominada "Kastamay", según consta en la escritura pública de cuatro de agosto de mil novecientos cincuenta y uno, inscripción V número 172, a fojas 301 y 302 del Tomo 59-V, Libro Primero, Sección Primera, del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Campeche, Estado de Campeche.

En la cláusula tercera del contrato de compraventa a que se refiere la escritura de referencia, se asienta: "Que el Gobierno Federal resolvió comprar la finca "Kastamay" en los términos que constan en el oficio con su anexo que contiene el Acuerdo Presidencial relativo que dice: "Sello: Poder Ejecutivo Federal... asunto: se ruega tirar la escritura que se cita, México, D.F., a 8 de set. 1950.- C. Lic. Manuel Borjas Soriano.- Notario Público y de Bienes Nacionales... El C. Subsecretario del Ramo encargado del despacho (de la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa) ha tenido a bien refrendar el Acuerdo Presidencial de fecha 17 de julio del presente año, cuya copia simple se anexa, por medio del cual se autoriza a esta Secretaría para que compre la finca rústica denominada Kastamay, ubicada en la Municipalidad de Chiná, Estado de Campeche, al Banco Hipotecario de Crédito Territorial Mexicano, S.A. en la cantidad de $25,000.00 moneda nacional, que se pagará con cargo a la partida Núm. 21-1319-01 10 del presupuestos de egresos en vigor, a fin de cumplimentar el acuerdo de referencia esta Dirección ruega a usted se sirva tirar la escritura respectiva, en la inteligencia de que los antecedentes necesarios para el efecto, le serán proporcionados por el Banco Hipotecario de Crédito Territorial Mexicano, S.A. y el Departamento Agrario... Anexo: copia de acuerdo "Acuerdo a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa y al Departamento Agrario.

"Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa y al Departamento Agrario. Se autoriza la compra por el Gobierno Federal de la finca rústica denominada "Kastamay", en el Estado de Campeche, Municipalidad de Chiná, la cual es propiedad del Banco Hipotecario de Crédito Territorial Mexicano, S.A.- El precio de la adquisición será de veinticinco mil pesos exactamente, moneda nacional. El predio que se pague se cargará a la partida No. 21-1319-01 10 del presupuesto de egresos en vigor. La Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa procederá a recibir la finca, previa firma de la escritura de compraventa respectiva y el Departamento Agrario la entregará al pueblo de Castamay.

"Dada en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecisiete días del mes de julio de mil novecientos cincuenta..."

El Banco Hipotecario de Crédito Territorial Mexicano, Sociedad Anónima, adquirió el predio de referencia, mediante escritura once mil ochocientos veinticinco, de veintiocho de febrero de mil novecientos treinta y cinco, otorgada en la Ciudad de México ante el Notario Público número 15, en la que se asienta, "...que el Juez Ejecutor del Juzgado Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, en cumplimiento de lo mandado por el titular de dicho Juzgado, en su auto de nueve de septiembre de mil novecientos treinta y dos, en nombre y rebeldía de la señora Esther Preciat de García Gual, adjudicó y enajenó en plena propiedad al Banco Hipotecario de Crédito Territorial Mexicano, Sociedad Anónima, las fincas rústicas denominadas "Castamay", situada en el Partido de Campeche Municipalidad de Chiná, y su anexo llamado "Nuestra Señora de la Paz Xtun", ubicada en la Municipalidad de Pacayaxum, del Estado de Campeche, teniendo la Hacienda de "Castamay" una superficie aproximada de 4,804-00-00 (cuatro mil ochocientas cuatro hectáreas)... que se registró a fojas cuarenta a cuarenta y tres, del tomo cuarenta y dos del libro primero, Sección del Registro Público de la Propiedad de Campeche, bajo las inscripciones cuarta, número setecientos doce y cuarta, número trescientos cincuenta y cuatro..."

CUARTO.- El predio adquirido por el Gobierno Federal fue entregado en posesión virtual al ejido de "Castamay", por el Delegado del Departamento Agrario, el quince de agosto de mil novecientos cincuenta
y dos, en una superficie total de 2,289-17-90 (dos mil doscientas ochenta y nueve hectáreas, diecisiete áreas, noventa centiáreas).

QUINTO.- Mediante oficio 161087 de quince de septiembre de mil novecientos cincuenta y dos, el Secretario General del Departamento Agrario ordenó al Delegado del mismo en el Estado de Campeche que, "... a fin de cumplir el Acuerdo Presidencial 17 de julio de 1950, debe proceder a hacer entrega en forma económica a los campesinos de CASTAMAY, del Municipio de Campeche, de esa entidad federativa, de la finca rústica denominada "Castamay", adquiridas por el Gobierno Federal del Banco Hipotecario de Crédito Territorial Mexicano, S.A., hasta en tanto se pronuncie resolución presidencial que regularice dicha posesión."

Según acta de veintisiete de abril de mil novecientos cincuenta y seis, la superficie de referencia fue entregada materialmente al poblado de "Castamay" en dos polígonos, uno de 13-59-52 (trece hectáreas, cincuenta y nueve áreas, cincuenta y dos centiáreas), que comprende el casco de la finca y que fue destinado a la zona urbana del poblado, y el otro de 2,275-78-38 (dos mil doscientas setenta y cinco hectáreas, setenta y ocho áreas, treinta y ocho centiáreas), que comprende terrenos de diversas calidades. Las superficies de los dos polígonos fueron deslindadas y amojonadas, acompañando el comisionado el plano que levantó al efecto, así como las carteras de campo y las planillas de construcción correspondientes.

SEXTO.- De acuerdo a las constancias que obran en autos, el ejido de "Castamay" ha tenido en posesión y explotación el predio que se le entregó por el Gobierno Federal, sin confrontar problema alguno desde la fecha en que le fue entregado, y fue con motivo de la aplicación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales en dicho ejido, cuyos resultados fueron aprobados por Asamblea de Ejidatarios de mayoría calificada, celebrada el veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve, cuando se percataron sus representantes de que la superficie de referencia no se había regularizado aún a su favor, puesto que aún aparecía registrada como Propiedad del Gobierno Federal.

SEPTIMO.- A fin de regularizar la superficie de la finca "Kastamay", que les había sido entregada en cumplimiento del Acuerdo Presidencial de diecisiete de julio de mil novecientos cincuenta, el Comisariado Ejidal del poblado de "Castamay", mediante escrito presentado el veinte de marzo de dos mil, ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 44, con sede principal en la ciudad de Chetumal, Estado de Quintana Roo, y alterna en la ciudad de Campeche, Estado de Campeche, demandó a la Secretaría de la Reforma Agraria la regularización en su favor de los terrenos en cuestión, dependencia que al contestar la demanda se allanó
a la misma, señalando "...que en el presente caso existe una compraventa con estipulación a favor de terceros, sin que exista ningún antecedente de que se haya formalizado la traslación de dominio de la referida superficie, a favor del núcleo agrario beneficiado".

OCTAVO.- Por auto de seis de junio de dos mil, el Tribunal Unitario que conoció de la demanda, se declaró incompetente para seguir conociendo de la misma, ordenando enviar los autos a la Dirección General de Procedimientos para la Conclusión del Rezago Agrario, de la Secretaría de la Reforma Agraria, "...para que de conformidad con los dispositivos invocados, ponga en estado de resolución el expediente en estudio, y turne debidamente integrado el mismo al Tribunal Superior Agrario...".

NOVENO.- Por oficio 200293 de dieciocho de febrero de dos mil, el Director Ejecutivo de la Unidad Técnica Operativa, de la Secretaría de la Reforma Agraria, remitió a este Tribunal Superior el expediente relativo a la ampliación por incorporación de terrenos al régimen ejidal, para su resolución definitiva, el que por auto de veintidós de abril de dos mil dos, lo radicó bajo el número 12/2002, ordenando su envío a esta Magistratura a mi cargo, para los efectos legales correspondientes, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del Decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación**, de seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; 1o., 9o. fracción VIII y cuarto transitorio, fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

SEGUNDO.- Del análisis de las constancias que obran en autos, se advierte que por Acuerdo Presidencial se decidió la adquisición del predio "Kastamay", propiedad del Banco Hipotecario de Crédito Territorial Mexicano, Sociedad Anónima, operación que se llevó a cabo por la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, misma que en cumplimiento de los términos del Acuerdo Presidencial en cita fue entregada al ejido de "Castamay" por la Secretaría de la Reforma Agraria, primero en forma virtual y luego mediante el deslinde de los terrenos entregados, levantándose el plano correspondiente, que obra en autos.

Ahora bien, en el Decreto Presidencial, en cuyo cumplimiento se adquirió la finca denominada "Kastamay" por el Gobierno Federal, que luego fue entregada al poblado de "Castamay", por la Secretaría de la Reforma Agraria, no se especifica con qué carácter debía hacerse la entrega de dicha finca al poblado de referencia. Tampoco consta, por otra parte, que con posterioridad a la entrega física del terreno, se hubiera formalizado el traslado de dominio en favor del poblado beneficiado, a través de un instrumento público, y por más que se trate de una compraventa (la celebrada entre el Gobierno Federal, representado por la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa y el Banco Hipotecario de Crédito Territorial Mexicano), con estipulación a favor de un tercero (el ejido "Castamay"), no puede considerarse a la escritura pública correspondiente como el título de propiedad del poblado sobre el terreno del caso, como lo sería, verbigracia, la escritura de compraventa mediante la que una persona adquiere para otra un bien inmueble determinado, como el padre que compra para su hijo menor, en ejercicio de la patria potestad, o el mandatario que compra para su mandante, en cumplimiento de su mandato, razón por la cual, en la especie, resulta aplicable el artículo 325 de la Ley Federal de Reforma Agraria, pues debe presumirse que la adquisición de la finca "Kastamay", decidida por acuerdo de la entonces primera autoridad agraria del país, para entregarla al poblado que nos ocupa, la determinó la insuficiencia de los terrenos dotados para satisfacer íntegramente las necesidades de su población campesina; así como también, es aplicable la tesis jurisprudencial aprobada por este Tribunal Superior en la sesión celebrada el seis de julio de mil novecientos noventa y cuatro, publicada en el Boletín Judicial Agrario número 26, del mes de septiembre del mismo año, que dice a la letra:

"AMPLIACION DE EJIDO POR INCORPORACION DE TIERRAS AL REGIMEN EJIDAL, PROCEDE DECRETARLA DE PLANO, AUN SIN HABERSE TRAMITADO PROCEDIMIENTO AMPLIATORIO, CUANDO LA AFECTACION RECAE EN TIERRAS PROPIEDAD DE LA FEDERACION, DE LOS ESTADOS O DE LOS MUNICIPIOS O FUERON PUESTAS A SU DISPOSICION PARA SATISFACER NECESIDADES AGRARIAS. Cuando se haya dictaminado un procedimiento de Incorporación de Tierras al Régimen Ejidal sobre Predios Propiedad de la Federación, de los Estados o de los Municipios, o que hayan sido puestos a su disposición para satisfacer necesidades agrarias, a favor del núcleo de población ejidal que hayan sido beneficiados con dotaciones, y del estudio del expediente se desprende que no se tramitó el procedimiento ampliatorio, compete al Tribunal Superior Agrario, declarar procedente de plano la ampliación de ejido por incorporación de tierras al régimen ejidal, con fundamento en los artículos 204 y 325 de la Ley Federal de Reforma Agraria, tercero transitorio del Decreto que reformó el **Diario Oficial de la Federación** el seis de enero de mil novecientos noventa y dos, tercero transitorio de la Ley Agraria; y cuarto transitorio, fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.- Juicio Agrario 1794/93. Poblado "DOS DE ABRIL Y ANEXO MONTEPIO", Municipio de San Andrés Tuxtla, Estado de Veracruz, Magistrada Ponente Lic. Arely Madrid Tovilla, Secretario de Estudio y Cuenta Lic. J. Juan Martínez. Aprobado en sesión del 11 de febrero de 1994. Unanimidad de Votos.- Juicio Agrario 329/94. Poblado "GENERAL FRANCISCO VILLA, Municipio de Ocozocoautla, Estado de Chiapas. Magistrado Ponente D. Gonzalo M. Armienta Calderón, Secretaria de Estudio y Cuenta Lic. Ma. Del Carmen García Dorado, Aprobado en sesión del 28 de marzo de 1994. Unanimidad de Votos.- Juicio Agrario 1844/93. Poblado "EL NUPE" Municipio de Isla, Estado de Veracruz. Magistrado Ponente Lic. Luis O. Porte Petit Moreno, Secretaria de Estudio y Cuenta

Lic. Sara Angélica Mejía Aranda.- Aprobado en sesión del 5 de abril de 1994. Unanimidad de Votos.- Juicio Agrario 1749/93. Poblado "TIPITARILLO Y SU ANEXO TIPITARIO", Municipio de Ario de Rosales, Estado de Michoacán, Magistrada Ponente Lic. Arely Madrid Tovilla, Secretario de Estudio y Cuenta Lic. Carlos Rincón Gordillo. Aprobado en sesión del 14 de abril de 1994. Unanimidad de Votos.- Juicio Agrario 21/94. Poblado "VERDURA", Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa. Magistrado Ponente Dr. Gonzalo M. Armienta Calderón. Secretaria de Estudio y Cuenta Lic. Ma. Del Carmen García Dorado. Aprobado en sesión del 14 de abril de 1994. Unanimidad de Votos".

TERCERO.- De los trabajos realizados con motivo del Programa de Certificación de Derechos Ejidales, aplicado en el ejido de "Castamay", cuyos resultados relativos al reconocimiento y asignación de parcelas con destino específico, a la asignación de derechos sobre tierras de uso común y a la regularización y asignación de derechos parcelarios, fueron aprobados por unanimidad en la Asamblea de Ejidatarios de mayoría calificada, celebrada en el propio ejido el veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve, según acta de esa fecha, se llega al conocimiento de que la referida Asamblea de Ejidatarios, en ejercicio de sus facultades legales, decidió el reconocimiento y asignación de dos parcelas con destino específico; la asignación de derechos sobre tierras de uso común, en favor de 104 (ciento cuatro) ejidatarios con derechos reconocidos; la regularización y asignación de derechos parcelarios a favor de 244 (doscientos cuarenta y cuatro) campesinos, entre los que se incluye a los 104 (ciento cuatro) ejidatarios con derechos reconocidos y la asignación de derechos parcelarios, en calidad de posesionarios, a favor de 28 (veintiocho) campesinos, por lo que deberá estarse, en lo relativo a la relación de beneficiados, a lo acordado por la Asamblea de Ejidatarios celebrada el veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 27 fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 189 de la Ley Agraria; 1o., 7o., así como la fracción II del cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se

RESUELVE:

PRIMERO.- Es procedente la Ampliación de Ejido por incorporación de tierras al régimen ejidal a favor del poblado denominado "Castamay", Municipio de Campeche, Estado de Campeche.

SEGUNDO.- Se dota al poblado de referencia, por la vía de Ampliación de Ejido por incorporación de tierras al régimen ejidal, con una superficie de 2,289-17-90 (dos mil doscientas ochenta y nueve hectáreas, diecisiete áreas, noventa centiáreas) de diversas calidades, que se tomarán del predio denominado "Kastamay", propiedad del Gobierno Federal, que de acuerdo con la escritura pública en que consta el contrato de compraventa mediante el que lo adquirió, se sitúa en el partido de Campeche, Municipalidad de Chiná, Estado de Campeche, afectable con fundamento en lo dispuesto por el artículo 204 de la Ley Federal de Reforma Agraria. La superficie, materia de esta sentencia, se delimitará conforme al plano proyecto que al efecto se elabore y pasará a ser propiedad del núcleo de población beneficiado, con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres. En cuanto a la determinación del destino de las tierras concedidas, la asamblea resolverá de conformidad con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria vigente.

TERCERO.- Publíquese esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Campeche; inscríbase en el Registro Público de la Propiedad correspondiente y procédase a hacer la cancelación respectiva; asimismo, inscríbase en el Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir los certificados de derechos agrarios correspondientes, de acuerdo con las normas aplicables y conforme a lo resuelto en esta sentencia.

CUARTO.- Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador del Estado de Campeche, a la Secretaría de la Reforma Agraria por conducto de la Oficialía Mayor y a la Procuraduría Agraria; ejecútese y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario, firman los Magistrados que lo integran, con el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a veintiuno de junio de dos mil dos.- El Magistrado Presidente, **Ricardo García Villalobos Gálvez**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Rodolfo Veloz Bañuelos**, **Marco Vinicio**

Martínez Guerrero, **Luis Angel López Escutia**, **Carmen Laura López Almaraz**.- Rúbricas.- El Secretario General de Acuerdos, **Humberto Jesús Quintana Miranda**.- Rúbrica.

SEGUNDA SECCION

SECRETARIA DE SALUD

NORMA Oficial Mexicana NOM-184-SSA1-2002, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado. Especificaciones sanitarias.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-184-SSA1-2002, PRODUCTOS Y SERVICIOS. LECHE, FORMULA LACTEA Y PRODUCTO LACTEO COMBINADO. ESPECIFICACIONES SANITARIAS.

ERNESTO ENRIQUEZ RUBIO, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3o. fracciones XXII y XXIV, 13 apartado A) fracciones I y II, 194 fracción I, 197, 199, 201, 210, 214 y demás aplicables de la Ley General de Salud; 38 fracción II, 40 fracciones I, II, V, XI, XII, 41, 43 y 47 fracción IV, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 4o., 8o., 14, 15, 25, quinto transitorio y demás aplicables del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios; 2, literal C fracción II, 34 y 36 fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, y 2 fracciones II y III, 7 fracción XVI, y 11 fracciones I y II del Decreto por el que se crea la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, me permito ordenar la publicación en el **Diario Oficial de la Federación** de la siguiente Norma Oficial Mexicana NOM-184-SSA1-2002, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado. Especificaciones sanitarias.

CONSIDERANDO

Que con fecha 11 de marzo de 1999, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 46 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Dirección General de Control Sanitario de Bienes y Servicios, ahora Dirección General de Control Sanitario de Productos y Servicios, presentó al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, el anteproyecto de la presente Norma Oficial Mexicana.

Que con fecha 16 de junio de 2000, en cumplimiento del Acuerdo del Comité y lo previsto en el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, se publicó en el **Diario Oficial de la Federación** el proyecto de la Norma Oficial Mexicana, a efecto de que dentro de los siguientes sesenta días naturales posteriores a dicha publicación, los interesados presentarán sus comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario.

Que con fecha previa, fueron publicadas en el **Diario Oficial de la Federación** las respuestas a los comentarios recibidos por el mencionado Comité, en términos del artículo 47 fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Que en atención a las anteriores consideraciones, contando con la aprobación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, se expide la siguiente:

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-184-SSA1-2002, PRODUCTOS Y SERVICIOS. LECHE, FORMULA LACTEA Y PRODUCTO LACTEO COMBINADO. ESPECIFICACIONES SANITARIAS

PREFACIO

En la elaboración de la presente Norma participaron los siguientes organismos e instituciones:

SECRETARIA DE SALUD

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

Dirección General de Control Sanitario de Productos y Servicios

Laboratorio Nacional de Salud Pública

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION (SAGARPA)

Dirección General de Ganadería

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

Facultad de Química

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas

CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION

ASOCIACION DE GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE PURA, S.A.

GRUPO INDUSTRIAL LALA

COMPAÑÍA NACIONAL DE SUBSISTENCIAS POPULARES

LICONSA, S.A. DE C.V.

NEOLAC, S.A. DE C.V.

PARMALAT DE MEXICO, S.A. DE C.V.

PASTEURIZADORA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

TETRA PAK, S.A. DE C.V.

EVAPORADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.

CONSEJO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE PASTEURIZACION LACTEA

CAMARA NACIONAL DE INDUSTRIALES DE LA LECHE

INDICE

1. Objetivo y campo de aplicación

2. Referencias

3. Definiciones

4. Símbolos y abreviaturas

5. Clasificación

6. Especificaciones sanitarias

7. Especificaciones nutrimentales

8. Muestreo

9. Métodos de prueba

10. Etiquetado

11. Envase y embalaje

12. Concordancia con normas internacionales y mexicanas

13. Bibliografía

14. Observancia de la norma

15. Vigencia

Apéndice normativo

Apéndice informativo

1. Objetivo y campo de aplicación

1.1 Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones sanitarias que debe cumplir la leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado.

1.2 Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia obligatoria en el Territorio Nacional para las personas físicas o morales que se dedican a su proceso o importación.

2. Referencias

Esta Norma se complementa con lo siguiente:

2.1	NOM-033-SSA1-1993	Bienes y servicios. Irradiación de alimentos. Dosis permitidas en alimentos, materias primas y aditivos alimentarios.
2.2	NOM-086-SSA1-1994	Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales.
2.3	NOM-088-SSA1-1994	Bienes y servicios. Contaminación por Radionúclidos en Alimentos de consumo masivo importados. Límites máximos permisibles.
2.4	NOM-092-SSA1-1994	Bienes y servicios. Método para la cuenta de bacterias aerobias en placa.
2.5	NOM-110-SSA1-1994	Bienes y servicios. Preparación y dilución de muestras de alimentos para su análisis microbiológico.
2.6	NOM-112-SSA1-1994	Bienes y servicios. Determinación de bacterias coliformes. Técnica del número más probable.
2.7	NOM-113-SSA1-1994	Bienes y servicios. Método para la cuenta de microorganismos coliformes totales en placa.
2.8	NOM-114-SSA1-1994	Bienes y servicios. Método para la determinación de *Salmonella* en alimentos.
2.9	NOM-115-SSA1-1994	Bienes y servicios. Método de prueba para la determinación de *Staphylococcus aureus*.
2.10	NOM-116-SSA1-1994	Bienes y servicios. Determinación de la humedad en alimentos por tratamiento térmico. Método por arena o gasa.
2.11	NOM-117-SSA1-1994	Bienes y servicios. Método de prueba para la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, zinc, y mercurio en alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica.
2.12	NOM-120-SSA1-1994	Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas.
2.13	NOM-127-SSA1-1994	Salud Ambiental, agua para uso y consumo humano-Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.
2.14	NOM-130-SSA1-1995	Bienes y servicios. Alimentos envasados en recipientes de cierre hermético y sometidos a tratamiento térmico. Disposiciones y especificaciones sanitarias.
2.15	NOM-131-SSA1-1995	Bienes y servicios. Alimentos para lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales.
2.16	NOM-143-SSA1-1995	Bienes y servicios. Método de prueba microbiológico para alimentos. Determinación de *Listeria monocytogenes*.

2.17	NOM-145-SSA1-1995	Bienes y servicios. Productos de la carne. Productos cárnicos troceados y curados. Productos cárnicos curados y madurados. Especificaciones sanitarias.

3. Definiciones

Para fines de esta Norma se entiende por:

3.1 Aditivos para alimentos, a las sustancias que se adicionan directamente a los alimentos y bebidas durante su elaboración para proporcionar o intensificar aroma, color o sabor; para mejorar su estabilidad o para su conservación, entre otras funciones.

3.2 Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición, a los productos que se les han introducido cambios por adición, disminución o eliminación de uno o más de sus nutrimentos, tales como hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales y que forman parte de la dieta habitual.

3.3 Bitácora o registro, al documento controlado que provee evidencia objetiva y auditable de las actividades ejecutadas o resultados obtenidos durante el proceso del producto y su análisis.

3.4 Buenas prácticas de fabricación, al conjunto de lineamientos y actividades relacionadas entre sí, destinadas a garantizar que los productos tengan y mantengan las especificaciones sanitarias requeridas para su uso o consumo. En particular en el caso de los aditivos se refiere a la cantidad mínima indispensable para lograr el efecto deseado.

3.5 Consumidor, a la persona física o moral que adquiere o disfruta como destinatario final productos alimenticios y bebidas no alcohólicas preenvasados. No es consumidor quien adquiera, almacene o utilice alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros.

3.6 Deshidratación, al tratamiento que consiste en la eliminación de agua de un producto.

3.7 Embalaje, al material que envuelve, contiene o protege debidamente a los envases primarios, secundarios, múltiples y colectivos que facilite y resiste las operaciones de almacenamiento y transporte, no destinado para su venta al consumidor en dicha presentación.

3.8 Envasado aséptico, al proceso que reúne las condiciones de esterilidad comercial para evitar la presencia de microorganismos en el producto durante el envasado.

3.9 Envase colectivo, al recipiente o envoltura en el que se encuentran contenidos dos o más variedades diferentes de productos preenvasados, destinados para su venta al consumidor en dicha presentación.

3.10 Envase múltiple, al recipiente o envoltura en el que se encuentran contenidos dos o más variedades iguales de productos preenvasados, destinados para su venta al consumidor en dicha presentación.

3.11 Envase primario, al recipiente destinado a contener un producto y que entra en contacto con el mismo.

3.12 Esterilización comercial, al tratamiento térmico aplicado al producto para la destrucción de todos los microorganismos viables de importancia en la salud pública y aquellos capaces de reproducirse en el alimento bajo condiciones normales de almacenamiento y distribución, sin la condición de refrigeración.

3.13 Etiqueta, al marbete, rótulo, inscripción, marca, imagen gráfica u otra forma descriptiva que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, en relieve o en hueco, grabado, adherido, precintado o anexado al empaque o envase del producto.

3.14 Fecha de caducidad, a la fecha límite en que se considera que un producto preenvasado almacenado en las condiciones establecidas por el fabricante, mantiene las características sanitarias que debe reunir para su consumo. Después de esta fecha no debe comercializarse ni consumirse.

3.15 Fórmula láctea, al producto definido de conformidad con la norma de denominación correspondiente.

3.16 Higiene, a las medidas necesarias para garantizar la sanidad e inocuidad de los productos en todas las fases del proceso hasta su consumo final.

3.17 Inocuo, a lo que no hace o causa daño a la salud.

3.18 Leche, al producto destinado para consumo humano, proveniente de la secreción natural de las glándulas mamarias de especies domésticas.

3.19 Límite máximo, a la cantidad establecida de aditivos, microorganismos, parásitos, materia extraña, plaguicidas, radionúclidos, biotoxinas, residuos de medicamentos, metales pesados y metaloides entre otros que no se debe exceder en un alimento, bebida o materia prima.

3.20 Limpieza, a la eliminación de materiales indeseables (tierra, residuos, suciedad, polvo, entre otros).

3.21 Lote, a la cantidad de un producto elaborado en un mismo ciclo, integrado por unidades homogéneas.

3.22 Materia extraña, a la sustancia, resto o desecho orgánico o no, que se presenta en el producto sea por contaminación o por manejo no higiénico del mismo durante su elaboración, considerándose entre otros: excretas, pelos de cualquier especie, huesos e insectos que resultan perjudiciales para la salud.

3.23 Metal pesado y metaloide, a los elementos químicos que causan efectos indeseables en el metabolismo aun en concentraciones bajas. Su toxicidad depende de las dosis en que se ingieran, así como de su acumulación en el organismo.

3.24 Métodos de prueba, al procedimiento técnico utilizado para la determinación de parámetros o características de un producto, proceso o servicio.

3.25 Muestra, al total de unidades de producto provenientes de un lote y que representan las características y condiciones del mismo.

3.26 Pasteurización, al tratamiento térmico al que se someten los productos, consistente en una relación de temperatura y tiempo que garantice la destrucción de organismos patógenos y la inactivación de algunas enzimas de los alimentos.

3.27 Planta procesadora, al establecimiento dedicado al proceso de pasteurización, ultrapasteurización, esterilización, deshidratación, rehidratación, entre otros procesos de la leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado.

3.28 Proceso, al conjunto de actividades relativas a la obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, distribución, almacenamiento y expendio o suministro al público de productos.

3.29 Producto a granel, al producto que debe pesarse, medirse o contarse en presencia del consumidor por no encontrarse preenvasado al momento de su venta.

3.30 Producto lácteo combinado, al producto definido de conformidad con la norma de denominación correspondiente.

3.31 Prueba de esterilidad comercial, a la retención temporal de las muestras representativas de los productos bajo condiciones de tiempo y temperatura establecidas para verificar la esterilidad comercial
del producto.

3.32 Rehidratación, al procedimiento mediante el cual se restituye el agua a los productos deshidratados objeto de esta Norma.

3.33 Refrigeración, al método de conservación físico que se emplea en los alimentos para inhibir el crecimiento de la mayoría de los microorganismos, reducir las reacciones bioquímicas y el deterioro propio de los alimentos.

3.34 Ultrapasteurización, al tratamiento térmico, al que se someten los productos, consistente en una relación de temperatura y tiempo, que garantice la esterilidad comercial y que sea envasado asépticamente.

4. Símbolos y abreviaturas

Cuando en esta Norma se haga referencia a los siguientes símbolos y abreviaturas se entiende por:

AFM_1	aflatoxina M_1
BPF	buenas prácticas de fabricación
conc.	concentración
cm	centímetro
CI	color index
HPLC	cromatografía de líquidos de alta eficacia
°C	grados Celsius
°K	grados Kelvin
g	gramo
x g	gravedad (en centrifugado)
h	hora
=	igual
IDR	Ingesta Diaria Recomendada
kcal	kilocaloría
kg	kilogramo
kJ	kilojoules
lb	libra
L	litro
+	más
m	masa
±	más-menos
Máx.	máximo
≥	mayor o igual que
>	mayor que
≤	menor o igual que
<	menor que
µ	micra
µg	microgramo
µL	microlitro
µm	micrómetro
mg	miligramo
mL	mililitro
mm	milímetro
mM	milimolar
min	minutos
M	molar
m/v	masa a volumen

ng	nanogramo
nm	nanómetro
N	normal
No.	número
/	por
%	por ciento
pH	potencial de hidrógeno
pulg	pulgada
rpm	revoluciones por minuto
X	signo de multiplicación
UV	ultravioleta
UF	unidades de fenol
UFC	unidades formadoras de colonias
UI	unidades internacionales
V	volumen
v/v	volumen a volumen

Cuando en la presente Norma se mencione:

- Acuerdo, debe entenderse que se trata del Acuerdo por el que se determinan las sustancias permitidas como aditivos y coadyuvantes, y sus modificaciones.
- CICOPLAFEST, debe entenderse que se trata de la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas.

5. Clasificación

Los productos objeto de esta Norma por el tratamiento al que han sido sometidos se clasifican en:

5.1 Pasteurizados

5.2 Ultrapasteurizados

5.3 Esterilizados

5.4 Deshidratados

6. Especificaciones sanitarias

Los productos objeto de esta Norma, deben ajustarse a las siguientes especificaciones:

6.1 El proveedor de las materias primas y los establecimientos donde se procesen o comercialicen los productos objeto de esta Norma, cada uno en el ámbito de su responsabilidad deben observar que las sustancias empleadas para la eliminación de plagas en cualquier parte del proceso cumplan con las especificaciones establecidas en el Catálogo Oficial de Plaguicidas vigente del CICOPLAFEST.

6.2 La leche que se emplee como materia prima debe cumplir con lo siguiente:

6.2.1 No presentar materias extrañas, conservadores ni sustancias neutralizantes.

6.2.2 No coagular por ebullición.

6.2.3 Presentar prueba de alcohol al 68% negativa.

6.2.4 Presentar prueba de inhibidores bacterianos, negativa; detectados por métodos fisicoquímicos y microbiológicos, de conformidad con la tabla 2 del presente ordenamiento.

6.3 Los ingredientes que se utilicen en la elaboración de la fórmula láctea o producto lácteo combinado, deben cumplir con lo establecido en el Reglamento y las normas correspondientes.

6.4 Los productos objeto de esta Norma y sus ingredientes, que hayan sido sometidos al proceso de irradiación deben cumplir con lo establecido en la NOM-033-SSA1-1993, señalada en el apartado de referencias.

6.5 La leche deshidratada y los ingredientes importados, que se empleen para la elaboración de los productos objeto de esta Norma, deben cumplir con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-088-SSA1-1994, citada en el apartado de referencias.

6.6 En su elaboración, se debe emplear agua potable según corresponda de conformidad con lo señalado en la NOM-127-SSA1-1994, citada en el apartado de referencias.

6.7 Los establecimientos dedicados a la elaboración de los productos objeto de esta Norma, deben cumplir con lo establecido en la NOM-120-SSA1-1994, señalada en el apartado de referencias.

Para efectos de la limpieza del equipo, se recomienda el uso de sustancias desinfectantes, cuya lista figura en el apéndice informativo B de este ordenamiento.

6.8 La leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado, deben someterse a pasteurización, ultrapasteurización, esterilización o deshidratación, conforme a lo siguiente:

6.8.1 Los productos que se sometan a pasteurización deben cumplir con lo siguiente:

6.8.1.1 Pasteurización lenta. Los productos se someterán a una temperatura de 63ºC, por un periodo mínimo de 30 min u otra relación de tiempo y temperatura equivalente.

6.8.1.1.1 El equipo debe contar, por lo menos, con un sistema para registro y control de la temperatura
y tiempo del proceso, tina con tapa y sistema de agitación del producto, termómetro de mercurio o su equivalente.

6.8.1.2 Pasteurización rápida. Los productos se someterán a una temperatura de 72ºC, por un periodo mínimo de 15 segundos, u otra relación de tiempo y temperatura equivalente.

6.8.1.2.1 El equipo debe ser diseñado, instalado y operado de forma que se alcancen los tiempos y temperaturas establecidos y debe contar, por lo menos, con lo siguiente:

6.8.1.2.1.1 Sistema de control y registro automático de la temperatura y tiempo del proceso que no permita el paso del producto cuando no se haya alcanzado la temperatura mínima establecida en el presente ordenamiento.

6.8.1.2.1.2 Termómetro de mercurio o su equivalente en buen estado de funcionamiento y calibrado, colocado al final de la “zona de sostenimiento” del equipo. La temperatura registrada en el sistema de control y registro del proceso debe ser igual o menor hasta 1,0ºC a la temperatura que indique dicho termómetro.

6.8.1.2.1.3 El equipo debe instalarse y mantenerse de forma que no se produzca en ningún momento del proceso, contaminación de leche pasteurizada con leche cruda o agua de proceso.

6.8.1.2.2 Al término de la pasteurización y hasta el momento del envasado el producto no debe exceder los 6 ºC (280 K).

6.8.2 Los productos que se sometan a ultrapasteurización deben cumplir con lo siguiente:

6.8.2.1 Someterse a una temperatura de 135°-149ºC por 2 a 8 segundos, que sean equivalentes a la permanencia de tiempo y temperatura que se muestra en la siguiente gráfica:

6.8.2.2 El equipo para el sistema de tratamiento térmico debe contar con dispositivos de control y registro de temperatura de operación durante el tiempo de producción, que permita comprobar que los productos han sido sometidos al tratamiento térmico establecido.

6.8.2.3 El envase debe someterse a un tratamiento de esterilización.

6.8.2.3.1 Los agentes esterilizantes deben cumplir con las siguientes características:

6.8.2.3.1.1 Tener actividad esporicida.

6.8.2.3.1.2 No debe degradar el material del envase.

6.8.2.3.1.3 Se debe evaporar fácilmente de la superficie del envase.

6.8.2.3.1.4 No debe reaccionar con el producto.

6.8.2.3.1.5 En caso de utilizar peróxido de hidrógeno, éste debe cumplir con lo siguiente:

6.8.2.3.1.5.1 Sólo se permite su empleo para efectos de desinfección de los envases.

6.8.2.3.1.5.2 Emplearse en una concentración de 30 al 50%.

6.8.2.4 El producto debe ser envasado asépticamente en envases que cuenten con barreras para proteger el producto del oxígeno y la luz, llenarse en ausencia de aire. El cierre de los envases debe ser hermético y llevar a cabo las pruebas para su control y los registros correspondientes.

6.8.2.5 Los establecimientos deben destinar un área de incubación para la prueba de esterilidad comercial para efectos del control interno de una muestra representativa de la producción, de la cual se debe tomar una submuestra para someterse a análisis microbiológicos.

6.8.2.6 Los productos sometidos a relaciones de tiempo y temperatura superiores a las establecidas en el apartado 6.6.1 y con envasado no aséptico deben cumplir, por lo menos, con las disposiciones y especificaciones sanitarias establecidas para los productos que se sometan a pasteurización.

6.8.3 Los productos esterilizados además de cumplir con lo establecido en la NOM-130-SSA1-1995, señalada en el apartado de referencias, deben cumplir con lo establecido en el apartado de especificaciones de este ordenamiento, según corresponda.

6.8.4 Los productos sometidos a deshidratación deben cumplir con lo siguiente:

6.8.4.1 Los que se utilicen como materia prima deben ser pasteurizados previamente a la deshidratación.

6.8.4.2 Los productos deshidratados objeto de esta Norma, no se podrán vender a granel al consumidor.

6.9 Los productos objeto de esta Norma deshidratados o en polvo y sometidos a rehidratación deben ser pasteurizados, ultrapasteurizados o esterilizados, conforme a este ordenamiento.

6.10 Control documental del proceso:

6.10.1 El proceso de los productos objeto de esta Norma debe documentarse en bitácoras o registros, de manera que garantice los requisitos establecidos (Tabla 1). El diseño de los formatos y la frecuencia de los registros quedan bajo responsabilidad del fabricante y deben:

6.10.1.1 Contar con respaldos que aseguren la veracidad de la información y un procedimiento para la prevención de acceso y correcciones no controladas.

6.10.1.2 Conservarse por lo menos un mes más del periodo establecido de vida de anaquel del producto y estar a disposición de la autoridad sanitaria cuando así lo requiera.

6.10.1.3 Contar con fecha y alguna forma de identificación del encargado de elaborar los registros.

Tabla 1. Información mínima de las bitácoras o registros de las diferentes etapas del proceso y de las buenas prácticas de fabricación

REGISTRO DE:	INFORMACION
Materias primas.	- Listado de materia prima, lote u origen que garantice su rastreabilidad. - Temperaturas de conservación de las materias primas que requieren refrigeración o congelación. - Resultados de su análisis en el que se incluya como mínimo: • Nombre de la materia prima. • Lote. • Parámetro sanitario analizado. • Laboratorio responsable. - O certificado de calidad sanitaria que avale su inocuidad. - O resultados de análisis efectuados por el proveedor de la materia prima.

Producto terminado.	- Temperatura de conservación; conforme al producto terminado del que se trate, en planta y distribución. - Análisis del producto terminado en el que se incluya como mínimo: • Nombre del producto. • Lote. • Parámetro sanitario analizado, conforme a lo señalado en los apartados 6.14 y 6.15 de esta Norma. • Laboratorio.
Control o erradicación de fauna nociva.	a) Por contratación: - Fecha. - Comprobante de fumigación proporcionado por la empresa responsable. - Sustancias usadas. - Número de licencia de la empresa que aplica, expedida por la autoridad correspondiente. b) Autoaplicación: - Aprobación del responsable técnico, expedida por la autoridad correspondiente. - Sustancias usadas. - Concentraciones.
Estado de salud del personal del área de producción.	- Tipo de análisis. - Resultados. - Laboratorio.
Lavado de envase retornable.	- Procedimiento escrito de lavado y desinfección y registro de su cumplimiento.
Limpieza y desinfección del equipo, utensilios e instalaciones del área de proceso.	- Productos usados. - Concentraciones. - Tiempos de contacto. - Enjuagues. - O procedimiento por escrito que garantice la limpieza, desinfección y registro de su cumplimiento.
Mantenimiento del equipo.	- Tipo de mantenimiento (preventivo o correctivo). - Operación realizada. - Calibración de los instrumentos de control del tratamiento térmico a que somete el producto. - Fecha.
Proceso.	- Contar con diagramas de bloque del proceso de elaboración, que indique los puntos críticos del proceso, mismo que estará a disposición de la autoridad sanitaria cuando así lo requiera. - Control del tratamiento térmico. • Registro o gráficas de temperaturas.

6.11 Transporte, almacenamiento y venta.

6.11.1 Para el transporte, almacenamiento y venta de los productos sometidos a pasteurización, se debe cumplir con lo siguiente:

6.11.1.1 No se debe colocar hielo o mantas húmedas directamente sobre las canastillas o los envases para su conservación.

6.11.1.2 Mantener el producto a las siguientes temperaturas de refrigeración:

6.11.1.2.1 Planta: áreas de almacén y transporte a una temperatura máxima de 7ºC.

6.11.1.2.2 Distribución y expendio: En las áreas de almacenamiento y punto de venta se debe mantener el producto a una temperatura máxima de 9°C, de lo cual se deben mantener registros durante un mes a partir de la fecha de recepción del producto, que contenga como mínimo temperatura diaria registrada, fecha, hora, nombre y firma del encargado de realizar el registro. El diseño de los formatos

quedan bajo la responsabilidad de los mismos y deben estar a disposición de la autoridad sanitaria, cuando así lo requiera.

6.11.2 Los productos sometidos a ultrapasteurización o esterilización, durante su almacenamiento, transporte o distribución, deben conservarse en un lugar fresco y seco. No es necesario refrigerarlos mientras el envase del producto permanezca cerrado.

6.12 Se debe llevar un programa de control del estado de salud del personal que participe directamente en la elaboración del producto, en el que se incluya de acuerdo a la valoración médica la realización de análisis clínicos, tales como exudado faríngeo, análisis coproparasitoscópicos y reacciones febriles.

De acuerdo al tratamiento empleado, los productos objeto de este ordenamiento deben cumplir con las siguientes especificaciones:

6.13 Fisicoquímicas e inhibidores.

Tabla 2

PRODUCTO	LIMITE MAXIMO							
	FISICAS Y QUIMICAS			INHIBIDORES				
				Fisicoquímicos				Micro-biológicos
	Prueba de fosfatasa residual UF/ml	Materia extraña	Humedad %	Derivados Clorados	Sales cuaternarias de amonio	Oxidantes	Formaldehído	Pruebas Microbio-lógicas
Pasteurizados	4	Ausencia	N.A.	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Ultrapasteurizados	N.A.	Ausencia	N.A.	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Esterilizados	N.A.	Ausencia	N.A.	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo
Deshidratados	N.A.	Ausencia	4	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo	Negativo

N.A. = No aplica

6.14 Contaminantes.

Tabla 3

PRODUCTO	LIMITE MAXIMO			
	METALES PESADOS O METALOIDES			AFLATOXINA M_1
	Arsénico (As) mg/kg	Mercurio (Hg) mg/kg	Plomo (Pb) mg/kg	g/L
Pasteurizados	0,2	0,05	0,1	0,5
Ultrapasteurizados	0,2	0,05	0,1	0,5
Esterilizados	0,2	0,05	0,1	0,5
Deshidratados	0,2	0,05	0,1	0,5

6.15 Microbiológicas.

6.15.1 Productos sometidos a pasteurización.

Tabla 4

ESPECIFICACION	LIMITE MAXIMO
Organismos coliformes totales en planta	< 10 UFC/mL

Organismos coliformes totales en punto de venta	< 20 UFC/mL
*Salmonella spp.**	Ausente en 25 mL
Staphylococcus aureus *	< 10 UFC/mL en siembra directa
Listeria monocytogenes *	Ausente en 25 mL

* Se determinará únicamente bajo situaciones de emergencia sanitaria, cuando la Secretaría de Salud de acuerdo al muestreo y los resultados de los análisis microbiológicos detecte la presencia de dichos microorganismos, asimismo ordenará la realización de un plan de trabajo por parte del fabricante o importador para controlar la presencia de los mismos.

6.15.2 Productos sometidos a ultrapasteurización.

Tabla 5

ESPECIFICACIONES	LIMITE MAXIMO
Mesofílicos aerobios	Negativo
Mesofílicos anaerobios	Negativo
Termofílicos aerobios	Negativo
Termofílicos anaerobios	Negativo

6.15.3 Productos sometidos a deshidratación.

Tabla 6

ESPECIFICACIONES	LIMITE MAXIMO
Coliformes totales	< 10 UFC/g
Salmonella spp	Ausente en 25 g
Escherichia coli [1]	< 3 NMP/g
Enterotoxina estafilocóccica	Negativa

[1] Véase apéndice normativo B

6.16 Aditivos.

6.16.1 Unicamente se permiten los siguientes aditivos en los límites y productos que se señalan a continuación.

Tabla 7

Aditivo	Límite máximo	Observaciones
Acido algínico	BPF	Productos saborizados
Acido ascórbico *	0,5 g/kg expresado como ácido ascórbico	Productos deshidratados
	0,5 g/kg expresado como ácido ascórbico	Productos con grasa vegetal
Agar	BPF	Productos saborizados
Alginato de amonio	BPF	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	BPF	Productos saborizados
Alginato de calcio	BPF	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	BPF	Productos saborizados
Alginato de potasio	BPF	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	BPF	Productos saborizados
Alginato de propilenglicol	1400 mg/kg	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	1400 mg/kg	Productos saborizados
Alginato de sodio	BPF	Fórmula láctea y producto lácteo combinado

* No debe reportarse como nutrimento

	BPF	Productos saborizados
Ascorbato de calcio *	0,5 g/kg expresado como ácido ascórbico	Productos deshidratados
	0,5 g/kg expresado como ácido ascórbico	Productos con grasa vegetal
Ascorbato de potasio*	0,5 g/kg expresado como ácido ascórbico	Productos deshidratados
	0,5 g/kg expresado como ácido ascórbico	Productos con grasa vegetal
Ascorbato de sodio *	0,5 g/kg expresado como ácido ascórbico	Productos deshidratados
	0,5 g/kg expresado como ácido ascórbico	Productos con grasa vegetal
Carbonato de amonio	BPF	Productos saborizados
Carbonato de calcio	10 g/kg solo o combinado	Productos deshidratados
Carbonato hidrogenado de amonio	BPF	Productos saborizados
Carbonato hidrogenado de potasio	BPF	Productos saborizados
Carbonato hidrogenado de sodio	BPF	Productos saborizados
Carbonato de magnesio	BPF	Productos saborizados
Carbonato de potasio	BPF	Productos saborizados
Carbonato de sodio	BPF	Productos saborizados
Carboximetilcelulosa	BPF	Productos saborizados
	BPF	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	BPF	Productos modificados en su composición
Carboximetilcelulosa sódica	BPF	Productos saborizados
	BPF	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	BPF	Productos modificados en su composición
Carragenato de amonio	1,2g/kg solo o combinado	Productos esterilizados
	1,2g/kg solo o combinado	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	1,2g/kg solo o combinado	Productos saborizados
Carragenato de calcio	1,2g/kg solo o combinado	Productos esterilizados
	1,2g/kg solo o combinado	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	1,2g/kg solo o combinado	Productos saborizados
Carragenato de potasio	1,2g/kg solo o combinado	Productos esterilizados
	1,2g/kg solo o combinado	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	1,2g/kg solo o combinado	Productos saborizados
Carragenato de sodio	1,2g/kg solo o combinado	Productos esterilizados
	1,2g/kg solo o combinado	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	1,2g/kg solo o combinado	Productos saborizados
Carragenina	0,15 g/kg solo o combinado	Productos esterilizados
	1,2g/kg solo o combinado	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	BPF	Productos saborizados
Citrato de calcio	2g/kg, solo o 3 g/kg combinado, expresado como sustancia anhidra	Productos esterilizados
	2g/kg solo o 3 g/kg combinado, expresado como sustancia anhidra	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
Citrato de potasio	2 g/kg, solo o 3 g/kg combinado, expresado como sustancia anhidra	Productos esterilizados

	5g/kg, solo o combinado, expresado como sustancia anhidra.	Productos deshidratados
	2g/kg, solo o 3 g/kg combinado, expresado como sustancia anhidra	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
Citrato de sodio	2 g/kg, solo o 3 g/kg combinado, expresado como sustancia anhidra	Productos esterilizados
	5g/kg, solo o combinado, expresado como sustancia anhidra	Productos deshidratados
	2g/kg, solo o 3 g/kg combinado, expresado como sustancia anhidra	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
Citrato tripotásico	5g/kg solo o combinado, expresado como sustancia anhidra	Productos deshidratados
Citrato trisódico	5 g/kg solo o combinado, expresado como sustancia anhidra	Productos deshidratados
Cloruro de calcio	1,2 g/kg solo o combinado, expresado como sustancia anhidra	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
Cloruro de potasio	2g/kg, solo o 3 g/kg combinado, expresado como sustancia anhidra	Productos esterilizados
	BPF	Productos deshidratados
Cloruro de sodio	2g/kg, solo o 3 g/kg combinado, expresado como sustancia anhidra	Productos esterilizados
	BPF	Productos deshidratados
Dióxido de silicón amorfo	10 g/kg solo o combinado	Productos deshidratados
Esteres acéticos de los mono y diglicéridos de los ácidos grasos	1,2 g/kg solo o combinado	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	1,2 g/kg solo o combinado	Productos modificados en su composición
Esteres cítricos de los mono y diglicéridos de los ácidos grasos	1,2 g/kg solo o combinado	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	1,2 g/kg solo o combinado	Productos modificados en su composición
Esteres de ácido diacetil tartárico	1,2 g/kg solo o combinado	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	1,2 g/kg solo o combinado	Productos modificados en su composición
Esteres de glicerol de ácidos grasos y ácido láctico	1,2 g/kg solo o combinado	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	1,2 g/kg solo o combinado	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
Esteres de glicerol de ácidos grasos y ácido diacetil tartárico	1,2 g/kg solo o combinado	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	1,2 g/kg solo o combinado	Productos modificados en su composición
Esteres de glicerol de ácidos grasos, tartárico y acético (mezclados)	1,2 g/kg solo o combinado	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	1,2 g/kg solo o combinado	Productos modificados en su composición
Esteres de sacarosa y ácidos grasos	BPF	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
Esteres diacetil tartáricos de los mono y diglicéridos de los ácidos grasos	BPF	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
Esteres tartáricos de los mono y diglicéridos de los ácidos grasos	BPF	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
Fosfato dihidrogenado de calcio	2g/kg solo o 3 g/kg combinado, expresado como sustancia anhidra	Productos esterilizados
Fosfato dihidrogenado de potasio	2g/kg solo o 3 g/kg combinado, expresado como sustancia anhidra	Productos esterilizados
	0,15 g/kg solo o combinado, expresado como sustancia anhidra	Leche Ultrapasteurizada

	5 g/kg solo o combinado, expresado como sustancia anhidra	Productos deshidratados
	BPF	Productos saborizados
	0,5 g/kg solo o combinado, expresado como sustancia anhidra	Productos modificados en su composición
	1,2 g/kg solo o combinado, expresado como sustancia anhidra	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
Fosfato dihidrogenado de sodio	2g/kg solo o 3 g/kg combinado, expresado como sustancia anhidra	Productos esterilizados
	0,15 g/kg solo o combinado, expresado como sustancia anhidra	Leche ultrapasteurizada
	5 g/kg solo o combinado, expresado como sustancia anhidra	Productos deshidratados
	BPF	Productos saborizados
	0,5 g/kg solo o combinado, expresado como sustancia anhidra	Productos modificados en su composición
	1,2 g/kg solo o combinado, expresado como sustancia anhidra	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
Fosfato hidrogenado de calcio	2g/kg solo o 3 g/kg combinado, expresado como sustancia anhidra	Productos esterilizados
Fosfato hidrogenado dipotásico	2g/kg solo o 3 g/kg combinado, expresado como sustancia anhidra	Productos esterilizados
	0,15 g/kg solo o combinado, expresado como sustancia anhidra	Leche ultrapasteurizada
	5 g/kg solo o combinado, expresado como sustancia anhidra	Productos deshidratados
	BPF	Productos saborizados
	0,5 g/kg solo o combinado, expresado como sustancia anhidra	Productos modificados en su composición
	1,2 g/kg solo o combinado, expresado como sustancia anhidra	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
Fosfato hidrogenado disódico	2g/kg solo o 3 g/kg combinado, expresado como sustancia anhidra	Productos esterilizados
	0,15 g/kg solo o combinado, expresado como sustancia anhidra	Leche ultrapasteurizada
	5 g/kg solo o combinado, expresado como sustancia anhidra	Productos deshidratados
	BPF	Productos saborizados
	0,5 g/kg solo o combinado, expresado como sustancia anhidra	Productos modificados en su composición
	1,2 g/kg solo o combinado, expresado como sustancia anhidra	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
Fosfato tripotásico	2 g/kg, solo o 3 g/kg combinado, expresado como sustancia anhidra	Productos esterilizados
	5 g/kg solo o combinado, expresado como sustancia anhidra	Productos deshidratados
Fosfato trisódico	2 g/kg, solo o 3 g/kg combinado, expresado como sustancia anhidra	Productos esterilizados

	5 g/kg solo o combinado, expresado como sustancia anhidra	Productos deshidratados
Gelatina	BPF	Productos saborizados
Goma de algarrobo	1,2 g/kg solo o combinado	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	BPF	Productos saborizados
Goma arábiga	1,2 g/kg solo o combinado	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	BPF	Productos saborizados
Goma damar	1,2 g/kg solo o combinado	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	BPF	Productos saborizados
Goma gellana	1,2 g/kg solo o combinado	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	BPF	Productos saborizados
Goma guar	1,2 g/kg solo o combinado	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	BPF	Productos saborizados
Goma karaya	1,2 g/kg solo o combinado	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	BPF	Productos saborizados
Goma tara	1,2 g/kg solo o combinado	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	BPF	Productos saborizados
Goma tragacanto	1,2 g/kg solo o combinado	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	BPF	Productos saborizados
Goma xantana	1,2 g/kg solo o combinado	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	BPF	Productos saborizados
Hidróxido de amonio	BPF	Productos saborizados
Hidróxido de magnesio	BPF	Productos saborizados
Hidróxido de potasio	BPF	Productos saborizados
Hidróxido de sodio	BPF	Productos saborizados
Hidroxipropil metil celulosa	BPF	Productos saborizados
Lecitina	BPF	Productos esterilizados
	BPF	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	BPF	Productos saborizados
	BPF	Productos deshidratados
Monoestearato de sorbitán polioxietileno (20)	0,5 g/kg	Productos saborizados
Palmitato de amonio	0,1 g/kg	Productos deshidratados
	0,1 g/kg	Productos con grasa vegetal
Palmitato de ascorbilo	0,1 g/kg	Productos deshidratados
	0,1 g/kg	Productos con grasa vegetal
Palmitato de calcio	0,1 g/kg	Productos deshidratados
	0,1 g/kg	Productos con grasa vegetal
Palmitato de potasio	0,1 g/kg	Productos deshidratados
	0,1 g/kg	Productos con grasa vegetal
Palmitato de sodio	0,1 g/kg	Productos deshidratados
	0,1 g/kg	Productos con grasa vegetal
Pectato de amonio	BPF	Productos saborizados

Pectato de calcio	BPF	Productos saborizados
Pectato de potasio	BPF	Productos saborizados
Pectato de sodio	BPF	Productos saborizados
Polifosfato de calcio	2 g/kg, solo o 3 g/kg combinado, expresado como sustancia anhidra	Productos esterilizados
	5 g/kg solo o combinado, expresado como sustancia anhidra	Productos deshidratados
Polifosfato de potasio	2 g/kg solo o 3 g/kg combinado	Productos esterilizados
	5 g/kg solo o combinado	Productos deshidratados
	1,2 g/kg solo o combinado	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	1,2 g/kg solo o combinado	Productos saborizados
	0,15 g/kg solo o combinado	Leche ultrapasteurizada
Polifosfato de sodio	1,2 g/kg solo o combinado	Productos saborizados
	2 g/kg solo o 3 g/kg combinado	Productos esterilizados
	0,15 g/kg solo o combinado	Leche ultrapasteurizada
	1,2 g/kg solo o combinado	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
	5 g/kg solo o combinado	Productos deshidratados
Triestearato de sorbitán polioxietilenado	5 g/kg	Productos saborizados
Trifosfato pentapotásico	0,12 g/kg solo o combinado expresado como sustancia anhidra	Fórmula láctea y producto lácteo combinado
Trifosfato pentasódico	1,2 g/kg solo o combinado expresado como sustancia anhidra	Fórmula láctea y producto lácteo combinado

6.16.2 En la elaboración de los productos saborizados o aromatizados objeto de esta Norma, únicamente se permite el empleo de los siguientes colorantes:

6.16.2.1 Colorantes.

Tabla 8

ADITIVO	**LIMITE MAXIMO (mg/kg)**
Amarillo ocaso FCF o amarillo alimentos 3	35
Azafrán (Estigmas de *Crocus sativus* L.)	BPF
Azorrubina o rojo alimentos 3	100
Beta-apo-8-carotenal o anaranjado alimentos 6	35
Betacaroteno sintético o anaranjado alimentos 5	35
Caramelo Clase I	BPF
Caramelo Clase II	3200
Caramelo Clase III	4000
Caramelo Clase IV	4000
Clorofilas	BPF
Complejos cúpricos de clorofilas	300
Sales de sodio y potasio de complejos cúpricos de clorofilinas	300
Eritrosina o rojo alimentos 14	2
Esteres metílico y etílico del ácido Beta-apo-8-Carotenóico o anaranjado alimentos 7 (éster etílico)	35
Extracto de annatto (Extracto de semillas de *Bixa orellana*)	0,05 expresado como bixina

Extracto de cochinilla o rojo natural 4	100
Indigotina o azul alimentos 1	100
Ponceau 4R o rojo alimentos 7	80
Riboflavina	10
Riboflavina-5´-fosfato de sodio	10
Rojo allura AC o rojo alimentos 17	140
Tartrazina	150 solo o combinado
Verde rápido FCF o verde alimentos 3	100 solo o combinado

6.16.3 Para los productos sometidos a un proceso de transformación parcial de la lactosa de la leche en glucosa y galactosa, se permiten las siguientes enzimas:

Tabla 9

ADITIVO	LIMITE MAXIMO
Lactasa derivada de *Aspergillus niger*	BPF
Lactasa derivada de *Aspergillus oryzae*	BPF
Lactasa derivada de *Saccharomyces spp*	BPF
Lactasa derivada de *Kluyveromyces fragilis*	BPF
Quimosina B derivada de *Kluyveromyces lactis*	BPF

6.16.4 Saboreadores, saborizantes o aromatizantes.

6.16.4.1 En la elaboración de los productos objeto de esta Norma, se permite el empleo de saborizantes, incluidos los naturales, de acuerdo a las BPF y de conformidad con lo establecido en el acuerdo correspondiente.

6.16.5 Edulcorantes no nutritivos.

Los productos objeto de este ordenamiento, saborizados o aromatizados que empleen edulcorantes no nutritivos deben cumplir con lo establecido en la NOM-086-SSA1-1994 señalada en el apartado de referencias.

6.16.6 Conservadores.

En la elaboración de los productos objeto de esta Norma no se permite el empleo de conservadores; a excepción de los saborizados o aromatizados en los que sólo se aceptará la presencia de ácido sórbico, ácido benzoico o las sales de sodio o potasio de los ácidos anteriores, como efecto de la transferencia de los ingredientes opcionales.

6.16.7 Para la inclusión de los aditivos o coadyuvantes que no son considerados en el acuerdo y sus modificaciones, o en la presente Norma Oficial Mexicana, se debe cumplir con el procedimiento establecido en el ordenamiento correspondiente.

7. Especificaciones nutrimentales

7.1 Todos los productos, objeto de esta Norma, deben contener de 310 a 670 g equivalentes de retinol/L (1033 a 2333 UI/L), de forma natural o por restauración.

7.2 Todos los productos objeto de esta Norma deben contener entre 5 a 7,5 g/L de Vitamina D_3 (200-300 UI/L).

7.3 Los productos, objeto de esta Norma, adicionados con Vitamina A o D_3 no deben contener cantidades superiores a las establecidas en este ordenamiento.

7.4 Los productos, objeto de esta Norma con modificaciones en su composición, además de cumplir con lo establecido en este ordenamiento, deben sujetarse a lo establecido en la NOM-086-SSA1-1994, señalada en el apartado de referencias.

8. Muestreo

El procedimiento de muestreo para los productos objeto de esta Norma, debe sujetarse a lo que establece la Ley General de Salud y otras disposiciones que al efecto se emitan.

9. Métodos de prueba

9.1 Para la verificación oficial de las especificaciones sanitarias que se establecen en esta Norma, se deben aplicar los métodos de prueba señalados a continuación:

9.2 Para la verificación de las especificaciones de inhibidores en la leche que se emplee como materia prima, se deben aplicar los métodos establecidos en el apéndice normativo A de este ordenamiento.

9.3 Para la verificación de las especificaciones fisicoquímicas, se aplicarán los métodos establecidos en el apéndice normativo A de este ordenamiento.

9.4 Para la verificación de las especificaciones microbiológicas, metales pesados y metaloides de los productos objeto de este ordenamiento sometidos a pasteurización o deshidratación, se deben aplicar los métodos establecidos en las normas correspondientes señaladas en el apartado de referencias.

9.5 En el caso de *E. coli* se aplicará el método establecido en el apéndice normativo B de la NOM-145-SSA1-1995 señalada en el apartado de referencias y el apéndice normativo B de este ordenamiento.

9.6 Para la determinación de Enterotoxina estafilocóccica, en productos sometidos a deshidratación, se debe aplicar el método establecido en el numeral 3 del apéndice normativo B de este ordenamiento.

9.7 Para la determinación microbiológica de los productos esterilizados, se debe aplicar el método de prueba establecido en el apéndice normativo B de la NOM-130-SSA1-1995, señalada en el apartado de referencias.

9.8 Para la verificación de aflatoxinas, se debe aplicar el método señalado en el apéndice normativo A y considerar el procedimiento de limpieza y descontaminación del material de vidrio y área de trabajo para la determinación de aflatoxinas señalado en el apéndice informativo A de este ordenamiento.

9.9 Para la verificación de la restauración y del contenido de Vitamina A (μg equivalentes de retinol/L) se aplicará el método establecido en el apéndice normativo A de este ordenamiento.

9.10 Para la verificación de la adición de vitamina D_3, se debe aplicar el método de prueba establecido en el apéndice normativo B de este ordenamiento.

10. Etiquetado

10.1 La información comercial: marca, denominación del producto, declaración del contenido, nombre y domicilio del fabricante o importador y país de origen deben cumplir con lo establecido en los ordenamientos legales aplicables, expedidos por la Secretaría de Economía.

10.2 La información sanitaria que debe figurar en la etiqueta de los productos preenvasados objeto de esta Norma, debe sujetarse a lo siguiente:

10.2.1 Generales.

10.2.1.1 La información contenida en las etiquetas debe presentarse y describirse en forma clara, veraz, ser comprobable y no debe inducir a error al consumidor, con respecto al origen y características del producto.

10.2.1.2 Las etiquetas que ostenten los productos preenvasados deben fijarse de manera tal que permanezcan disponibles hasta el momento de su uso y consumo en condiciones normales, y deben aplicarse por cada unidad, envase múltiple o colectivo con caracteres claros, visibles, indelebles y en colores contrastantes, fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra y uso.

10.2.1.3 Los productos destinados a ser comercializados en el mercado nacional, deben ostentar una etiqueta con la información a que se refiere esta Norma en idioma español, independientemente de que también pueda estar en otros idiomas, cuidando de que los caracteres sean al menos iguales en tamaño, proporcionalidad tipográfica y colores idénticos o similares a aquéllos en los que se presente la información en otros idiomas.

10.2.1.4 Cuando en las etiquetas se declaren u ostenten de forma escrita, gráfica o descriptiva, que los productos, su aplicación, ingredientes o cualquier otra característica están recomendados, respaldados

o aceptados por centros de investigación, asociaciones, entre otros, los cuales deberán contar con reconocimiento nacional o internacional de su experiencia y estar calificados para dar opinión sobre la información declarada. Se deberá contar con el sustento técnico respectivo, el que estará a disposición de
la Secretaría en el momento que lo solicite.

Dichas declaraciones deben sujetarse a lo siguiente: La leyenda debe describir claramente la característica referida, estar precedida por el símbolo o nombre del organismo y figurar con caracteres claros y fácilmente legibles.

10.2.1.5 Se permite el uso de leyendas educativas que promuevan el consumo de una dieta recomendable así como de los beneficios generales que ofrecen los nutrimentos al consumidor, siempre y cuando no se relacionen directamente con el producto que las incluya ni con la marca comercial del mismo ni con las declaraciones de propiedades establecidas en el numeral 10.2.2.7.4 de este ordenamiento.

10.2.2 Específicas.

10.2.2.1 Lista de ingredientes.

10.2.2.1.1 En la etiqueta de los productos debe figurar la lista de ingredientes, la cual puede eximirse cuando se trate de productos de un solo ingrediente.

10.2.2.1.2 La lista de ingredientes debe ir encabezada o precedida por el término "ingredientes":

10.2.2.1.3 Los ingredientes deben presentarse por orden cuantitativo decreciente (m/m) y el nombre específico de los mismos, excepto en las clases de ingredientes señalados en la siguiente Tabla, incluyendo los nutrimentos adicionados, en su caso, mismos que deben declararse conforme a los nombres establecidos en el apéndice normativo B de la NOM-086-SSA1-1994, señalada en el apartado de referencias.

Tabla 10

INGREDIENTES	NOMBRE GENERICO
Leche en polvo deshidratada Leche fluida independientemente de su contenido de grasa	Leche
Suero de mantequilla Suero de queso Suero de leche Concentrado de proteína de leche Proteína de suero Lactosa	Sólidos de leche
Grasas o aceites comestibles Hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas	Grasas vegetales
Mezcla de caseinatos	Caseinatos

10.2.2.1.4 Cuando se trate de un ingrediente compuesto y éste constituya el 25% o más, debe ir acompañado de una lista entre paréntesis de sus ingredientes constitutivos por orden cuantitativo decreciente (m/m). Cuando constituya menos de ese porcentaje se debe declarar el ingrediente compuesto, los aditivos que desempeñan una función tecnológica en la elaboración del producto y aquellos ingredientes o aditivos que se asocien a reacciones alérgicas.

10.2.2.1.5 Se debe indicar en la lista de ingredientes el agua añadida, por orden de predominio, excepto cuando ésta forme parte de un ingrediente compuesto.

10.2.2.1.6 Cuando se trate de productos, destinados a ser reconstituidos, pueden presentarse sus ingredientes por orden cuantitativo decreciente (m/m) en el producto reconstituido, siempre que se incluya una indicación como la que sigue: “ingredientes del producto cuando se prepara según las instrucciones
de la etiqueta.”

10.2.2.1.7 Cuando los productos objeto de esta Norma se hayan sometido a un proceso de irradiación, deben cumplir con lo establecido en el apartado de etiquetado de la NOM-033-SSA1-1993, señalada en el apartado de referencias.

10.2.2.1.8 Los aditivos empleados en la elaboración de los productos objeto de esta Norma, deben declararse de conformidad con lo establecido en el acuerdo y sus modificaciones, a excepción de los saborizantes y las enzimas, los cuales pueden figurar con la denominación genérica.

10.2.2.1.9 Coadyuvantes de elaboración y transferencia de aditivos.

10.2.2.1.9.1 Debe ser incluido en la lista de ingredientes todo aditivo que haya sido empleado en los ingredientes de los productos objeto de esta Norma y que se transfiera a estos últimos en cantidad notable o suficiente para desempeñar en ellos una función tecnológica.

10.2.2.1.9.2 Están exentos de declararse en la lista de ingredientes, los aditivos transferidos a los productos objeto de esta Norma que no cumplen una función tecnológica en el producto terminado, así como los coadyuvantes de elaboración, excepto aquellos que puedan provocar reacciones alérgicas o de intolerancia.

10.2.2.2 Instrucciones para el uso, conservación y preparación.

10.2.2.2.1 Instrucciones de uso:

10.2.2.2.1.1 Para los productos objeto de esta Norma que por diseño del envase requieran instrucciones de uso o consumo especiales, deben incluir una descripción escrita o gráfica de las instrucciones de empleo o preparación.

10.2.2.2.1.2 Los productos destinados a ser reconstituidos deben incluir una descripción escrita o gráfica de las instrucciones de uso, empleo o preparación.

10.2.2.2.2 Deben ostentar las siguientes leyendas de conservación, según corresponda:

10.2.2.2.2.1 Productos pasteurizados:

“Manténgase en refrigeración”, “Consérvese en refrigeración” o leyendas equivalentes.

10.2.2.2.2.2 Productos ultrapasteurizados y esterilizados deben incluir lo siguiente:

“Manténgase o consérvese en lugar fresco y seco”;

“No requiere refrigeración en tanto no se abra el envase”;

“Una vez abierto el envase, manténgase o consérvese en refrigeración”, o leyendas equivalentes.

10.2.2.2.2.3 Productos deshidratados:

“Consérvese en un lugar fresco y seco” o una equivalente.

"Una vez preparado el producto, manténgase o consérvese en refrigeración" o leyendas equivalentes.

10.2.2.3 Información nutrimental.

10.2.2.3.1 Los productos objeto de esta Norma, adicionados con vitamina D o con vitaminas A y D, según corresponda, deben hacer figurar su contenido con las siguientes leyendas:

"Contiene _____ g de Vitamina D por L", o

"Contiene _____ g de Vitamina D y _____ g equivalentes de retinol (Vitamina A*)/L".

En el espacio en blanco debe figurar el contenido de dichos nutrimentos, de conformidad con lo señalado en los numerales 7.1 y 7.2 o sus equivalentes por 100 g, por porción o por envase, si éste contiene sólo una porción.

*El término entre paréntesis es opcional.

10.2.2.3.2 Cuando voluntariamente se señalen dentro de la declaración nutrimental, deben figurar como se señala a continuación:

Tabla 11

Nutrimento	Cantidad por 100 g o por porción o por envase
Vitamina A	g equivalentes de retinol

Vitamina D	g

10.2.2.3.3 La declaración nutrimental en la etiqueta es sólo obligatoria cuando se declare alguna propiedad nutrimental o cuando se haya realizado una modificación nutrimental voluntariamente.

10.2.2.3.4 Cuando se incluya la declaración nutrimental, se debe hacer figurar lo siguiente:

a) Contenido energético;

b) Las cantidades de proteínas, hidratos de carbono (carbohidratos) disponibles y lípidos (grasas);

c) La cantidad de sodio;

d) La cantidad de cualquier otro nutrimento acerca del cual se haga una declaración de propiedades, a excepción de la Vitamina A y D según corresponda, las cuales deben figurar, de conformidad con lo señalado en el apartado 10.2.2.3.1 o 10.2.2.3.2.

10.2.2.3.5 Los productos objeto de esta Norma, sólo podrán ostentar una declaración de propiedad nutrimental, cuando el contenido del nutrimento sea igual o mayor al 5% del IDR/ por porción.

10.2.2.3.6 Los productos con modificación en su composición deben cumplir además con lo señalado en la NOM-086-SSA1-1994, citada en el apartado de referencias, a excepción de los adicionados con Vitamina A y D los cuales deben cumplir con lo señalado en este ordenamiento.

10.2.2.3.7 Presentación de la información nutrimental.

10.2.2.3.7.1 La declaración nutrimental debe hacerse en las unidades métricas que correspondan y en orden descendente conforme al aporte de nutrimentos del producto. La declaración debe hacerse por 100 g o por porción o por envase, si éste contiene sólo una porción.

10.2.2.3.7.2 La declaración sobre el contenido energético debe expresarse en kJ, de manera adicional, podrá declararse en kcal.

10.2.2.3.7.3 La declaración sobre la cantidad de proteínas, hidratos de carbono (carbohidratos) y lípidos (grasas) que contiene, debe expresarse en gramos.

10.2.2.3.7.4 La declaración sobre el contenido de sodio debe expresarse en mg.

10.2.2.3.7.5 Cuando la declaración numérica sobre vitaminas y minerales, se haga en porcentaje de la ingestión diaria recomendada (IDR), debe emplearse únicamente la tabla de recomendaciones ponderadas establecida en el Apéndice Normativo B de la NOM-086-SSA1-1994, o sus modificaciones; señalada en el apartado de referencias.

10.2.2.3.7.6 Los valores de composición bromatológica que figuren en la declaración, deben ser valores medios ponderados derivados de análisis o de tablas nacionales reconocidas, en este último caso, debe monitorearse periódicamente que exista correlación entre los datos de la tabla y el producto.

10.2.2.4 Información complementaria

10.2.2.4.1 A la nutrimental

Se puede incluir información nutrimental complementaria, la cual en ningún caso debe sustituir la declaración de los nutrimentos del apartado 10.2.2.3.4 y debe cumplir con lo siguiente:

La declaración de los nutrimentos sólo debe realizarse si se tiene asignado un IDR y el contenido de la porción esté por arriba del 5% de la IDR.

a) Todos o ninguno de los componentes o nutrimentos:

Grasa poliinsaturada ___g; grasa monoinsaturada ___g; grasa saturada ___g; colesterol ___mg. (En el espacio en blanco debe indicarse la cantidad del componente o nutrimento).

b) La declaración de uno de los siguientes no requiere la declaración de los otros:

Azúcar ___g; almidón ___g; fibra dietética ___g. (En el espacio en blanco debe indicarse la cantidad del componente o nutrimento).

c) Al expresar los tipos de constituyentes de los lípidos (grasas) y de los hidratos de carbono (carbohidratos) referidos en a) y b) se debe anteponer el texto "del cual..."

d) Número de porciones por presentación.

10.2.2.4.1.1 Cálculos de nutrimentos.

Se deben calcular de conformidad con lo establecido en el Apéndice Normativo C de este ordenamiento.

10.2.2.4.2 A la denominación.

Los productos objeto de esta Norma, deben ostentar junto a la denominación, con el mismo tipo y tamaño de letra la siguiente información:

a) La modificación nutrimental que lo caracterice, de conformidad con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSA1-1994, Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas en su composición. Especificaciones nutrimentales.

b) El texto, “Adicionada con Vitamina D” para los productos adicionados con Vitamina D_3, de conformidad con lo establecido en el numeral 7.2 de este ordenamiento.

10.2.2.4.3 En la superficie principal de exhibición debe declararse el tratamiento térmico al que fue sometido, así como otros tratamientos aplicados para asegurar la inocuidad del producto, establecidos en otros ordenamientos legales correspondientes.

10.2.2.5 Lote.

10.2.2.5.1 Cada unidad debe llevar grabada o marcada de cualquier modo la identificación del lote al que pertenece, la cual debe permitir la rastreabilidad del producto, estar relacionada con la fecha de elaboración y colocarse en cualquier parte del envase. Dicho dato no debe ser alterado u ocultarse en forma alguna.

10.2.2.5.2 Cuando se identifique con la fecha de elaboración, debe anteponerse la palabra "Lote ".

10.2.2.5.3 Cuando la identificación corresponda al lote y a la fecha de caducidad, se debe anteponer la leyenda “Lote y Fecha de caducidad” o “ lote y caducidad” o leyenda equivalente que no confunda al consumidor.

10.2.2.5.4 En el caso de los productos esterilizados comercialmente deben cumplir con lo establecido en la NOM-130-SSA1-1995, señalada en el apartado de referencias.

10.2.2.6 Fecha de caducidad.

10.2.2.6.1 Incluir la leyenda “Fecha de caducidad” o caducidad, o leyenda equivalente.

10.2.2.6.2 Para productos pasteurizados al menos: día y mes.

10.2.2.6.3 Para productos ultrapasteurizados: día, mes y año.

10.2.2.7 No se permite el uso de las siguientes declaraciones:

10.2.2.7.1 Declaraciones que impliquen que una dieta recomendable con alimentos o bebidas no alcohólicas ordinarios no puede suministrar cantidades suficientes de todos los nutrimentos.

10.2.2.7.2 Declaraciones, figuras, gráficos u otras que comparen o relacionen los productos sin procesar o sus nutrimentos con un producto procesado preenvasado, incluyendo superlativos.

10.2.2.7.3 Declaraciones de propiedades sin significado.

10.2.2.7.4 Declaraciones de propiedades sobre la utilidad de un producto para prevenir, aliviar, tratar o curar una enfermedad, trastorno o estado fisiológico.

10.2.2.7.5 Declaraciones de propiedades que pueden suscitar dudas sobre la inocuidad de los productos similares o causar, infundir, propiciar o explotar el miedo al consumidor y utilizarlo con fines comerciales.

10.2.2.7.6 Declaración de propiedades que indiquen que el producto ha adquirido un valor nutrimental especial o superior gracias a la adición de nutrimentos.

10.2.2.8 Envases múltiples o colectivos.

10.2.2.8.1 Cuando los productos objeto de este ordenamiento se encuentren en un envase múltiple o colectivo para su venta al consumidor, éste debe contar con la información a que se refiere la presente Norma Oficial Mexicana, en tanto que los envases individuales deben ostentar en sus etiquetas la misma información o sólo la indicación de lote y la leyenda “No etiquetado para su venta individual”.

10.2.2.8.2 Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, debe figurar en ésta y en cualquier cara del producto visible al consumidor, toda la información sanitaria establecida en este ordenamiento, excepto en los casos en que la etiqueta aplicada al envase pueda leerse fácilmente a través de la envoltura exterior.

10.2.2.8.3 En el caso de que los productos objeto de esta Norma contengan o incluyan productos preenvasados como parte de promociones u obsequios, tales como productos de panificación, cereales, chocolate u otros alimentos, deben incluir en el envase del producto de promoción u obsequio, cuando menos la siguiente información: lista de ingredientes, identificación del responsable del producto, fecha de caducidad y lote.

11. Envase y embalaje

11.1 Envase.

Los productos objeto de esta Norma se deben envasar en recipientes de tipo sanitario, elaborados con materiales inocuos y resistentes a las distintas etapas del proceso, de tal manera que no reaccionen con el producto o alteren las características físicas, químicas y sensoriales.

11.2 Embalaje.

Se debe usar material resistente que ofrezca la protección adecuada a los envases para impedir su deterioro exterior, a la vez que faciliten su manipulación, almacenamiento y distribución.

12. Concordancia con normas internacionales y mexicanas

Esta Norma Oficial Mexicana no es equivalente con ninguna norma internacional pero equivale parcialmente a las siguientes normas mexicanas:

12.1 Norma Mexicana NMX-F-368-1983, Alimentos-Leche fluida-Fosfatasa residual-Método de Prueba. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Dirección General de Normas.

13. Bibliografía

13.1 Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 1992. Ley Federal sobre Metrología y Normalización. México, D.F. **Diario Oficial de la Federación**.

13.2 Secretaría de Salud. 1991. Ley General de Salud. México, D.F. **Diario Oficial de la Federación**.

13.3 Secretaría de Salud. 1988. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios. México, D.F. **Diario Oficial de la Federación**.

13.4 Code of Federal Regulations. 1989. Parts 170 to 199. U.S.A.

13.5 FDA Bacteriological Analytical Manual. 1998. 8th Edition (Revisión A)/ Cap. 12. *Staphylococcus aureus*. Gaitherburg, M.D. U.S.A.

13.6 Food and Drug Administration. 1989. Grade "A" Pasteurized Milk Ordinance. Department of Health and Human and Services. U.S.A.

13.7 The Food and Drugs Act and Regulations. 1989. Canadá.

13.8 Ordennance Sur les exigences hygieniques et microbiologiques relatives aux denrées alimentaires, objets usuels et biens de consommation. 1985. Suiza.

13.9 Ordennance Sur les substances etrangéres et les composants dans les denrées alimentaires. 1986. Suiza.

13.10 Alfa-Laval. Manual de Industrias Lácteas. 1990. 2a. De., Iragra, S.A., Bardala, Madrid. España.

13.11 Association of Official Analytical Chemists. 1997. International Official Methods of Analysis 16th De. 3rd. (957.08) 47.3.22.

13.12 Association of Official Analytical Chemists. 1997. International Official Methods of Analysis 16th De. 3.d Rev. (960.49 A) 16.3.03.A.

13.13 Association of Official Analytical Chemists. 1990. Official Methods of Analysis 15th Edition, secs 982. 17 Fol. II, AOAC, Arlington, VA.

13.14 Alais Charles. 1988. Ciencia de los alimentos. Principios de Técnica Lechera. Ed. C.E.C.S.A. México, D.F.

13.15 Bacteriological Analytical Manual. 1998. U.S. Food and Drug Administration 8th Edition, Rev. A.

13.16 FAO, Manual of Food Quality Control. 1986. 14/8, pág. 30.

13.17 Judkins, H.F./Keener H.A. 1979. La leche su producción y procesos industriales. Ed. C.E.C.S.A. México, D.F.

13.18 Madrid A. 1992. Los aditivos en los alimentos. Mundiprensa, S.A. Zaragoza, España.

14. Observancia de la Norma

La vigilancia en el cumplimiento de la presente Norma corresponde a la Secretaría de Salud.

15. Vigencia

La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales contados a partir del día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

Las especificaciones establecidas en el apartado de etiquetado, entrarán en vigor en planta a los 180 días naturales contados a partir del día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

La presente Norma Oficial Mexicana suple a la siguiente Norma Oficial Mexicana NOM-091-SSA1-1994, Bienes y servicios. Leche pasteurizada de vaca. Disposiciones y especificaciones sanitarias, publicada en el **Diario Oficial de la Federación** el 21 de febrero de 1996.

México, D.F., a 1 de agosto de 2002.- El Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, **Ernesto Enríquez Rubio**.- Rúbrica.

APENDICE NORMATIVO A

A. METODOS DE PRUEBA

Precauciones generales de seguridad.

El analista debe consultar siempre la información respecto a la exposición y manejo seguro de los reactivos químicos especificados en estos métodos, para emplear el equipo de seguridad apropiado como bata de laboratorio, guantes de látex, anteojos de seguridad, mascarilla, etc., y trabajar cuando así se requiera bajo campana de extracción.

Para la aplicación de los siguientes métodos analíticos se debe cumplir con las Buenas Prácticas de Laboratorio.

1. Recolección de la muestra

Utilizar un frasco estéril de vidrio o de plástico provisto de tapón de cierre hermético, libre de fenol. Se recomienda el empleo de tapones de hule. Transportar la muestra en una hielera con refrigerante para lograr una temperatura de 10°C o menos; se debe evitar su congelación.

2. Preparación de la muestra

Antes de proceder al estudio fisicoquímico de la leche, homogeneizar la muestra por agitación e inversión repetida del recipiente que la contiene. En los casos que se observe la formación de grumos, calentar la muestra en baño de agua a temperatura aproximada de 38°C y emplear un agitador con gendarme para facilitar el desprendimiento de la crema adherida a la pared del frasco o del tapón.

Mantener la leche a 20°C al tomar las alícuotas necesarias para los análisis.

3. Determinación de inhibidores

3.1. Derivados clorados (prueba cualitativa).

3.1.1. Principio del método.

Cuando la muestra es tratada con ácido, se libera el cloro presente, si este cloro se hace reaccionar con yoduro de potasio y solución de almidón se desarrolla un color azul cuya intensidad va a depender de la cantidad de cloro presente.

3.1.2. Equipo.

Baño de agua a 85°C.

3.1.3. Materiales.

3.1.3.1. Tubos de ensaye de 16 x 150 mm, o equivalente.

3.1.3.2. Pipetas graduadas de 10 mL.

3.1.3.3. Agitadores de vidrio.

3.1.3.4. Embudos de filtración.

3.1.3.5. Papel filtro.

3.1.3.6. Baño de hielo.

3.1.4. Reactivos.

Los reactivos que a continuación se mencionan deben ser grado analítico a menos que se indique otra especificación y por agua debe entenderse agua destilada.

3.1.4.1. Yoduro de potasio (KI). Solución al 7%.

3.1.4.2. Acido clorhídrico (HCl) diluido 1:2. A 100 mL de ácido clorhídrico agregar 200 mL de agua.

3.1.4.3. Solución de almidón $(C_6H_{10}O_5)_n$. Suspender 1g de almidón en un poco de agua fría, homogeneizar y agregarlo a 100 mL de agua hirviendo, agitar hasta disolución completa, enfriar antes de usar. Utilizar solución recientemente preparada.

3.1.5. Procedimiento.

3.1.5.1. En un tubo de ensaye poner 5 mL de leche y agregarle 1,5 mL de solución de yoduro de potasio al 7%, agregar 4 mL de HCl diluido y mezclar perfectamente con una varilla de vidrio.

3.1.5.2. Colocar los tubos en un baño de agua a 85°C y dejar reposar 10 min. Sacar los tubos, enfriarlos rápidamente y colocarlos en baño de hielo. Filtrar, recoger el filtrado en un tubo de ensaye. Agregar al filtrado 0,5 - 1,0 mL de solución de almidón.

3.1.6. Interpretación de resultados.

La aparición de un color amarillo que va desde el azul hasta el azul morado (de acuerdo con la concentración de cloro presente), indica la presencia de cloro**.**

3.1.7. Expresión de resultados.

Prueba positiva o negativa

3.2. Sales cuaternarias de amonio (prueba cualitativa).

3.2.1. Principio del método.

Cuando se hace reaccionar el ion cuaternario de amonio en medio alcalino con un indicador (anaranjado de metilo) se forma un complejo que es extraído con cloroformo, el cual en medio ácido da un color magenta.

3.2.2. Materiales.

3.2.2.1. Matraces Erlenmeyer de 125 mL.

3.2.2.2. Mortero de porcelana de 10 cm de diámetro.

3.2.2.3. Embudos de filtración.

3.2.2.4. Tubos de ensaye.

3.2.2.5. Pipetas graduadas de 10 mL.

3.2.3. Reactivos.

Los reactivos que a continuación se mencionan deben ser grado analítico a menos que se indique otra especificación y por agua debe entenderse agua destilada.

3.2.3.1. Anaranjado de metilo ($C_{14}H_{14}N_3NaO_3S$). Solución acuosa al 0,15%.

3.2.3.2. Solución acuosa de hidróxido de sodio (NaOH). Disolver 66,5 g de hidróxido de sodio en 100 mL de agua.

3.2.3.3. Cloroformo ($CHCl_3$).

3.2.3.4. Sulfato de sodio anhidro (Na_2SO_4).

3.2.3.5. Acido clorhídrico (HCl) 2N.

3.2.3.6. Cloruro de benzalconio [cloruro de n-alquil- (C_{12} a C_{18}) bencildimetil amonio, con un intervalo de peso molecular de 351-380 y conteniendo cadenas de los grupos alquilo con 12 y 16 átomos de carbono], al 0,06%.

Para prepararlo considerar la concentración inicial del reporte del fabricante.

3.2.4. Procedimiento.

3.2.4.1. Colocar 25 mL de leche en un matraz Erlenmeyer, agregar 0,5 mL de solución acuosa de anaranjado de metilo, 1 mL de solución acuosa de hidróxido de sodio y 20 mL de cloroformo, agitar 3 min.

3.2.4.2. Pasar la emulsión resultante a un mortero al que previamente se le han agregado 50 g de sulfato de sodio anhídro, triturar perfectamente, agregar 20 mL de cloroformo y filtrar. Al filtrado agregar 5 mL de ácido clorhídrico 2 N y agitar.

3.2.4.3. Preparar una solución control de color, colocando en un matraz Erlenmeyer 25 mL de leche y 0,5 mL de la solución de cloruro de benzalconio al 0,06%. Proceder igual que en la muestra.

3.2.5. Interpretación de resultados.

Un color magenta cereza en la capa acuosa es una prueba positiva de cantidades mayores de 1 mg/kg de sales cuaternarias de amonio.

3.2.6. Expresión de resultados.

Prueba positiva o negativa.

3.3. Oxidante (prueba cualitativa).

3.3.1. Principio del método.

Esta basado en la formación de un compuesto colorido al hacer reaccionar el agente oxidante (peróxido de hidrógeno) que contenga la muestra con pentóxido de vanadio en presencia de ácido sulfúrico.

3.3.2. Materiales.

3.3.2.1. Tubos de ensaye de 15 mL.

3.3.2.2. Pipetas graduadas de 5 y 10 mL.

3.3.2.3. Probetas de 100 mL.

3.3.3. Reactivos.

Los reactivos que a continuación se mencionan deben ser grado analítico a menos que se indique otra especificación y por agua debe entenderse agua destilada.

3.3.3.1. Solución de ácido sulfúrico (H_2SO_4) 6 + 94 (v/v).

En un vaso de precipitados medir 94 mL de agua y lentamente resbalando por las paredes, adicionar 6 mL de H_2SO_4 concentrado.

3.3.3.2. Solución de pentóxido de vanadio (V_2O_5).

Disolver 1 g de pentóxido de vanadio en 100 mL de ácido sulfúrico 6 + 94.

3.3.4. Procedimiento.

En un tubo de ensaye medir 10 mL de leche y agregarle de 0,5 a 1,0 mL del reactivo de pentóxido de vanadio.

3.3.5. Interpretación de Resultados.

La aparición de un color rosa o rojo, indica la presencia de peróxido de hidrógeno (oxidante).

3.3.6. Expresión de resultados.

Prueba positiva o negativa

3.4. Determinación de formaldehído (prueba cualitativa).

3.4.1. Principio del método.

Se basa en la reacción del formaldehído con la sal disódica del ácido cromotrópico formando una coloración de lila a púrpura.

3.4.2. Equipo.

Equipo de destilación Kjeldahl.

3.4.3. Materiales.

3.4.3.1. Matraz Kjeldahl de 800 mL.

3.4.3.2. Material común de laboratorio.

3.4.4. Reactivos.

Todos los reactivos deben ser grado analítico a menos que se indique otra especificación y por agua se entiende agua destilada.

3.4.4.1. Acido fosfórico (H_3PO_4).

3.4.4.2. Sal disódica del ácido cromotrópico ($C_{10}H_8Na_2O_8S_2$).

3.4.4.3. Acido sulfúrico concentrado (H_2SO_4).

3.4.4.4. Formaldehído (CH_2O) al 37%, densidad = 1,08 g/L.

3.4.4.5. Solución de ácido sulfúrico al 72%.

Verter 150 mL de ácido sulfúrico en 100 mL de agua y enfriar.

3.4.4.6. Solución saturada de sal disódica del ácido cromotrópico.

Disolver 500 mg de sal disódica del ácido cromotrópico en 100 mL de solución de ácido sulfúrico al 72%. Enfriar a temperatura ambiente.

3.4.4.7. Solución de formaldehído de 40 mg/L.

Tomar 1 mL de formaldehído y aforar a 1 L con agua.

3.4.5. Procedimiento.

3.4.5.1. En el matraz de Kjeldahl tomar 100 mL de leche, adicionar 100 mL de agua y acidificar con 2 mL ácido fosfórico adicionando 1 mL de exceso. Destilar 50 mL.

3.4.5.2. En un tubo de ensaye poner 1 mL del destilado y 5 mL de solución saturada de sal disódica del ácido cromotrópico, colocarlo en baño maría a ebullición durante 15 minutos. Observar durante este periodo de calentamiento.

3.4.5.3. Preparar una solución control de color, colocando en un matraz Kjeldahl, 100 mL de leche y 1 mL de solución de formaldehído. Proceder como se describió en los numerales 3.4.5.1. y 3.4.5.2.

3.4.6. Interpretación de resultados.

La aparición de un color lila hasta púrpura indica la presencia de formaldehído.

3.4.7. Expresión de resultados.

Prueba positiva o negativa a formaldehído.

3.5. Inhibidores determinados por pruebas microbiológicas (residuos de antibióticos).

3.5.1. Principio del método.

Las substancias inhibidoras del crecimiento bacteriano presentes en la leche, se ponen de manifiesto por halos de inhibición medibles, que se forman cuando se impregnan discos de papel filtro con la muestra y se depositan sobre la superficie de una placa de agar inoculado con esporas de *B. stearothermophilus*.

3.5.2. Equipo.

3.5.2.1. Autoclave.

3.5.2.2. Centrífuga (de preferencia refrigerada).

3.5.2.3. Balanza granataria, de dos platillos, sensibilidad 0,1 g y capacidad de 1000 g.

3.5.2.4. Incubadora con termostato que evite variaciones mayores a 1,0ºC.

3.5.2.5. Microscopio óptico.

3.5.2.6. Nefelómetro de McFarland.

3.5.2.7. Equipo para tinción de Gram y esporas.

3.5.3. Materiales.

3.5.3.1. Asa y portaasa bacteriológicas.

3.5.3.2. Cajas Petri de vidrio de 100 X 20 mm con tapa de porcelana vidriada en la parte exterior o su equivalente en plástico, colocando un cojinete de papel filtro en la tapa.

3.5.3.3. Discos de papel de 12,7 mm de diámetro gruesos, de velocidad media y con alta retención (S&S 740 E o equivalentes en poder de absorción, calidad y pureza).

3.5.3.4. Matraces Erlenmeyer de 250 mL.

3.5.3.5. Micropipeta con capacidad para medir 90 μL.

3.5.3.6. Pinzas de disección con punta fina.

3.5.3.7. Porta objetos y puente de tinción.

3.5.3.8. Tubos de cultivo de 13 X 100 mm.

3.5.3.9. Tubos de centrífuga de 40 mL o más.

3.5.3.10. Vernier o medidor de halos.

3.5.4. Reactivos.

Los reactivos que a continuación se mencionan deben ser grado analítico a menos que se indique otra especificación y por agua debe entenderse agua destilada.

3.5.4.1. Subcultivo de *Bacillus stearothermophilus* variedad Calidolactis LNA 096/98 o ATCC10149.

3.5.4.2. Agar indicador PM.

Ingredientes	**Cantidad (g)**
Extracto de carne	3,0
Peptona	5,0
Triptona	1,7
Soytona	0,3
Dextrosa	5,25
Cloruro de sodio	0,5

K_2HPO_4	0,25
Polisorbato 80	0,06
Púrpura de Bromocresol	0,06
Agar	15,0

Preparación:

Disolver los ingredientes en un litro de agua destilada. Calentar hasta disolución completa del agar. Ajustar el pH, si es necesario. Esterilizar a 121ºC durante 15 min.

pH final 7,8 ± 0,2. Distribuir en placas como se indica en 3.5.5.5.

3.5.4.3. Caldo soya tripticasa (CST) sin dextrosa.

Ingredientes	Cantidad (g)
Peptona de caseína	17,0
Peptona de soya	3,0
Cloruro de sodio	5,0
Fosfato dipotásico	2,5

Preparación:

Disolver los ingredientes en un litro de agua destilada. Ajustar el pH. Distribuir en frascos en cantidades según se requiera. Esterilizar en autoclave a 121ºC durante 15 min.

pH final 7,3 ± 0,2.

3.5.4.4. Agar Soya Tripticasa (AST).

Ingredientes	Cantidad (g)
Peptona de caseína	15,0
Peptona de soya	5,0
Cloruro de sodio	5,0
Agar	15,0

Preparación:

Disolver los ingredientes en un litro de agua destilada. Calentar hasta disolución completa de agar. Ajustar el pH, si es necesario. Esterilizar a 121ºC durante 15 min. Enfriar a 50-60ºC y distribuir a placas de Petri.

pH final 7,3 ± 0,2.

3.5.4.5. Penicilinasa (â- lactamasa). Se pueden adquirir discos impregnados, de marca comercial que funcionan satisfactoriamente.

3.5.4.6. Penicilina G (sustancia de referencia).

3.5.4.7. Solución estéril de NaCI al 0,85% (m/v) (SS).

3.5.4.8. Solución amortiguadora de fosfatos, pH 6.

3.5.5. Procedimiento

3.5.5.1. Preparación de la solución de trabajo de Penicilina G de referencia.

Pesar 30 mg de Penicilina G de referencia, dentro de una atmósfera de humedad relativa menor a 50%. Disolver en solución amortiguadora de fosfatos para obtener una concentración de 100-1000 Unidades Internacionales/mL. Almacenar en la oscuridad entre 0-4,0ºC y usar dentro de los dos días siguientes
a su preparación.

3.5.5.2. Preparación del inóculo.

3.5.5.2.1. Mantener el cultivo de *B. stearothermophilus* en medio inclinado de AST, haciendo pases semanales. A partir de este cultivo inocular de 3 a 5 placas de AST, incubar a 55ºC -64ºC de 18-24 h. Cosechar el cultivo de cada placa con 2-3 mL de SS e inocular 3 matraces conteniendo cada uno 150 mL de CST sin dextrosa. Incubar a 55 - 64 $\pm$ 2ºC.

3.5.5.2.2. Periódicamente hacer una observación microscópica para determinar el grado de esporulación del cultivo (aproximadamente el 80% del cultivo en 72 h, está en fase esporulada). Centrifugar las células a 5000 rpm durante 15 min.

3.5.5.2.3. Decantar el sobrenadante y resuspender las células en SS. Repetir el lavado, suspender las células en 30 mL de SS y almacenar entre 0-4,0ºC. Esta suspensión puede mantenerse viable durante
6-8 meses. Verificar su viabilidad mediante cultivo en placas de AST.

3.5.5.3. Solución estándar de leche.

Diluir la solución de trabajo de Penicilina G en leche libre de inhibidores para obtener una concentración de 0.008 UI/mL. Usar recientemente preparado o almacenar entre 0-4,0ºC durante no más de 2 días, también se puede distribuir en pequeños volúmenes y congelar durante un tiempo no mayor a 6 meses.

3.5.5.4. Control negativo.

Leche fluida con un contenido de grasa de 0,0% a 3,8% y sólidos totales menos del 13%. Comprobar la ausencia de sustancias inhibidoras (comercialmente disponible).

3.5.5.5. Preparación de las placas.

3.5.5.5.1. Inocular el medio de agar indicador PM, fundido y enfriado a 55-64ºC con una suspensión de esporas (3.5.5.2.3.), en cantidad suficiente para obtener 1 X 10^6/mL de medio (cada laboratorio deberá ajustar el inóculo dependiendo de la concentración de esporas obtenida). De esta suspensión, pasar 6,0 mL a placas de Petri y dejar solidificar sobre una superficie nivelada.

3.5.5.5.2. Utilizar las placas recientemente preparadas o almacenar entre 0-4,0ºC en bolsas de plástico selladas e identificadas con la fecha de preparación. No usar después de 5 días a su preparación.

3.5.5.6. Prueba preliminar.

3.5.5.6.1. Agregar 90 µL de la muestra, usando micropipeta, asegurarse de que las puntas estén bien colocadas, en posición vertical y en el centro del disco, evitar la introducción de burbujas o colocar sobre la superficie de la muestra bien mezclada un disco de papel sostenido con las pinzas, hasta que se impregne completamente por capilaridad. Eliminar cualquier exceso de leche, tocar ligeramente la superficie interna de la tapa y colocar el disco inmediatamente sobre la placa de agar. Asegurar un completo contacto del papel filtro con el agar, presionar con las pinzas suavemente (repetir esta operación con todas las muestras).

3.5.5.6.2. Colocar un disco control en el centro impregnado con el estándar de leche (0,008 UI/mL de Penicilina G). Marcar e identificar los controles y las muestras. Se recomienda no colocar más de 7 discos por placa: 6 en la orilla y uno en el centro.

3.5.5.6.3. Verificar que todos los discos estén uniformemente absorbidos sin presentar exceso de leche
y colocados en forma adecuada. Invertir las placas e incubar a 55-64ºC $\pm$ 2ºC hasta que se observe una zona de inhibición bien definida (16 - 20 mm) alrededor del disco control.

3.5.5.6.4. Examinar las zonas de inhibición de las muestras y medir los halos con vernier. Las zonas de inhibición $\leq$ 14 mm se leen como negativo, zonas > 14 mm indican la presencia de inhibidores, lo cual
deberá confirmarse.

3.5.5.7. Prueba confirmatoria.

Calentar las muestras a 82ºC ± 2 min. Enfriar rápidamente y continuar como se indica en 3.5.5.5. Colocar también discos impregnados de penicilinasa (comerciales) o agregar 0,05 mL de penicilinasa a 5 mL de muestra e impregnar los discos.

3.5.5.8. Controles.

3.5.5.8.1. Cuando se aplica este método, el analista debe estar seguro de que cualquier grado de actividad antimicrobiana detectada, proviene de la muestra y nunca de las condiciones ambientales, del equipo o reactivos usados; ni del propio analista.

3.5.5.8.2. Se requiere, por lo tanto, aplicar las buenas prácticas de laboratorio y los controles adecuados, a lo largo de todo el análisis.

3.5.5.8.3. El control positivo que contiene solución de referencia de Penicilina G a una concentración de 0,008 UI/mL debe producir zonas de inhibición claras y bien definidas de aproximadamente 17-20 mm de diámetro. Si éstas no se presentan, la prueba no demuestra la sensibilidad adecuada y deberá repetirse.

3.5.5.8.4. La sensibilidad de este ensayo es normalmente ≥ 0,008 UI/mL. El control del diluyente, siempre debe dar resultados negativos.

3.5.5.9. Precauciones al realizar la prueba.

3.5.5.9.1. Para colocar los discos, utilizar pinzas limpias y flameadas.

3.5.5.9.2. Tocar con el disco la superficie de las muestras y permitir que el disco se sature por capilaridad. Las pinzas deben flamearse y enfriarse entre cada muestra.

3.5.5.9.3. Tocar la boca del recipiente con el disco, para eliminar el exceso de leche.

3.5.5.9.4. Colocar el disco sobre el agar a una distancia de aproximadamente 9 mm de la orilla hacia adentro y separados entre cada disco, unos 10 mm como mínimo. Presionar el disco suavemente y asegurarse de que hace contacto toda su superficie con el agar.

3.5.5.9.5. Aplicar el control positivo en el centro de la placa y el control negativo en cualquiera de los seis lugares de la orilla.

3.5.5.9.6. Incubar las placas en posición invertida, en una cámara húmeda, a la temperatura y el tiempo indicados en la metodología.

3.5.5.10. Precauciones en el uso de la micropipeta.

3.5.5.10.1. Homogeneizar la muestra. Fijar la punta a la micropipeta y en posición vertical oprimir el émbolo hasta el primer tope.

3.5.5.10.2. Introducir la punta 1 cm debajo de la superficie de la muestra. Soltar el émbolo y dejar que la punta se llene.

3.5.5.10.3. Si el émbolo se suelta rápidamente, el volumen de leche tomado no será uniforme. Si la punta no está llena en forma correcta, después de soltar el émbolo, descartar y repetir la operación.

3.5.6. Interpretación de los resultados.

Las pruebas: preliminar y confirmatoria, pueden dar lugar a los siguientes resultados:

3.5.6.1. Ausencia de zonas de inhibición en la prueba preliminar: la prueba es negativa a sustancias inhibitorias.

3.5.6.2. Zonas de inhibición alrededor de discos con muestra sin penicilinasa y ausencia de zonas de inhibición alrededor de discos tratados con penicilinasa, en prueba confirmatoria: la prueba es positiva a residuos de â-lactámicos.

3.5.6.3. Presencia de zonas de inhibición de igual tamaño en ambos discos (tratados y no tratados con penicilinasa): prueba positiva a sustancias inhibidoras diferentes a â-lactámicos.

3.5.6.4. Presencia de zonas de inhibición de menor tamaño (4 mm) en discos tratados con penicilinasa que los no tratados, en prueba confirmatoria: prueba positiva a residuos de â-lactámicos y a otros inhibidores.

3.5.7. Expresión de resultados.

Prueba positiva o negativa

4. Determinación de fosfatasa residual

4.1. Principio del método.

La muestra se incuba con fenilfosfato en solución reguladora de hidróxido de bario. Si la fosfatasa activa está presente, el fenilfosfato se hidroliza y se forma fenol.

$$C_6H_5OPO_3H_2 + H_2O \longrightarrow C_6H_5OH + H_3PO_4$$

Si la leche utilizada en la elaboración del producto ha sido pasteurizada eficientemente, la fosfatasa se inactiva y no hay hidrólisis.

El fenol formado se determina colorimétricamente haciendo reaccionar con 2,6-dibromoquinonacloroimida (B.Q.C.), obteniéndose un color azul, cuya intensidad se mide espectrofotométricamente a 610 nm.

4.2. Equipo.

4.2.1. Baño de agua con control de temperatura a 37-40°C.

4.2.2. Parrilla de calentamiento, de control termostático.

4.2.3. Espectrofotómetro de UV-Visible o fotocolorímetro disponible para utilizarse a 610 nm.

4.2.4. Balanza analítica con una precisión de 0,1 mg.

4.3. Materiales.

Todo el material de vidrio utilizado debe someterse a una temperatura entre 85-90ºC durante una hora.

4.3.1. Tubos de ensaye de 15 x 150 mm.

4.3.2. Tubos de ensaye con graduación de 0 a 10 mL.

4.3.3. Pipetas graduadas en 0,1 mL de 1, 5 y 10 mL.

4.3.4. Embudos de filtración, tallo corto, de 5 cm de diámetro.

4.3.5. Matraces volumétricos de diferentes capacidades.

4.3.6. Papel filtro Whatman No. 42 o No. 2 o su equivalente.

4.3.7. Material común de laboratorio.

4.4. Reactivos.

Los reactivos que a continuación se mencionan deben ser grado analítico y libres de fenol a menos que se indique otra especificación y por agua debe entenderse agua destilada.

4.4.1. Hidróxido de bario octahidratado [$Ba(OH)_2 . 8 H_2O$].

4.4.2. Acido bórico (H_3BO_3).

4.4.3. Metaborato de sodio ($NaBO_2$).

4.4.4. Cloruro de sodio (NaCl).

4.4.5. Borato de sodio decahidratado ($Na_2 B_4O_7 . 10 H_2O$).

4.4.6. Fenilfosfato disódico ($Na_2C_6H_5PO_4$). Cristales libres de fenol. Conservar en congelación o en desecador.

4.4.7. Alcohol butílico ($C_4H_{10}O$). Punto de ebullición 116-118°C.

4.4.8. Sulfato de zinc heptahidratado ($Zn\ SO_4 . 7\ H_2O$).

4.4.9. Sulfato de cobre pentahidratado ($CuSO_4 . 5\ H_2O$).

4.4.10. 2,6 Dibromoquinonacloroimida (BQC) $C_6H_2OBr_2NCl$.

4.4.11. Fenol (C_6H_6O).

4.4.12. Solución reguladora de hidróxido de bario-borato (pH 10,6 ± 0,15 a 25°C).

4.4.12.1. Disolver en agua caliente 25 g de hidróxido de bario octahidratado (fresco, no deteriorado), enfriar y diluir a 500 mL. Por separado, disolver 11 g de ácido bórico y diluir a 500 mL. Calentar cada una de las soluciones a 50°C, mezclarlas, agitar y enfriar aproximadamente a 20°C. Filtrar y conservar el filtrado en recipiente perfectamente tapado.

4.4.12.2. Cuando se aplique para leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado, pasteurizados descremados, sin sabor, diluir 500 mL de este regulador con 500 mL de agua.

4.4.12.3. Cuando se aplique para leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado, pasteurizados con sabor, diluir esta solución reguladora con un cuarto de su volumen de agua (ejemplo 80 mL de este regulador con 20 mL de agua).

4.4.12.4. Para leche de cabra esta solución reguladora se prepara pesando 26 g de hidróxido de bario octahidratado en lugar de 25 g.

4.4.13. Soluciones reguladoras de trabajo con fenil fosfato disódico.

4.4.13.1. Para leche, fórmula láctea y producto lácteo combinado pasteurizados.

Disolver 0,1 g de fenil fosfato disódico en 100 mL de una mezcla de 50 mL de la solución reguladora de hidróxido de bario-borato (4.4.12.1.). En caso de que el fenil fosfato disódico no esté libre de fenol debe ser purificado de la siguiente manera:

4.4.13.1.1. Disolver 0,5 g de la sal en 4,5 mL de agua; agregar 0,5 mL de la solución reguladora de hidróxido de bario-borato (4.4.12.) y dos gotas de reactivo B.Q.C. (4.4.18.); dejar en reposo 30 min. Al cabo de este tiempo agregar 2,5 mL de alcohol butílico y dejar en reposo hasta que se separe el alcohol, con objeto de eliminar el color. Eliminar el alcohol con gotero o pipeta Pasteur y descartar.

4.4.13.1.2. Diluir 1 mL de la solución acuosa a 100 mL con el regulador de substrato (4.4.12.). Calentar la solución a 85°C por 2 min, tapar inmediatamente y guardar en refrigeración**.** Esta solución madre debe mantenerse en el refrigerador durante algunos días. Al emplearse, desarrollar el color y eliminarlo por extracción como se ha indicado anteriormente. La solución es estable por un año si se encuentra bien guardada y con mínima exposición al aire. Antes de usar, desarrollar el color y reextraer si es necesario.

4.4.13.2. Para productos con sabor.

Disolver 0,1 g de fenil fosfato disódico en 100 mL de una mezcla de 80 mL de la solución de hidróxido de bario (4.4.12.1.) y 20 mL de agua, mezclar bien. Conservar en frasco color ámbar y en refrigeración.

4.4.13.3. Para helados.

Disolver 0,1 g de fenil fosfato disódico en 80 mL de solución de borato-hidróxido de bario (4.4.12.1.) y 20 mL de agua, mezclar bien. Conservar en frasco color ámbar y en refrigeración.

4.4.13.4. Para sorbetes.

Disolver 0,1 g de fenil fosfato disódico en 50 mL de solución de borato-hidróxido de bario (4.4.12.1.) y 50 mL de agua, mezclar bien. Conservar en frasco color ámbar y en refrigeración.

4.4.14. Solución reguladora para desarrollo de color (pH 9,8 ± 0,15 a 25°C).

Disolver 6 g de metaborato de sodio y 20 g de cloruro de sodio en agua y diluir a un litro.

4.4.15. Solución reguladora para dilución de color. (Para el caso que la muestra haya salido fuertemente positiva).

Diluir 100 mL de la solución anterior (4.4.14.) a un litro con agua.

4.4.16. Solución reguladora patrón para calibrar el potenciómetro (0,00996 M, pH 9,18 a 25°C).

4.4.16.1. Disolver 3,80 g de borato de sodio decahidratado en agua y diluir a un litro (en ningún caso debe secarse esta sal en el horno, antes de emplearse).

4.4.16.2. Para evitar contaminación con CO_2 mantener perfectamente tapado el recipiente o protegerlo con un tubo de cal sodada.

4.4.16.3. Esta solución reguladora debe utilizarse dentro de los 10 min siguientes a su extracción del frasco.

4.4.17. Reactivo precipitante de proteínas zinc-cobre.

4.4.17.1. Para leche, fórmula láctea o producto lácteo combinado pasteurizados sin sabor y sorbetes.

Disolver 3 g de sulfato de zinc heptahidratado y 0,6 g de sulfato de cobre pentahidratado en agua y diluir a 100 mL.

4.4.17.2. Para leche, fórmula láctea o producto lácteo combinado, pasteurizados con sabor y helados.

Disolver 4,5 g de sulfato de zinc heptahidratado y 0,1 g de sulfato de cobre pentahidratado en agua y llevar a un volumen de 100 mL.

4.4.18. Solución de 2,6-dibromoquinonacloroimida (B.Q.C.) ($C_6H_2OBr_2NCl$).

4.4.18.1. Disolver 40 mg de polvo de BQC en 10 mL de alcohol etílico y conservar esta solución en frasco gotero ámbar. Guardar en refrigeración. La solución es estable durante una semana. Desechar si se torna color café.

4.4.18.2. Antes de usarse los nuevos frascos de BQC deberán ser comprobados preparando curvas patrón con fenol y comparados con los de la solución en buen estado; hacer esta comprobación cuando menos dos veces por año.

4.4.19. Solución de sulfato de cobre para patrones al 0,05%.

Disolver 0,05 g de sulfato de cobre pentahidratado en 100 mL de agua.

4.4.20. Solución de alcohol butílico.

Para ajustar su pH, mezclar un litro de éste, con 50 mL de la solución reguladora para desarrollo de color (4.4.14.). Conservar en frasco de tapón de vidrio esmerilado.

4.4.21. Solución madre de fenol de 1 mg/mL.

Pesar exactamente 1,0 g de fenol, transferir a un matraz volumétrico de un litro y llevar al volumen con agua. Mezclar perfectamente. Esta solución es estable durante varios meses mantenida en refrigeración.

4.4.22. Solución patrón de fenol de 10 μg/mL o 10 unidades/mL (solución de trabajo).

4.4.22.1. Diluir 10 mL de la solución madre (4.4.21.) a un litro con agua y mezclar perfectamente.

4.4.22.2. Para preparar soluciones patrón más diluidas, diluir 5, 10, 30 y 50 mL de esta solución en 100 mL para que respectivamente contengan 0,5; 1,0; 3,0 y 5,0 μg o unidades de fenol por mL. Estas soluciones patrón mantenidas en refrigeración no se deben emplear después de una semana.

4.4.22.3. De manera semejante preparar las soluciones patrón que contengan 20, 30 y 40 unidades por mL.

4.4.22.4. Guardar en refrigeración y permitir que esté a la temperatura ambiente en el momento de su uso.

4.5. Procedimiento.

4.5.1. Preparación de la curva patrón de comparación.

4.5.1.1. En series de tubos (de preferencia graduados en 5 y 10 mL), medir volúmenes adecuados de la solución patrón de trabajo, a fin de obtener un margen favorable de patrones según las necesidades. Se recomienda incluir 0,0 (testigo), 0,5; 1,0; 3,0; 10,0; 20,0; 30,0 y 40,0 unidades.

4.5.1.2. Con objeto de aumentar la intensidad del color azul y la estabilidad de los patrones agregar a cada tubo 1 mL de la solución de sulfato de cobre al 0,05% (4.4.19.) y a continuación 5 mL de la solución reguladora para dilución de color (4.4.14.). Llevar a un volumen de 10 mL con agua. Agregar 4 gotas de la solución B.Q.C. (4.4.18.) mezclar y dejar en reposo 30 min, a temperatura ambiente para desarrollo de color.

4.5.1.3. En caso de emplear el procedimiento de extracción con alcohol butílico normal, proceder como se indica más adelante.

4.5.1.4. Hacer la lectura de la intensidad del color con un espectrofotómetro a 610 nanómetros, restar el valor que alcanza la lectura del testigo a la de cada una de las soluciones patrones de fenol; finalmente construir una curva de calibración la cual debe ajustarse mediante el método de mínimos cuadrados (regresión lineal).

4.5.1.5. Si se pretende efectuar una comparación visual de los patrones, se conservan en refrigeración
y se prepara una nueva serie cada semana.

Precauciones generales.

La homogenización de la leche, fórmula láctea o producto lácteo combinado para la determinación de fosfatasa es fundamental antes de desarrollar la técnica. Colocar varios mililitros en un tubo de ensaye pequeño, tapar y guardar en el refrigerador; si es necesario el empleo de un conservador agregar cloroformo en concentraciones de 1-3 mL por cada 100 mL de leche, fórmula láctea o producto lácteo combinado.

4.5.2. Preparación de la muestra.

4.5.2.1. Leche fórmula láctea o producto lácteo combinado.

4.5.2.1.1. Medir con pipeta 1 mL de muestra preparada de leche en 2 o 3 tubos (se necesita un tubo como testigo y se recomienda preparar dos o más tubos para determinaciones por duplicado); en caso de la leche de cabra emplear 3,0 mL de la muestra.

4.5.2.1.2. Agregar a cada tubo 10 mL de la solución reguladora de trabajo con fenil fosfato disódico (4.4.13.1.) o para las determinaciones cuantitativas en leche cruda; tapar los tubos y mezclar (pH 10,0 ± 0,15).

4.5.2.1.3. Calentar el tubo testigo en un baño de agua a ebullición cubierto durante 1 min (la temperatura interna del tubo debe estar entre 85-90°C). Dejar enfriar a temperatura ambiente y mezclar de nuevo con
el agitador.

4.5.2.2. Productos saborizados, helados y sorbetes.

4.5.2.2.1. Pesar 1,0 g de muestra (de preferencia por duplicado), colocar en un tubo (si la muestra es pegajosa, pesar en papel encerado de 2,5 x 2,5 cm e insertar el papel con la muestra dentro del tubo). De la misma forma pesar otra cantidad igual que servirá de muestra testigo.

4.5.2.2.2. Calentar el tubo testigo en un baño de agua a ebullición cubierto durante 1 min (la temperatura interna del tubo debe estar entre 85-90°C). Dejar enfriar a temperatura ambiente y mezclar de nuevo
con el agitador.

4.5.2.2.3. Agregar a los tubos con muestra 1 mL de la solución reguladora de trabajo correspondiente (4.4.13.), mezclar con el agitador de vidrio. A partir de esta etapa manejar de igual forma el testigo
y las muestras.

4.5.2.2.4. Agregar 10 mL de la solución reguladora correspondiente:

Para productos saborizados (4.4.13.2.).

Para helados (4.4.13.3.).

Para sorbetes (4.4.13.4.).

Nota: La temperatura interna del tubo que contiene la muestra testigo que debe estar entre 85-90°C, es controlada con un termómetro sumergido en un tubo de tamaño y volumen igual al de las pruebas.

4.5.3. Determinación de fosfatasa residual. (Esta parte del procedimiento es común a todos los derivados lácteos).

4.5.3.1. Inmediatamente después de agregar la solución de substrato, incubar los tubos en baño de agua durante una hora a 37-38°C agitando ocasionalmente durante este tiempo. Trasladar los tubos a un recipiente con agua a ebullición durante 1 min. Dejar enfriar los tubos a la temperatura ambiente por inmersión en un recipiente de agua fría.

4.5.3.2. Agregar con una pipeta 1 mL de la solución precipitante de proteínas zinc-cobre correspondiente (4.4.17.) a los tubos de la siguiente manera:

a) Para leche, fórmula láctea o producto lácteo combinado**,** sin sabor y sorbetes adicionar la solución (4.4.17.1.).

b) Para leche, fórmula láctea o producto lácteo combinado, pasteurizados con sabor y helados, adicionar la solución (4.4.17.2.).

4.5.3.3. Mezclar perfectamente el contenido de los tubos. El pH de la mezcla debe estar entre 9,0-9,1; filtrar (empleando embudos de 5 cm de diámetro y papel filtro No. 42 de 9 cm de diámetro o bien el No. 2 o su equivalente). Recoger 5 mL del filtrado en un tubo, de preferencia graduado en 5 y 10 mL.

4.5.3.4. Agregar 5 mL de solución reguladora para desarrollo de color (4.4.14.). El pH de la mezcla debe estar entre 9,3-9,4.

4.5.3.5. Agregar 4 gotas del reactivo B.Q.C. (4.4.18.), mezclar y dejar a temperatura ambiente durante
30 min para desarrollo de color. En los casos en que se investigue pasteurización deficiente se agregan 2 gotas del reactivo de B.Q.C.

4.5.3.6. Determinar la intensidad del color azul con cualquiera de los siguientes métodos:

a) Método espectrofotométrico.

Leer las intensidades de color del tubo testigo y de las muestras a 610 nm, restar la lectura del testigo
de la lectura del tubo de la muestra y convertir el resultado a unidades de fenol, utilizando la curva patrón (4.5.1.).

Ordinariamente se hace innecesaria la extracción con alcohol butílico cuando se emplea el espectrofotómetro. En los casos en que se emplee la extracción con este alcohol, purificar el reactivo como se señala en la valoración de la pasteurización (4.4.13.1.1.), centrifugar la muestra durante 5 min a fin de romper la emulsión y remover el agua suspendida en la capa alcohólica. Después de centrifugar, con una pipeta capilar provista de bulbo de hule, separar todo el alcohol butílico. Filtrar y recoger el filtrado en la celda del espectrofotómetro y leer a 610 nm.

b) Método visual con escala de patrones.

Comparar los colores de las muestras que dan más de 5 unidades con los tubos de color que contienen patrones de fenol (4.5.1.).

Para obtener resultados cuantitativos en aquellos casos en que haya variaciones entre 0,5 y 5 unidades de color, hacer la extracción con alcohol butílico, agregando 5 mL de alcohol e invirtiendo lentamente varias veces; centrifugar como se señala en el método anterior, si fuera necesario, para aumentar la claridad de la capa alcohólica y comparar el color con los patrones tratados en igual forma.

En aquellas pruebas en las que durante el desarrollo de color se obtengan resultados fuertemente positivos (por ejemplo con 20 unidades o más) y en las cuales no sean suficientes 4 gotas del reactivo de B.Q.C. (4.4.18.) para reaccionar con todo el fenol, hacer diluciones colocando nuevos tubos con volúmenes conocidos que se diluyen a 10 mL con la solución reguladora de dilución de color (4.4.15.) y

agregar 2 o más gotas del reactivo B.Q.C. En cada una de estas pruebas diluir el testigo y tratarlo directamente.

De la misma manera en aquellos casos en los que estas nuevas diluciones produzcan nuevamente reacciones fuertemente positivas, todavía será necesario volver a preparar otras diluciones más, hasta que el color quede comprendido entre los de la escala o de la curva del espectrofotómetro.

Para hacer la lectura final, dejar transcurrir 30 min a partir del momento de la adición del reactivo B.Q.C a fin de que se desarrolle totalmente su color. Multiplicar las lecturas de las diluciones por el factor de dilución por 2 en el caso de haber diluido 5 mL; por 10, para aquella dilución inicial 1+9 mL y por 50, en caso de una dilución inicial 1+9 mL, seguida de otra de 2+ 8 mL.

4.6. Cálculos.

4.6.1. Para leche, fórmula láctea o producto lácteo combinado, pasteurizados u otros productos lácteos donde se mide 1 mL de muestra líquida y se adicionan 11 mL de los reactivos (el volumen total del líquido es de 12 mL) y se emplean 5 mL del filtrado.

U. de Fenol/mL = C x 2,4

4.6.2. Para productos saborizados, helados y sorbetes donde se pesan 1 g de la muestra y se agregan
11 mL de los reactivos (el volumen total del líquido es de 12 mL) y se emplean 5 mL del filtrado.

U. de Fenol/g = C x 2,2

donde:

C = concentración de la muestra obtenida de la gráfica de la curva patrón en unidades fenol/mL.

2,2 y 2,4 = Factores de dilución.

4.7. Expresión de resultados.

Unidades de fenol / mL o g.

5. Determinación de vitamina A por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC en fase reversa).

5.1. Principio del método.

Los lípidos son ésteres que en presencia de un álcali cáustico se hidrolizan liberando el material insaponificable, el cual es extraído con un disolvente orgánico. Posteriormente la vitamina A contenida en este material, es cuantificada por medio de Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución.

5.2. Equipo.

5.2.1. Sistema de HPLC que incluye:

5.2.1.1. Bomba binaria LC.

5.2.1.2. Inyector automático o manual de muestras.

5.2.1.3. Detector espectrofotométrico de longitud de onda variable UV-Visible LC.

5.2.1.4. Integrador computarizado LC.

5.2.1.5. Columna Octadecil ODS (20), tamaño de partícula 5 µm, longitud 250 mm x diámetro interno 4,6 mm.

5.2.2. Balanza analítica, con capacidad de 160 g, lectura 0,1 mg.

5.2.3. Placas de agitación con calentamiento.

5.2.4. Cilindro para gas comprimido de nitrógeno pureza 95%.

5.2.5. Cilindro para gas comprimido de helio pureza 95%.

5.2.6. Evaporador rotatorio con elevador rápido y baño maría.

5.2.7. Equipo de filtración para la preparación de la fase móvil.

5.2.8. Cronómetro o reloj.

5.3. Materiales.

5.3.1. Matraces volumétricos actínicos o de color marrón con tapón de vidrio o teflón de 50 y 100 mL.

5.3.2. Matraces actínicos o de color marrón de fondo plano, cuello corto de 250 mL.

5.3.3. Matraces, en forma de pera actínicos o de color marrón, de cuello corto y boca esmerilada de 500 mL (que embone en el rotavapor).

5.3.4. Matraces volumétricos actínicos o de color marrón de 10 mL.

5.3.5. Vasos de precipitados de 500 mL.

5.3.6. Embudo de separación cónico, actínicos o de color marrón, con llave de teflón 500 mL.

5.3.7. Embudo tallo corto diámetro 12 cm.

5.3.8. Tapones de teflón huecos hexagonales o actínicos o de color marrón.

5.3.9. Refrigerante con macho y hembra, manguito 300 mL, de 50 cm de longitud aproximadamente.

5.3.10. Manguera de látex.

5.3.11. Papel filtro mediano No. 1 con diámetro de 18,5 cm.

5.3.12. Pipetas volumétricas con marca de 5 y 4 mL.

5.3.13. Jeringa de vidrio sin aguja desechable de 10 mL.

5.3.14. Jeringa de vidrio de 50 μL con aguja sin punta.

5.3.15. Filtros para jeringa (acrodiscos para HPLC) de 0,45 μm de tamaño de poro y diámetro de 25 mm, para solventes orgánicos y fase móvil.

5.3.16. Membranas de filtración de fluoruro de polivinilideno, utilizada para fases móviles (solventes orgánicos y acuosos), cuyos extractables sean de absorción en UV, u otro filtro para fines similares.

5.3.17. Magnetos para placa de agitación.

5.4. Reactivos.

Los reactivos que a continuación se mencionan deben ser grado analítico y por agua debe entenderse agua destilada.

5.4.1. Estándar de retinol (vitamina A) cristalizada ($C_{20}H_{30}O$) all trans RETINOL con certificado de pureza.

5.4.2. Hidróxido de potasio en lentejas (KOH).

5.4.3. Alcohol etílico absoluto (C_2H_5OH).

5.4.4. Eter de petróleo intervalo de ebullición 40 - 60°C.

5.4.5. Fenolftaleína en solución etanólica al 1%, indicador ($C_{20}H_{14}O_4$).

5.4.6. Metanol grado HPLC (CH_3OH).

5.4.7. Agua destilada filtrada (sólo para la preparación de fase móvil).

5.4.8. Agua destilada que se utilizará en los lavados del saponificado (verificar que el valor de pH no sea mayor de 6,0).

5.4.9. Sulfato de sodio anhidro (Na_2SO_4).

5.4.10. Acido ascórbico ($C_6H_8O_6$).

5.4.11. Fase móvil metanol: agua (95:5) para HPLC.

Pasar agua destilada a través de una membrana de filtración para soluciones acuosas. Pasar metanol a través de una membrana de filtración para solventes orgánicos. Posteriormente mezclar 50 mL de agua destilada en 950 mL de metanol (fase móvil). Degasificar la fase móvil pasando una ligera corriente de gas helio o por ultrasonido 15 minutos a temperatura ambiente.

5.4.12. Soluciones patrón de vitamina A.

5.4.12.1. Solución concentrada (150 μg equivalentes de retinol).

Justo antes de emplearse, pesar 15 mg de retinol cristalizado (A - OH) y registrar el peso exacto. Colocar el estándar pesado en un matraz volumétrico de 100 mL. Disolver con metanol y llevar al volumen.

5.4.12.2. Solución intermedia (15 μg equivalentes de retinol).

Diluir 5 mL de la solución concentrada a 50 mL con el mismo metanol para obtener una solución de aproximadamente 50 UI/mL.

5.4.12.3. Solución de trabajo (6 μg equivalentes de retinol).

Añadir 4 mL de la solución estándar intermedia al matraz marcado como estándar y adicionar los reactivos al igual que al blanco y muestra como se indica en el apartado de saponificación. Esta solución tendrá aproximadamente 20 UI/mL de vitamina A, al final del proceso de recuperación, en el matraz volumétrico de 10 mL.

Nota 1:

Si el certificado de % de pureza en el estándar es inferior al 85% no debe prepararse la solución patrón, siendo necesario un nuevo estándar de otro lote con una pureza superior a la antes indicada.

Nota 2:

La vitamina A-OH (A-alcohol) se oxida con gran rapidez y es muy sensible a la luz. Al abrir una ampolleta nueva de vitamina A-cristalizada, pesar la cantidad de estándar requerida y guardar la ampolleta bajo atmósfera de nitrógeno o en condiciones similares.

5.5. Procedimiento.

Nota 3:

La vitamina A es sensible a la luz. Utilizar material actínico o de color marrón o bien, proteger el material con papel aluminio. Por otra parte efectuar las evaporaciones con rotavapor a una temperatura máxima de 40ºC. No evaporar a sequedad. Romper el vacío e inmediatamente introducir nitrógeno al sistema o al matraz. Evaporar los últimos mililitros mediante una corriente de nitrógeno sin llegar a la sequedad.

5.5.1. Toma de muestra.

En el caso de productos deshidratados, reconstituir con agua, de acuerdo con las instrucciones señaladas en la etiqueta o 130 g del producto llevados a 1 L con agua. Disolver y agitar la muestra a fin de homogeneizarla por completo.

Medir de preferencia por duplicado una cantidad de muestra tal, que contenga de 30 a 90 μg equivalentes de retinol (100 a 300 UI de vitamina A) o la cantidad correspondiente a lo declarado en la etiqueta de la muestra. En caso de no contar con esta información no es conveniente realizar el análisis.

5.5.2. Saponificación.

5.5.2.1. Marcar 4 matraces actínicos de cuello corto y esmerilado con fondo plano de 250 mL (cuando la muestra se trabaje por duplicado) de la siguiente manera: blanco, estándar y muestra.

5.5.2.2. Añadir los siguientes reactivos a cada uno de los matraces antes mencionados: 7 g de hidróxido de potasio y a continuación añadir 60 mL de alcohol absoluto. Mezclar para disolver. Agregar 0,5 g de ácido ascórbico así como una barra magnética. Adicionar una ligera corriente de nitrógeno a cada uno de los matraces.

5.5.2.3. Montar un sistema de reflujo y calentar durante 30 minutos en placas de calentamiento o baño de agua en ebullición con agitación constante.

Nota 4:

Durante la saponificación, asegurar una buena agitación del medio de reacción.

5.5.3. Extracción del insaponificable.

5.5.3.1. Una vez concluido el tiempo de saponificación, enjuagar con máximo 30 mL de agua destilada (evitar el exceso de agua para prevenir la formación de emulsiones) por las paredes internas del refrigerante sin quitar el matraz del saponificado. Enfriar el matraz aún instalado al refrigerante sumergiéndolo parcialmente en un vaso de precipitados que contenga agua fría, lo anterior con la finalidad de llevarlo a temperatura ambiente, evitando enfriarlo demasiado. Trasvasar la suspensión a un embudo de separación de 500 mL.

5.5.3.2. Enseguida enjuagar el matraz con 100 mL de éter de petróleo que se añaden al embudo de separación. Extraer la vitamina A agitando ligeramente. Dejar separar las fases. Vaciar la fase acuosa a otro embudo de 500 mL. Recoger la fase orgánica a un tercer embudo de separación de 500 mL. Repetir la operación dos veces más, enjuagando el matraz con dos porciones de 100 mL de éter cada una.

5.5.3.3. Efectuar esta extracción 3 veces en total (un lavado de 50 mL y 2 lavados de 100 mL). Hacer las agitaciones con mucho cuidado para evitar emulsiones.

5.5.3.4. Lavar la solución orgánica con porciones de 100 mL de agua adicionándola por las paredes del embudo, agitando suavemente, hasta que el agua del lavado ya no dé reacción colorida con la fenolftaleína. Después del último lavado, esperar de 15 a 30 minutos antes de vaciar la fase acuosa y volver a revisar con el indicador que no exista reacción colorida.

5.5.3.5. Filtrar la solución lavada en continuo a través de un filtro que contiene aproximadamente 10 g de sulfato de sodio anhidro y recoger el filtrado en un matraz de pera de 500 mL, sin dejar secar el filtro. Al final enjuagar el sulfato de sodio contenido en el filtro con 50 mL de éter de petróleo.

5.5.3.6. Evaporar el disolvente en un rotavapor a 40ºC y dejar un remanente de aproximadamente 6 mL. Tratar de reducir esta cantidad del disolvente a un volumen de 2 mL aproximadamente mediante una corriente de nitrógeno.

5.5.3.7. Disolver el remanente obtenido con 3 mL de la fase móvil y recolectar cuantitativamente la solución con una jeringa de vidrio. Filtrar la solución a través de un filtro acrodisco de 0,45 μm a un matraz actínico de 10 mL. Lavar el matraz pera con porciones de 2 mL de fase móvil y repetir el mismo procedimiento hasta llegar al aforo del matraz. Hacer lo mismo para cada filtro de blanco, estándar y probar por duplicado.

Nota 5:

Se recomienda acondicionar el acrodisco de 0,45 μm con metanol antes de utilizarlo en la filtración del recuperado.

5.5.4. Condiciones cromatográficas.

5.5.4.1. Fijar los siguientes parámetros de acuerdo con las instrucciones de operación del cromatógrafo.

Columna Octadecil ODS (20), tamaño de partícula 5 μm, longitud 250 mm x diámetro interno 4,6 mm.

Loop de inyección: 20 μL.

Fase móvil: metanol: agua 95:5.

Flujo: 1 mL/min.

Detector: Longitud de onda ajustada a 325 nm.

Registrador: 5 mm/min.

5.5.5. Determinación de vitamina A.

Inyectar dos veces los siguientes analitos: primero 20 μL del blanco, después 20 μL de la solución estándar para HPLC (20 UI/mL aprox.) y por último 20 μL de la muestra (del saponificado).

5.5.5.1. En el cromatograma, identificar el pico y tiempo de retención de la vitamina A correspondiente al estándar. Con estos datos, identificar el pico y tiempo de retención de la vitamina A contenida en la muestra.

5.5.5.2. Calcular la altura del pico de la solución patrón y de las muestras en los cromatogramas obtenidos.

5.6. Cálculos.

El contenido de vitamina A, expresado en Unidades Internacionales por L de producto es igual a:

$$\text{UI vitamina A/L} = \frac{hp \times C \times V \times 1000}{h_S \times m}$$

En donde:

m = toma de ensayo en g o mL.

h_P = altura del pico de la muestra, en mm.

h_S = altura del pico de la solución estándar final, en mm.

C = concentración de la solución estándar final inyectada, en UI/mL para la vitamina A.

V = volumen de solución estándar final, en el cual ha sido diluido el remanente antes de la cromatografía.

Los resultados deben reportarse como µg equivalentes de retinol.

5.7. Expresión de resultados.

µg equivalentes de retinol/ L
1 UI = 0,3 µg equivalentes de retinol (all trans RETINOL)

6. Determinación de AFM_1 en leche, fórmula láctea o producto lácteo combinado por columna de inmunoafinidad- HPLC.

6.1. Principio del método.

La AFM_1 es extraída por aplicación de la porción de prueba (leche líquida o leche deshidratada reconstituida) a una columna de inmunoafinidad, la cual contiene anticuerpos monoclonales específicos ligados a un material de soporte sólido. Así como la muestra pasa a través de la columna, los anticuerpos selectivamente se ligan a la AFM_1 presente para formar un complejo antígeno-anticuerpo. Los otros componentes de la matriz de la muestra son removidos de la columna con agua destilada. La AFM_1 es eluida de la columna con acetonitrilo y cuantificada por HPLC en fase reversa con detección de fluorescencia.

6.2. Equipo.

6.2.1. Sistema HPLC, que incluye:

6.2.1.1. Bomba.

6.2.1.2. Inyector automático o manual de muestras.

6.2.1.3. Columna HPLC C_{18} de 4.6 x 250 mm, 5 µm de tamaño partícula.

6.2.1.4. Detector de fluorescencia.

6.2.1.5. Integrador de datos o computadora personal con el software adecuado para el control del equipo y procesamiento de datos.

6.2.2. Bomba manual (cuerpo de jeringa de vidrio de 50 mL unida a través de un conector de plástico a un suministro de aire) o manifold para extracción por vacío en fase sólida.

6.2.3. Centrífuga a 1000 rpm.

6.2.4. Mezclador tipo vórtex.

6.2.5. Balanza granataria con una precisión de 0,1 g.

6.2.6. Espectrofotómetro capaz de hacer mediciones de 200 a 400 nm.

6.2.7. Evaporador rotatorio, con control de vacío.

6.2.8. Equipo de filtración Millipore o similar.

6.2.9. Baño de vapor con temperatura controlada.

6.3. Materiales.

6.3.1. Columnas de inmunoafinidad. Almacenar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

6.3.2. Tubos de centrífuga de 50 mL.

6.3.3. Vasos de precipitados de 100 mL.

6.3.4. Pipetas volumétricas de 50 mL.

6.3.5. Pipetas graduadas de 10 mL.

6.3.6. Auxiliar de macropipeteado.

6.3.7. Jeringas de vidrio de 50 mL.

6.3.8. Micropipetas digitales de 10 a 100 µL; 100 a 1000 µL. y 1 a 5 mL.

6.3.9. Puntas para micropipeta.

6.3.10. Filtros para solventes orgánicos de 47 mm y poro de 0,45 µm.

6.3.11. Filtros para solventes acuosos de 47 mm y poro de 0,45 µm.

6.3.12. Filtros para muestras de politetrafluoretileno de 13 mm y poro de 0,45 µm.

6.3.13. Matraces aforados color ámbar de 5, 25 y 100 mL.

6.3.14. Jeringas desechables de 5 mL con aguja.

6.3.15. Frascos vial color ámbar de 5 mL con tapón.

6.3.16. Matraces Erlenmeyer de 250 mL.

6.3.17. Celdas de cuarzo para espectofotómetro de 1 cm de paso de luz.

6.3.18. Pipetas Pasteur.

6.3.19. Papel filtro Whatman No. 4 o equivalente.

6.4. Reactivos.

Los reactivos que a continuación se mencionan deben ser de grado analítico y por agua debe entenderse agua destilada.

6.4.1. Acetonitrilo (C_2H_3N) grado HPLC.

6.4.2. 2-Propanol (isopropanol) grado HPLC.

6.4.3. Agua (H_2O) destilada y grado HPLC.

6.4.4. Acido sulfúrico concentrado (H_2SO_4).

6.4.5. Patrón certificado de 50 µg AFM_1 en película.

6.4.6. Tripsina (proteasa pancreática), 2000 FIP-U/g.

6.4.7. Dicromato de potasio ($K_2Cr_2O_7$).

6.4.8. Solución de ácido sulfúrico 0,018 N.

Disolver 1 mL de ácido sulfúrico concentrado y aforar a 2 L con agua destilada.

6.4.9. Soluciones patrón de dicromato de potasio.

6.4.9.1. Aproximadamente 0,25 mM.

Pesar exactamente 78 mg de dicromato de potasio previamente secado en estufa a 100-105°C durante 2 h, y aforar a 1 L con ácido sulfúrico 0,018 M.

6.4.9.2. Aproximadamente 0,125 mM.

Diluir 25 mL de la solución de 0,25 mM a 50 mL con ácido sulfúrico 0,018 M.

6.4.9.3. Aproximadamente 0,0625 mM.

Diluir 25 mL de la solución de 0,125 mM a 50 mL con ácido sulfúrico 0,018 M.

6.4.10. Fase móvil para HPLC.

Agua: isopropanol:acetonitrilo (80:12:8). Filtrar a través de filtro de membrana de 0,45 μm y degasificar.

6.5. Procedimiento.

6.5.1. Preparación de la muestra.

6.5.1.1. Productos líquidos.

Calentar las muestras entre 35 y 37ºC en un baño de agua. Filtrar a través de papel filtro Watman número 4
o centrifugar a 1000 x g por 15 minutos. Colectar al menos 50 mL del producto preparado. Para el análisis
de productos esterilizados, es recomendable diluir volumen a volumen con agua destilada previo al calentamiento y filtración o centrifugación.

6.5.1.2. Productos deshidratados.

Reconstituir con agua de acuerdo con las instrucciones señaladas en la etiqueta o 130 g del producto llevados a 1 L con agua a 50ºC. Disolver y agitar la muestra a fin de homogeneizarla por completo. Colectar al menos 50 mL de la leche preparada.

Nota: Para el análisis de caseinatos de sodio, calcio y potasio, es necesario efectuar una hidrólisis enzimática de la porción de prueba previo a la filtración o centrifugación. Para este propósito, proceder de igual forma que con los productos deshidratados, pero adicionando 2 g de tripsina a la porción de prueba antes de colocar el matraz en el baño de agua por 30 minutos.

6.5.2. Calibración del espectrofotómetro:

6.5.2.1. Determinar la absorbancia (A) de las tres soluciones de $K_2Cr_2O_7$ 0,25, 0,125 y 0,0625 mM en ácido sulfúrico, a su máximo de absorción cerca de 350 nm, usando como blanco la solución de ácido sulfúrico 0,018 N.

6.5.2.2. Calcular la absorbitividad molar () de cada concentración con la siguiente fórmula:

$$= \frac{A \times 1000}{\text{Conc. en mM}}$$

6.5.2.3. Si los tres valores varían, revisar la técnica o el instrumento, promediar los 3 valores para obtener el valor de .

6.5.2.4. Determinar el factor de corrección (FC) para cada instrumento y celdas en particular, sustituyendo en la siguiente ecuación:

$$FC = \frac{3160}{}$$

Donde: 3160 = Valor de de las soluciones de $K_2Cr_2O_7$

6.5.2.5. Si el valor de FC es < 0,95 o > 1,05 revisar el instrumento o técnicas, para determinar o eliminar la causa (usar el mismo juego de celdas en la calibración y determinación de la pureza).

6.5.3. Preparación de soluciones patrón de AFM_1.

6.5.3.1. Solución patrón de 2 ng/μL.

6.5.3.1.1. Por medio de una jeringa, introducir aproximadamente 2 mL de acetonitrilo dentro del vial sellado que contiene el patrón certificado de AFM_1. Agitar vigorosamente durante 1 minuto en mezclador tipo vórtex y transferir cuantitativamente a un matraz volumétrico de 25 mL usando pequeñas porciones de acetonitrilo. Diluir al volumen con acetonitrilo y mezclar bien.

6.5.3.1.2. Transferir una alícuota de 2-3 mL de esta solución a una celda de cuarzo y registrar el espectro ultravioleta entre 330 y 370 nm, usando acetonitrilo en la celda de referencia. Medir la absorbancia de la solución a la longitud de onda de máxima absorción (la cual es cercana a 325 nm). Determinar la concentración exacta de esta solución empleando la siguiente ecuación:

$$\text{ng } AFM_1/\mu L = \frac{A \times PM \times 1000 \times F.C.}{e}$$

En donde:

A= absorbancia a 350 nm.

PM= Peso molecular para AFM_1= 328.

= coeficiente de extinción para AFM_1= 19,850.

FC= Factor de corrección (calculado en 6.5.2.4.).

6.5.3.1.3. Regresar la solución de AFM_1 al frasco original. Almacenar esta solución en el congelador por un máximo de 2 años, pero verificar su concentración cada 6 meses. Antes de usar esta solución permitir que alcance la temperatura ambiente.

6.5.3.2. Solución patrón de 0,1 ng/µL.

Medir un volumen apropiado de solución patrón (6.5.3.1.) en un matraz volumétrico de 5 mL, dado que se transfieran exactamente 500 ng de AFM_1. Diluir al volumen con acetonitrilo y mezclar bien. Esta solución es estable por 2 meses si es almacenada en refrigeración (4ºC).

6.5.3.3. Soluciones patrón de trabajo.

Medir un volumen apropiado de solución patrón (6.5.3.1.) en un matraz volumétrico de 5 mL, dado que se transfieran exactamente 50 ng de AFM_1. Diluir al volumen con acetonitrilo:agua (7:3) y mezclar bien (solución de 0,01 ng AFM_1/µL). Preparar tres soluciones patrón de trabajo a 0,005; 0,0025 y 0,00125 ng/µL, diluyendo alícuotas de la solución anterior 2, 4 y 8 veces, respectivamente, con agua-acetonitrilo (7:3). Estas soluciones son estables 2 meses almacenadas en refrigeración (4ºC).

6.5.4. Extracción de la AFM_1 por medio de columnas de inmunoafinidad.

6.5.4.1. Firmemente conectar una columna de inmunoafinidad a la punta de una jeringa de vidrio colocada en la bomba manual o al manifold de vacío.

6.5.4.2. Medir 50 mL de la muestra en el depósito de la jeringa y pasarla a través de la columna de inmunoafinidad a un flujo aproximado de 2-3 mL/min.

6.5.4.3. Lavar la columna con 10 mL de agua destilada a un flujo aproximado de 2-3 mL/min. Pasar de 2-3 mL de aire a través del material de empaque. Descartar los lavados.

6.5.4.4. Desconectar el ensamble del vacío o suministro de aire y eluir lentamente la aflatoxina con 4 mL de acetonitrilo, controlando el flujo. Dejar el acetonitrilo en contacto con la columna por lo menos 3 minutos para asegurar la completa remoción de la toxina ligada. Esto se logra reflujando el acetonitrilo de dos a tres veces. Colectar el eluido en un vial de 5 mL.

6.5.4.5. Evaporar a sequedad a 40ºC bajo una corriente de nitrógeno. Adicionar al residuo 200 µL de agua:acetonitrilo (7:3). Agitar y filtrar a través de un filtro de membrana de 0,45 µm y proceder con la cuantificación por HPLC.

6.5.5. Cuantificación por HPLC.

6.5.5.1. Encender todos los componentes del sistema de cromatografía.

6.5.5.2. Fijar los siguientes parámetros cromatográficos de acuerdo con las instrucciones de operación del equipo:

Fase móvil:	Agua:isopropanol:acetonitrilo (80:12:8).
Flujo:	1 mL/min.
Volumen de inyección:	40 µL (equivalente a 10 mL de producto fluido o 1 g de producto deshidratado).
Detector de fluorescencia	Excitación: 360 nm. Emisión: 428 nm.

6.5.5.3. Purgar las bombas del sistema con cada uno de los componentes de la fase móvil.

6.5.5.4. Correr **l**a fase móvil a través de todo el sistema a un flujo de 1mL/min, hasta obtener una línea base estable.

6.5.5.5. Inyectar 40 µL de la solución de trabajo de AFM_1 de la mayor concentración (0,01 ng/µL) y ajustar los controles del detector de fluorescencia para dar al menos un 80% de respuesta del registrador. Repetir las inyecciones 2-3 veces hasta que las áreas del pico son constantes. La aflatoxina eluye en un tiempo aproximado de 9 minutos.

6.5.5.6. El día del análisis, inyectar en secuencia, volúmenes de 40 µL de cada solución patrón de trabajo y preparar una curva de calibración graficando el área del pico contra la concentración de AFM_1 inyectada. Ajustar la curva por método de mínimos cuadrados (regresión lineal).

6.5.5.7. Inyectar del mismo modo 40 µL de cada una de las muestras y determinar la cantidad de AFM_1 en la muestra utilizando la ecuación de la recta obtenida en la curva de calibración como sigue:

$$Y = m\,x + b$$

En donde:

Y = Area del pico correspondiente a la AFM_1 en la muestra.

m = pendiente.

x = concentración en ng/µL de AFM_1 en la muestra.

b = ordenada al origen.

Despejar x, para obtener los ng/µL de AFM_1 en la muestra.

6.5.5.8. Si el área del pico obtenido para la muestra es mayor que la obtenida para la solución patrón de la mayor concentración, preparar una solución adecuada diluyendo con agua:acetonitrilo (7:3) y volver
a inyectar.

6.5.6. Determinación de la eficiencia de las columnas de inmunoafinidad.

6.5.6.1. Medir 1 mL de la solución de trabajo de AFM_1 de 0,01 ng/µL en un matraz volumétrico de 10 mL y diluir al volumen agua:acetonitrilo (7:3). Mezclar bien y aplicar el volumen completo a la columna de inmunoafinidad. Secar el material de empaque de la columna pasando de 2-3 mL de aire.

6.5.6.2. Eluir la AFM_1 con 4 mL de acetonitrilo y evaporar a sequedad a 40ºC con la ayuda de nitrógeno. Reconstituir con 1 mL de agua acetonitrilo (7:3).

6.5.6.3. Inyectar 40 µL al sistema HPLC bajo las condiciones descritas anteriormente. El lote de columnas de inmunoafinidad es adecuado si la recuperación de AFM_1 es 80%.

6.6. Cálculos:

Calcular la concentración de AFM_1 en la porción de prueba, usando las siguientes fórmulas:

$$\text{ng } AFM_1/\text{mL} = \mu\text{g } AFM_1/\text{L} = \frac{\text{ng de } AFM_1 \text{ en la muestra obtenidos de la curva}}{50 \text{ mL x } (40\ \mu\text{L}/200\ \mu\text{L})}$$

$$\text{ng } AFM_1/\text{mL} = \mu\text{g } AFM_1/\text{L} = \frac{\text{ng de } AFM_1 \text{ en la muestra obtenidos de la curva}}{10}$$

Esta fórmula es aplicable sólo cuando ninguna dilución ha sido efectuada. El factor de dilución correspondiente debe ser tomado en cuenta (por ejemplo en el análisis de productos esterilizados o cuando la muestra se sale del intervalo de la curva de calibración).

6.7. Expresión de resultados.

µg de AFM_1 /L

7. Determinación de materia extraña en leche, fórmula láctea o producto lácteo combinado.

7.1. Principio del método.

Los insectos enteros, fragmentos de los mismos, pelos de roedor o alguna materia extraña se separan de la muestra por filtración para su identificación al microscopio.

7.2. Equipo.

7.2.1. Balanza analítica con 0,1 mg de sensibilidad.

7.2.2. Equipo de filtración al vacío.

7.2.3. Microscopio binocular estereoscopio con objetivos que pueden ser de 3, 6, 7 y 10 X, oculares apareados de amplio campo visual de 10, 30 y 100 X, respectivamente.

7.2.4. Lámpara para el microscopio o luz natural equivalente.

7.3. Materiales.

7.3.1. Embudo Büchner.

7.3.2. Matraz Kitazato.

7.3.3. Vasos de precipitados de 1000 mL.

7.3.4. Caja Petri.

7.3.5. Papel de filtración rápida para conteo con líneas paralelas de aproximadamente 5 mm de separación.

7.3.6. Material común de laboratorio.

7.4. Reactivos.

Los reactivos que a continuación se mencionan deben ser grado analítico a menos que se indique otra especificación y por agua debe entenderse agua destilada.

7.4.1. Solución de carbonato de sodio ($Na_2 CO_3$) al 2%.

Disolver 2 g de carbonato de sodio en agua y llevar al volumen de 100 mL.

7.4.2. Solución de oxalato de sodio ($Na_2 C_2 O_4$) al 3%.

Disolver 3 g de oxalato de sodio $Na_2 C_2O_4$ en agua y llevar al volumen de 100 mL.

7.4.3. Mezcla de glicerina:etanol 1:3 (v/v) (opcional).

7.5. Procedimiento.

7.5.1. Preparación de la muestra.

7.5.1.1. Productos líquidos.

Mezclar bien todo el contenido de la muestra.

7.5.1.2. Productos deshidratados.

Pesar por duplicado 50 g de leche descremada o 65 g de leche entera y reconstituir ajustando el volumen a 500 mL con agua a 40ºC.

7.5.2. Determinación.

7.5.2.1. Filtrar toda la muestra sobre un embudo de succión preparado con papel filtro para conteo, tratando de vertirlo uniformemente.

7.5.2.2. Durante la filtración lavar continuamente el papel filtro con agua a 80ºC aproximadamente, para evitar la acumulación de partículas que tapen los poros del papel.

7.5.2.3. Pasar el papel filtro a una caja Petri y humedecerla con la mezcla glicerina-etanol (opcional). Examinar al microscopio utilizando una luz suficientemente fuerte que muestre los detalles en el papel filtro.

7.5.2.4. Contar con una aguja de disección sobre toda la superficie del papel, línea por línea y explorar cada pieza del material dado que algunos fragmentos son irreconocibles a menos que se muevan.

7.6. Expresión de resultados.

7.6.1. Productos deshidratados.

Presencia o ausencia de insectos enteros, fragmentos de insectos, pelos de roedor y cualquier materia extraña que se encuentre en 50 g o 65 g de muestra

7.6.2. Productos líquidos.

Presencia o ausencia de insectos enteros, fragmentos de insectos, pelos de roedor y cualquier materia extraña que se encuentre en la cantidad de mL que contenga el envase analizado

8. Determinación de humedad en leche, fórmula láctea o producto lácteo combinado, sometidas a deshidratación.

8.1. Principio del método.

Este método se basa en la pérdida de peso debido a la evaporación del agua bajo condiciones establecidas.

8.2. Equipo.

8.2.1. Balanza analítica con sensibilidad de 0,1 mg.

8.2.2. Estufa eléctrica con regulador de temperatura a 100-102ºC.

8.3. Materiales.

8.3.1. Desecador de vidrio con sílica gel con indicador de humedad u otro desecante efectivo.

8.3.2. Cápsulas de vidrio, acero inoxidable, níquel o aluminio de 50 a 90 mm de diámetro y de 12 a 25 mm de altura provistos de tapa que cierre herméticamente.

8.3.3. Pinzas metálicas especiales para las cápsulas.

8.4. Procedimiento.

8.4.1. Preparación de la muestra.

8.4.1.1. Cuando se tome la muestra operar tan rápido como sea posible. Evitar la absorción de humedad del medio ambiente durante la preparación de la muestra. Mezclar el producto transfiriéndolo a un frasco seco y bien tapado con capacidad aproximada al doble del tamaño de la muestra. Mezclar cuidadosamente agitando e invirtiendo repetidamente.

8.4.1.2. Sólo para muestras que presentan grumos o terrones, tamizar la muestra a través de una malla número 20 y si es necesario frotar el material a través de la malla y golpear vigorosamente.

8.4.2. Preparación de las cápsulas.

Secar las cápsulas destapadas en una estufa controlada a 100-102ºC por una hora. Taparlas e introducirlas en un desecador y dejarlas enfriar a temperatura ambiente. Pesarlas con una precisión de 0,1 mg.

8.4.3. Secado de las muestras.

En las cápsulas previamente secadas y pesadas, pesar con exactitud y distribuir homogéneamente de 1 a 3 g de muestra. Secar en estufa (100-102ºC) durante 4 horas consecutivas, dejando las cápsulas descubiertas, pero manteniendo las tapas correspondientes identificadas cerca de ellas. Al término del periodo, cubrir las cápsulas con sus respectivas tapas e introducirlas en el desecador. Enfriar a temperatura ambiente y pesar.

8.5. Cálculos.

$$\% \text{ de Humedad} = \frac{m_1 - m_2}{m_1 - m_o} \times 100$$

En donde:

m_o = masa en gramos de la cápsula y la tapa.

m_1 = masa en gramos de la cápsula y tapa con la muestra antes de secar.

m_2 = masa en gramos de la cápsula y la tapa con la muestra después de secar.

8.6. Expresión de resultados.

% Humedad

9. Determinación de vitamina D_3.

Seguir el método incluido en el Apéndice Normativo B, apartado 2 de la NOM-131-SSA1-1995, Alimentos para lactantes y niños de corta edad. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales, pero con las siguientes modificaciones:

Preparación de la muestra.

En el caso de productos deshidratados reconstituir con agua, de acuerdo con las instrucciones señaladas en la etiqueta o 130 g de producto llevado a 1 L con agua. Disolver y agitar la muestra a fin de homogeneizarla por completo.

Medir de preferencia por duplicado una cantidad de muestra que contenga de 0,5 a 1 g de vitamina D_3 (20 a 40 UI).

Cálculos.

El contenido de vitamina D_3, expresado en unidades internacionales por L de producto es igual a:

$$\text{UI vitamina } D_3/L = \frac{hp \times C \times Vo \times V_2 \times 1000}{hs \times m \times V_1}$$

En donde:

m= Toma de muestra en mL.

hp= Altura del pico de la muestra, en mm.

hs= Altura del pico de la solución patrón, en mm.

C= Concentración de la solución de patrón inyectado, en UI/mL.

Vo = Volumen en el cual ha sido diluido el residuo antes de la cromatografía preparativa (en general 5 mL= matraz aforado).

V_1 = Volumen del extracto inyectado en la columna preparativa (en general 0,5 mL=volumen de loop de inyección).

V_2 = Volumen en el cual ha sido diluida la fracción después de la cromatografía preparativa (en general 0,3 mL).

Expresión de resultados.

μg vitamina D_3/L 1UI= 0,025 μg vitamina D_3 (Colecalciferol)

APENDICE NORMATIVO B

DE LOS METODOS DE PRUEBA

PARA PRODUCTOS DESHIDRATADOS O EN POLVO

1. Determinación de coliformes totales en placa.

Seguir con lo establecido en la NOM-113- SSA1-1994, citada en el apartado de referencias, pero inoculando 5 placas con 2 mL de la dilución 10^{-1}. Contar las colonias encontradas en cada placa y reportar la suma de UFC por gramo.

2. Determinación de *E. coli.*

Cuando la cuenta de coliformes en placa sea 10, confirmar la presencia de *E. coli* siguiendo el método del Número Más Probable (NMP), establecido en la NOM-145-SSA1-1995, señalada en el apartado de referencias.

3. Determinación de enterotoxina estafilocóccica por el método de Elisa.

3.1. Principio del método.

Este método se basa en un inmunoensayo visual el cual proporciona una prueba rápida (4 h), sensible (1,0 ng o más por mL o g), y específica para la identificación de las enterotoxinas A-E estafilocóccicas.

Sin embargo, con esta prueba no se identifican los serotipos de enterotoxina, en forma individual. La prueba de Elisa se realiza en configuración de "sandwich".

3.2. Equipo.

3.2.1. Equipo TECRA™.

3.2.2. Incubadora a 35-37°C.

3.2.3. Omnimixer, licuadora (o equivalente) para la preparación de los extractos de alimentos.

3.2.4. Centrífuga a 1000 -3000 x g.

3.2.5. Agitador de microplacas (opcional).

3.2.6. Lector de microplacas (opcional).

3.2.7. Balanza.

3.3. Materiales**.**

3.3.1. Algodón absorbente.

3.3.2. Micropipetas de 50-200 µL y 5-20 µL.

3.3.3. Puntas de plástico para micropipeta.

3.3.4. Plástico para envolver o sellar recipientes de plástico.

3.3.5. Papel pH (intervalo 0-14).

3.3.6. Frascos de plástico de 500 mL.

3.3.7. Jeringas de plástico de 25 mL.

3.3.8. Tubos para centrífuga.

3.3.9. Tubos de polipropileno de 12 x 75 mm.

3.3.10. Polietilen glicol (PEG, peso molecular de 15,000-20,000).

3.3.11. Tubo de diálisis (12,000-14,000 peso molecular exclusión).

3.3.12. Vasos de precipitados de 250 mL.

3.3.13. Filtros tipo jeringa (para filtrar los alimentos). Preparar jeringas de plástico desechables (0,25 mL) e insertar suficiente cantidad de algodón absorbente, para hacer un empaque de 0,5 cm. Pasar 5,0 mL de agua destilada, presionar con el émbolo para asegurarse de formar un paquete firme. Preparar inmediatamente antes de filtrar los extractos de alimento, para tratar con el aditivo provisto con el equipo.

3.3.14. Placa de 48 o 96 pozos recubiertos con el grupo de antisueros *.

3.3.15. Soporte para sostener la placa *.

3.3.16. Instructivo del método *.

3.3.17. Comparador de color *.

9.3.18. Hoja de resultados *.

* Materiales suministrados por el fabricante.

3.4. Reactivos.

Los reactivos que a continuación se mencionan deben ser grado analítico a menos que se indique otra especificación y por agua debe entenderse agua destilada.

3.4.1. Solución amortiguadora Tris 0,25 M (30,28 g TRIS/L, pH 8,0).

3.4.2. Solución de hidróxido de sodio 1,0 N (NaOH).

3.4.3. Acido clorhídrico (HCl).

3.4.4. Agua destilada o deionizada.

3.4.5. Hipoclorito de sodio.

3.4.6. BHI con 0,7% de agar (m/v).

3.4.7. Solución de lavado. Contiene: 1,5 g de tris(hidroximetil) aminometano (Tris), 6g de NaCl, 2,0 g polioxietilen sorbitan monolaurato (Tween 20), y 0,001 g de timerosal en 25,0 mL de H_2O *.

3.4.8. Aditivo para la muestra. Es una solución que contiene: 2 g de Tween 20 y 0,001 g de timerosal en 6,0 mL de H_2O *.

3.4.9. Control positivo: Diluir 25 µL de control positivo concentrado (toxina estafilocóccica tipo B, 0,1 g $Na_2B_4O_7$, 0,1 g de NaCl y 0,001 g de timerosal en 4,0 mL de H_2O), en 2,5 mL de sol. de lavado (3.5.2.1.) *.

3.4.10. Control negativo. Contiene: 0,0072 g de Tris, 0,1 g de NaCl, 0,001 g de timerosal y 0,01 g de Tween 20 en 6,0 mL de H_2O *.

3.4.11. Diluyente del Conjugado. Contiene: 0,2 g $Na_2B_4O_7$, 0,1 g de NaCl, 0,1 g de gelatina, y 0,001 g de timerosal en 13,5 mL de H_2O *.

3.4.12. Conjugado liofilizado. Un frasco que contiene antisuero polivalente (A-E) liofilizado, conjugado; 0,003g de $Na_2B_4O_7$, 0,002 g de $CaCl_2$, y 0,0001 g de timerosal. Para su uso, agregar al frasco 13 mL del diluyente (3.4.11.) *.

3.4.13. Diluyente del Substrato. Cada 26 mL de H_2O contienen 0,2 g de ácido acético y 0,01 g de H_2O_2*.

3.4.14. Substrato. Un frasco de liofilizado que contiene; 0,01 g de 2,2´-di-azino(sulfonato de 3-etil benzotiazolin), 0,01 g de EDTA, y 0,1 g de NaH_2PO_4. Para su uso, agregar al frasco 26 mL del diluyente (3.4.13.) *.

3.4.15. Solución para detener la reacción (solución stop). Cada 6,0 mL contienen; 1,5 g de NaF en 6,0 mL de agua *.

* Reactivos suministrados por el fabricante.

3.5. Procedimiento.

3.5.1. Preparación de las muestras.

3.5.1.1. Productos fluidos y productos deshidratados.

Pesar 25 g de leche deshidratada y agregar 125 mL de solución Tris 0,25 M pH 8.0 (3.4.1.). Continuar como se indica para leche fluida. En muestras de 5,0 mL, verificar que el pH esté en un intervalo de 7,0-8,0. Agregar 50 μL de aditivo (3.4.8.). En el caso de extractos más claros, ajustar el pH a 4,0 con HCl concentrado. Para muestras de leche de 50 mL, verificar que el pH esté en un intervalo de 7,0-8,0. Agregar 50 μL de aditivo (3.4.8.). Centrifugar la muestra 10 min a 1000-3000 x g. Decantar el extracto y pasar 5,0 mL aproximadamente, a través de una jeringa empacada con algodón absorbente humedecido previamente, y recibir en un tubo de polipropileno. Ajustar nuevamente el pH a 7,0-8,0 (usar papel pH). Agregar 50 μL de aditivo (3.4.8.) y mezclar.

3.5.1.2. Ingredientes deshidratados.

Agregar 125 mL de solución Tris 0,25 M pH 8,0 a 25 g de muestra, homogeneizar en licuadora (a velocidad alta), durante 3 min. Centrifugar la muestra 10 min a 1000-3000 x g y recoger el extracto (sobrenadante). Quitar el émbolo de la jeringa de plástico que contiene el empaque de algodón absorbente humedecido previamente y con cuidado, pasar el extracto a través del empaque y recibir el eluido.
Tomar 5,0 mL de eluido y ajustar el pH a 7,0-8,0. Agregar 50 μL de aditivo, y mezclar.

3.5.1.3. Quesos.

Agregar 50 mL de agua a 25 g de muestra y homogeneizar en licuadora durante 3 min a velocidad alta. Ajustar, con HCl concentrado, a pH 4 (usar papel pH). Centrifugar la muestra durante 10 min a 1000-3000 x g. Quitar el émbolo de la jeringa de plástico que contiene el empaque de algodón absorbente humedecido previamente, y pasar 5 mL del extracto a la jeringa. Insertar el émbolo y con cuidado pasar el extracto a través del empaque y recibir el eluido. Tomar 5 mL del eluido, y agregar solución de NaOH para ajustar
a pH 7,0-8,0; agregar 50 μL de aditivo, y mezclar.

3.5.1.4. Otros alimentos.

Agregar 50 mL de solución Tris 0,25 M pH 8,0 a 25 g de muestra, y homogeneizar en licuadora durante 3 min a velocidad alta. Centrifugar la muestra durante 10 min a 1000-3000 x g. Quitar el émbolo de la jeringa
de plástico que contiene el empaque de algodón absorbente humedecido previamente, y pasar 5,0 mL de extracto a la jeringa, insertar el émbolo y con cuidado presionar el émbolo y recoger el eluido. Tomar 5 mL
del eluido, ajustar a pH 7,0-8,0, si es necesario; agregar 50 μL de aditivo, y mezclar.

Nota 1:

Preparar los extractos de alimentos inmediatamente antes de realizar la prueba.

Precauciones generales.

En caso de alimentos crudos fermentados, procesados o enlatados, con evidentes defectos; o de cultivos fluidos obtenidos en el laboratorio, que pudieran dar como resultado el crecimiento de microorganismos productores de peroxidasa, es necesario, antes de hacer la determinación de toxina, verificar si los extractos de alimentos o preparados a partir del cultivo en el laboratorio, contienen peroxidasa, debido a que esta enzima podría interferir con la interpretación de los resultados.

Para determinar la presencia de peroxidasa, agregar 50 μL del substrato (3.4.14.), en una placa de microtitulación sin tratar (no contiene anticuerpos para la enterotoxina estafilocóccica). Dejar en reposo 10 min. Si el color cambia a azul o azulverdoso, indica que la muestra contiene peroxidasa intrínseca; la cual debe inactivarse. Si la muestra permanece incolora (o con el color original), realizar el análisis de enterotoxina. Para inactivar la peroxidasa intrínseca, preparar una solución al 30% (m/v) de azida de sodio y agregar 1 mL de esta solución a 4 mL de muestra (la concentración final de la azida de sodio es de 6% (m/v). Mezclar y agregar un poco de aditivo (3.4.8.), dejar en reposo 1-2 min a temperatura del laboratorio

(20-25ºC). Repetir la prueba para determinar presencia de peroxidasa, como se describió anteriormente. Si la reacción es incolora o presenta el color original, continuar con la prueba.

Precaución:

Desechar los materiales que contienen azida de sodio, de acuerdo con la NOM.

Nota 2:

Para alimentos crudos (ejemplo: verduras), seguir las precauciones generales señaladas anteriormente.

3.5.2. Preparación de reactivos.

3.5.2.1. Reconstitución de la solución de lavado.

Diluir, en un frasco de reactivos la solución concentrada (como lo indique el fabricante), con agua destilada o deionizada, para obtener 2 L. Utilizar esta "solución de lavado" para lavar los pozos y diluir el control positivo. Es recomendable el uso de pizeta. Almacenar a 4°C, cuando no se use.

3.5.2.2. Preparación del conjugado.

Agregar el diluyente del conjugado y rehidratar a temperatura del laboratorio. Mezclar suavemente. Esta preparación es el "Conjugado reconstituido".

3.5.2.3. Preparación del substrato.

Disolver el substrato con el diluyente (3.4.13.), asegurarse que el contenido se haya disuelto completamente. Dejar a la temperatura del laboratorio (20-25°C), antes de su uso.

Precauciones generales:

- Observar la fecha de caducidad del equipo adquirido. Es la última fecha en la cual el producto debe utilizarse. Preparar todos los reactivos con cuidado y anotar la fecha de reconstitución, en la etiqueta externa de la caja. Usar los reactivos dentro de los 65 días a la fecha anotada en la etiqueta. Refrigerar todos los componentes (2-8°C) cuando no estén en uso. NO CONGELAR.
- El equipo de inmunoensayo visual está preparado para utilizarse como una unidad integral; por tanto, no se deben mezclar los componentes de diferentes lotes.
- Utilizar puntas nuevas para cada muestra de alimento. Evitar la contaminación cruzada al llenar los pozos. Si se usan propipetas de plástico para distribuir el conjugado y el substrato, se deben mantener siempre por separado. Asegurarse de no confundir las tapas de los reactivos.
- Usar controles positivos y negativos en cada prueba.
- Preparar recipientes con solución al 2% de hipoclorito de sodio para desechar todas las muestras y materiales que contengan toxina.
- Mantener los pozos removibles que no se usen dentro del paquete y volver a sellar con cinta, después de cada uso.

3.5.3. Determinación de la enterotoxina.

3.5.3.1. Preparación de los pozos.

Tomar del paquete el número necesario de pozos; uno para cada muestra, uno para control positivo y
uno para control negativo. Si se requiere, pueden utilizarse pozos adicionales (control positivo y negativo en alimento).

3.5.3.2. Prelavado.

Con la ayuda de una pizeta llenar cada pozo con solución de lavado y dejar en reposo durante 10 minutos a la temperatura de laboratorio (20-25ºC). Vaciar los pozos por inversión rápida del soporte (placa); eliminar completamente todo residuo de líquido, golpeando varias veces, firmemente hacia abajo la placa, sobre una toalla de papel absorbente.

3.5.3.3. Colocación de las muestras.

Pasar alícuotas de 200 µL de los controles y muestras (extractos de alimento o de cultivos) dentro de pozos individuales. Registrar la posición de cada muestra en la hoja de registro específica. Golpear suavemente la placa para asegurarse de la distribución homogénea y del contacto de las muestras con las paredes de los pozos; el uso de un agitador de microplacas durante 30 segundos, es opcional. Cubrir los pozos con una película plástica, estirable, autoadherible o sello especial de microplacas; para evitar la evaporación. Incubar 2 hrs. a 35-37°C.

3.5.3.4. Segundo lavado.

Presionar firmemente los pozos en la placa e invertir rápidamente. Vaciar el contenido de los pozos en el recipiente de desecho (con hipoclorito de sodio al 2%). Eliminar el residuo de líquido golpeando enérgicamente, varias veces la placa invertida, sobre una toalla de papel absorbente; llenar completamente los pozos con solución de lavado, y repetir el lavado en la misma forma, de 2 a 3 veces más y finalmente vaciar los pozos.

Nota 3:

El lavado profundo de los pozos es un paso crítico y asegurará una clara interpretación de los resultados.

3.5.3.5. Adición de conjugado.

Agregar 200 µL del conjugado reconstituido (enzima) a cada pozo. Volver a cubrir la placa e incubar 1 h a temperatura de laboratorio (20-25°C). Vaciar las placas y lavar profundamente, 5 veces, como se describió anteriormente (3.5.3.4.).

3.5.3.6. Adición del substrato.

Agregar, a cada pozo, 200 µL del substrato reconstituido. Dejar a temperatura del laboratorio (20-25°C) durante 30 min, como mínimo, hasta que el control positivo alcance la máxima absorbancia (mayor a 1,0) o al color más intenso que el número 4 del comparador de color. El desarrollo de color tiende a concentrarse alrededor de las orillas de los pozos. Para obtener resultados más precisos, golpee con suavidad los extremos de la placa, con el propósito de que el contenido de los pozos se mezcle bien antes de la lectura. Agregar a cada pozo 20 µL de solución stop; golpear con suavidad, para mezclar los contenidos.

3.5.3.7. Determinar los resultados visualmente o mediante un lector de microtitulación.

3.6. Interpretación de los resultados:

3.6.1. Colocar la placa que sostiene los pozos sobre un fondo blanco. Comparar el color de cada pozo con el comparador de color. El control positivo de toxina (y el control positivo de alimento, si se usó) deben dar un color verde intenso, lo que indica que todos los reactivos han funcionado. Si el control negativo es significativamente más oscuro que el representado en comparador de color, significa que hubo, probablemente, un lavado inadecuado y la prueba debe repetirse.

3.6.2. La muestra se considera positiva, si cumple los siguientes criterios:

- El control negativo está dentro del intervalo de color negativo, representado en el comparador de color, y
- Las muestras presentan un color verde o azul más oscuro que el intervalo negativo representado en el comparador de color.

3.6.3. La prueba de enterotoxina se considera negativa, si se cumplen los siguientes criterios:

- El control negativo está dentro del intervalo de color negativo, representado en el comparador de color, y
- La muestra es incolora o tiene el color dentro del intervalo negativo, representado en el comparador de color.

3.7. Expresión de resultados.

Prueba positiva o negativa para enterotoxina estafilocóccica

Cuando se obtengan resultados positivos, éstos tendrán que ser confirmados por el método de doble difusión en gel en laminilla, establecido en la NOM-115-SSA1-1994, señalada en el apartado de referencias.

APENDICE INFORMATIVO A

A. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION DEL MATERIAL DE VIDRIO Y AREA DE TRABAJO PARA LA DETERMINACION DE AFLATOXINAS

1. Objetivo

Por la naturaleza y potenciabilidades tóxicas de las aflatoxinas es importante establecer directrices para la descontaminación del área de trabajo, material y equipo utilizados, así como los procedimientos a seguir para neutralizar derrames y remanentes de extractos de las muestras.

El trabajo de limpieza y descontaminación será realizado por personal capacitado y que cuente con equipo protector como una bata, guantes impermeables y lentes protectores.

2. Descontaminación del material de laboratorio

Todo el material de vidrio del laboratorio que haya sido utilizado durante el análisis debe sumergirse en una solución de hipoclorito, el cual se prepara diluyendo una parte de solución comercial de hipoclorito de sodio o clarasol (con una concentración entre 5 y 6%) con 10 partes de agua, por ejemplo mezclar 100 mL de blanqueador comercial con 1000 mL de agua.

Después del tratamiento, el material debe enjuagarse abundantemente con agua corriente seguido de agua destilada, secar por escurrimiento o en estufa de 90-100°C.

3. Descontaminación del área de trabajo

La superficie de las mesas de trabajo y las paredes en las que pudiera haberse contaminado de leche con aflatoxinas, deben limpiarse con una toalla desechable impregnada en solución de hipoclorito de sodio o solución blanqueadora comercial después de cada sesión.

4. Descontaminación de material desechable

Todo el material desechable como son las columnas y placas deben sumergirse durante un mínimo de 5 min en una solución de hipoclorito de sodio utilizando una parte de blanqueador comercial y diez partes de agua. La solución descontaminadora ya usada debe eliminarse por el drenaje y los materiales desechables tratados deben empacarse en una bolsa de plástico sellada para colocarse en el depósito de desechos.

5. Tratamiento de derrames

Los derrames de soluciones de aflatoxinas deben tratarse inmediatamente con hipoclorito de sodio o blanqueador doméstico y vertirlo directamente del envase, recoger los líquidos con un papel absorbente, el cual también se colocará en una bolsa de plástico.

6. Tratamiento de remanentes de extracto de muestras

Una vez que se ha separado una alícuota del extracto de la muestra es frecuente que permanezca un remanente del mismo. Estos restos de extractos deben tratarse con una cantidad de blanqueador equivalente a la unidad del volumen del residuo a tratar. Los líquidos resultantes se deben acumular en

un recipiente para desechos líquidos y eliminarse en un lugar destinado especialmente para este propósito.

APENDICE INFORMATIVO B

B. LISTA DE SUSTANCIAS DESINFECTANTES RECOMENDADAS

No.	Solución acuosa de:	Concentración máx. del ingrediente activo	Condiciones de empleo
1	Hipoclorito cálcico, sódico o potásico, con o sin bromuro cálcico, sódico o potásico.	200 mg/kg de halógeno calculado en cloro.	Escurrir después del tratamiento. No precisa aclarado final
2	Acido di y tricloroisocianúrico, o sales potásicas o sódicas de estos ácido con o sin bromuro potásico, cálcico o sódico.	100 mg/kg de halógeno calculado en cloro.	Como en 1
3	Yoduro potásico, p-toluensulfocloramida sódica y lauril sulfato sódico.	25 mg/kg de yodo valorable; el nivel de los componentes no debe superar el mínimo preciso para obtener el efecto funcional deseado.	Como en 1
4	yodo butoxi-monoéter de etilenglicol + butoximono-éter de propilenglicol+ butoximonoéter de polialquilenglicol, teniendo un punto de niebla de 90-100º C. en solución al 0.5% y un peso molecular medio de 3,300 y monobutiléter de etilenglicol. Monoetil-éter de dietilenglicol se puede adicionar como componente opcional.	25 mg/kg de yodo. Los adyuvantes utilizados con el yodo no deben de superar la cantidad mínima necesaria para obtener el efecto funcional deseado.	Como en 1
5	Yodo, ácido hidroyódico -(p-monofenil-W-hidroxipolil (oxietileno) (peso molecular medio 748) y/o polioxietilen-polioxipropileno tipo copolimerización en bloque (peso molecular medio mínimo 1,90). Alcohol isopropílico se puede adicionar como componente opcional.	Como en 4	Como en 1
6	Yodo, yoduro de sodio, dioctilsulfosuccinato de sodio y polioxietilen-polioxipropileno tipo copolimerización en bloque (peso molecular medio mínimo 1,900).	Como en 4	Como en 1

7	Acido dodecilbencenosulfónico, polioxietilen-polioxipropileno, tipo copolimerización en bloque (peso molecular medio mínimo 2,800).	400 mg/kg de ácido dodecil-benceno-sulfónico y 80 mg/kg de polioxietilen-polioxipropileno, tipo copolimerización en bloque (peso molecular medio mínimo 2,800).	Estas soluciones se emplean en la limpieza de equipo y utensilios, así como en botellas y envases para leche; no precisan aclarado final.*
8	Yodo, butoxi-monoéter de etilen glicol+butoxi-monoéter de propilenglicol+butoximono-éter de polialquilenglicol, con un peso molecular medio mínimo de 2,400, y -lauril-W-hidroxipoli (oxietileno) con un promedio de 8-9 moles de óxido de etileno y un peso molecular medio de 400.	Como en 4	Estas soluciones se emplean en la limpieza del equipo y utensilios, así como de envases de leche y otras bebidas. Como aclarado preliminar se puede utilizar agua a la que se ha añadido esta solución. No se debe emplear en el enjuagado final.*
9	Cloruro de n-alquil-(C_{12} a C_{18}) bencildimetil-amonio, con un promedio de peso molecular de 351-380 y conteniendo principalmente cadenas de los grupos alquilo con 12 a 16 átomos de carbono, con o sin grupos alquilo de 8 a 10 átomos de carbono, en una proporción máxima de 1% respecto a los de 12-16. Se puede añadir como componente opcional alcohol isopropílico.	200 mg/kg de compuestos de amonio cuaternario activos.	Como en 1
10	Tricloromelamina y lauril sulfato sódico o ácido dodecilbenceno sulfónico.	Tricloromelamina, en cantidad no superior a la necesaria para producir 200 mg/kg de cloro y lauril sulfato sódico, a un nivel que no exceda del mínimo requerido para que se presente el efecto funcional deseado o, ácido dodecilbenceno sulfónico en proporción no superior a 4000 mg/kg	Estas soluciones se emplean en la limpieza de envases para bebidas, excepto leche, así como en la higienización del equipo y utensilios y otros materiales, que puedan contactar con alimentos. No precisan aclarado final.*
11	Volúmenes iguales de cloruro de n-alquil (C_{12} a C_{18}) bencildimetilamonio y cloruro de n-alquil (C_{12} a C_{18}) dimetilbencilamonio, con un peso molecular medio de 384.	200 mg/kg de compuestos de amonio cuaternarios activos.	Estas soluciones se utilizan en el tratamiento de equipo y utensilios, así como las superficies que contactan los alimentos, en establecimientos de comidas públicas. No precisan aclarado final.*

12	Sal sódica del ácido oleico sulfonatado, polioxietileno-polioxipropileno tipo copolimerización en bloque, con un peso molecular medio de 2,000 y con 27 a 31 moles de polioxipropileno.	200 mg/kg de ácido sulfonatado, sal sódica.	Esta solución se utiliza para botellas u otros envases de vidrio para leche, así como para el equipo y utensilios empleados en la elaboración de alimentos. Los artículos tratados con esta solución se deben escurrir durante 15 min antes de ponerlos en contacto con los alimentos. No precisa aclarado final.*
13	Yodo y alquil (C_{12} - C_{15}) monoéter de etilen y propilenglicol+ monoéter de polialquilenglicol, con un punto de niebla de 70-77º C en solución acuosa al 1% y con un peso molecular medio de 807.	Como en 4	Como en 1
14	Yodo, butoxi-monoéter de etilen y propilenglicol+butoximonoéter de polialquilenglicol, con un punto de niebla de 90-100º C, en solución acuosa al 0,5% y con un peso molecular medio de 3,300 y polioxietileno-polioxipropileno, tipo copolimerización en bloque, con un peso molecular medio mínimo de 2,000.	Como en 4	Como en 1
15	Hipoclorito de litio	290 mg/kg de cloro y 30 mg/kg de litio.	Como en 1
16	Cantidades iguales de cloruro de n-alquil (C_{12}-C_{18}) bencil-dimetil-amonio y cloruro de n-alquil (C_{12} a C_{14})-dimetil-(etil-bencil)-amonio (con pesos moleculares medios de 377-384). De forma opcional se puede adicionar etilen-diaminote-tracetato tetrasódico y/o α-(p-nonil-fenol)-w-hidroxipoli (oxietileno con un contenido de 11 moles.	200 mg/kg de compuestos de amonio cuaternario activo.	Como en 1
17	Cloruro de di-n-alquil (C_8 - C_{10})-dimetilamonio y alcohol isopropílico, con un peso molecular medio de 332-361	150 mg/kg de compuestos de amonio cuaternario activo.	Como en 1
18	Cloruro de n-alquil (C_{12} -C_{18}) bencil-dimetil-amonio, metaborato sódico, α-terpinol y α-p-(1,1,3,3 tetrametil-butil)fenil-w-hidroxipoli (oxietileno), producido con 1 mol de fenol y 4-14 moles de óxido de etileno	200 mg/kg de compuestos de amonio cuaternario activos y 66 mg/kg de α-(1,1,3,3 tetrametil-butil)fenil-w-hidroxipoli (oxietileno).	Como en 1

19	Di-cloro-iso-cianurato sódico y etilen-diamino-tetracetato tetrasódico.	100 mg/kg de cloro.	Como en 11
20	o-fenil-fenol, o-bencil-p-cloro fenol, p-amilfenol, sulfato de α-alquil- (C_{12} a C_{15})-w- hidroxipoli- (oxietileno) y sodio con un contenido medio de polioxietileno de 1 mol, sales potásicas de ácidos grasos de aceite de coco y alcohol isopropílico o hexilenglicol.	800 mg/kg de fenoles activos totales, que comprenden 400 mg/kg de o-fenil-fenol 320 mg/kg de o-bencil-p-clorofenol y 80 mg/kg de p-amifenol terciario.	Unicamente para aplicaciones de un solo uso.
21	Dodecil-benceno-sulfonato sódico.	Entre 25 y 430 mg/kg del producto.	Como en 1

*En otros países, entre los que no se incluyen Estados Unidos, es obligatorio el aclarado final con agua después de aplicar la solución desinfectante.

Los fabricantes podrán emplear otras sustancias para la limpieza y desinfección de equipo, siempre y cuando se asegure que los productos obtenidos son inocuos para el consumidor.

APENDICE INFORMATIVO C

1. Cálculos de nutrimentos

1.1. Cálculos de energía.

1.1.1. La cantidad de energía que se indique, debe calcularse utilizando los siguientes factores de conversión:

Hidratos de carbono (carbohidratos).

17 kJ o 4 kcal/g.

Proteínas.

17 kJ o 4 kcal/g.

Lípidos(Grasas).

38 kJ o 9 kcal/g.

1.2. Cálculo de proteínas.

La cantidad de proteínas que se indique, debe calcularse utilizando la siguiente ecuación:

Proteína = Contenido total de nitrógeno determinado por Kjeldahl x 6,25.

1.3. Cálculos de nutrimentos.

Se deben calcular de conformidad con lo establecido en el apéndice normativo C de este ordenamiento, el cual figurará como se señala a continuación:

1.4. Cálculos de nutrimentos.

1.5. Cálculos de energía.

1.5.1. La cantidad de energía que se indique debe calcularse utilizando los siguientes factores de conversión:

Hidratos de carbono (carbohidratos).

17 kJ o 4 kcal/g.

Proteínas.

17 kJ o 4 kcal/g.

Lípidos(Grasas).

38 kJ o 9 kcal/g.

1.2. Cálculo de proteínas.

La cantidad de proteínas que se indique, debe calcularse utilizando la siguiente ecuación:

Proteína = Contenido total de nitrógeno determinado por Kjeldahl x 6,25.

1.3. Cálculo de vitaminas.

Vitamina A.

1 UI de vitamina A es equivalente a 0,3 μg equivalentes de retinol (all trans Retinol).

Vitamina D_3 .

1UI de vitamina D_3 es equivalente a 0,025 μg de colecalciferol.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

RESOLUCION del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la procedencia constitucional y legal de la Proyección de Principios de Doctrina 2002 que presenta el Partido Acción Nacional y que se adiciona al documento vigente de principios de doctrina.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal Electoral.- Consejo General.- CG188/2002.

RESOLUCION DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA PROYECCION DE PRINCIPIOS DE DOCTRINA 2002 QUE PRESENTA EL PARTIDO ACCION NACIONAL Y QUE SE ADICIONA AL DOCUMENTO VIGENTE DE PRINCIPIOS DE DOCTRINA

ANTECEDENTES

I. CON FECHA QUINCE Y DIECISEIS DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL APROBO SUS PRINCIPIOS DE DOCTRINA. LOS DIAS CATORCE, QUINCE Y DIECISEIS DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LA XVIII CONVENCION NACIONAL DEL PARTIDO EN CITA APROBO LA PROYECCION DE LOS PRINCIPIOS DE DOCTRINA.

II. EL CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOS, EL PARTIDO ACCION NACIONAL CELEBRO LA XLV CONVENCION NACIONAL EN LA CIUDAD DE BOCA DE RIO, VERACRUZ. EN DICHA CONVENCION SE APROBO EL DOCUMENTO DENOMINADO PROYECCION DE PRINCIPIOS DE DOCTRINA 2002.

III. CON FECHA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOS, EL LICENCIADO LUIS FELIPE BRAVO MENA, PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, PRESENTO ANTE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO GENERAL DE ESTE INSTITUTO EL ESCRITO POR MEDIO DEL CUAL COMUNICA EL RESULTADO DE LA XLV CONVENCION NACIONAL. EN DICHA CONVENCION SE SEÑALA QUE EL OBJETIVO PRINCIPAL FUE LA APROBACION DEL DOCUMENTO DENOMINADO “PROYECCION DE PRINCIPIOS DE DOCTRINA 2002”. EL CUAL SE ADICIONA A LOS PRINCIPIOS DE DOCTRINA VIGENTES QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

IV. EL DIA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SE ANEXO AL ESCRITO DE CUENTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: CERTIFICACION DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA

CELEBRADA EL SIETE DE JUNIO DEL DOS MIL DOS, EN LA CUAL SE NOMBRA Y APRUEBA A LA COMISION REDACTORA DE LA PROYECCION DE PRINCIPIOS DE DOCTRINA, ASI COMO LA FECHA DE LA CONVOCATORIA Y EL REGLAMENTO PARA LA CELEBRACION DE LA XLV CONVENCION NACIONAL; CONVOCATORIA EMITIDA POR EL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO ACCION NACIONAL PARA LA CELEBRACION DE LOS FOROS TEMATICOS DE CONSULTA PARA LA PROYECCION DE PRINCIPIOS DE DOCTRINA 2002 DE FECHA DIECIOCHO DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO; CONVOCATORIA PARA LA SESION EXTRAORDINARIA DEL MENCIONADO COMITE REALIZADA EL DIA DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO; TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE PROTOCOLIZACION, DE FECHA DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOS DEL ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL EN LA CUAL CONSTA LA PRESENTACION Y APROBACION DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DEL DOCUMENTO DENOMINADO “PROYECCION DE PRINCIPIOS DE DOCTRINA” Y; PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE, FECHADA EL CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA CUAL SE HACE CONSTAR EL DESARROLLO DE LA XLV CONVENCION NACIONAL DEL PARTIDO QUE NOS OCUPA.

EL TESTIMONIO EN COMENTO CONTIENE: CONVOCATORIA DE FECHA SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DOS; REGLAMENTO PARA LA INTEGRACION Y EL DESARROLLO DE LA XLV CONVENCION NACIONAL DEL PARTIDO ACCION NACIONAL FECHADO EL SIETE DE JUNIO DEL DOS MIL DOS; COPIAS CERTIFICADAS DE LA LISTA DE ASISTENCIA POR ENTIDAD DE LOS DELEGADOS NUMERARIOS, FOTOGRAFIAS DEL EVENTO, ASI COMO UNA COPIA SIMPLE DEL DOCUMENTO “PROYECCION DE PRINCIPIOS DE DOCTRINA 2002”.

V. CON FECHA VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOS, EL PARTIDO ACCION NACIONAL COMUNICA ALGUNOS ANTECEDENTES Y PUNTOS DE IMPORTANCIA CON RESPECTO A LA RECIENTE APROBACION DE LA PROYECCION DE PRINCIPIOS DE DOCTRINA DEL PARTIDO POR LA XLV CONVENCION NACIONAL.

AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES QUE PRECEDEN, Y

CONSIDERANDO

1. QUE EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 24, PARRAFO 1, INCISO a), DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LOS PARTIDOS POLITICOS DEBERAN FORMULAR UNA DECLARACION DE PRINCIPIOS Y EN CONGRUENCIA CON ELLOS, EL PROGRAMA DE ACCION Y LOS ESTATUTOS QUE NORMEN SUS ACTIVIDADES.

2. QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 38, PARRAFO 1, INCISO l), DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES DEBERAN COMUNICAR AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CUALQUIER MODIFICACION A SU DECLARACION DE PRINCIPIOS, PROGRAMA DE ACCION Y ESTATUTOS, DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE TOME EL ACUERDO CORRESPONDIENTE POR EL PARTIDO, SIN QUE ESTAS MODIFICACIONES SURTAN EFECTOS HASTA QUE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, DECLARE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS MISMAS.

3. QUE LA XLV CONVENCION NACIONAL DEL MENCIONADO INSTITUTO POLITICO TIENE FACULTADES PARA CONOCER LOS ASUNTOS DE LA POLITICA GENERAL DEL PARTIDO, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 36 DE LA PROPIA NORMA ESTATUTARIA EN VIGOR DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, QUE A LA LETRA SEÑALA: “LA CONVENCION NACIONAL ES EL ORGANO COMPETENTE PARA REVISAR Y APROBAR EL PROGRAMA BASICO DE ACCION POLITICA Y CONOCER LOS ASUNTOS DE LA POLITICA GENERAL DEL PARTIDO QUE LE SOMETAN EL COMITE EJECUTIVO NACIONAL O EL CONSEJO NACIONAL Y QUE NO SEAN COMPETENCIA DE LA ASAMBLEA. ESTA SE REUNIRA EN EL LUGAR Y FECHA QUE DETERMINE LA CONVOCATORIA. EN LO QUE SE REFIERE A LA CONVOCATORIA, INTEGRACION, FUNCIONAMIENTO Y DECISIONES DE LAS CONVENCIONES SERAN APLICABLES EN LO CONDUCENTE LOS ARTICULOS 18 Y DEL 22 AL 33 DE ESTOS ESTATUTOS”.

4. QUE EL PARTIDO ACCION NACIONAL REALIZO Y APROBO LA PROYECCION DE PRINCIPIOS DE DOCTRINA 2002, EN LA XLV CONVENCION NACIONAL, CELEBRADA EL DIA CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. DICHO DOCUMENTO SE ADICIONA A LOS PRINCIPIOS DE

DOCTRINA VIGENTES QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. EL DOCUMENTO EN COMENTO SE INTEGRA CON LOS PRINCIPIOS DE DOCTRINA APROBADOS EN SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE, LA PROYECCION DE LOS PRINCIPIOS DE DOCTRINA APROBADOS POR LA XVIII CONVENCION NACIONAL EN MAYO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO Y ACTUALMENTE CON LA PROYECCION DE PRINCIPIOS DE DOCTRINA APROBADOS POR LA XLV CONVENCION NACIONAL DEL MENCIONADO PARTIDO (ANEXO UNO).

5. QUE EL PARTIDO ACCION NACIONAL, A TRAVES DEL PRESIDENTE DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL, COMUNICO EN TIEMPO Y FORMA AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL LAS ADICIONES A SUS PRINCIPIOS DE DOCTRINA, APROBADAS POR LA XLV CONVENCION NACIONAL, CUMPLIENDO CON LO SEÑALADO POR EL YA CITADO ARTICULO 38, PARRAFO 1, INCISO l), DEL CODIGO DE LA MATERIA.

6. QUE EL DOCUMENTO DENOMINADO “PROYECCION DE PRINCIPIOS DE DOCTRINA 2002”, QUE SE ADICIONA A LOS PRINCIPIOS DE DOCTRINA VIGENTES DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, CONTIENE LOS APARTADOS DENOMINADOS: 1. PERSONA Y LIBERTAD; 2. POLITICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL; 3. FAMILIA; 4. CULTURA Y EDUCACION; 5. NACION Y MUNDIALIZACION; 6. DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE; 7. HUMANISMO ECONOMICO; 8. TRABAJO; 9. MEDIO AMBIENTE; 10. CIENCIA E INNOVACION TECNOLOGICA; 11. HUMANISMO BIOTECNICO; 12. CAMPO Y CIUDAD; 13. MUNICIPIO
Y SISTEMA FEDERAL; Y QUE DE LA REVISION DE LOS MENCIONADOS APARTADOS SE DESPRENDE QUE SE AJUSTAN A LO DISPUESTO POR LOS EXTREMOS DEL ARTICULO 25, INCISOS a), b), c) y d), DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, CONFORME SE DESPRENDE DEL CONTENIDO DEL ANALISIS DE CUMPLIMIENTO NUMERADO COMO ANEXO DOS, EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE PROYECTO DE RESOLUCION.

7. QUE EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y LA COMISION DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLITICOS Y RADIODIFUSION, A TRAVES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLITICOS, REALIZO LA VERIFICACION DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A LOS PRINCIPIOS DE DOCTRINA DEL PARTIDO EN CITA, A FIN DE CONSTATAR QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL A QUE SE REFIERE EL MULTICITADO ARTICULO 38, PARRAFO 1, INCISO l), DEL CODIGO ELECTORAL, ES DECIR, EL CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 25, INCISOS a), b), c) y d), DEL CODIGO INVOCADO.

8. QUE EN RAZON DE LOS ANTERIORES CONSIDERANDOS, EL SECRETARIO EJECUTIVO Y LA COMISION DE PRERROGATIVAS, PARTIDOS POLITICOS Y RADIODIFUSION, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 80, PARRAFO 3 Y 89, PARRAFO 1, INCISO d), AMBOS DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, SOMETE A LA CONSIDERACION DEL CONSEJO GENERAL EL PRESENTE PROYECTO DE RESOLUCION.

EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 24, PARRAFO 1, INCISO a), ARTICULO 25, INCISOS a), b), c) y d), Y 38, PARRAFO 1, INCISO l) DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTICULOS 81 Y 82, PARRAFO 1, INCISOS h) Y z), DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, DICTA LA SIGUIENTE:

RESOLUCION

PRIMERO. SE DECLARA LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE “LA PROYECCION DE PRINCIPIOS DE DOCTRINA 2002”, APROBADO POR LA XLV CONVENCION NACIONAL CELEBRADA EL DIA CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOS, PARA FORMAR PARTE INTEGRAL DE LOS PRINCIPIOS DE DOCTRINA DEL PARTIDO ACCION NACIONAL QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

SEGUNDO. TOMESE LA NOTA CORRESPONDIENTE DE LA ADICION REALIZADA A LOS PRINCIPIOS DE DOCTRINA DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, ASI COMO DE LA PRESENTE RESOLUCION QUE DECLARA LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA MISMA. ASIENTESE EN LOS REGISTROS QUE PARA TAL EFECTO LLEVA EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

TERCERO. NOTIFIQUESE LA PRESENTE RESOLUCION AL COMITE EJECUTIVO NACIONAL DEL PARTIDO ACCION NACIONAL PARA QUE A PARTIR DE ESTA DECLARATORIA DE PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL, DICHO PARTIDO RIJA SUS ACTIVIDADES AL TENOR DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS AL RESPECTO.

CUARTO. PUBLIQUESE LA PRESENTE RESOLUCION EN EL **DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION**.

LA PRESENTE RESOLUCION FUE APROBADA EN SESION ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 3 DE OCTUBRE DE 2002.- EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL, **JOSE WOLDENBERG KARAKOWSKY**.- RUBRICA.- EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL, **FERNANDO ZERTUCHE MUÑOZ**.- RUBRICA.

ANEXO UNO

PARTIDO ACCION NACIONAL

PRINCIPIO DE DOCTRINA

Aprobado por la Asamblea Constituyente
en sus sesiones del 15 y 16 de septiembre de 1939

1
NACION

La Nación es una realidad viva, con tradición propia varias veces secular, con unidad que supera toda división en parcialidades, clases o grupos, y con un claro destino

El interés nacional es preeminente; todos los intereses parciales derivan de él o en él concurren. No pueden subsistir ni perfeccionarse los valores humanos si se agota o decae la colectividad, ni ésta puede vivir si se niegan los valores personales.

La vida de la Nación, el cumplimiento de su destino, la posibilidad de crear y mantener en ella condiciones espirituales y físicas adecuadas para una convivencia civilizada y noble, son incompatibles con el establecimiento o la conservación de un estado social desordenado o injusto, como lo sería fatalmente el que parta de toda negación de la dignidad de la persona humana o de la proclamación de una necesaria división violenta de la unidad nacional por la lucha de clases, castas o parcialidades.

Cuanto vigorice la unidad nacional, acendre y fortalezca los valores tradicionales que dan forma y sentido a la Nación, y coordine y jerarquice justamente los intereses parciales en el interés nacional, debe tener el apoyo pleno de la colectividad y de sus órganos. Cuanto conspire a romper esa unidad, a deformar su carácter o a desquiciar esos intereses, ha de ser rechazado y combatido por todos.

El desarrollo interno de México, su verdadera independencia y su colaboración eficaz en la comunidad internacional, dependen fundamentalmente de una celosa conservación de la peculiar personalidad que nuestra Nación tiene como pueblo Iberoamericano, producto de unificación racial y ligado esencialmente a la gran comunidad de historia y de cultura que forman las Naciones Hispánicas.

2
PERSONA

La Nación no está formada por individuos abstractos ni por masas indiferenciadas, sino por personas humanas reales, agrupadas en comunidades naturales, como la familia, el municipio, las organizaciones de trabajo o de profesión, de cultura o de convicción religiosa.

La persona humana tiene una eminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir, por lo que la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir dignamente ese destino.

Y en la organización política nacional, es preciso que las comunidades naturales sean reconocidas, respetadas y en cuanto caigan dentro de la jurisdicción del Estado, ordenadas y jerarquizadas, dándoles el lugar y la participación debidos en la estructura y en el funcionamiento del mismo, a fin de que éste coincida verdaderamente con la realidad nacional y el Gobierno sea siempre una expresión genuina de la Nación.

3
ESTADO

La opresión y la injusticia son contrarias al interés nacional y degradantes de la persona. Resultan de
que el Poder se ejerza para fines que no le son propios o por un Gobierno que no sea expresión auténtica
de la colectividad.

Sólo pueden ser evitadas mediante el recto ejercicio de la autoridad, que no es el capricho de un hombre o de un grupo, sino que tiene por fin la realización del bien común, que simultáneamente implica la justicia y la seguridad, la defensa del interés colectivo y el respeto y la protección de la persona.

Las doctrinas que fincan la solución de los problemas sociales en la lucha de clases, son falsas, inhumanas y contrarias a las leyes más fundamentales de la vida social. Es antisocial y monstruosamente injusta la concepción del Estado como instrumento de lucha al servicio de una clase social cualquiera que sea, para destrucción o dominación de las demás.

Necesidad de la Nación es la justicia social, no la lucha de clases, y el Estado debe enfrentarse a todo desorden de la sociedad y a toda injusticia en cuanto constituyan el motivo y la causa de las luchas sociales.

Tienen responsabilidad en el desencadenamiento de éstas, los que pretenden fomentarlas y los que aspiran a abolirlas sin eliminar sus causas..

Es también reprobable cualquier otra forma del Estado que niegue las prerrogativas esenciales de la persona y de las comunidades naturales y erija sus determinaciones en fuente única de derecho y en definición del bien común.

Sólo un Estado que sea verdaderamente nacional y proceda con sincero apego a estos principios, puede tener la necesaria plenitud de autoridad, sin ser tiránico; ejercer ampliamente sus facultades de gestión, sin ser opresor, y cumplir su inexcusable deber de justicia, sin ser subversivo.

4
ORDEN

La miseria y la ignorancia son fruto del desorden moral y económico que la injusticia, la anarquía y la opresión introducen en la sociedad.

Sólo podrán ser evitadas, si la Nación es ordenada rectamente, y su vida se funda en el reconocimiento de los valores espirituales y se dirige a la realización del bien común.

La lucha contra la ignorancia y la miseria es deber, pero no monopolio del Estado, y es también responsabilidad y derecho de todos los miembros de la Nación.

5
LIBERTAD

El Estado no tiene ni puede tener dominio sobre las conciencias, ni proscribir ni tratar de imponer convicciones religiosas. Siempre que ha pretendido hacerlo, quebranta la unidad y el vigor de la Nación, subvierte el orden social y ataca la dignidad humana.

La libertad religiosa, de convicción, de práctica y de enseñanza, debe ser real y plenamente garantizada en México y debe desaparecer de las leyes y de la actividad del Estado toda medida directa o indirectamente persecutoria. En ello están comprometidos la unidad y el derecho nacionales.

6
ENSEÑANZA

La libertad de investigación y de opinión científica o filosófica, como toda libertad de pensamiento, no puede ser constreñida por el Estado. La libertad de expresión no puede tener otros límites jurídicos que los impuestos por el interés nacional, por las normas morales y por el bien común.

Es deber del Estado, pero nunca monopolio suyo, procurar a todos los miembros de la comunidad una igual oportunidad de educación, asegurar por lo menos, una enseñanza elemental para todos, y promover el mejoramiento cultural en la Nación. En el cumplimiento de este deber el Estado no puede convertirse en agente de propaganda sectaria o partidista, y la libertad de enseñanza ha de ser garantizada sin otros límites por parte del Estado, que la determinación de los requisitos técnicos relativos al método, a la extensión y a la comprobación del cumplimiento del programa educativo mínimo o concernientes al otorgamiento de grados o títulos que capaciten para ejercer una profesión o una función social determinada.

La actividad universitaria sólo puede cumplir propiamente su misión si se desarrolla en un ambiente de disciplinada autonomía. Por la importancia que esa actividad tiene en la vida de la Patria, debe ser apoyada moral y económicamente por toda la colectividad; pero por las circunstancias especiales de la vida universitaria en México y en tanto puede garantizarse la independencia económica de la

Universidad respecto del Estado, éste debe proporcionar los medios económicos suficientes para que la actividad universitaria se desenvuelva normalmente.

7
TRABAJO

Desde el punto de vista nacional, como desde el punto de vista de la persona, es necesario proclamar la santidad del derecho y de la obligación del trabajo. El Estado y la comunidad entera deben garantizar el libre ejercicio de ese derecho, y hacer fecundo el cumplimiento de esa obligación.

La consideración del trabajo humano como mercancía, como simple elemento material en la producción, es atentatoria contra la dignidad de la persona, y contra el interés de la Nación. Lo es en mayor grado aún, la explotación del trabajador como hombre para fines políticos, a pretexto de disciplina y cohesión de las organizaciones de trabajo.

Todo trabajo socialmente útil, debe tener la retribución justa que permita al trabajador vivir y formar decorosamente una familia, y obtener el más amplio mejoramiento real posible.

Toda persona apta para el trabajo, ha de tener la certeza de una oportunidad constante de trabajar. Quienes hayan cumplido su deber de trabajo y tengan mermada o agotada por cualquier causa su capacidad de trabajar, deben seguir contando con los recursos necesarios para vivir dignamente y no dejar en desamparo a los suyos.

El Estado tiene el deber de urgir las actividades y de crear o fomentar las instituciones necesarias para garantizar el cumplimiento de esos principios y para evitar con gestión oportuna o resolver con justicia eficaz, los conflictos por razón de trabajo.

8
INICIATIVA

La iniciativa privada es la más viva fuente de mejoramiento social. El Estado debe promover su mejor
y más ordenado desenvolvimiento y garantizarlo.

En donde la iniciativa privada sea imposible o insuficiente, el Estado ha de urgir la organización de actividades sociales, sin matar, estorbar ni desplazar esa iniciativa, pues en estos casos, la acción administrativa oficial resulta agotante y destructora.

El Estado tiene el deber de velar porque los frutos de la iniciativa privada tengan carácter social, y de hacer que esa iniciativa concurra siempre en el interés nacional, y esté constantemente subordinada al bien común.

9
PROPIEDAD

La propiedad privada es el medio más adecuado para asegurar la producción nacional y constituye el apoyo y la garantía de la dignidad de la persona, y de la existencia de la comunidad humana fundamental, que es la familia.

Debe promoverse, por tanto, la formación del mayor número posible de patrimonios familiares suficientes.

La garantía de la propiedad no tiene en general, ni en especial en cuanto a la capacidad de los sujetos individuales o colectivos de este derecho, otros límites que el interés público apreciado conforme a los principios del bien común, y el cumplimiento de los deberes positivos de buen uso, y de cooperación social que los mismos principios imponen.

10
CAMPO

El más grave, quizá, de los problemas nacionales, es el del campo, y no será resuelto, antes se verá constantemente agravado, por los métodos insinceros y de mero interés político que hasta ahora se han empleado a su respecto.

Es un problema primordial de nuestra economía; pero es, sobre todo, un problema de elevación humana.

Reclama el establecimiento y la afirmación de relaciones de justicia y armonía entre todos los que cultivan la tierra.

Requiere el inventario y el aprovechamiento de las riquezas y de las posibilidades del campo en cada región de México, la incorporación a la riqueza nacional de las grandes zonas fértiles hoy sustraídas a la producción, la conservación adecuada de las tierras y de los recursos forestales, la ejecución de las obras de captación y de alumbramiento de aguas en los múltiples pequeños sistemas que pueden desarrollarse desde luego, antes y con mayor provecho que los grandes y costosos proyectos de irrigación.

Exige que se oriente y facilite la adecuada migración interior de la población rural; que cada familia campesina, inclusive la del ejidatario, tenga posibilidad de obtener, en plena propiedad, la tierra que sea capaz de hacer producir eficazmente, y que el aprovechamiento adecuado sea función normal de la propiedad; que cada núcleo de población rural tenga asegurados el fondo legal para su establecimiento y desarrollo, y los terrenos de uso común para montes y pastales; que satisfechas esas necesidades primarias, la propiedad rural se organice de modo firme y garantizado, con los límites de extensión que en cada caso marquen las condiciones locales de actividad y el imperativo de asegurar y de acrecentar la producción nacional.

Demanda el establecimiento de cuadros legales de libre y fácil organización para los agricultores, a fin de hacerles posible el uso del crédito, la adquisición y el empleo de aperos y maquinaria, la ejecución de mejoras permanentes, la refacción normal y el avío, el acceso ordenado a los mercados y la liberación del usurero y del intermediario comprador a término o burócrata opresor.

Exige una organización tutelar, generosa, responsable, para dar orientación y eficacia en el trabajo a quienes no han trabajado libremente, hasta capacitarlos como productores autónomos.

Deben adoptarse las medidas necesarias para proporcionar preparación especial y elementos técnicos
y materiales a los campesinos mexicanos que siempre han carecido de ellos; para procurar a los agricultores un precio justo por los productos de su esfuerzo y hacerles posible una vida en condiciones humanas; para consolidar, incrementar y mejorar nuestra producción agrícola; para que la población rural deje de ser víctima de la explotación económica y política y pueda ejercitar con posibilidades materiales y con valores morales positivos, la actividad que le corresponde en la formación y en el desarrollo de nuestra Patria.

11
ECONOMIA

El Estado tiene autoridad, no propiedad, en la economía nacional.

Ha de urgir todas las actividades adecuadas para la firmeza y la prosperidad de esa economía; ha de ordenar esas actividades para que concurran a hacer estable y fecunda la vida económica; ha de corregir las injusticias que en la aplicación de la renta nacional existan, y debe evitar o reprimir los actos negativos o destructores que comprometan o debiliten el porvenir o la estructura económica de la Nación.

Está obligado a crear y a manejar honradamente los medios y las instituciones públicas indispensables para dar agilidad, eficacia y orientación a la economía; a procurar el mejor y más amplio aprovechamiento
de los recursos naturales del país y la concurrencia de toda labor económica al cumplimiento de los fines de la Nación.

Debe especialmente velar por evitar la consideración del hombre como instrumento de la economía, y garantizar, al contrario, que la estructura y el resultado de las actividades económicas queden siempre subordinadas y al servicio de los valores humanos que son superiores.

12
MUNICIPIO

La base de la estructuración política nacional ha de ser el Gobierno de la Ciudad, del Municipio. Histórica y técnicamente la comunidad municipal es fuente y apoyo de libertad política, de eficacia en el gobierno y de limpieza de la vida pública.

El gobierno municipal ha de ser autónomo, responsable, permanentemente sujeto a la voluntad de los gobernados y a su vigilancia, y celosamente apartado de toda función o actividad que no sea la del municipio mismo.

Sólo en estas condiciones puede cumplir la administración del municipio sus fines propios y realizar con plenitud su sentido histórico. Sólo así pueden evitarse el vergonzoso desamparo y la ruina de nuestras poblaciones, el abandono de nuestra vida local en manos de caciques irresponsables, la falta completa o la prestación inadecuada y miserable de los servicios públicos más urgentes, y sobre todo, la degradación de la vida política nacional.

13
DERECHO

La realización de la justicia es atribución primaria del Estado. La honesta, objetiva y fecunda actuación de este valor es la mejor garantía que puede otorgarse a los derechos fundamentales de la persona humana y de las comunidades naturales. Es, además, condición necesaria de la armonía social y del bien común.

Es importante la aplicación justa de la ley por los Tribunales; pero un verdadero Estado de Derecho exige además, la elaboración de normas auténticamente jurídicas y un esfuerzo concurrente de la totalidad de los órganos del Estado, presidido por la justicia e inspirado en ella.

El anhelo de una recta, ordenada y generosa Administración de Justicia, y la necesidad de que los encargados de la magistratura llenen las cualidades irreemplazables de elevada actitud de conciencia, ilustrado criterio, limpieza de juicio y honradez ejemplar, no por constituir un problema cotidiano, dejan de tener una significación que toca a la esencia misma de la función del Estado.

El Poder especialmente encargado de hacer justicia, debe corresponder a la dignidad trascendental de su misión, con acendrada responsabilidad, firme independencia y enérgica actitud, como guardián celoso y activo agente de la protección del Derecho, no sólo contra las transgresiones de los particulares sino principalmente contra toda desviación o abuso del Poder.

14
POLITICA

La creación y administración de un orden dinámico que jerarquice justamente las diversas funciones y los distintos intereses que existen dentro de la vida social, no es patrimonio de un hombre o de un grupo social determinado. A la creación y administración de ese orden, deben concurrir la inteligencia y la voluntad de las personas que conviven dentro del Estado. Cumplir este deber político es necesidad imperiosa y urgente, cuya omisión acarrea el envilecimiento de la vida social.

La formación de Partidos que organicen el cumplimiento del deber político, y sean permanentes en su actividad, como permanente es su fin, es necesidad evidente dentro de la realidad histórica de México.

ACCION NACIONAL, al proyectar sobre la realidad presente y la convivencia futura, los Principios de Doctrina aprobados por su Asamblea Constitutiva, ofrece al pueblo de México una orientación libre, justa y verdadera, capaz de encauzar la acción política permanente en beneficio de todos los mexicanos.

El siguiente documento que se refiere a tal proyección, se aprobó por unanimidad en la XVIII Convención Nacional del PAN, en la ciudad de México, Distrito Federal, el 16 de mayo de 1965.

INDICE

1 Nación .....

2 Persona .....

3 Estado .....

4 Orden .....

5 Libertad .....

6 Enseñanza .....

7 Trabajo .....

8 Iniciativa .....

9 Propiedad .....

10 Campo .....

11 Economía .....

12 Municipio .....

13 Derecho .....

14 Política .....

PARTIDO ACCION NACIONAL

Proyección
de los Principios
de Doctrina

Aprobados por la
XVIII CONVENCION NACIONAL

Mayo de 1965

A través de su intervención en la vida pública de México, ACCION NACIONAL ha comprobado la validez de sus Principios de Doctrina, los cuales, mediante una difusión y aplicación constantes, han tenido innegable influencia en la evolución política de nuestro país, donde ya se ha iniciado el establecimiento de un régimen de partidos, y donde, por la formación y el robustecimiento de la opinión pública, los ciudadanos se interesan cada día más en las cuestiones políticas.

Por ello, a veinticinco años de su fundación, ACCION NACIONAL -único partido político que en la Historia de México ha vivido y progresado con independencia frente al poder público- reitera su adhesión a los Principios de Doctrina aprobados en la Asamblea Constitutiva de 15 y 16 de septiembre de 1939, que han servido de fundamento y motor para sus tesis y actividades.

Las exigencias impuestas desde entonces por la evolución natural de la Nación y del mundo, el crecimiento del Partido y su mayor penetración en la conciencia del pueblo mexicano, han hecho que ACCION NACIONAL considere conveniente presentar a sus miembros y simpatizadores, y a la opinión pública del país, las proyecciones actuales que sus Principios de Doctrina arrojan sobre la situación política nacional e internacional.

Siempre es oportuno para un partido político con actividad permanente, indicar, como se afirmó en nuestra II Convención Nacional, “el rumbo que a las exigencias ciudadanas señala la concepción doctrinal correcta del Estado, del ser humano, de la autoridad, de la libertad, de la justicia y del bien común”.

Con este documento, ACCION NACIONAL demuestra cómo en México es posible para una organización política, guardar fidelidad a principios fundamentales, sin perjuicio de aplicarlos eficazmente a situaciones históricas cambiantes, mediante la concepción dinámica de los mismos.

1
PERSONA

El ser humano es persona, con cuerpo material y alma espiritual, con inteligencia y voluntad libre, con responsabilidad sobre sus propias acciones, y con derechos universales, inviolables e inalienables, a los que corresponden obligaciones inherentes a la naturaleza humana individual y social.

Por su dignidad, los hombres -iguales por naturaleza- no deben ser reducidos a la categoría de mero instrumento de personas, grupos o instituciones privadas o públicas, con menoscabo de su propio destino temporal y eterno.

Toda persona tiene derecho y obligación de ejercitar responsablemente su libertad para crear, gestionar y aprovechar las condiciones políticas, sociales y económicas, para una mejor convivencia humana.

La convivencia justa, libre y ordenada, es medio necesario para el perfeccionamiento de la persona. Es por tanto obligación ineludible de todos, respetar la dignidad y la libertad de los demás y cooperar no sólo a la conservación, sino también al desenvolvimiento de un orden social justo que armonice los aspectos individuales y sociales de la vida humana.

2
POLITICA

ACCION NACIONAL concibe la política -actividad humana indispensable y superior- no como oportunidad de dominio sobre los demás sino como capacidad y obligación de servir al hombre y a la comunidad.

Corresponde a la actividad política el establecimiento de un orden dinámico que permita, en las circunstancias históricas concretas, la conservación y el incremento del bien común entendido no sólo como oportunidad personal, justa y real de acceso a los bienes humanos, sino también como el conjunto de valores morales, culturales y materiales, que han de conseguirse mediante la ayuda recíproca de los hombres, y que constituyen instrumentos necesarios para el perfeccionamiento personal de todos y cada uno de ellos en la convivencia.

3
ESTADO

El Estado, como sociedad política, requiere de un Gobierno que sea expresión auténtica de la colectividad. Requiere también del recto ejercicio de la autoridad, que no es el mero dominio de un hombre o de un grupo, sino que tiene por fin la realización del bien común que simultáneamente implica la justicia y la seguridad, y la defensa, respeto y protección de la persona y del bien colectivo. Por tanto, el Estado no debe desconocer los derechos esenciales de la persona y de las comunidades intermedias, ni erigir las decisiones del Poder en única fuente de derecho o en definición arbitraria del bien común.

Son falsas, inhumanas y contrarias a las leyes fundamentales de la vida política social, las doctrinas que conciben al Estado como instrumento de lucha al servicio de una clase social, cualquiera que sea, para destrucción o dominación de las demás, y que fincan la solución de los problemas sociales en la lucha de clases.

En la realidad política mexicana, la práctica real del federalismo, independientemente de las críticas que sobre su vigencia histórica pudieran formularse, resulta camino adecuado para la aplicación del mayor número de esfuerzos, a fin de lograr un desarrollo intensivo y armónico del país. México debe ajustar su vida a los principios federales vigentes en la Constitución y superar el centralismo político y económico en que vive, que mengua la autonomía de los estados, les impone autoridades, les dosifica ingresos y niega, con todo ello, los supuestos mismos de la Federación.

Es indispensable el respeto a la división e integración legítima de los poderes, y el cumplimiento eficaz de las funciones que a cada uno de ellos competen, para que de las justas relaciones entre los mismos, resulte el necesario equilibrio en el ejercicio de la autoridad, dentro de un régimen de derecho.

De la eficacia de un Estado de Derecho en la vida de México, es particularmente responsable la Justicia Federal, cuyas funciones de Poder se ejercitan principalmente a través del control de la constitucionalidad de los actos de los demás poderes, que la Constitución Federal ha puesto en sus manos.

La justicia debe impartirse en todos sus ramos, con dignidad, eficiencia y libertad, con posibilidades reales de ejercicio de las garantías constitucionales en todos sus niveles, especialmente en el de la justicia de barandilla o de paz -que generalmente se administra al margen de las mismas- y que es con la que diariamente tienen contacto los grupos más desvalidos de la comunidad.

El Congreso debe asumir plena y responsablemente su categoría de Poder, con el ejercicio eficaz de las facultades exclusivas o concurrentes que a la Cámara de Diputados y al Senado atribuye la Constitución, no sólo para legislar, sino para contribuir a la correcta orientación política de la Administración, y ejercer el control de ésta por las vías del presupuesto, de la verdadera rendición de cuentas y de la exigencia de responsabilidades por el manejo de los recursos públicos. El Senado debe ejercer responsablemente las facultades que la Constitución le confiere, especialmente respecto de la política internacional, sin abdicar en el Ejecutivo su deber de orientarla.

La supremacía que de hecho ejerce en México el ejecutivo federal sobre los demás poderes federales y estatales, resta a todos dignidad y eficacia y rompe el fundamento de la organización democrática federal. El cumplimiento de un programa de gobierno para bien de la colectividad no debe fincarse en el predominio que se mantiene en favor del Presidente de la República, sino en el recto ejercicio de las funciones de cada uno de los Poderes, con el mutuo respeto que tienen obligación de guardarse.

4
ORDEN INTERNACIONAL

La Nación Mexicana es una realidad viva, con tradición propia varias veces secular, y con elementos internos de unidad capaces de superar toda división en parcialidades, clases o grupos.

Las peculiaridades propias del pueblo mexicano le permiten mantener una convivencia justa y pacífica con todos los miembros de la comunidad internacional, sobre bases de igualdad jurídica y respeto común.

Sin desconocer las afinidades y elementos específicos que unen a diversas comunidades políticas y nacionales entre sí, la solidaridad humana y la interdependencia a que han llegado todos los pueblos de la Tierra, subrayan la importancia y necesidad de un orden internacional justo y eficaz, que supere los nacionalismos herméticos y las actitudes de hostilidad o indiferencia entre las comunidades políticas.

No es posible el orden internacional sin la normalidad política interna de los estados, que se estructura sobre la vigencia real de los derechos humanos y de la justicia social. La normalidad política interna exige que la actividad y las instituciones políticas estén organizadas para la realización del bien común y que la legitimidad de la autoridad se funde en la representación del pueblo expresada mediante el voto libre y respetado.

Esta relación esencial entre la normalidad política interna y un orden internacional eficaz, hace necesario proclamar normas y organizar instituciones que aseguren la vigencia universal de los derechos humanos y políticos y sancionen su violación.

Una concepción aislacionista de la soberanía que no tome en cuenta la convivencia universal ni los valores a cuya realización obliga la solidaridad humana, atribuye carácter necesario y definitivo a tendencias históricas mudables, se funda en el concepto equívoco de la suficiencia de los estados nacionales, ignora a las minorías étnicas, y desconoce la necesidad y obligatoriedad de un orden internacional justo y eficaz, cuya vigencia resulta inaplazable especialmente para la gran mayoría de los países que afrontan los problemas del desarrollo.

La legítima afirmación y defensa del carácter y de las peculiaridades nacionales y el ejercicio legítimo de la soberanía, no implican para los miembros de la comunidad internacional, la exención del deber de cooperar al bien de la misma, mediante la formación de organizaciones supranacionales en diversos niveles y con distintas funciones.

Al concepto anacrónico de la soberanía que ignora que la sola convivencia entre los pueblos engendra obligaciones para todos ellos, corresponden conceptos desviados de la autodeterminación y de la no intervención. Ningún gobierno, ningún estado o grupo de estados, pueden invocar la autodeterminación para exportar subversiones, para justificar la violación de derechos humanos en contra de sus propios pueblos o para cometer injusticias, mediante el abuso de su prepotencia militar o económica, en contra de otro estado o de la Humanidad entera. No pueden condenarse las justas actuaciones de autoridades internacionales, imparciales, no unilaterales, competentes y previamente establecidas, en defensa de los derechos humanos, cuando las exijan el bien común de un pueblo o de toda la Humanidad.

Cada país tiene libertad para mantener relaciones políticas y comerciales con todos los miembros de la comunidad internacional, en condiciones de justicia y equidad, y de respeto para su propio pueblo, para los demás pueblos de la Tierra y para el orden internacional.

La ayuda internacional para la elevación humana y el desarrollo económico, debe basarse en la promoción y estímulo de las energías de cada país, con la adecuación de la política de desarrollo a las características propias de cada comunidad, con respeto a la moral y con garantía de los derechos humanos en un orden de libertad y justicia.

La paz internacional no es coexistencia precaria de fuerzas hostiles que por razones políticas o militares aplazan la realización de sus designios destructores, sino convivencia en la libertad, en la justicia, en la verdad y en la cooperación para bien de todas las naciones.

La política exterior de México debe servir a la causa de la democracia auténtica y de la paz verdadera, rechazar cualquier falso pacifismo y cualquier simulación de democracia, y ayudar a la organización y fortalecimiento de instituciones que hagan posible la paz y la justicia internacionales, y que conduzcan al desarme y a la prohibición eficazmente controlada de las armas nucleares, con la necesaria y consiguiente aplicación pacífica, para bien de la Humanidad, de los enormes recursos que hoy se destinan a fines bélicos.

5
DEMOCRACIA

La democracia requiere la participación eficaz de las personas en las actividades colectivas que condicionan su propio destino personal. Porque la democracia como sistema de vida y de gobierno se funda en la igualdad esencial de todos los seres humanos, es la forma superior de legitimación del poder político y el sistema óptimo para respetar la dignidad humana, que en lo material debe sostenerse en la suficiencia económica de todos, y en lo espiritual en la posibilidad real de acceso a los valores de la cultura y en el respeto a la libertad del hombre para responder ante su conciencia y ante Dios, del propio destino y del de sus semejantes.

En función de la dignidad y de la libertad, todo régimen democrático debe respetar, promover y garantizar, no sólo el reconocimiento teórico, sino el ejercicio real de los derechos fundamentales de la persona humana, esto es, de aquellos de que son titulares todos los miembros de la comunidad política, sin distinción alguna, por el solo hecho de ser hombres: derecho a la vida, a las libertades espirituales, a la justicia, a la educación y a la cultura, al trabajo y al descanso, a la propiedad, a la seguridad social, a la salud y al bienestar.

El Estado no tiene ni puede tener dominio sobre las conciencias, ni proscribir ni tratar de imponer convicciones religiosas. El Estado debe garantizar la libertad religiosa, para que todas las personas puedan manifestar sus convicciones, individualmente y en común, en público y en privado, por la enseñanza, la predicación, el culto y el cumplimiento de los ritos.

En función de la solidaridad responsable del hombre en el destino de sus semejantes, toda persona tiene derecho y obligación de intervenir en los asuntos públicos de la comunidad política de que forma parte. Por eso, todo régimen democrático debe respetar, promover y garantizar mediante procedimientos electorales imparciales y objetivos, la expresión y representación de las minorías, los derechos del ciudadano para intervenir en el proceso de integración del gobierno al que vive sujeto y a formar parte del propio gobierno, y debe asegurar a los ciudadanos la libertad de información y su libertad de criticar a quienes ejercen el poder.

6
PARTIDOS POLITICOS

El pluralismo político, es decir, la diversidad de convicciones, tendencias e intereses políticos, impone la necesidad de la discusión y del diálogo entre los diversos grupos políticos, y entre ellos y el Gobierno.
La discusión y el diálogo que se basan en la sinceridad y en la verdad, son condiciones para conciliar la diversidad en la unidad, mediante el recto ejercicio del poder.

El ejercicio adecuado de los derechos políticos y la unidad que requiere la buena marcha de un régimen democrático, debe conciliarse con la pluralidad de los grupos políticos existentes en una sociedad;
la expresión de la diversidad de estos grupos debe realizarse en las democracias, mediante la formación y la actuación permanente de los partidos políticos.

Los partidos políticos representan las tendencias, convicciones y programas de los diversos grupos existentes en la comunidad y los esfuerzos organizados de los mismos para alcanzar o conservar el poder, lo cual presupone la existencia de posibilidades objetivas -legales y prácticas- debidamente garantizadas, de cumplir tales fines.

Son antidemocráticos los sistemas de partido único o de partido oficial sostenidos política y económicamente por el Gobierno, porque tales partidos son instrumentos de un poder totalitario o autocrático y artificios que intentan nulificar o impedir que se manifieste la diversidad de corrientes de opinión que necesariamente existen en toda sociedad.

En una democracia, ni en la teoría, ni en la práctica, deben identificarse el Estado o el Gobierno, con un partido político. Por eso resulta inadmisible la existencia de un partido oficial, que mediante privilegios y con características inequívocas de dependencia administrativa, se mantiene en México para asegurar la continuidad de un grupo en el poder, con los pretextos de la estabilidad política, de la impreparación y subdesarrollo político del pueblo y de la necesidad de una eficacia gubernativa de la que el régimen pretende tener el monopolio.

Tampoco puede el gobierno limitar a un mínimo -en el plano federal de la Cámara de Diputados– sus propósitos de respeto a la concurrencia democrática de los partidos políticos, sino que debe respetarla en todos los niveles -federal, estatal y municipal- de tal manera que un trato político y electoral honrado, sin privilegios para determinados partidos o personas, sea una realidad cabal en México.

A la creación de un orden justo y dinámico de gobierno para México, con responsabilidades para gobernantes y gobernados, deben concurrir la inteligencia y la voluntad de todas las personas que conviven dentro del Estado. Para cumplir este deber, ACCION NACIONAL se organizó como partido político permanente, no con la finalidad única de quebrantar el monopolio del poder, sino para poner a disposición del pueblo mexicano un instrumento idóneo para presentar, dentro del proceso democrático, programas de gobierno y personas capaces de cumplirlos, distintos de los que autocráticamente impone el grupo en el poder.

7
FAMILIA

La familia, comunidad de padres e hijos y unidad social natural básica, tiene influjo determinante en la sociedad entera.

La familia tiene como fines naturales la continuación responsable de la especie humana; comunicar y desarrollar los valores morales e intelectuales necesarios para la formación y perfeccionamiento de la persona y de la sociedad, y proporcionar a sus miembros los bienes materiales y espirituales requeridos para una vida humana ordenada y suficiente. Por el rango de estos bienes y fines, corresponde a la familia la preeminencia natural sobre las demás formas sociales, incluso el Estado. Este tiene la función esencial de hacer posible y facilitar el cumplimiento de la misión propia de las familias que forman la comunidad política, que no puede realizarse plenamente sino dentro de un orden social, económico y político justo. Por tanto, la familia debe cooperar con el Estado y las organizaciones intermedias al establecimiento del orden en la sociedad, y cumplir la tarea fundamental de orientar y educar social y políticamente a sus miembros.

Es objetivo indispensable de la reforma social luchar por la suficiencia económica de la familia. Deben apoyarse las medidas políticas, económicas y sociales, justas y necesarias, para satisfacer esta exigencia mediante el trabajo. Cuando esto no sea posible, debe asegurarse el ingreso familiar suficiente, por razones de justicia y equidad, mediante transferencias sociales en favor de quienes se encuentren en condiciones objetivas de inferioridad, para hacer valer sus derechos y conseguir sus intereses legítimos.

Una política social justa no debe pretender la substitución de la familia por el Estado. Este debe crear condiciones educativas, económicas, laborales, habitacionales y de seguridad social, que estimulen la responsabilidad y energía de las familias. En sus relaciones con la familia, como en todos los campos de actividad estatal, el Gobierno igualmente está obligado a respetar el principio de subsidiariedad y a garantizar, en las leyes y en la práctica, la libertad de conciencia de los miembros de la familia y el derecho preferente de los padres para determinar el tipo de educación que deben recibir sus hijos.

8
MUNICIPIO

El Municipio es la forma primera de la sociedad civil, con autoridades propias y funciones específicas, cuya misión consiste en proteger y fomentar los valores de la convivencia local y prestar a la comunidad los servicios básicos que la capacidad de las familias no alcanza a proporcionar.

El Municipio, base de la organización política nacional, debe ser comunidad de vida y no simple circunscripción política, fuente y apoyo de libertad, de eficacia en el gobierno y de limpieza en la vida pública.

El gobierno municipal debe tener autonomía política y recursos económicos propios, suficientes para cumplir sus fines. Por tanto, debe integrarse democráticamente y quedar sujeto de manera permanente a la vigilancia de los gobernados, sin interferencias de la Federación o de los Estados, que priven de recursos económicos a los municipios, violen su autonomía, mutilen sus funciones y fomenten la supervivencia del caciquismo.

Es contrario a la naturaleza del municipio, atribuirle funciones o responsabilidades regionales o nacionales y utilizarlo como apéndice administrativo o como instrumento de control político por parte del Gobierno Federal o de los Estados.

Para conciliar la autonomía del municipio con su integración en el sistema político nacional, se requiere el reconocimiento constitucional de las funciones municipales básicas, y la atribución de los recursos suficientes para cumplirlas.

Los ayuntamientos deben tener posibilidad constitucional de recurrir las leyes o actos de otras autoridades que lesionen la autonomía del municipio o le nieguen los medios necesarios para cumplir sus funciones.

9
EDUCACION

La libertad de investigación y de opinión científica o filosófica, como toda libertad de pensamiento, no puede ser constreñida por el Estado. La libertad de expresión no puede tener otros límites jurídicos que los impuestos por las normas morales y por el bien común.

La educación del pueblo mexicano es tarea de todos los miembros de la nación. Es deber del Estado, pero nunca puede ser monopolio suyo, democratizar la educación, esto es, procurar a todos los miembros de la colectividad una igual oportunidad de educación, asegurarles por lo menos una educación básica, promover su elevación cultural y facilitarles su capacitación técnica de acuerdo con las necesidades del desarrollo. En el cumplimiento de este deber, el Estado no puede convertirse en agente de propaganda sectaria o partidista. La libertad de enseñanza ha de ser garantizada sin otros límites, por parte del Estado, que la determinación de los requisitos técnicos relativos al método, a la extensión y comprobación del cumplimiento del programa educativo mínimo, o concernientes al otorgamiento de grados o títulos que autoricen para ejercer una profesión o una función social determinada.

Contrarían estos principios la imposición por el Estado de textos únicos en cualquier grado de enseñanza, y el desconocimiento o limitación del derecho preferente de los padres para escoger, conforme a sus convicciones, el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

La actividad universitaria sólo puede cumplir propiamente su misión de conservar, acrecentar y difundir la cultura, si se desarrolla en un régimen de honradez intelectual, de disciplinada autonomía y de libertad de cátedra. Por la importancia que la Universidad tiene en la vida de la Patria, sus actividades deben ser apoyadas moral y económicamente por toda la colectividad y asegurar la libertad de investigación, de convicción y de opinión a sus miembros.

El Estado debe proporcionar los medios económicos suficientes para que la universidad y los institutos de cultura superior cumplan sus fines, sin que por ello tenga derecho a limitar la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y las consecuentes facultades para la libre organización interna de las instituciones.

El Estado y la colectividad deben gestionar la constitución de patrimonios propios para las universidades e instituciones de cultura superior, con el fin de garantizar su autonomía jurídica y económica, y de que desempeñen eficazmente la misión que deben cumplir.

La enseñanza técnica, cualesquiera que sean su grado y sus fines, debe intensificarse de acuerdo con las crecientes necesidades que impone el desarrollo de la Nación, procurando la formación integral de los técnicos a fin de evitar la deformación cultural de la preparación especializada.

El presupuesto que el Estado destine a la enseñanza en todos sus grados, debe ser objeto de una justa y racional distribución, atendiendo a las necesidades regionales y a las de los diversos sectores de la población. Tanto en el caso de la enseñanza técnica, como en el de la enseñanza universitaria, debe promoverse el establecimiento y fortalecimiento de los institutos y universidades de provincia.

10
TRABAJO

EL derecho al trabajo es prerrogativa común de todos los hombres porque, en última instancia, se funda en el derecho a la vida y a la libertad. De ahí que el derecho al trabajo no pueda quedar sujeto ni por el sindicato, ni por el patrón, ni por el gobierno a la imposición de criterios ideológicos o políticos.

El trabajo, actividad inmediata de la persona, tiene preeminencia como principio ordenador de la economía social, sobre los bienes materiales e instrumentales que son objeto de propiedad. Considerar el trabajo humano como mercancía o como simple elemento de la producción, atenta contra la dignidad del trabajador contra el orden de la comunidad.

Toda persona apta para el trabajo debe tener oportunidad constante de realizarlo. Con paridad de derechos y obligaciones con el hombre, la mujer tiene derecho a condiciones de trabajo conformes con las exigencias de su sexo y con sus deberes de esposa y de madre. Todo trabajo socialmente útil debe tener la retribución justa que permita al trabajador vivir y mantener decorosamente una familia, con posibilidades reales de mejoramiento.

Es obligación de la comunidad -Estado y particulares- promover la creación de fuentes de trabajo para hacer posible en la realidad el ejercicio del derecho y el cumplimiento de la obligación de trabajar.

Es derecho del trabajador la estabilidad en su trabajo, mientras lo desempeñe con lealtad y eficacia. Quienes hayan cumplido su deber de trabajo y tengan mermada o agotada por cualquier causa su capacidad de trabajar, deben seguir contando con los recursos necesarios para vivir dignamente y no dejar en desamparo a los suyos. El Estado tiene el deber de urgir las actividades y de crear o fomentar las instituciones necesarias para garantizar el cumplimiento de estos principios y para evitar con gestión oportuna, o para resolver con justicia eficaz, los conflictos por razón de trabajo.

Debe promoverse la creciente integración en el funcionamiento, en la propiedad, en las ganancias y en las decisiones de la empresa, de todos los que en ella colaboran con inteligencia, mano de obra o capital, con el fin de llegar a tipos de empresa organizados de tal manera que todos participen equitativamente de sus beneficios, al mismo tiempo que procuran transformarla en una auténtica comunidad de vida y de trabajo y en un servicio eficiente para responder a las necesidades de la colectividad.

El Estado debe respetar la libertad de los campesinos, trabajadores, profesionistas y empresarios, para organizarse en defensa de sus intereses. Las organizaciones que los mismos formen, deben funcionar con verdadera democracia interna sin que el Estado intervenga directa o indirectamente en la designación
de sus dirigentes; asegurar la representación auténtica de los agremiados mediante elecciones directas y secretas, sin aceptar presiones políticas o económicas; establecer un sistema objetivo y eficaz para exigir responsabilidades a sus dirigentes y proscribir cualquier tipo de sanciones por razones políticas o ideológicas.

Los sindicatos y en general todas las organizaciones formadas por razón de ocupación o de trabajo, tienen derecho de actuar en la vida pública para gestionar, frente al Estado y a la opinión, las medidas generales o particulares que reclamen el bien común o el interés profesional de sus agremiados y de recomendar las opciones electorales que consideren más convenientes para los mismos; pero deben abstenerse de actuar directamente en cuestiones políticas, principalmente en las electorales, y respetar la libertad y los derechos políticos de sus miembros.

Es antidemocrática y desvirtúa la naturaleza del sindicato, la utilización del movimiento sindical y de los recursos y sanciones sindicales, para imponer la afiliación individual o colectiva de los trabajadores a un partido político.

Las organizaciones agrarias formadas en razón del trabajo del campo, sean ejidales, de pequeños propietarios o comunidades de cualquier tipo deben también funcionar democráticamente y ser respetadas en su libertad de decisión, sin que el Estado les imponga dirigentes y sin que puedan ser utilizadas como instrumento para presionar a la población rural, y lograr su afiliación a partidos políticos, a cambio de promesas de tierras o de ayudas de cualquier clase.

Deben conservarse y promoverse económica y técnicamente, la empresa artesana y la empresa agrícola de dimensiones familiares, y dotarlas de un régimen jurídico para el cumplimiento de sus fines.

11
ECONOMIA

Como actividad cultural de sustentación humana, la economía debe armonizar dinámicamente las necesidades de la persona, con la producción, distribución y consumo de los bienes y servicios que las satisfacen, y así crear o mantener para el hombre, una base material estable y suficiente para la realización de la libertad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones.

Aun cuando la actividad económica tiene por objeto bienes materiales, por ser una actividad al servicio del hombre, debe estar sometida a la ley moral y a los fines y valores permanentes de la vida humana.

No cumple los fines de la economía el simple aumento cuantitativo o cualitativo de las cosas, a expensas de la justicia en la distribución del producto de la cooperación social, o de las libertades y derechos de las personas y de las comunidades.

Para la existencia de un orden económico justo es condición necesaria, pero no suficiente, la libertad de competencia en la actividad de los particulares, limitada de acuerdo con el bien común. La justicia en las relaciones económicas no puede ser resultado ni de pretendidos procesos automáticos, que en la vida real pueden resultar factores de injusticia y cómplices de la prepotencia económica, ni del control totalitario de la economía por parte del gobierno. La justicia en el orden económico, exige la recta actuación de los particulares, de las organizaciones ocupacionales, del Estado y de la comunidad internacional.

En cumplimiento de su misión subsidiaria y supletoria, el Estado debe fomentar el aprovechamiento racional de los recursos naturales, estimular y coordinar todas las actividades adecuadas para la estabilidad y prosperidad de la economía; corregir las injusticias que existan en la aplicación y distribución del ingreso nacional, y evitar o reprimir los actos que comprometan o debiliten la estructura o el porvenir económico de la comunidad. La conveniencia y los límites de la intervención económica del Estado, dependen de las exigencias del bien común en los casos concretos.

La iniciativa privada es la más viva fuente de mejoramiento social. El Estado debe promover su mejor
y más ordenado desenvolvimiento y garantizarlo.

En donde la iniciativa privada sea imposible o insuficiente, el Estado ha de urgir la organización de actividades sociales, sin matar, estorbar ni desplazar esa iniciativa, pues en estos casos, la acción administrativa oficial resulta agotante y destructora.

El Estado tiene el deber de velar porque los frutos de la iniciativa privada tengan carácter social, y de hacer que esa iniciativa concurra siempre en el interés nacional y esté constantemente subordinada al bien común.

El desarrollo económico debe formar parte de un esfuerzo de elevación humana completa, en el que deben armonizarse y complementarse recíprocamente los aspectos materiales y espirituales. Es inaceptable utilizar el incremento de los bienes materiales, como pretexto o instrumento de esclavización y degradación humana, para suprimir la libertad y los derechos del hombre.

Desde el punto de vista estrictamente económico, son factores insuperables de desarrollo la libertad responsable, la voluntad de creación, de esfuerzo y de riesgo, la voluntad personal de mejorar, la aptitud y la honradez en la actividad económica de los particulares y del gobierno, y la certeza del desarrollo de la personalidad propia mediante el cumplimiento del deber de cooperación social en el trabajo productivo, en un ambiente de verdad, libertad y justicia. En México estas exigencias esenciales del desarrollo económico y humano tienen urgencia especialísima en el sector agrícola.

Desde el punto de vista económico, la planeación debe concertar la libertad y la iniciativa individual, con una orientación común del desarrollo. Por eso, la planeación no debe ser un disfraz económico del control político, sino esfuerzo nacional de previsión del futuro, fijación realista de metas y de medios económicos y sociales, y expresión de la voluntad común de desarrollo mediante una acción concertada de todos los sectores de actividad económica y no solamente del gobierno.

12
JUSTICIA SOCIAL

La miseria y la ignorancia se deben al desorden moral, económico y político, y sólo podrán evitarse mediante un orden justo, basado en el reconocimiento de los valores espirituales y en la realización del bien común, de acuerdo con las situaciones históricas concretas. La cooperación habitual de todos para realizar el orden justo –no la lucha de clases– es el camino adecuado para alcanzar la justicia social, fuerza moral básica de la que dependen todos los bienes de las personas y de la sociedad.

Como justicia del bien común, la justicia social se realiza mediante el ejercicio y la defensa de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones recíprocas, especialmente en las relaciones de la persona y los grupos sociales con la autoridad y de los grupos sociales entre sí.

La justicia social no se limita ni a la solución de los problemas obrero-patronales, ni a lograr una mejor distribución de la riqueza material entre los hombres de los diversos sectores o zonas de un país o entre los diversos países de la comunidad internacional. La justicia social tiene por objeto, con fundamento en la igualdad esencial y en la solidaridad de los hombres, promover el acceso de los mismos -particularmente de los núcleos más desvalidos de la sociedad, o de quienes viven en zonas económicamente menos desarrolladas- a los bienes materiales y espirituales suficientes para que la comunidad viva de la manera más justa, equitativa y equilibrada que sea posible, con respeto para la libertad personal y para la dignidad humana.

La propiedad privada no es un fin en sí misma. Constituye un instrumento de apoyo y garantía para la libertad de la persona y para la seguridad de la familia. Por eso debe promoverse su difusión.

La propiedad privada debe regularse conforme a las exigencias del bien común y de los deberes de buen uso y cooperación social que las mismas imponen.

En México, las exigencias de la justicia social son especialmente apremiantes respecto al sector agrícola. El problema del campo no sólo es primordial en nuestra economía, sino ante todo un problema de
elevación humana.

Es necesario incrementar la productividad del trabajo y de los recursos dedicados a la actividad económica en el campo, y promover no sólo las expectativas, sino la elevación real del género y nivel de vida de la población rural, sin buscar a cambio de ello, ni la sumisión política ni la explotación económica de la misma.

Para este fin se requieren el estímulo a la iniciativa y el respeto a la libertad de los campesinos; la seguridad en la propiedad de la tierra; la extensión al campo de los sistemas de seguridad social; el desarrollo de servicios esenciales tales como agua, comunicaciones, transportes, asistencia sanitaria, instrucción básica y técnica y diversiones; sistemas equitativos de tributación; créditos adecuados y asistencia técnica y, en general, la aplicación de las medidas económicas y técnicas que aseguren la suficiencia económica y humana de los campesinos y el desplazamiento ordenado de la población rural excedente a otros sectores de la actividad económica.

Es injusticia social abusar de la autoridad y de los puestos públicos; negarse a cooperar en las transformaciones sociales, económicas o políticas que exige el bien común; aprovechar posiciones de influencia para negociar con derechos ajenos de personas o comunidades; renunciar a la defensa de derechos, garantías fundamentales, o fomentar, por acción o por omisión la desorientación de las conciencias, el abstencionismo, la deserción y el servilismo.

Son exigencias indeclinables de la justicia social, el reconocimiento común de que existe un orden ético jurídico obligatorio en la convivencia humana y el valor de proclamarlo y defenderlo; la vigencia de un orden democrático en la elección y ejercicio de la autoridad; el respeto a la libertad de conciencia, la independencia de las organizaciones ocupacionales frente al gobierno; la elevación material y humana de la mayor parte de la población, sobre todo en el campo, y la oportunidad de acceso a la propiedad de bienes de uso durable y de producción, mediante una adecuada política de desarrollo y de reforma social.

Las relaciones políticas y económicas en la comunidad internacional, deben tener como objetivo, la realización de la justicia social. En consideración a la igualdad jurídica básica que debe existir entre todas las naciones de la Tierra, la justicia social debe ser el propósito que inspire las medidas de asistencia técnica, social y económica, que se convengan, en favor de los países que requieran la ayuda de otros, para su mejor desarrollo, para reparar infortunios o para alcanzar dicha justicia en su vida interna.

Proyección de los Principios de Doctrina

1 Persona .....
2 Política .....
3 Estado .....
4 Orden Internacional .....
5 Democracia .....
6 Partidos Políticos .....
7 Familia .....
8 Municipio .....
9 Educación .....
10 Trabajo .....
11 Economía .....
12 Justicia Social .....

Proyección de Principios de
Doctrina del Partido Acción Nacional
2002

Aprobada en la XLV Convención Nacional
con fecha 14 de septiembre de 2002

PROYECCION DE PRINCIPIOS DE DOCTRINA DEL PARTIDO ACCION NACIONAL 2002

Introducción

A través de su intervención en la vida pública de México, Acción Nacional ha comprobado la validez de sus Principios de Doctrina los cuales, mediante una difusión y aplicación constantes, han tenido una innegable influencia en la evolución política de nuestro país, donde se han establecido ya las bases de un sistema democrático. El papel del partido se ha modificado de acuerdo con su creciente participación en los órganos de gobierno federales, estatales y municipales.

Por ello, a sesenta y tres años de su fundación, Acción Nacional –protagonista central en la democratización de México- reitera su adhesión a los Principios de Doctrina aprobados en la Asamblea Constituyente del 14 al 17 de septiembre de 1939, que han servido de fundamento y motor para sus tesis
y actividades.

En 1965, Acción Nacional consideró conveniente responder a los cambios que había producido la evolución natural de la Nación y la acción del Partido. Para ello, presentó a sus miembros y simpatizadores, y a la opinión pública del país, una primera Proyección de sus Principios de Doctrina sobre la situación nacional e internacional de entonces.

Treinta y siete años más tarde, es necesario repetir ese ejercicio. Los Principios del Partido tienen hoy tanta vigencia como en su origen, y sus pilares continúan firmes y valederos. El mundo, sin embargo, ha evolucionado. Algunas tendencias que hace cuatro décadas apenas se avizoraban, hoy están profundamente arraigadas en la sociedad. Otros fenómenos, que entonces no podían anticiparse han emergido con fuerza ante nosotros. Consecuentemente, es oportuno que el partido señale el rumbo que marca nuestra concepción doctrinal de la persona, de su liberad y de su responsabilidad social. Es conveniente, asimismo, proyectar sobre los hechos nuevos la luz que aportan los principios de solidaridad y subsidiariedad, para que una sociedad ordenada y generosa concurra a la realización del bien común.

Con este documento, Acción Nacional vuelve a demostrar que en México es posible, para una organización política, guardar fidelidad a sus principios fundamentales, sin perjuicio de aplicarlos eficazmente a situaciones históricas cambiantes, mediante la proyección de los mismos.

En cumplimiento de esta misión, Acción Nacional renueva y reitera su compromiso con la estricta observancia de la Constitución y sus leyes, sin aceptar pactos o acuerdos que lo subordinen a alguna organización del exterior; actuando con independencia de entidades o partidos extranjeros, y rechazando cualquier apoyo económico, político o propagandístico provenientes de entes jurídicos prohibidos por la ley.

1. Persona y Libertad

El Partido Acción Nacional centra su pensamiento y acción en la primacía de la persona humana, protagonista principal y destinatario definitivo de la acción política. Busca que el ejercicio responsable de la libertad en la democracia conduzca a la justicia y a la igualdad de oportunidades para la consecución del bien común.

Como persona libre el ser humano es un sujeto ético y social, por lo tanto, responsable ante sí mismo y ante los demás. Tiene deberes y derechos propios de su naturaleza. La libertad no puede ser constreñida arbitrariamente por el Estado y no tiene otros límites jurídicos que los impuestos por el interés nacional, por las normas sociales y por el bien común. La libertad de cada persona ha de coexistir creativa y solidariamente con la libertad de los demás. Los medios deben estar adecuados al fin. Un fin éticamente valioso no justifica la utilización de medios éticamente inadmisibles.

Toda persona tiene derecho y obligación de ejercer responsablemente su libertad para crear, gestionar y aprovechar las condiciones políticas, sociales y económicas, con el fin de mejorar la convivencia humana. Construir un orden social justo es deber individual y colectivo.

La vida y la dignidad del ser humano deben protegerse y respetarse desde el momento de su concepción hasta su muerte natural.

Toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por razones de sexo, edad, capacidad física, etnia, religión, convicción, condición económica o cualquier otra, debe ser rechazada, corregida y en su caso sancionada.

Acción Nacional reconoce plenamente las consecuencias prácticas de la común dignidad de las mujeres y los hombres, y de su común carácter de sujetos y agentes responsables y colaboradores en la construcción, animación y dirección de la sociedad.

La equidad de género significa que mujeres y hombres deben desarrollarse plena, libre y responsablemente. La discriminación existente contra la mujer en la familia, el trabajo, la política y en las demás esferas sociales es inaceptable. Los hombres y mujeres deben reconocer mutuamente su valor propio, y responsabilizarse el uno del otro, compartiendo las tareas que les corresponden dentro y fuera de la familia, sobre la base de igualdad de derechos y de obligaciones.

Los derechos humanos alientan la vida de una auténtica democracia. Son expresión concreta de la dignidad humana. Sin respeto cabal a los derechos humanos, no hay democracia. De su pleno reconocimiento y protección jurídica depende la existencia de un Estado democrático de derecho.

2. Política y Responsabilidad Social

Corresponde a la actividad política el establecimiento de un orden dinámico que respete la libertad y promueva la responsabilidad social como bases para el desarrollo de una comunidad democrática, sustentable y solidaria.

En el Estado de responsabilidad social, los individuos tienen una relación específica con la comunidad que se expresa en leyes aprobadas por autoridad legítima, para ordenar la convivencia social, preservar el bien común y dar efectiva protección a los derechos humanos.

Nos indigna la herida innecesaria de opresión y miseria que unos seres humanos infligen a otros. La respuesta debida ante el dolor evitable es la responsabilidad social. Exige superar el individualismo y cooperar en la construcción democrática del bien común. La responsabilidad social no se agota en el ejercicio del derecho ciudadano al sufragio; se perfecciona permanentemente con la participación ciudadana en el cumplimiento de los deberes cívicos, políticos y sociales que tiene la persona en comunidad.

La democracia, como sistema de vida y de gobierno, se funda en la igualdad de todos los seres humanos, condición esencial para responsabilizar a las personas del cuidado y procuración del bien común. Es la forma superior de organización del poder político y el sistema óptimo para respetar la dignidad humana. La democracia y la responsabilidad social deben fomentar el pluralismo, que es la convivencia de distintas maneras de pensar y actuar en diversos centros de decisión, poder e iniciativa.

Dentro de la pluralidad, los partidos políticos son un cauce para la responsabilidad ciudadana. Los partidos políticos deben impulsar ideas y acciones para plantear serenamente las soluciones a los problemas del país y llamar a la concordia entre los mexicanos. Los partidos compiten por el voto de los ciudadanos; pero también, la responsabilidad social los obliga a cooperar en la construcción común de los bienes públicos. Una auténtica vida democrática tiene como condición la existencia de partidos que permitan el acceso equitativo de hombres y mujeres al poder político, para instaurar gobiernos eficaces y oposiciones constructivas y socialmente útiles.

El buen funcionamiento de la democracia requiere de instituciones y ciudadanos conscientes de sus obligaciones y de una sociedad organizada. Entre nuestras instituciones políticas deben privar el diálogo y la colaboración, a fin de que la responsabilidad social encuentre realidad y eficacia. Los ciudadanos deben tener acceso al conocimiento cívico, político y económico necesario para el uso apropiado de los instrumentos y las instituciones que la democracia pone a su alcance. Debemos fortalecer la iniciativa ciudadana, estimular el interés por los asuntos públicos, y entusiasmar a la participación libre y ordenada en organismos intermedios. Requerimos que los ciudadanos y sus representantes asuman un compromiso permanente con la conservación, la profundización y la ampliación de las actitudes, los valores y las destrezas políticas propias de la democracia.

3. Familia

La familia es el cauce principal de la solidaridad entre generaciones. Es el espacio primario de la responsabilidad social, que debe ofrecer la más leal red de seguridad y de afecto ante contingencias y amenazas. Compete a la familia comunicar y desarrollar los valores morales e intelectuales necesarios para la formación y perfeccionamiento de la persona y de la sociedad.

La familia tiene preeminencia natural sobre las demás formas sociales, incluso el Estado. Es función esencial de este último hacer posible y facilitar el cumplimiento de la misión propia de las familias que forman la comunidad política, que no puede realizarse plenamente sino dentro de un orden social, económico y político. Por su parte, la familia debe cooperar con el Estado y las organizaciones intermedias al establecimiento del orden en la sociedad, y cumplir la tarea fundamental de orientar y

educar social
y políticamente a sus miembros.

La transformación del mundo ha influido en la integración de la familia y en sus tareas. Para fortalecerla se requiere adaptar el marco institucional con el objeto de que la proteja, y promover en el hogar los lazos esenciales de la solidaridad humana. Erradicar la violencia familiar es imperativo del Estado y la sociedad. Debemos redistribuir equitativa y solidariamente entre hombres y mujeres la responsabilidad familiar.

Una política social justa no debe pretender la substitución de la familia por el Estado. En sus relaciones con la familia, como en todos los campos de su actividad, el Estado está obligado a respetar la preeminencia de la familia y el principio de subsidiariedad, así como garantizar, en las leyes y en la práctica, la libertad de conciencia de los miembros de la familia y el derecho preferente de los padres para determinar el tipo de educación que deben recibir sus hijos. Por su lado, la familia está obligada a participar en la construcción de un orden social justo.

4. Cultura y Educación

La cultura da raíz y sentido a la vida personal y social, sus distintas expresiones son bien común de la Nación. Es creación humana por excelencia, expresión de valores y de acción. La cultura se construye desde el hogar, las familias y las comunidades mayores. Es relación consigo mismo, con los demás, con la naturaleza, con el conocimiento y con la trascendencia. Por ello, la cultura mexicana, expresa la grandeza y la pluralidad de la Nación.

La cultura debe ser el rostro del bien común. Tiene como vocación la posibilidad del desarrollo permanente y constante de todos los seres humanos. La cultura es pensamiento y acción. Es algo más que arte, ciencia o buenas costumbres; es entraña y sueños, reciprocidad de talentos personales puestos en común, con trascendencia en el tiempo y el espacio. En la cultura de cada persona está la de los demás.

El Estado ha de asegurar a todos por igual, hombres y mujeres, el acceso a los valores culturales, y debe promover la libertad en la creación y expresión de la cultura. Los medios de comunicación, como creadores de cultura, actúan junto a la sociedad, no en su lugar. El Estado acompaña y regula esta función, garantizando el respeto permanente a la libertad de expresión y al bien común.

El fin del proceso educativo es la formación integral de cada persona, para desplegar de la manera más amplia posible sus valores, capacidades, talentos, aptitudes y habilidades. Las políticas públicas en esta materia tienen la más alta prioridad, porque la educación es el medio más eficaz para el constante desarrollo y perfeccionamiento de las personas y de las naciones. La relación entre maestro y alumno es parte esencial del proceso educativo, por ello la sociedad y el Estado deben revalorar la dignidad de la labor magisterial.

Es responsabilidad del Estado, compartida con la sociedad, proveer a la población de servicios educativos de alta calidad, para lograr ciudadanos plenos. Que nadie quede fuera y que nadie sea excluido o segregado del disfrute de los bienes. No es aceptable una sociedad que ofende y descarta a sus débiles. Ante una organización excluyente de la sociedad, debe prevalecer un sistema de integración.
Frente a un proceso de globalización debemos colocar un sistema que libere y humanice al mundo y sus regiones. Ante la emergencia de nuevos actores y rutas sociales, debemos establecer un sistema que habilite sus potenciales.

La educación integral infunde afecto y proximidad, forma en valores como la libertad, la paz, la vida en sociedad, la responsabilidad, la equidad de género, el respeto al medio ambiente, la solidaridad, la igualdad; expresiones humanas necesarias para construir una sociedad ordenada y generosa.

5. Nación y Mundialización

La Nación es comunidad de comunidades, unidas por diversos vínculos, con origen y destino común. Se reconoce como la suma de sus partes y se enriquece con el aporte socialmente responsable de las mujeres y los hombres que la componen. Brinda comunión de pasado, de presente y de destino.

La Nación mexicana es una realidad viva, abierta, multicultural y pluriétnica. Es cuna y espacio para el florecimiento de un vínculo específico que brinda elementos de unidad para quienes al identificarse con ella, superan toda división temporal, geográfica o de origen étnico.

La Nación mexicana amplía su existencia más allá de las fronteras del Estado y, por ello, abraza a los millones de mexicanos que por diversas razones, algunos en circunstancias de dolor, viven en otro país. La decisión de migrar es un derecho fundamental de la persona. La conciencia de pertenecer a la Nación por parte de los mexicanos en el exterior debe ser admitida por el Estado, en todas sus dimensiones jurídicas. Que no exista en el extranjero un mexicano sin Nación, sin respeto a su dignidad y a sus derechos humanos.

México es parte de la comunidad mundial, en cuyo seno está llamado a desarrollarse con libertad, responsabilidad, justicia, solidaridad, subsidiariedad y en paz.

El mundo está inmerso en una permanente dinámica de globalización. Al lado de las oportunidades que genera este proceso, coexisten aspectos destructivos, entre los que destacan el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y las prácticas desleales de comercio. El reto para nuestra Nación es trascender el simplismo del aislamiento o la sumisión, proponiendo alternativas humanistas a esta realidad. La globalización responsable es mundialización.

Para la globalización no hay personas ni comunidades con historia, cultura, necesidades y proyectos, sino entes económicos dentro de un mercado global. La mundialización, en cambio, es protagonizada por personas, comunidades y naciones que se relacionan entre ellas con libertad y dignidad, las cuales, al lado de la estructura tecnológica y económica mundial, construyen leyes e instituciones responsables y solidarias, que brindan un marco de acción conocido, construido y aceptado por todos, con pleno respeto a la cultura, tradición, valores y creencias de cada pueblo.

La mundialización es acompañar la formación de un mercado global, con la expansión del Estado de Derecho para arribar a un Mundo de Derecho. La mundialización es globalizar valores fundamentales del hombre, como los derechos humanos y la responsabilidad solidaria. Es necesario promover estrategias de renegociación y alivio de la carga financiera de nuestros pueblos, sin que su ejecución implique un agravamiento en la condición económica de las naciones que la sufren. Es tarea del humanismo el colaborar en la construcción de un nuevo orden financiero internacional basado en la justicia y en la ética, en el reconocimiento de la interdependencia entre países, en la prioridad del desarrollo humano sustentable, en especial de las economías más pobres, y en el respeto a la soberanía de las naciones.

La mundialización supone la convivencia pacífica, ordenada y justa de las naciones y los estados. Obliga a todos los actores del mundo a conducirse de acuerdo con el derecho internacional para asegurar la paz y la seguridad.

El diálogo y la apertura de toda cultura que participa en la mundialización, no deben avasallar nuestro valioso aporte a la civilización, formado por la suma de nuestras identidades indígenas y regionales.

La nación mexicana debe fortalecer sus vínculos culturales privilegiados con Iberoamérica, para construir un espacio de solidaridad que contribuya al mayor desarrollo de nuestras naciones, dando prioridad a la integración de América Latina. Al mismo tiempo, la vecindad geográfica, la magnitud de la población mexicana en los Estados Unidos de América, y la fuerza de nuestros intercambios culturales y económicos, nos empujan a cimentar y promover activamente una relación especial, basada en el mutuo respeto, en la cooperación y en la responsabilidad compartida en la solución de los problemas comunes.

6. Desarrollo Humano Sustentable

El desarrollo humano sustentable es el proceso de aumento de las capacidades y la libertad de todas las personas para vivir dignamente sin comprometer el potencial de las generaciones futuras. Es el paso, para cada hombre y para todos los hombres, de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas.

Para el desarrollo humano sustentable, los seres humanos no son meros beneficiarios de programas asistenciales, sino verdaderos agentes de cambio en el proceso. No basta proporcionar bienes y servicios materiales a grupos de población que padecen privaciones, sino que deben ampliarse las capacidades humanas. El desarrollo humano se centra en ampliar las opciones humanas.

El desarrollo debe ser sustentable, lo que implica que los intereses de las generaciones futuras reciban la misma atención que los de la presente. El deber de proteger a las generaciones futuras no puede pasar por alto las apremiantes necesidades de la población pobre de hoy. La búsqueda de un desarrollo sustentable debe tener dentro de sus más altas prioridades la eliminación de la pobreza de la generación actual.

Es éticamente obligatoria la protección del medio ambiente, para garantizar que las generaciones futuras tengan la misma oportunidad de disfrutar de una vida plena tanto como la deben tener las generaciones que les precedan. El aspecto ambiental del desarrollo sustentable presupone reconocer que el crecimiento económico debe darse dentro de los límites naturales de regeneración de los ecosistemas, evitando la sobreexplotación de los recursos naturales y la degradación y contaminación de aire, agua y suelo. Sin una base de capital natural no se puede generar un crecimiento económico de largo plazo, ni tampoco mejorar la calidad de la vida humana.

7. Humanismo Económico

El humanismo económico impulsa una economía eficiente y moderna, equitativa en la distribución de oportunidades, responsabilidades y beneficios; una economía social de mercado, sustentada en el trabajo libre, respetuoso de la dignidad humana y del medio ambiente, que tenga su raíz en la libertad y en la iniciativa de las personas; una economía que busca construir un México más próspero, más libre y más humano.

El acceso de las personas a la propiedad y a la formación de un patrimonio es la base material de su desarrollo integral y la garantía de su dignidad. Ello tiene que apoyarse en un marco institucional que garantice el derecho a la propiedad y que dé certeza jurídica a la persona en su participación en las actividades económicas.

El mercado es condición necesaria para el desarrollo económico; pero no es suficiente para garantizar el sentido humano de la economía. En consecuencia, se requiere la acción rectora y rectificadora del Estado para atenuar las profundas desigualdades sociales de nuestro país. El mercado debe liberar las potencialidades económicas de la sociedad, y el Estado debe vigilar su ordenado desenvolvimiento, para garantizar que concurra al interés nacional, se subordine al bien común y busque la justicia en las relaciones económicas.

El mercado no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para asignar satisfactores a las necesidades de los seres humanos. Por eso el humanismo económico asume la responsabilidad social y busca abatir la pobreza extrema, atiende prioritariamente a los pobres del campo y la ciudad, da prioridad a zonas indígenas y rurales e impulsa el desarrollo de las potencialidades del campo mexicano.

El Estado debe regular los mercados para que los agentes económicos concurran a ellos y compitan en condiciones de equidad, y para evitar que el más fuerte imponga condiciones que terminen por destruir la competencia misma.

La economía social de mercado supone una política fiscal responsable, con finanzas públicas sanas que permitan el crecimiento sólido y estable de la actividad económica, y equilibren el beneficio de las generaciones actuales y futuras. El Estado debe regular y supervisar los mercados financieros para fortalecer las potencialidades reales del sector productivo, y para inhibir el comportamiento nocivo de quienes en ellos participan. Una economía social de mercado busca consolidar el ahorro de la Nación, para facilitar la inversión productiva y para que las personas formen el patrimonio de la familia.

Una política económica humanista subordina sus decisiones a la ética y parte del hombre, su dignidad y sus derechos. En consecuencia, afirma la prioridad del trabajo sobre el capital y busca el acceso del mayor número posible de personas a la propiedad de los medios de producción. La economía humana impulsa el espíritu emprendedor y promueve la participación responsable de quienes en la empresa aportan su trabajo, talento administrativo o su capital a la generación de bienes, e impulsa la participación justa en los frutos de la productividad.

Las políticas públicas que nacen del humanismo económico buscan promover el desarrollo integral, equilibran la participación de las regiones del país y armonizan responsablemente los objetivos distributivos con las exigencias del crecimiento; reconocen que el desarrollo es promovido por el mayor grado de inversión posible, no sólo en infraestructura y bienes de capital sino, y sobre todo, en las

capacidades de las personas, esto es, la inversión en valor humano. Para ello es fundamental la inversión de recursos públicos y privados en la formación y desarrollo integral de las personas y específicamente en los rubros de educación, salud, vivienda, seguridad y calidad de vida. Debe promoverse la inversión en la formación y el fortalecimiento de las capacidades humanas que permitan a las personas colaborar, proponer, deliberar y participar en las decisiones de su trabajo.

Por otra parte, el crecimiento sostenido de la economía no puede depender de la mera venta de materias primas o de procesos productivos de mano de obra barata, sino de la capacidad productiva de la persona, de su plena realización económica y del desarrollo tecnológico.

La ampliación del comercio y la inversión permite que los recursos se asignen a las regiones y sectores donde se producen bienes y servicios de manera más eficiente a nivel mundial. Esto beneficia la capacidad empresarial, genera empleos en sectores competitivos y se traduce en el disfrute de satisfactores a un costo menor y de mejor calidad para los consumidores. Pero por otra parte, se generan también sectores productivos perjudicados y pérdida de empleos en aquellas áreas y regiones que no tienen condiciones para competir en un entorno global.

El humanismo económico demanda un Estado rector que distribuya los beneficios del comercio. Esta distribución no debe entenderse como un reparto asistencialista de recursos, sino que debe basarse en el diseño de políticas públicas que reorienten la actividad productiva en los sectores afectados. En una economía social de mercado el Estado debe ser vigilante atento de que los excesos de los mercados mundiales no conviertan en prescindibles a las personas. Ante la globalización, los Estados deben fortalecer su capacidad para cumplir esta misión. La rectoría y articulación de las actividades económicas y sociales no deben delegarse a las grandes empresas.

8. Trabajo

El trabajo es el espacio natural de la responsabilidad social. Es medio fundamental para la realización del ser humano y la satisfacción de sus necesidades. Tiene como eje a la persona humana. No es una mercancía y tiene primacía sobre el capital.

El trabajo humano está fundado en la interacción de las personas que se vinculan para cooperar y realizar una acción creadora y transformadora. Toda persona apta para el trabajo debe tener oportunidad constante de realizarlo sin discriminación alguna. El acceso a las oportunidades laborales y al disfrute de su compensación debe ser igual para la mujer y para el hombre. El trabajo del hogar debe ser socialmente reconocido y en lo posible valorado para su incorporación en las cuentas nacionales. Las responsabilidades familiares, sociales y económicas se deben atender con equidad por los hombres y las mujeres.

Todo trabajo socialmente útil debe tener la retribución que permita al trabajador vivir y mantener decorosamente a una familia con posibilidades reales de mejoramiento. El trabajo ha de proporcionar bienestar compartido, realización profesional y oportunidad de desarrollo personal y familiar. Los salarios deben decidirse con criterios de justicia y equidad, no solamente con base en el mercado.

La responsabilidad del Estado en materia laboral es integral. El Estado debe: asegurar que el sistema educativo prepare a todas las personas, particularmente a los jóvenes, para su realización en la vida laboral; forjar condiciones económicas y sociales propicias para la generación suficiente de empleo estable; determinar un marco institucional y legal que ampare las prestaciones que hombres y mujeres requieren para desempeñarse con dignidad; fomentar la vinculación de los ámbitos educativo y productivo para la capacitación continua de los trabajadores; desarrollar un régimen de protección social para el desempleo; organizar el financiamiento público y privado de pensiones dignas y suficientes de las personas que han terminado su etapa laboral. En síntesis, la función del Estado es detonar en la sociedad los valores de una solidaridad activa.

El trabajo humano debe organizarse en condiciones dignas que permitan una participación progresiva
de los trabajadores en las decisiones, beneficios y capital de las empresas. La entera libertad en la organización de los trabajadores en asociaciones y sindicatos es elemento fundamental para la humanización de la vida laboral.

El Estado y la sociedad, deben encontrar respuestas solidarias y responsables a los retos que plantea el trabajo informal. Debe proscribirse toda forma de trabajo infantil, porque niega el acceso de los niños a la educación, al esparcimiento y a la cultura, condenándolos a la miseria.

9. Medio Ambiente

El medio ambiente es el conjunto de condiciones físicas y procesos biológicos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. Un medio ambiente sano es una aspiración de la humanidad, ya que es fundamental en el desarrollo integral y en la calidad de vida de las personas de las generaciones presentes
y futuras.

Una política de desarrollo sustentable debe lograr que los costos sociales y ambientales de los bienes
y servicios se vean reflejados en términos económicos, con el fin de promover patrones de producción y consumo sanos. Asimismo, es importante promover la inversión y el uso de tecnologías limpias, que eviten
y minimicen el impacto ambiental causado por el crecimiento económico. Se requiere de un uso más amplio de instrumentos económicos, legales, informativos y educativos, así como incentivos claros que entre productores, inversionistas, consumidores y la sociedad en general, aliente la utilización de esos patrones
y tecnologías.

La convivencia entre los seres humanos y la naturaleza debe ser tal que permita la satisfacción de las necesidades de los hombres, sin comprometer la capacidad de regeneración de la naturaleza, y por tanto, la existencia de las generaciones futuras. Es necesario que las instituciones públicas y privadas incluyan el tema ambiental en sus actividades y que haya un cambio de hábitos y valores sociales, para lograr la efectiva protección del medio ambiente.

El buen aprovechamiento de los recursos naturales no depende sólo de cuestiones técnicas y económicas, sino que está vinculado a los sistemas políticos y a sus instituciones. La inequidad en la distribución del ingreso, la ineficiencia gubernamental, la corrupción y el autoritarismo, agreden al medio ambiente. Un sistema político responsable y ordenado previene y mitiga los impactos nocivos al ambiente. Es fundamental la participación corresponsable de la sociedad, no sólo como conjunto de consumidores, sino de personas que ejercitan sus derechos y asumen sus responsabilidades cívicas y políticas.

La sociedad y todos los órdenes de gobierno deben actuar coordinada y permanentemente para evitar la degradación del medio ambiente, renovar la conciencia ciudadana, desalentar procesos productivos contaminantes y sancionar las prácticas dañinas al ambiente.

Es indispensable la acción solidaria y subsidiaria entre las naciones para frenar el deterioro ambiental y reorientar la actividad humana hacia la el desarrollo sustentable mundial.

10. Ciencia e Innovación Tecnológica

La libertad de investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico, son indispensables para procurar el bien común de la sociedad y para fortalecer a la Nación.

El ser humano, como parte de su naturaleza creativa, genera conocimientos y desarrolla tecnologías que sirven a su bienestar. La ciencia y la tecnología son instrumentos al servicio de la vida de las personas y de su comunidad.

No todo lo que es científicamente posible es socialmente responsable. La libertad de investigación tiene frontera en la dignidad de la persona humana. La manipulación técnica de la naturaleza no está exenta de riesgos. La protección y el cuidado de la naturaleza es responsabilidad del investigador, de manera directa, y de la sociedad, de manera solidaria.

El desarrollo del conocimiento, la innovación y el progreso tecnológico, debe ser certeramente responsable cuando el sujeto de investigación es el hombre mismo.

El reto de la ciencia es cómo dominar su propio dominio. Es necesario estudiar a fondo, analizar, los avances en todos los ámbitos de la actividad humana, incluyendo la científica y tecnológica, para

evaluar sus implicaciones éticas. El certero desarrollo de la investigación es de vital importancia para proteger y mejorar la vida de las personas.

El conocimiento científico es patrimonio de la humanidad. La ciencia y la tecnología no deben convertirse en simples mercaderías, en instrumentos de dominio o en fuentes de segregación.

11. Humanismo Bioético

Acción Nacional afirma el valor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural y el derecho de cada persona a que su vida sea respetada de manera total.

Cada mujer y cada hombre es un ser indivisible corporal y espiritualmente; un ser único, singular, irrepetible, con identidad propia y una dignidad intrínseca.

El derecho a la vida es inviolable. Por ser fundamento de todos los demás derechos, debe ser respetado, garantizado y protegido por el Estado, de acuerdo con las normas, principios y valores del derecho. Nadie es dueño de la vida, ni de la muerte.

El embrión humano es persona. Tiene dignidad y derecho a la vida, a la identidad, a la protección por el Estado y la sociedad. No puede ser objeto de manipulación ni de las agresiones que conducen a su destrucción y eliminación. Toda vez que el ser humano es en sí mismo un fin y no un medio, la clonación de seres humanos por cualquier razón debe ser prohibida. En la procreación puede ayudarse a la naturaleza, respetando la vida y la dignidad de las personas.

Todo tratamiento, investigación y manejo realizado sobre seres humanos y su patrimonio genético debe ser certeramente responsable para respetar la dignidad humana. El genoma humano es patrimonio de la humanidad. Todo ser humano tiene derecho a conocer su filiación genética y a que tal filiación sea protegida por las leyes que tutelan la privacidad y la intimidad. No se puede discriminar a una persona a causa de su patrimonio genético.

La lucha contra el dolor debe ser entendida como un esfuerzo común, público y privado, incluyendo los cuidados paliativos, dando asistencia total, material y espiritual, en cualquier fase de la vida en la que se encuentren los enfermos. Pudiendo ser admisible la recomposición genética con fines terapéuticos, bajo los mismos principios éticos usados en el manejo de otras terapias, es inaceptable cuando se utiliza por razones eugenésicas ni por razones arbitrarias.

12. Campo y Ciudad

El campo y la ciudad son espacios diferentes pero complementarios de nuestra diversidad nacional. Encarnan distintas maneras de convivencia social, de expresión cultural y de actividad económica. En ambos, el centro de acción son los hombres y mujeres que buscan su realización personal y comunitaria.

Las comunidades del campo, en especial las que se encuentran en extrema pobreza, deben ser el centro de una política integral capaz de generar una nueva sociedad rural, fundada en la solidaridad de sus miembros y en la promoción de la dignidad de las personas, es decir, en la humanización integral del campo y sus habitantes.

Es preciso que el gobierno y la iniciativa de los particulares promuevan una organización competitiva de la producción agroalimentaria, agropecuaria y forestal, para enfrentar con éxito la creciente integración económica de las naciones. Esta política integral debe incluir un sistema de financiamiento social acorde con las necesidades y circunstancias del campo, la creación de infraestructura, la gestión de nuevas tecnologías, el fortalecimiento de las cadenas productivas, la comercialización, el aprovechamiento de los productos y ventajas comparativas de cada región y la plena seguridad jurídica de la propiedad de la tierra.

El campo es también fuente y expresión de nuestra diversidad sociocultural. El Estado debe asegurar a todos sus habitantes las condiciones mínimas para su adecuado desarrollo humano, en especial en el acceso a la educación, a las condiciones de salud y de vivienda propias de una vida digna y a la posibilidad de expresar su cultura.

La transformación social y económica del campo debe fundarse en el destino universal de los bienes, que exige respetar al medio ambiente y garantizar un sustento digno y suficiente de las comunidades del campo y la ciudad del presente y de las generaciones venideras.

La ciudad también expresa nuestra pluralidad como nación. La ciudad ordenada, debe vincular solidariamente a las personas y proporcionarles seguridad, bienestar y oportunidades para acceder al conocimiento, la ocupación y la cultura. En el medio urbano se acumulan valores materiales y espirituales que ligan a las generaciones pasadas y presentes con las futuras; por tanto, identidad y tradiciones, patrimonio cultural y artístico, formas singulares de pensar y de actuar, penetran y definen el modo de ser de quienes han nacido y viven en la ciudad, lo cual fortalece la identidad y el carácter nacionales.

La ciudad y sus modos de convivencia se transforman a consecuencia de movimientos sociales, fenómenos migratorios, procesos económicos y tecnológicos, identidades culturales o alteraciones del medio ambiente. Por ello, es indispensable vigilar que la dinámica urbana genere condiciones propicias para una vida digna, justa y libre.

Como expresión económica, la ciudad debe ser fuente de trabajo para sus habitantes, debe también ser garantía de un adecuado crecimiento industrial, tecnológico y comercial, capaz de satisfacer las necesidades de sus habitantes y de armonizar el desarrollo comunitario con el respeto y aprecio a los recursos naturales de la comunidad.

La variada extensión que adquiere el espacio urbano implica que la ciudad tenga autoridades organizadas de manera subsidiaria, para asegurar que los distintos órdenes de gobierno participen de manera coordinada en la salvaguarda del equilibrio entre población, urbanización, producción y medio ambiente. En la gestión de bienes y servicios urbanos concurren las autoridades, la iniciativa privada y los habitantes de la ciudad, quienes son corresponsables de la construcción eficiente, el mejoramiento continuo y la operación eficaz y a un precio justo de las redes de infraestructura y los servicios públicos, que son manifestación concreta del bien común en el medio urbano.

El desarrollo responsable y solidario exige acciones públicas y privadas que restablezcan y preserven un adecuado equilibrio entre el campo y la ciudad.

13. Municipio y Sistema Federal

El municipio, formado por el conjunto de familias que habitan una comunidad, es eje de la estructura política nacional y espacio privilegiado para el desarrollo del país.

El respeto a la autonomía municipal es el fundamento de un orden subsidiario, solidario y responsable que el gobierno federal y los gobiernos estatales deben garantizar. Los municipios deben tener la capacidad para determinar libre y responsablemente las características propias de su gobierno de acuerdo con sus necesidades particulares, para establecer las normas básicas de la convivencia social y, en especial, para garantizar el pleno desarrollo y respeto por las comunidades y los pueblos indígenas.

Las atribuciones de los diferentes ámbitos de gobierno han de estar presididas por el principio de la proximidad, cuya esencia exige que todas aquellas funciones que inciden directamente en la vida diaria de las personas sean atribuidas al órgano de gobierno más cercano al ciudadano. El sistema federal deberá asegurar no sólo estas facultades y los recursos suficientes para el municipio, sino también la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

La prestación de los servicios públicos debe atender a las necesidades fundamentales de los hombres y las mujeres que conforman el municipio, asegurando los niveles mínimos y suficientes para una vida digna. La seguridad, la educación, la salud y el desarrollo humano han de ser los objetivos centrales del gobierno municipal.

Ante la creciente integración de las naciones, los gobiernos municipales han de fungir como promotores de los valores y de la diversidad cultural nacionales. En una economía mundializada, el municipio ha de contar con los servicios de educación profesional y técnica y con la infraestructura necesaria para potenciar sus recursos y servicios en beneficio de las familias y las personas que lo integran.

La solidaridad exige el compromiso permanente de la persona para actuar a favor del bien común de su municipio. Toda política municipal debe fundarse en la participación de quienes integran la primera comunidad de la Nación.

El desarrollo integral y el crecimiento equilibrado de todas las regiones del país es la esencia del Estado federal. La equidad en el acceso a mejores condiciones de vida ha de ser el resultado de un federalismo subsidiario, solidario y responsable que sea capaz de incorporar a todos los mexicanos, independientemente de su ubicación geográfica, al progreso nacional.

Un federalismo subsidiario y solidario implica la generosa participación de todas las entidades y de la sociedad en su conjunto a favor de la educación, de la infraestructura y, en general, de las condiciones mínimas para el adecuado crecimiento económico de todas las regiones del país.

Un federalismo solidario y subsidiario exige la participación del gobierno federal para que todas las entidades, en especial aquellas con mayor rezago social, se encuentren en condiciones de igualdad para garantizar el pleno bienestar de las personas.

El Estado mexicano también ha de promover un federalismo responsable, donde la descentralización de funciones y de recursos confluya en el compromiso de los gobiernos municipales, estatales y federal para gestionar el bien común de la Nación desde cada ámbito de competencia.

Un federalismo responsable implica la transparencia y honestidad en la vida pública. Es deber de las autoridades manejar responsable, transparente y honradamente la hacienda pública. Es deber de los ciudadanos vigilar permanentemente la aplicación de los recursos. Las instituciones municipales, estatales y federales, deben reformarse para asegurar que la gestión pública trascienda sus periodos de elección, con el fin de dar continuidad y certidumbre a las acciones de gobierno y contribuir de manera eficaz al desarrollo armónico y equilibrado de la Nación.

ANEXO DOS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
DIRECCION EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLITICOS
DIRECCION DE PARTIDOS POLITICOS Y FINANCIAMIENTO
ANALISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES A LA PROYECCION DE PRINCIPIOS DE DOCTRINA 2002 DEL PARTIDO POLITICO NACIONAL "PARTIDO ACCION NACIONAL"

DOCUMENTO / COFIPE	PRINCIPIOS DE DOCTRINA	OBSERVACIONES
ARTICULO 25 1.- LA DECLARACION DE PRINCIPIOS INVARIABLEMENTE CONTENDRA, POR LO MENOS:		
a) LA OBLIGACION DE OBSERVAR LA CONSTITUCION Y DE RESPETAR LAS LEYES E INSTITUCIONES QUE DE ELLA EMANEN;	PROYECCION DE PRINCIPIOS DE DOCTRINA, INTRODUCCION, SEXTO PARRAFO, PAGINA 2.	SI CUMPLE
b) LOS PRINCIPIOS IDEOLOGICOS DE CARACTER POLITICO, ECONOMICO Y SOCIAL QUE POSTULE;	PROYECCION DE PRINCIPIOS DE DOCTRINA, NUMERALES: 1. PERSONA Y LIBERTAD, 2. POLITICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL, 3. FAMILIA, 4. CULTURA Y EDUCACION, 5. NACION Y MUNDIALIZACION, 6. DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE, 7. HUMANISMO ECONOMICO, 8. TRABAJO, 9. MEDIO AMBIENTE, 10. CIENCIA E INNOVACION TECNOLOGICA, 11. HUMANISMO BIOETICO, 12. CAMPO Y CIUDAD, 13. MUNICIPIO Y SISTEMA FEDERAL, PAGINAS 3 A 15.	SI CUMPLE
c) LA OBLIGACION DE NO ACEPTAR PACTO O ACUERDO QUE LO SUJETE O SUBORDINE A CUALQUIER ORGANIZACION INTERNACIONAL O LO HAGA DEPENDER DE ENTIDADES O PARTIDOS POLITICOS EXTRANJEROS; ASI COMO NO SOLICITAR O, EN SU CASO, RECHAZAR TODA CLASE DE APOYO ECONOMICO, POLITICO O PROPAGANDISTICO PROVENIENTE DE EXTRANJEROS O DE MINISTROS DE LOS CULTOS DE CUALQUIER RELIGION O SECTA, ASI COMO DE LAS ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES RELIGIOSAS E IGLESIAS Y DE CUALQUIERA DE LAS PERSONAS A LAS QUE ESTE CODIGO PROHIBE FINANCIAR A LOS PARTIDOS POLITICOS; Y	PROYECCION DE PRINCIPIOS DE DOCTRINA, INTRODUCCION, SEXTO PARRAFO, PAGINA 2.	SI CUMPLE
d) LA OBLIGACION DE CONDUCIR SUS ACTIVIDADES POR MEDIOS PACIFICOS Y POR LA VIA DEMOCRATICA.	PROYECCION DE PRINCIPIOS DE DOCTRINA, NUMERAL 2. POLITICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARRAFOS CUARTO Y QUINTO, PAGINA 4.	SI CUMPLE

AVISOS
JUDICIALES Y GENERALES

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz
con residencia en la Ciudad de Boca del Río, Veracruz
Perteneciente al Séptimo Circuito
EDICTO

En los autos del Juicio de Amparo número 837/2002-IV, promovido por José Enrique Cazarín Suárez y Agustín Silvestre Acosta Lagunes, demandan la protección de la Justicia Federal Contra Actos del Juez Mixto Municipal, con residencia en Alvarado, Veracruz y otras autoridades, se dictó en lo conducente el siguiente acuerdo: Boca del Río, Veracruz, a veintitrés de septiembre de dos mil dos.

Visto, (...) con apoyo en el artículo 30 fracción II última parte de la invocada Ley de Amparo, en relación con el número 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria procédase a emplazar a Rosalinda Serna Martínez y María Eugenia Trueba Fournier, haciéndose saber que a través del presente Juicio de Garantías número 837/2002-IV, José Enrique Cazarin Suárez y Agustín Silvestre Acosta Lagunes, demandan la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Municipal, con residencia en Alvarado, Veracruz y otras autoridades, y que hicieron consistir en: “Las diligencias de jurisdicción voluntarias de apeo y deslinde, radicadas en el referido Juzgado bajo el número 26/87, promovidas por las referidas terceras perjudicadas respecto del lindero norte del predio rústico “La Pichancha” que forma parte de la finca denominada Santa María Buena Vista, Punta Hato y Antón Lizardo, ubicado en el Municipio de Alvarado, Veracruz”. Hágase del conocimiento de las aludidas terceras perjudicadas, que dentro del término de treinta días, contados a partir del siguiente al de la última publicación de los edictos, deberán comparecer a este Juzgado a deducir sus derechos en el juicio.

Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Sebastián Martínez García, Juez Sexto de Distrito en el Estado, ante la licenciada Nancy Juárez Salas, Secretaria con quien actúa.- Doy fe. Firmas y rúbricas”.

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

Boca del Río, Ver., a 23 de septiembre de 2002.

El Juez Sexto de Distrito en el Estado

Lic. Jorge Sebastián Martínez García

Rúbrica.

La Secretaria

Lic. Nancy Juárez Salas

Rúbrica.

(R.- 168640)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Décimo de Distrito
Coatzacoalcos, Ver.

EDICTO

Gerardo Alfredo Fierro Silva, Miguel Angel Morales Cañaveral, Juan Pérez de la Cruz, Bertín González Treviño, y Salomón Moreno Alpizar.

Terceros perjudicados.

En los autos del juicio de amparo número 695/2001, promovido por el licenciado Sadoc Escobar Meza, en su carácter de apoderado legal de la empresa Pemex Exploración y Producción, el ciudadano Juez Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, ordenó emplazarlos por medio de edictos por desconocerse sus domicilios, los cuales se publicarán por tres veces de siete en siete días, en el **Diario Oficial de la Federación**, Excélsior y Diario del Istmo, así como en los estrados de este Tribunal, haciéndole saber que está a su disposición en la Secretaría de este Juzgado la copia simple de la demanda de amparo; que tiene la vía expedita para comparecer en este Tribunal a deducir sus derechos, si a sus intereses conviene.

Atentamente

Coatzacoalcos, Ver., a 17 de julio de 2002.

El Juez del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado

Lic. Luis Manuel Villa Gutiérrez

Rúbrica.

(R.- 168802)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial del Estado de Puebla
Tribunal Superior de Justicia
Estado Libre y Soberano de Puebla
Quinta Sala
EDICTO
Disposición Quinta Sala expedientillo de amparo 622/2002 emplácese representante legal de Alfonso Cabrera Hernández, dentro término treinta días a partir última publicación comparezca Tribunal Colegiado Materia Civil Sexto Circuito en turno hacer valer derechos juicio usucapión, promueve José Abundio Marciano Valencia Campos y otra contra Alfonso Cabrera Hernández y otras.
Para su publicación por tres veces de siete en siete días en el **Diario Oficial de la Federación.**
Puebla, Pue., a 4 de octubre de 2002.
Diligenciario
Lic. Hilda Morales López
Rúbrica.
(R.- 168986)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Octavo de Distrito "B" en el Estado de México
Naucalpan de Juárez

EDICTO

En el expediente 8/2002 relativo al procedimiento de concurso mercantil de Ingenieros y Contratistas, Sociedad Anónima de Capital Variable, el Juez Octavo de Distrito "B" en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el día dieciocho de septiembre de dos mil dos dictó sentencia definitiva en la que se declaró en concurso mercantil a dicho comerciante, retrotrayendo sus efectos al catorce de diciembre de dos mil uno; declaró abierta la etapa de conciliación y ordenó que durante ésta se suspenda todo mandamiento de embargo o ejecución contra bienes y derechos de la concursada, excepto los contenidos en el artículo 65 de la Ley de Concursos Mercantiles; tiene efectos de arraigo para los responsables de la administración de la concursada, quienes no podrán separarse de la jurisdicción de este Juzgado sin dejar apoderado instruido y expensado; ordenó al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles designe conciliador y a éste que inicie el procedimiento de reconocimiento de créditos, lo que se hace del conocimiento de los acreedores de la concursada para que aquellos que así lo deseen, le soliciten el reconocimiento de sus créditos. La publicación de este edicto surte efectos de notificación para quienes aún no hayan sido notificados en alguna forma diferente, ordenada en la propia sentencia.

Naucalpan de Juárez, Edo. de México, a 18 de septiembre de 2002.

El Juez Octavo de Distrito "B" en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez
Lic. Felipe Sifuentes Servín
Rúbrica.
(R.- 169102)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Decimotercero de Distrito
Secretaría de Amparo
Tijuana, B.C.

EDICTO

Juicio de amparo número 306/2002, promovido por Emilia Crosthwaite Breintembach y Adolfo Gómez Marenco, en contra de los actos reclamados al Juez Segundo de lo Civil de esta ciudad y otra autoridad, consistente dicho acto reclamado en: "Del C. Juez Segundo de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, se reclama todo lo actuado en el expediente número 1740/76, desde el ilegal emplazamiento llevado a cabo por el actuario adscrito, hasta la adjudicación de bienes de nuestra propiedad, dentro del juicio sumario hipotecario promovido por el tercero perjudicado Sr. (sic) Daniel Ramírez Cobián en contra de la suscrita, por el pago de la suma de $10,000.00 (diez mil dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de Noteamérica), juicio que se llevó sin haber sido oídos y vencidos por falta de ilegal emplazamiento, y del C. (sic) actuario adscrito reclamamos el ilegal emplazamiento que llevo a cabo por órdenes del juez responsable dentro del juicio hipotecario antes referido"; no se omite manifestar que el juicio referido anteriormente versa sobre los lotes de terrenos identificados bajo números 9, 10 y 11, de la manzana B del fraccionamiento García de esta ciudad; por auto de esta fecha se acordó emplazar al tercero perjudicado Daniel Ramírez Cobián, por edictos que deberán publicarse tres veces, de siete en siete días, en el **Diario Oficial de la Federación,** Excélsior de la ciudad de México, Distrito Federal y El Mexicano de esta ciudad, haciéndole saber que podrá presentarse dentro de treinta días contados al siguiente de la última publicación, apercibido que de no hacerlo, las posteriores notificaciones le surtirán por lista en los estrados de este Tribunal. Se señaló las diez horas con veinte minutos del día veinticuatro de septiembre del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio.

Tijuana, B.C., a 11 de septiembre de 2002.

El Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California

Lic. Marco Antonio Beltrán Moreno

Rúbrica.

(R.- 169190)

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado
Tuxpan de Rodríguez Cano, Ver.
EDICTO
C. Moisés Ovando Hernández y Micaela Cedillo (o Zedillo) de Ovando.
Terceros perjudicados.

En los autos del juicio de amparo número 925/2001, promovido por Silvia Ivette Ganem Letayf y otros, contra actos del Juez y Secretario del Juzgado Segundo de Primera Instancia y del Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos con residencia en Poza Rica, Veracruz, en el cual señalaron como acto reclamado todas y cada una de las actuaciones realizadas en el juicio ejecutivo mercantil número 1035/991, promovido por el licenciado Alfredo Morales Macías, en su carácter de endosatario en procuración del Banco Nacional de México, S.N.C., sucursal Poza Rica, Veracruz, en lo particular la adjudicación a favor del referido Banco del inmueble ubicado en avenida Ocho Norte, esquina Diez Oriente, con superficie de setenta y seis metros cuadrados, consistente en terreno y construcción, y en virtud de desconocerse su domicilio actual, se ha ordenado mediante proveído de esta misma fecha emplazarlos por edictos, que deberán publicarse por tres veces, de siete en siete días, en el **Diario Oficial de la Federación** y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 fracción II de la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, quedando a su disposición en la Secretaría de este Juzgado copia simple de la demanda de garantías, haciéndose saber que deberán presentarse ante este Juzgado dentro del término de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la última publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, en la inteligencia que de no presentarse, las subsecuentes notificaciones se efectuarán por medio de lista, conforme a lo dispuesto por los citados preceptos legales.

Atentamente
Tuxpan de Rodríguez Cano, Ver., a 8 de julio de 2002.
La Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado
Lic. Araceli Faisal Serrano
Rúbrica.
(R.- 169196)

BANCA CREMI, S.A.

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

AVISO A LOS TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS AMORTIZABLES EMITIDOS

DIVISION FIDUCIARIA, RESPECTO DE LOS DERECHOS AL COBRO DE LA CARRETERA TOLUCA-ATLACOMULCO

(OCALFA) 1995

En cumplimiento a lo establecido en la escritura de emisión correspondiente, hacemos de su conocimiento que la tasa de interés bruto que devengarán los certificados de participación ordinarios emitidos por Banca Cremi, S.A. (OCALFA) 1995, por el periodo comprendido del 30 de septiembre de 2002 al 29 de octubre de 2002, será de 15.88%, sobre su valor nominal ajustado, sujeto a la ley fiscal vigente.

México, D.F., a 25 de septiembre de 2002.

Representante Común de los Tenedores

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Representante Común

Ing. Fernando José Vizcaya Ramos

Rúbrica.

(R.- 169200)

CREDITO REAL, S.A. DE C.V.

AVISO A LOS TENEDORES DE PAGARES DE MEDIANO PLAZO CON GARANTIA FIDUCIARIA CREDITO REAL, S.A. DE C.V.

"CREAL P01"

Por medio de la presente les comunicamos a ustedes que la emisión de Pagarés de Mediano Plazo con Garantía Fiduciaria de Crédito Real, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito (CREAL) P01, devengarán una tasa de interés anual de 10.07% por el periodo comprendido del 9 de agosto de 2002 al 8 de febrero de 2003.

Asimismo, informamos a ustedes, que a partir del 9 de octubre de 2002, en las oficinas de la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, ubicadas en avenida Paseo de la Reforma número 255, piso 3, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, México, D.F., se pagarán los intereses parciales correspondientes al tercer semestre por un periodo de 30 días a razón de una tasa anual neta de 10.07%.

México, D.F., a 4 de octubre de 2002.

Representante Común de los Tenedores

Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa

Value Grupo Financiero

Lic. Claudia Yoli Tesorero

Rúbrica.

(R.- 169201)

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.

INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

AVISO A LOS TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS AMORTIZABLES, EMITIDOS EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA, RESPECTO DE LOS DERECHOS AL COBRO DE LA CARRETERA CHAMAPA-LA VENTA Y SU RAMAL INTERLOMAS

(LAVENTA 93U)

En cumplimiento a lo establecido en la escritura de emisión correspondiente, hacemos de su conocimiento que:

- La tasa de interés neto que devengarán los certificados indicados al rubro, por el periodo comprendido entre el 8 de octubre de 2002 y el 8 de enero de 2003, será de 12.000% y la tasa de interés bruto será de 14.400%, sobre el valor nominal ajustado de los mismos, sujeto a la Ley Fiscal vigente.
- El rendimiento mínimo que pagarán los citados certificados, por el periodo comprendido entre el 27 de agosto y el 8 de octubre de 2002, asciende a $19'535,445.83, que será liquidado en las oficinas de la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, ubicadas en avenida Paseo de la Reforma número 255, colonia Cuauhtémoc, 06500, México, D.F., el próximo 8 de octubre de 2002 contra entrega del cupón número 36.
- En la misma fecha y lugar se pagará la cantidad de $29,019,316.05 capital.
- El valor ajustado de los certificados de participación ordinarios amortizables (LAVENTA)93U, al 8 de octubre de 2002, por título, expresado de Udis, será de 64.416211.
- El valor ajustado de los certificados de Participación Ordinarios Amortizables (LAVENTURA)93U, al 8 de octubre de 2002, será de $204.523791.

México, D.F., a 3 de octubre de 2002.

Representante Común de los Tenedores

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Representante Común

Ing. Fernando José Vizcaya Ramos

Rúbrica.

(R.- 169202)

CHUBB DE MEXICO, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
(Cifras en Pesos Constantes)

100	Activo		
110	Inversiones		103,197,747.68
111	Valores y operaciones con porductos derivados	101,963,183.85	
112	Valores	101,963,183.85	
113	Gubernamentales	62,051,908.00	
114	Empresas privadas	31,414,242.61	
115	Tasa conocida	30,341,191.07	
116	Renta variable	1,073,051.54	
117	Valuación neta	8,447,411.63	
118	Deudores por intereses	49,621.61	
119	(-) Estimación para castigos	0.00	
120	Operaciones con productos derivados	0.00	
121	Préstamos	1,234,563.83	
122	Sobre pólizas	1,234,563.83	
123	Con garantía	0.00	
124	Quirografarios	0.00	
125	Descuentos y redescuentos	0.00	
126	Cartera vencida	0.00	
127	Deudores por intereses	0.00	
128	(-) Estimación para castigos	0.00	
129	Inmobiliarias	0.00	
130	Inmuebles	0.00	
131	Valuación neta	0.00	
132	(-) Depreciación	0.00	
133	Inversiones para obligaciones laborales al retiro		11,458,691.07
134	Disponibilidad		42,935,925.31
135	Caja y bancos	42,935,925.31	
136	Deudores		58,568,707.74
137	Por prima	55,634,175.49	
138	Agentes y ajustadores	432,312.10	
139	Documentos por cobrar	40,000.00	
140	Préstamos al personal	0.00	
141	Otros	2,462,220.16	
142	(-) Estimación para castigos	0.00	
143	Reaseguradoras y reafianzadores		11,846,491.03
144	Instituciones de seguros y fianzas	4,437,267.25	
145	Depósitos retenidos	0.00	
146	Participación de reaseguradores por siniestros pendientes	7,409,223.78	
147	Participación de reaseguradores por riesgos en curso	0.00	
148	Otras participaciones	0.00	
149	Intermedarios de reaseguro y reafianzamiento	0.00	
150	Participación de reafianzadoras en la reserva de fianzas en vigor	0.00	
151	Otros activos		1,946,870.55
152	Mobiliario y equipo	960,522.84	
153	Activos adjudicados	0.00	
154	Diversos	986,347.71	
155	Gastos amortizables	0.00	
156	(-) Amortización	0.00	
157	Productos derivados	0.00	
	Sumas del activo		229.954.433.39
200	Pasivo		
210	Reservas técnicas		84,131,255.26
211	De Riesgos en curso	9,345,167.02	
212	Vida	3,024,579.64	
213	Accidentes y enfermedades y daños	6,320,587.38	
214	Fianzas en vigor	0.00	
215	De Obligaciones contractuales	10,806,962.47	

216	Por Siniestros y vencimientos	7,992,412.46	
217	Por Siniestros ocurridos y no reportados	983,599.92	
218	Por Dividendos sobre pólizas	27,925.37	
219	Fondos de seguros en administración	1,394,053.87	
220	Por Primas en depósito	408,970.85	
221	De previsión	63,979,125.77	
222	Previsión	11,518,708.04	
223	Riesgos catastróficos	52,460,417.73	
224	Contingencia	0.00	
225	Especiales	0.00	
226	Reserva para obligaciones laborales al retiro		11,417,506.57
227	Acreedores		24,258,965.01
228	Agentes y ajustadores	7,115,792.79	
229	Fondos en administración de pérdidas	0.00	
230	Acreedores por responsabilidad de fianzas	0.00	
231	Diversos	17,143,172.22	
232	Reaseguradores y reafianzadores		42,911,710.86
233	Instituciones de seguros y fianzas	42,606,110.86	
234	Depósitos retenidos	0.00	
235	Otras participaciones	305,600.00	
236	Intermediarios de reaseguro y reafianzamiento	0.00	
237	Operaciones con productos derivados		0.00
238	Otros pasivos		11,138,242.80
239	Provisiones para la participación de utilidades al personal	149,290.99	
240	Provisiones para el pago de impuestos	1,664.78	
241	Otras obligaciones	10,247,570.61	
242	Créditos diferidos	739,716.44	
	Suma del pasivo		173,857,680.50
300	Capital		
310	Capital o fondo social pagado		261,133,482.60
311	Capital o fondo social	291,073,433.81	
312	(-) Capital o fondo no suscrito	29,939,951.21	
313	(-) Capital o fondo no exhibido	0.00	
314	(-) Acciones propias recompradas	0.00	
315	Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria a capital		0.00
316	Reservas		1,206,836.70
317	Legal	1,189,629.82	
318	Para adquisiciones de acciones propias	0.00	
319	Otras	17,206.88	
320	Superávit por valuación		1,123,945.67
321	Subsidiarias		0.00
322	Efecto de impuestos diferidos		0.00
323	Resultados de ejercicios anteriores		(146,887,334.62)
324	Resultado del ejercicio		4,657,052.93
325	Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable		(65,137,230.39)
	Suma del capital		56,096,752.89
	Suma del pasivo y capital		229,954,433.39
800	Orden		
810	Valores en depósito	0.00	
820	Fondos en administración	2,825,774.04	
830	Responsabilidades por fianzas en vigor	0.00	
840	Garantías de recuperación por fianzas expedidas	0.00	
850	Reclamaciones recibidas pendientes de comprobación	0.00	
860	Reclamaciones contigentes	0.00	
870	Reclamaciones pagadas	0.00	
880	Recuperación de reclamaciones pagadas	0.00	
890	Pérdida fiscal por amortizar	234,517,131.00	
900	Reserva por constituir para obligaciones laborales al retiro	0.00	
910.	Cuentas de registro	6,406,296.08	
920.	Operaciones con prodcutos derivados	0.00	

"El presente Balance se formuló con las reglas dictadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, encontrándose correctamente reflejadas, en su conjunto, las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha mencionada, las cuales se realizaron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las normas legales y administrativas aplicables y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al catálogo oficial en vigor, habiendo sido valorizados los saldos en moneda extranjera conforme a las disposiciones emitidas por dicha Comisión.

El capital pagado incluye la cantidad de $0.00 moneda nacional, originada por la capitalización parcial del superávit por valuación de inmuebles.

Dentro de los rubros de “inmuebles” y de “Mobiliario y Equipo”, la (s) cantidad(es) de $0.00 y $0.00, respectivamente, representa(n) activos adquiridos en arrendamiento financiero.

Las Reclamaciones Contigentes , o sea las Reclamaciones Pendientes de integración y Contigencias en litigio, se refieren a reclamos presentados a la intitución, cuya exigiblidad de pago se encuentra pendiente conforme a las disposiciones contenidas en la Circular F-10.1.4 vigente.

El Contador Javier Flores Durón y Pontones es el auditor responsable del Despacho PriceWaterhouseCoopers., para auditar los Estados Financieros y el Actuario José Luis Sosa Gutiérrez como auditor Actuarial responsable del Despacho Grupo Técnica, S.A. de C.V, para auditar las reservas técnicas.

Director General

Ing. Alvaro Salamanca Villegas

Rúbrica

Gerente de Contabilidad

C .P. Luis Omar Méndez Muñoz

Rúbrica

Comisario

C.P. Alfredo M. Bolio y Lope

Rúbrica

“Este balance fue revisado con base en la documentación y elementos aportados por la sociedad, en los términos del artículo 105 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. La autenticidad y veracidad de sus cifras queda bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben”.

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

Presidente

Lic. Manuel S. Aguilera Verduzco

Rúbrica.

(R.- 169265)

CHUBB DE MEXICO, COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
(cifras en pesos constantes)

100	Activo		
110	Inversiones		
		61,064,023.05	
111	Valores y operaciones con porductos derivados	58,740,261.10	
112	Valores	58,740,261.10	
113	Gubernamentales	27,530,569.04	
114	Empresas privadas	24,319,571.72	
115	Tasa conocida	24,308,571.72	
118	Renta variable	11,000.00	
119	Valuación neta	6,810,773.51	
118	Deudores por intereses	79,346.83	
119	(-) Estimación para castigos	0.00	
120	Operaciones con productos derivados	0.00	
121	Préstamos	0.00	
122	Con garantía	0.00	
123	Quirografarios	0.00	
124	Descuentos y redescuentos	0.00	
125	Cartera vencida	0.00	
126	Deudores por intereses	0.00	
127	(-) Estimación para castigos	0.00	
128	Inmobiliarias	2,323,761.95	
129	Inmuebles	846,410.56	
130	Valuación neta	1,914,594.10	
131	(-) Depreciación	437,242.70	
132	Inversiones para obligaciones laborales al retiro		
		13,362,538.53	
133	Disponibilidad		
		30,456,061.21	
134	Caja y bancos	30,456,061.21	
135	Deudores		
		8,830,977.07	
136	Por prima	7,984,629.67	
137	Agentes y ajustadores	276,915.58	
138	Documentos por cobrar	0.00	
139	Deudores por responsabilidad de Fzs. por reclamaciones pagadas		0.00
140	Prestamos al personal	0.00	
141	Otros	569,431.82	
145	Estimación para castigos	0.00	
143	Reafianzadores		
		2,791,444.27	
144	Instituciones de seguros y fianzas	3,972.56	
145	Pimas Retenidas por reafianzamiento tomado	0.00	
146	Otras participaciones	419,556.00	
147	Intermedarios de reaseguro y reafianzamiento	0.00	
148	Participación de reafianzadoras en la reserva de fianzas en vigor	2,367,915.71	
149	Otros activos		
		2,803,621.86	
150	Mobiliario y equipo	63,523.56	
151	Activos adjudicados	16,400.00	
152	Diversos	2,620,444.92	
153	Gastos amortizables	251,663.26	
154	(-) Amortización	148,409.88	
155	Productos derivados	0.00	
	Sumas del activo		
		119.308.665.99	
200	Pasivo		

210	Reservas técnicas		
	17,361,309.26		
243	De Fianzas en vigor	5,087,717.08	
244	Contiingencia	12,273,592.18	
245	Especiales	0.00	
246	Reserva para obligaciones laborales al retiro	13,311,438.93	
247	Acreedores		
	5,819,101.92		
248	Agentes	1,129,615.00	
249	Acreedores por responsabilidad de fianzas	0.00	
250	Diversos	4,689,486.92	
251	Reafianzadores		
	19,889,842.34		
252	Instituciones de fianzas	15,897,510.03	
253	Depósitos retenidos	3,992,332.31	
254	Otras participaciones	0.00	
255	Intermediarios de reafianzamiento	0.00	
256	Operaciones con productos derivados		0.00
257	Otros Pasivos		
	1,710,212.45		
258	Provisiones para la participación de utilidades al personal	62,779.70	
259	Provisiones para el pago de impuestos	57,166.95	
260	Otras obligaciones	1,450,241.83	
261	Créditos diferidos	140,023.97	
	Suma del pasivo		
	58,091,904.90		
300	Capital		
312	Capital o fondo social pagado		
	280,487,593.44		
313	Capital o fondo social	280,487,593.44	
312	(-) Capital o fondo no suscrito	0.00	
313	(-) Capital o fondo no exhibido	0.00	
314	(-) Acciones propias recompradas	0.00	
326	Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria a capital		0.00
327	Reservas		
	15,414,343.38		
328	Legal	15,414,343.38	
329	Para adquisiciones de acciones propias	0.00	
330	Otras	0.00	
331	Superávit por valuación		45,767.70
332	Subsidiarias		0.00
333	Efecto de impuestos diferidos		0.00
334	Resultados de ejercicios anteriores		
	(166,295,884.52)		
335	Resultado del ejercicio		
	2,933,662.66		
336	Exceso o insuficiencia en la actualización del capital contable		
	(71,368,721.57)		
	Suma del capital		
	61,216,761.09		
	Suma del pasivo y capital		
	119,308,665.99		
800	Orden		
811	Valores en depósito	13,083,156.55	
821	Fondos en administración	0.00	
831	Responsabilidades por fianzas en vigor	608,492,853.89	
841	Garantías de Recuperación por fianzas expedidas	494,450,568.26	
851	Reclamaciones recibidas pendientes de comprobación	13,032,206.08	
861	Reclamaciones contigentes	96,036.00	
870	Reclamaciones pagadas	8,099,889.10	

880	Recuperación de reclamaciones pagadas	6,389,198.82
891	Pérdida Fiscal por amortizar	129,380,691.00
901	Reserva por constituir para obligaciones laborales al retiro	0.00
911.	Cuentas de registro 23,443,650,843.71	
921.	Operaciones con prodcutos derivados	0.00

"El presente Balance se formuló con las reglas dictadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, encontrándose correctamente reflejadas, en su conjunto, las operaciones efectuadas por la institución hasta la fecha mencionada, las cuales se realizaron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las normas legales y administrativas aplicables y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al catálogo oficial en vigor, habiendo sido valorizados los saldos en moneda extranjera conforme a las disposiciones emitidas por dicha Comisión.

El capital pagado incluye la cantidad de $0.00 moneda nacional, originada por la capitalización parcial del superávit por valuación de inmuebles.

Dentro de los rubros de “inmuebles” y de “Mobiliario y Equipo”, la (s) cantidad (es) de $0.00 y $0.00, respectivamente, representa (n) activos adquiridos en arrendamiento financiero.

Las Reclamaciones Contigentes , o sea las Reclamaciones Pendientes de integración y Contigencias en litigio, se refieren a reclamos presentados a la intitución, cuya exigiblidad de pago se encuentra pendiente conforme a las disposiciones contenidas en la Circular F-10.1.4 vigente.

El Contador Javier Flores Durón y Pontones es el auditor responsable del Despacho PriceWaterhouseCoopers., para auditar los Estados Financieros y el Actuario José Luis Sosa Gutiérrez como auditor Actuarial responsable del Despacho Grupo Técnica, S.A. de C.V, para auditar las reservas técnicas.

Director General
Ing. Alvaro Salamanca Villegas
Rúbrica
Gerente de Contabilidad
C .P. Luis Omar Méndez Muñoz
Rúbrica
Comisario
C.P. Alfredo M. Bolio y Lope
Rúbrica

“Este balance fue revisado con base en la documentación y elementos aportados por la sociedad, en los términos del artículo 105 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. La autenticidad y veracidad de sus cifras queda bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben”.

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
Presidente
Lic. Manuel S. Aguilera Verduzco
Rúbrica

CASA DE CAMBIO CELLINI, S.A. DE C.V.

(EN LIQUIDACION)

BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 31 DE JULIO DE 2002

(pesos)

Activo

Efectivo e inversiones temporales $ 21'886,396

Total activo circulante $ 21'886,396

Mobiliario y equipo (neto) $ 8,913

Total del activo $ 21'895,309

Pasivo

Acreedores diversos $ 6,894

Otras cuentas por pagar $ 133,745

Total del pasivo $ 140,639

Capital contable

Capital social $ 71'212,148

Reserva legal y otras reservas $ 3'433,536

Pérdida de ejercicios anteriores $ (8'795,353)

Resultado del ejercicio en curso $ (219,694)

Exceso o insuficiencia en la actualización $ (43'875,967)

Total del capital $ 21'754,670

Total pasivo y capital $ 21'895,309

La parte que a cada accionista le corresponde en el haber social se distribuirá en proporción a la participación que a cada uno de los accionistas tenga en el mismo.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 247 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se publica el presente balance final de liquidación.

México, D. F. a 20 de Septiembre de 2002

Liquidador

Banco de Oriente, S.A.

(en liquidación)

Representante del Liquidador

C.P. Alejandro Benigno González Martínez

Rúbrica.

(R.- 169277)

AGROASEMEX, S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001

(CIFRAS EN PESOS CONSTANTES)

100	Activo		
110	Inversiones	$ 895,231,930.05	
111	Valores y operaciones con productos derivados		$ 777,430,174.55
112	Valores		$ 777,430,174.55
113	Gubernamentales		619,705,356.25
114	Empresas privadas		123,013,545.51
115	Tasa conocida		122,633,945.51
116	Renta variable		379,600.00
117	Valuación neta		(28,836,537.87)
118	Deudor por intereses		63,547,810.65
119	(-) Estimación para castigos		0.00
120	Operaciones con productos derivados		0.00
121	Préstamos	$ 0.00	
122	Sobre pólizas		0.00
123	Con garantía		0.00
124	Quirografarios		0.00
125	Descuentos y redescuentos		0.00
126	Cartera vencida		0.00
127	Deudores por intereses		0.00
128	(-) Estimaciones para castigos		0.00
129	Inmobiliarias		$ 117,801,755.50
130	Inmuebles		29,538,156.24
131	Valuación neta		112,072,042.39
132	(-) Depreciación		23,808,443.13
133	Inversiones para obligaciones laborales al retiro		$ 1,076,685.60
134	Disponibilidad		$ 8,310,377.81
135	Caja y bancos		$ 8,310,377.81
136	Deudores		$ 35,598,153.81
137	Por Primas		$ 30,415,870.51
138	Agentes y ajustadores		244,021.49
139	Documentos por cobrar		0.00
140	Préstamos al personal		2,343,238.98
141	Otro	3,654,703.40	
142	(-) Estimación para castigos		1,059,680.57
143	Reaseguradores y reafianzadores		$ 36,553,883.48
144	Instituciones de seguros y Fianzas		$ 12,884,245.24
145	Depósitos retenidos		8,092,349.12
146	Particip. de reaseguradores por siniestros. pendientes.		15,577,289.12
147	Particip. de reaseguradores por riesgos en curso		0.00
148	Otras Participaciones		0.00
149	Intermediarios de reaseguro y reafianzamiento		0.00
150	Part. de reafianzadoras en la Rva. de F. en vigor		0.00
151	Otros activos		$ 22,405,082.98
152	Mobiliario y equipo		$ 9,751,777.61
153	Activos adjudicados		0.00
154	Diversos		10,452,854.65
155	Gastos amortizables		38,208,155.66
156	(-) Amortización		36,007,704.94
157	Productos derivados		0.00
	Suma del activo		$ 999,176,113.73
200	**Pasivo**		
210	Reservas técnicas		$ 456,494,847.09
211	De Riesgos en curso		$ 121,526,965.60
212	Vida	49,153.92	
213	Accidentes, enfermedades y daños		121,477,811.68
214	Fianzas en vigor		0.00
215	De obligaciones contractuales		$ 142,052,831.10

216	Por siniestros y vencimientos	59,947,644.99
217	Por siniestros ocurridos y No Reportados	55,708,000.00
218	Por dividendos sobre pólizas	834,671.48
219	Fondos de seguro en administración	0.00
220	Por primas en depósito	25,562,514.63
221	De previsión	$ 192,915,050.39
222	Previsión	190,010,014.18
223	Riesgos catastróficos	2,905,036.21
224	Contingencia	0.00
225	Especiales	0.00
226	Reserva para obligaciones laborales al retiro	$ 1,076,685.60
227	Acreedores	$ 57,838,334.33
228	Agentes y ajustadores	$ 641,512.36
229	Fondos de administración de pérdidas	0.00
230	Acreedores por Resp. de fianzas	0.00
231	Diversos	57,196,821.97
232	Reaseguradores y reafianzadores	$ 4,374,239.78
233	Instituciones de seguros y fianzas	$ 4,373,002.96
234	Depósitos retenidos	1,236.82
235	Otras participaciones	0.00
236	Intermediarios de reaseguro y reafianzamiento	0.00
237	Operaciones con productos derivados	0.00
238	Otros pasivos	$ 8,459,386.05
239	Provisión para la participación en las util. al personal	$ 0.00
240	Provisiones para el pago de impuesto	188,126.77
241	Otras obligaciones	8,051,782.94
242	Créditos diferidos	219,476.34
	Suma del pasivo	$ 528,243,492.85
300	Capital	
310	Capital o fondo social pagado	$ 777,998,882.23
311	Capital o fondo social	$ 777,998,882.23
312	(-) Capital o fondo no suscrito	0.00
313	(-) Capital o fondo no exhibido	0.00
314	(-) Acciones propias recompradas	0.00
315	Obligaciones subordinadas de conversión obligatoria a capital	$ 0.00
316	Reservas	$ 154,277,058.54
317	Legal $ 0.00	
318	Para adquisición de acciones propias	0.00
319	Otras 154,277,058.54	
320	Superávit por valuación	$ 0.00
321	Subsidiarias	$ 0.00
322	Efecto de impuestos Diferidos	$ 0.00
323	Resultados en ejercicios anteriores	$ (184,886,912.88)
324	Resultado del ejercicio	$ (40,144,435.75)
325	Exceso o insuficiencia en la Act. capital contable	$ (236,311,971.26)
	Suma del capital	$ 470,932,620.88
	Suma del pasivo y capital	$ 999,176,113.73

800	Orden	
810	Valores en depósito	$ 0.00
820	Fondos en administración	0.00
830	Responsabilidades por fianzas en vigor	0.00
840	Garantías de recuperación por fianzas expedidas	0.00
850	Reclamaciones recibidas pendientes de comprobación	0.00
860	Reclamaciones contingentes	0.00
870	Reclamaciones pagadas	0.00
880	Recuperación de reclamaciones pagadas	0.00
890	Pérdida fiscal por amortizar	2,829,811,839.39
900	Reserva por constituir para obligaciones laborales al retiro	0.00
910	Cuentas de registro	262,935,045.65
920	Operaciones con productos derivados	0.00

El presente balance se formuló con las reglas dictadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, encontrándose correctamente reflejadas, en su conjunto, las operaciones efectuadas por la Institución hasta la fecha mencionada, las cuales se realizaron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las normas legales y administrativas aplicables y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al catálogo oficial en vigor, habiendo sido valorizados los saldos en moneda extranjera conforme a las disposiciones emitidas por dicha Comisión.

El capital pagado incluye la cantidad de $ 0.00, moneda nacional, originada por la capitalización parcial del superávit por valuación de inmuebles.

Dentro de los rubros de “Inmuebles” y de “Mobiliario y Equipo”, la(s) cantidad(es) de $ 0.00 y $ 0.00 respectivamente, representa(n) activos adquiridos en arrendamiento financiero.

Auditados por: Rafael Lores Rodríguez y Cía. S. C. : C .P . Oscar Polin Hinojosa

Reservas Técnicas auditadas por. Act. Francisco Morales Castro.

Director General

Salvador Mayoral

Rúbrica

Director General Adjunto de Administración y Finanzas

Lic. Ricardo Mercado Garibay

Rúbrica

Comisario

Lic. Carlos Arturo Aguirre Islas

Rúbrica

Este balance fue revisado con base en la documentación y elementos aportados por la Sociedad, en los términos del artículo 105 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. La autenticidad y veracidad de sus cifras queda bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.

Santiago de Querétaro, Qro.,16 de octubre de 2002

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas

Presidente.

Lic. Manuel Aguilera Verduzco

Este balance se publica sin la firma del Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo establecido en la Circular S-18.2 de fecha 22 de julio de 2002 emitida por esa H. Comisión.

(R.- 169287)

FIANZAS GUARDIANA INBURSA, S.A.
GRUPO FINANCIERO INBURSA
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
(cifras en pesos constantes)

Activo		
Inversiones		520,537,324.92
Valores y operaciones con productos derivados	464,954,791.12	
Valores	464,954,791.12	
Gubernamentales	227,444,810.91	
Empresas privadas	219,819,266.27	
Tasa conocida	88,869,307.39	
Renta variable	130,949,958.88	
Valuación neta	13,626,258.94	
Deudores por intereses	4,064,455.00	
(-) Estimación para castigos		
Operaciones con productos derivados		
Préstamos	31,530,773.96	
Con garantía	22,283,854.27	
Quirografarios	9,175,702.39	
Descuentos y redescuentos		
Cartera vencida		
Deudores por intereses	71,217.30	
(-) Estimación para castigos		
Inmobiliarias	24,051,759.84	
Inmuebles	647,323.95	
Valuación neta	24,741,745.08	
(-) Depreciación	1,337,309.19	
Inversiones para obligaciones laborales al retiro		1,283,828.77
Disponibilidad		2,559,601.70
Caja y bancos	2,559,601.70	
Deudores		46,703,962.38
Por primas	45,378,199.59	
Agentes		
Documentos por cobrar		
Deudores p/Respon. de fianzas p/Recla. Pag.		
Préstamos al personal		
Otros	1,325,762.79	
(-) Estimación para castigos		
Reafianzadores		20,191,676.74
Instituciones de fianzas	5,664,965.48	
Primas retenidas por reafianzamiento tomado	649,253.58	
Otras participaciones	1,644,601.84	
Intermediarios de reafianzamiento		
Part. de Reaf. en la reserva de fianzas en vigor	12,232,855.84	
Otros activos		24,661,588.75
Mobiliario y equipo	303,430.94	
Activos adjudicados	1,566,714.32	
Diversos	22,791,443.49	
Gastos amortizables		
(-) Amortización		
Productos derivados		
Suma del activo		615,937,983.26
Pasivo		
Reservas técnicas		249,342,818.04
De fianzas en vigor	119,129,933.65	
De contingencia	130,212,884.39	
Especiales		
Reservas para obligaciones laborales al retiro		427,591.01
Acreedores		4,765,403.63
Agentes	102,915.42	

Acreedores por responsabilidades de fianzas		
Diversos	4,662,488.21	
Reafianzadores		15,001,774.39
Instituciones de fianzas	7,307,129.21	
Depósitos retenidos	7,694,645.18	
Otras participaciones		
Intermediarios de reafianzamiento		
Operaciones con productos derivados		
Otros pasivos		54,643,346.23
Provisión para part. de utilidades al personal		
Provisión para el pago de impuestos	41,770,311.31	
Otras obligaciones	10,589,042.27	
Créditos diferidos	2,283,992.65	
Suma del pasivo		324,180,933.30
Capital		
Capital pagado		94,965,427.21
Capital social	94,965,427.21	
(-) Capital no suscrito		
(-) Capital no exhibido		
(-) Acciones propias recompradas		
Oblig. Subord. de conv. Oblig. a capital		
Reservas		46,876,946.11
Legal	46,876,946.11	
Para adquisición de acciones propias		
Otras		
Superávit por valuación		3,667,798.09
Subsidiarias		
Resultados de ejercicios anteriores		206,437,756.70
Resultado del ejercicio		55,285,320.98
Exceso o insuficiencia en la act. del capital contable		-115,476,199.13
Suma del capital		291,757,049.96
Suma del pasivo y capital		615,937,983.26
Orden		
Valores en depósito		50,266,599.95
Fondos en administración		
Responsabilidad por fianzas en vigor		4,870,939,635.50
Garantías de recuperación p/fianzas expedidas		16,654,213,789.47
Reclamaciones recibidas pendientes de comprobación		31,788,767.33
Reclamaciones contingentes		31,417,030.00
Reclamaciones pagadas		149,413,179.85
Recuperación de reclamaciones pagadas		10,455,813.71
Pérdida fiscal por amortizar		
Reserva por constituir para obligaciones laborales al retiro		
Cuentas de registro		2,852,243,131.32
Operaciones con productos derivados		

"El presente Balance se formuló con las reglas dictadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, encontrándose correctamente reflejadas, en su conjunto, las operaciones efectuadas por la Institución hasta la fecha mencionada, las cuales se realizaron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las normas legales y administrativas aplicables y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al catálogo oficial en vigor, habiendo sido valorizados los saldos en moneda extranjera conforme a las disposiciones emitidas por dicha comisión".

"El Capital Pagado incluye la cantidad de $ 5'440,807.91 Moneda Nacional, originada por la Capitalización parcial del Superávit por Valuación de Inmuebles"

Dentro de los rubros “Inmuebles” y de “Mobiliario y Equipo”, la(s) cantidad(es) de $ 0.00 y $ 0.00 respectivamente, representa(n) activos adquiridos en Arrendamiento Financiero.

Las Reclamaciones Contingentes, o sea las Reclamaciones Pendientes de Integración y Contingencia en Litigio, se refieren a reclamos presentados a la Institución, cuya exigibilidad de pago se encuentra pendiente conforme a las disposiciones contenidas en la Circular F-10.1.4 vigente.

Los Estados Financieros fueron auditados por el Despacho Mancera, S.C. - C.P.C. José Luis García Ramírez.

Las Reservas Técnicas fueron auditadas por el Despacho William M. Mercer, S.A. de C.V. - Act. Miguel Berber Bravo.

Director General
Lic. Alfredo Ortega Arellano
Rubrica
Contralor General
C.P. Francisco Díaz Bocanegra
Rubrica
Gerente de Contabilidad
C.P. Guillermo Chávez Pérez
Rubrica
Comisario Suplente
C.P.C. Victor Alberto Tiburcio Celorio
Rubrica

"Este Balance fue revisado con base en la documentación y elementos aportados por la Sociedad, en los términos del artículo 65 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. La autenticidad y veracidad de sus cifras queda bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben."

México, D.F., , 2002.
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
Presidente
Lic. Manuel Aguilera Verduzco
Rúbrica.

(R.- 169326)

INMOBILIARIA ANDES, S.A.

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA.

Por medio de la presente se convoca a los Accionistas de la Empresa Mercantil Inmobiliaria ANDES S.A., para la celebración de una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, que se efectuará el próximo día 16 de Noviembre de 2002 a las 11:00 horas, en el domicilio social ubicado en Newton 14 Colonia Polanco C. P. 11560 México, D. F.

Conforme a la siguiente orden del día.

1. Donación de acciones de las que es titular el Sr. Anastasio LópezSánchez Munguía en favor de Alessandra Vanessa LópezSánchez Cotera.
2. Cambio de Secretario del Consejo de Administración nombrándose el nuevo Secretario.
3. Ratificación del nombramiento del Presidente del Consejo de Administración y sus respectivas facultades.
4. Modificación del artículo decimoprimero de los Estatutos Sociales.
5. Asuntos Generales.

Atentamente
Inmobiliaria ANDES S.A.
Presidente del Consejo de Administración
Anastasio López Sánchez Munguía
Rúbrica.

(R.- 169339)

Gasoductos de Tamaulipas, S. de R.L. de C.V.

AVISO AL PUBLICO DE TEMPORADA ABIERTA

Proyecto de Transporte de Gas Natural San Fernando

Por medio del presente aviso, Gasoductos de Tamaulipas, S. de R.L. de C.V., comunica a todos los interesados su intención de construir y operar el Sistema de Transporte de Gas Natural denominado "San Fernando" que consistirá en un gasoducto de 36" de diámetro y 114 kms. de longitud aproximadamente, cuyo trazo preliminar inicia en la estación de compresión "El Caracol" en la interconexión prevista con la estación No. 19 propiedad de Pemex-Gas y Petroquímica Básica ("PGPB"), estado de Tamaulipas, y correrá en dirección sur hasta la estación de compresión "Los Indios", también interconectada al Sistema Nacional de Gasoductos propiedad de PGPB, ubicada en el estado de Tamaulipas.

Para tales efectos, Gasoductos de Tamaulipas, S. de R.L. de C.V. instrumentará una temporada abierta para el Sistema de Transporte San Fernando, para la cual los interesados deberán manifestar su interés en un plazo improrrogable que corre del 4 de noviembre de 2002 al 3 de noviembre de 2003.

La capacidad disponible para reserva de los interesados es de 640 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD).

Todos aquellos interesados en reservar capacidad en el sistema de transporte dentro del plazo establecido, podrán solicitar la documentación correspondiente, presentando una manifestación de interés por escrito en la siguiente dirección:

Ing. José Luis Vitagliano Novoa
Andrés Bello número 45 piso 25 oficina A
Colonia Polanco, código postal 11560, México D.F.
Teléfono (5255) 5281-1801
Fax (5255) 5280-9863
Atención: Lic. Tamara Goudinoff C.
tgoudinoff@gasoductosdc.com
Atentamente,
Gasoductos de Tamaulipas, S. de R.L. de C.V.
Director General
José Luis Vitagliano Novoa
Rúbrica.
(R.- 169371)

TERCERA SECCION

SECRETARIA DE ENERGIA

NORMA Oficial Mexicana NOM-010-SECRE-2002, Gas natural comprimido para uso automotor. Requisitos mínimos de seguridad para estaciones de servicio.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de Energía.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-010-SECRE-2002, GAS NATURAL COMPRIMIDO PARA USO AUTOMOTOR. REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD PARA ESTACIONES DE SERVICIO.

La Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión Reguladora de Energía, con fundamento en los artículos 38 fracción II, 40 fracciones I, XIII y XVIII, 41 y 47 fracción IV y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 4o., 9o., 14 fracción IV y 16 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 33 fracciones I y IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2 fracciones VI y VII, 3 fracciones XV y XXII y 4 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1, 7 y 70 fracción VII del Reglamento de Gas Natural; 1, 2, 3 fracción VI inciso a), y 34 y 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, y

CONSIDERANDO

Primero. Que con fecha 19 de octubre de 2001, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por medio de Ductos, publicó en el **Diario Oficial de la Federación**, el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-010-SECRE-2000, Gas natural comprimido para uso automotor.- Requisitos mínimos de seguridad para estaciones de servicio, a efecto de recibir comentarios de los interesados (cancela y sustituye en la parte correspondiente a la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SCFI-1994, Gas Natural Comprimido para uso Automotor. Requisitos de Seguridad para Estaciones de Servicio e Instalaciones Vehiculares).

Segundo. Que transcurrido el plazo de 60 días a que se refiere el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para recibir los comentarios que se mencionan en el considerando anterior, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por medio de Ductos estudió los comentarios recibidos y, en su caso, modificó el Proyecto de Norma en cita.

Tercero. Que con fecha 13 de agosto de 2002, se publicaron en el **Diario Oficial de la Federación** las respuestas a los comentarios recibidos al Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-010-SECRE-2000, Gas natural comprimido para uso automotor. Requisitos mínimos de seguridad para estaciones de servicio (cancela y sustituye en la parte correspondiente a la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SCFI-1994, Gas natural comprimido para uso automotor.- Requisitos de seguridad para estaciones de servicio e instalaciones vehiculares).

Cuarto. Que como resultado de lo expuesto en los considerandos anteriores, se concluye que se ha dado cumplimiento al procedimiento que señalan los artículos 38, 44, 45, 47 y demás relativos a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, por lo que se expide la siguiente Norma Oficial Mexicana NOM-010-SECRE-2002, Gas natural comprimido para uso automotor.- Requisitos mínimos de seguridad para estaciones de servicio, que cancela y sustituye en la parte correspondiente a la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SCFI-1994, Gas natural comprimido para uso automotor.- Requisitos de seguridad para estaciones de servicio e instalaciones vehiculares.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-010-SECRE-2002, GAS NATURAL COMPRIMIDO PARA USO AUTOMOTOR.- REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD PARA ESTACIONES DE SERVICIO

INDICE

0. Introducción

1. Objetivo

2. Campo de aplicación

3. Referencias

4. Definiciones

5. Clasificación

6. Especificaciones y requisitos de seguridad

7. Métodos de prueba

8. Procedimientos de seguridad en la operación de una estación de servicio

9. Bibliografía

10. Concordancia con normas internacionales

11. Vigilancia

12. Vigencia

0. Introducción

Esta Norma Oficial Mexicana (la norma) se emite para regular los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplirse en las estaciones de servicio para el suministro de gas natural comprimido a vehículos automotores.

1. Objetivo

Esta Norma establece los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir las estaciones de servicio, instaladas en el República Mexicana con el fin de suministrar gas natural comprimido para los vehículos automotores que lo utilizan como combustible.

2. Campo de aplicación

Esta Norma aplica a los equipos, componentes y materiales utilizados para darle las condiciones requeridas al gas natural comprimido para su uso, desde el punto de recepción de un sistema de transporte o distribución de gas natural hasta el conector de llenado de gas natural comprimido.

3. Referencias

La presente Norma se complementa con las normas oficiales mexicanas, o las que las sustituyan, siguientes:

NOM-001-SECRE-1997	Calidad del gas natural.
NOM-006-SECRE-1999	Odorización del gas natural.
NOM-008-SECRE-1999	Control de la corrosión externa en tuberías de acero enterradas y/o sumergidas.
NOM-011-SECRE-2002	Gas natural comprimido para uso automotor. Requisitos mínimos de seguridad en instalaciones vehiculares.
	Nota: la NOM-011-SECRE-2002 se publica en el DOF en la misma fecha que la presente NOM.
NOM-001-SEDE-1999	Instalaciones Eléctricas (Utilización)
NOM-026- STPS-1998	Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación por fluidos conducidos en tuberías.
NOM-008-SCFI-1993	Sistema General de Unidades de Medidas.
NOM-002-STPS-2000	Condiciones de Seguridad-Prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.

4. Definiciones

Para efectos de la aplicación de esta Norma se establecen las definiciones siguientes:

4.1 Almacenamiento: Conjunto de recipientes que contienen el GNC destinado para la carga a vehículos automotores y plataformas.

4.2 Alta presión: En las estaciones de servicio es la presión a la que se encuentra el gas natural a partir de la primera etapa de compresión. En los vehículos es la presión a la que el GNC se encuentra desde el cilindro de almacenamiento hasta la última etapa de regulación de presión inclusive.

4.3 Autoridad competente: La Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión Reguladora de Energía en los términos de las atribuciones asignadas mediante el Reglamento Interior de dicha Secretaría.

4.4 Camisa: Ducto en el que se aloja una tubería de gas para protegerla de esfuerzos externos.

4.5 Canal de venteo: Ducto o tubería que conduce hacia la atmósfera los desfogues de los dispositivos de relevo de presión.

4.6 Capacidad: El volumen nominal máximo que puede tener un recipiente.

4.7 Cilindro: Recipiente que se instala en el vehículo automotor para almacenar GNC.

4.8 Conector de llenado: Aditamento del surtidor de GNC de la estación de servicio, que se conecta a la boquilla de recepción del vehículo automotor para cargar GNC en los cilindros de dicho vehículo automotor.

4.9 Condiciones base: Condiciones bajo las que se determinan las características del gas natural correspondientes a presión absoluta de 98,067 kPa y a temperatura de 293 K.

4.10 Disco de ruptura: Elemento cuya función es desfogar en su totalidad el contenido de un cilindro, recipiente o sistema de GNC al excederse la presión de operación máxima permitida, que puede estar integrado a las válvulas o puede estar instalado solo.

4.11 Dispositivo de relevo de presión: Elemento activado por presión usado para prevenir el exceso de presión arriba del máximo predeterminado.

4.12 Ducto eléctrico: Elemento por donde se conducen los cables eléctricos.

4.13 Estación dual: Estación de servicio en la que se pueden suministrar al mismo tiempo gas natural comprimido e hidrocarburos líquidos, principalmente gasolina y diesel.

4.14 Estación de llenado lento: Estación de servicio que comprime gas natural y en la que la operación de llenado de un vehículo se realiza, típicamente en varias horas.

4.15 Estación de llenado rápido. Estación de servicio que comprime gas natural y en la que la operación de llenado de un vehículo es comparable a aquella de combustibles líquidos.

4.16 Estación residencial: Estación de llenado lento de baja capacidad cuyo sistema de compresión contiene todos sus componentes en una sola unidad.

4.17 Estación de servicio: Instalación para suministrar GNC a vehículos automotores.

4.18 Fuente de ignición: Dispositivo, objetos o equipos capaces de proveer suficiente energía térmica para encender mezclas inflamables de aire-gas.

4.19 Fusible térmico: Dispositivo de seguridad accionado por temperatura, que permite desfogar el gas en caso de incendio. Debe fundir cuando se alcanza una temperatura de 100°C 10°C.

4.20 Gas inerte: Gas no combustible, ni tóxico, ni corrosivo.

4.21 Gas natural: Mezcla de hidrocarburos compuesta primordialmente por metano.

4.22 Gas natural comprimido (GNC): Gas natural que ha sido sometido a un proceso de compresión.

4.23 Instalación en estación de servicio: Equipo que se encuentra fijo en una estación de servicio, por ejemplo equipo de medición y regulación, recipientes de GNC, sopladores, compresores, válvulas, tuberías y conexiones necesarias para llenar recipientes para GNC, y transferirlo a los vehículos.

4.24 Instalación exterior: Instalaciones que forman parte de la estación de servicio y que no están dentro del recinto.

4.25 Línea de combustible: Tubería, tubo flexible, mangueras y conexiones que cumplen con las especificaciones para alimentación de GNC.

4.26 Manguera de alta presión: Manguera diseñada para soportar la presión de operación máxima permitida. Puede tener tramado metálico y/o cubiertas de otro material.

4.27 Material no combustible: Material que en presencia de oxígeno y de una fuente de ignición no se quema, ni se consume y tampoco libera vapores o humos.

4.28 Memoria técnico descriptiva: Documento que contiene la información del diseño de la estación del servicio basado en el cálculo de las presiones que soportan la estación de regulación y medición; el sistema de compresión, almacenamiento, surtidor y el sistema de seguridad contra incendio

4.29 Metro cúbico estándar: Un metro cúbico de gas a presión absoluta de 101.32 kPa y temperatura de 288.15 K.

4.30 Poste: Dispositivo utilizado para transferir GNC en las estaciones de llenado lento, consta de una válvula de corte a través de la cual se derivan una o más mangueras de alta presión para carga simultánea de GNC.

4.31 Presión de llenado: La presión alcanzada en los cilindros al momento de llenado debe ser de 20 MPa (200 bar) para las estaciones sin sistema de compensación de temperatura.

4.32 Presión de operación: Presión de GNC de 20 MPa (200 bar) a 25 MPa (250 bar) a una temperatura de 288.15 K (15°C).

4.33 Presión de operación máxima permitida: Presión máxima a la cual puede operar un sistema de GNC de acuerdo con las especificaciones de diseño, bajo condiciones de operación.

4.34 Prueba hidrostática: Ensayo al que se somete la instalación o sus componentes a un valor de presión predeterminado utilizando agua neutra y libre de partículas en suspensión como elemento de prueba.

4.35 Prueba neumática: Ensayo al que se somete la instalación o componente a un valor de presión predeterminado, utilizando aire, un gas inerte o GNC como elemento de prueba.

4.36 Punto de rocío a la presión del recipiente: Temperatura a la cual el vapor de agua empieza a condensarse, referida a la presión de servicio del recipiente.

4.37 Punto de transferencia: Punto donde se efectúa la conexión entre la boquilla de recepción del vehículo y el conector de llenado del surtidor para transferir GNC de la estación de servicio al cilindro del vehículo.

4.38 Recinto: Area delimitada con estructura, construcción o malla, con el fin de restringir el acceso a su interior, en donde se encuentran el compresor y/o el sistema de almacenamiento en alta presión y sus aditamentos.

4.39 Recipiente: Contenedor estacionario, cilíndrico o esférico para almacenar GNC.

4.40 Regulador de presión: Dispositivo cuya función es reducir y controlar la presión del gas natural a un valor determinado a la salida, manteniéndolo dentro de límites previamente definidos.

4.41 Señalamientos diversos: Letreros con indicaciones informativas, preventivas o restrictivas.

4.42 SI: Los señalamientos informativos.

4.43 SP: Los señalamientos preventivos.

4.44 SR: Los señalamientos restrictivos.

4.45 Surtidor: Dispositivo utilizado para medir y transferir GNC de la estación de servicio a los vehículos, en el cual se muestra la cantidad entregada, el precio unitario y el importe total a pagar.

4.46 Temperatura de rocío: Temperatura a la cual el vapor de agua empieza a condensarse en una corriente de gas natural.

4.47 Trinchera: Canal de concreto con dimensiones adecuadas para alojar tubería con espacio suficiente para mantenimiento; debe contar con rejilla capaz de soportar el tráfico vehicular, asimismo, debe tener drenes para evitar que se acumulen líquidos en su interior.

4.48 Tubería enterrada: Es aquella cuyo lomo está a una distancia mínima de 0,46 (cero coma cuarenta y seis) m del nivel del piso terminado.

4.49 Tubería en trinchera: Es la que se aloja en el interior de la trinchera y cuyo punto superior debe estar a no menos de 0,1 (cero coma uno) m de la parte más baja del interior de la cubierta removible de la trinchera.

4.50 Válvula de corte: Dispositivo de cierre de paso de gas natural, puede ser de operación manual o automática.

4.51 Válvula de relevo de presión: Dispositivo que desfoga el exceso de presión, cuando ésta sobrepasa el nivel máximo predeterminado para los recipientes y para el sistema de compresión o despacho.

4.52 Válvula supresora de flujo: Dispositivo que impide el paso de GNC cuando existe una pérdida brusca de presión o un exceso de flujo.

5. Clasificación

Las estaciones de servicio se clasifican como sigue:

Tipo I Estación de llenado rápido;

Tipo II Estación de llenado lento;

Tipo III Estación dual, y

Tipo IV Estación residencial.

5.1 Las estaciones de llenado rápido están constituidas por los componentes básicos siguientes:

a) Estación de regulación y medición;

b) Sistema de compresión;

c) Almacenamiento;

d) Surtidor o poste;

e) Sistema de paro de emergencia;

f) Filtro a la entrada y salida del compresor;

g) Sistema de seguridad contra incendio, y

h) Componentes de seguridad de alarma.

Elementos optativos

i) Panel prioritario;

j) Panel secuencial;

k) Secador de gas;

l) Sistema de compensación de carga, y

m) Odorizador.

El odorizador sólo será necesario en caso de que el gas no llegue odorizado a la estación. La odorización se llevará a cabo de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SECRE-1999, Odorización del gas natural.

El secador de gas sólo será necesario cuando se requiera que el GNC de la estación cumpla con el inciso 6.1.6 de esta Norma.

5.2 Las estaciones de llenado lento tienen los componentes básicos siguientes:

a) Estación de regulación y medición;

b) Sistema de compresión;

c) Almacenamiento;

d) Surtidor o poste;

e) Sistema de paro de emergencia;

f) Filtro a la entrada y a la salida del compresor;

g) Sistema de seguridad contra incendio, y

h) Componentes de seguridad de alarma.

Elementos optativos

i) Panel prioritario;

j) Panel secuencial;

k) Secador de gas;

l) Sistema de compensación de carga, y

m) Odorizador.

El odorizador sólo será necesario en caso de que el gas no llegue odorizado a la estación. La odorización se llevará a cabo de conformidad con la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SECRE-1999, Odorización del gas natural.

El secador de gas sólo será necesario cuando se requiera que el GNC de la estación cumpla con el inciso 6.1.6 de esta Norma.

En las estaciones de servicio de llenado rápido y lento, el sistema de compresión puede ser optativo cuando dicha estación se reabastezca por medio de una plataforma.

5.3 Las estaciones duales están constituidas, por lo que toca al GNC, por los mismos elementos que las estaciones de llenado rápido del inciso 5.1 de esta Norma, o estaciones de llenado lento del inciso 5.2 de esta Norma, según sea el caso.

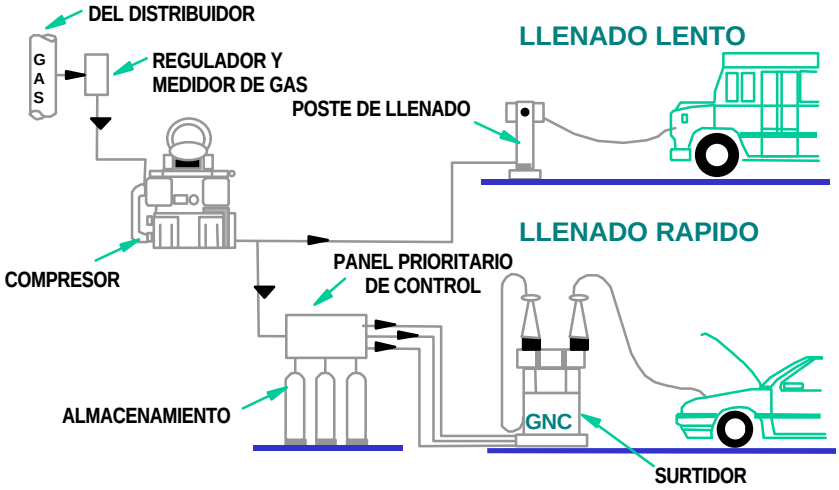
5.4 Las estaciones residenciales deben tener los componentes siguientes:

a) Sistema de regulación y medición;

b) Sistema de compresión;

c) Filtros incorporados al sistema de compresión, y

d) Componentes de seguridad incorporados en el sistema de compresión.



Esquema típico de una estación de llenado rápido y lento

5.5 Métodos de almacenamiento

A El almacenamiento de GNC a un solo nivel de presión puede estar contenido en un recipiente grande o varios recipientes pequeños. Cuando se surte GNC todos los recipientes de almacenamiento se vacían y su presión se reduce al mismo tiempo.

B El almacenamiento de GNC en cascada tiene dos o más niveles de presión, y cada nivel de presión puede tener uno o más recipientes grandes o varios recipientes pequeños. La secuencia de operación de las válvulas que conectan los niveles de presión es controlada automáticamente por el panel secuencial.

Descripción del funcionamiento de un sistema en cascada.

El GNC se almacena en varios niveles de presión. Cada nivel de presión puede tener uno o más recipientes:

a) Se llenan los recipientes con presión más alta y los de presiones menores son llenados en secuencia mediante un control automático. Esta forma se llama llenado prioritario;

b) El GNC se debe surtir a los vehículos y a las plataformas desde la presión más baja, cuando ésta disminuye a niveles que no permiten el llenado de manera eficiente; el control automático cierra este recipiente y se abre el recipiente con el nivel de presión superior. Este proceso se repite hasta que el recipiente de mayor presión del sistema entre en operación. Cuando la presión en los recipientes no es suficiente para llenar el cilindro del vehículo, el control automático conecta el sistema de compresión directamente al vehículo para continuar con llenado lento, y

c) Cuando termina el llenado de vehículos, el sistema de compresión debe continuar trabajando para llenar el sistema de almacenamiento mediante el panel prioritario.

6. Especificaciones y requisitos de seguridad

6.1 Los sistemas de las estaciones de servicio deben estar diseñados para operar a presiones de llenado de GNC adecuadas para cilindros con presión de servicio de 20 MPa (200 bar) y/o 25 MPa (250 bar).

6.1.1 En las estaciones de servicio el llenado del cilindro no debe exceder la presión de operación máxima permitida y debe cargarse de conformidad con la norma de fabricación. La presión de llenado de los cilindros de los vehículos en una estación que cuente con un sistema de compensación de temperatura no debe exceder los 25 MPa (250 bar), cualquiera que sea la temperatura.

6.1.2 Las instalaciones vehiculares deben cumplir con la Norma Oficial Mexicana aplicable.

6.1.3 La presión de GNC en los recipientes de la estación de servicio no debe exceder 34.5 MPa (352 kgf/cm^2, 5 000 lb/plg^2).

6.1.4 Los recipientes de GNC de la estación de servicio deben tener certificado de que han sido diseñados, construidos, inspeccionados, marcados y probados de acuerdo con alguna de las normas siguientes: ISO 9809; ASME Boiler and Pressure Vessel Code, sección VIII o sección X y DOT-3AA.

6.1.5 El GNC debe tener un olor distintivo suficiente para que su presencia sea detectada cuando la proporción en el aire no sobrepase la quinta parte del límite inferior de explosividad, de acuerdo con la NOM-006 SECRE-1999, Odorización del Gas Natural.

6.1.6 El GNC debe cumplir con la NOM-001-SECRE-1997, Calidad del gas natural.

6.1.7 Con objeto de evitar riesgos, los recipientes sujetos a presión deben cumplir con lo establecido en la NOM-122-STPS-1996, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene para el funcionamiento de los recipientes sujetos a presión y generadores de vapor o calderas que operen en los centros de trabajo.

6.1.8 Los equipos principales indicados en los incisos 5.1, y 5.2, ambos del a) al h), y los materiales utilizados en éstos deben contar con un certificado o garantía del fabricante.

6.2 Estaciones de llenado rápido.

Las estaciones de servicio deben contar con la memoria técnico-descriptiva del diseño, construcción y cumplir con los requisitos mínimos de seguridad que se establecen a continuación:

6.2.1 Todos los recintos deben estar protegidos en forma perimetral para permitir el acceso sólo a personal autorizado, a fin de minimizar las posibilidades de daños personales, materiales y vandalismo.

6.2.2 Los dispositivos de control deben ser instalados de tal forma que el congelamiento interno, externo o las condensaciones no provoquen fallas de funcionamiento.

6.2.3 Los equipos de compresión deben ser diseñados para el manejo de gas natural a las presiones y temperaturas a las cuales se someten bajo condiciones de operación.

6.2.4 Los equipos de compresión deben tener válvulas de relevo de presión después de cada etapa de compresión, que se activen al alcanzar una presión de 1,2 (uno coma dos) veces la presión de operación de cada etapa de compresión, mismas que deben desfogar al sistema de venteo de la estación.

6.2.5 Las válvulas de relevo de presión deben tener estampado la presión de relevo de acuerdo con la memoria de cálculo y certificado del fabricante.

6.2.6 Los equipos de compresión para gas natural deben estar equipados con controles de paro automático por alta presión de descarga y por alta o baja presión de succión.

6.2.7 Los equipos de compresión para gas natural deben estar equipados con controles de paro automático por alta temperatura de descarga en la última etapa.

6.2.8 Si el equipo de compresión cuenta con motor eléctrico, éste debe cumplir con las características establecidas en el inciso 6.2.69 de esta Norma.

6.2.9 Cuando los compresores sean activados por motores de combustión interna, el escape de sus gases de combustión debe estar localizado fuera del recinto en la parte superior del mismo, y debe contar con un sistema arrestador de flama; asimismo, debe estar lo más alejado posible del sistema de venteo de la estación y cumplir con los requisitos establecidos en el inciso 6.2.32 de esta Norma.

6.2.10 El equipo de compresión debe contar con un sistema automático de eliminación de condensados, para evitar el acarreo de líquidos a los recipientes.

6.2.11 El conector de llenado del surtidor no debe permitir el paso de gas natural cuando dicho conector no esté acoplado correctamente o se encuentre separado de la boquilla de recepción del vehículo.

6.2.12 Los surtidores de GNC deben estar localizados en una instalación exterior protegida, ver figuras típicas 1 y 2.

6.2.13 Los equipos de compresión, almacenamiento y carga deben estar localizados arriba del nivel del piso, no deben pasar sobre ellos líneas de transmisión de energía eléctrica, ni estar expuestos a la falla de estas líneas y deben tener una distancia mínima de 3 (tres) m al edificio más cercano o a la línea de colindancia.

6.2.14 Los equipos de compresión y almacenamiento, deben tener una distancia mínima de 6 (seis) m de la colindancia del predio a la banqueta más cercana, o bien de 3 (tres) metros cuando dichos equipos estén protegidos contra impactos de vehículos, y una distancia mínima de 15 (quince) m cuando se trate de hospitales, centros educativos y vías de ferrocarril.

6.2.15 Debe existir un espacio libre de por lo menos 1 (un) metro entre recipiente y otros componentes para tener acceso a todas las válvulas y conexiones.

6.2.16 Debe existir un espacio libre de por lo menos 1 (un) m entre las unidades de compresión para minimizar las vibraciones entre éstas.

6.2.17 No se permite usar material inflamable a una distancia menor de 3 (tres) m de los recintos.

6.2.18 Debe existir una separación mínima de 6 (seis) m entre el recinto y la pared exterior más cercana de tanques abiertos que contengan líquidos combustibles o inflamables.

6.2.19 Los surtidores deben estar montados sobre un módulo de abastecimiento, como mínimo con las características y distanciamientos que se muestran en las figuras típicas 3 y 4 y con una protección tubular contra choques sobre el sentido de circulación de los vehículos. Asimismo, el distanciamiento entre el surtidor y la colindancia a la banqueta más cercana debe ser 3 metros.

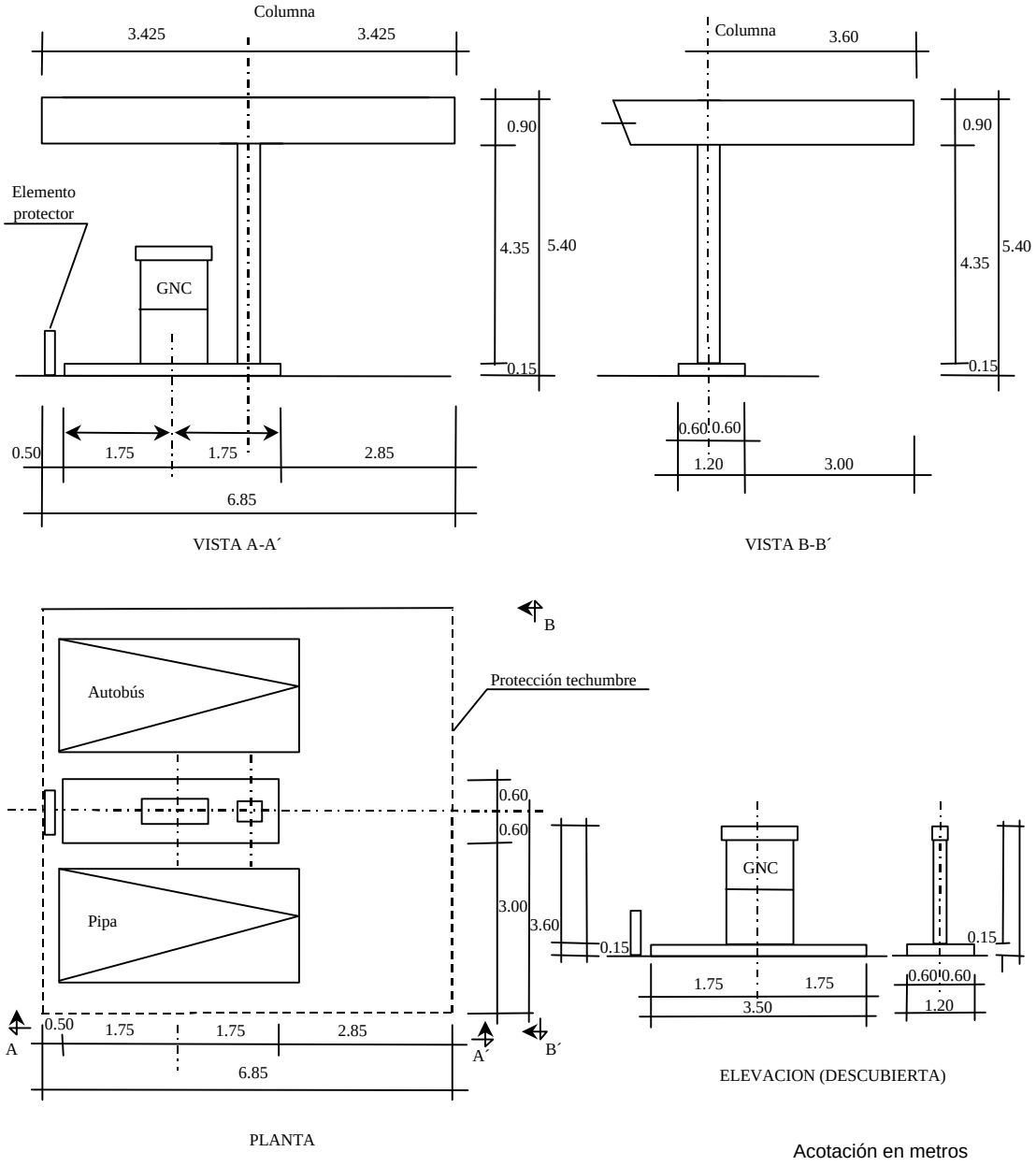


Figura típica 1.- Techumbre, módulo de abastecimiento sencillo y distancias mínimas requeridas para estaciones de servicio de GNC.

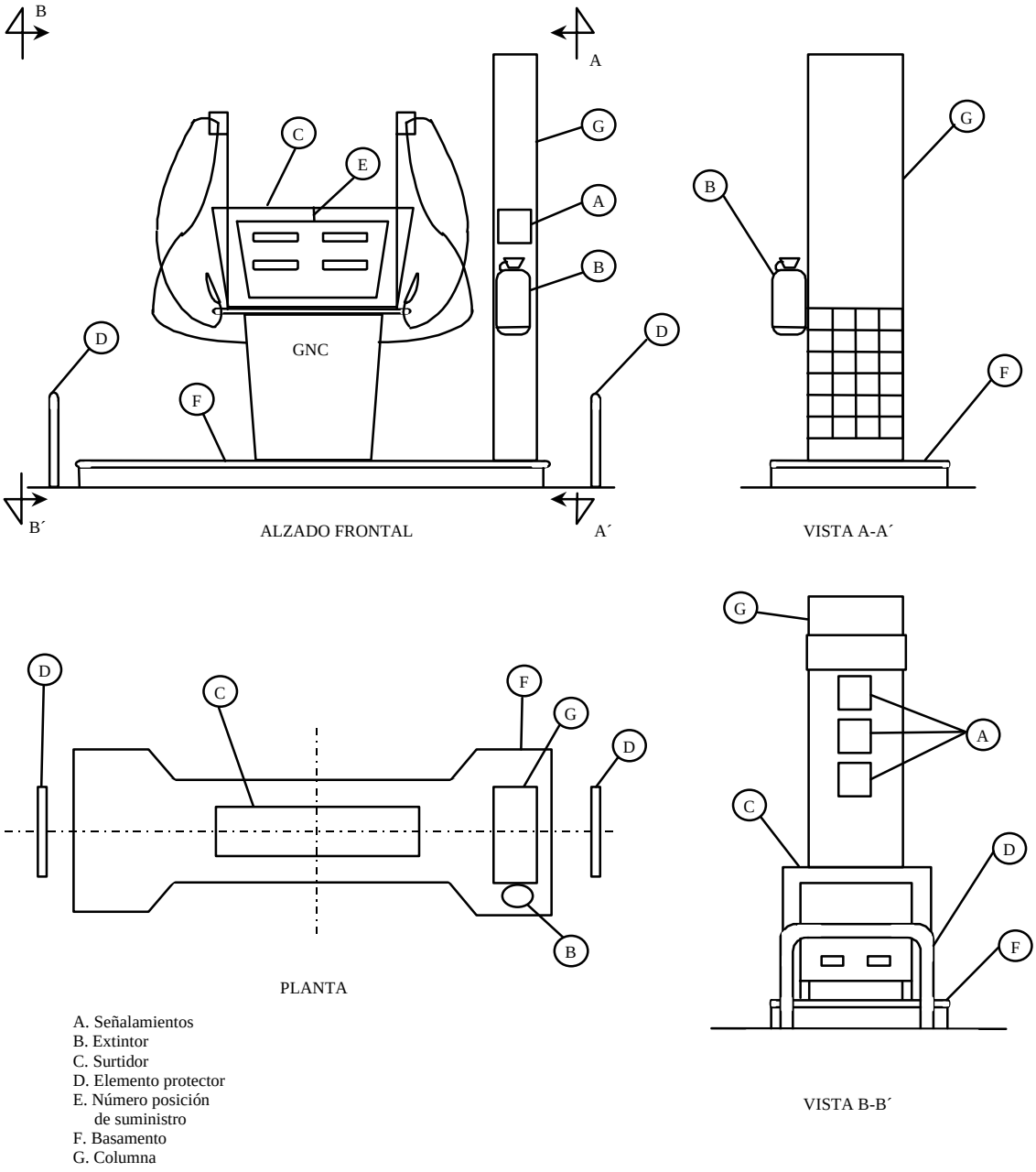


Figura 2.- Módulo de abastecimiento para estaciones públicas de servicio.

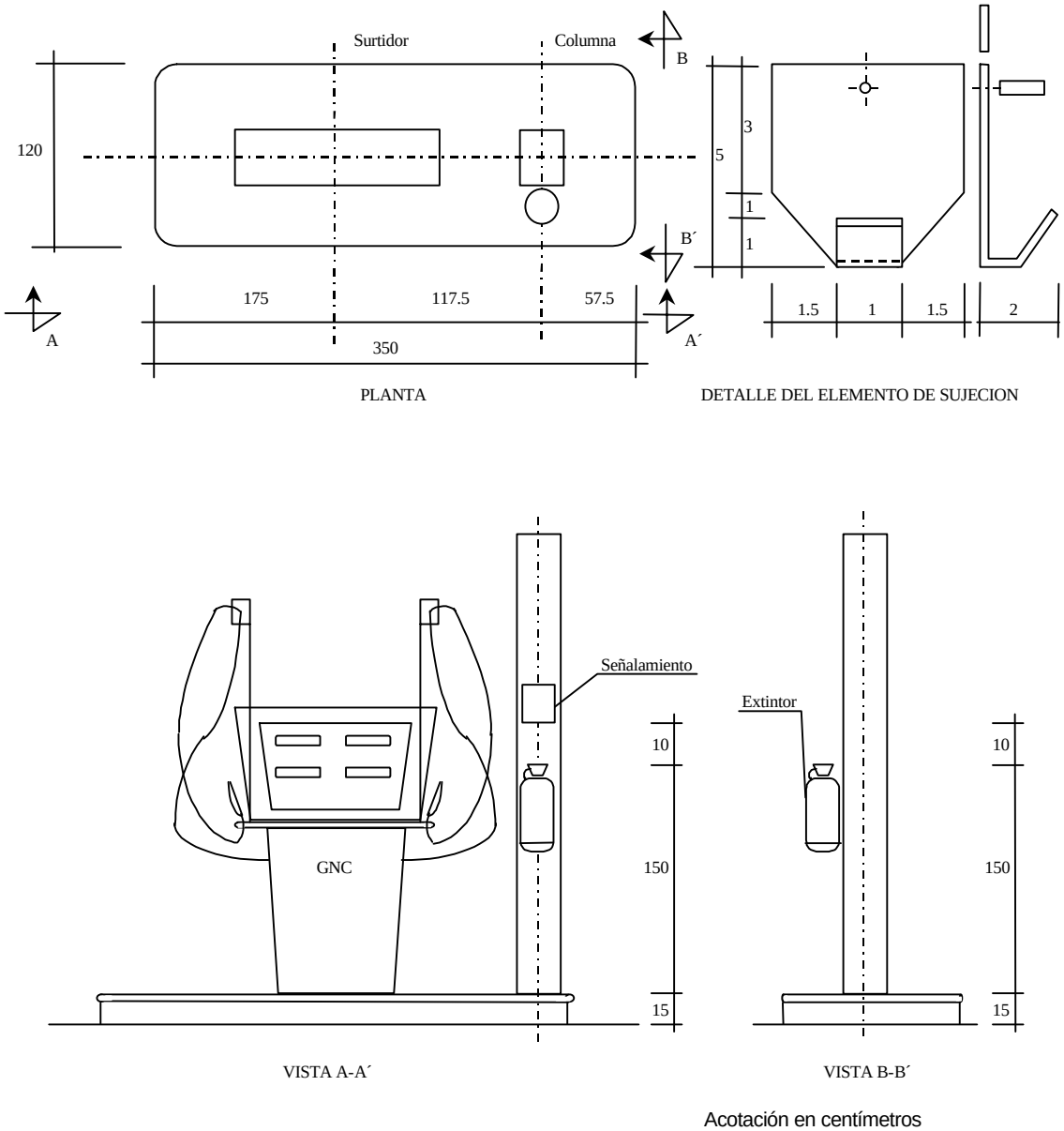


Figura típica 3.- Localización de los surtidores sobre un módulo de abastecimiento distancias mínimas requeridas en estaciones de servicio.

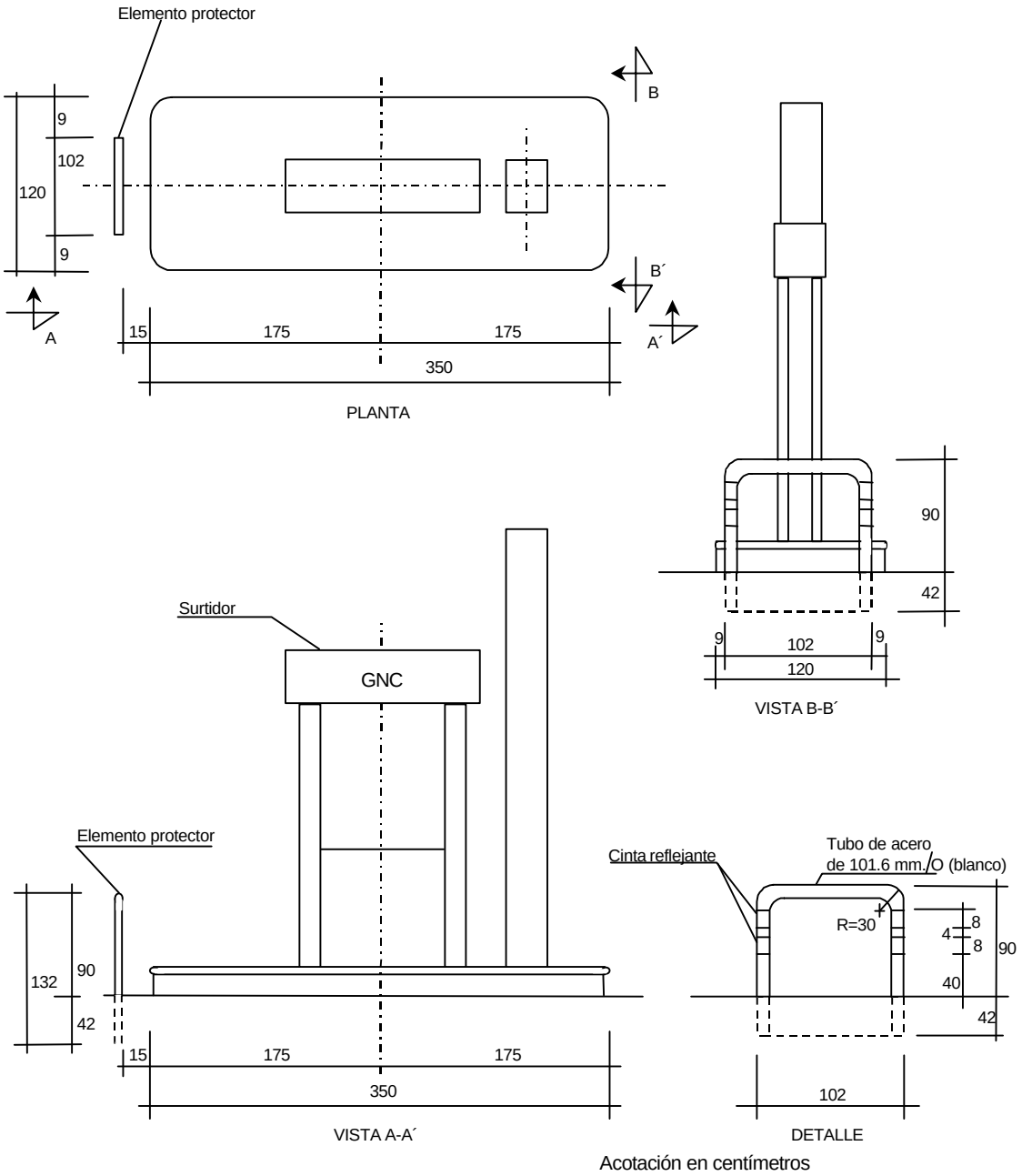


Figura típica 4.- Protección para módulo de abastecimiento para todo tipo de estaciones de servicio de GNC y distancias mínimas requeridas.

6.2.20 El punto de transferencia debe guardar una distancia mínima de 3 (tres) m con la colindancia del predio y la banqueta. Se debe considerar que las áreas clasificadas como peligrosas queden localizadas dentro del predio y que no se obstruya la vialidad interna vehicular.

6.2.21 Los recintos deben estar construidos a una distancia no menor de 2 (dos) m de los linderos del terreno o de cualquier construcción aledaña.

6.2.22 En caso de que los recintos tengan techo, éste deberá ser fabricado con estructuras ligeras de materiales no combustibles y deben cumplir con los requisitos de ventilación especificados en el inciso 6.2.23 de esta Norma.

6.2.23 Si los recintos tienen techo deben tener ventilación, natural o forzada, con capacidad para manejar un flujo de aire no menor a 1 (un) m^3/min por cada 12 (doce) m^3 del volumen; esto corresponde a cinco cambios de aire por hora.

6.2.24 Los recintos deben contar con detectores de mezclas explosivas que accionen una alarma luminosa y sonora al alcanzar una mezcla de 0,5 (cero coma cinco) % en volumen de gas natural en aire. En caso de detectar una mezcla de 3 (tres) % se debe activar un sistema de bloqueo, el cual debe interrumpir la energía eléctrica a toda la estación y cerrar las válvulas de alimentación de gas a los compresores, al sistema de almacenamiento y a los surtidores. Estos detectores deben contar con un indicador luminoso y/o sonoro, para señalar que dichos detectores están activados.

6.2.25 Las puertas de acceso al recinto deben tener letreros legibles y visibles, con las leyendas siguientes: "PELIGRO: NO FUMAR", "GAS NATURAL", "ACCESO SOLO A PERSONAL AUTORIZADO", "NO SE PERMITE FLAMA ABIERTA", de conformidad con lo establecido en la NOM-026-STPS-1998, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

6.2.26 Los recipientes deben ser instalados sobre el nivel del piso apoyados sobre cimentaciones estables construidas con materiales no combustibles. Los recipientes horizontales no deben tener más de dos puntos de apoyo longitudinal, uno de los cuales debe permitir el movimiento longitudinal causado por la expansión o contracción del recipiente. En lugares donde existe riesgo de inundación, deben estar anclados en forma segura para evitar flotación y/o arrastre.

6.2.27 Todos los recipientes deben estar protegidos contra la corrosión por recubrimientos anticorrosivos o cualquier otro sistema equivalente que inhiba el ataque del medio ambiente.

6.2.28 Todos los recipientes o conjunto de recipientes a la misma presión deberán contar con un dispositivo de relevo de presión (válvula de desfogue, disco de ruptura, etc.) y, en su caso, fusible térmico.

6.2.29 Los recipientes horizontales deben estar separados como mínimo 0,2 (cero coma dos) m para permitir el acceso para mantenimiento, y cada uno debe estar dotado con una válvula de purga. Los recipientes verticales deben estar contenidos en una estructura o canasta construida con material resistente y protegido contra la corrosión que se pueda manejar como una sola pieza. Los recipientes deben estar separados por una protección de hule, que impida el contacto entre sí.

6.2.30 No se deben acumular líquidos debajo de los recipientes.

6.2.31 Los dispositivos de relevo de presión que se encuentran dentro del recinto, deben estar conectados a un canal de venteo dirigido al exterior y después vertical hacia arriba que desfogue a una altura no menor de 0,7 (cero coma siete) m del punto más alto del recinto. Los canales de venteo deben tener un arreglo para evitar la entrada de lluvia, objetos extraños y polvo.

6.2.32 Los desfogues de los canales de venteo deben estar orientados a un área de descarga segura, tomando en cuenta los vientos dominantes de la zona. Se debe cuidar que el flujo de gas no esté dirigido hacia edificios, equipos o áreas que puedan estar ocupadas por el público.

6.2.33 Como medida de seguridad se deben instalar manómetros en los puntos siguientes:

a) Receptor de la línea de abastecimiento;

b) Descarga de cada etapa del compresor;

c) En todos los recipientes o en la línea de conexión, y

d) En todos los surtidores.

Los manómetros deben ser capaces de medir por lo menos 1,2 (uno coma dos) veces la presión de disparo del dispositivo de relevo de presión del sistema. En la conexión de entrada, deben tener un orificio que no exceda a 1,4 (uno coma cuatro) mm, correspondiente al tamaño de broca número 54. También deben contar con un dispositivo para evitar el golpe de ariete.

6.2.34 La tubería y/o tubo flexible deben ser instalados de la forma más directa como sea práctico, con las medidas de protección adecuadas para resistir expansión, contracción, vibración, golpes y asentamiento del suelo.

6.2.35 La tubería instalada arriba del nivel del piso debe estar protegida contra daño mecánico y corrosión atmosférica.

6.2.36 La tubería bajo nivel de piso debe ser enterrada, instalada dentro de una trinchera o encamisada. Debe de contar con un sistema de control de la corrosión externa de acuerdo con la NOM-008-SECRE-1999, Control de la corrosión externa en tuberías de acero enterradas y/o sumergidas.

6.2.37 No se deben utilizar conexiones roscadas en las tuberías enterradas.

6.2.38 Las conexiones de los recipientes a los cabezales deben estar instaladas de tal manera que minimicen la vibración y deben estar bien protegidas contra daños mecánicos.

6.2.39 Las tuberías y conexiones deben estar limpias y libres de viruta y rebaba de corte y roscado para evitar fugas.

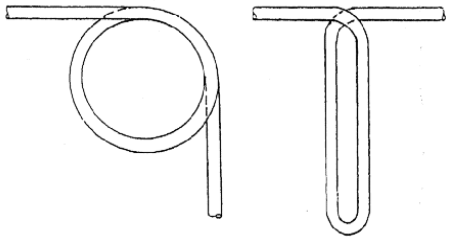
6.2.40 En todas las roscas macho tipo cónico se debe aplicar un material sellante que sea inerte a la acción de gas natural. Además deberá lubricar la junta y soportar la presión de operación de la tubería.

6.2.41 Todas las uniones por soldadura en tuberías de acero al carbono y acero inoxidable deben ser radiografiadas al 100% de su longitud por un laboratorio acreditado.

6.2.42 Se permite el uso de bridas en líneas de alta presión cuando sea compatible con la presión de operación de la tubería. No se permite el uso de bridas en líneas enterradas de alta presión.

6.2.43 Cuando en el trayecto de la tubería se requieran dobleces, éstos deberán tener un radio mínimo de cuatro veces el diámetro del tubo o un diámetro del doblez mínimo de 76 (setenta y seis) mm.

6.2.44 Los dobleces de tubo flexible deben realizarse con herramienta adecuada para evitar que se dañe dicho tubo flexible.



Típico: Rizo Típico: Clip

Figura típica 5.- Dobleces para evitar vibraciones y esfuerzos en línea de alta presión.

6.2.45 La tubería, tubos flexibles, conectores y componentes entre el recipiente y la primera válvula de cierre deben ser capaces de soportar una prueba neumática con presión de 1,1 (uno coma uno) veces la presión de operación como mínimo, sin que se presente fuga.

6.2.46 No se deben usar para la instalación de una estación que provee GNC:

a) Tubos, conectores y componentes de plástico para servicio de alta presión;

b) Tubos y conectores galvanizados;

c) Tubo, tubo flexible y conectores de aluminio;

d) Aleaciones de cobre con más de 70% de cobre, y

e) Conectores, codos y otros componentes de fierro colado.

6.2.47 Los componentes de tubería, tales como filtros, conectores de manómetros y juntas de expansión, deben estar marcados en forma permanente para indicar los límites de presión de operación máxima permisible.

6.2.48 Las juntas o conexiones deben estar localizadas en lugares accesibles para facilitar su inspección.

6.2.49 Todas las mangueras de alta presión deben soportar por lo menos 2,25 (dos coma veinticinco) veces la presión de operación y no deben tener empates intermedios. Deben contar con una certificación del fabricante.

6.2.50 Las conexiones de las mangueras no deben presentar fugas y los conectores deben contar con un marcado o etiquetado permanente, indicando nombre o marca del fabricante y su presión de operación.

6.2.51 En las instalaciones se deben usar mangueras únicamente en los casos siguientes:

a) Entre el surtidor y el conector de llenado no debe exceder 7,6 (siete coma seis) m de longitud, y

b) En los puntos donde se requiera proveer flexibilidad en la tubería, no debe exceder de 0,61 (cero coma sesenta y uno) m de longitud, y ser instaladas de tal forma que estén protegidas contra daño mecánico y sean visibles para inspección. Cada sección debe conservar el marcado o etiquetado del fabricante.

6.2.52 La tubería, tubo flexible y mangueras no deben presentar fugas.

6.2.53 Las válvulas, empaques de válvulas y material de empaque deben ser los adecuados para soportar gas natural a las presiones y temperaturas a las cuales estarán sujetas bajo condiciones de operación.

6.2.54 Las válvulas de relevo de presión deben ser sometidas a mantenimiento preventivo y correctivo y contar con la identificación que señale la fecha y la última revisión efectuada de acuerdo con lo que indica el manual del fabricante.

6.2.55 Las válvulas de corte deben contar con un certificado que garantice que es capaz de soportar sin fuga, una prueba hidrostática de 1,5 (uno coma cinco) veces la presión de operación máxima permitida.

6.2.56 Las válvulas de corte una vez instaladas, deben soportar sin fuga, una prueba neumática con presión de 1,1 (uno coma uno) veces la presión de operación.

6.2.57 Las válvulas de relevo de presión no deben tener en su cuerpo un dispositivo de alzamiento (palancas). Si el ajuste es externo, la válvula debe sellarse para prevenir su operación por personas no autorizadas. Si es necesario romper el sello, la válvula debe ser retirada del servicio hasta que sea calibrada y sellada nuevamente. Cualquier ajuste debe ser hecho por el fabricante o compañías autorizadas por el mismo, quienes deben colocar una etiqueta permanente con el ajuste de presión, capacidad de flujo y fecha en que se realizó dicho ajuste.

6.2.58 No deben ser utilizadas válvulas de cierre primario de fierro colado.

6.2.59 No deben ser instaladas válvulas cuyo vástago pueda ser retirado sin la remoción del bonete completo o el desensamblado del cuerpo.

6.2.60 El cuerpo de las válvulas debe tener un marcado o etiquetado del fabricante, donde se indique la máxima presión de operación permitida.

6.2.61 Se debe instalar para cada recipiente o conjunto de recipientes, según su instalación, una válvula de corte de operación manual o automática, adecuada a las condiciones de presión de operación.

6.2.62 Cuando se utilizan válvulas supresoras de flujo, éstas se deben accionar a una presión menor que la que soporta la tubería en la que se encuentran instaladas.

6.2.63 La tubería de alta presión, después del compresor, deberá tener una presión de ruptura mayor o igual a 100 MPa (1000 bar).

6.2.64 La línea entre los compresores y los recipientes debe tener una válvula de retención de flujo que evite la descarga de GNC de los recipientes en caso de ruptura de la línea.

6.2.65 Se debe instalar una válvula de corte en el cabezal de un grupo de recipientes lo más cerca posible a éstos. Esta válvula debe estar después de la válvula de retención de la línea de llenado, especificada en el inciso 6.2.64 de esta Norma.

6.2.66 Se deben instalar dispositivos de paro de emergencia del equipo de compresión y de los surtidores cuando menos en los puntos siguientes:

a) En cada surtidor o en una columna inmediata al mismo;

b) En zonas de oficinas o donde exista personal durante el día y la noche, y

c) Próximo al acceso principal del recinto.

Cuando un dispositivo de paro de emergencia sea accionado, debe cortar el suministro de energía eléctrica, así como el suministro de gas natural al compresor y a los surtidores. El restablecimiento de la operación debe ser realizado por personal calificado. Se debe avisar a través de una alarma sonora y visual en el momento en que se está efectuando dicho restablecimiento.

6.2.67 Los dispositivos de paro de emergencia deben estar señalados mediante un letrero fijo, permanente y legible sobre un círculo de fondo rojo de cuando menos cinco veces el diámetro del tamaño del dispositivo de paro y con la leyenda “PARO DE EMERGENCIA” en letras blancas para que sea reconocido fácilmente.

6.2.68 Todo surtidor debe contar con un dispositivo que impida el flujo de GNC en caso de que algún vehículo desprenda la manguera de suministro.

6.2.69 En cumplimiento de la NOM-001-SEDE-1999, Instalaciones eléctricas; el equipo eléctrico se debe instalar y localizar, considerando las características siguientes:

a) Grupo D, Clase 1, División 1.

La localización de la Clase 1, División 1: es el lugar o área en la cual las concentraciones de ignición de gases inflamables o de vapores pueden existir bajo condiciones de operación normales; o en la cual las concentraciones de ignición de tales gases o vapores que puedan existir

frecuentemente bajo condiciones de operación, reparación, mantenimiento o por fuga, en la cual una ruptura o falla de operación del equipo o los procesos puedan liberar las concentraciones de ignición de gases o vapores inflamables y puedan causar fallas simultáneas en el equipo eléctrico.

b) Grupo D, Clase 1, División 2

La localización de la Clase 1, División 2: es el lugar o área en la cual líquidos inflamables volátiles o gases inflamables sean manejados, procesados o usados y en la cual los líquidos, vapores o gases sean normalmente confinados dentro de contenedores o sistemas cerrados de donde puedan escapar, sólo en caso de ruptura accidental o ruptura de tales contenedores o sistemas, o en caso de operaciones anormales de equipo; o en la cual las concentraciones de ignición de gases o vapores sean normalmente prevenidos por ventilación mecánica positiva, y en la cual puedan convertirse en peligro a través de fallas de operación de equipo de ventilación; o que la localización esté adyacente a la localización Clase 1, División 1, y en donde las concentraciones de ignición de gases o vapores puedan ocasionalmente estar comunicadas, a menos que tales comunicaciones sean prevenidas por una ventilación de presión positiva adecuada de una fuente de aire limpio y sistemas efectivos en contra de fallas de ventilación.

6.2.70 La clasificación de equipos debe realizarse de acuerdo con la tabla siguiente:

Clasificación de las áreas de una estación de servicio de conformidad con la NOM-001-SEDE-1999, Instalaciones eléctricas.

Equipo	**Alcance del área clasificada, distancia desde el equipo**	**División**
Recipientes en exteriores	Hasta 3 m	2
Equipo de compresión y equipos auxiliares en exteriores	Hasta 1,5 m Más de 1,5 m hasta 4,6 m	1 2
Equipo de compresión y equipos auxiliares en interiores	Hasta 1,5 m Más de 1,5 m	1 2
Surtidores en exteriores	Hasta 1,5 m Más de 1,5 m hasta 4,6 m	1 2

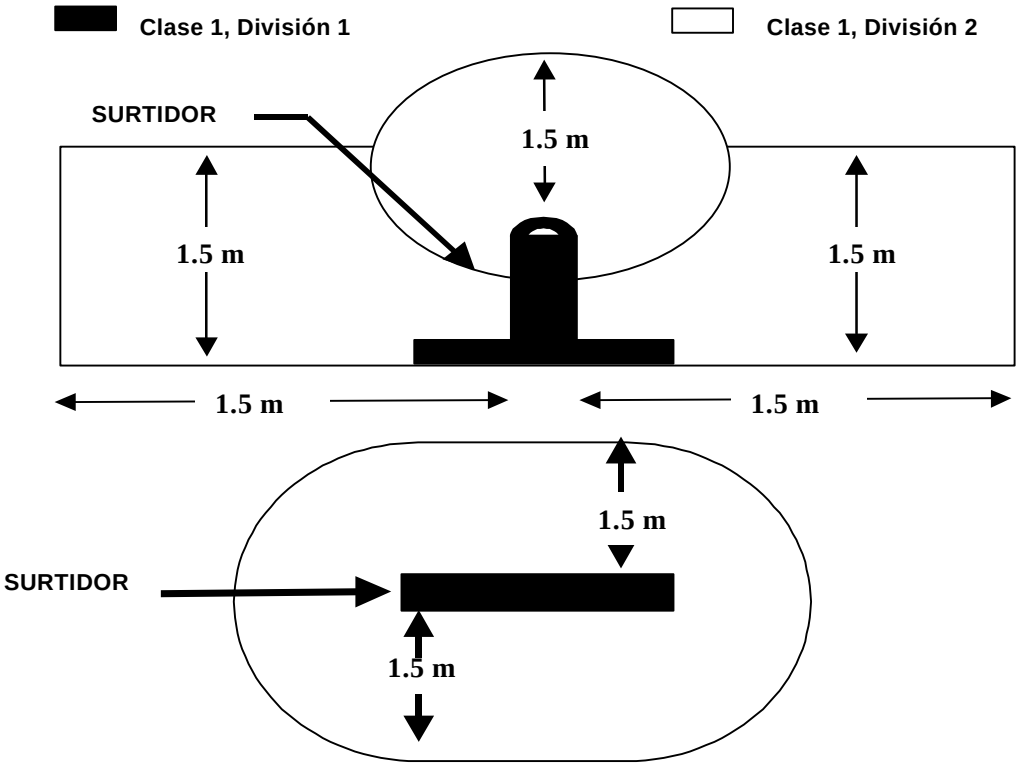


Figura típica 6.- Distancias de seguridad de los surtidores.

6.2.71 Estos radios aplican en todas las direcciones. El área clasificada no se debe extender más allá de paredes sin perforaciones, techos o divisiones sólidas no permeables a vapor de agua, ver figura típica 6.

6.2.72 A fin de evitar cargas electrostáticas en el sistema de los surtidores, éstos se deben conectar con cable de cobre desnudo al sistema de tierra de la estación.

6.2.73 Las mangueras para suministrar GNC al vehículo deben tener capacidad para conducir la carga electrostática del vehículo al sistema de tierra de la estación.

6.2.74 Los surtidores de GNC deben estar equipados con un dispositivo de paro automático que opere cuando el cilindro alcance la presión de llenado, corregido por temperatura, velocidad de carga o equivalente.

6.2.75 Los sistemas de transferencia deben contar con un dispositivo que permita despresurizarlo antes de desconectarse y este desfogue se debe conducir cuando menos a 0,7 (cero coma siete) m por arriba del nivel de la techumbre o 5,5 (cinco coma cinco) m del nivel de piso de la isla.

6.2.76 No se debe utilizar GNC para operar cualquier equipo o dispositivo que no haya sido diseñado para servicio de GNC.

6.2.77 No se permiten fuentes de ignición dentro de la Estación de Servicio.

6.2.78 En el área de surtidores se deben colocar letreros visibles restrictivos, preventivos, informativos y diversos con las leyendas siguientes: "NO FUMAR", "APAGUE MOTOR", "NO ESTACIONARSE", "10 km/h MAXIMO", "NO FLAMA ABIERTA", entre otros. El tamaño mínimo de las letras debe ser de 30 mm.

6.2.79 La transferencia de GNC al cilindro del vehículo debe ser llevada a cabo de acuerdo con las instrucciones escritas en un cartel, el cual debe estar ubicado sobre el surtidor.

6.2.80 Se deben instalar equipos contra incendio de conformidad con la norma NOM-002-STPS-2000, Condiciones de seguridad-Prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo y la

señalización de acuerdo con la norma NOM-026-STPS-1998, Condiciones de seguridad-Prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.

6.2.81 Las mangueras de los surtidores no deben tener empates intermedios y deben ser inspeccionadas visualmente en forma periódica para garantizar la seguridad de su operación. Cuando se encuentren evidencias de deterioro exterior y/o deformaciones en dichas mangueras, deben ser sustituidas.

6.2.82 Las mangueras de alta presión de plataformas utilizadas en la transferencia no deben tener conexiones intermedias y deben estar despresurizadas y protegidas contra posibles daños cuando no estén en operación.

6.2.83 Las válvulas de seguridad se deben mantener en condiciones adecuadas de operación de acuerdo con los lineamientos de los fabricantes y de las autoridades competentes.

6.2.84 En las tuberías de acero al carbón enterradas, se debe revisar periódicamente el sistema de control de la corrosión externa, a través del historial de las lecturas periódicas del potencial eléctrico de protección; dichas lecturas se deberán asentar en la bitácora de la estación.

6.2.85 Los equipos, dispositivos de relevo de presión e instrumentos se deben instalar, operar y mantener con estricto apego a las instrucciones del fabricante.

6.2.86 En los recipientes no se debe aplicar ningún tipo de soldadura ni realizar maquinado ni, en general, modificación alguna que no esté avalada en el diseño del fabricante.

6.2.87 Todas las tuberías y válvulas deben contar con la señalización de acuerdo con la NOM-026-STPS-1998, Condiciones de seguridad-Prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.

6.2.88 Relación de los señalamientos que se deben colocar en la estación de servicio, los cuales deben tener un tamaño de letra mínimo de 30 mm de alto en fondo contrastante.

Restrictivos:

SR-1	No fumar
SR-2	Apague motor
SR-3	No estacionarse
SR-4	10 km/h máximo
SR-5	No flama abierta
SR-6	No celulares

Preventivos:

SP-1	Peligro descargando GNC
SP-2	Precaución área fuera de servicio

Informativos:

SI-1	Extintor
SI-2	Sanitarios
SI-3	Hombres
SI-4	Mujeres
SI-5	Verifique marque ceros
SI-6	Agua
SI-7	Aire
SI-8	Estacionamiento momentáneo

SI-9 Ruta de evacuación

Diversos:

SD-1 Indicador de sentidos

SD-2 Número posición de carga

6.3 Estación de llenado lento

6.3.1 Para las estaciones de llenado lento son aplicables las disposiciones para las estaciones de llenado rápido comprendidas en el inciso 6.2 de esta Norma.

6.3.2 Los postes deben estar separados entre sí y de los límites del recinto a una distancia mínima de 1 (un) m.

6.4 Estación dual

6.4.1 Para las estaciones duales son aplicables las disposiciones para las estaciones de llenado rápido o lento comprendidas en los incisos 6.2 o 6.3 de esta Norma, según sea el caso.

6.4.2 La distancia mínima entre los surtidores de GNC y surtidores de líquidos y/o tanques de líquidos, debe ser de acuerdo con la tabla siguiente:

Entre equipos	Distancia mínima
Surtidor de GNC y surtidor de líquido (diesel/gasolina)	De acuerdo con la NOM-001-SEDE-1999
Surtidor de GNC y almacenamiento de líquidos	5 metros
Almacenamiento de GNC y almacenamiento de líquidos	5 metros *
Almacenamiento de GNC y surtidor de líquidos	5 metros **

* Si el almacenamiento es enterrado se puede reducir la distancia de acuerdo con la NOM-001-SEDE-1999.

** Se puede reducir la distancia utilizando muros antifuego de acuerdo con la NOM-001-SEDE-1999.

6.5 Estaciones tipo residencial

6.5.1 La capacidad de una estación tipo residencial no debe exceder 0.28 m^3 estándar/min (10 pie^3 estándar/min) de gas natural.

6.5.2 Todo el equipo debe ser diseñado para la presión, temperatura y servicio esperado.

6.5.3 Los componentes que no estén en el inciso 5.4 de esta Norma, deben cumplir con las especificaciones y requisitos del inciso 6.2 de esta Norma, aplicables.

6.5.4 El equipo debe estar protegido para minimizar la posibilidad de daño físico y vandalismo. Se permite cumplir con este requerimiento mediante el uso de un gabinete para la unidad de compresión, similar a los que se usan para los equipos de aire acondicionado central.

6.5.5 Está prohibido almacenar GNC excepto en el cilindro del vehículo.

6.5.6 Para el área de llenado de vehículos no se deben aplicar los requisitos de seguridad establecidos en el inciso 6.2 de esta Norma.

6.5.7 Los vehículos que contengan equipo de encendido por combustible, por ejemplo, vehículos para acampar equipados con estufas, lámparas y calentadores de gas, deben apagar completamente dichos equipos, inclusive los pilotos, antes de entrar a un área en la cual no se permiten fuentes de ignición.

6.5.8 No se debe ventear el gas natural a la atmósfera durante operación normal, excepto la fuga de 16.4 cm^3 estándar (una pulgada cúbica estándar) que se tiene cuando se desconecta la manguera después de cargar GNC en un vehículo, lo cual sí está permitido ventear a la atmósfera.

6.5.9 A menos que sea permitido específicamente por las instrucciones de instalación, no está permitido reunir con un cabezal las descargas de varias estaciones residenciales.

6.5.10 En un área común de llenado donde se encuentren localizados más de un poste, la separación entre ellos no debe ser menor de 1 (un) m.

6.5.11 Los equipos de compresión y surtido de GNC deben estar localizados en el exterior, y solamente que no sea posible en el lugar de la instalación, por ejemplo, donde el clima es comúnmente inclemente, se puede permitir que se instalen en el interior.

6.5.12 El equipo debe ser instalado de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

6.5.13 El equipo debe tener un letrero permanente que indique la presión mínima y máxima del gas natural de entrada, el flujo máximo y la presión máxima de GNC de salida, así como los requerimientos eléctricos para su operación normal.

6.5.14 Cuando la unidad de compresión y conexiones de llenado se instalen en el interior, éstas deben ser instaladas y localizadas de manera que tengan ventilación al exterior.

6.5.15 Cuando la estación y/o el vehículo que se está llenando con GNC están localizados en el interior de un cuarto se debe instalar un detector de gas localizado a 150 (ciento cincuenta) mm del techo o del punto más alto, el cual debe estar ajustado para operar a una quinta parte del límite inferior de explosividad del gas natural. Dicho detector debe parar el compresor y operar una alarma visual y audible.

6.5.16 El equipo debe estar colocado sobre un soporte firme de material no combustible para prevenir vibración que pueda causar fatiga del material, de la tubería y de los conductores eléctricos.

6.5.17 Las válvulas de alivio de presión deben tener dispositivos o ductos de ventilación para conducir el gas de desfogue hacia el exterior hasta un área segura, para evitar que éste sea dirigido directamente hacia edificios, otros equipos o áreas abiertas al público, por ejemplo aceras, corredores, entre otros.

6.5.18 Se permite instalar medidores de presión en las estaciones tipo residencial, pero no se requieren para los propósitos de medición y pruebas.

6.5.19 Las estaciones tipo residencial deben estar equipadas para detener el flujo de combustible automáticamente cuando se alcanza la presión de llenado.

6.5.20 Tuberías y mangueras.

6.5.21 Se debe utilizar solamente la tubería y manguera de salida del compresor que debe ser entregada por el fabricante como parte integral de la estación.

6.5.22 Toda la tubería de suministro de gas natural para la estación debe cumplir con las especificaciones y requisitos establecidos por la NOM-002-SECRE-1997, Instalaciones para el aprovechamiento de gas natural.

6.5.23 Se debe restringir el uso de manguera de acuerdo a lo siguiente:

a) La manguera para llenado de vehículos debe estar limitada a un largo máximo de 7,6 (siete coma seis) m. Debe estar soportada sobre el nivel de piso terminado o protegida de alguna manera contra abrasión y el paso de vehículos sobre ella, y

b) Se permite utilizar un máximo de 1 (un) m de largo para prevenir daños por abrasión resultantes de vibración en la salida de GNC o en la entrada de gas natural, o en ambos ductos de la unidad de compresión.

6.5.24 Los sistemas de transferencia deben tener un sistema de despresurización para facilitar la desconexión. El ducto para desfogar el gas natural debe descargar en un lugar seguro.

6.5.25 Prueba. Toda la tubería y mangueras deben ser probadas después de ser ensambladas para comprobar que están libres de fugas a una presión igual a la presión de operación máxima permitida en esa parte de la estación.

6.5.26 Instalación del paro de emergencia.

6.5.26.1 La estación debe tener un dispositivo de operación manual que corte el suministro de gas y energía eléctrica en caso de emergencia. Este dispositivo de paro de emergencia debe estar a por lo menos 1,5 (uno coma cinco) m de la estación tipo residencial y con fácil acceso.

6.5.26.2 Cada conector de llenado debe contar con un dispositivo de seguridad que corte el flujo de GNC en caso de que dicho conector sea jalado con fuerza excesiva. Este dispositivo debe cortar el flujo de GNC y

separarse cuando el conector sea jalado con una fuerza no mayor de 68 kgf (150 libras) en cualquier dirección horizontal.

6.5.27 Operación.

6.5.27.1 Se debe presentar ante la autoridad competente un dictamen técnico, antes del inicio de operaciones. Dicho dictamen debe incluir las siguientes etapas: diseño, construcción, instalación, pruebas y puesta en operación, elaborado por una unidad de verificación.

6.5.27.2 La estación debe ser operada por personal capacitado con base en los procedimientos que para tal efecto se tengan por escrito y en idioma español.

6.5.27.3 El cilindro del vehículo debe ser cargado de acuerdo con los incisos 6.1 y 6.1.1 de esta Norma.

6.5.27.4 Cuando el GNC está siendo transferido, el motor del vehículo debe permanecer apagado.

6.5.27.5 La Estación de Servicio debe contar con Manuales de Operación, Mantenimiento y Seguridad, que describan los procedimientos utilizados para realizar dichas actividades.

6.5.27.6 Prohibido la carga a vehículos de transporte público que tengan pasajeros a bordo.

6.5.28 Mantenimiento e inspección.

6.5.28.1 La estación, sus accesorios, dispositivos y válvulas de seguridad deben ser inspeccionados y mantenidos de acuerdo con un programa que para tal efecto se elabore e implemente.

6.5.28.2 Todas las mangueras deben ser inspeccionadas periódicamente y si presentan deformaciones o desgaste, dichas mangueras deben ser remplazadas.

6.5.28.3 Todos los dispositivos y válvulas de seguridad deben ser mantenidos de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes o proveedores.

6.5.29 Prácticas de seguridad.

6.5.29.1 El fabricante debe proveer al usuario un manual de seguridad para la operación y manejo del equipo, el cual debe contener los métodos y medidas de seguridad que se deben aplicar para cumplir con los requisitos de esta Norma.

6.5.29.2 El fabricante debe capacitar al usuario sobre los métodos, procedimientos y medidas contenidos en el manual.

6.5.29.3 El usuario debe presentar evidencia de que bimestralmente se lleva al cabo entrenamiento y simulacros de emergencia con todas las personas involucradas en la operación y mantenimiento del equipo.

6.5.29.4 Se debe contar con un manual de seguridad para la operación y manejo del equipo, el cual debe contener los procedimientos y medidas de seguridad que se deben aplicar para cumplir con los requisitos de esta Norma.

6.5.29.5 Se debe capacitar al personal de la estación de servicio sobre los métodos, procedimientos y medidas contenidas en el manual de seguridad.

7. Métodos de prueba

Para verificar los requisitos de seguridad de las estaciones de servicio se aplica el método de prueba hidrostática o neumática, mismas que se describen a continuación:

7.1 Prueba hidrostática.

Se debe realizar la prueba hidrostática en las estaciones para verificar la hermeticidad de las líneas de alta presión y de sus componentes. Los recipientes de GNC deben contar con el certificado de pruebas que haya realizado el fabricante.

Esta prueba se aplica para confirmar que las conexiones y materiales empleados en la fabricación de las líneas y componentes utilizados en la estación, resisten sin fuga, el esfuerzo homogéneo producido por el agua a presión.

7.1.1 Equipos y materiales para realizar la prueba:

a) Bomba hidráulica capaz de alcanzar la presión de prueba;

b) Manómetros con escala graduada no mayor a 2 (dos) veces la presión de prueba;

c) Registrador con gráfica tiempo-presión;

d) Válvulas capaces de soportar la presión de prueba;

e) Tubería, mangueras y conectores adecuadas para conectar el sistema, y

f) Agua suficiente para llenar el sistema o elemento a probar.

7.1.2 Preparación y acondicionamiento de la prueba.

Se debe instalar la bomba hidráulica con manómetro, registrador, válvulas, tubería, conexiones y mangueras en forma tal que propicie que el agua llene completamente la parte del sistema o componentes que van a ser probados.

7.1.3 Durante la prueba se deben retirar los discos de ruptura, válvulas de relevo, recipientes e instrumentos que se puedan dañar.

7.1.4 Procedimiento:

a) Se debe llenar completamente con agua la parte del sistema y elementos que van a ser probados, eliminando el aire que pueda estar dentro de ellos;

b) Se debe elevar gradualmente la presión del agua hasta alcanzar aproximadamente la mitad de la presión de prueba;

c) Se debe incrementar la presión del agua a intervalos de 0,1 (cero coma uno) veces cada diez minutos, hasta que ésta alcance 1,5 (uno coma cinco) veces la presión de operación, se aísla la parte del sistema bajo prueba y se verifica mediante la gráfica tiempo o presión, que la presión se mantiene por lo menos treinta minutos, y

d) Se debe reducir la presión del agua de 1,5 (uno coma cinco) a la presión de operación y se verifica con el registro gráfico que la presión se mantiene durante 24 horas, para permitir la inspección en todos los puntos de la línea y conexiones.

7.1.5 Resultados.

Se debe verificar que no existan fugas, corroborando esto mediante la gráfica del registrador de presión. En el caso de presentarse alguna fuga debe ser reparada, y se debe probar nuevamente la sección hasta comprobar su hermeticidad.

7.2 Prueba neumática.

Se debe realizar la prueba neumática para verificar la hermeticidad de las instalaciones y componentes de la estación mediante la aplicación de presión neumática.

Esta prueba se aplica para confirmar que las conexiones de las líneas y componentes de la estación resisten sin fuga el esfuerzo homogéneo producido por gas inerte a presión.

7.2.1 Equipos y materiales para realizar la prueba neumática:

a) Equipo neumático capaz de alcanzar la presión de prueba;

b) Manómetros con escala graduada no mayor a 2 (dos) veces la presión de prueba;

c) Registrador con gráfica tiempo-presión;

d) Válvulas capaces de soportar la presión de prueba;

e) Tubería, mangueras y conexiones adecuadas para conectar el sistema, y

f) Gas inerte suficiente para poder presurizar la parte del sistema y elementos a probar.

7.2.3 Preparación y acondicionamiento de la prueba.

Se debe instalar el equipo neumático con manómetro, registrador, válvulas, tubería, mangueras y conexiones en forma tal que el gas sea inyectado a través de toda la parte del sistema o componentes que se van a probar.

7.2.4 Procedimiento:

a) Se debe elevar gradualmente la presión del gas hasta alcanzar aproximadamente la mitad de la presión de prueba;

b) Se debe incrementar la presión del gas a intervalos de 0,1 (cero coma uno) la presión de operación cada 10 minutos, hasta que alcance 1,5 (uno coma cinco) la presión de operación; se aísla el sistema y se verifica mediante la gráfica tiempo-presión que la presión se mantiene al menos durante 30 minutos, y

c) Se debe reducir la presión del gas a 1,1 (uno coma uno) la presión de operación y se verifica mediante el registro gráfico que la presión se mantiene durante ocho horas, para permitir la inspección en todos los puntos y conexiones de la línea.

7.2.5 Resultados.

El material y equipo no deben presentar fugas, utilizando una solución tensoactiva formadora de espuma para detectarlas, esto se corrobora mediante la gráfica tiempo-presión del registrador de presión. En caso de presentarse alguna fuga, ésta debe ser reparada y se debe probar nuevamente esa sección con el mismo procedimiento hasta comprobar su hermeticidad.

8. Procedimientos de seguridad en la operación de una estación de servicio

8.1 La estación de servicio debe contar con un manual de procedimientos propios de la empresa, que deben estar permanentemente actualizados y en el lugar de trabajo de las personas encargadas de ejecutarlos.

8.2 Los procedimientos deben estar escritos en idioma español, claros, concisos y específicos, y deben instruir sobre las actividades y acciones que se deben realizar para cumplir con los requisitos de seguridad establecidos en esta Norma, y deben considerar al menos los aspectos siguientes:

a) Operación;

b) Mantenimiento;

c) Prevención de accidentes;

d) Atención de emergencias, y

e) Plan integral de seguridad y protección civil.

8.3 Debe contener un procedimiento en el cual se describa cómo el operador debe verificar que el vehículo cumple con los requisitos establecidos en la Norma Oficial Mexicana aplicable para instalaciones vehiculares, antes de proceder a cargar GNC.

8.4 La estación de servicio debe contar con una bitácora, donde se asienten todas las actividades y resultados de mantenimiento y reparaciones que se realicen en la estación de servicio.

8.5 Se debe llevar al cabo bimestralmente, entrenamiento y simulacros de emergencia con todas las personas involucradas en la operación y mantenimiento de la estación.

8.6 La inspección exterior de los cilindros de las instalaciones vehiculares puede ser efectuada por una Estación de Servicio, el taller instalador original, taller autorizado por la autoridad competente o bien por una unidad de verificación. En su caso, la Estación de Servicio, taller o unidad de verificación emitirá un certificado de acuerdo con la norma NOM-011-SECRE-2002. La estación de servicio deberá ser verificada por una unidad de verificación antes de iniciar operaciones, así como anualmente en cuanto al cumplimiento de lo establecido en esta NOM referente a operación, mantenimiento y seguridad. Sin embargo, la responsabilidad de la integridad de la instalación vehicular es del usuario.

8.7 Las estaciones de servicio deberán obtener el permiso que corresponda por parte de la Comisión y reconocerse mutuamente en lo que toque a la inspección exterior de los cilindros, la cual deberá ser acreditada mediante calcomanía o documento expedido y sellado por la estación de servicio que la realice.

9. Bibliografía

Para la elaboración de esta Norma se consultaron los documentos siguientes:

9.1 AGA (American Gas Association):

9.2.1 ANSI/AGA NGV 1, 1992, Requirements for compressed natural gas vehicles (NGV) refueling connection devices.

9.2.2 ANSI/AGA NGV 2, 1992, Basic Requirements for compressed natural gas vehicle (NGV) fuel containers.

9.3 API (American Petroleum Institute):

9.3.1 API RP 2003, Protection against ignitions arising out of static, lightning and stray currents, fourth edition 1982.

9.4 ASME (American Society of Mechanical Engineers):

9.4.1 ASME Boiler and Pressure Vessels Code, Section VIII, Rules for the construction of Unfired Pressure Vessels, Div 1 or Div 2.

9.4.2 ASME Boiler and Pressure Vessels Code, Section X, Fiber reinforced plastic pressure vessels.

9.4.3 ANSI/ASME B31.3, 1980, American National Standard Code for Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping.

9.5 ASTM (American Society for Testing and Materials):

9.5.1 ASTM A-47-1984, Specification for Malleable Iron Castings.

9.5.2 ASTM A-395-1986, Specification for Ferritic Ductile Iron Pressure-Retaining Castings for Use at Elevated Temperatures.

9.5.3 ASTM A-536-1984, Specifications for Ductile Iron Castings.

9.5.4 ASTM E-136-1982, Standard Method of Test for Behavior of Materials in a Vertical Tube Furnace at 750°C.

9.5.5 ASTM A -269-1988, Standard for Stainless Steel Seamless Tubing.

9.5.6 ASTM A-105-1982, Forging, Carbon Steel for Piping Components.

9.5.7 ASTM A-106-1982, Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature Service.

9.5.8 ASTM A-372-1982, Specification for Carbon and Alloy Steel Forging for Thin-Walled Pressure Vessels.

9.6 CGA (Canadian Gas Association):

9.6.1 CGA S-1.1, Pressure Relief Device Standards Part 1-Cylinders for Compressed Gases (1989).

9.6.2 ANSI/CSA/CGA Standard V-1, Compressed Gas Cylinder Valve Outlet and Inlet Connections (1987).

9.7 CSA (Canadian Standards Association):

9.7.1 CSA B51 1991, Boiler Pressure Vessel and Pressure Piping Code.

9.8 CRN (Canadian Registration Number).

9.9 CGA (Compressed Gas Association):

9.9.1 C-6, Standards for Visual Inspection of Steel Compressed Gas Cylinders.

9.10 D.M. 19/09/26. Recipienti per transporto di gas compressi, liquifatti o disciolti con capacita fino a 1000 litri.

9.11 DOT (Department of Transportation): DOT-3AA. High Pressure Seamless Steel Cylinders.

9.11.1 49 CFR CH.1, Research and Special Programs Administration (10-1-8).

9.12 Gas Processors Association, GPA 2162, Obtaining Natural Gas Samples for Analysis by Gas Chromatography.

9.13 ISO (International Organization of Standarization):

9.13.1 ISO 4705 Recharge Seamless Steel Cylinders.

9.13.2 ISO 9809 Refillable Seamless Steel Gas Cylinders, Design, Construction and Testing.

9.13.3 ISO 11439 Gas Cylinders-High Pressure Cylinders.

9.14 NFPA (National Fire Protection Association):

9.14.1 NFPA 37, Standard for the installation and Use of Stationary Combustion Engines and Gas Turbines, 1990 Edition.

9.14.2 NFPA 52, Compressed Natural Gas (CNG) Vehicular Fuel System, 1995 Edition.

9.14.3 NFPA 70, National Electrical Code, 1995 Edition.

10. Concordancia con normas internacionales

Esta Norma no concuerda con Norma Internacional alguna.

11. Vigilancia

La Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión Reguladora de Energía en los términos de las atribuciones asignadas mediante el Reglamento Interior de dicha Secretaría y demás disposiciones jurídicas que así lo señalan, es la autoridad competente para vigilar, verificar y cumplir las disposiciones contenidas en esta Norma.

12. Vigencia

Esta Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 60 (sesenta) días naturales después de la fecha de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

México, D.F., a 19 de septiembre de 2002.- El Presidente, **Dionisio Pérez-Jácome**.- Rúbrica.- El Comisionado, **Javier Estrada**.- Rúbrica.- El Comisionado, **Rubén Flores**.- Rúbrica.- El Comisionado y como Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por Medio de Ductos, **Raúl Monteforte**.- Rúbrica.- En contra: el Comisionado, **Raúl Nocedal**.- Rúbrica.

NORMA Oficial Mexicana NOM-011-SECRE-2000, Gas natural comprimido para uso automotor. Requisitos mínimos de seguridad en instalaciones vehiculares.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Comisión Reguladora de Energía.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-011-SECRE-2000, GAS NATURAL COMPRIMIDO PARA USO AUTOMOTOR. REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES VEHICULARES.

La Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión Reguladora de Energía, con fundamento en los artículos 38 fracción II, 40 fracciones I, XIII y XVII, 47 fracción IV y 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 4o., 9o., 14 fracción IV y 16 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 33 fracciones I y IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracciones VI y VII, 3 fracciones XV y XXII y 4 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; 28 y 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 1o., 7o. y 70 fracción VII del Reglamento de Gas Natural; 1, 2 y 3 fracción VI inciso a), 34 y 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, y

CONSIDERANDO

Primero. Que con fecha 22 de octubre de 2001, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por medio de Ductos, publicó en el **Diario Oficial de la Federación**, el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-011-SECRE-2000, Gas natural comprimido para uso

automotor.- Requisitos mínimos de seguridad en instalaciones vehiculares, a efecto de recibir comentario de los interesados (cancela y sustituye en la parte correspondiente a la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SCFI-1994, Gas Natural Comprimido para uso Automotor. Requisitos de Seguridad para Estaciones de Servicio e Instalaciones Vehiculares);

Segundo. Que transcurrido el plazo de 60 días a que se refiere el artículo 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización para recibir los comentarios que se mencionan en el Considerando anterior, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por medio de Ductos estudió los comentarios recibidos y, en su caso, modificó el Proyecto de Norma en cita;

Tercero. Que con fecha 19 de agosto de 2002, se publicaron el **Diario Oficial de la Federación** las respuestas a los comentarios recibidos al Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-011-SECRE-2000, Gas natural comprimido para uso automotor.- Requisitos mínimos de seguridad en instalaciones vehiculares (cancela y sustituye en la parte correspondiente a la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SCFI-1994, Gas Natural Comprimido para uso Automotor. Requisitos de Seguridad para Estaciones de Servicio e Instalaciones Vehiculares), y

Cuarto. Que como resultado de lo expuesto en los Considerandos anteriores, se concluye que se ha dado cumplimiento al procedimiento que señalan los artículos 38, 44, 45, 47 y demás relativos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, por lo que se expide la siguiente Norma Oficial Mexicana NOM-011-SECRE-2000, Gas natural comprimido para uso automotor.- Requisitos mínimos de seguridad para instalaciones vehiculares, que cancela y sustituye en la parte correspondiente a la Norma Oficial Mexicana NOM-031-SCFI-1994, Gas Natural Comprimido para uso Automotor. Requisitos de Seguridad para Estaciones de Servicio e Instalaciones Vehiculares.

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-011-SECRE-2002, GAS NATURAL COMPRIMIDO PARA USO AUTOMOTOR. REQUISITOS MINIMOS DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES VEHICULARES

INDICE

0. Introducción

1. Objetivo

2. Campo de aplicación

3. Referencias

4. Definiciones

5. Clasificación

6. Características de las instalaciones

7. Métodos de prueba

8. Certificado

9. Bibliografía

10. Concordancia con normas internacionales

11. Vigilancia

12. Vigencia

0. Introducción

Esta Norma Oficial Mexicana (la norma) se emite para regular la utilización de gas natural comprimido como combustible en vehículos automotores y la instalación de los sistemas de combustión para gas natural comprimido en los vehículos.

1. Objetivo

Esta Norma establece los requisitos mínimos de seguridad que deben cumplir las instalaciones vehiculares para uso de gas natural comprimido.

2. Campo de aplicación

Esta Norma aplica a los sistemas de gas natural comprimido en los vehículos automotores que lo utilizan como combustible.

3. Referencias

La presente Norma se complementa con las normas oficiales mexicanas, o las que las sustituyan, siguientes:

NOM-001-SECRE-1997, Calidad del Gas Natural.

NOM-006-SECRE-1999, Odorización del Gas Natural.

NOM-001-SEDE-1999, Instalaciones eléctricas (utilización).

NOM-008-SCFI-1993, Sistema General de Unidades de Medida.

4. Definiciones

Para efectos de la aplicación de esta Norma se establecen las definiciones siguientes:

4.1 Accesorios del cilindro: Dispositivos conectados al cilindro con propósitos de seguridad, control y operación.

4.2 Alta presión: Es la presión a la que se encuentra el GNC desde el cilindro hasta la última etapa de regulación inclusive.

4.3 Autoridad competente: La Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión Reguladora de Energía en los términos de las atribuciones asignadas mediante el Reglamento Interior de dicha Secretaría.

4.4 Boquilla de recepción: Aditamento instalado en el vehículo cuyo uso es específico para cargar GNC.

4.5 Canal de venteo: Ducto o tubería que conduce hacia la atmósfera los desfogues de los dispositivos de relevo de presión.

4.6 Capacidad: El volumen nominal máximo que puede tener un recipiente.

4.7 Cilindro: Recipiente que se instala en el vehículo automotor para almacenar GNC.

4.8 Compartimento cerrado: Espacio interior del vehículo (cabina) y el espacio destinado para guardar equipaje.

4.9 Disco de ruptura: Elemento cuya función es desfogar en su totalidad el contenido de un cilindro, recipiente o sistema de GNC al excederse la presión de operación máxima permitida, que puede estar integrado a las válvulas o puede estar instalado solo.

4.10 Ducto eléctrico: Elemento donde se alojan los cables eléctricos.

4.11 Estampar o etiquetar: Adherir o marcar en un espacio específico, un símbolo u otra marca de identificación y de información.

4.12 Fuente de ignición: Dispositivo, objetos o equipos capaces de proveer suficiente energía térmica para encender mezclas inflamables de aire-gas.

4.13 Fusible térmico: Dispositivo de seguridad accionado por temperatura, que permite desfogar el gas en caso de incendio. Debe fundir cuando se alcanza una temperatura de $100^{\circ}C \pm 10^{\circ}C$.

4.14 Gas inerte: Gas no combustible, no tóxico, no corrosivo.

4.15 Gas natural: Mezcla de hidrocarburos compuesta primordialmente por metano.

4.16 Gas natural comprimido (GNC): Gas natural que ha sido sometido a un proceso de compresión.

4.17 Instalación vehicular: Equipo, accesorios y materiales que constituyen el sistema de almacenamiento y alimentación de gas natural al motor en un vehículo.

4.18 Línea de combustible: Tubería, tubo flexible, mangueras y conexiones que cumplen con las especificaciones para alimentación de GNC.

4.19 Material no combustible: Material que en presencia de oxígeno y de una fuente de ignición no se quema, ni se consume y tampoco libera vapores o humos.

4.20 Metro cúbico estándar: Un metro cúbico de gas a presión absoluta de 101.32 kPa y temperatura de 288.15 K.

4.21 Presión de operación: Presión de GNC de 20 MPa (200 bar) a 25 MPa (250 bar) a una temperatura de 288.15 K (15°C).

4.22 Presión de operación máxima permitida: Presión máxima a la cual puede operar el sistema desde el cilindro hasta el primer paso de regulación.

4.23 Presión de llenado: La presión alcanzada en los cilindros al momento de llenado debe ser de 20 MPa (200 bar) para las estaciones sin sistema de compensación de temperatura. La presión de llenado de los cilindros de los vehículos en una estación que cuente con un sistema de compensación de temperatura no debe exceder los 25 MPa (250 bar), cualquiera que sea la temperatura.

4.24 Prueba hidrostática: Ensayo al que se somete la instalación o sus componentes a un valor de presión predeterminado utilizando aceite o agua neutra y libre de partículas en suspensión, como elemento de prueba, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

4.25 Prueba neumática: Ensayo al que se somete la instalación o sus componentes a un valor de presión predeterminado utilizando aire, gas inerte o GNC como elemento de prueba.

4.26 Punto de rocío a la presión del cilindro: Temperatura a la cual el vapor de agua empieza a condensarse, referida a la presión de operación del cilindro.

4.27 Punto de transferencia: Punto donde se efectúa la conexión entre la boquilla de recepción del vehículo y el conector de llenado del surtidor para transferir GNC de la estación de servicio al cilindro del vehículo.

4.28 Regulador de presión: Dispositivo cuya función es reducir y controlar la presión del gas natural a un valor determinado a la salida, manteniéndolo dentro de límites previamente definidos.

4.29 Cilindros del vehículo: Uno o más cilindros montados en el vehículo, conectados entre sí, que trabajan a la misma presión y almacenan GNC para el motor.

4.30 Sistema de montaje: Soportes que se fijan al vehículo para sujetar los componentes de la instalación vehicular.

4.31 Temperatura de rocío: Temperatura a la cual el vapor de agua empieza a condensarse en una corriente de gas natural.

4.32 Válvula de corte: Dispositivo de cierre de paso de gas natural, puede ser manual o automática.

4.33 Válvula de relevo de presión: Dispositivo que desfoga el exceso de presión, cuando ésta sobrepasa el nivel máximo predeterminado.

4.34 Válvula supresora de flujo: Dispositivo que impide o limita el paso de GNC cuando existe una pérdida brusca de presión o un exceso de flujo.

5. Clasificación

Las instalaciones vehiculares se clasifican en dos tipos como sigue:

Tipo I Sistema de carburador.

Tipo II Sistema de inyección electrónica.

6. Características de las instalaciones

6.1 Las instalaciones vehiculares deben cumplir con los requisitos de seguridad que se establecen a continuación y todos sus componentes y materiales deben ser respaldados por las especificaciones, normas aplicables, memorias de cálculo y/o certificados de calidad expedidos por el fabricante.

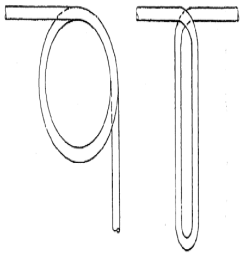
6.1.1 La conexión de llenado del surtidor al vehículo no debe permitir el paso de GNC cuando el conector de llenado del surtidor de la estación de servicio no esté acoplado correctamente o se encuentre separado del punto de transferencia.

6.1.2 En todas las roscas macho se debe aplicar un material sellante que sea inerte a la acción de gas natural. Además deberá lubricar la junta y soportar la presión de trabajo de la tubería. En las roscas tipo cónico, no es necesaria la aplicación del material sellante.

6.1.3 La tubería y conexiones deben estar limpias, libres de viruta, y rebaba de corte para evitar fugas.

6.1.4 Los dobleces en el tubo flexible se deben realizar con herramienta adecuada de acuerdo con el diámetro nominal y no deben ser menores a 2 veces el diámetro del mismo (ver figura típica 1). El tubo flexible no debe presentar daños.

6.1.5 La tubería, tubo flexible, conexiones y otros componentes entre el cilindro y la primera válvula de cierre deben soportar como mínimo una prueba neumática de 1,1 veces la presión de operación sin que se presente fuga.



TIPO RIZO TIPO CLIP

Figura típica 1.- Dobleces para evitar vibración y esfuerzos en la línea de alta presión

6.1.6 Sólo se permite el uso de los siguientes componentes siempre y cuando cumplan con las especificaciones siguientes:

a) La conexión de llenado de combustible debe ser hecha de cualquier material adecuado para la presión de operación y uso de GNC.

b) Se puede utilizar tubería, tubo flexible y conexiones de cualquier material adecuado para la presión de operación después del primer paso de regulación de presión en el sistema de alimentación del combustible al motor.

6.1.7 Las juntas o conexiones deben estar localizadas en lugares accesibles para facilitar su inspección visual.

6.1.8 Las válvulas, empaques de válvulas y material de empaque deben ser adecuados para soportar el GNC a las presiones y temperaturas a las cuales estarán sujetas bajo condiciones normales de operación.

6.1.9 Las válvulas de corte deben contar con un certificado del fabricante que garantice que es capaz de soportar sin ruptura una prueba hidrostática a 1,5 veces la presión de operación máxima permitida, sin ruptura. Una vez instaladas las válvulas deben someterse a una prueba neumática a una presión de 1,1 veces la presión de operación para detectar fugas.

6.1.10 Las válvulas de relevo de presión no deben tener en su cuerpo dispositivo de alzamiento (palancas). Cuando el ajuste sea externo, debe colocarse a las válvulas un sello para prevenir su manipulación por personas no autorizadas. Si en algún momento es necesario romper el sello, la válvula debe ser retirada del servicio hasta que sea calibrada y sellada nuevamente. Cualquier ajuste debe ser hecho por el fabricante o por compañías autorizadas por el mismo fabricante, quienes deben colocar una etiqueta permanente con el ajuste de presión, capacidad de flujo y fecha en que se realizó dicho ajuste.

6.1.11 No deben ser utilizadas válvulas de cierre primario de hierro colado.

6.1.12 No deben ser instaladas válvulas cuyo vástago pueda ser retirado sin la remoción del bonete completo o el desensamblado del cuerpo.

6.1.13 El cuerpo de las válvulas debe tener un marcado o etiquetado del fabricante donde se indique la presión de operación máxima permitida.

6.1.14 Se debe instalar para cada cilindro una válvula de operación manual o automática adecuada a las condiciones de presión de operación.

6.1.15 Se debe instalar en el cabezal de un grupo de cilindros, una válvula de corte manual o automática y ubicarla lo más cerca posible a éstos.

6.1.16 Se deben utilizar válvulas supresoras de flujo, las cuales deberán ser colocadas en cada cilindro.

6.1.17 No se debe utilizar GNC para operar cualquier equipo o dispositivo que no haya sido diseñado para servicio de GNC.

6.1.18 Las válvulas de seguridad se deben mantener en condiciones adecuadas de operación de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que resulten aplicables o con los lineamientos de los fabricantes.

6.1.19 Los equipos, dispositivos de relevo de presión e instrumentos se deben instalar, operar y mantener en estricto apego a los manuales del fabricante.

6.1.20 En los cilindros no se debe aplicar ningún tipo de soldadura, ni realizar maquinado, ni en general, modificación alguna que no esté avalada en el diseño del fabricante.

6.1.21 El GNC debe cumplir con la NOM-001-SECRE-1997, Calidad del gas natural.

6.2 Instalaciones vehiculares

6.2.1 Sistema de carburador

En este sistema el gas natural se alimenta al motor a través de un mezclador al carburador. Los siguientes sistemas y componentes de sistemas deben ser listados o aprobados:

a) Cilindros;
b) Sistemas de montaje de cilindros al vehículo;
c) Válvulas;
d) Dispositivos de relevo de presión (discos de ruptura, fusible térmico o dispositivo equivalente);
e) Manómetros;
f) Reguladores de presión;
g) Mangueras y sus conexiones;
h) Boquilla de recepción;
i) Sistema de alimentación de combustible al motor, mezclador;
j) Equipo eléctrico y electrónico relacionado al sistema de GNC, y
k) Tubería y conexiones.
Excepción: Aquellos vehículos que están certificados por el fabricante de que cumplen con los Estándares de Seguridad Federales para Vehículos de Motor o la norma que aplique, de acuerdo con la normatividad internacional, ver inciso 9.11.

6.2.2 Sistema de inyección electrónica

En este sistema el gas natural se alimenta al motor a través de inyectores directamente o a través de un mezclador hacia la cámara de combustión. Los siguientes sistemas y componentes de sistemas deben ser listados y aprobados:

a) Cilindros;
b) Sistemas de montaje de cilindros al vehículo;
c) Válvulas;
d) Dispositivos de relevo de presión (discos de ruptura, fusible térmico o dispositivo equivalente);
e) Manómetros;
f) Reguladores de presión;
g) Mangueras y sus conexiones;
h) Boquilla de recepción;
i) Sistema de alimentación de combustible al motor, mezclador;
j) Equipo eléctrico y electrónico relacionado al sistema de GNC, y
k) Tubería y conexiones.
Excepción: Aquellos vehículos que están certificados por el fabricante de que cumplen con los Estándares de Seguridad Federales para Vehículos de Motor o la Norma que aplique, ver inciso 9.11.

6.3 Requisitos de Seguridad.

6.3.1 Los cilindros deben estar certificados por el fabricante de conformidad con las normas especificadas en la bibliografía de esta Norma, ver incisos 9.8 y 9.11.

6.3.2 Los componentes instalados dentro del compartimento del motor deben estar diseñados y fabricados para uso de GNC y para trabajar dentro de un rango de temperaturas de 253 K hasta 355 K (-20°C hasta 82°C) e instalados lo más alejados de las partes calientes del motor y sistemas de ignición.

6.3.3 Entre la(s) válvulas de el (los) cilindro(s) del vehículo y el primer paso de regulación de presión, sólo se permite un empate por cilindro añadido, para uso de gas natural comprimido, de acuerdo con la especificación del fabricante para las presiones que se establecen en esta Norma.

6.3.4 Los cilindros de GNC pueden ser instalados en los vehículos de acuerdo con lo siguiente:

a) En compartimiento cerrado, debiendo sellar las conexiones y conectar un venteo hacia el exterior, y
b) En vehículos de carga o transporte de pasajeros: en la caja, en los costados a los lados del chasis, entre los largueros del chasis y en la parte superior del vehículo (techo), de acuerdo con las distancias especificadas por el fabricante.

Los cilindros recubiertos con fibras sintéticas deben estar protegidos contra la luz ultravioleta.

6.3.5 Cada cilindro debe ser montado en el vehículo en una localización que minimice los daños por colisión. Ninguna parte del cilindro o sus accesorios deben sobresalir de los lados del vehículo.

6.3.6 Cuando los cilindros se instalen en la parte inferior de los vehículos, se debe cuidar que cuando éste se encuentre cargado con la máxima carga establecida por el fabricante (Peso Bruto Vehicular), la distancia mínima que exista entre el suelo y la parte más baja del sistema de montaje, nunca sea menor de 255 mm. (Ver figura típica 2).

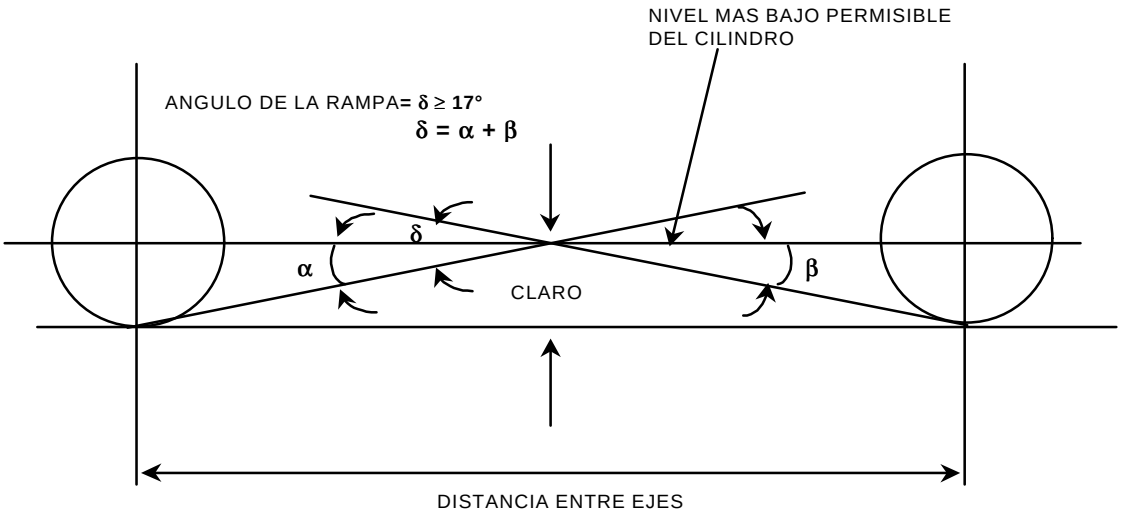


Figura típica 2.- Método para determinar el nivel más bajo permisible del cilindro de GNC

6.3.7 Cuando los cilindros se instalen en la parte inferior del vehículo y éstos sean recubiertos de fibra sintética, deben estar protegidos con un escudo que los proteja contra daños que puedan causar objetos lanzados durante la marcha del vehículo. Entre el cilindro y el escudo debe existir una separación mínima de 10 mm; además, el escudo debe contar con perforaciones para drenar (ver figura típica 3).

6.3.8 Cuando los cilindros se instalen en la parte inferior de los vehículos, no deben de estar localizados enfrente del eje delantero o más atrás del punto donde se acoplan los soportes de la defensa trasera al chasis. Cada válvula del cilindro debe estar protegida contra daño físico usando un escudo (ver figura típica 3).

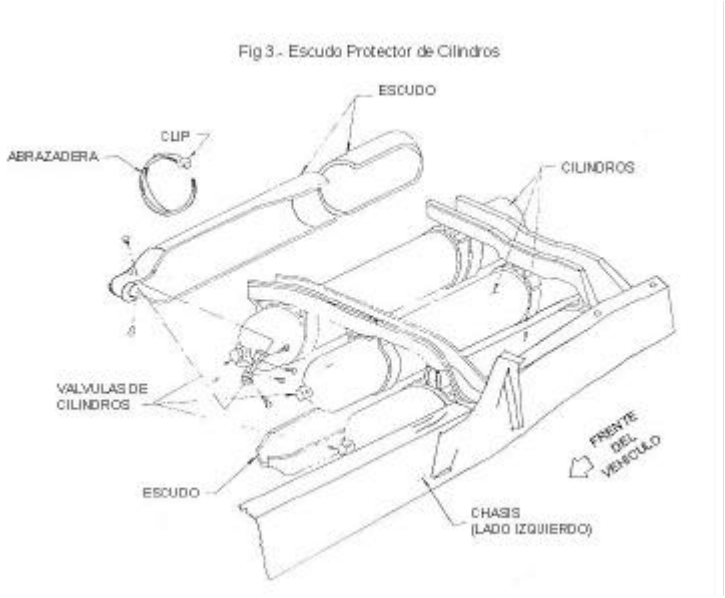


Figura típica 3.- Escudo protector de cilindros

6.3.9 Cada soporte metálico de cilindro (ver figura típica 4), debe estar asegurado a la carrocería, cama de carga o al chasis utilizando abrazaderas, placas, contraplacas y tuercas autosellantes de tal manera que sea capaz de resistir una fuerza estática de ocho veces el peso del cilindro completamente presurizado en las seis direcciones principales, tal como se muestra en la figura típica 5. Para fijar el sistema de montaje de los cilindros al vehículo, se deben cumplir las restricciones del fabricante del vehículo.

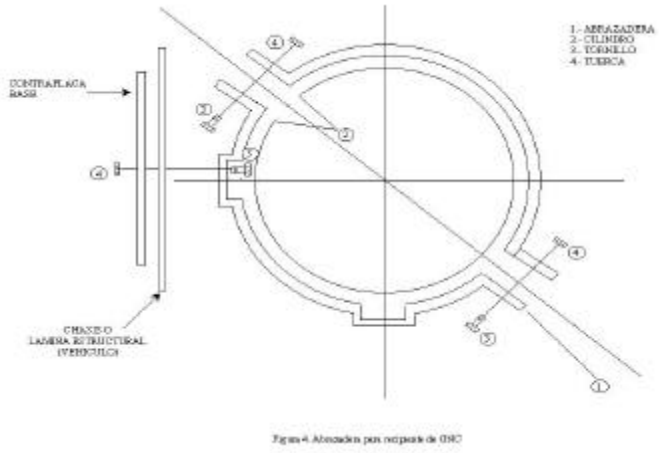


Figura típica 4.- Soporte metálico de cilindro

6.3.10 Cada cilindro de GNC debe estar asegurado a sus soportes de tal manera que sea capaz de resistir una fuerza estática de ocho veces el peso del cilindro presurizado en las seis direcciones principales, tal como se muestra en la figura típica 5, con un desplazamiento máximo de 13 mm. Los cilindros nunca deben ser soportados por válvulas, cabezales u otras conexiones del sistema de combustible.



Fig 5.- Direccionamientos principales

Figura típica 5.- Direcciones principales

6.3.11 Los cilindros de GNC localizados a menos de 200 mm del sistema de escape deben estar protegidos contra calor directo por medio de una mampara de un material que lo aísle del calor radiado por el sistema de escape.

6.3.12 Las abrazaderas y sus soportes no deben estar en contacto directo con el cilindro, con este fin, debe instalarse un aislante de hule que no retenga el agua entre el cilindro y sus soportes. Las abrazaderas deben tener un acabado de acuerdo con el inciso 6.3.13 de esta Norma y utilizarse tuercas y tornillos con un grado mínimo de 8W.

6.3.13 Todas las superficies en acero al carbono deben estar protegidas contra la corrosión.

6.3.14 Cuando un cilindro esté localizado en un compartimento cerrado del vehículo, como se muestra en la (figura típica 6) en el cual se pueda acumular gas natural, el cilindro debe ser instalado de tal forma que: 2) La descarga del dispositivo de relevo de presión referido en el inciso 1 cumpla con los requisitos siguientes:

1) El dispositivo de relevo de presión para protección del cilindro quede instalado en el mismo compartimiento del vehículo donde está el cilindro.

2) La descarga del dispositivo de relevo de presión referido en el inciso 1 cumpla con los requisitos siguientes:

a) Ventee al exterior a través de un tubo flexible cuyo diámetro no sea menor que el diámetro nominal de salida del dispositivo de relevo de presión; este tubo se debe asegurar a intervalos de 300 mm cuando el tubo exceda 600 mm de longitud y siempre soportarse al final, y

b) Esté localizada de tal manera que la salida de venteo no sea afectada por desechos lanzados hacia arriba durante la marcha, tales como nieve, hielo, lodo, tierra, etc.

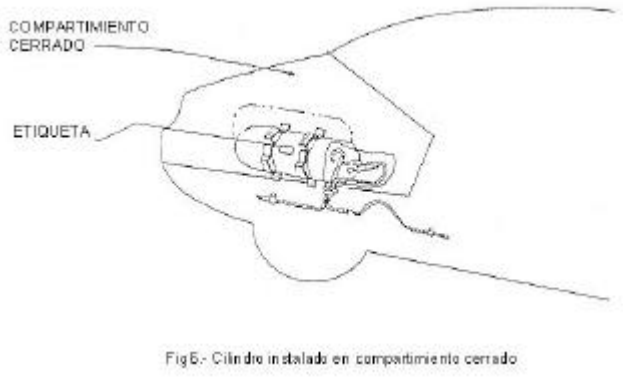


Figura típica 6.- Cilindro instalado en compartimiento cerrado

6.3.15 La distancia mínima entre los cilindros y la parte lateral exterior de la carrocería debe ser por lo menos de 100 mm.

6.3.16 Por ningún motivo se debe aplicar ningún tipo de soldadura en los cilindros.

6.3.17 Los canales de venteo deben ser construidos de tubo flexible con conexiones roscadas tipo alto sello.

6.3.18 Los canales de venteo no deben descargar hacia el compartimiento del motor, al sistema de escape o hacia el interior de las cavidades de las ruedas.

6.3.19 Cilindros implicados en un accidente:

a) Los cilindros que han estado sujetos a un accidente vehicular se deben inspeccionar de acuerdo con el criterio establecido por el fabricante antes de que el cilindro se vuelva a poner en servicio, y

b) Los cilindros que han sido sujetos a fuego directo o a un incendio se deben retirar del servicio y destruirse.

6.3.20 Los cilindros deben estar colocados de tal manera que la etiqueta de identificación sea completamente visible (ver figura típica 6).

6.3.21 Las conexiones de los cilindros de GNC ubicados dentro del compartimiento cerrado deben estar encerradas en una cubierta a prueba de fugas u otro dispositivo alternativo igualmente a prueba de fugas que encierre y ventee el gas directamente al exterior del vehículo (ver figura típica 7).

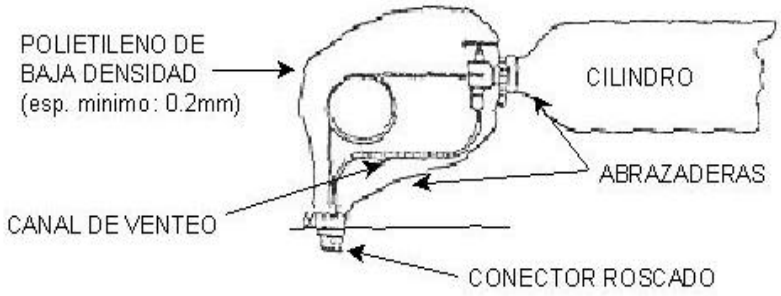


Figura típica 7.- Cubierta a prueba de fugas en compartimiento cerrado

6.3.22 Los cabezales que conectan a los cilindros ubicados en un compartimiento cerrado deben quedar instalados en una localización protegida o cubiertos para prevenir daños causados por objetos que puedan desplazarse durante la marcha del vehículo.

6.3.23 Los tubos flexibles y las conexiones deben estar limpias de viruta y rebaba de corte o roscado.

6.3.24 Para evitar la abrasión, las líneas de suministro que pasen a través de un panel o pared, deben estar protegidas por anillos protectores o dispositivos similares (Ver figura típica 8).

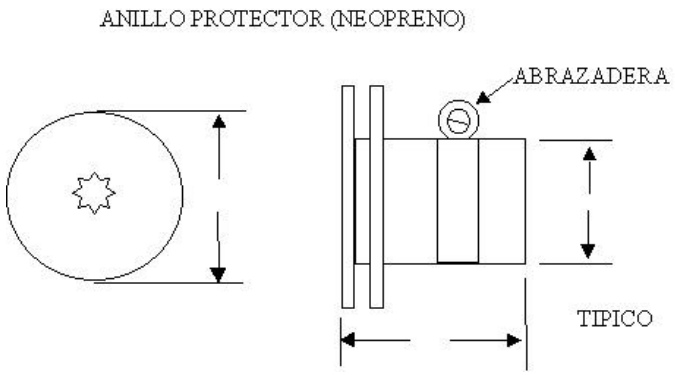


Figura típica 8.- Anillo protector de neopreno

6.3.25 Las líneas de combustible de los cilindros al compartimento del motor deben ser abrazadas y soportadas para minimizar la vibración y protegerlas contra daño o ruptura ocasionadas por esfuerzo o desgaste. Las abrazaderas deben ser metálicas y recubiertas con un material aislante para que no tengan contacto directo con la línea y se deben fijar firmemente cuando menos cada 610 mm (ver figura típica 9).

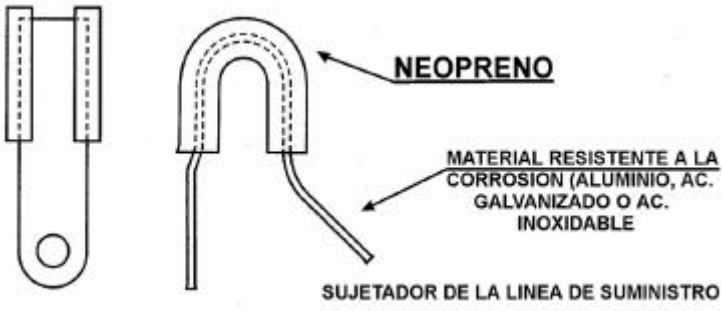


Figura típica 9.- Sujetador para línea de suministro

6.3.26 La tubería de alta presión deberá tener una presión de ruptura mayor o igual a 100 MPa (1000 bar).

6.3.27 Los dobleces en el tubo flexible deben realizarse con herramienta adecuada (doblador de tubo), de acuerdo con el diámetro nominal y no deben ser menores a 2 veces el diámetro del mismo (ver figura típica 1).

6.3.28 Las conexiones deben estar localizadas en lugares accesibles para facilitar su inspección visual.

6.3.29 Cada cilindro debe estar equipado con una válvula de salida del cilindro, cuya operación sea manual o automática directamente roscada a éste, adecuada para el uso de GNC y para la presión de operación del cilindro (ver figura típica 10).

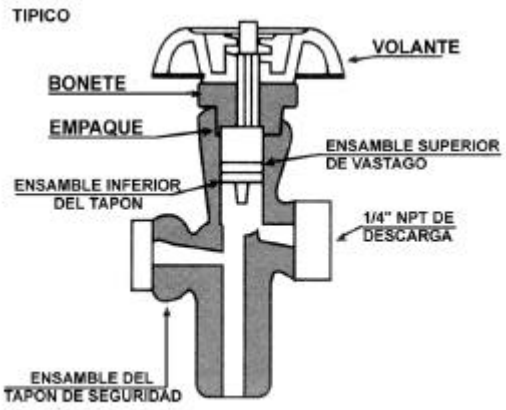


Figura típica 10.- Válvula de salida de cilindro

6.3.30 Se debe instalar una válvula de corte manual o automática en un lugar accesible que permita aislar el (los) cilindro(s) del resto del sistema de combustible. La válvula de corte no debe girar más de 90° de la posición abierta a cerrada. Cuando se trate de vehículos escolares y transporte público, dichas válvulas, cuando sean manuales, se deben instalar en el exterior y tan cerca como sea posible a la entrada delantera, para que el conductor del vehículo pueda tener acceso inmediato en caso de emergencia (ver figura
típica 11).

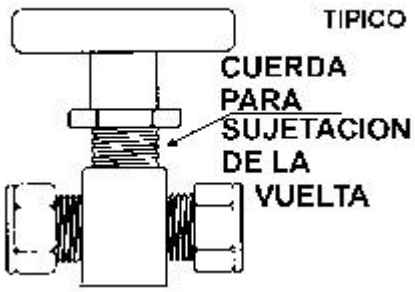


Figura típica 11.- Válvula de corte

6.3.31 La válvula debe ser montada firmemente e instalada en un lugar protegido para minimizar el daño por vibración u objetos mal asegurados, a excepción de las válvulas que están diseñadas para utilizarse en un compartimento cerrado y que cuentan con un sistema integrado de venteo (ver figura típica 12).

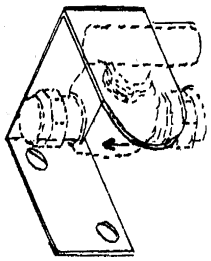


Figura típica 12.- Soporte para la válvula de corte

6.3.32 Se debe instalar una válvula en el sistema que automáticamente impida el flujo de GNC al motor, cuando el motor no esté operando, aun cuando el interruptor de ignición se encuentre en la posición de encendido.

6.3.33 El sistema de llenado de combustible debe estar equipado con una válvula de retención localizada lo más cercano posible al punto de transferencia y que evite el retorno de GNC desde el (los) cilindro(s) a éste.

6.3.34 Los cilindros no deben ser llenados a una presión mayor que la de operación, medida a la temperatura especificada por el fabricante .

6.3.35 La presión de operación se debe especificar en la etiqueta o en el grabado del cilindro, según el tipo de cilindro (compuesto o metálico).

6.3.36 En caso de instalarse un indicador de contenido de gas almacenado en el (los) cilindro(s), se debe instalar dentro del compartimento del conductor del vehículo, en un lugar que sea visible y legible desde el asiento del conductor y no debe trabajar directamente con el flujo del gas.

6.3.37 El manómetro instalado cerca de la boquilla de recepción y posterior a la válvula de retención debe estar equipado con un orificio limitador de flujo. En caso de que la carátula del manómetro sea de cristal, éste debe ser inastillable y tener un dispositivo de relevo de presión en el cuerpo del manómetro. Los vehículos diseñados de fábrica o convertidos al uso de GNC pueden carecer de este manómetro. El vehículo debe tener instalado un indicador de contenido o manómetro o ambos.

6.3.38 Los manómetros se deben montar firmemente e instalarse en un lugar protegido para prevenir daños por vibración u objetos mal asegurados.

6.3.39 Para reducir la presión del gas a la presión requerida por el mezclador de aire-combustible que alimenta el motor del vehículo se debe instalar uno o varios reguladores de alta presión.

6.3.40 La entrada del regulador de presión y cada cámara de éste deben estar diseñadas para soportar la presión de operación con un factor de seguridad de 2,5 veces.

6.3.41 Las cámaras de baja presión de los reguladores deben estar provistas de un dispositivo de relevo o bloqueo de presión, o deben ser capaces de resistir la presión de operación de la cámara de presión mayor.

6.3.42 Los reguladores deben ser instalados de tal forma que no estén soportados por las líneas de gas conectadas a éstos.

6.3.43 La conexión de llenado del surtidor o poste y la boquilla de recepción debe cumplir con las normas correspondientes, de acuerdo con la bibliografía.

6.3.44 La boquilla de recepción de los vehículos debe cumplir con los requisitos siguientes:

a) La boquilla de recepción debe ser compatible con el conector de llenado del surtidor, los cuales deben estar firmemente conectados al momento del llenado y no deben permitir la salida del gas cuando no estén acoplados correctamente o se separen, y

b) Mantener la hermeticidad de la conexión a la presión de operación máxima permitida, y

c) La boquilla de recepción debe estar diseñada para operar a presiones de suministro de combustible de 20 MPa (200 bar) o 25 MPa (250 bar). Las boquillas de recepción deben estar diseñadas para acoplarse con la conexión de llenado, de acuerdo con la presión de llenado de la estación.

6.3.45 El soporte de la boquilla de recepción de los vehículos debe estar firmemente montado. (ver figura típica 13).

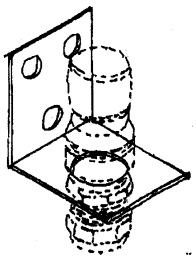


Figura típica 13.- Soporte de la boquilla de recepción

6.3.46 El cableado debe estar asegurado, protegido de la abrasión y canalizado por medio de un material aislante.

6.3.47 El sistema eléctrico debe ser diseñado y protegido con fusibles de acuerdo con la magnitud de las corrientes manejadas.

6.3.48 Los motores de los vehículos deben estar apagados cuando se les transfiera GNC. De igual forma, el motor de una plataforma debe estar apagado cuando ésta transfiera GNC a un almacenamiento.

6.3.49 Durante la transferencia de GNC hacia o desde la plataforma debe ser aplicado el freno de mano o freno de emergencia del vehículo. De igual forma, se deben instalar cuñas de bloqueo en las ruedas para prevenir el movimiento de la plataforma.

6.3.50 El sistema completo no debe presentar fugas, ni deterioros o daños visibles.

6.3.51 Cuando un cilindro de GNC es retirado de un vehículo para ser instalado en otro vehículo debe ser inspeccionado y probado nuevamente de acuerdo con los procedimientos de inspección o recalificación de la norma bajo la cual fue fabricado originalmente.

6.3.52 Se prohíbe cargar un cilindro a una presión mayor a 130% de su presión de operación.

6.3.53 Cuando el cilindro ha estado sujeto a una presión que lleve la tensión del material por arriba de su límite elástico, conforme a las especificaciones del fabricante, dicho cilindro se debe retirar del servicio y ser destruido.

6.3.54 Cuando el vehículo ha estado sujeto a una colisión (accidente) se deben revisar todos los componentes del sistema de combustible de GNC para determinar los daños, retirar lo dañado y sustituirlo por material nuevo. Una vez hecho esto, el sistema en su totalidad debe ser probado de acuerdo con el inciso 7.1 de esta Norma.

6.3.55 Se deben mantener en condiciones seguras los cilindros, accesorios del cilindro, sistemas de tubería, sistemas de ventilación y otros componentes. Se debe verificar la vigencia de los certificados de los componentes del sistema.

6.3.56 Se debe dar mantenimiento a los componentes de alivio de presión en los cilindros, observando lo siguiente:

a) Asegurarse que no existan causas que interfieran su funcionamiento, tales como pintura o polvo que obturen los componentes de alivio de presión;

b) Sólo se le permitirá al personal calificado dar servicio a los componentes de alivio de presión;

c) Sólo se usarán ensambles o partes originales de fábrica o aprobadas por autoridad competente, para la reparación de componentes de alivio de presión, y

d) Ningún aparato de alivio de presión que haya sido usado anteriormente debe ser instalado en otro cilindro de combustible.

6.3.57 Se deben realizar las siguientes actividades durante el mantenimiento del vehículo:

a) Cerrar la válvula de entrada de combustible que se encuentra más cercana al motor, a menos que se requiera de la operación del motor;

b) Prohibir fuego abierto, equipo para soldar y equipo para esmerilar cerca de los cilindros y líneas de combustible de alta presión;

c) Evitar daños en los cilindros, incluyendo acciones tales como tirar, arrastrar o rodar los cilindros;

d) Prevenir la exposición a químicos corrosivos, tales como ácido de batería o solventes para limpiar metal en los cilindros recubiertos con algún compuesto;

e) Almacenar los cilindros de manera que no sufran ningún deterioro;

f) Usar componentes recomendados por el fabricante del cilindro cuando se reinstale éste a su configuración original;

g) Evitar maniobras con equipo que pueda causar daño a los cilindros, tales como las grúas y gatos hidráulicos, y

h) Prohibir que el personal camine sobre cilindros instalados en la parte superior del vehículo.

6.3.58 Desfogue del GNC de cilindros vehiculares.

El venteo o despresurización de un cilindro de gas natural comprimido debe ser efectuado por personal entrenado siguiendo los procedimientos escritos. El gas que se va a sacar del cilindro debe ser desechado a un sistema cerrado de transferencia o venteado por un método aprobado de venteo atmosférico;

6.3.59 El personal que efectúa la despresurización del cilindro debe:

a) Conectar a tierra para eliminar la electricidad estática del vehículo;

b) Limitar el caudal de descarga de gas en los cilindros forrados de fibra sintética a un valor no mayor que el especificado por el fabricante de los mismos, y

c) Asegurar los cilindros durante la despresurización para prevenir movimientos del mismo.

6.3.60 El venteo del gas, contenido en los cilindros, debe realizarse en instalaciones adecuadas. Dichas instalaciones, deben contar con un tubo que canalice la descarga del gas al exterior de la instalación. Por otra parte, el tubo debe estar libre de obstrucciones.

7. Métodos de prueba

7.1 Prueba neumática.

7.1.1 Objetivo y campo de aplicación.

Este método se aplica para verificar la hermeticidad del sistema o sus componentes, mediante la aplicación de un gas inerte a presión o GNC, en las instalaciones vehiculares.

7.1.2 Fundamento.

Este método de prueba se aplica para determinar que las instalaciones de alta presión de GNC no presentan fugas en las conexiones y para verificar que los elementos resisten sin deformaciones el esfuerzo producido por el gas inerte a presión o el GNC.

7.1.3 Equipo y materiales.

a) Equipo capaz de alcanzar la presión de prueba;

b) Manómetros con escalas graduadas no mayor a 1,3 veces la presión de prueba;

c) Registrador de presión con gráfica;

d) Válvulas capaces de soportar la presión de prueba;

e) Tubería, mangueras y conexiones adecuadas para conectar el sistema, y

f) Gas inerte suficiente para poder presurizar el sistema o elemento a probar a la presión de prueba.

7.1.4 Preparación y acondicionamiento de la prueba.

Se instala el equipo con manómetro, registrador con gráfica tiempo-presión, válvulas, tubería, mangueras y conexiones en forma tal que el gas inerte o GNC sea inyectado a través de todo el sistema o componente. Asimismo, se debe verificar que la última conexión al registrador debe probarse con una solución tensoactiva.

7.1.5 Procedimiento.

a) Elevar gradualmente la presión hasta alcanzar aproximadamente 50% de la presión de operación y comprobar la instalación o componente;

b) Incrementar la presión de prueba 0,1 la presión de operación cada 10 minutos hasta alcanzar 1,1 veces la presión de operación. Aislar el sistema y mantener la presión de prueba por lo menos 5 minutos, y

c) Mantener la presión de prueba durante un tiempo suficiente para permitir la inspección en todos los puntos y conexiones de la tubería de alta presión.

7.1.6 Expresión de resultados.

Verificar que en cada uno de los puntos no existan fugas utilizando una solución tensoactiva formadora de espuma o un detector del gas inerte utilizado en la prueba, corroborando esto, mediante la gráfica del registrador de presión. En el caso de presentarse alguna fuga, ésta debe ser eliminada y se debe repetir la prueba hasta su aceptación.

7.1.7 La UV debe avalar el resultado de la prueba.

7.2 Verificación de la distancia mínima del suelo a la parte más baja del sistema de montaje.

7.2.1 Objetivo y campo de aplicación.

Este método se aplica en prototipos para verificar que la instalación de los cilindros cumpla con la distancia mínima del suelo a la parte más baja del sistema de montaje.

7.2.2 Fundamento.

Se verifica que la distancia mínima del suelo al punto más bajo de la instalación de los cilindros y sus componentes de montaje, debe ser igual o mayor a 255 mm. El ángulo de rampa al punto medio de la distancia entre ejes debe ser mayor o igual a 17 grados (ver figura típica 2).

7.2.3 Equipo y materiales.

a) Flexómetro;

b) Manual del usuario donde se especifica el peso bruto vehicular y la distancia entre ejes de la unidad, y

c) Material necesario para alcanzar el peso bruto vehicular.

7.2.4 Preparación y acondicionamiento de la prueba.

Se debe colocar el vehículo en una superficie plana y horizontal; adicionar el material en el vehículo hasta alcanzar el peso bruto vehicular.

7.2.5 Procedimiento. Se debe:

a) Medir el claro entre la parte más baja del cilindro o de sus componentes y el piso, y

b) Calcular el ángulo de rampa con la distancia entre ejes y el claro existente, tal como se indica (ver figura típica 2).

7.2.6 Expresión de resultados.

Se debe comprobar que la distancia no sea menor a 255 mm y el ángulo de rampa sea mayor o igual a 17° (grados) (ver figura típica 2).

7.3 Prueba de fugas en instalaciones vehiculares.

7.3.1 Objetivo y campo de aplicación.

Este método se aplica para verificar anualmente la hermeticidad de las instalaciones o sus componentes, mediante la aplicación de presión con GNC, e inspección exterior visual de los cilindros y sujeción, en las unidades vehiculares.

7.3.2 Fundamento.

Este método de prueba se aplica para determinar si la instalación y los componentes utilizados para contener GNC, no presentan fugas en las conexiones y sistema.

7.3.3 Equipo y materiales.

a) Cilindro de la unidad cargado con GNC a la presión de operación;

b) Manómetros con escalas graduadas no mayor a 1,3 veces la presión de prueba, y

c) Medio de detección de fugas (detector de mezcla explosiva o solución tensoactiva formadora de espuma).

7.3.4 Preparación y acondicionamiento de la prueba.

Verificar que la o las válvula(s) del o los cilindros estén abiertas.

7.3.5 Procedimiento. Se debe:

a) Presurizar el sistema hasta que éste alcance su presión de operación, y

b) Aplicar el medio de detección de fugas en todas las conexiones.

7.3.6 Expresión de resultados.

Se debe verificar que en cada uno de los puntos no existan fugas.

7.3.7 La inspección exterior de los cilindros y del sistema de sujeción se realizará anualmente. Esta inspección puede ser efectuada por el taller instalador original, por un taller autorizado por la autoridad competente, por una Estación de Servicio, o bien por una unidad de verificación. En su caso, el taller, estación de servicio o unidad de verificación emitirá un certificado escrito y sellado, o calcomanía con holograma expedida por la misma. La responsabilidad de la integridad de la instalación vehicular es del usuario, sin perjuicio de que éste haga valer sus derechos como consumidor con respecto a la prestación de los servicios de inspección.

a) Se debe inspeccionar en los cilindros de acero lo siguiente:

- **i.** Corrosión externa;
- **ii.** Cortaduras, socavados, ranuras;
- **iii.** Abolladuras o daño por impacto;
- **iv.** Quemaduras por arco y antorcha (soldadura);
- **v.** Protuberancias;
- **vi.** Defectos en el cuello, y
- **vii.** Daño por calentamiento o fuego.

b) Se debe inspeccionar en los cilindros con reforzamiento por fibras sintéticas lo siguiente:

- **i.** Daño en la superficie del metal expuesta;
- **ii.** Desgaste por abrasión o cortadas;
- **iii.** Partes faltantes de los compuestos o fibras sintéticas;
- **iv.** Daños por impacto;
- **v.** Daños estructurales, y
- **vi.** Daño por calentamiento, fuego o luz ultravioleta (por degradación).

c) Inspección para las abrazaderas de montaje.

- **i.** Corrosión;
- **ii.** Daño mecánico;
- **iii**. Ajuste de las abrazaderas (verificar el apretado de la misma);
- **iv.** Condición de la calidad en el acoplamiento al vehículo, y
- **v.** Condiciones de los revestimientos de la abrazadera que tienen contacto con la pared del cilindro.

7.3.8 La estación de servicio podrá realizar la inspección exterior de los componentes de conversión, tubería, conexiones, válvulas, reguladores, manómetros, sensores, módulos, etc.

Se debe inspeccionar para los componentes tubería, conexiones, válvulas, reguladores, manómetros, sensores, módulos, etc. lo siguiente:

a) Corrosión externa;

b) Cortaduras, socavados, ranuras;

c) Abolladuras o daño por impacto;

d) Protuberancias;

e) Daño por calentamiento o fuego;

f) Daño en la superficie del metal expuesta;

g) Desgaste por abrasión o cortadas;

h) Daños por impacto;

i) Daños estructurales;

j) Daños en empaques;

k) Daño mecánico, y

l) Totalidad de la condición de la abrazadera.

7.4 Las instalaciones vehiculares convertidas, deberán ser verificadas por una Unidad de Verificación. La verificación podrá efectuarse en la propia estación de servicio y el dictamen correspondiente deberá ser exhibido previo a la primera carga del gas natural comprimido.

7.5 El certificado o calcomanía que expida una estación de servicio avala el estado en que se encuentra el cilindro y el sistema de sujeción, el cual tendrá una vigencia de un año y será reconocido por todas las estaciones de servicio.

8. Certificado

El certificado que podrá expedir la estación de servicio debe contar como mínimo con los siguientes puntos:

a) Presión de operación del sistema;

b) Número de serie del vehículo;

c) Número de certificación del sistema;

d) Fecha de instalación;

e) Kilometraje vehicular;

f) Nombre del Instalador;

g) Nombre del taller de instalación, con dirección y teléfono, y

h) Unidad de verificación.

8.1 Cada cilindro debe tener una etiqueta protegida y visible o puede ser marcado en la tapa, de acuerdo con la norma con la que se haya fabricado, con la información siguiente:

a) Sólo para GNC;

b) Designación de Norma;

c) Presión de servicio;

d) Símbolo o distintivo del fabricante;

e) Número de serie;

f) Número de parte del fabricante;

g) Mes y año de fabricación;

h) Fecha de caducidad;

i) Fecha de la próxima prueba; (si aplica), y

j) Temperatura mínima del material de diseño..

8.2 Se debe colocar junto a la válvula de corte, una etiqueta de material resistente con la leyenda indeleble, indicada en la figura típica 14.

"VALVULA DE CORTE"

Figura típica 14.- Leyenda de "Válvula de corte"

9. Bibliografía

Para la elaboración de esta Norma se consultaron los documentos siguientes:

9.1 AGA (American Gas Association):

ANSI/AGA NGV 1, 1992, Requirements for compressed natural gas vehicles (NGV) refueling connection devices.

ANSI/AGA NGV 2, 1992, Basic requirements for compressed natural gas vehicle (NGV) fuel containers.

9.2 API (American Petroleum Institute):

API RP 2003 Protection against ignitions arising out of static, lightning and stray currents, fourth edition 1982.

9.3 ASME (American Society of Mechanical Engineering):

ANSI/ASME B31.3 (1980) American National Standard Code for Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping.

9.4 ASTM (American Society for Testing and Materials):

ASTM A-47-1984, Specification for Malleable Iron Castings.

ASTM A-395-1986, Specification for Ferritic Ductile Iron Pressure-Retaining Castings for Use at Elevated Temperatures.

ASTM A-536-1984, Specifications for Ductile Iron Castings.

ASTM E-136-1982, Standard Method of Test for Behavior of Materials in a Vertical Tube Furnace at 750 °C.

ASTM A-269-1982, Standard for Stainless Steel Seamless Tubing.

ASTM A-105-1982, Forging, Carbon Steel for Piping Components.

ASTM A-106-1982, Seamless Carbon Steel Pipe for High-Temperature Service.

ASTM A-372-1982, Specification for Carbon and Alloy Steel Forging for Thin-Walled Pressure Vessels.

9.5 CGA (Canadian Gas Association):

CGA S-1.1. Pressure Relief Device Standards Part 1- Cylinders for Compressed Gases (1989).

ANSI/CSA/CGA Standard V-1, Compressed Gas Cylinder Valve. Outlet and Inlet Connections (1987).

9.6 CSA (Canadian Standards Association):

CSA B51 1991, Boiler Pressure Vessel and Pressure Piping Code.

9.7 CRN (Canadian Registration Number)

9.8 DOT (Department of Transportation):

49 CFR CH.1 Research and Special Programs Administration (10-1-86).

DOT-3AA. High Pressure Steel High Pressure Steel Cylinders

9.13.3 ISO 11439:2000, Gas Cylinders -High Pressure cylinders for the on-board storage of natural gas as a fuel for automotive vehicles

9.9 NFPA (National Fire Protection Association):

NFPA-37 Standard for the installation and Use of Stationary Combustion Engines and Gas Turbines, 1990 Edition.

NFPA -52 Compressed Natural Gas (CNG) Vehicular Fuel System 1995 Edition.

NFPA -70 National Electrical Code, 1995 Edition.

9.10 CGA (Compressed Gas Association)

C-6 Standards for Visual Inspection of Steel Compressed Gas Cylinders.

9.11 International Organization of Standardization.

ISO-9809. Refillable Seamless Steel Gas Cylinders, Design, Construction and Testing.

ISO/bis-14446.- Vehicles

ISO 15501-1:2000, Road vehicles - Compressed (CNG) fuel system components - Part 1: General requirements and definitions

ISO 15501-2:2001 “Road vehicles - Compressed (CNG) fuel system - Part 2: Test methods”.

9.14 D.M. 19/09/26 Recipienti per transporto di gas compressi, liquifatti o disciolti con capacita fino a 1000 litri.

10. Concordancia con normas internacionales

Esta Norma no concuerda con ninguna norma internacional por no existir referencia en el momento de su elaboración.

11. Vigilancia

La Secretaría de Energía, por conducto de la Comisión Reguladora de Energía en los términos de las atribuciones asignadas mediante el Reglamento Interior de dicha Secretaría y demás disposiciones jurídicas que así lo señalan, es la autoridad competente para vigilar, verificar y cumplir las disposiciones contenidas en esta norma.

12. Vigencia

Esta Norma Oficial Mexicana entrará en vigor a los 60 (sesenta) días naturales después de la fecha de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

México, D.F., a 19 de septiembre de 2002.- El Presidente, **Dionisio Pérez-Jácome**.- Rúbrica.- El Comisionado, **Javier Estrada**.- Rúbrica.- El Comisionado, **Rubén Flores**.- Rúbrica.- El Comisionado y como Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo por Medio de Ductos, **Raúl Monteforte**.- Rúbrica.- En contra: el Comisionado, **Raúl Nocedal**.- Rúbrica.

PODER JUDICIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

SENTENCIA relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 16/2002, promovida por el Partido Acción Nacional, en contra de la Quincuagésima Sexta Legislatura y del Gobernador, ambos del Estado de San Luis Potosí.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos.

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 16/2002.

PROMOVENTE:
PARTIDO ACCION NACIONAL

PONENTE: MINISTRO JUAN N. SILVA MEZA
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGON
MARTIN ADOLFO SANTOS PEREZ.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al siete de octubre de dos mil dos.

VISTOS; Y
RESULTANDO.

PRIMERO.- Por escrito presentado el siete de agosto de dos mil dos, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Felipe Bravo Mena, quien se ostenta como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, promovió acción de inconstitucionalidad, solicitando la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas por las autoridades que a continuación se precisan:

II.- ORGANOS LEGISLATIVOS Y EJECUTIVOS QUE HUBIERAN EMITIDO Y PROMULGADO LAS NORMAS GENERALES IMPUGNADAS:

"1). Honorable LVI Legislatura del Estado de San "Luis Potosí.

"2). Gobernador Constitucional del Estado Libre y "Soberano de San Luis Potosí".

III.- LA NORMA GENERAL CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA Y EL MEDIO OFICIAL EN QUE SE HUBIESE PUBLICADO.

"Lo constituye el Decreto 351 de la Honorable LVI "Legislatura del Estado de San Luis Potosí de fecha "cinco de julio de 2002, publicado en el Periódico "Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano "de San Luis Potosí el ocho de julio de 2002, por el "que se reforman, adicionan y derogan diversos "artículos de la Ley Electoral del Estado de San "Luis Potosí".

SEGUNDO.- Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente, son los siguientes:

"PRIMERO.- Se considera que el artículo 10 primer "párrafo de la reforma a la Ley Electoral de San "Luis Potosí es inconstitucional en virtud de los "siguientes razonamientos:--- a. El artículo 10 de la "reforma en su primer párrafo ordena el cambio de "elecciones ordinarias para los Ayuntamientos de "los Municipios de San Luis Potosí, lo anterior se "dispone de la siguiente forma:--- "Las elecciones "ordinarias se verificarán el primer domingo de "julio de cada seis años para Gobernador; y el "mismo día cada tres años para diputados del año "correspondiente según se trate. Las de los "ayuntamientos se celebrarán el tercer domingo de "octubre de cada tres años del año respectivo "según se trate".--- De la reforma anteriormente "transcrita podría parecer que no se transgrede "ningún precepto de nuestra Carta Magna en virtud "de que las legislaturas de los Estados tienen "facultades para modificar el calendario electoral "cuando así lo considere conveniente. No obstante "lo anterior se afirma categóricamente que dicha "reforma efectivamente vulnera lo ordenado por "nuestra Ley Fundamental cuando establece en su "artículo 116, fracción IV, inciso b) que las "Constituciones y Leyes de los Estados en

materia "electoral tienen que garantizar que:--- "En el "ejercicio de la función electoral a cargo de las "autoridades electorales sean principios rectores "los de legalidad, imparcialidad, objetividad, "certeza e independencia;" ... --- Esto en virtud de "que el "artículo 17 de la Ley Orgánica del "Municipio Libre "y Soberano de San Luis Potosí "dispone que la instalación de los Ayuntamientos "de los Municipios de dicho Estado será el 26 de "septiembre de la fecha de la elección, lo anterior lo "ordena en los siguientes términos:--- "Los "Ayuntamientos serán electos para un periodo de "tres años; se instalarán solemne y públicamente el "día 26 de septiembre del año de su elección; sus "miembros protestarán ante el Ayuntamiento "saliente, representado por su Presidente o, en su "caso, por quien designe el Congreso del Estado".-"-- Esto, en forma por demás evidente constituye "una falta de certeza absoluta, en virtud de que "anterior a la reforma se establecía como fecha de "elección el primer domingo de julio y como fecha "de instalación de los Ayuntamientos el veintiséis "de septiembre del año de la elección, lo cual era "plenamente congruente, sin embargo, con la "publicación de la reforma en comento hay una "modificación incongruente y absurda en virtud de "que se establece como fecha de celebración de "los comicios ordinarios el tercer domingo de "octubre y como fecha de instalación de los "ayuntamientos de los municipios el veintiséis de "septiembre del año de su elección, lo cual trae una "incongruencia y una falta de certidumbre total, ya "que al no modificarse la Ley Orgánica del "Municipio Libre y Soberano de San Luis Potosí "resulta que los comicios ordinarios para la "elección de ayuntamientos, se deben celebrar "veinticuatro días después de la instalación de los "ayuntamientos lo cual carece de toda lógica. Esto "es así porque la Ley Orgánica del Municipio Libre "y Soberano de San Luis Potosí es clara al "establecer que la fecha de instalación debe ser el "veintiséis de septiembre del año de su elección y "la elección se tiene que realizar, en los términos "de la ley reformada el tercer domingo de octubre.--"- b. En el mismo sentido resulta evidente que al no "ser clara la fecha en que se llevará a cabo la "instalación de los ayuntamientos en virtud de los "lineamientos establecidos por la reforma, en "cuanto a la modificación del calendario electoral, "el ayuntamiento se quedaría acéfalo en virtud de "lo siguiente:--- "Como ya se ha manifestado la Ley "Orgánica del Municipio Libre y Soberano de San "Luis Potosí establece como fecha de instalación "de ayuntamientos el veintiséis de septiembre del "año de su elección. En ese sentido, los actuales "ayuntamientos que gobiernan los municipios de "dicha entidad entraron en funciones el veintiséis "de septiembre de dos mil, razón por la cual en "términos de la Constitución Local y de la "multicitada Ley Orgánica del Municipio Libre y "Soberano de San Luis Potosí, le corresponde "terminar su encargo el veinticinco de septiembre "de dos mil tres para dar lugar a la instalación del "nuevo ayuntamiento electo el veintiséis de "septiembre del mismo año.--- De la reforma en "comento se desprende que el veintiséis de "septiembre de dos mil tres no va a existir "Ayuntamiento Constitucional que se instale en los "términos que establece la Ley Orgánica del "Municipio Libre y Soberano de San Luis Potosí en "virtud de que las elecciones se llevarán a cabo "dentro de los 23 días siguientes.--- Al no existir "Ayuntamiento Constitucional que se instale el "veintiséis de septiembre es claro que los "Municipios del Estado de quedarán acéfalos, es "decir, a partir de la publicación de la reforma fue "claro y previsible el hecho de que no existirá "gobierno municipal constitucional a partir del "momento en que el actual ayuntamiento concluya "su encargo, por el simple hecho de que "materialmente no se podrá integrar uno por virtud "del cambio del calendario electoral y la falta de "modificación a la fecha de instalación de "ayuntamiento en la ley correspondiente.--- En ese "sentido, en el orden de los hechos habrá la "posibilidad de, conforme a derecho:--- 1.- "Prolongar el periodo constitucional de los "ayuntamientos que actualmente se encuentran en "funciones y señalar nueva fecha de instalación del "ayuntamiento que resulte electo de los comicios "del tercer domingo de octubre, o bien,--- 2.- "Decretar la desaparición de ayuntamientos y la "instalación de Concejos Municipales que "gobernarán los municipios del Estado durante el "periodo que señale la misma legislatura.--- Es "claro que al momento no ha existido disposición "legal alguna expedida por el Congreso del Estado "por virtud de la cual se reforme la fecha de "instalación del ayuntamiento, ni tampoco la "posibilidad de que los ayuntamientos que están "actualmente en ejercicio de sus funciones "prolonguen su ejercicio, razón por la cual existe "una falta de certeza absoluta sobre el momento en "el cual se instalará el ayuntamiento electo el tercer "domingo de octubre y quién va a gobernar el "municipio después del veinticinco de septiembre "de dos mil tres.--- Es importante así mismo "observar la inminente y fundada posibilidad de la "instalación de Concejos en todos los municipios "del Estado, lo anterior en virtud de que no existirá "ayuntamiento alguno después de la fecha en que "el actual ayuntamiento deje de ejercer su encargo, "además de que en el proyecto inicial de fecha

"treinta de abril del presente año se contemplaba "en el artículo tercero transitorio la integración de "dichos Concejos Municipales, documento que "agrego al presente escrito como ANEXO DOS y "que a la letra establecía:--- "Por única ocasión el "Congreso del Estado para lo concerniente a los "Ayuntamientos procederá conforme a las "atribuciones que le confiere el artículo 122 de la "Constitución Política del Estado y 44 de la Ley "Orgánica del Municipio Libre, a fin de designar de "entre los vecinos a los Concejos Municipales que "funcionarán del día 25 de septiembre de 2003 al 31 "de diciembre del mismo año".--- Esta posibilidad "es a todas luces inconstitucional en virtud de las "siguientes consideraciones:--- "1.- Es claro que el "artículo 115 de la Constitución Federal en su "primer párrafo adopta la institución del Municipio "Libre como piedra angular de la división territorial "y organización política y administrativa de los "Estados de la Federación, es decir, el Municipio "Libre es regla general en la conformación "territorial, política y administrativa de la forma de "gobierno federal adoptada por nuestro país y "consagrada en nuestra Carta Magna en los "términos de su artículo 40.--- 2.- Así mismo dicha "regla general, tiene a su vez su hipótesis de "excepción que es precisamente el Concejo "Municipal, en los términos del mismo artículo 115 "constitucional en su fracción I, último párrafo. "Dicho Concejo Municipal, cabe mencionar, se "tiene que instalar forzosamente cuando se "presenten los siguientes supuestos:--- I. Las "Legislaturas locales tienen que declarar su "desaparición.--- II.- La desaparición tiene que ser "declarada por renuncia o falta absoluta de sus "miembros.--- III. Lo anterior tiene que ser siempre "y cuando no proceda, que entren en funciones los "suplentes, ni que se celebren nuevas elecciones.--"- IV. Dichos Concejos Municipales forzosamente "concluirán los periodos respectivos, nunca los "iniciarán".--- 3.- De lo anterior se desprende que "para la instalación de los Concejos Municipales no "tienen que celebrarse nuevas elecciones, lo cual "no se actualiza en este caso, ya que es claro que "las elecciones se celebrarán el tercer domingo de "octubre, es decir, aproximadamente un mes "después. Así mismo la posible e inminente "instalación de los Concejos Municipales será no "para la conclusión de un periodo sino por el "contrario se iniciaría con ellos un nuevo periodo "de tres años y la planilla que resulte ganadora de "las elecciones de dos mil tres, tendría que tomar "posesión hasta que terminaran su periodo los "Concejos Municipales.--- 4. Por último, respecto "del presente concepto de invalidez, cabe destacar "que como lo mencioné con anterioridad la "naturaleza jurídica del Concejo Municipal es la "excepción a la regla general que es en este caso el "Municipio Libre, es decir, para que se pueda "actualizar y justificar su instalación, es menester "que la ausencia de los Ayuntamientos de los "Municipios potosinos sea imprevisible, accidental "y contingente, y no como es el caso en concreto, "provocado por la falta de técnica legislativa. Lo "anterior es así en virtud de que suponer lo "contrario nos obligaría a concluir que los "Concejos Municipales están ya sea por encima o "cuando menos a la par de los Ayuntamientos, "cuestión inadmisible ya que de ser procedente ello "traería como consecuencia la vulneración al "principio consagrado en el párrafo primero de la "fracción I, del artículo 115 que ordena que cada "municipio será gobernado por un ayuntamiento de "elección popular directa y al presentarse dicho "supuesto en cualquier momento se podría "sustituir arbitrariamente la voluntad popular por "una decisión de un cuerpo colegiado, como lo es "el Congreso de Estado, el cual, dependiendo de su "conformación en ocasiones podrá o no "representar la voluntad de uno o todos los "municipios.--- Lo anterior se considera "conveniente manifestar, en virtud de que la "realidad jurídica de la reforma nos autoriza a "concluir tal situación, además de que ante la "inconstitucionalidad de la instalación del Concejo "Municipal no encontramos dentro de nuestro "Derecho Positivo medio de defensa alguno, razón "por la cual al ser previsible tal situación acudimos "a esa Suprema Corte de Justicia de la Nación para "que en virtud de la falta de certeza absoluta que "dicho cambio en la fecha de elección trae, se "declare en consecuencia la inconstitucionalidad "de dicha reforma electoral.--- SEGUNDO.- En el "mismo sentido que el anterior, me permito poner a "su digna consideración, la inconstitucionalidad "tanto del párrafo primero del artículo 76, como de "la fracción I, in fine del artículo 87 de la reforma a "la Ley Electoral misma que establece que:--- ""ARTICULO 87. Las casillas que se habrán de "emplear en cada proceso electoral estatal, se "integrarán mediante el procedimiento de "insaculación, con la finalidad de obtener "funcionarios de casilla con la aptitud necesaria "para el desarrollo de la función de recibir, escrutar "y computar los sufragios. Para tal propósito se "observarán los siguiente lineamientos generales:--"- I. La selección primaria se hará mediante el "procedimiento de insaculación aleatoria, de la cual "deberá obtenerse, para cada sección, un número "de ciudadanos que represente el doble de los que "esta ley señala para la integración de las casillas "correspondientes. El procedimiento de "insaculación deberá efectuarse con al

menos "ciento veinte días de anticipación a la fecha de la "jornada electoral".--- La reforma a dicho "dispositivo legal es inconstitucional en la parte en "la que se realizó el énfasis anterior en virtud de la "falta de certeza existente en relación con lo "dispuesto por el artículo 76 de dicha reforma que "ordena que:--- "El Consejo Estatal Electoral "instalará los Comités Municipales Electorales a "más tardar el último día de junio del año de la "elección".--- Esto es a todas luces contrario a lo "que dispone nuestra Ley Fundamental en el inciso "b) de la fracción IV, del artículo 116, mismo que "dispone el principio de certeza a que se deben "sujetar las autoridades electorales y que en obvio "de inútiles repeticiones solicito se tenga por "reproducido como su a la letra se insertase.--- Así "las cosas, de lo anterior se desprende, que si la "fecha de la jornada electoral es el diecinueve de "octubre de dos mil tres, a partir del dieciocho de "octubre se deberá computar hacia atrás, hasta "llegar a ciento veinte días, que es el límite que "señala la reforma en comento, para concluir el "procedimiento de insaculación. Sin embargo, es "preciso señalar que la fecha que resulta de dicho "cómputo es el veintiuno de junio de dos mil tres, "fecha en la cual es imposible asegurar que se "haya concluido la insaculación en virtud de que en "los términos del artículo 76 reformado el Consejo "Estatal Electoral tiene como fecha límite el treinta "de junio de dos mil tres para la instalación de los "Comités Municipales, y que dentro del cómputo "antes dicho es el día ciento once.--- En "conclusión, resulta claro que la incongruencia "entre ambos artículos de la reforma, trae como "consecuencia lógica la inconstitucionalidad de "ambos, en tanto, vulneran el multicitado principio "de certeza a que se deben sujetar las autoridades "electorales.--- TERCERO.- Se considera "igualmente inconstitucional el artículo 107 de la "reforma a la Ley Electoral de San Luis Potosí, en "su primer párrafo in fine y en su fracción IV. Lo "anterior se afirma categóricamente en virtud de "que:--- "a. En su primer párrafo la reforma "preceptúa que:--- El proceso de las elecciones de "ayuntamientos comienza a partir de la sesión de "instalación del Consejo Estatal Electoral el último "domingo del mes de octubre del año anterior al de "la elección, y culmina en diciembre del año de los "comicios. Sus fases serán: ..." --- Esto "evidentemente genera, al igual que los anteriores "una falta de certeza absoluta transgrediendo lo "dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso b) "de nuestra Constitución Federal, en virtud de que "no podemos saber si en realidad el proceso va a "culminar en diciembre del año de los comicios, es "decir, en diciembre de dos mil tres, ya que no "tenemos certidumbre sobre la fecha de instalación "de los ayuntamientos electos el diecinueve de "octubre del próximo año. Resulta claro pues, que "hasta que no exista fecha cierta de instalación de "los ayuntamientos de los municipios del Estado, "no podremos señalar con certeza la fecha en que "culmine el proceso de las elecciones de "ayuntamientos.--- "b. Asimismo, la fracción IV del "citado artículo es inconstitucional, en virtud de la "manifiesta incongruencia que existe entre dicha "fracción reformada y el resto de las fracciones "del mismo artículo. Lo anterior es claro que "contraviene el inciso b), de la fracción IV, del "artículo 116 de nuestra Carta Magna que consagra "el principio de certeza a que se deben sujetar las "autoridades electorales en el siguiente tenor:--- El "proceso de las elecciones de ayuntamientos "comienza a partir de la sesión de instalación del "Consejo Estatal Electoral el último domingo del "mes de octubre del año anterior al de la elección, y "culmina en diciembre del año de los comicios. Sus "fases serán:--- I... --- II... --- III... --- IV. Recibir la "votación el tercer domingo de octubre; "(reformado).--- V. Efectuar los cómputos en el "mismo mes de julio, asignando las regidurías de "representación proporcional a que hubiere lugar, "mediante la aplicación de la fórmula electoral que "señala el artículo 178 de esta ley y registrando las "constancias de mayoría; y --- VI. Realizar la "Declaración de validez o nulidad de las elecciones "durante el mes de agosto del año de la elección. "Tratándose de la elección de ayuntamientos que "se hayan ido a la segunda votación, dicha "Declaratoria de Validez o Nulidad se efectuará "durante el mes de septiembre, antes del inicio del "periodo constitucional para el que fue electo el "ayuntamiento de que se trate"--- Como podemos "advertir de la reforma en comento, la fracción "cuarta reformada señala, que la votación de las "elecciones de ayuntamientos, tendrá que ser "recibida el tercer domingo de octubre, mientras la "fracción quinta establece que los cómputos de "dicha elección deben ser en el mes de julio, lo cual "resulta una clara incongruencia, ya que deviene "imposible siquiera suponer que el cómputo puede "ser en julio y las elecciones el tercer domingo de "octubre.--- En el mismo sentido, la fracción sexta "señala que la declaración de validez o nulidad de "las elecciones se debe efectuar en el mes de "agosto del año de la elección, lo cual "indudablemente genera una falta de certeza "jurídica, ya que resulta claramente imposible que "la celebración de los comicios sea el diecinueve "de octubre de dos mil tres y la declaración de "validez o nulidad de la elección haya sido en "agosto del mismo año.--- A mayor

abundamiento y "continuando con la manifiesta y, clara "incongruencia de la reforma al calendario "electoral, resulta pertinente señalar que el artículo "10 reformado se contrapone a lo establecido por el "primer párrafo del artículo 178 de la misma ley "electoral y que no fue reformado. Dicho artículo "ordena lo siguiente:--- "A más tardar el segundo "domingo de julio, el Consejo Estatal Electoral "deberá contar con la documentación electoral a "que se refiere el artículo anterior y ese día "sesionará para revisar la documentación relativa "al cómputo de los municipios, a fin de asignar las "regidurías de representación proporcional que "señala la Ley Orgánica del Municipio Libre para "cada ayuntamiento".--- De lo anterior se advierte "que el artículo 178 dispone que a más tardar el "segundo domingo de julio tiene que tener la "documentación relativa al cómputo de la elección "de los ayuntamientos, siendo totalmente "incongruente, ya que no es posible que el Consejo "Estatal Electoral cuente con esa documentación el "segundo domingo de julio, cuando las elecciones "para ayuntamientos se tienen que celebrar el "tercer domingo de octubre. Es clara pues la "transgresión al principio de certeza a que se "sujetan las autoridades electorales en sus actos, "ya que no existe certeza alguna respecto del "proceder de dichas autoridades, en virtud de la "reforma al calendario electoral.--- Lo anterior, se "relaciona directamente con la reforma al artículo "10, que señala en lo específico, el cambio en la "fecha de la elección de los ayuntamientos de los "municipios del Estado, ya que es claro que dicha "reforma es totalmente incongruente con el resto "del articulado de la ley en el sentido de que "existen preceptos, como ya se señalaron, que no "fueron reformados y que continúan con las fechas "previstas antes de la reforma. Es evidente que la "reforma electoral, por virtud de la cual se modifica "la fecha de las elecciones de ayuntamientos, no es "por sí misma inconstitucional ya que es "precisamente facultad del Congreso del Estado "realizar dicha modificación al calendario electoral; "sin embargo, sí resulta inconstitucional que dicha "reforma no sea integral, en virtud de que al "modificar simplemente la fecha de la elección sin "reformar las demás fechas del proceso trae como "resultado que la misma sea incongruente con el "resto del articulado de la ley y ello, como "consecuencia lógica, una incertidumbre "manifiesta respecto del proceso electoral, en este "caso de los ayuntamientos. Es clara pues la "inconstitucionalidad de la reforma al calendario "electoral que establece que las elecciones "municipales se celebrarán el tercer domingo de "octubre en tanto vulnera el principio de certeza, "que elevado a rango de las autoridades electorales "en los términos del artículo 116, fracción IV, inciso "b) de nuestra Carta Magna.--- CUARTO.- Asimismo "resulta inconstitucional la reforma realizada a la "fracción III, del artículo 57, de la multicitada Ley "Electoral potosina. Dicha reforma establece la "integración del Consejo Estatal Electoral, en el "cual debe haber:--- "III. Un Secretario de Actas con "derecho a voz, quien deberá ser Licenciado en "Derecho, de reconocida experiencia y solvencia "moral, designado por el Pleno del Consejo Estatal "Electoral, el cual tendrá a su vez, un suplente "nombrado de la misma forma".--- Ahora bien, la "fracción II del mismo artículo que no fue "reformado, y que por lo tanto, subsiste junto con "las fracciones reformadas, establece lo siguiente "en tratándose de la integración del Consejo "Estatal Electoral:--- "II. Un Secretario de Actas, "que deberá ser Licenciado en Derecho, de "reconocida experiencia y solvencia moral, "designado por el Pleno del Consejo Estatal "Electoral, quien tendrá, a su vez, un suplente "elegido de la misma forma, con derecho a voz": --- "Al respecto, es claro que tanto la fracción tercera "reformada como la segunda que no lo fue, "contemplan exactamente los mismos elementos, "que son:--- "a. El Consejo Estatal Electoral contará "con un Secretario de Actas.--- b. Tendrá derecho a "voz.--- c. Deberá ser Licenciado en Derecho.--- d. "Deberá contar con reconocida experiencia y "solvencia moral.--- e. Deberá ser designado por el "Pleno del Consejo Estatal Electoral.--- f. Tendrá un "suplente elegido de la misma forma".--- En ese "sentido al contar la fracción tercera reformada y la "segunda previa a la reforma y que subsistió a la "misma con los mismos elementos vulnera el "principio de certeza consagrado en el inciso b), de "la fracción IV, del artículo 116 de nuestra Ley "Fundamental. Lo anterior es así, en virtud de que "no se puede determinar con claridad si en la ley "reformada se establece la existencia de un "Secretario de Actas o la coexistencia de dos, ya "que del artículo reformado en comento, se "desprendería la coexistencia de dos Secretarios "de Actas, sin embargo del cuerpo de la ley se "desprende la existencia de únicamente un "Secretario de Actas.--- Lo anterior resulta "sumamente importante, ya que la debida "integración del Consejo Estatal Electoral es "fundamental, para el adecuado funcionamiento de "la autoridad encargada de la preparación, "desarrollo y vigilancia de los comicios, siendo "evidente que para que exista una debida "integración del mismo, es absolutamente "necesario la existencia de certeza en cuanto a su "integración se refiere. Es así como al no existir "una integración clara y cierta resulta "inconstitucional vulnerando el principio de

certeza "elevado a rango constitucional.--- QUINTO.- "Resulta igualmente inconstitucional lo dispuesto "en la reforma a la fracción IV del artículo 34 de la "Ley Electoral de San Luis Potosí, mismo que "ordena cuáles son prerrogativas de los partidos "políticos.--- "Durante el proceso electoral, los "partidos políticos con registro estatal disfrutarán "adicionalmente de una cantidad mensual de hasta "doscientos cincuenta días de salario mínimo "vigente en la capital del Estado, como apoyo a sus "programas de difusión. Esta prerrogativa se "otorgará en especie y conforme a los términos que "para ello establezca anualmente el Consejo Estatal "Electoral". --- Lo anterior resulta a todas luces "inconstitucional, en virtud que vulnera lo "ordenado por el artículo 116, fracción IV, inciso f), "que establece que las constituciones y leyes de "los Estados en materia electoral tienen que "garantizar que:--- "De acuerdo con las "disponibilidades presupuestales, los partidos "políticos reciban, en forma equitativa, "financiamiento público para su sostenimiento y "cuenten durante los procesos electorales con "apoyos para sus actividades tendientes a la "obtención del sufragio universal".--- Así las cosas, "al establecer una cantidad adicional mensual a los "partidos políticos con registro estatal por el "simple hecho de serlo, se configura una clara "inequidad respecto de los partidos políticos "nacionales inscritos ante el Consejo Estatal "Electoral.--- Lo anterior es claro, en virtud de que "el financiamiento público de los partidos políticos "se encuentra regulado en los términos del "Capítulo V, del Título IV de la Ley Electoral Estatal "y en lo específico en el artículo 35, señalando "dicho dispositivo legal en su fracción primera, lo "relativo a las bases de la distribución del gasto "ordinario, en la segunda, las bases de distribución "del financiamiento para gasto de campañas y en la "fracción cuarta el procedimiento para la "asignación de dicho financiamiento, "desprendiéndose de esta última que en su inciso "a), se establece lo relativo al principio de justicia "en tanto se hace el reparto en forma igualitaria y "que en su inciso b), se establece y se observa lo "ordenado en el inciso f), fracción IV, del artículo "116 de nuestra Ley Fundamental en lo relativo al "principio de equidad, ya que se establece el "reparto de distribución del financiamiento "tomando en cuenta los resultados porcentuales "obtenidos en las elecciones próximas pasadas. Lo "anterior lo ordena la citada fracción IV, del artículo "35 reformado, de la siguiente forma:--- "IV. La "distribución de las prerrogativas del "financiamiento público a los partidos políticos con "registro o inscripción ante el Consejo Estatal "Electoral se hará conforme al siguiente "procedimiento :--- a) El treinta y cinco por ciento "en forma igualitaria;--- b) El sesenta y cinco por "ciento restante en función de los resultados "porcentuales promedio que hayan obtenido los "partidos políticos de la votación válida emitida en "las elecciones de diputados locales y "ayuntamientos inmediatas anteriores".--- Es así "como claramente la reforma a la fracción IV, del "artículo 35 de la Ley Electoral observa el principio "de equidad que se ordena a las Constituciones y "Leyes Estatales, observar en los términos de "nuestra Constitución Federal. En tal virtud, al ya "observarse el principio de equidad y establecerse "cantidades adicionales traspasa el mismo y "resulta en forma contraria inequitativo, respecto "de los partidos políticos nacionales, vulnerando "claramente lo ordenado por nuestra Carta Magna.-"-- SEXTO.- En el mismo sentido que la anterior, el "inciso a), de la fracción VII, del artículo 35, resulta "inconstitucional. Dicha reforma que se tilda en el "presente ocurso de contrario a nuestra Ley "Suprema, ordena que los partidos políticos que "hubieren obtenido su registro o inscripción con "fecha posterior a la última elección, y que por lo "tanto no cuenten con antecedentes electorales en "el Estado, tendrán derecho a que se les otorgue "financiamiento público en los siguientes "términos:--- "a) Los partidos políticos con registro "estatal, tendrán derecho a participar de la porción "igualitaria señalada en el inciso a), de la fracción "IV de este mismo artículo y, además, para gastos "de campaña, por cada quinientos afiliados "adicionales al mínimo requerido que hubieren "presentado en el procedimiento de obtención de "su registro, tendrán derecho a recibir un cinco por "ciento adicional, respecto del financiamiento "obtenido en la parte igualitaria".--- Lo anterior "resulta igualmente contrario a nuestra "Constitución Política Federal en virtud de que, no "resulta ni justo ni equitativo que partidos políticos, "que no cuentan con antecedentes electorales en el "Estado y que por lo tanto no tienen ningún trabajo "realizado tendiente a obtener el voto ciudadano en "comicios pasados, reciban una cantidad adicional "que bien puede asimilarse a la parte equitativa "otorgada a partidos políticos con antecedentes "electorales, en los términos del inciso b), de la "fracción IV, del mismo artículo.--- Es claramente "contrario al inciso f), de la fracción IV, del artículo "116 de nuestra Constitución Federal que existan "partidos políticos ya sea estatales o nacionales "que aunque no cuenten con antecedentes en "procesos electorales se les otorguen cantidades "de financiamiento adicionales sin fundamento "alguno, ya que es evidente que la razón de la "equidad en el financiamiento es en parte "consecuencia de su sola existencia, y en parte "producto de su trabajo como

partido político en "los términos del párrafo segundo, de la fracción "primera del artículo 41 de la Constitución Federal; "la parte relativa a su sola existencia se encuentra "ya observada en el inciso a), fracción IV, del "artículo 35 y por tanto, otorgar financiamiento "adicional sin la existencia de participación en "comicios electorales resulta violatorio del "principio de equidad. Es decir, en virtud de un "trabajo realizado, la ciudadanía vota por un partido "político, mismo que trabajó y cumplió con "determinadas obligaciones establecidas en ley y "en esa tesitura se le otorga la prerrogativa de "financiamiento público equitativamente. En ese "sentido, al existir un partido político sin "antecedentes tiene que ser tratado como tal, es "decir, como un partido político sin trabajo "elaborado y sin representatividad alguna en el "estado y en ese tenor se le tiene que otorgar el "beneficio del financiamiento y no como se "establece en la reforma a la Ley Electoral con "cantidades de financiamiento adicionales que "vulnera todo principio de equidad ordenado en "nuestra Ley Fundamental.--- Es claro, por último, "que el inciso b) de dicha fracción resulta "igualmente inconstitucional por los argumentos "anteriormente vertidos, sin embargo, no son "objeto de la presente impugnación, en virtud de no "haber sido objeto de la presente reforma.--- "SEPTIMO.- Resulta inconstitucional la reforma a la "fracción II, del artículo 36 de la Ley Electoral del "Estado de San Luis Potosí, en la parte que "establece que:--- "El límite máximo de gastos de "campaña de cada partido político, invariablemente "deberá ser menor del doble del monto que por "financiamiento público reciban para cada tipo de "elección".--- Lo anterior claramente vulnera lo "ordenado por los incisos b) y h), de la fracción IV, "del artículo 116, de nuestra Constitución Federal, "mismo que ordena que las Constituciones y Leyes "de los Estados en materia electoral garanticen "que: --- "b) En el ejercicio de la función electoral a "cargo de las autoridades electorales sean "principios rectores los de legalidad, imparcialidad, "objetividad, certeza e independencia".--- "h) Se "fijen los criterios, para determinar los límites a las "erogaciones de los partidos políticos en sus "campañas electorales, así como los montos "máximos, que tengan las aportaciones pecuniarias "de sus simpatizantes y los procedimientos, para el "control y vigilancia del origen y uso de todos los "recursos con que cuenten los partidos políticos; "se establezcan, asimismo las sanciones por el "incumplimiento a las disposiciones que se "expidan en estas materias;"--- Es así como de una "interpretación sistemática y funcional de los "incisos de la fracción y artículo constitucional en "comento, se advierte que los criterios que se "deben fijar para determinar los límites a los gastos "de campaña necesariamente deben de observar el "principio de objetividad estipulado en nuestra Ley "Fundamental. Lo anterior es así en virtud de que, "no podemos entender los dispositivos "constitucionales, uno independiente de otro, sino "que la adecuada interpretación y criterio jurídico "nos ordena observar a los cuerpos normativos "como un todo regulador, en este caso de la "preparación, desarrollo y vigilancia de los "procesos electorales, entre los cuales "indubitablemente se encuentra la regulación de la "vida y participación de los partidos políticos "estatales y nacionales en los comicios estatales.--- "En virtud de lo anterior y entendiendo que dichos "criterios deben ser objetivos, es menester señalar "cuáles deben de ser estos criterios objetivos y "porqué motivo se deben considerar como tales. Es "así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial "de la Federación sostuvo el pasado nueve de "mayo en la sentencia que recayó al expediente "SUP-JRC-096/2002 a fojas 87 y 86 lo siguiente:--- ""b) Que el establecimiento de los topes a los "gastos erogados por los partidos políticos en la "realización de sus campañas electorales, estén "basados en criterios objetivos, referidos a un "sistema diferenciado, entre las distintas "elecciones, consistente en fijar un monto legal del "carácter general que se multiplicará, ya sea, por el "número de electores, o en su caso de habitantes, "de las circunscripciones electorales, o en función "de un distrito rural o urbano existentes, tomando "en cuenta factores como el área geográfica, "densidad de población y condiciones "geográficas.--- "c) Finalmente que la fijación de los "límites a los gastos de campaña erogados por "cada uno de los partidos políticos contendientes, "estén basados en criterios objetivos y de carácter "general, sin tomar en cuenta el número de votos "obtenidos por cada uno de los contendientes en "las elecciones anteriores, es decir, su fuerza "electoral ante la ciudadanía, ni tampoco, en los "recursos que a cada uno de dichos institutos "políticos les corresponde como financiamiento "ordinario, pues, como se dijo anteriormente, "dichos topes tienen que tener el carácter de "igualitarios".--- Asimismo, a fojas 101 la Sala "Superior considera que:--- "...como lo afirma el "actor, con total apego a los principios rectores de "la materia electoral, los Organos Ejecutivos de los "Partidos Políticos Nacionales, pueden válidamente "realizar aportaciones a sus comités estatales, los "cuales, a su vez, pueden utilizar dichos recursos "en las campañas y precampañas electorales, con "la única limitación de no rebasar los topes de "campañas. Lo que a juicio de este órgano "colegiado, constituye otra razón

fundamental para "estimar que los topes a los gastos de campañas y "precampañas no deben de ser fijados en función "del financiamiento que legalmente le corresponde "a cada partido político, sino que, debe ser un tope "igualitario para todos los partidos políticos, "basado en elementos objetivos y de carácter "general, para cada tipo de elección, con absoluta "independencia, tanto de los recursos que "legalmente le correspondan a cada uno de los "institutos contendientes, como de su fuerza "electoral, para que verdaderamente exista un "ámbito de igualdad de oportunidades, y "transparencia en la elección de que se trate".--- De "las anteriores consideraciones emitidas por la "Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder "Judicial de la Federación, se desprende el criterio "para determinar los límites a los gastos de "campañas basado en "el doble del monto que por "financiamiento público reciban para cada tipo de "elección", contraviene el principio de objetividad a "que se debe sujetar todo proceso electoral, ya que "al observar como criterio, para determinar el tope "a los gastos de campaña, el financiamiento de "cada partido nos impulsa a atender a cada uno de "los partidos políticos en lo particular, "constituyendo esto un criterio subjetivo, es decir, "a la situación del financiamiento público que "reciba en concreto cada partido político, sin tomar "en cuenta el costo en términos numéricos de una "elección en general y demás elementos "convenientes y necesarios para determinar "objetivamente un tope a los gastos de campaña.--- "Asimismo resulta inconstitucional dicho "dispositivo de la Ley Electoral potosina en virtud "de que se vulnera la garantía de igualdad jurídica "elevada a rango constitucional. Esto es así ya que "la garantía mencionada contiene el imperativo de "que "todos somos iguales ante la ley" y en el caso "concreto que es materia electoral no puede ser la "excepción, es decir, en tanto que los participantes "en la contienda electoral son partidos políticos, "dichos institutos deben participar en igualdad de "condiciones, ya que de no ser así se estaría "vulnerando lo ordenado por la garantía de "igualdad, misma que debe ser observada, en tanto "que está establecida en nuestra Carta Magna. Lo "anterior resulta congruente, ya que uno de los "principios rectores de todo proceso electoral es "precisamente el de legalidad, que establece que "todo acto de autoridad debe estar apegado a "derecho y para que el acto de autoridad resulte "conforme a nuestro régimen constitucional, es "menester que se observe la garantía de igualdad, "en el sentido de que los partidos políticos deben "acudir, a la participación de los procesos en "igualdad de circunstancias.--- En ese sentido, en "la citada resolución de la Sala Superior del "Tribunal Electoral del Poder Judicial de la "Federación, éste considera a fojas 86 lo siguiente:-"-- "a. La importancia de regular los límites "máximos, que pueden realizar los partidos "políticos respecto de los gastos de campaña, en "aras de la existencia de una pureza en el proceso "electoral, es que las candidaturas que se "registren, contiendan en un ámbito de igualdad de "oportunidades, sin que ninguna de ellas pueda "resultar más importante que la otra, mediante el "establecimiento de un tope máximo de gastos de "campaña, igualitario para todos los partidos "políticos, lo que sirve para que no exista "desigualdad de los medios empleados por unos "partidos y otros y, en consecuencia, su capacidad "de comunicarse con el electorado".--- En "conclusión, es claro que la igualdad en cuanto a "participación en la contienda electoral se refiere, "es un requisito indispensable para un proceso "justo y adecuado en el cual no exista inequidad en "tratándose de límite a las erogaciones de los "partidos políticos en sus campañas electorales, "siendo claro que la reforma que se impugna, al "establecer topes de gastos de campaña "diferenciados, provoca una desigualdad absoluta "en la participación de los partidos políticos, "situación absurda en virtud de que no existe "dispositivo constitucional alguno, que nos "autorice a establecer procesos electorales que se "rijan por criterios de desigualdad y parcialidad, "sino por el contrario los principios rectores son "claros al establecerse entre ellos el de equidad, "imparcialidad y legalidad.--- OCTAVO.- Resulta por "otro lado inconstitucional la reforma al artículo 26, "fracción II, inciso d), así como el penúltimo párrafo "del artículo 26 de la Ley Electoral de San Luis "Potosí. El primero de ellos ordena, que para "participar en las elecciones locales, los partidos "políticos se encuentran obligados a cumplir con "determinados requisitos, entre ellos el de:--- ""Acreditar que cuenten en el Estado con un "número de afiliados, que signifique al menos el "0.13 por ciento de los electores inscritos, en el "listado nominal que se hubiere utilizado en la "última elección estatal, y que dichos afiliados "provengan de al menos la mitad de los municipios "de la Entidad. En ningún caso, el número de "afiliados en cada uno de tales municipios podrá "ser inferior al 0.5% de su listado nominal".--- Dicha "reforma, en forma clara contraviene lo dispuesto "por nuestra Carta Magna en su artículo 41, "fracción primera, primer párrafo y fracción tercera, "último párrafo, mismas que ordenan "respectivamente que:--- "Los partidos políticos "son entidades de interés público; la ley "determinará las formas específicas de su "intervención en el proceso electoral. Los partidos "políticos nacionales tendrán derecho a participar "en

las elecciones estatales y municipales".--- "El "Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en "forma integral y directa, además de las que "determine la ley, las actividades relativas a la "capacitación y educación cívica, geografía "electoral, los derechos y prerrogativas de las "agrupaciones y de los partidos políticos, al patrón "y lista de electores, impresión de materiales "electorales, preparación de la jornada "electoral...".--- De lo anterior se advierte "claramente que los "partidos políticos nacionales "para constituirse como tales deben "forzosamente, por mandato Constitucional, "observar lo dispuesto por la "ley", siendo claro "que a la ley que se refiere la fracción primera, del "artículo 41 de nuestra Constitución Federal, es el "Código Federal de Instituciones y Procedimientos "Electorales, ley que rige integralmente la vida y el "actuar de los Partidos Políticos Nacionales.--- En "ese sentido es obvio que los partidos políticos "nacionales tienen prerrogativas, derechos y "obligaciones, mismas, estas últimas que tiene que "observar permanentemente en los términos de la "legislación federal a la que se encuentran sujetos, "es decir, no es competencia de la legislatura "estatal determinar tal requisito, para la "participación en las elecciones locales, además de "que como partido político nacional ya se debió "haber observado el requisito, de contar con un "número determinado de afiliados en los términos "de la legislación federal en comento, es decir, se "cuenta con "derechos adquiridos" para la "participación en las elecciones locales y estatales, "en tanto ya se cumplió con los requisitos "ordenados por la ley especial, que es el Código "Federal de Instituciones y Procedimientos "Electorales, en lo específico, por el artículo 24, "numeral 1, inciso b), mismo que preceptúa que "para que una organización pueda ser registrada "como partido político nacional, debe cumplir con:-"--"b) Contar con 3,000 afiliados en por lo menos "10 entidades federativas, o bien tener 300 "afiliados, en por lo menos 100 distritos electorales "uninominales; en ningún caso, el número total de "sus afiliados en el país podrá ser inferior al 0.13% "del Padrón Electoral que haya sido utilizado en la "elección federal ordinaria inmediata anterior a la "presentación de la solicitud de que se trate".--- En "el mismo sentido dicho Código establece, al igual "que en nuestra Ley Fundamental, como derecho "de los partidos políticos nacionales el participar "en las elecciones estatales y locales, en los "términos del artículo 36, numeral 1, inciso f), en "los siguientes términos:--- "f) Participar en las "elecciones estatales y municipales conforme a lo "dispuesto en la fracción I, del párrafo segundo, del "artículo 41 de la Constitución;"--- Es claro que el "hecho de cumplir con el requisito de contar con "determinado número de afiliados tiene que ser "satisfecho por los partidos políticos nacionales, "necesariamente en los términos de la ley especial "aplicable, en este caso el Código Federal de "Instituciones y Procedimientos Electorales y que "una vez observados éstos se tendrá derecho a "participar en las elecciones estatales y "municipales. Lo anterior es así ya que el único "órgano colegiado autorizado constitucionalmente "para regular la vida y aspectos generales de los "partidos políticos nacionales es precisamente el "Congreso de la Unión. Así mismo, el último "párrafo de la fracción III del artículo 41, dispone "que el Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo "en forma integral y directa lo relativo a los "derechos y prerrogativas de los partidos políticos "nacionales, siendo aplicable en el caso concreto la "siguiente Jurisprudencia sustentada por el Pleno "de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación.--- "Novena Epoca.--- Instancia: Pleno.--- Fuente: "Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.--"- Tomo: X, Agosto de 1999.--- Tesis: P./J. 53/99.--- "Página: 563.--- "DISTRITO FEDERAL. SU "ASAMBLEA LEGISLATIVA NO ESTA FACULTADA "PARA LEGISLAR EN RELACION CON LOS "PARTIDOS POLITICOS NACIONALES, ASPECTOS "DIVERSOS A SU PARTICIPACION EN LAS "ELECCIONES LOCALES. Los artículos 41, "segundo párrafo, 49, 60 inciso h), y 276, inciso e), "del Código Electoral del Distrito Federal, que "regulan, respectivamente, la posibilidad de que se "fusionen dos o más asociaciones políticas, entre "las que se encuentran los partidos políticos "nacionales, así como la correspondiente "atribución, conferida al Instituto Electoral del "Distrito Federal, para resolver sobre la "cancelación del registro de los partidos políticos "fusionados, y la suspensión por cancelación del "registro del partido político por la comisión de las "faltas previstas en el dispositivo 275 del propio "código, resultan contrarios a lo previsto en el "artículo 41, fracción III, de la Carta Magna, en "virtud de que corresponde al Instituto Federal "Electoral conocer esos aspectos, y su regulación "es de la competencia exclusiva del Congreso de "la Unión".--- ... --- Por su parte el penúltimo "párrafo del artículo 26 ordena que:--- "Para que los "partidos políticos nacionales, una vez aprobada su "inscripción, puedan recibir las prerrogativas del "financiamiento público estatal, deberán cumplir "con los requisitos que establece la fracción II, del "artículo 27 de esta ley, en igualdad de "circunstancias con los partidos políticos con "registro estatal".--- En ese sentido se advierte "claramente la inconstitucionalidad de dicha "reforma, en virtud de que en el mismo sentido que "el anterior, se vulnera lo dispuesto por el artículo "41, en su

fracción I, primer párrafo y III, último "párrafo, por lo cual, en tanto las argumentaciones "son las mismas que las del artículo anteriormente "citado en el presente numeral, solicito "respetuosamente se tengan por reproducidas "como si a la letra se insertasen.--- Por tal motivo, "resulta contrario a nuestra Carta Magna la "multicitada reforma al inciso d) de la fracción II, "del artículo 26, así como el penúltimo párrafo del "mismo.--- NOVENO.- En el mismo sentido que el "anterior, resulta inconstitucional la reforma al "párrafo primero del artículo 48, mismo que "establece que:--- "El consejo Estatal Electoral "cancelará la inscripción si se trata de un partido "político nacional, cuando se presente alguno de "los supuestos a que se refieren las fracciones II, V, "VI, VII y VIII del artículo inmediato anterior, así "como en lo establecido en los artículos 49 y 213 "de esta Ley en los casos en que proceda; además, "podrá aplicarles las sanciones que contempla el "artículo 212 en sus fracciones I, II y III de esta "Ley".--- Al respecto se considera que dicha "reforma vulnera lo ordenado por el párrafo "primero de la fracción I, del artículo 41, así como "el último párrafo de la fracción III del mismo "precepto constitucional transcrito supralíneas.--- "En ese sentido es claro que el hecho de cancelar "la inscripción a un partido político nacional tiene "como efecto práctico el quitarle al partido político "nacional la posibilidad de participar en las "elecciones estatales y locales, situación que "evidentemente es contraria al precepto "constitucional citado anteriormente, ya que el "único organismo facultado para quitarle tal "posibilidad a un partido político nacional es el "Instituto Federal Electoral, siendo esto totalmente "lógico y conforme a derecho, ya que no está "autorizado constitucionalmente el Consejo Estatal "Electoral para quitar un derecho que sólo otorga el "IFE y que en tal virtud sólo a dicha institución le "compete restringir o prohibir.--- Al respecto es "aplicable la jurisprudencia y los argumentos "vertidos en el numeral anterior que en obvio de "inútiles repeticiones solicito se tengan por "reproducidos como si a la letra se insertasen.--- "DECIMO.– Al igual que los dos conceptos de "invalidez anteriores resulta inconstitucional la "reforma a las fracciones VI y VII del artículo 212 en "la parte que establece que los partidos políticos "podrán ser sancionados:--- "VI. Con la suspensión "de su registro o inscripción como partido político "durante el periodo que señala la resolución.--- VII. "Con la cancelación de su registro o inscripción "como partido político".--- En ese sentido es claro "que dichas reformas son absolutamente "contrarias a nuestra Ley Suprema en tanto que de "ninguna manera se puede consentir que sea la "autoridad electoral local la que le suspenda o "cancele a los partidos políticos nacionales, en "virtud de sanciones, su inscripción para participar "en las elecciones estatales y de ayuntamientos, ya "que la autoridad legitimada para realizar tales "actos es precisamente el Instituto Federal "Electoral en tanto que es la autoridad que otorga a "los partidos políticos nacionales el registro "correspondiente para poder contender en las "elecciones federales, estatales y locales siempre y "cuando cumpla con los requisitos establecidos en "la ley especial.--- En este sentido es aplicable a "esta reforma la jurisprudencia citada con "anterioridad bajo el siguiente rubro:--- "DISTRITO "FEDERAL. SU ASAMBLEA LEGISLATIVA NO ESTA "FACULTADA PARA LEGISLAR, EN RELACION "CON LOS PARTIDOS POLITICOS NACIONALES, "ASPECTOS DIVERSOS A SU PARTICIPACION EN "LAS ELECCIONES LOCALES".--- Mismas que en "obvio de inútiles repeticiones solicito se tenga por "reproducida como si a la letra se insertase.--- Así "mismo, es claro que dicha reforma contraviene lo "dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso b), "que establece los principios rectores a los que se "debe de sujetar todo proceso electoral, dispositivo "que ya fue transcrito en el numeral séptimo del "presente ocurso. Dicho precepto constitucional "establece como principio rector el de legalidad, "que de acuerdo a lo sustentado por la Sala "Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial "de la Federación se entiende como tal:--- ""PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL. De "conformidad con las reformas a los artículos 41, "fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción II y "116 fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución "Política de los Estados Unidos Mexicanos, así "como en los términos de los artículos 186 y 189 de "la Ley Orgánica del Poder Judicial de la "Federación, y 3o. de la Ley General del Sistema de "Medios de Impugnación en Materia Electoral, se "estableció un sistema integral de justicia en "materia electoral cuya trascendencia radica en que "por primera vez en el orden jurídico mexicano se "prevén los mecanismos para que todas las leyes, "actos y resoluciones electorales se sujeten "invariablemente a lo previsto en la Constitución "Federal y, en su caso, las disposiciones legales "aplicables, tanto para proteger los derechos "políticos electorales de los ciudadanos mexicanos "como para efectuar la revisión de la "constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los "actos y resoluciones definitivos de las autoridades "electorales federales y locales.--- ... --- En ese "sentido es claro que dicha reforma contraviene, lo "dispuesto por el precepto constitucional "precitado, ya que es evidente que no se sujeta a lo "ordenado por nuestra Constitución

Federal en "tanto, que establece claramente que los partidos "políticos nacionales podrán contender, en "elecciones locales y que la autoridad que en forma "integral y directa tendrá a su cargo lo relativo a "derechos y prerrogativas de los partidos políticos "nacionales, es el Instituto Federal Electoral , razón "por la cual el suspender o cancelar a un partido "político nacional la inscripción por parte de la "autoridad electoral local, al traer como "consecuencia impedir al partido político nacional "participar a las elecciones, restringe sus derechos "como tal, derechos que, como se afirmó "anteriormente, sólo puede restringir o anular la "autoridad federal autorizada en términos "constitucionales, a saber, el Instituto Federal "Electoral.--- DECIMO PRIMERO.- Resulta "inconstitucional la reforma al último párrafo del "artículo 23 in fine de la Ley Electoral, mismo que "establece en lo conducente:--- "...Se tendrá por "inexistente cualquier pacto que limite o reduzca la "libertad de afiliación...".--- Al respecto se "considera que dicha reforma es inconstitucional "en virtud de que vulnera lo ordenado por el último "párrafo de la fracción tercera del artículo 41 de "nuestra Constitución Federal en virtud de que, "como he señalado con anterioridad es únicamente "al Instituto Federal Electoral al que le corresponde "todo lo relativo a los derechos y prerrogativas de "los partidos políticos nacionales.--- En el caso "concreto es claro que, dentro de los derechos de "los partidos políticos nacionales, inclusive como "requisito para su constitución y obtención del "registro, es necesario tener un procedimiento de "afiliación dentro de los estatutos, lo anterior lo "prevé de esa manera el Código Federal de "Instituciones y Procedimientos Electorales que en "su artículo 27, numeral 1, inciso b) establece que, "los estatutos establecerán:--- "Los procedimientos "para la afiliación individual, libre y pacífica de sus "miembros, así como sus derechos y "obligaciones. Dentro de los derechos se incluirá el "de participar personalmente o por medio de "delegados en asambleas y convenciones, y el "poder ser integrante de los órganos directivos".--- "Es así como advertimos que el procedimiento de "afiliación de los partidos políticos nacionales se "establecerá conforme a sus estatutos y no según "lo disponga una ley electoral local, que no tiene "legitimidad alguna para regular dicho "procedimiento, respecto de los partidos políticos "nacionales. Lo anterior es claro en tanto que el "Instituto Federal Electoral al otorgar el registro "como partido político nacional previamente "analiza los estatutos y por ende el procedimiento "de afiliación, no siendo ni constitucional ni "legalmente posible al Congreso Local legislar en "dicho procedimiento, ni tampoco a la autoridad "electoral local pronunciar respecto al mismo.--- En "este sentido, la contravención a la Carta Magna "consiste en que la legislación local pretende ir "más allá de lo establecido en la legislación federal "pretendiendo regular el proceder interno de los "partidos políticos.--- DECIMO SEGUNDO.--- En el "mismo sentido que el anterior, resulta "inconstitucional el primer párrafo del artículo 38, "que establece como obligación de los partidos "políticos tener a un contador público titulado "como responsable de su órgano interno "encargado de la percepción y administración de "sus recursos generales y de campaña. Lo anterior "se establece en el siguiente sentido:--- "Los "partidos políticos deberán contar con un órgano "interno encargado de la percepción y "administración de sus recursos generales y de "campaña, el cual deberá tener como responsable a "un contador titulado...".--- Es así como al igual que "en el numeral anterior, se considera que dicha "reforma contraviene lo ordenado por el último "párrafo, de la fracción tercera, del artículo 41 de "nuestra Constitución Federal en virtud de que le "corresponde al IFE determinar en forma integral y "directa todo lo relativo a los derechos y "prerrogativas de los partidos políticos nacionales, "situación que incluye evidentemente lo relativo a "su constitución y en ese sentido es en los "estatutos de los partidos políticos nacionales "aprobados por el IFE, donde se establece dicho "tópico. En el mismo sentido es importante señalar "que de acuerdo con la jurisprudencia dictada por "el Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la "Nación, únicamente le corresponde al H. Congreso "de la Unión el legislar en materia de partidos "políticos nacionales, siendo claro que la ley "dictada por dicho Poder es precisamente el "multicitado Código Federal de Instituciones y "Procedimientos Electorales, mismo que impone en "su artículo 27, numeral 1, inciso c), fracción IV que "los estatutos deben establecer:--- "c). Los "procedimientos democráticos para la integración y "renovación de los órganos directivos así como las "funciones, facultades y obligaciones de los "mismos. Entre sus órganos deberá contar, cuando "menos, con los siguientes:--- I... --- II... --- III... --- IV. "Un órgano responsable de la administración de su "patrimonio y recursos financieros y de la "presentación de los informes de ingresos y "egresos anuales y de campaña a que se refiere el "párrafo 1 del artículo 49-A de este Código.--- "Resulta evidente que lo ordenado por la ley "especial de ninguna forma establece tal requisito "para los partidos políticos nacionales, razón por la "cual, aunque se trate de recursos estatales, de "ninguna manera se puede alterar la vida y "constitución de los partidos políticos nacionales "en tanto que ya

se encuentran previamente "acreditados sus órganos, entre ellos los de "administración, ante la autoridad electoral federal "constitucionalmente autorizada.--- DECIMO "TERCERO.- Es inconstitucional la reforma al "artículo 20 de la Ley Electoral Estatal en virtud de "establecer vía indirecta una residencia menor a la "ordenada por el último párrafo, de la fracción I, del "artículo 116 de nuestra Constitución Federal. Lo "anterior es así en virtud de que la reforma "establece lo siguiente:--- "Son elegibles para "ocupar el cargo de Gobernador del Estado, "diputados locales y miembros de los "ayuntamientos, las personas que reúnan los "requisitos y no tengan los impedimentos que la "Constitución Política de los Estados Unidos "Mexicanos y la particular del Estado precisan para "cada cargo, y en lo conducente la Ley Orgánica "del Municipio Libre".--- Al respecto la Constitución "Local ordena en su artículo 73, fracción II que:--- ""Para ser Gobernador del Estado se requiere:--- I... "--- II. Si se tiene la calidad de potosino por "nacimiento, contar con una residencia efectiva no "menor de un año inmediato al día de la elección y, "si se trata de potosino por vecindad, la residencia "efectiva deberá ser no menor de tres años "contados a partir de la adquisición de la calidad de "vecino:--- Por su parte nuestra Constitución "Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena "en su artículo 116, fracción I, último párrafo:--- ""Sólo podrá ser gobernador constitucional de un "Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y "nativo de él, o con residencia efectiva no menor de "cinco años inmediatamente anteriores al día de la "elección".--- En ese sentido, es claro que la "Constitución Local al establecer una residencia de "tres años para el caso de no ser nativo de la "entidad contraviene lo dispuesto por la "Constitución Federal, no obstante ello no se "puede impugnar por esta vía en tanto, que no fue "objeto de la presente reforma; sin embargo, sí se "puede declarar inconstitucional la reforma al "artículo 20 de la Ley Electoral en virtud de que nos "remite a la Constitución Local, misma que autoriza "una residencia que se encuentra implícitamente "prohibida por nuestra Carta Magna.--- DECIMO "CUARTO.--- Es inconstitucional la reforma "realizada al último párrafo del artículo 41 de la Ley "Electoral de San Luis Potosí, misma que establece "que:--- "Los partidos políticos de reciente registro "o inscripción ante el Consejo Estatal Electoral, no "podrán formar coalición para el primer proceso "electoral en que participen".--- Es menester hacer "hincapié que resulta inconstitucional dicha "reforma en virtud de la falta de certeza que trae "aparejada, vulnerando lo previsto por el artículo "116, fracción IV, inciso b) de nuestra Constitución "Federal, ya que es importante evidenciar que la "inscripción que hacen los partidos políticos "nacionales ante el Consejo Estatal Electoral no se "hace en una sola ocasión, sino que se hace en "cada proceso electoral en que el partido político "vaya a tomar participación, razón por la cual se "puede notar que al momento de hacerse la "inscripción ésta es para un nuevo proceso "electoral, y por tanto, respecto de esa inscripción "resulta el primer proceso electoral en el que "participan. Es por ello que deviene en "inconstitucional dicha reforma puesto que no se "define con claridad lo que deberá considerarse "como "partidos políticos de reciente inscripción", "violando con ello el principio de certeza que deben "caracterizar a los procesos electorales.--- DECIMO "QUINTO.- Resulta asimismo contrario a nuestra "Ley Fundamental lo previsto por la reforma a la "fracción X del artículo 64 de la Ley Electoral "potosina, misma que establece que son "atribuciones del Consejo Estatal Electoral:--- ""Remover a los integrantes de la Comisiones "Distritales y Comités Municipales Electorales, por "causas graves";--- El precepto legal reformado "resulta contrario a lo ordenado por el artículo 116, "fracción IV, inciso b) de nuestra Constitución "Federal en virtud de que vulnera el principio de "certeza a que se deben de sujetar todas las "autoridades electorales en su actuar. Lo anterior "es claro, en virtud de que no existe dentro del "cuerpo de la ley que se reforma, precepto legal "alguno que establezca qué es lo que se debe "entender por causas graves. Esto evidentemente "trae como consecuencia una incertidumbre "manifiesta ya que el Consejo Estatal no tendrá "sustento legal alguno sobre el cual se pueda "determinar cuándo una causa es o no grave, "obligándolo a actuar discrecionalmente y "pudiendo hacerlo en forma contraria a derecho, es "decir, remover integrantes cuando no haya causa "grave o no removerlo cuando efectivamente exista "una. Es así como se considera que dicho artículo "es contrario a nuestra Ley Fundamental no por el "hecho de establecer que el Consejo Estatal "Electoral tenga la facultad de remover por causas "graves, sino porque no se establecen cuáles van a "ser dichas causas.--- DECIMO SEXTO.- Se "considera inconstitucional asimismo la reforma al "último párrafo del artículo 11 de la Ley Electoral "del Estado de San Luis Potosí, misma que "establece que:--- "Asimismo tratándose de "ayuntamientos, si el empate se presenta en la "segunda votación, el Congreso del Estado "nombrará un Concejo Municipal en los términos "de la Constitución Política del Estado y de la Ley "Orgánica del Municipio Libre, que cumplirá sus "funciones hasta en tanto se celebre la elección "extraordinaria

correspondiente".--- Esta "disposición resulta contraria a lo que establece el "último párrafo de la fracción I, del artículo 115 de "nuestra Carta Magna, mismo que ordena que:--- ""En caso de declararse desaparecido un "ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la "mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no "procede que entren en funciones los suplentes ni "que se celebren nuevas elecciones, las "legislaturas de los Estados designarán de entre "los vecinos a los Concejos Municipales que "concluirán los periodos respectivos; estos "Concejos estarán integrados por el número de "miembros que determine la ley, quienes deberán "cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos "para los regidores".--- Del artículo constitucional "que se considera vulnerado, se desprende que "para que se pueda actualizar la hipótesis "normativa de instauración de Concejos "Municipales son requisitos fundamentales los "siguientes:--- a. Declaración de desaparición de "ayuntamientos.--- b. Que no proceda que entren en "funciones los suplentes.--- c. Que no se celebren "nuevas elecciones.--- d. Que serán designados por "la legislatura del Estado.--- e. Que dichos "Concejos Municipales necesariamente concluirán "los periodos respectivos.--- f. Integrados por el "número de miembros que determine la ley.--- g. "Que sus miembros deben cumplir con los "requisitos de elegibilidad establecidos para los "regidores.--- De los elementos anteriormente "transcritos se aprecia con meridiana claridad que "en el caso concreto no se cumple con dos de ellos "porque la reforma sí prevé la celebración de "elecciones extraordinarias, y por otra parte se "pretende que dichos Concejos no concluyan sino "que inicien los mismos.--- Así las cosas, al "establecer dicha reforma que el Concejo Municipal ""cumplirá sus funciones hasta en tanto se celebre "la elección extraordinaria correspondiente" "transgrede lo ordenado por nuestra Ley "Fundamental, ya que precisamente el hecho de "que se establezcan como requisitos "constitucionales para que se pueda instalar un "Concejo Municipal los anteriormente señalados, "es que los mismos son excepción a la regla "general de Municipio Libre, institución que "constituye la piedra angular de la división "territorial y la organización política y "administrativa de los Estados de la Federación.--- "DECIMO SEPTIMO.- Es inconstitucional la "reforma al último párrafo in fine del artículo 13, en "la parte que ordena que:---"En caso de que no "hubiera candidatos que bajo esta regla pudieran "llamarse a ocupar la vacante, será llamado el "candidato de otro partido al que de acuerdo a la "proporción de votos, correspondiera el lugar "preferente inmediato".--- En ese sentido es claro "que dicha disposición es contraria a todo el "sistema de representación proporcional "consagrado por nuestra Constitución Federal ya "que, dicho principio se instaura en virtud de la "representación de los partidos políticos que no "son favorables por la mayoría de los sufragantes. "Bajo esa tesitura, es evidente que los candidatos "por el principio de representación proporcional "son candidatos "de partido" ya que se otorgan en "virtud de la representatividad que dicho instituto "político obtuvo en determinados comicios, razón "por la cual al establecerse dicha disposición se "vulnera el principio de legalidad al cual se deben "sujetar todas las autoridades electorales locales "consagrado en los términos del artículo 116, "fracción IV, inciso b), así como del último párrafo "de la fracción II del mismo artículo en virtud de "que se vulnera el principio de representación "proporcional.--- Lo anterior me permito explicarlo "con mayor detenimiento. La Constitución Federal "en el último párrafo de la fracción II del artículo "116 de nuestra Carta Magna ordena lo siguiente:--- ""Las Legislaturas de los Estados se integrarán "con diputados elegidos según los principios de "mayoría relativa y de representación proporcional, "en los términos que señalen sus leyes".--- Es "decir, el dispositivo constitucional en comento es "claro al señalar dos principios para la integración "de las legislaturas de los Estados.--- Ahora bien, la "reforma que se tilda de inconstitucional por virtud "del presente ocurso establece la posibilidad de "que otro partido político distinto al que, de "acuerdo a la votación le correspondía la "diputación por el principio de representación "proporcional, asuma tal vacante a diputado. Ello "en forma clara contraviene dicho principio en "tanto que el fin de la representación proporcional "es precisamente beneficiar a aquellos partidos "políticos que no obtuvieron la mayoría de los "votos, tal y como se afirmó con anterioridad. En "ese sentido al establecer tal disposición, que será "otro partido el que ocupe la vacante de diputados "de representación proporcional, esa asignación "puede ser de otra naturaleza pero nunca de "acuerdo a lo establecido por el principio de "representación proporcional porque al pertenecer "a otro partido político el candidato al que se le "otorga la vacante, deja de ser dicha asignación "proporcional a la votación tanto del partido al que "le correspondía como a la del partido al que "efectivamente se le otorgó. La "inconstitucionalidad es clara, la Ley Suprema "establece necesariamente la integración de las "legislaturas por dos principios y esta disposición "no observa en su texto, ninguno de ellos.--- "DECIMO OCTAVO.- Es contrario a nuestra "Constitución el último párrafo del

artículo 32 de la "reforma a la Ley Electoral del Estado de San Luis "Potosí, mismo que ordena que:--- "Los dirigentes, "candidatos o en última instancia, los "representantes de los partidos políticos "acreditados ante el Consejo Estatal Electoral, son "solidariamente responsables por el uso y "aplicación de los recursos provenientes del "financiamiento público".--- Dicha disposición "vulnera el principio de legalidad al momento de "establecer como solidariamente responsables a "los dirigentes, candidatos y representantes de los "partidos políticos por el uso y la aplicación de "recursos provenientes del financiamiento público. "Esto es claro en tanto que constitucionalmente el "actuar de un partido político se debe sujetar a lo "que establezca la ley de la materia, en ese sentido, "dicha ley nos indica que los estatutos deben "establecer un órgano encargado de la "administración de los recursos provenientes del "financiamiento público. Lo anterior es "enteramente aceptable ya que el financiamiento se "le otorga a una entidad de interés público como lo "son los partidos políticos y ellos, como tales, en "esa calidad deben de responder, resultando "incongruente y contrario al principio de legalidad, "que personas físicas a las cuales nunca se les "entregan dichos recursos, sean solidariamente "responsables de su uso y aplicación. Especial "atención hay que poner a la responsabilidad "solidaria que se establece a los representantes de "los partidos políticos ante el Consejo Estatal, ya "que dichos representantes en el orden de los "hechos, generalmente no pertenecen a la "militancia de los partidos políticos, sino que "únicamente son ciudadanos que manifiestan "simpatía con tal o cual partido y que por tal motivo "lo representan ante dicho Consejo, no teniendo de "ninguna forma acceso a los recursos que el "partido político obtiene por tal concepto.--- "DECIMO NOVENO.- En otro orden de ideas, resulta "inconstitucional la reforma al artículo 43 de la Ley "Electoral del Estado de San Luis Potosí. Esto en "virtud de que anterior a la reforma se establecía en "los términos de la fracción X, que el convenio de "coalición debería de contemplar el porcentaje de "votación que iba a corresponder a cada uno de los "partidos políticos coaligados para los efectos del "financiamiento, requisito que es indispensable "señalar en dicho convenio, ya que de lo contrario "se crea un ambiente de incertidumbre tal, que "haría confuso el beneficio de participar a través de "una coalición. Así las cosas es notorio el hecho de "que la omisión de dicho requisito vulnera lo "dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso b) "que dispone que todas las autoridades electorales "se deben sujetar a los principios rectores, entre "los cuales se encuentra el de certeza, de forma y "manera tal que al no haber disposición en ese "sentido, vulnera tal principio al no ser posible "determinar el porcentaje de votación que le "corresponderá a cada uno de los partidos "políticos para efectos de financiamiento público.--- "VIGESIMO.- Vulneran asimismo nuestra Ley "Fundamental las reformas a los artículos 195, "primer párrafo y 200 in fine de la Ley Electoral del "Estado, mismas que disponen:--- "Artículo 195. El "Tribunal Electoral del Estado, sustanciará de "inmediato los recursos de inconformidad en el "orden en que fueron recibidos, para resolverlos "dentro del término de cinco días naturales, "contados a partir del día siguiente en que se "reciba el recurso. Dentro de este término, el "Tribunal dará vista al tercero interesado, a efecto "de que exprese lo que a su derecho convenga. La "notificación correspondiente se hará mediante "cédula fijada en los estrados del propio tribunal".--"- "ARTICULO 200. ... La resolución se pronunciará "dentro de los cinco días siguientes a su recepción, "luego de que la Sala de Segunda Instancia haya "escuchado, en su caso, al tercero interesado, en lo "que a su derecho corresponda".--- Los artículos "anteriormente transcritos, le establecen al "Tribunal Electoral del Estado un término de cinco "días naturales para resolver los recursos tanto de "inconformidad como de apelación, siendo esto un "plazo inconveniente para la resolución de las "múltiples controversias electorales que se "presentan en virtud de la celebración de comicios "en toda una entidad federativa. En este sentido "se considera firmemente que estas disposiciones "vulneran lo ordenado por el artículo 116, fracción "IV, inciso e), mismo que a la letra dispone que las "Constituciones y Leyes de los Estados en materia "electoral garanticen que:--- "Se fijen los plazos "convenientes para el desahogo de todas las "instancias impugnativas, tomando en cuenta el "principio de definitividad de las etapas de los "procesos electorales".--- Al respecto me permito "manifestar que si bien es claro la ratio legis de "dicho precepto es garantizar a los partidos "políticos la posibilidad de accesar a la justicia "federal mediante el establecimiento de plazos "convenientes, no es menos cierto que también "dichos plazos deben de ser los adecuados para "que los tribunales electorales puedan resolver "cabalmente todas y cada una de las "impugnaciones que se les presenta en materia "electoral. Es decir, no se puede entender el uno "sin el otro, ya que no debemos entender que dicho "precepto constitucional únicamente se establece "para garantizar la posibilidad de acudir a la "instancia federal, sino que de una interpretación "sistemática y funcional de nuestra Constitución "Federal se deriva que fue voluntad del

"Constituyente que se fijaran los plazos "convenientes para que cada instancia pudiera ser "desahogada conforme a derecho, lo que quiere "decir que se le debe dar al juzgador local la "oportunidad de tener un plazo adecuado para "poder emitir una resolución debidamente fundada "y motivada. De no ser así, se le quita al magistrado "electoral local el derecho que, como tal tiene, de "emitir juicios de valoración adecuados, pudiendo "entonces resultar inclusive constitucional que se "le fijen a la autoridad jurisdiccional en materia "electoral un solo día para la resolución de todos y "cada uno de los recursos que se le presenten con "motivo de la celebración de los comicios.--- "Concluyendo en el presente concepto de "invalidez, me permito insistir en la necesidad de, "conforme a lo ordenado por la Constitución "Federal, establecer plazos convenientes para el "desahogo de cada una de las instancias, de no "establecerse dichos plazos se estaría vulnerando "claramente nuestro ordenamiento constitucional.--"- VIGESIMO PRIMERO.- No obstante lo "anteriormente manifestado, es evidente que los "artículos que se tildan de inconstitucionales "constituyen igualmente una reiterada "contravención al artículo 133 de nuestro Código "Político, mismo precepto constitucional que "consagra el principio de supremacía "constitucional; dicho principio ordena que la "Constitución Federal es la Ley Suprema de toda la "Unión, desprendiéndose que de ninguna manera "Constitución o Ley Local alguna puede "contravenir los principios consagrados en nuestra "Carta Magna so pena de decretarse "inconstitucional por violentar el Pacto Federal.--- "Es por ello que concluimos que si los artículos "señalados de la reforma en comento no se apegan "de manera estricta a lo establecido por la nuestra "Carta Magna, éstos se encuentran viciados, por lo "que procede declararla inconstitucional.--- Es así "como se considera que los razonamientos "vertidos en el cuerpo del presente ocurso "demuestran en forma contundente la "inconstitucionalidad de las normas impugnadas, "al contravenir los preceptos de la Constitución "Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuerpo "legal que constituye el primer mandato del orden "jurídico al que deben apegarse las normas "secundarias o constituidas para que sean "válidas".

TERCERO.- Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son: 41, fracción I, primer párrafo, fracción III, último párrafo, 115, fracción I, último párrafo, 116, fracción I, último párrafo, fracción II, último párrafo, fracción IV, incisos b), e), f), y h) y 133.

CUARTO.- Mediante proveído de trece de agosto de dos mil dos, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, al que le correspondió el número 16/2002, y por razón de turno se designó al Ministro Juan N. Silva Meza, para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

QUINTO.- Por auto de trece de agosto de dos mil dos, el Ministro Instructor admitió la demanda relativa y ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que rindieran su respectivo informe, correr traslado al Procurador General de la República para lo que a su competencia corresponda y requerir a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que expresara su opinión.

SEXTO.- El Presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de San Luis Potosí, así como el Secretario General de Gobierno, en representación del Gobernador del Estado de San Luis Potosí, al rendir su respectivo informe fueron coincidentes en señalar lo siguiente:

1). Que es infundada la solicitud del promovente en el sentido de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto "351" en su totalidad, porque en los conceptos de invalidez que aduce, no señala fundamento legal, ni argumento o razón en los que indique en qué consiste la inconstitucionalidad del citado decreto en su conjunto, sino que únicamente se avoca a señalar la inconstitucionalidad de determinados artículos que son parte del mismo.

2). Que el primer concepto de invalidez es improcedente porque tal como lo manifiesta expresamente la accionante, el artículo 10, primer párrafo de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, no contradice ninguno de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y atendiendo a la naturaleza de este medio de control, solamente procede cuando exista contradicción entre una norma general y la Constitución Federal y no, entre dos normas de igual jerarquía, como sucede en el caso, pues el actor impugna el artículo 10 de la ley electoral estatal porque contraviene lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del citado estado.

3). Que se presentaron al Congreso del Estado de San Luis Potosí diversas iniciativas de reformas en materia electoral, a la Constitución del Estado, a la Ley Electoral Estatal y a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado, sin embargo, atendiendo a lo dispuesto por la fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal, en el sentido de que las leyes electorales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral, en primer término se reformó la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, quedando pendientes de reforma los restantes ordenamientos citados, mismas que se concretarán en los próximos días.

Que en la especie, no se actualiza la violación al principio de certeza consagrado en el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Federal, derivada de la impugnación del artículo 10, primer párrafo de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, en relación con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Municipio del mismo estado, porque este último ordenamiento no tiene la naturaleza de electoral y será reformado en próximas fechas. Así entonces, la violación en comento quedaría configurada sólo bajo el supuesto de que en la fecha en que inicie el proceso electoral, persistiera aún la falta de congruencia entre lo dispuesto por la Ley Electoral Estatal y la Ley Orgánica del Municipio de la citada entidad, situación que en el caso aun no acontece.

4). Que a través del artículo segundo transitorio del Decreto "351" el Poder Legislativo Estatal derogó todas las disposiciones legales que se opongan al citado decreto.

5). Que en relación con el segundo concepto de invalidez, no existe falta de certeza ni contradicción entre la reforma al primer párrafo del artículo 76 en relación con la fracción I del artículo 87 también reformado, ambos de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, porque es deber del Consejo Estatal Electoral cuidar que los Comités Municipales Electorales se integren con la anticipación requerida para estar en posibilidad de dar cabal cumplimiento a lo ordenado por la fracción I del artículo 87, por virtud de que la fecha límite para su instalación es a más tardar el treinta de junio, lo que implica que el Consejo puede y está legalmente obligado a instalarlos con anticipación a esa fecha a fin de que éstos realicen la insaculación dentro del término legalmente establecido (por lo menos ciento veinte días antes de la fecha en que se celebre la jornada electoral).

Que además, suponiendo sin conceder, que por cualquier causa los Comités Municipales no estuviesen integrados e instalados con la anticipación requerida, conforme a lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 64 de la ley electoral estatal, el propio Consejo se encuentra facultado para realizar por sí mismo la insaculación de los funcionarios electorales de las mesas directivas de casilla dentro del término legal.

Que por lo anterior, los artículos 76, primer párrafo y 87, fracción I de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí impugnados, no vulneran el principio de certeza que consagra el inciso b) de la fracción IV del artículo 116 constitucional.

6). Que los argumentos de invalidez esgrimidos en los conceptos de invalidez tercero y cuarto son infundados, porque son producto de errores involuntarios en la publicación del Decreto impugnado, que ya fueron enmendados en la fe de erratas al Decreto "351" de la Quincuagésima Sexta Legislatura, publicada en el Periódico Oficial del Estado el diez de julio de dos mil dos.

7). Que la reforma a la fracción IV del artículo 34 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí no es inequitativa, sino al contrario, el citado precepto pretende contribuir al cumplimiento del principio de equidad consagrado en el artículo 116, fracción IV, inciso f) de la Constitución Federal, por virtud de que los comités estatales de los partidos políticos nacionales con inscripción ante el Consejo Estatal Electoral, reciben de sus respectivos Comités Nacionales, recursos en dinero y/o especie, que destinan adicionalmente a los que reciben del Estado, a los procesos electorales locales, en tanto que los partidos políticos con registro estatal, por su naturaleza, únicamente cuentan con los que el Consejo Estatal Electoral les asigna y con los que pueden obtener hasta el límite que la ley les permite por concepto de financiamiento privado, circunstancia que los coloca en una clara situación de desventaja respecto a los partidos políticos nacionales.

8). Que el argumento señalado en el sexto concepto de invalidez debe desestimarse porque la reforma al artículo 35, fracción VII, inciso a) de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí es justa y equitativa, dado que el financiamiento público que se otorga a los partidos políticos, se asigna por una parte en una cantidad igual a todos (principio de igualdad) y por otra, en una cantidad que tiene que ver con los votos obtenidos por cada uno de ellos en la elección inmediata anterior (principio de equidad); mientras que los partidos políticos de reciente registro que por esa circunstancia no cumplen esta condición, cuentan sin embargo con un número determinado de afiliados, que hasta en tanto no participen en una elección, constituye precisamente la representación social que tienen, por lo que el otorgarles esa cantidad adicional mensual no es violatorio del principio de equidad, toda vez que de no otorgárselas estarían en desventaja respecto a los partidos que ya han participado en elecciones anteriores y sería tanto como desconocer que para registrarse o inscribirse es requisito indispensable que cuenten con un número determinado de afiliados que constituye la representación social real con la que cuentan, es decir, que este elemento resulta equiparable al de la votación obtenida por los partidos que ya participaron en una elección.

9). Que el artículo 36, fracción II de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí no es contrario a los principios de objetividad e igualdad, sino por el contrario, es congruente con lo dispuesto por los párrafos primero y segundo de la fracción II del artículo 41 de la Constitución Federal porque dispone una regla lógica consistente en que los partidos políticos no podrán erogar en sus gastos de campaña más recursos que los que puedan legalmente recibir por concepto de financiamiento público y privado, correspondiendo dentro de

esos límites al Consejo Estatal Electoral, determinar en forma igualitaria los topes que en ese rubro pueden erogar los mismos.

10). Que el artículo 26, fracción II, inciso d), así como el penúltimo párrafo del mismo, no transgreden el artículo 41 constitucional porque de conformidad con este último, la ley electoral local puede y debe regular el derecho de los partidos políticos para participar en los procesos electorales de la entidad, y no se puede dejar al arbitrio de los partidos la forma de su intervención, sino que por el contrario, es necesario contar con el marco jurídico adecuado en el que se establezcan las potestades y obligaciones que los partidos políticos nacionales deben utilizar en los procesos electorales.

11). Que son infundados el noveno y décimo conceptos de invalidez en los que se señala que el artículo 48, así como el artículo 212, fracciones VI y VII de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, son inconstitucionales porque contrariamente a lo que aduce el promovente, no es el Instituto Federal Electoral el organismo que otorga a los partidos políticos nacionales el derecho o la posibilidad de participar en las elecciones locales, sino los organismos electorales estatales que autorizan su inscripción para participar en los procesos electorales bajo el cumplimiento de determinados requisitos de ley; en consecuencia, son los propios organismos electorales estatales los facultados para cancelar, en su caso, dichas inscripciones y no el Instituto Federal Electoral.

12). Que el artículo 38, primer párrafo de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, que señala que la afiliación de los ciudadanos a los partidos políticos será libre, individual y voluntaria, que deberá constar en el padrón respectivo y que se tendrá por inexistente cualquier pacto que limite o reduzca la libertad de afiliación o de voto, no vulnera lo establecido por el artículo 41, fracción III de la Constitución Federal, porque no invade la esfera de competencia del Instituto Federal Electoral puesto que no establece esa declaración como requisito para registrar o calificar de legales los estatutos de un partido político nacional, ni contraviene alguna disposición del código federal que regula la materia electoral, sino que es congruente con las disposiciones que al efecto contiene ese ordenamiento.

13). Que el reformado artículo 38 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí no transgrede el artículo 41, fracción III, último párrafo de la Constitución Federal, por el contrario, con dicha reforma se pretende dar certeza al manejo del financiamiento público que el Estado otorga a los partidos políticos, quedando el órgano interno encargado de la percepción y administración de sus recursos generales y de campaña, bajo la responsabilidad de un contador público titulado. Además dicho requisito resulta acorde con lo establecido por el artículo 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución Federal puesto que en ejercicio de sus facultades soberanas, el Estado puede establecer los requisitos que considere necesarios para la debida comprobación de los recursos públicos que asigna.

14). Que la reforma al artículo 20 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí no viola el artículo 116, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque no establece los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Gobernador del Estado, sino que únicamente remite expresamente a las disposiciones conducentes tanto de la Constitución Federal como de la particular del Estado, y en atención al principio de supremacía constitucional, debe atenderse preferentemente a las disposiciones de la Constitución Federal. Que la reforma al artículo 20 de la ley electoral estatal consistió precisamente en introducir la remisión expresa y en primer término a la Constitución Federal, ya que en su anterior redacción sólo remitía a la Constitución Estatal, con lo cual, la mencionada reforma tuvo el efecto contrario al que señala la accionante, pues lejos de afectarlo de inconstitucionalidad, purga el vicio que indirectamente le afectaba, ya que a partir de ésta es indudable que el plazo de la residencia efectiva que requiere un potosino por vecindad para ser elegido gobernador del Estado deberá ser no menor de cinco años.

15). Que por lo que hace al décimo cuarto concepto de invalidez en el que la accionante señala que el artículo 41, último párrafo de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí es violatorio del artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Federal, es infundado porque es errónea la afirmación del accionante en el sentido de que los partidos políticos que han obtenido su inscripción ante el Consejo Estatal Electoral, tengan que renovarla para participar en cada proceso electoral, toda vez que ésta no se les otorga con carácter de temporal, sino permanente. Por tal razón, los partidos políticos nacionales que a la fecha de la publicación del decreto impugnado, cuenten ya con inscripción ante el referido órgano electoral, no se encuentran en el supuesto que establece el artículo impugnado, ni son sujetos de la aplicación de la misma en virtud del principio de irretroactividad de la ley.

16). Que la accionante está en un error al afirmar que el artículo 64, fracción X de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí es inconstitucional, por otorgar facultades al Consejo Estatal Electoral para remover a los integrantes de las Comisiones Distritales y Comités Municipales Electorales por causas graves. Lo anterior es así porque el promovente confunde las facultades discrecionales con el uso arbitrario que la ley le concede a la autoridad bajo determinadas condiciones, consistente en que la autoridad tiene cierto margen para apreciar razonadamente los hechos realizados, los lineamientos legales y las reglas de la lógica, a efecto de ejercer la facultad sancionadora siempre acorde a los fines para los que fue dictada,

evitando excesos o defectos que le resten eficacia jurídica, lo cual constituye el espíritu de la facultad que se contiene en la norma impugnada.

17). Que el décimo sexto concepto de invalidez es infundado porque se impugna la reforma al artículo 11 último párrafo de la Ley Electoral del Estado, siendo que dicho precepto no fue materia de la reforma del decreto impugnado. Además, cabe aclarar que dicho precepto no es contrario a lo establecido en el último párrafo de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Federal, sino que es congruente con lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución del Estado.

18). Que el artículo 13 último párrafo de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí cuya inconstitucionalidad se demanda, es acorde con el sistema consignado en el artículo 116, fracción II de la Constitución Federal porque para cubrir las vacantes de diputados de representación proporcional privilegia a los suplentes y candidatos en el puesto preferente que ocupen según las listas votadas, del partido al que corresponda la vacante de diputado por el principio de representación proporcional.

19). Que la accionante tacha de inconstitucional el artículo 32 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, por el que se establece que los dirigentes, candidatos y los representantes de los partidos políticos tendrán responsabilidad solidaria en el uso y aplicación de los recursos del financiamiento público otorgado a los partidos políticos, sin embargo dicho argumento es infundado, porque lo que se busca con dicha reforma es asegurar la transparencia en el manejo de los recursos provenientes del erario público. También resulta infundado por virtud de que en el escrito de demanda, el promovente omite precisar el o los preceptos constitucionales que estima violados, situación que hace jurídica y materialmente imposible analizar dicho concepto pues el artículo 71, segundo párrafo de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, dispone que las sentencias que dicte la Suprema Corte sobre la no conformidad de leyes electorales a la Constitución, sólo podrán referirse a la violación de los preceptos expresamente señalados en el escrito inicial, es decir, que al no haberse señalado ningún precepto constitucional como violado, no se puede estudiar el presente concepto.

Que asimismo, suponiendo sin conceder que el hecho de que el artículo cuya inconstitucionalidad se demanda al establecer una responsabilidad solidaria, genere un perjuicio a los sujetos señalados, dicha afectación recaería sobre las personas que se ubiquen en los supuestos de la responsabilidad solidaria, quienes tendrán en su momento, el interés jurídico suficiente para atacar el acto de aplicación a través del juicio de amparo y no mediante la acción de inconstitucionalidad.

20). Que el décimo noveno concepto de invalidez es infundado, pues si bien es cierto que en el artículo 43 reformado de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, específicamente en su fracción X, no se estatuyó como requisito del convenio de coalición el porcentaje de votación que correspondería a los partidos coaligados, para efecto de financiamiento público, ello no afecta la certeza de la función electoral ni de los procesos electorales, por lo que no contradice norma constitucional alguna, máxime que en la especie el financiamiento se encuentre regulado por otros artículos de la Ley Electoral del Estado, aunado además a lo anterior, el hecho de que el artículo impugnado en sus restantes fracciones establece los requisitos mínimos que deberán contener los convenios de coalición para que surtan efectos plenos ante las autoridades electorales, lo cual no significa que los partidos coaligados no puedan incluir en ellos más cuestiones que las previstas por la ley, entre otras, las relativas al porcentaje de votación que le corresponderá a cada uno de ellos para efectos del financiamiento, máxime que la norma no contempla prohibición expresa al respecto.

21). Que el vigésimo de los conceptos de invalidez resulta infundado en tanto que no se demuestra una real contradicción entre los reformados artículos 195 y 200 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y el numeral 116, fracción IV, inciso d) de la Constitución Federal. Ello es así porque el promovente se basa en consideraciones generales y abstractas para señalar que el plazo de cinco días para la resolución de los recursos es inconveniente, además, sus argumentos carecen de eficacia jurídica dado que el texto de los artículos 195 y 200 de la ley electoral estatal vigente antes de la reforma, establecían el mismo plazo de cinco días en cada caso, sin que existan indicios de que en un momento dado resultaron insuficientes y afectaron las funciones y los resultados electorales.

22). Que el vigésimo concepto de invalidez que el promovente hace valer, no es posible jurídicamente tenerse como tal, pues no se impugna la constitucionalidad de norma alguna, sino que más bien se trata de un alegato general a través del cual se pretende sostener la procedencia de los argumentos señalados en su demanda.

SEPTIMO.- Por oficio TEPJF/P/219/02, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó su opinión en la presente acción de inconstitucionalidad en los términos que a continuación se resumen:

1). Que es infundado el argumento del accionante esgrimido en el primer concepto de invalidez consistente en que el artículo 10, primer párrafo de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, contraviene lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Orgánica del Municipio del mismo estado y por tanto,

transgrede lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso b) constitucional, toda vez que la instalación de los ayuntamientos es una actuación que no forma parte del proceso electoral y por ello queda fuera de la esfera de competencia de la autoridad electoral administrativa y también queda fuera de la regulación de la propia ley electoral atacada de inconstitucional.

Que no se transgrede el principio de certeza porque no existe incertidumbre en cuanto al desarrollo de cada una de las etapas del proceso electoral y la culminación del mismo, pues sí se establecen los plazos máximos en que las autoridades electorales locales deberán llevar a cabo sus actividades.

Además, de conformidad con lo previsto en el artículo segundo transitorio del Decreto "351" expedido por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de San Luis Potosí, fueron derogadas todas las disposiciones y ordenamientos legales que se opongan al mismo, de modo que si lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de esa entidad federativa, no resulta acorde con lo establecido en el mencionado decreto, entonces deberá entenderse derogado y en todo caso lo que quedaría pendiente es sustituirlo por otra disposición que sí esté en concordancia con la ley electoral reformada.

2). Que el segundo concepto de invalidez esgrimido por la promovente también deviene infundado porque no existe incongruencia entre el contenido del párrafo primero del artículo 76 y la fracción I del artículo 87, ambos de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, puesto que tales disposiciones se refieren a la instalación o integración de distinto tipo de autoridades electorales ya que el primero de los numerales citados prevé la fecha en la que a más tardar se deben instalar los Comités Municipales Electorales (treinta de junio del año de la elección), mientras que, el segundo tiene que ver con la anticipación mínima que se requiere para realizar el procedimiento de insaculación para la integración de las casillas electorales (ciento veinte días antes de la fecha de la jornada electoral).

3). Que respecto del tercer concepto de invalidez en el que el promovente aduce que el artículo 107, primer párrafo de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, transgrede el principio de certeza porque no existe certidumbre sobre la fecha en que culmina el proceso de las elecciones de los ayuntamientos, es infundado porque precisamente la última parte del párrafo primero del citado numeral, dispone expresamente que "culmina en diciembre del año de los comicios."

Que por lo que se refiere al argumento del accionante relativo a que el artículo 107, fracción IV de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, es incongruente con el resto de las fracciones del mismo precepto, cabe señalar que no existe dicha incongruencia, porque el diez de julio de dos mil dos se publicó una fe de erratas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, que no fue impugnada, y a través de la cual se corrigió el alegado desfasamiento de las fechas para algunas de las etapas de los comicios, tales como la jornada electoral, el cómputo de las elecciones, así como la declaración de validez o nulidad de éstas.

Que de igual forma, se considera inexacto lo afirmado por el promovente en el sentido de que existe incongruencia entre la fecha señalada en el artículo 10 reformado, y la prevista en el primer párrafo del artículo 78, de la misma ley; habida cuenta que el último de tales preceptos también se corrigió en la fe de erratas mencionada.

4). Que es infundado el cuarto concepto de invalidez en el que el partido político accionante aduce que la reforma realizada a la fracción III del artículo 57 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, es inconstitucional porque en ella reitera lo establecido en la diversa fracción II del mismo artículo, misma que no fue reformada; ello es así porque a través de la fe de erratas publicada el diez de julio de dos mil dos, se modificó la fracción II citada y por consecuencia ambas fracciones ya no tienen el mismo contenido.

5). Que el quinto concepto de invalidez es fundado porque la fracción IV del artículo 34 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, contraviene el principio de equidad establecido en el inciso f) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Federal, dado que se da un tratamiento desigual a los partidos políticos nacionales, porque el hecho de que en las cuestiones relativas al financiamiento público se les excluya de la cantidad adicional de la que se otorgará a los partidos políticos locales es inequitativo y desigual. Ello es así porque el artículo constitucional que se considera violado no hace distinción alguna entre partidos políticos nacionales y locales, por lo que debe darse el mismo trato a ambos tipos de institutos políticos por encontrarse en igualdad de circunstancias, consistentes en tener la calidad de partidos políticos.

6). Que en el sexto concepto de invalidez el partido político promovente aduce que el inciso a) reformado de la fracción VII del artículo 35 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí transgrede los artículos 116, fracción IV, inciso f) y 41, fracción I, segundo párrafo de la Constitución Federal por virtud de que ordena que los partidos políticos que hubieren obtenido su registro o inscripción con fecha posterior a la última elección, y que por tanto, no cuenten con antecedentes electorales en el Estado, tendrán derecho a recibir un cinco por ciento adicional, respecto del financiamiento obtenido en la parte igualitaria, por cada

quinientos afiliados adicionales al mínimo requerido, que hubieren acreditado en el procedimiento de obtención de su registro.

Que lo dispuesto en los artículos 116, fracción IV, párrafo segundo, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal, si bien está referido al financiamiento público, lo cierto es que corresponde a ámbitos de validez diversos y, no son aplicables ambos al financiamiento público que se otorga a los partidos
políticos en los Estados. Por lo que se refiere al último de los preceptos citados, en él se establecen una serie de prescripciones jurídicas aplicables a los partidos políticos nacionales, que deben observarse por el legislador ordinario federal para la fijación anual del financiamiento público relativo al sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, se utilizan elementos relativos al depositario del Poder Legislativo Federal, lo cual por sí mismo es suficiente para comprender que lo previsto en dicho artículo 41, al menos lo relativo al financiamiento público, no es aplicable al financiamiento que se confiere por las autoridades electorales locales.

Que por el contrario, en el caso de la multicitada fracción IV del párrafo segundo del artículo 116 constitucional, su ámbito de validez corresponde al de los Estados, y por ello debe considerarse que el precepto legal cuya inconstitucionalidad se reclama sí contraviene el principio de equidad dado que no comprende el derecho igualitario de acceso al financiamiento público para los partidos políticos de reciente registro, con independencia de que sean estatales o nacionales, señalándose que la circunstancia de tener esta última calidad, no constituye una diferencia específica que justifique un trato diferenciado a esos institutos políticos, dado que en el inciso f) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que tanto los partidos políticos locales como los nacionales reciban, en forma equitativa, ese financiamiento.

7). Que es fundado el séptimo concepto de invalidez en el que se señala que el artículo 36, fracción II de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí viola lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, incisos b) y h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque los topes a los gastos de campaña deben ser fijados para cada elección, y no de manera individual a cada uno de los partidos políticos contendientes, en la inteligencia de que el límite de las erogaciones de los partidos políticos, coaliciones y sus candidatos, debe realizarse en función del total de lo que éstos pueden gastar en cada tipo de elección, independientemente de lo que cada uno de ellos puede gastar de acuerdo con el financiamiento público que reciba y en consecuencia, el tope de gastos de campaña. Además de lo anterior, lo equitativo y legal, es que se determine con base en elementos objetivos e igualitarios para todos los partidos políticos contendientes, para que así, se cumpla con la finalidad de propiciar transparencia e igualdad de oportunidades en la contienda electoral.

8). Que el octavo concepto de invalidez en el que se señala que el artículo 26, fracción II, inciso d) de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, así como el penúltimo párrafo del mismo precepto transgrede el artículo 41, fracciones I, primer párrafo y III último párrafo de la Constitución Federal resulta fundado porque el legislador estatal no puede incorporar más requisitos dentro de su legislación, que los previstos para los partidos políticos nacionales en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que el hecho de que en el artículo cuya invalidez se demanda se pretenda que los partidos políticos nacionales acrediten, de manera adicional a lo que señala la legislación electoral federal que cuentan en dicha entidad federativa con un número de afiliados que signifique al menos el cero punto trece por ciento de los electores inscritos en el listado nominal que se hubiere utilizado en la última elección estatal, y que dichos afiliados provengan de al menos la mitad de los municipios de la entidad, y que en ningún caso, el número de afiliados en cada uno de tales municipios pueda ser inferior al cero punto cinco por ciento de su listado nominal, es inconstitucional.

9). Que los argumentos señalados en los conceptos de invalidez noveno y décimo referentes a que el artículo 48 primer párrafo de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí vulnera el artículo 41, fracciones I, párrafo primero y III último párrafo de la Constitución Federal, así como que las fracciones VI y VII del artículo 212 de Ley Electoral de la misma entidad infringen lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son infundados porque no es el Instituto Federal Electoral el organismo facultado para imponer como sanción a un partido político nacional, la suspensión o la cancelación de su registro o inscripción.

Que ello es así, porque de conformidad con los artículos constitucionales que se consideran violados, los Congresos de las entidades federativas están facultados para emitir las disposiciones que rijan los comicios locales y, por tanto, tienen la atribución constitucional y legal para reglamentar la actuación de los partidos políticos nacionales en los comicios de que se trata, estableciendo los procedimientos y mecanismos necesarios para hacer vigentes los derechos constitucionales y legales de dichos institutos políticos.

Que además de lo anterior, de la confrontación de los preceptos legales impugnados con lo dispuesto en los correlativos de la legislación anterior a la reforma, se desprende que la única modificación que se generó con motivo de la reforma legal a la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, fue que el último párrafo del

artículo 47 (del texto anterior) se ubicó en el 48, y por lo que hace al diverso 212, las fracciones IV y V (del texto anterior) se recorrieron a los numerales VI y VII del propio dispositivo legal, pero no sufrieron modificación sustancial alguna, sino que quedaron idénticos, por lo que debe estimarse que no existe una reforma en sentido material, dado que sólo se reubicaron dichas normas en lugar distinto dentro del propio ordenamiento jurídico. Por lo anterior, dado que la presente acción de inconstitucionalidad versa sobre normas que no fueron objeto de reforma, no debe realizarse consideración de fondo alguna, máxime que la vigencia de dichos preceptos normativos data del treinta de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, fecha en que se publicó en el Periódico Oficial del Estado, la Ley Electoral de esa entidad, por virtud de la cual se hubiese podido ejercer la acción de mérito en aquel momento.

10). Que resulta fundado el décimo primer concepto de invalidez en el que se señala que el artículo 23, último párrafo de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, vulnera lo dispuesto por el artículo 41, fracción III, último párrafo de la Constitución Federal, porque el procedimiento de afiliación a un partido político nacional no puede regularse mediante una ley electoral local, puesto que corresponde al Instituto Federal Electoral todo lo relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos nacionales.

11). Que es fundado el duodécimo concepto de invalidez en el que se reclama la inconstitucionalidad del primer párrafo del artículo 38 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, porque el artículo 27, párrafo primero, incisos c), fracción IV del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé como obligación de los partidos políticos establecer en sus estatutos un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros, sin embargo, el hecho de que el artículo cuya invalidez se demanda exija que dicho órgano tenga como responsable a un contador público titulado, viola el artículo 16 constitucional pues el legislador local está regulando aspectos que conciernen al Congreso de la Unión.

12). Que es infundado el argumento vertido en el décimo tercer concepto de invalidez ya que el artículo 20 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, no afecta ningún principio de carácter electoral de base constitucional por la simple remisión que hace a otros cuerpos legales.

13). Que es infundado el décimo cuarto concepto de invalidez en el que el actor señala que el artículo 41 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí contraviene el principio de certeza electoral porque, el actor parte de la premisa falsa de que los partidos políticos nacionales deben inscribirse ante el Consejo Estatal Electoral para cada proceso electoral que participen, situación que es incorrecta puesto que dicha inscripción es de carácter permanente y ésta continúa vigente produciendo todos sus efectos legales hasta que se presente alguno de los supuestos por los cuales pueda cancelarse, por lo tanto, los partidos políticos sólo serán de reciente inscripción en el proceso electoral inmediato posterior a que realicen el trámite respectivo en el Estado, sin que tengan tal carácter en los subsecuentes.

14). Que es infundado el décimo quinto concepto de invalidez en el que se señala que el artículo 64 de la ley electoral potosina, contraviene el principio de certeza establecido en el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Federal puesto que no define qué debe entenderse como causas graves para la remoción de los integrantes de las Comisiones Distritales y Comités Municipales, como atribución del Consejo Estatal Electoral. Ello es así porque la expresión “causas graves” no es ambigua puesto que por ellas deben entenderse las de gran importancia y trascendencia que vulneren de manera trascendente los principios de la función electoral, como son los de imparcialidad, certeza, legalidad, objetividad e independencia o que se contrapongan en forma sustancial y evidente con los principios de elecciones libres, auténticas y periódicas, o que atenten contra el voto libre, secreto y directo, es decir, pueden calificarse como graves, cualquier actividad que afecte de manera sustancial la función electoral.

Que además, no debe perderse de vista que conforme al artículo 16 constitucional, el Consejo Estatal Electoral, en su carácter de autoridad, tiene la obligación de fundar y motivar sus resoluciones, razón por la que cuando emita una resolución mediante la cual remueva a alguno de los funcionarios de los órganos electorales de referencia, deberá expresar las razones y motivos por los cuales considera que las circunstancias particulares de modo, tiempo y lugar de comisión de la falta, son suficientes para considerarla como causa grave y ameritan la remoción del funcionario de que se trate.

15). Que es infundado el argumento vertido en el décimo sexto concepto de invalidez, consistente en que el artículo 11 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, atenta contra el artículo 115 de la Constitución Federal porque establece que en caso de empate en las elecciones de ayuntamientos, en segunda votación, el Congreso del Estado nombrará un Concejo Municipal que cumplirá sus funciones hasta en tanto se celebre la elección extraordinaria correspondiente, lo cual, según el actor, no está permitido por el precepto constitucional que se considera violado porque para que se pueda designar un concejo municipal provisional es necesario, entre otros requisitos, que no haya posibilidad de celebrar elecciones extraordinarias y que el cuerpo colegiado municipal de que se trate, concluya sus funciones, requisitos que en el caso no se dan.

Que lo anterior es infundado, porque no se transgrede ningún principio de carácter electoral constitucional, ya que el empate es una hipótesis suficiente para que, en el caso, la Legislatura del Estado designe al Concejo Municipal de carácter provisional que habrá de fungir hasta que se realicen las elecciones extraordinarias correspondientes, puesto que, los órganos de gobierno tienen que funcionar en los plazos
que fatal y necesariamente señalan las leyes, ya sea que se integren mediante la regla general que sería a través del voto ciudadano, o bien, mediante excepciones constitucionales o legales que justifiquen esa designación provisional.

16). Que es fundado el décimo séptimo concepto de invalidez en el que el promovente señala que el artículo 13, último párrafo de la ley electoral potosina viola los principios de legalidad y de representación proporcional establecidos en el artículo 116 de la Constitución Federal, porque establece la posibilidad de que otro partido político distinto al que de acuerdo a la votación le correspondía la diputación por el principio de representación proporcional, asuma la vacante de diputado. Lo anterior es así, porque el principio de representación proporcional descansa sobre la base de que el número de diputados de un partido político electos por el citado principio es proporcional al porcentaje de votos obtenido, por lo que no existe fundamento alguno para que por dicho principio accedan al cargo los candidatos de otros partidos políticos.

17). Que es infundado el décimo noveno concepto de invalidez en el que el accionante señala que es inconstitucional la fracción X del artículo 43 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, porque no señala el porcentaje de votación que corresponderá a cada uno de los partidos políticos coaligados para efectos del financiamiento público, requisito que es indispensable señalar en el convenio de coalición, por lo que se vulnera el principio de certeza que establece nuestra Constitución Federal puesto que existe incertidumbre en caso de participar en coalición. Lo anterior es así porque del contenido de los artículos 42 y 35, fracción IV, inciso b) de la propia ley electoral se desprende que no se genera incertidumbre alguna si se toma en cuenta que se deja al convenio celebrado por los partidos coaligados la forma en que se van a computar los votos obtenidos por la coalición a favor de cada partido político participante, y que tal división tendrá que ver con la distribución de prerrogativas, en donde, el sesenta y cinco por ciento irá en función de los resultados promedio que hayan obtenido los partidos en las elecciones de diputados y ayuntamientos anteriores.

18). Que es infundado el vigésimo concepto de invalidez en el que el accionante manifiesta que los artículos 195 primer párrafo y 200 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, violan el artículo 116, fracción IV, inciso e) de la Constitución Federal porque el término de cinco días naturales que establecen para la resolución de los recursos, tanto de inconformidad como de apelación, es inconveniente para la resolución de las múltiples controversias electorales que se presenten en virtud de la celebración de comicios en toda la entidad federativa. Lo anterior es así, porque el plazo que los artículos impugnados conceden a los organismos electorales para resolver las controversias electorales, sí es un plazo conveniente para desahogar todas las instancias impugnativas a que se refiere el inciso e) de la fracción IV del artículo 116 constitucional porque con ello se busca garantizar una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena la Constitución Federal en otro de sus preceptos.

19). Que sobre los argumentos de invalidez que se hacen valer en los conceptos de invalidez décimo octavo y vigésimo primero, no se emite opinión alguna debido a que se trata de cuestiones ajenas a la materia electoral.

OCTAVO.- Por oficio PGR/1758/2002 de veintiséis de agosto de dos mil dos, el Procurador General de la República formuló su opinión, en la que en síntesis manifestó:

1.- Que esta Suprema Corte es competente para sustanciar y resolver la presente acción de inconstitucionalidad.

2). Que la demanda de acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.

3). Que la demanda fue hecha valer por parte legitimada para ello.

4). Que el primer concepto de invalidez resulta fundado porque sí se transgrede el principio de certeza previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Federal, ya que se debe de tener la certeza de la fecha en que un órgano de representación popular deba quedar instalado legalmente, y en el caso, en ninguno de los artículos de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí se hace referencia a la fecha en que se instalarán los Cabildos, ya que únicamente se señala la fecha de su elección.

5). Que son infundados los argumentos vertidos en el segundo concepto de invalidez porque las disposiciones que se tildan de inconstitucionales, se refieren a órganos electorales distintos, cuya integración se realiza de manera independiente del otro. Lo anterior es así porque el artículo 76, primer párrafo, reformado, alude a la instalación de los Comités Municipales Electorales, encargados de preparar, desarrollar y vigilar las elecciones para ayuntamientos en sus respectivos ámbitos, mientras que el artículo 87, fracción I, parte final de la ley electoral estatal, también reformado, establece un procedimiento que nada tiene que ver con la integración y funcionamiento de los Comités Municipales Electorales, sino con el

procedimiento de insaculación de los funcionarios de casilla, el cual debe efectuarse al menos ciento veinte días antes de la fecha de la jornada electoral.

6). Que es infundado el tercer concepto de invalidez porque el promovente al formular su demanda, no tomó en cuenta la fe de erratas al decreto impugnado, publicada el diez de julio de dos mil dos, de la cual se desprende que no existe la incongruencia que aduce, entre diversas fracciones del artículo 107 de la ley electoral estatal impugnado, ya que sí hay una secuencia cronológica en las etapas electorales.

7). Que el cuarto concepto de invalidez resulta infundado porque a través de la fe de erratas se corrigió la supuesta inconstitucionalidad alegada por el promovente, y por consecuencia no se vulnera el principio de certeza establecido en el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

8). Que resulta fundado el quinto concepto de invalidez porque sí se vulnera el principio de equidad contenido en el artículo 116, fracción IV, inciso f) constitucional, toda vez que independientemente de los montos del financiamiento que le correspondan a cada partido político, ya sea con registro nacional o estatal, tanto del porcentaje a repartir de manera igualitaria como del que se distribuye de manera proporcional a los resultados obtenidos en las elecciones próximas pasadas, el artículo cuya invalidez se demanda, establece una cantidad adicional únicamente a favor de los partidos políticos con registro estatal. Dicha prerrogativa constituye un privilegio que sólo beneficia a los partidos políticos estatales, en detrimento de las agrupaciones políticas de carácter nacional, por lo que al no otorgar esa cantidad adicional a todos los partidos políticos, se establecen distinciones y preferencias entre las entidades políticas que permiten que unas tengan mayores derechos en perjuicio de otras, circunstancia que quebranta el principio de equidad en la distribución del financiamiento público plasmado en la norma constitucional referida.

9). Que es fundado el sexto concepto de invalidez porque el artículo 35, fracción VII, inciso a) de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, que se impugna como inconstitucional, hace una distinción que otorga mayores prerrogativas a los partidos políticos con registro estatal que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última elección, no sólo en detrimento de los partidos políticos nacionales con inscripción, pues los partidos políticos nacionales no cuentan con registro ante el Consejo Estatal Electoral, sino también de aquellas entidades políticas que hubieren obtenido su registro ante la autoridad electoral del Estado, con anterioridad al último proceso electoral. Por lo anterior, el precepto cuya invalidez se demanda sí quebranta el principio de equidad en la distribución del financiamiento público, plasmado en el artículo 116, fracción IV, inciso f) de la Constitución Federal.

10). Que resulta fundado el séptimo concepto de invalidez porque el reformado artículo 36, fracción II de la ley electoral estatal contradice los incisos b) y h) de la fracción IV del artículo 116 constitucional al establecer que el límite máximo de gastos de campaña de cada partido político, deberá ser menor del doble del monto que por financiamiento público reciban para cada tipo de elección, tal disposición establece un criterio subjetivo, pues al estipular que el tope a los gastos de campaña siempre será menor al doble del financiamiento público que reciba, genera inequidad entre los partidos políticos, puesto que el financiamiento que reciben las agrupaciones políticas siempre será distinto respecto a unos de otros, en virtud de que parte de las prerrogativas se distribuyen en base a la presencia electoral de cada partido político, en consecuencia cada entidad política tendrá un límite máximo de gastos diferente a los demás.

11). Que es fundado el octavo concepto de invalidez porque el artículo 26, fracción II, inciso d), así como el penúltimo párrafo del mismo, le imponen a los partidos políticos nacionales, con registro ante el Instituto Federal Electoral, requisitos adicionales para poder participar en los procesos electorales estatales y municipales y para tener acceso al financiamiento público estatal, tales como acreditar un número específico de afiliados no menor a un porcentaje determinado del listado nominal de electores y que además tales afiliados se encuentren en la mitad de los municipios de la entidad.

Que dichas exigencias contravienen lo dispuesto por el artículo 41, fracción I, parte final de la Constitución Federal, que ordena que los partidos políticos son entidades de interés público y que la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral; además, de que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales. Dado que si el dispositivo constitucional señala que será la ley la que determine la forma en que las entidades políticas intervendrán en los comicios, es claro, que tal ley será una de carácter federal, en concreto el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que necesariamente normará los requisitos para la constitución y registro de las agrupaciones políticas ante la autoridad electoral federal.

12). Que es infundado el argumento esgrimido en el noveno concepto de invalidez porque el órgano electoral competente para decidir sobre la cancelación de las inscripciones al proceso electoral de las agrupaciones políticas nacionales que incurran en alguna violación a la ley, es el órgano establecido en el ordenamiento electoral de la entidad de que se trata, esto es, el Consejo Estatal Electoral y no el Instituto Federal Electoral.

13) Que es infundado el argumento de invalidez que el promovente hace valer en su décimo concepto puesto que el hecho de que en el impugnado artículo 212 de la ley electoral estatal se establezcan

sanciones que pueden imponerse a los partidos políticos que incurran en violaciones al ordenamiento local, no hace más que garantizar la observancia de dicho estatuto, acorde con el precepto 116, fracción IV, inciso i) de la Constitución Federal. Además de que como se mencionó en el concepto anterior, corresponde al legislador local emitir las leyes que normen los comicios en las entidades federativas y en consecuencia goza de plena potestad no sólo para señalar los delitos y faltas en materia electora, sino también las sanciones para castigarlos.

14). Que el décimo primer concepto de invalidez resulta fundado porque el artículo 23, último párrafo de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí atenta contra el derecho que tienen los partidos políticos, como asociaciones de individuos, para establecer los requisitos y condiciones que deben colmar aquellas personas que tengan la intención de afiliarse al instituto político. Lo anterior es así porque es competencia exclusiva de la autoridad federal pronunciarse sobre los procesos de afiliación que instituyan los partidos políticos nacionales, por lo que es claro que tales formas de incorporación de ciudadanos a dichas agrupaciones no pueden ser regulados por la ley local.

15). Que la reforma al artículo 38, primer párrafo de la ley impugnada es inconstitucional por virtud de que establece un requisito adicional a los partidos políticos nacionales, que ven de esta manera alterada su composición orgánica al exigir el dispositivo impugnado que deben contar con un órgano interno encargado de recibir y administrar los recursos generales y de campaña, el cual en términos del precepto en cuestión debe estar a cargo de una persona que tenga el título profesional de contador público.

Que con ello se pretende reglamentar la composición de los órganos de administración y control de los partidos políticos nacionales y estatales, si bien es cierto que respecto a las entidades políticas de carácter estatal sí puede establecer tal requisito, porque tales agrupaciones se constituyen ante el órgano local electoral y éste a su vez les otorgaría, de ser procedente, el registro respectivo; en el caso, de los partidos políticos con registro nacional, éstos tuvieron que cumplir con los requisitos previstos en la Ley Federal respectiva que en el apartado correspondiente les estableció como condición para obtener dicho registro, el que contaran al interior de su estructura orgánica con un órgano que se encargara de la administración de los recursos de tal asociación.

16). Que es infundado el décimo tercer concepto de invalidez por virtud de que el artículo 20 de la ley electoral estatal impugnado, únicamente enuncia los ordenamientos constitucionales que regulan los requisitos que deberán cumplir aquellos ciudadanos que aspiren a ocupar la gubernatura estatal.

17). Que la reforma al artículo 41 de la ley electoral del estado no contraviene lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Federal ya que no existe incertidumbre alguna acerca de lo que debe entenderse por partidos políticos de reciente inscripción, pues éstos son las agrupaciones políticas de nueva creación que sea la primera ocasión en que participen en un proceso electoral.

Que además, la accionante parte de una premisa falsa al señalar que la inscripción de un partido político nacional ante la autoridad electoral, debe ser hecha cada vez que se realicen procesos electorales, ya que las inscripciones hechas ante el órgano electoral estatal surten sus efectos de manera permanente, en tanto que el partido político no pierda su registro ante la autoridad electoral federal, en consecuencia, la inscripción que haga el partido político nacional, no debe renovarse en cada jornada electoral.

18). Que es fundado el décimo quinto concepto de invalidez esgrimido por el promovente, porque el legislador local omitió establecer el catálogo de infracciones imputables a los miembros de las instancias electorales de competencia distrital y municipal que siendo calificada como graves den lugar a su remoción, lo que constituye evidentemente una contravención al principio de certeza previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Federal, por virtud de que no se dan a conocer los supuestos que se consideran como causas graves para remover a los integrantes de los órganos electorales, lo cual genera efectivamente una falta de certidumbre tanto en las actividades del personal electoral como en los partidos políticos. Por lo tanto, el artículo 64, fracción X, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí es inconstitucional.

19). Que es infundado el décimo sexto concepto de invalidez porque el reformado artículo 11, último párrafo de la Ley Electoral del Estado, no transgrede lo dispuesto por el artículo 115, fracción I, último párrafo de la Constitución Federal ya que el artículo cuya invalidez se demanda, regula una posibilidad que se podría actualizar, en caso de votaciones municipales donde se presentara un empate, y no se pudiera contar con un Ayuntamiento electo para que quedara instalado e iniciara sus funciones constitucionales, quedando acéfalo el mismo, lo que sería contrario al orden constitucional. Dicha reforma no deviene inconstitucional porque se trata de una hipótesis diferente a las que contempla la Constitución Federal, es decir, se trata de una situación distinta, “empate de elecciones” que haría necesaria la designación de un Consejo Municipal de carácter provisional, hasta en tanto se celebren nuevas elecciones.

20). Que es inconstitucional la reforma al artículo 13, último párrafo de la ley electoral estatal porque ordena una forma distinta de asignación de diputados a la Legislatura Estatal, a la ordenada por la Constitución Federal, que establece únicamente dos principios, el de mayoría relativa y el de representación proporcional. Lo anterior es así porque es incorrecto pretender que se ocupe una vacante de diputado

elegido bajo el sistema de representación proporcional, llamando a un candidato de otro partido que no obtuvo el número de votos necesarios para obtener dicha diputación. Por lo tanto, sí se vulnera lo dispuesto por
el artículo 116, fracción II, último párrafo, así como la fracción IV, inciso b) de la Constitución Federal, por lo que el argumento de invalidez esgrimido resulta fundado.

21). Que la reforma al último párrafo del artículo 32 del ordenamiento electoral del Estado de San Luis Potosí, contraviene el principio de legalidad contenido en el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Federal, al establecer una responsabilidad objetiva imputable a personas que no tienen el deber de garantizar el adecuado uso y destino del financiamiento público que se otorgue a los partidos políticos, por virtud de que no tienen relación alguna con la administración y control de tales recursos, siendo únicamente los dirigentes de los partidos políticos quienes deben cuidar el uso y aplicación de los recursos que reciban del erario público, razón por la que solamente ellos, deben considerarse como responsables solidarios, para el supuesto de que dichos recursos públicos no sean aplicados para su fin específico, por virtud de ser ellos, quienes finalmente manejan dichos recursos.

22). Que resulta infundado el décimo noveno concepto de invalidez en el que se señala como inconstitucional el artículo 43 de la ley electoral estatal. Lo anterior es así porque la reforma en comento no genera incertidumbre respecto al financiamiento de los partidos políticos en coalición porque de conformidad con el artículo 42, así como con el 35, fracción IV, inciso b) del mismo ordenamiento legal, será en el convenio celebrado entre los partidos políticos coaligados, en donde se establezca la forma en que se van a computar los votos obtenidos por la coalición a favor de cada agrupación política participante, y tal división se tomará en cuenta para la distribución del financiamiento público, en donde el sesenta y cinco por ciento será repartido en función de los resultados promedio que hayan obtenido los partidos en las elecciones de diputados y ayuntamientos anteriores. Por lo tanto, la incertidumbre alegada por la actora es inexistente.

23). Que es infundado el argumento vertido en el vigésimo concepto de invalidez porque conforme al artículo 116, fracción IV, inciso e) de la Constitución Federal, el legislador debe observar que en la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, se fijen plazos eficaces para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales. Atendiendo a lo anterior, los artículos 195, primer párrafo y 200 de la ley electoral estatal impugnados, fijan un término de cinco días para resolver los recursos de inconformidad y de apelación, situación que
no transgrede lo dispuesto por la Constitución Federal, máxime que el accionante atendiendo a un criterio subjetivo considera que el término fijado es inconveniente, circunstancia que no hace que los numerales impugnados sean inconstitucionales.

24). Que los conceptos de invalidez que se señalaron como fundados transgreden el artículo 133 de la Constitución Federal, ya que no se observaron los principios contenidos en la misma.

NOVENO.- Recibidos los informes de las autoridades, la opinión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la opinión del Procurador General de la República y encontrándose debidamente instruido el procedimiento en sus términos, se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se demanda la inconstitucionalidad del Decreto “351”, por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.

SEGUNDO.- La demanda de acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente, atento a lo siguiente:

El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, dispone:

> *"ARTICULO 60.- El plazo para ejercitar la acción de "inconstitucionalidad será de treinta días naturales "contados a partir del día siguiente a la fecha en "que la ley o tratado internacional impugnado sean "publicados en el correspondiente medio oficial.*
>
> *"Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda "podrá presentarse el primer día hábil siguiente.*
>
> *"En materia electoral, para el cómputo de los "plazos, todos los días son hábiles."*

Conforme al artículo transcrito, el cómputo respectivo debe hacerse a partir del día siguiente al en que se publicó el Decreto que contiene la norma que se impugna, considerando en materia electoral, todos los días como hábiles.

El Decreto número “351” por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el ocho de julio de dos mil dos.

Tomando en cuenta esta fecha, el primer día del plazo para efectos del cómputo respectivo fue el martes nueve de julio, de lo que resulta que el plazo de treinta días naturales vencería el miércoles siete de agosto de dos mil dos.

En el caso, la demanda se presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el siete de agosto de dos mil dos, esto es, el último día del plazo legal correspondiente, por lo que en tales condiciones, debe considerarse que la demanda fue presentada oportunamente.

TERCERO.- Cabe señalar que el Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, al rendir su respectivo informe hizo notar que el diez de julio de dos mil dos, se publicó en el Periódico Oficial de la Entidad la “Fe de Erratas al Decreto 351”.

Ante todo es importante destacar que en términos generales la fe de erratas es una certificación que hace el responsable de un órgano oficial de difusión en el sentido de que una publicación, contiene errores que la hacen diferente del original que debe publicarse.

Cuando se trate de un error cometido por el personal del órgano de difusión, tratándose de una norma general, jurídicamente la fe de erratas puede expedirla la autoridad responsable de ello, es decir, el director del diario o periódico oficial, con base en el original, con lo cual las correcciones de esas erratas pasan a formar parte integrante de la norma general, puesto que subsanan los errores de la publicación.

Así entonces, la fe de erratas debe ser expedida cuando existan errores cometidos en una publicación, tales como una letra inadvertida, una cifra cambiada, puntuación omitida, palabras incompletas, párrafos empalmados, un renglón fuera de lugar, etcétera, con la única finalidad de subsanarlos.

En el caso, la fe de erratas al Decreto “351”, publicada el diez de julio de dos mil dos, en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, se expidió porque en la publicación del Decreto “351” existían diversos errores en relación con el texto original aprobado por el Congreso del Estado para reformar, adicionar y derogar diversos preceptos de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.

De un análisis integral de la Minuta de Decreto aprobada por el Congreso del Estado de San Luis Potosí, relativa a la modificación de diversos artículos de la ley electoral estatal (fojas ciento sesenta y seis a doscientos treinta y cuatro de los autos), enviada al Poder Ejecutivo del Estado para su publicación, así como de la publicación del Decreto “351”, realizada el ocho de julio del mismo año, que obra a fojas cuarenta y cinco a sesenta del expediente, se advierte que efectivamente en la publicación se cometieron errores que la hacen diferente del original de la Minuta enviada por el Congreso del Estado.

Debido a lo anterior, el diez de julio de dos mil dos, el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Dirección del Periódico Oficial de la citada entidad, publicó en el Periódico Oficial del Estado, la fe de erratas al Decreto “351”, constancia que obra agregada a fojas cuatrocientos setenta y siete y cuatrocientos setenta y ocho del expediente, en la que se corrigieron los errores de que adolecía la publicación de dicho Decreto.

Al respecto este Alto Tribunal, advierte que de un cotejo entre la Minuta de Decreto aprobada por el Congreso del Estado de San Luis Potosí, relativa a la modificación de diversos artículos de la ley electoral estatal y la fe de erratas al Decreto “351”, no existe diferencia alguna, es decir, la fe de erratas efectivamente concuerda con el texto original aprobado por el Congreso del Estado enviado al Poder Ejecutivo para su publicación, de lo que se desprende, que efectivamente en la publicación del Decreto “351” se cometieron errores por el órgano encargado de la publicación.

De acuerdo con lo anterior, el estudio de los conceptos de invalidez esgrimidos en la presente acción de inconstitucionalidad se hará tomando en consideración tanto el Decreto “351” por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la ley electoral estatal, como la fe de erratas publicada el diez de julio de dos mi dos, por la cual se subsanaron los errores de que adolecía la publicación del Decreto “351”, por virtud de que la fe de erratas forma parte integrante de la norma impugnada.

Ahora bien, el partido político accionante mediante oficio presentado el veintinueve de agosto de dos mil dos, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, manifestó que la fe erratas al Decreto “351” por el que se adicionaron, reformaron y derogaron diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, no tiene valor jurídico porque:

a) La autoridad que emitió la fe de erratas no tiene facultades para hacerlo, ya que de existir errores en la publicación es necesario que mediante un acuerdo parlamentario se ordene nuevamente la publicación de dicha ley con todas sus formalidades para que la misma surta plenamente sus efectos legales.

b) La publicación de la fe de erratas no está firmada ni por el Gobernador, ni por el Secretario General de Gobierno, ni por el Director del Periódico Oficial, todos del Estado de San Luis Potosí, situación que es necesaria puesto que todo acto de autoridad, para su validez y obligatoriedad requiere de la firma de la autoridad que lo realiza o expide.

En primer lugar resulta inexacto que la fe de erratas no haya sido emitida por autoridad competente, toda vez que de la Ley del Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, concretamente de su artículo 4, se desprende que son materia de publicación obligatoria, entre otros, las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos administrativos, expedidos por el Congreso del Estado, así como las circulares, órdenes y disposiciones de observancia o interés general emitidos por el titular del Ejecutivo o alguna de sus dependencias u órganos; y por otro lado, del artículo 8 del propio ordenamiento, se advierte que dentro de las obligaciones que competen al Director del Periódico Oficial del Estado se encuentra la de publicar, entre otros, los documentos antes relacionados, así como la de publicar oportunamente las fe de erratas.

En efecto, los citados preceptos disponen:

"Artículo 4o.- Son materia de publicación obligatoria "en el Periódico Oficial del Estado los siguientes "documentos:

"I.- Las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos "administrativos expedidos por el Congreso del "Estado;

"II.- Los reglamentos, decretos, acuerdos "administrativos, circulares, órdenes y "disposiciones de observancia o interés general; "así como convenios o acuerdos celebrados o "emitidos por el titular del Ejecutivo del Estado o "alguna de sus dependencias u órganos, con la "Federación, con otras Entidades Federativas, con "los Ayuntamientos o con los sectores social y "privado;

"III.- Las resoluciones emanadas del Poder Judicial, "que por su trascendencia, sean de interés general;

"IV.- Reglamentos, Bandos de Policía y Buen "Gobierno y disposiciones administrativas de "observancia general emitidos por los "Ayuntamientos del Estado;

"V.- Los que por disposición de la Constitución "Política del Estado o de las leyes federales y "locales deban ser publicados, así como aquéllos "que por su importancia, determine el Gobernador "del Estado; y

"VI.- Todos aquellos ordenados por cualquiera de "los Poderes de la Unión, que por su naturaleza "ameriten su inserción en dicho órgano."

"Artículo 8o.- Competen al Director del Periódico "Oficial del Estado, las siguientes obligaciones y "atribuciones:

"I.- Publicar en el Periódico Oficial del Estado los "documentos a que hace referencia el artículo 4o. de "esta ley;

"II.- Compilar y constatar la legitimidad de la "información que se publique en el Periódico "Oficial del Estado;

"III.- Determinar los procesos técnicos adecuados "para la impresión del Periódico Oficial;

"IV.- Vigilar que la impresión del Periódico Oficial "del Estado se realice con la periodicidad, calidad y "tiraje necesarios;

"V.- Distribuir oportunamente el Periódico Oficial "del Estado a las dependencias y entidades "estatales, municipales y federales, centros de "consulta y en general a cualquier institución que "lo requiera mediante el pago, en su caso, de los "derechos correspondientes;

"VI.- Registrar cronológicamente, las ediciones "ordinarias y extraordinarias que se impriman en el "Periódico Oficial del Estado;

"VII.- Conservar durante un año los documentos "originales de las publicaciones; transcurrido ese "periodo se remitirán al Archivo General del Estado "para su custodia;

"VIII.- Editar, en la primera quincena de cada mes, "un índice general del contenido de las "publicaciones correspondientes al mes inmediato "anterior;

"IX.- Archivar el tiraje de las impresiones oficiales, "así como facilitar su consulta al público;

"X.- Publicar oportunamente las fe de erratas; y

"XI.- Las demás que le señalen las leyes, "reglamentos, decretos, acuerdos y manuales "aplicables, así como aquéllas que le confiera la "superioridad."

De lo anterior deriva entonces que si al Director del Periódico Oficial del Estado le corresponde publicar las leyes, decretos o reglamentos expedidos por el Congreso y si en su publicación se incurre en un error u omisión, como en el caso, es claro que a dicho funcionario le compete también subsanar esos errores u omisiones, a través precisamente de una fe de erratas, sin que se requiera para ello, como lo aduce el partido político promovente, un acuerdo parlamentario en donde se ordene nuevamente la publicación de dicha ley, pues cuando se trate solamente de errores cometidos por el personal del órgano de difusión, corresponde a él mismo subsanar dichos errores, habida cuenta de que no existe disposición legal dentro de la legislación estatal que disponga que debe mediar un acuerdo parlamentario cuando se incurra en un error en la publicación de una norma general.

Por lo que se refiere al segundo de los argumentos del partido accionante, en el sentido de que la fe de erratas no tiene validez legal porque no está firmada ni por el Gobernador, ni por el Secretario General de Gobierno, ni por el Director del Periódico Oficial, todos del Estado de San Luis Potosí, debe señalarse que no le asiste razón por lo siguiente:

Es verdad que de la publicación que de la fe de erratas del Decreto “351” que obra en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, agregado a fojas cuatrocientos setenta y siete y cuatrocientos setenta y ocho del expediente, se advierte que no ostenta firma o rúbrica de funcionario alguno; sin embargo, esto no afecta la validez de la publicación porque de un análisis integral de la Ley del Periódico Oficial de la Entidad, no se desprende que exista precepto alguno que disponga que este tipo de publicaciones deban estar firmadas por el funcionario que la expide.

Además debe decirse que este tipo de correcciones no requieren de acuerdo escrito en el que se precise cuáles son los errores, ni quién ordena la corrección, lo primero porque solamente se trata de ajustar la publicación al documento original que debe insertarse, en este caso, el decreto legislativo de reformas; y lo segundo, porque de acuerdo con el artículo 8o. de la Ley del Periódico Oficial del Estado, antes reproducido, el Director de dicho medio informativo, es el responsable de ambas publicaciones, la que contuvo errores y la fe de erratas, máxime que en el caso, las modificaciones realizadas en la citada fe de erratas concuerdan con el texto original de la Minuta de Decreto aprobada por el Congreso del Estado, enviada al Poder Ejecutivo para su publicación.

CUARTO.- Acto continuo se procede a analizar la legitimación del promovente por ser una cuestión de orden público y, por ende de estudio preferente.

Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, último párrafo, de su Ley Reglamentaria, disponen:

> *"ARTICULO 105.- La Suprema Corte de Justicia de "la Nación conocerá, en los términos que señale la "Ley Reglamentaria, de los asuntos siguientes:*
>
> *"... II.- De las acciones de inconstitucionalidad que "tengan por objeto plantear la posible "contradicción entre una norma de carácter general "y esta Constitución.*
>
> *"Las acciones de inconstitucionalidad podrán "ejercitarse dentro de los treinta días naturales "siguientes a la fecha de publicación de la norma "por:...*
>
> *"... f) Los partidos políticos con registro ante el "Instituto Federal Electoral, por conducto de sus "dirigencias nacionales, en contra de leyes "electorales federales, o locales; y los partidos "políticos con registro estatal; a través de sus "dirigencias, exclusivamente en contra de leyes "electorales expedidas por el órgano legislativo del "Estado que les otorga el registro.*
>
> *"...".*
>
> *"ARTICULO 62.- (Ultimo párrafo). En los términos "previstos por el inciso f) de la fracción II del "artículo 105 de la Constitución Política de los "Estados Unidos Mexicanos se considerarán parte "demandante en los procedimientos por acciones "contra las leyes electorales, además de los "señalados en la fracción I del artículo 10 de esta "ley, a los partidos políticos con registro por "conducto de sus dirigencias nacionales o "estatales, según corresponda, a quienes les será "aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los "dos primeros párrafos del artículo 11 de este "ordenamiento.”*

De conformidad con los artículos transcritos, los partidos políticos con registro podrán ejercer la acción de inconstitucionalidad, para lo cual deben satisfacer los siguientes extremos:

a) Que el partido político cuente con registro definitivo ante la autoridad electoral correspondiente.

b) Que el partido político promueva por conducto de su dirigencia (nacional o local según sea el caso).

c) Que quien suscribe a nombre y en representación del partido político cuente con facultades para ello.

En el caso, el Partido Acción Nacional, es un Partido Político Nacional con registro ante el Instituto Federal Electoral, según copia certificada expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, visible a fojas ochenta y cuatro del expediente en la que además consta, que Luis Felipe Bravo Mena, es el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del propio partido político.

Los artículos 62, fracción I y el 65, fracción I de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, establecen que el Presidente Nacional cuenta con facultades para representar al partido ante cualquier autoridad.

Dichos preceptos señalan:

"ARTICULO 62.- Son facultades y deberes del "Comité Ejecutivo Nacional:

"I. Ejercer por medio de su Presidente o de la "persona o personas que estime conveniente "designar al efecto, la representación legal de "Acción Nacional, en los términos de las "disposiciones que regulan el mandato tanto en el "Código Civil para el Distrito Federal en materia "común y para toda la República en materia "Federal, en la Ley General de Títulos y "Operaciones de Crédito y Ley Federal del Trabajo. "En consecuencia, el Presidente gozará de todas "las facultades generales y aun las que requieran "cláusula especial conforme a la Ley, para pleitos y "cobranzas, actos de administración, actos de "dominio y para suscribir títulos de crédito. Las "disposiciones de tales ordenamientos legales se "tienen aquí por reproducidas como si se "insertaran a la letra, así como los relativos de la "legislación electoral vigente;

"..."

"ARTICULO 65.- El Presidente de Acción Nacional "lo será también del Comité Ejecutivo Nacional, de "la Asamblea Nacional, de la Convención Nacional "y del Consejo Nacional, con las siguientes "atribuciones:

"I. Representar a Acción Nacional en los términos y "con las facultades a que se refiere la fracción I del "artículo 62 de estos Estatutos;

" ..."

De lo anterior se desprende que la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Acción Nacional, fue hecha valer por parte legitimada para ello, toda vez que se trata de un partido político con registro acreditado ante las autoridades electorales correspondientes, y la demanda presentada en su nombre fue suscrita por Luis Felipe Bravo Mena, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional quien cuenta con facultades para tal efecto en términos de los estatutos que rigen dicho partido político.

QUINTO.- Antes de proceder al examen de los conceptos de invalidez que se hacen valer se procede al análisis de las causas de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o que de oficio advierta este Alto Tribunal, por ser una cuestión de estudio oficioso y, por tanto, de orden preferente conforme al artículo 19, último párrafo de la Ley Reglamentaria de la materia.

El Congreso del Estado de San Luis Potosí, al rendir su informe respectivo, manifestó:

a) Que la acción de inconstitucionalidad es improcedente porque en los conceptos de invalidez que se aducen no se señala fundamento legal alguno, ni argumento o razón en los que se establezca en qué consiste la inconstitucionalidad del Decreto “351” en su conjunto, sino que únicamente se avoca a señalar la inconstitucionalidad de determinados artículos que son parte del mismo, por lo que la solicitud del promovente en el sentido de que se declare la inconstitucionalidad de la totalidad del Decreto “351” es inatendible.

b) Que el primer concepto de invalidez es improcedente porque el artículo 10, primer párrafo de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, reformado a través del Decreto “351” impugnado, no contradice ninguno de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que en el caso, no se actualiza la hipótesis de procedencia de la acción de inconstitucionalidad prevista en la fracción II del artículo 105 constitucional.

Resultan infundadas las causas de improcedencia expuestas:

En efecto, respecto del planteamiento precisado en el inciso a) de la relación anterior, debe precisarse que si bien del punto III del escrito de demanda se desprende que el partido promovente señala como norma general impugnada el Decreto “351”, lo cierto es que de la lectura de los conceptos de invalidez se advierte que lo que impugna dicho partido son las reformas y adiciones a diversos artículos llevadas a cabo con motivo del citado Decreto. De ahí que resulte inexacto que se solicite la invalidez de la totalidad del Decreto “351” como lo aduce el Congreso Estatal.

Respecto al argumento precisado en el inciso b) que antecede, debe decirse que dicho planteamiento debe desestimarse, pues para que este Alto Tribunal pudiera pronunciarse al respecto, esto es, si el artículo

10, párrafo primero de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí contradice o no algún precepto de la Constitución Federal, sería necesario analizar los planteamientos referidos al fondo del asunto, lo que no es posible realizar en este apartado.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia número P./J. 92/99 publicada en la página setecientos diez, Tomo X, septiembre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dispone:

> *"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE "VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE "INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERA "DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto "Tribunal ha sostenido que las causales de "improcedencia propuestas en los juicios de "amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que "se desprende que si en una controversia "constitucional se hace valer una causal donde se "involucra una argumentación en íntima relación "con el fondo del negocio, debe desestimarse y "declararse la procedencia, y, si no se surte otro "motivo de improcedencia hacer el estudio de los "conceptos de invalidez relativos a las cuestiones "constitucionales propuestas."*

No existiendo más causas de improcedencia que aleguen las partes o que de oficio advierta este Alto Tribunal, procede ahora el análisis de los conceptos de invalidez propuestos.

SEXTO.- El promovente manifiesta en sus conceptos de invalidez que los artículos de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí que a continuación se relacionan, vulneran el principio de certeza, consagrado en el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo siguiente:

a) Que el artículo 10, primer párrafo de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí al modificar la fecha de las elecciones ordinarias para los ayuntamientos trae como consecuencia una incertidumbre manifiesta respecto del proceso electoral. Lo anterior es así porque el artículo impugnado dispone que las elecciones ordinarias para los ayuntamientos se celebrarán el tercer domingo de octubre de cada tres años, sin embargo, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Orgánica Municipal de la entidad, la instalación de los ayuntamientos elegidos será el veintiséis de septiembre del año de la elección, es decir, la celebración de las elecciones será posterior a la fecha en que se deben instalar los ayuntamientos electos.

Que asimismo el artículo cuya invalidez se demanda también es incongruente con lo establecido por el primer párrafo del artículo 178 de la citada ley que dispone que el Consejo Estatal Electoral deberá contar con la documentación electoral para su revisión y para la asignación de las regidurías de representación proporcional “a más tardar el segundo domingo de julio”, situación que materialmente resulta imposible porque si las elecciones se celebrarán hasta el tercer domingo de octubre, no es posible que el Consejo Estatal Electoral cuente con la documentación electoral el segundo domingo de julio.

b) Que el principio de certeza también se ve vulnerado con la reforma a los artículos 76, primer párrafo y 87, fracción I de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí impugnados, ya que el primero de los artículos señala que los Comités Municipales Electorales se instalaran a más tardar el último día de junio del año de la elección, en tanto que el segundo señala que el procedimiento de insaculación para la designación de los funcionarios de casilla deberá efectuarse al menos ciento veinte días antes de la fecha de la jornada electoral, es decir, el veintiuno de junio.

c) Que el artículo 107, primer párrafo de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí también viola el principio de certeza al establecer que el proceso de las elecciones de los ayuntamientos comenzará a partir de la sesión de instalación del Consejo Estatal Electoral, es decir, el último domingo del mes de octubre del año anterior al de la elección, y culminará en diciembre del año de los comicios. En este sentido, no es posible señalar que el proceso va a culminar en diciembre del año de los comicios ya que ni siquiera se tiene certeza sobre la fecha de instalación de los ayuntamientos que resulten electos el tercer domingo de octubre, conforme lo dispone el artículo 10 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, también impugnado.

d) Que el citado artículo 107, en su fracción IV, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí de igual forma transgrede el principio de certeza porque dispone que una de las fases del proceso electoral de los ayuntamientos será la de recibir la votación el tercer domingo de octubre, sin embargo, esto resulta incongruente con el resto del articulado de la ley, ya que existen preceptos que no fueron reformados y que aún señalan las fechas previstas antes de la reforma, tal es el caso de la fracción V del citado precepto que señala que los cómputos deben efectuarse en “el mismo mes de julio”, situación que no es posible ya que si las votaciones serán el tercer domingo de octubre, es imposible que el cómputo de éstas se realice en julio. Asimismo, existe incongruencia entre la fracción impugnada y la fracción VI del mismo precepto puesto que esta última señala que la declaración de validez o nulidad de las elecciones se realizará “durante el mes de agosto del año de la elección”, situación que resulta igualmente imposible ya que la celebración de los comicios será hasta el tercer domingo de octubre.

e) Que el artículo 57, fracción III de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, que dispone que el Consejo Estatal Electoral se integrará con un Secretario de Actas con derecho a voz, designado por el Pleno del Consejo y tendrá un suplente nombrado de la misma forma, viola el principio de certeza porque la fracción II del citado precepto, fracción que no fue reformada, establece que el Consejo Estatal Electoral se integrará con un Secretario de Actas designado por el Pleno del Consejo y tendrá un suplente elegido en la misma forma, con derecho a voz. Así, de ambas fracciones no se puede determinar con claridad si en la ley reformada se establece la existencia de un Secretario de Actas o la coexistencia de dos, sin embargo, del cuerpo de la ley se desprende la existencia de únicamente un Secretario de Actas.

f) Que el último párrafo del artículo 41 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí también transgrede el principio de certeza porque no define con claridad qué debe entenderse por “partidos políticos de reciente inscripción”. Ello es así porque el artículo impugnado señala que los partidos políticos “de reciente registro o inscripción” ante el Consejo Estatal Electoral, no podrán formar coalición para el primer proceso electoral; sin embargo, la inscripción que hacen los partidos políticos nacionales ante el Consejo Estatal Electoral no se hace en una sola ocasión, sino que se hace en cada proceso electoral en que el partido político va a participar, por lo que al momento de hacerse la inscripción, ésta es para un nuevo proceso electoral.

g) Que el artículo 64, fracción X de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí que dispone que el Consejo Estatal Electoral podrá remover a los integrantes de las Comisiones Distritales y Comités Municipales Electorales por “causas graves”, viola el principio de certeza ya que no existe dentro del cuerpo de la ley electoral estatal, precepto legal alguno que establezca qué debe entenderse por causas graves, por lo que existe una incertidumbre manifiesta al respecto ya que el Consejo Estatal Electoral no tendrá sustento legal alguno sobre el cual pueda determinar cuando una causa es grave o no.

h) Que la reforma al artículo 43 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, viola el principio de certeza porque omite señalar el porcentaje de votación que corresponderá a cada uno de los partidos políticos coaligados para los efectos del financiamiento, situación que provoca incertidumbre para el caso de participar a través de una coalición, pues esta omisión propicia que no sea posible determinar el porcentaje de votación que le corresponderá a cada uno de los partidos políticos para los efectos del financiamiento público.

Ahora bien, a efecto de dar contestación a los argumentos anteriores, es necesario transcribir el artículo 116, fracción IV, inciso b) de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone:

> *"ARTICULO 116.- El poder público de los Estados "se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, "Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o "más de estos poderes en una sola persona o "corporación, ni depositarse el Legislativo en un "solo individuo.*
>
> *"Los poderes de los Estados se organizarán "conforme a la Constitución de cada uno de ellos, "con sujeción a las siguientes normas:...*
>
> *"IV.- Las Constituciones y leyes de los Estados en "materia electoral garantizarán que:*
>
> *"...b) En el ejercicio de la función electoral a cargo "de las autoridades electorales sean principios "rectores los de legalidad, imparcialidad, "objetividad, certeza e independencia;"*

Del precepto en cita, se desprende el imperativo para que las Constituciones y Leyes de los Estados en Materia Electoral garanticen que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.

El principio de certeza implica, entre otras cosas, que la preparación, realización y calificación de las elecciones deben generar una situación de absoluta confianza por parte de los actores políticos y sociales a efecto de impedir que queden vacíos interpretativos y dudas, para que los votos emitidos produzcan un resultado convincente por veraz. Para ello se requiere, entre otras cosas, dotar de facultades expresas a las autoridades locales, de modo que todos los participantes en el proceso electoral, conozcan previamente con claridad y seguridad, las reglas a las que están sujetas en su actuación las autoridades electorales, entre las que se encuentran los plazos de cada una de las etapas del proceso.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial P./J. 60/2001 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida en la Novena Epoca, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, de abril de dos mil uno, página setecientos cincuenta y dos, que al del tenor siguiente:

> *"MATERIA ELECTORAL. PRINCIPIOS RECTORES. "EN LAS CONSTITUCIONES Y LEYES DE LOS "ESTADOS DEBE GARANTIZARSE, ENTRE OTROS, "EL DE CERTEZA EN EL DESEMPEÑO DE LA "FUNCION ELECTORAL. Toda vez que de lo "dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso b), "de la Constitución Política de los Estados Unidos "Mexicanos se desprende el imperativo de que las "Constituciones y las leyes de los Estados en "materia electoral garanticen que en el ejercicio de "la función electoral rijan*

los principios de "legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e "independencia, resulta evidente que dentro del "referido principio de certeza se encuentra el "relativo al desempeño de la función electoral a "cargo de las autoridades correspondientes, "principio que consiste en dotar de facultades "expresas a las autoridades locales, de modo que "todos los participantes en el proceso electoral "conozcan previamente con claridad y seguridad "las reglas a que la actuación de las autoridades "electorales está sujeta."

Señalado lo anterior, lo procedente es analizar si los artículos cuya invalidez se demanda, contravienen o no el citado principio de certeza.

En primer lugar respecto de los artículos 10 primer párrafo, 107 primer párrafo y fracción IV, así como 57 fracción III de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, cuyos argumentos de inconstitucionalidad quedaron sintetizados en los incisos a), c), d) y e), es importante indicar lo siguiente:

Es verdad que en la publicación que de los citados preceptos se hizo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí el ocho de julio de dos mil dos, se advierte que existían incongruencias que afectaban diversas etapas del proceso electoral, ya que en el artículo 10, primer párrafo de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí se establecía que las elecciones ordinarias para los ayuntamientos se llevarían a cabo el tercer domingo de octubre de cada tres años, en tanto que el artículo 17 de la Ley Orgánica Municipal de la entidad, señalaba que la instalación de los ayuntamientos elegidos sería el veintiséis de septiembre del año de la elección; que en el diverso artículo 178 de la Ley Electoral del Estado, se disponía que el Consejo Estatal Electoral debería contar con la documentación electoral para su revisión y para la asignación de las regidurías a "más tardar" el último día de junio, cuando el artículo impugnado, como se dijo, establecía que las elecciones se celebrarían el tercer domingo de octubre.

Respecto al artículo 107 primer párrafo señalaba que el proceso de elección de los ayuntamientos comenzaría el último domingo del mes de octubre del año anterior al de la elección y que de acuerdo con su redacción, este proceso culminaría en diciembre del año de los comicios, lo cual no resultaba congruente al no tenerse certeza sobre la fecha de instalación de los ayuntamientos; así mismo que el citado precepto en su fracción IV establecía como fase del proceso electoral la de recibir la votación el tercer domingo de octubre, cuando en la fracción V del mismo precepto se disponía que los cómputos se efectuarían en "el mismo mes de julio", y en la fracción VI se señalaba que la declaración de validez o nulidad de las elecciones se realizaría "durante el mes de agosto del año de la elección."

Finalmente, en el artículo 57, fracción III, se disponía que el Consejo Estatal Electoral se integraría con un Secretario de Actas y este aspecto se encontraba reiterado en la diversa fracción II del propio precepto.

Ahora bien, de la fe de erratas al Decreto "351", publicada el diez de julio de dos mil dos en el Periódico Oficial de la Entidad, así como del diverso Decreto "376" publicado el veintinueve de agosto de dos mil dos en el Periódico Oficial del Estado, por el que se reformaron, entre otros, el artículo 17 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, los errores e incongruencias aducidos por el partido político promovente fueron enmendados.

En efecto, de un análisis de la Minuta Proyecto en el que fueron reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, que dio lugar al Decreto "351" y de la fe de erratas de dicho Decreto, se advierte que sí existieron errores en la publicación del Decreto aludido, como se acredita con el siguiente cuadro comparativo:

Texto de la Minuta Proyecto	**Texto Reformado Decreto "351"**	**Texto Fe de Erratas**
Artículo 10.- Las elecciones ordinarias se verificarán el primer domingo de julio de cada seis años para Gobernador; y el mismo días de cada tres años para diputados del año correspondiente según se trate. **Las de los ayuntamientos se celebrarán el tercer domingo de octubre de cada tres años**, del año respectivo según se trate.	**Artículo 10.- ...**	**Artículo 10.-** NO HUBO CORRECCION.

Artículo 57.- El Consejo Estatal Electoral reside en la ciudad de San Luis Potosí y se integra de la siguiente manera:	**Artículo 57.- ...**	**Artículo 57.- ...**
I.- Nueve ciudadanos con el carácter de consejeros quienes tendrán derecho a voz y voto, y ocho suplentes generales, que cubrirán las faltas temporales o definitivas de los propietarios;	**I.-**...	**I.-** ...
II.- <u>Dos representantes del Poder Legislativo,</u> uno de la mayoría y uno de la primera minoría, que serán nombrados por el Congreso del Estado y sólo tendrán derecho a voz. Por cada representante propietario se designará un suplente;	**<u>II.- Un Secretario de Actas,</u>** que deberá ser Licenciado en Derecho, de reconocida experiencia y solvencia moral, designado por el pleno del Consejo Estatal Electoral, quien tendrá, a su vez, un suplente elegido de la misma forma, con derecho a voz;	**II.- <u>Dos representantes del Poder Legislativo,</u>** uno de la mayoría y uno de la primera minoría, que serán nombrados por el Congreso del Estado y sólo tendrán derecho a voz. Por cada representante propietario se designará un suplente;
<u>III.- Un Secretario de Actas,</u> con derecho a voz, quien deberá ser Licenciado en Derecho, de reconocida experiencia y solvencia moral, designado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral, el cual tendrá a su vez, un suplente nombrado de la misma forma;	**III.- ...**	**III.- ...**
IV.- Un Secretario Ejecutivo con derecho a voz, designado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral, y	**IV.- ...**	**IV.- ...**
V.- Un representante por cada partido político registrado o inscrito, o un representante común por cada coalición registrada, si es el caso, los que sólo tendrán derecho a voz. Por cada representante propietario se designará un suplente.	**V.- ...**	**V.- ...**

Artículo 107.- El proceso de las elecciones de ayuntamientos comienza a partir de la sesión de instalación del Consejo Estatal Electoral **el último domingo del mes de octubre del año anterior al de la elección, y culmina en diciembre del año de los comicios**. Sus fases serán:	**Artículo 107.- ...**	**Artículo 107.- ...**
I.- Proveer la debida integración de los Comités Municipales Electorales en el mes de mayo, comprobando su legal instalación a más tardar el último día del mes de junio del año de la elección;	**I.- ...**	**I.- ...**
II.- Convocar oportunamente a los partidos políticos para que presenten la solicitud de registro de planillas de mayoría relativa y lista de candidatos a regidores de representación proporcional, del quince al treinta y uno de agosto del año de la elección;	**II.- ...**	**II.- ...**
III.- Realizar todos los demás actos preparatorios de la elección durante el periodo del proceso hasta antes del día de las votaciones;	**III.- ...**	**III.- ...**
IV.- Recibir la votación el tercer domingo de octubre;	**IV.- ...**	**IV.- ...**
V.- Efectuar los cómputos en el mismo mes de octubre, asignando las regidurías de representación proporcional a que hubiere lugar, mediante la aplicación de la fórmula electoral que señala el artículo 178 de esta Ley y registrando las constancias de mayoría, y	**V.- Efectuar los cómputos en el mismo mes de julio**, asignando las regidurías de representación proporcional a que hubiere lugar, mediante la aplicación de la fórmula electoral que señala el artículo 178 de esta Ley y registrando las constancias de mayoría, y	**V.- Efectuar los cómputos en el mismo mes de octubre,** asignando las regidurías de representación proporcional a que hubiere lugar, mediante la aplicación de la fórmula electoral que señala el artículo 178 de esta Ley y registrando las constancias de mayoría, y
VI.- Realizar la Declaración de Validez o Nulidad de las elecciones durante el mes de noviembre del año de la elección. Tratándose de la elección de ayuntamientos que se hayan ido a la segunda votación, dicha Declaración de Validez o Nulidad se efectuará durante el mes de diciembre del año de la elección, antes del inicio del periodo constitucional para el que fue electo el ayuntamiento de que se trate.	**VI.- Realizar la Declaración de Validez o Nulidad de las elecciones durante el mes de agosto del año de la elección.** Tratándose de la elección de ayuntamientos que se hayan ido a la segunda votación, dicha Declaración de Validez o Nulidad se efectuará durante el mes de septiembre, antes del inicio del periodo constitucional para el que fue electo el ayuntamiento de que se trate.	**VI.- Realizar la Declaración de Validez o Nulidad de las elecciones durante el mes de noviembre del año de la elección.** Tratándose de la elección de ayuntamientos que se hayan ido a la segunda votación, dicha Declaración de Validez o Nulidad se efectuará durante el mes de diciembre del año de la elección, antes del inicio del periodo constitucional para el que fue electo el ayuntamiento de que se trate.
Artículo 178.- A más tardar el cuarto domingo de octubre, el Consejo Estatal Electoral deberá contar con la documentación electoral a que refiere el artículo anterior y ese día sesionará para revisar la documentación relativa al cómputo de los municipios, a fin de asignar las regidurías de representación proporcional que señala la Ley Orgánica del Municipio Libre para cada ayuntamiento.	**Artículo 178.- A más tardar el segundo domingo de julio**, el Consejo Estatal Electoral deberá contar con la documentación electoral a que refiere el artículo anterior y ese día sesionará para revisar la documentación relativa al cómputo de los municipios, a fin de asignar las regidurías de representación proporcional que señala la Ley Orgánica del Municipio Libre para cada ayuntamiento.	**Artículo 178.- A más tardar el cuarto domingo de octubre,** el Consejo Estatal Electoral deberá contar con la documentación electoral a que refiere el artículo anterior y ese día sesionará para revisar la documentación relativa al cómputo de los municipios, a fin de asignar las regidurías de representación proporcional que señala la Ley Orgánica del Municipio Libre para cada ayuntamiento.
...	**...**	**...**

Por otra parte, la reforma al artículo 17 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, quedó en los siguientes términos:

Texto vigente hasta el veintinueve de agosto de dos mil dos	Texto vigente actualmente
Artículo 17.- <u>Los ayuntamientos serán electos</u> para un periodo de tres años; **<u>se instalarán solemne y públicamente el día 26 de septiembre del año de su elección;</u>** sus miembros protestarán ante el Ayuntamiento saliente, representado por su Presidente o, en su caso, por quien designe el Congreso del Estado.	**Artículo 17.- <u>Los ayuntamientos serán electos</u>** para un periodo de tres años; **<u>se instalarán solemne y públicamente el día uno de enero del año posterior a su elección;</u>** sus miembros protestarán ante el Ayuntamiento saliente, representado por su Presidente o, en su caso, por quien designe el Congreso del Estado.

De los cuadros comparativos anteriores se desprende, como se dijo, que los vicios impugnados por el partido político accionante, sólo fueron aparentes y no reales porque se debieron a un error en la publicación del Decreto "351" y, por otra parte, fueron enmendados con la reforma al citado artículo 17 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí (con independencia del aspecto relativo a la oportunidad de la referida reforma cuya invalidez se demanda en la diversa acción de inconstitucionalidad 24/2002, y que se estudiará en ese expediente), esto es, no se dan las incongruencias planteadas porque la celebración de la jornada electoral se llevará a cabo el tercer domingo de octubre de cada tres años; que los cómputos se llevarán a cabo en ese mismo mes; y que a más tardar el cuarto domingo de octubre el Consejo Estatal Electoral contará con la documentación electoral para su revisión y para la asignación de las regidurías de representación proporcional; que la declaración de validez o nulidad se realizará durante el mes de noviembre del año de la elección y la instalación de los ayuntamientos elegidos será el primero de enero posterior al año de la elección.

Ahora bien, por lo que se refiere al argumento precisado en el inciso f) en el que se señala que el último párrafo del artículo 41 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, transgrede el principio de certeza porque no define con claridad qué debe entenderse por "partidos políticos de reciente inscripción", ya que la propia norma establece que esos partidos no podrán formar coalición para el primer proceso electoral, lo que conlleva, según dice el partido accionante, que en cada proceso electoral en que un partido político nacional vaya a participar tendrá que hacer una inscripción, por lo que nunca podrá formar una coalición, debe precisarse lo siguiente.

El último párrafo del artículo 41 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí cuya invalidez se demanda, dispone:

"Artículo 41.- ...

"...

<u>"Los partidos políticos de reciente registro o "inscripción ante el Consejo Estatal Electoral, no "podrán formar coalición para el primer proceso "electoral en el que participen</u>."

Del artículo transcrito se desprende que sólo los partidos políticos de reciente registro o inscripción ante la autoridad electoral estatal estarán impedidos para integrar coaliciones en la primera jornada electoral en que participen.

Por su parte, el artículo 26 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, que también fue reformado, antes y después de su reforma, dispone lo siguiente:

Texto anterior a la reforma.	Texto reformado.
Artículo 26.- Los partidos políticos que pretendan participar en las elecciones locales estarán obligados a cumplir con los siguientes requisitos: I.- Obtener el registro o inscripción correspondiente ante el Consejo Estatal Electoral por lo menos con nueve meses de anticipación al día de la jornada electoral. II.- Ajustar su proceder a lo dispuesto por la presente Ley, y III.- Los partidos políticos nacionales con registro ante el Instituto Federal Electoral podrán participar en las elecciones locales que regula la presente Ley. Para su participación basta que presente ante el Consejo Estatal Electoral la publicación de dicho registro en el **Diario Oficial de la Federación**, o la constancia conducente expedida por la autoridad federal competente. La inscripción deberá asentarse en el libro de registro respectivo, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud, surtiendo sus efectos a partir de ese momento. La inscripción solamente podrá ser negada por causa de falta de personalidad del solicitante, o bien porque haya sido cancelado el registro en materia federal, y	**Artículo 26.-** Para participar en las elecciones locales los partidos políticos están obligados a cumplir con los siguientes requisitos: I.- ... II.- ... III.- Los partidos políticos nacionales con registro ante el Instituto Federal Electoral podrán participar en las elecciones locales que regula la presente Ley. Para su participación deberán presentar solicitud por escrito por conducto del representante legalmente acreditado ante el Consejo Estatal Electoral, anexando la documentación siguiente: a) La publicación de dicho registro en el **Diario Oficial de la Federación**, o la constancia conducente expedida por la autoridad federal competente. b) Emblema o logotipo, declaración de principios, programa de acción y estatutos. c) Integración de su Comité Directivo en el Estado, manifestando domicilio oficial del mismo.

	d) Acreditar que cuentan en el Estado con un número de afiliados que signifique al menos el 0.13 por ciento de los electores inscritos en el listado nominal que se hubiere utilizado en la última elección estatal, y que dichos afiliados provengan de al menos la mitad de los municipios de la Entidad. En ningún caso, el número de afiliados en cada uno de tales municipios podrá ser inferior al 0.5 % de su listado nominal. La citada documentación deberá ser entregada al Consejo Estatal Electoral por lo menos cuarenta y cinco días naturales anteriores al plazo señalado en la fracción primera de este artículo. Dentro del lapso de cuarenta y cinco días, el Consejo Estatal Electoral observará el procedimiento señalado en el artículo 27, fracción II, segundo párrafo y, cumplido el procedimiento, el Pleno sesionará dentro de las siguientes setenta y dos horas a fin de resolver lo conducente. La inscripción deberá asentarse en el libro de registro respectivo, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la resolución que la declare procedente, surtiendo efectos de representación a partir de ese momento y, en lo que corresponde a financiamiento público, a partir del inicio formal del siguiente proceso electoral. Para que los partidos políticos nacionales, una vez aprobada su inscripción, puedan recibir las prerrogativas del financiamiento público estatal, deberán cumplir con los requisitos que establece la fracción II del artículo 27 de esta Ley, en igualdad de circunstancias con los partidos políticos con registro estatal. Asimismo, para recibir el financiamiento público estatal correspondiente, deberán obtener cuando menos el dos por ciento de la votación válida emitida en la Entidad en la última elección de diputados locales.

Del precepto anterior se desprende que ni antes, ni después de la reforma se prevé que en cada proceso electoral en el que vayan a participar, los partidos políticos nacionales deban inscribirse o registrarse ante el Consejo Estatal Electoral, de ahí lo incorrecto del argumento aducido por el promovente.

Lo anterior se ve reforzado inclusive si se atiende además a que en los artículos 47 y 48 de la propia Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, se señalan como causas de cancelación de la inscripción, entre otras, haber dejado de reunir los requisitos exigidos para obtener su inscripción; lo anterior significa entonces que las inscripciones hechas ante el órgano estatal electoral, surten sus efectos de manera permanente, en tanto que el partido político nacional no pierda su registro por alguna de las causas establecidas en los preceptos anteriormente citados. Por lo que resulta falso que este tipo de partidos tengan que renovar su inscripción en cada proceso electoral, consecuentemente no existe violación al principio de certeza consagrado en el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Federal.

Por lo que se refiere al argumento señalado en el inciso h), el partido político promovente aduce que de igual manera la reforma al artículo 43, fracción X de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí transgrede el principio de certeza porque omite señalar el porcentaje de votación que corresponderá a cada uno de los partidos políticos coaligados para los efectos del financiamiento, situación que provoca incertidumbre para el caso de participar a través de una coalición, ello es así porque la citada fracción, antes de la reforma, sí establecía como requisito que en el convenio de coalición se señalara el porcentaje de votación que le correspondería a cada uno de los partidos políticos coaligados para los efectos del financiamiento y agrega que con la reforma se eliminó el mismo.

Al respecto, el artículo 43, fracción X de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, antes y después de la reforma menciona:

Antes de la reforma.	**Después de la reforma.**
Artículo 43.- El convenio de coalición deberá contener: I a IX. … X. Tratándose de la elección de diputados, el porcentaje de votación que corresponderá a cada uno de los partidos políticos coaligados para los efectos de financiamiento, así como el grupo parlamentario al que quedarán incorporados en caso de que alguno o algunos resultaran electos.	**Artículo 43.-** El convenio de coalición deberá contener: I a IX. … X. El grupo parlamentario al que quedarán incorporados en caso de que alguno o algunos resultaran electos.

De lo anterior se aprecia que el legislador estatal, al hacer la reforma conducente, eliminó la parte en la que se establecía como requisito del convenio de coalición el que se fijara el porcentaje de votación que correspondería a cada partido político coaligado para efectos del financiamiento público.

Sin embargo, esa supresión no genera incertidumbre respecto del financiamiento de los partidos políticos en coalición, dado que tal circunstancia no conlleva a que no pueda seguir contemplándolo en el convenio respectivo. Lo anterior se corrobora por lo ordenado en el artículo 42 de la propia ley electoral que señala que el cómputo del voto de los candidatos de partidos coaligados se hará en la forma que se establezca en el convenio respectivo.

En efecto dicho precepto establece:

> *"Artículo 42.- La coalición tendrá los efectos de "sumar los votos a favor de sus candidatos y de "computar los sufragios para los partidos "coaligados en la forma que se establezca en el "convenio respectivo."*

Por tanto, la reforma al artículo 43, fracción X de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí no vulnera el principio de certeza establecido en el artículo 116, fracción IV, inciso b) de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo que hace al argumento referido en el inciso b) relativo a que el primer párrafo del artículo 76 se contrapone con lo establecido en la fracción I del artículo 87, ambos de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, transgrediéndose con ello el principio de certeza consagrado en la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Federal se señala lo siguiente:

Los artículos en mención disponen:

> *"Artículo 76.- El Consejo Estatal Electoral instalará "los Comités Municipales Electorales a más tardar "el último día de junio del año de la elección.*
>
> *".."*
>
> ***"Artículo 87.-** Las casillas que se habrán de emplear "en cada proceso electoral estatal, se integrarán "mediante el procedimiento de insaculación, con la "finalidad de obtener funcionarios de casilla con la "aptitud necesaria para el desarrollo de la función de "recibir, escrutar y computar los sufragios. Para tal "propósito, se observarán los siguientes lineamientos "generales:*
>
> *"I. La selección primaria se hará mediante el "procedimiento de insaculación aleatoria, de la cual "deberá obtenerse, para cada sección, un número "de ciudadanos que represente el doble de los que "esta Ley señala para la integración de las casillas "correspondientes. El procedimiento de "insaculación deberá efectuarse con al menos "ciento veinte días de anticipación a la fecha de la "jornada electoral.*
>
> *"..."*

De los artículos transcritos, en lo que interesa, se desprende que los Comités Municipales Electorales deberán quedar instalados a más tardar el último día de junio del año de la elección y que el procedimiento de insaculación de los funcionarios de las casillas que se habrán de emplear en los procesos electorales, debe efectuarse con al menos ciento veinte días de anticipación a la fecha de la jornada electoral.

A efecto de resolver el argumento planteado resulta conveniente transcribir los siguientes artículos de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí:

> *"Artículo 64.- El Consejo Estatal Electoral, tendrá "las siguientes atribuciones:*
>
> *"...*
>
> *"VII.- Señalar los procedimientos para designar a "los miembros de los demás organismos "electorales; y para insacular a los miembros de las "mesas directivas de las casillas, así como para la "determinación del número y ubicación de las "mismas;*
>
> *"...*
>
> *"IX.- Cuidar de la debida integración y "funcionamiento de las Comisiones Distritales y "Comités Municipales Electorales, conforme al "procedimiento previamente aprobado por el "Consejo, y hacer la publicación correspondiente "en el Periódico Oficial del Estado y en cualquier "otro medio que acuerde el Consejo Estatal "Electoral;*

"...

"XVIII.- Asumir las funciones de los Comités "Municipales o de las Comisiones Distritales "Electorales, cuando por causas de caso fortuito o "fuerza mayor, no puedan integrarse o instalarse, o "ejercer las mismas en las fechas que establece la "presente Ley, cuando sea determinante para que "pueda efectuarse la jornada electoral o el cómputo "respectivo.;

"..."

"Artículo 74.- Los Comités Municipales Electorales "son organismos dependientes del Consejo Estatal "Electoral, encargados de preparar, desarrollar y "vigilar el proceso de elección para ayuntamientos "en sus respectivos ámbitos, conforme lo señala la "presente Ley."

"Artículo 78.- Los Comités Municipales Electorales "tendrán las siguientes atribuciones:

"...

"IV. Proponer al Consejo Estatal Electoral la "ubicación e integración de las mesas directivas de "las casillas, de conformidad con su demarcación "seccional y publicar las listas respectivas como "indican los artículos 86, 87 y 88 de esta Ley. "Asimismo, cuando en una sección electoral por "razones demográficas, topográficas, o de "cualquier otra índole existan localidades con "electores inconvenientemente dispersos, "proponer la ubicación e instalación de las casillas "extraordinarias que sean necesarias para facilitar " el ejercicio del sufragio;

"..."

"Artículo 10.- Las elecciones ordinarias se "verificarán el primer domingo de julio de cada seis "años para Gobernador; y el mismo día de cada "tres años para diputados del año correspondiente "según se trate. Las de los ayuntamientos se "celebrarán el tercer domingo de octubre de cada "tres años, del año respectivo según se trate."

De los anteriores preceptos se desprende que el Consejo Estatal Electoral tiene la atribución para insacular a los miembros de las mesas directivas de casilla y cuidar la debida integración y funcionamiento de los Comités Municipales; que los Comités Municipales Electorales son organismos dependientes de dicho Consejo Estatal a los que les corresponde preparar, desarrollar y vigilar los procesos de elección para los Ayuntamientos, dentro de cuyas facultades se encuentra la de proponer al Consejo Estatal la ubicación e integración de las mesas directivas de casillas y que la jornada electoral, tratándose de los Ayuntamientos se llevará el tercer domingo de octubre.

Ahora bien, la circunstancia de que el legislador local haya previsto en el artículo 76, primer párrafo, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí que "el Consejo Estatal instalará los Comités Municipales Electorales a más tardar el último día de junio del año de la elección", de manera alguna se contrapone, con lo que se establece en el numeral 89, fracción I, de la propia ley, relativo a que el procedimiento de insaculación de los funcionarios de casilla deberá efectuarse con al menos ciento veinte días de anticipación a la fecha de la jornada electoral, por virtud de que la fecha establecida en el precepto señalado en primer término (último día de junio), no se establece como fecha fija para la instalación de los Comités Municipales Electorales, sino como tope o máximo para que se lleve a cabo ese evento, lo que significa que no existe impedimento para que el Consejo Estatal efectúe la instalación de los citados Comités Municipales con la anticipación necesaria para que el plazo mínimo de ciento veinte días que fija el artículo 89, fracción I, para realizar el procedimiento de insaculación de los funcionarios de casilla, no se vea afectado o reducido.

En mérito de lo anterior, lo que procede es reconocer la validez de los artículos 76, primer párrafo y 87, fracción I, ambos de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.

Por último, respecto del argumento relacionado en el inciso g), el partido político accionante señala que el artículo 64, fracción X, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, transgrede el principio de certeza porque dispone que el Consejo Estatal Electoral podrá remover a los integrantes de las Comisiones Distritales y Comités Municipales Electorales por "causas graves", sin señalar qué debe entenderse por éstas, por lo que existe una incertidumbre manifiesta al respecto, ya que el Consejo Estatal Electoral no tendrá sustento legal alguno sobre el cual pueda determinar cuando una causa es grave o no.

Cabe recordar que dentro del concepto de principio de certeza consagrado en el artículo 116, fracción IV de la Constitución Federal, se encuentra el de que las legislaturas locales deben establecer invariablemente que toda actuación de las autoridades electorales se apegue conforme a supuestos establecidos en normas

generales, de tal manera que esa obligación sea estricta y rigurosa, es decir, no dejando margen de arbitrio y discrecionalidad de las autoridades.

Ahora bien el artículo 64, fracción X de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, cuya invalidez se demanda dispone:

"Artículo 64.- El Consejo Estatal Electoral tendrá "las siguientes atribuciones:

"I a IX. ...

"X. Remover a los integrantes de las Comisiones "Distritales y Comités Municipales Electorales, por "causas graves;

"XI a LV. ..."

Del precepto transcrito se desprende que el Consejo Estatal Electoral podrá remover a los integrantes de las Comisiones Distritales y Comités Municipales Electorales por causas graves.

Ahora bien, de un análisis integral del texto de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, en ningún precepto se señala qué debe entenderse por “causas graves”.

Por tanto, como el legislador local omitió señalar dentro del texto de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, cuáles serían las infracciones que se calificarán como graves y que den como resultado la remoción de los integrantes de las Comisiones Distritales y Comités Municipales Electorales, resulta claro que existe una transgresión al principio de certeza establecido en el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Federal porque no se señala dentro del cuerpo legal estatal electoral cuáles serán las conductas que serán calificadas como “graves”, consecuentemente lo procedente es declarar la invalidez del artículo 64 fracción X de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.

SEPTIMO.- El partido político promovente manifiesta en sus conceptos de invalidez que los artículos de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí que a continuación se relacionan, vulneran el principio de equidad al que están sujetas todas las autoridades electorales, consagrado en el artículo 116, fracción IV, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo siguiente:

a) Que el artículo 34, fracción IV de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, viola el principio de equidad porque establece que durante el proceso electoral, los partidos políticos con registro estatal disfrutarán de una cantidad adicional mensual como apoyo a sus programas de difusión por lo que al establecer una cantidad adicional mensual a los partidos políticos con registro estatal, se configura una inequidad respecto de los partidos políticos nacionales inscritos ante el Consejo Estatal Electoral.

b) Que el artículo 35, fracción VII, inciso a) de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí es inconstitucional, porque no es equitativo el hecho de que partidos políticos que no cuentan con antecedentes electorales en el estado y que no tienen ningún trabajo realizado tendiente a obtener el voto ciudadano en comicios pasados, reciban una cantidad adicional, ya que la razón de la equidad en el financiamiento es en parte consecuencia de su sola existencia y en parte producto de su trabajo como partido político en los términos del párrafo segundo de la fracción I, del artículo 41 de la Constitución Federal. Además, la parte relativa a su sola existencia se encuentra ya regulada en el inciso a), fracción IV del artículo 35 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí y por tanto, otorgar financiamiento adicional sin la existencia de participación en comicios electorales anteriores, resulta violatorio del principio de equidad.

A efecto de determinar si las disposiciones impugnadas son contrarias a la Constitución Federal por las razones expuestas en el concepto de invalidez, es necesario, en primer lugar, destacar el doble régimen (federal y estatal) al que están sujetos los partidos políticos nacionales; y, en segundo lugar, debe atenderse al sistema normativo que prevé la Constitución Federal para este tipo de partidos y concretamente en materia de financiamiento público.

A) Por cuanto hace a lo primero, debe destacarse que existen elecciones federales y locales (del Distrito Federal, estatales y municipales); la Constitución Federal prevé diversas disposiciones que rigen a cada una de éstas; para las federales tratándose de la elección del Presidente de la República, de los diputados y senadores del Congreso de la Unión; para el Distrito Federal se prevé la elección del Jefe de Gobierno, la de diputados a la Asamblea Legislativa y la de los titulares de los órganos político-administrativos correspondientes a las demarcaciones territoriales; para los Estados se prevé la elección de los Gobernadores y de los diputados a los Congresos Estatales; y, para los Municipios, se prevé la elección de

los presidentes municipales, regidores y síndicos que habrán de integrar los ayuntamientos. Todo esto se prevé, respectivamente, en los artículos 51 al 60, 81, 82, 115, 116 y 122, entre otros, de la Constitución Federal.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 41, segundo párrafo, fracción I de la Constitución Federal, los partidos políticos con registro nacional tienen derecho a participar tanto en las elecciones federales como en las locales. Dicha disposición constitucional establece:

"ARTICULO 41.- ...

"La renovación de los poderes Legislativo y "Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, "auténticas y periódicas, conforme a las siguientes "bases:

"I. Los partidos políticos son entidades de interés "público; la ley determinará las formas específicas "de su intervención en el proceso electoral. Los "partidos políticos nacionales tendrán derecho a "participar en las elecciones estatales y "municipales. ..."

Atendiendo al derecho que tienen los partidos políticos con registro nacional para participar en las elecciones federales o locales, se desprende el doble régimen jurídico al que deben estar dependiendo del tipo de elección de que se trate (federal o local), pues de ser una elección federal y siendo un partido con registro nacional, las disposiciones aplicables serán las relativas al régimen federal, pero de ser una elección estatal y siendo un partido con registro nacional deberá atenderse tanto a las disposiciones locales que rigen la elección y a las federales que rigen al partido político.

B) Por cuanto hace a lo segundo, esto es, al sistema normativo que prevé la Constitución Federal que rige para los partidos políticos con registro nacional y concretamente en materia de financiamiento público, debe considerarse lo siguiente:

En primer lugar, debe partirse de la premisa de que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Constitución Federal, dentro de nuestro sistema federal las facultades que en dicha Constitución no estén conferidas expresamente a la Federación se entienden reservadas a los Estados.

En segundo lugar y en atención a lo anterior, es necesario determinar las facultades concedidas a la Federación en materia de partidos políticos y del financiamiento público de éstos, y las reservadas a los Estados en las propias materias.

Los artículos 41, segundo párrafo, fracciones I y II, y el 116, fracción IV, inciso f), disponen:

"ARTICULO 41.-...

"La renovación de los poderes Legislativo y "Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, "auténticas y periódicas, conforme a las siguientes "bases:

"I. Los partidos políticos son entidades de interés "público; la ley determinará las formas específicas "de su intervención en el proceso electoral. Los "partidos políticos nacionales tendrán derecho a "participar en las elecciones estatales y "municipales.

"II. La ley garantizará que los partidos políticos "nacionales cuenten de manera equitativa con "elementos para llevar a cabo sus actividades. Por "tanto, tendrán derecho al uso en forma "permanente de los medios de comunicación "social, de acuerdo con las formas y "procedimientos que establezca la misma. Además, "la ley señalará las reglas a que se sujetará el "financiamiento de los partidos políticos y sus "campañas electorales, debiendo garantizar que "los recursos públicos prevalezcan sobre los de "origen privado.

"El financiamiento público para los partidos "políticos que mantengan su registro después de "cada elección, se compondrá de las "ministraciones destinadas al sostenimiento de sus "actividades ordinarias permanentes y las "tendientes a la obtención del voto durante los "procesos electorales y se otorgará conforme a lo "siguiente y a lo que disponga la ley:

"a) El financiamiento público para el sostenimiento "de sus actividades ordinarias permanentes se "fijará anualmente, aplicando los costos mínimos "de campaña calculados por el Organo Superior de "Dirección del Instituto Federal Electoral, el número "de senadores y diputados a elegir, el número de "partidos políticos con representación en las "Cámaras del Congreso de la Unión y la duración "de las campañas electorales. El 30% de la "cantidad total que resulte de acuerdo con lo "señalado anteriormente, se distribuirá entre los "partidos políticos en forma igualitaria y el 70% "restante se distribuirá entre los mismos de "acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren "obtenido en la elección de diputados inmediata "anterior;

"b) El financiamiento público para las actividades "tendientes a la obtención del voto durante los "procesos electorales equivaldrá a una cantidad "igual al monto del financiamiento público que le "corresponda a cada partido político por "actividades ordinarias en ese año; y

"c) Se reintegrará un porcentaje de los gastos "anuales que eroguen los partidos políticos por "concepto de las actividades relativas a la "educación, capacitación, investigación "socioeconómica y política, así como a las tareas "editoriales.

"La ley fijará los criterios para determinar los "límites a las erogaciones de los partidos políticos "en sus campañas electorales; establecerá los "montos máximos que tendrán las aportaciones "pecuniarias de sus simpatizantes y los "procedimientos para el control y vigilancia del "origen y uso de todos los recursos con que "cuenten y asimismo, señalará las sanciones que "deban imponerse por el incumplimiento de estas "disposiciones."

"ARTICULO 116.- El poder público de los Estados "se dividirá para su ejercicio, en Ejecutivo, "Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o "más de estos poderes en una sola persona o "corporación, ni depositarse el Legislativo en un "solo individuo.

"Los poderes de los Estados se organizarán "conforme a la Constitución de cada uno de ellos, "con sujeción a las siguientes normas:

"...

"IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en "materia electoral garantizarán que:

"...

"f) De acuerdo con las disponibilidades "presupuestales, los partidos políticos reciban, en "forma equitativa, financiamiento público para su "sostenimiento y cuenten durante los procesos "electorales con apoyos para sus actividades "tendientes a la obtención del sufragio universal;..."

De las disposiciones constitucionales antes transcritas, se desprende lo siguiente:

Del análisis de las fracciones I y II del segundo párrafo del artículo 41 constitucional, puede advertirse que en éstas se establece un sistema de normas en las que se instituyen lineamientos generales que rigen en nuestro sistema federal y que, por tanto, vinculan a las autoridades federales y a las estatales en su respectivo ámbito de competencias.

Dentro de este sistema de normas, de la fracción I del artículo constitucional de referencia se desprenden los siguientes lineamientos generales:

a) Los partidos políticos son entidades de interés público.

b) La ley determinará las formas específicas en que los partidos políticos intervendrán en el proceso electoral.

c) Los partidos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.

d) Fines de los partidos políticos.

e) Afiliación libre e individual de los ciudadanos a los partidos políticos.

De los lineamientos generales precisados que establece la citada fracción I, puede decirse que éstos norman lo inherente a todos los partidos políticos sin distingo alguno, esto es, son aplicables tanto para los partidos políticos con registro nacional como para los que cuentan con registro estatal. Tales lineamientos no pueden considerarse que sean propios para el ámbito federal o para el local, sino que comprende a ambos.

En efecto, en primer lugar la naturaleza de interés público de los partidos políticos es inherente a cualquier partido y no es exclusivo de alguno en función del tipo de registro con que cuenten (nacional o estatal). En segundo lugar, en cuanto a la remisión que se hace a la ley para establecer la intervención que tendrán los partidos en el proceso electoral respectivo, debe entenderse que se refiere a la ley que rija el respectivo proceso, es decir, a la ley federal o a la ley estatal según el tipo de proceso (federal o local). En tercer lugar, por lo que hace al derecho de los partidos políticos nacionales para participar en las elecciones estatales y municipales, contiene un derecho a favor de los partidos que cuenten con registro nacional, pero a su vez, implica un derecho y una prohibición para los partidos con registro estatal, ya que éstos podrán participar en las elecciones locales pero no así en las federales. En cuarto lugar, se establecen los fines de los partidos políticos (promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo), dichos fines no son exclusivos de los partidos políticos con un tipo de registro determinado, sino que comprende tanto a los que cuenten con registro nacional como estatal. En quinto lugar, el que los ciudadanos puedan afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, no se refiere tampoco a un tipo determinado de partido, sino a cualquiera con independencia de que cuente con registro nacional o estatal.

De lo expuesto se sigue que en la fracción I del artículo 41 constitucional se establecen lineamientos generales como parte de un sistema normativo en materia electoral y que, dada la naturaleza de tales disposiciones, debe concluirse que regulan lo inherente a todos los partidos políticos tanto en el ámbito federal o local, esto es, sean partidos con registro nacional o estatal, pues, de otra manera, de considerarse que sólo rigen en uno de estos ámbitos, se excluiría a unos u otros partidos sin justificación alguna, siendo que tales disposiciones contienen lineamientos de carácter general y que no están dirigidos expresamente a un ámbito determinado.

En lo tocante a la fracción II del segundo párrafo del artículo 41 constitucional, de igual manera debe considerarse que comprende un sistema general de normas, que contiene reglas diversas, pero expresamente dirigidas al ámbito federal, esto es, aplicables para los partidos políticos con registro nacional.

Tales normas comprenden los siguientes aspectos:

a) La ley garantizará que los partidos políticos con registro nacional cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades.

b) La ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

c) El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales.

d) El financiamiento público se otorgará conforme a lo que disponga la ley y a lo siguiente: Para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente aplicando los costos mínimos de campaña calculador por el Organo Superior de Dirección del Instituto Federal Electoral, el número de senadores y diputados a elegir, el número de partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión y la duración de las campañas electorales; el 30% de la cantidad total que resulta de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante se distribuirá entre los mismos de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior; el financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales equivaldrá a una cantidad igual al monto del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese año: se reintegrará un porcentaje de los gastos anuales que erogen los partidos políticos por concepto de las actividades relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales; la ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales; se establecerán los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y asimismo, señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

Como se observa, tales lineamientos generales se establecen expresamente con relación a los partidos nacionales y por ende, sólo rigen en el ámbito federal.

Por otra parte, el artículo 116 de la Constitución Federal establece expresamente un marco normativo para los Estados, confiriéndoles facultades expresas en su régimen interior.

En lo que interesa, en la fracción IV del referido precepto fundamental, se establecen las garantías que las Constituciones y leyes de los Estados deben garantizar en materia electoral.

Dichas garantías se refieren a los procesos electorales para la elección de los gobernadores de los Estados, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos; a la función de las autoridades electorales; a la autonomía e independencia de las autoridades electorales; al establecimiento de un sistema de medios de impugnación; a la fijación de plazos para el desahogo de las instancias impugnativas y del principio de definitividad en éstas; al financiamiento público para el sostenimiento de las actividades permanentes de los partidos políticos y durante los procesos electorales; al acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social; a la fijación de límites a las erogaciones de los partidos políticos y de los montos de las aportaciones de sus simpatizantes, así como para su control y vigilancia y la previsión de sanciones por incumplimiento; y, a la tipificación de los delitos y faltas en materia electoral y sus sanciones.

Ahora bien, de una interpretación armónica y sistemática de los artículos 41, segundo párrafo fracciones I y II, y 116, fracción IV, de la Constitución Federal, se concluye que en dichas disposiciones se prevé un sistema normativo en el que se establecen lineamientos generales que rigen en materia electoral tanto en el ámbito federal como en el local, y que algunos de estos ordenamientos rigen para cualquier tipo de partido con independencia del registro con que cuenten (nacional o estatal) y algunas otras sólo operan para unos o para otros según el tipo de elección de que se trate (federal o local).

En este orden de ideas, para dilucidar la cuestión planteada en la presente acción de inconstitucionalidad con relación al financiamiento público de los partidos políticos, debe determinarse ahora la disposición que rige para los partidos nacionales que participan en elecciones estatales.

Como quedó expuesto con anterioridad, el artículo 41, segundo párrafo fracción II, de la Constitución Federal, se refiere expresamente a los partidos políticos nacionales y prevé el financiamiento público de los mismos, cuando éstos participen en elecciones federales, pero la fracción I del propio precepto da derecho a estos partidos a participar también en las elecciones estatales y municipales, por lo que, atendiendo a la interpretación que se hizo de dicha disposición, debe estarse al ámbito de que se trate, sea federal o local, para determinar el tipo de disposición que debe aplicarse en materia de financiamiento público.

Tomando en consideración que en el caso se trata de un partido político nacional que participa en un ámbito estatal, acorde con la interpretación hecha y, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, debe concluirse que en el caso de los estados rigen las disposiciones locales para efectos del financiamiento público.

En efecto, tocante al financiamiento público, la fracción II del artículo 41 constitucional regula lo correspondiente para los partidos políticos nacionales, pero debe estarse a lo que disponga la ley según el ámbito en el que participe el partido, sea federal o local, por lo que, si por otra parte, en el artículo 116, fracción IV, de la Constitución Federal, se establecen las bases a las que deben sujetarse las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral y en este aspecto en el inciso f) de dicha fracción se prevén los lineamientos generales que rigen para el otorgamiento del financiamiento público a los partidos políticos, debe considerarse entonces que ésta es la disposición que opera en el ámbito estatal como norma especial.

De lo expuesto se sigue que, tratándose de elecciones federales, la norma constitucional expresa que debe regir para efectos del financiamiento público lo es el artículo 41, fracción II, de la Constitución Federal, y para las elecciones estatales, la disposición aplicable lo es el artículo 116, fracción IV, inciso f), de la propia Constitución Federal.

En este orden de ideas, para efectos del financiamiento público, los partidos políticos se regirán por la disposición correspondiente según la naturaleza del proceso electoral de que se trate. Así, los partidos con registro nacional que tienen derecho a participar tanto en las elecciones federales como en las estatales, pero se regirán por cada una de estas disposiciones según el tipo de proceso electoral en el que participen y, los partidos con registro estatal, se regirán siempre por el segundo precepto en cita.

Lo anterior lleva a concluir que, en el caso concreto, siendo la materia de impugnación en la acción de inconstitucionalidad disposiciones que rigen el financiamiento público de los partidos políticos en el ámbito local del Estado de San Luis Potosí, entonces la disposición a la que debe estarse para el análisis constitucional es el 116, fracción IV, inciso f), de la Carta Magna, con independencia de que se trate de partidos políticos nacionales.

Ahora bien, si el Poder Reformador de la Constitución dejó en libertad a los Estados la fijación de las formas y mecanismos para que los partidos políticos reciban el financiamiento público para su sostenimiento y durante los procesos electorales con apoyos para sus actividades tendentes a la obtención del sufragio universal, ello no impide analizar la disposición relativa a fin de establecer si ésta efectivamente cumple en su esencia con los principios rectores que sobre el particular establece la Carta Magna.

En primer lugar, conviene destacar, el contenido y alcances del artículo 116, fracción IV, inciso f) de la Constitución Federal, que es el que rige el financiamiento público estatal.

En dicha disposición fundamental se establece, como principio rector en materia electoral, la equidad en el financiamiento público entre los partidos políticos para su sostenimiento y para la obtención del sufragio universal durante los procesos electorales.

De la disposición fundamental se desprende que los Estados, a través de su Constitución Estatal y sus respectivas leyes, deben garantizar dicho principio rector, pero sin que imponga reglamentación específica al respecto, de tal manera que deja a discreción de las entidades la determinación de las formas y mecanismos legales correspondientes, tendentes a buscar una situación equitativa entre los partidos políticos en cuanto al financiamiento para la realización de sus actividades y fines.

La equidad en materia electoral, tratándose de financiamiento público a los partidos, estriba en el derecho igualitario consignado en la ley para que todos puedan llevar a cabo la realización de sus actividades ordinarias y las relativas a la obtención del sufragio universal, atendiendo a las circunstancias

propias de cada partido, de tal manera que cada uno perciba lo que le corresponde acorde con su grado de representatividad.

Debe distinguirse entre el derecho mismo para recibir financiamiento público y al porcentaje que a cada partido le corresponde; lo primero atañe a la situación legal que autoriza y garantiza que, conforme a las bases y criterios respectivos, cada partido esté en condiciones de recibir los recursos económicos necesarios; y, lo segundo, se refiere a la situación real de cada partido, que justifica el otorgamiento de mayores o menores recursos por financiamiento público, pues las circunstancias particulares de un partido no necesariamente coinciden con la de los demás, lo que justifica la aplicación de porcentajes o montos diferentes.

Así, el principio de equidad se logra, primero, mediante el establecimiento de reglas generales, a través de las cuales se garantice que, conforme a los mecanismos y criterios respectivos, los partidos políticos puedan obtener financiamiento público; y, segundo, mediante disposiciones que establezcan reglas de diferenciación entre los respectivos partidos, acorde con su grado de representatividad y situación particular, a efecto de concederles los recursos que a cada uno corresponda.

Precisado lo anterior, se pasa al estudio de los planteamientos hechos valer por el partido político promovente.

Los artículos 34 y 35 del Código Electoral del Estado de San Luis Potosí, disponen:

"Artículo 34.- Son prerrogativas de los partidos "políticos:

"I. Tener acceso en forma equitativa a los medios de "comunicación propiedad del Estado, de conformidad "con lo establecido en los convenios que al efecto "celebre el Consejo Estatal Electoral con el Ejecutivo "del Estado;

"II. Participar del financiamiento público en los términos "de la presente Ley;

"III. Gozar de las prerrogativas fiscales que las Leyes "Estatales y Municipales les concedan, y

"IV. Durante el proceso electoral, los partidos "políticos con registro estatal disfrutarán "adicionalmente de una cantidad mensual de hasta "doscientos cincuenta días de salario mínimo "vigente en la capital del Estado, como apoyo a sus "programas de difusión. Esta prerrogativa se "otorgará en especie y conforme a los términos que "para ello establezca anualmente el Consejo Estatal "Electoral."

"Artículo 35.- El financiamiento a los partidos "políticos registrados e inscritos ante el Consejo "Estatal Electoral y aprobado en la Ley de "Presupuesto de Egresos del Estado, se otorgará "conforme a las siguientes bases:

"I. En forma anual se distribuirá entre los partidos "políticos con registro o inscripción, el monto que "resulte de la aplicación de cinco mil veces el salario "mínimo mensual vigente en la Capital del Estado, el "monto señalado representará invariablemente el gasto "ordinario a que tienen derecho. El importe resultante "será corregido por el incremento porcentual del "número de ciudadanos inscritos en el listado nominal "de electores, con relación al año inmediato anterior;

"II. Además del gasto ordinario que señala la fracción "anterior, en los años en que se celebren elecciones, el "financiamiento para gasto de campañas se asignará "de la siguiente manera:

"a) Para años con una elección será el equivalente a "1.5 veces el monto de gasto ordinario.

"b) Para años con dos elecciones será el equivalente a "3 veces el monto de gasto ordinario.

"c) Para años con tres elecciones será el equivalente a "4.5 veces el monto de gasto ordinario;

"III. En años electorales los partidos políticos podrán "aplicar en sus gastos de campaña electoral, la parte "de su financiamiento pública para actividad ordinaria "que consideren necesaria, dando de ello aviso "oportuno al Consejo Estatal Electoral y debiendo "reflejar en las partidas contables del informe "respectivo, las cantidades que hubieren aplicado;

"IV. La distribución de las prerrogativas del "financiamiento público a los partidos políticos con "registro o inscripción ante el Consejo Estatal Electoral "se hará conforme al siguiente procedimiento:

"a) El treinta y cinco por ciento, en forma igualitaria; y

"b) El sesenta y cinco por ciento restante, en función de "los resultados porcentuales promedio que hayan "obtenido los partidos políticos de la votación válida "emitida en las elecciones de diputados locales y "ayuntamientos inmediatas anteriores;

"V. Para actividades ordinarias en los años en que no "se celebren elecciones, los partidos políticos que "hubiesen conservado su registro o inscripción, "recibirán el importe de su prerrogativa de "financiamiento público en ministraciones mensuales "iguales, en los términos de los incisos a) y b) de la "fracción anterior;

"VI. En los años en que se efectúen elecciones de "gobernador, diputados y ayuntamientos, la cantidad "destinada a gastos de campaña será entregada de la "siguiente manera:

"a) Cuarenta por ciento al aceptarse la solicitud de "registro de los candidatos a Gobernador.

"b) Treinta por ciento al aceptarse la solicitud de "registro de la totalidad de las fórmulas de candidatos a "diputados locales. En el caso de que algún partido "político cumpla con el mínimo dispuesto por el primer "párrafo del artículo 33 de esta Ley, pero no contienda "en la totalidad de los distritos del Estado, las "prerrogativas del financiamiento público le serán "entregadas en forma directamente proporcional al "número de distritos en que participe; y

"c)Treinta por ciento al aceptarse la solicitud de "registro de la totalidad de la solicitud de registro de la "totalidad de las planillas de candidatos para la "renovación de los ayuntamientos. En el caso de que "algún partido político no presente planilla de "candidatos en la totalidad de los municipios, pero "cumpla con el mínimo dispuesto en el segundo párrafo "del artículo 33 de esta Ley, el financiamiento público le "será entregado atendiendo a la proporcionalidad del "número de electores de los municipios "correspondientes en el listado nominal de electores "del Estado.

"En los años en que se celebren sólo una o dos "elecciones, se aplicará solamente lo establecido en los "incisos b) y c), modificando los porcentajes a "cincuenta por ciento en cada caso;

"VII. Los partidos políticos que hubieren obtenido "su registro o inscripción con fecha posterior a la "última elección, y por consiguiente no cuenten "con antecedentes electorales en el Estado, "tendrán derecho a que se les otorgue "financiamiento público conforme a lo siguiente:

"a) Los partidos políticos con registro estatal, "tendrán derecho a participar de la porción "igualitaria señalada en el inciso a) de la fracción IV "de este mismo artículo y, además para gastos de "campaña, por cada quinientos afiliados "adicionales al mínimo requerido que hubieren "presentado en el procedimiento de obtención de "su registro, tendrán derecho a recibir un cinco por "ciento adicional, respecto del financiamiento "obtenido en la parte igualitaria.

"b) Los partidos políticos nacionales con "inscripción ante el Consejo Estatal Electoral, "recibirán financiamiento público estatal, para el "desarrollo de sus campañas, en monto "equivalente al veinticinco por ciento de la cantidad "que por concepto de la correspondiente porción "igualitaria, en año electoral, reciban los partidos "con registro o inscripción anterior y otro tanto, "para solventar su gasto permanente ordinario. Si "dichos partidos conservaren su inscripción, "recibirán en los dos años subsiguientes, la "proporción que al efecto resulte;

"Al final de cada proceso electoral y de cada año, "en lo que se refiere al gasto ordinario, los partidos "políticos presentarían al Consejo Estatal Electoral, "conforme a la normatividad vigente un informe "contable detallado acompañado de la "documentación que compruebe con fidelidad y "verdad, el manejo, uso y destino del "financiamiento público y privado, así como el "origen y destino de este último.

"En caso de que algún partido político incumpla "con la obligación que esta Ley le impone en el "sentido de retirar la propaganda política a que "refiere la fracción X del artículo 32, el Consejo "Estatal Electoral podrá utilizar los fondos "pendientes de entregar por concepto de "financiamiento del gasto ordinario, para "destinarlos al retiro de la propaganda en "cuestión."

De los citados numerales se desprende que dentro de las prerrogativas de los partidos políticos se encuentra la de participar del financiamiento público en los términos de la ley cuyas reglas para su distribución son las siguientes:

a) El 35% en forma igualitaria;

b) El 65% restante en función de los resultados porcentuales que hayan obtenido los partidos políticos de la votación válida emitida en las elecciones inmediatas anteriores de diputados locales y ayuntamientos;

c) Para los partidos políticos que hayan conservado su registro de inscripción en los años en que no se celebren elecciones, recibirán el importe de su prerrogativa de financiamiento público y ministraciones mensuales iguales en los términos antes precisados;

d) En los años en que se efectúen elecciones de gobernador la cantidad destinada a gastos de campaña se distribuirá de la siguiente manera:

1. Cuarenta por ciento al aceptarse la solicitud de registro de los candidatos a gobernar;

2. Treinta por ciento al aceptarse la solicitud de registro de la totalidad de las planillas de candidatos locales;

3. Treinta por ciento al aceptarse la solicitud de registro de la totalidad de las planillas de candidatos para la renovación de los ayuntamientos.

e) Cuando se celebren una o dos elecciones se modificarán los porcentajes a cincuenta por ciento en cada caso;

f) Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro o inscripción con fecha posterior a la última elección, el financiamiento se distribuirá de la siguiente forma:

1. Los partidos políticos con registro tendrán derecho a participar de la porción igualitaria del treinta y cinco por ciento y además para gastos de campaña, por cada quinientos afiliados adicionales al mínimo requerido para la obtención de su registro recibirán un cinco por ciento adicional, respecto de ese treinta y cinco por ciento igualitario;

2. Los partidos políticos nacionales recibirán para el desarrollo de sus campañas un monto equivalente al veinticinco por ciento de la cantidad que por concepto de la correspondiente porción igualitaria en año electoral reciban los partidos políticos con registro o inscripción anterior, y otro tanto igual para solventar su gasto permanente ordinario.

Como puede observarse, tales disposiciones prevén una serie de supuestos atendiendo a diversas hipótesis en las que se pueden ubicar los partidos políticos de tal manera que se establecen reglas generales que serán aplicables según se ubiquen en determinados supuestos.

En relación con el artículo 34, fracción IV, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, debe señalarse que contrariamente a lo que afirma el partido político promovente, dicho precepto no viola el principio de equidad al establecer que durante el proceso electoral, los partidos políticos con registro estatal, disfrutarán adicionalmente de una prerrogativa en especie como apoyo a sus programas de difusión, por virtud de que como ha quedado explicado en párrafos anteriores, el principio de equidad en materia electoral se traduce en asegurar a los partidos políticos el mismo trato cuando se encuentran en igualdad de circunstancias.

Como se advierte del artículo 41, fracción II, de la Constitución Federal, los partidos políticos nacionales, reciben financiamiento público de la Federación tendente a sufragar el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y a la obtención del voto durante los procesos electorales; y por otra parte, en términos del artículo 116, fracción IV, inciso f), dichos partidos políticos, también reciben por parte de las Entidades Federativas, financiamiento por esos rubros, que destinan a los procesos electorales estatales, en tanto que los partidos políticos con registro estatal, por su naturaleza, únicamente cuentan con las ministraciones que les asigna el Consejo Estatal Electoral y con las que pueda obtener hasta el límite que la ley les permite por concepto de financiamiento privado, circunstancias que innegablemente los coloca en una clara desventaja respecto de los partidos políticos nacionales.

En consecuencia, el hecho de que el legislador local a través de la norma impugnada otorgue una prerrogativa adicional a los partidos políticos estatales como apoyo a sus programas de difusión, de forma alguna transgrede el principio de equidad consagrado en el artículo 116, fracción IV, inciso f) de la Constitución Federal, antes bien, con ello tiende a establecer un sistema de equilibrio entre los partidos nacionales y estatales.

Por lo que se refiere al artículo 35, fracción VII, inciso a) el partido político accionante señala violación al principio de equidad porque considera inequitativo de que a los partidos políticos que no cuenten con antecedentes electorales en el Estado, se les otorgue una cantidad adicional para gastos de campaña a la otorgada como consecuencia de su sola existencia, cuando no ha realizado trabajo alguno tendente a obtener el voto ciudadano en comicios pasados. Tales argumentos son infundados por lo siguiente.

En principio debe destacarse que la disposición impugnada es de carácter general y está dirigida a todos aquellos partidos políticos que se ubiquen en la misma situación, de tal manera que no existe un trato diferenciado entre los partidos que se ubiquen en la hipótesis ahí referida.

Por otro lado la circunstancia de que el legislador local otorgue una prerrogativa para gastos de campaña a los partidos políticos por cada quinientos afiliados adicionales al mínimo requerido para la obtención de su registro es una situación, que por sí misma, no demuestra la inconstitucionalidad del precepto, pues es claro que conforme al sistema establecido por la legislatura estatal difiere de los porcentajes otorgados a aquéllos partidos que cuenten con antecedentes electorales por haber participado en procesos electorales anteriores, esto es, la ley otorga una trato igual a los partidos que se encuentran en igualdad de circunstancias y distinto a los que se ubican en una situación diferente, acorde con sus circunstancias particulares derivadas de su participación en procesos electorales anteriores, por lo que debe concluirse que el porcentaje contemplado en el citado inciso a) de la fracción VII del artículo 35 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí no rompe con el principio de equidad en materia electoral.

OCTAVO.- En otro de sus conceptos de invalidez, el partido político promovente manifiesta que el artículo 36, fracción II de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí viola los principios de objetividad y legalidad establecidos en el artículo 116, fracción IV, incisos b) y h) de la Constitución Federal porque los criterios para la determinación de los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales deben ser fijados objetivamente y no en función del financiamiento que legalmente le corresponde a cada partido político, sino que debe ser un tope igualitario para todos, basado en elementos objetivos y de carácter general. Por ello, el criterio que para determinar los límites a los gastos de campaña establece el artículo 36, fracción II impugnado, basado en “el doble del monto que por financiamiento público reciban para cada tipo de elección” contraviene el principio de objetividad a que debe sujetarse todo proceso electoral, ya que observar como criterio para determinar el tope a los gastos de campaña el financiamiento de cada partido político en lo particular, constituye un criterio subjetivo.

Resulta infundado el argumento anterior por lo siguiente:

En efecto, como se señaló en el considerando que precede, la Constitución Federal únicamente fija los principios rectores en materia electoral, y deja a las Entidades Federativas, en su régimen interior, la facultad de reglamentar en lo específico la fijación de los criterios y bases en virtud de los cuales se respeten dichos principios.

Respecto de los límites que deben fijarse para la erogación que deban realizar los partidos políticos en las campañas electorales, los artículos 41, fracción II, último párrafo y 116, fracción IV, inciso h) de la Constitución Federal, que ya han quedado transcritos, únicamente establecen que las Constituciones y leyes de los Estados garantizarán que se fijen los criterios para determinar los límites de dichas erogaciones, sin establecer reglas específicas al respecto, de tal manera que son las entidades federativas las encargadas de reglamentar lo conducente.

Ahora bien, tal imperativo se cumple al fijarse en la ley esos límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales, lo que en el caso se hace precisamente en el artículo 36 fracción II de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí cuya inconstitucionalidad ahora se combate y que en lo conducente dispone:

> *"Artículo 36.- ...*
>
> *"El límite máximo de gastos de campaña de cada "partido político, invariablemente deberá ser menor "del doble del monto que por financiamiento "público reciban para cada tipo de elección.*
>
> *"...”*

Conforme a la disposición transcrita, el elemento a considerar para fijar los topes máximos de gastos de campaña es el doble del monto del financiamiento público que reciba cada partido.

Por otra parte, en la Constitución Federal no se establecen los criterios que deban tomarse en consideración para fijar los topes máximos, por el contrario establece expresamente que la ley debe determinar dichos criterios, de lo que se concluye que en este aspecto no existe contravención a los principios fundamentales contenidos en el artículo 116 de la Constitución Federal, en tanto que no impone la obligación de observar criterios específicos.

Ahora bien, el que la norma impugnada establezca un tope de campaña cualitativamente igual para todos los partidos políticos como lo estima el partido accionante, tal circunstancia no hace por sí sola inconstitucional a la disposición, pues se insiste, la Constitución Federal no impone restrictivamente criterios específicos a considerar y por el contrario, se vulneraría la autonomía estatal por virtud de la cual las entidades federativas están facultadas para legislar en su régimen interior en esta materia, por disposición expresa de la propia Norma Fundamental.

Cabe aclarar que la ausencia total de regulación en ese rubro sí podría resultar contrario a la disposición fundamental, pero no la determinación de uno u otro criterio, además de que la fuerza electoral

constituye un elemento esencial para fijar los límites máximos de erogación de los partidos políticos, por lo que con su inserción se cumple con lo básico para los fines que tutela, pues con ello se da un trato equitativo a los partidos que se encuentran en igualdad de circunstancias y distinto a los que se ubican en una situación diferente.

De ahí que se estime que los conceptos de invalidez son infundados, por virtud de que las disposiciones fundamentales no imponen la obligación de observar criterios determinados para la fijación de gastos de campaña, además de que el que se considera en la norma impugnada se estima elemental para tales efectos.

Por las mismas razones dadas en el presente considerando, procede desestimar el argumento en el que se alega que con la disposición impugnada se viola la garantía de igualdad.

NOVENO.- Desde diverso aspecto el partido político promovente aduce que los artículos 26, fracción II, inciso d) y penúltimo párrafo; 32, último párrafo; 38 primer párrafo; 48 primer párrafo y 212 fracciones VI y VII de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí transgreden lo dispuesto por los artículos 41, fracción I, primer párrafo y fracción III último párrafo, y 116 fracción IV, ambos de la Constitución Federal porque:

a) Que respecto del artículo 26, fracción II, inciso d), no es competencia de la legislatura estatal establecer como requisito el que un partido político nacional cuente con determinado número de afiliados, puesto que ya cumplió ese requisito al momento de su constitución y, por lo tanto, cuenta con “derechos adquiridos” para la participación en las elecciones locales y estatales.

b) Que el penúltimo párrafo del artículo señalado en el inciso anterior, condiciona a los partidos políticos nacionales a cumplir con los requisitos establecidos en la fracción II del artículo 27 de la ley electoral estatal, para que puedan recibir las prerrogativas del financiamiento público estatal.

c) Que el artículo 32, último párrafo de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, establece como solidariamente responsables a los dirigentes, candidatos y representantes de los partidos políticos por el uso y aplicación de los recursos provenientes del financiamiento público.

d) Que el artículo 38, primer párrafo establece como obligación de los partidos políticos tener a un contador público titulado como responsable de su órgano interno encargado de la percepción y administración de sus recursos generales y de campaña; función que le corresponde al Instituto Federal Electoral pues éste es el encargado de determinar en forma integral y directa todo lo relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos nacionales.

e) Que el artículo 48 del ordenamiento electoral estatal, establece la posibilidad de que el Consejo Estatal Electoral cancele la inscripción de un partido político nacional cuando se presente alguno de los supuestos señalados en la ley electoral estatal, impidiéndole con ello, la posibilidad de participar en las elecciones estatales y municipales, situación que resulta del todo inconstitucional ya que el único organismo facultado para quitarle tal posibilidad a un partido político nacional es el Instituto Federal Electoral y no así el Consejo Estatal Electoral.

f) Que el artículo 212 en sus fracciones VI y VII, establece que la autoridad electoral podrá sancionar a los partidos políticos con la suspensión o cancelación de su inscripción, sin tener competencia para ello, pues la autoridad legitimada para realizar tales actos es el Instituto Federal Electoral, en tanto que es la que les otorga a los partidos políticos nacionales el registro correspondiente para poder contender en las elecciones federales, estatales y locales.

Como se precisó en párrafos anteriores, en términos de lo dispuesto por el artículo 41, fracción I de la Constitución Federal, los partidos políticos nacionales tienen derecho a participar tanto en las elecciones federales como en las locales, esto es, en dicho precepto se consagra un derecho constitucional a favor de esos partidos políticos para contender en las elecciones estatales y municipales, por el solo hecho de contar con registro nacional; sin perjuicio de las facultades que gozan las legislaturas de las entidades federativas, en términos del artículo 116, fracción IV, de la propia Constitución Federal, para regular las actuaciones, tanto de dichos partidos políticos como de los partidos locales, en los procesos estatales y municipales en los que participen.

Esta situación se ve reforzada con lo establecido en el propio artículo 41, fracción I constitucional, en el sentido de que la ley determinará las formas específicas en que los partidos políticos intervendrán en el proceso electoral, esto es, dado que los partidos políticos nacionales se encuentran sometidos tanto al régimen federal como al estatal, en cuanto a la remisión que se hace a la ley para establecer la intervención que tendrán los partidos en el proceso electoral respectivo, debe entenderse que se refiere a la ley federal o a la ley estatal según el tipo de proceso en el que participe; así la actuación de los partidos con registro nacional se regirá por cada una de las disposiciones según el tipo de proceso electoral en el que participe (federal o local).

Ahora bien, los preceptos impugnados en lo conducente establecen lo que se menciona a continuación; haciendo la aclaración de que no obstante que el partido político promovente señala como impugnada la

fracción II, inciso d) del artículo 26 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, como se estableció en el considerando tercero, a través de la fe de erratas de diez de julio de dos mil dos, el texto impugnado corresponde a la fracción III de ese mismo precepto, por lo que su análisis se hará bajo ese tenor:

"Artículo 26.- Para participar en las elecciones "locales los partidos políticos están obligados a "cumplir con los siguientes requisitos:

"I. a II. ...

"III. Los partidos políticos nacionales con registro "ante el Instituto Federal Electoral podrán participar "en las elecciones locales que regula la presente "Ley. Para su participación deberán presentar "solicitud por escrito por conducto del "representante legalmente acreditado ante el "Consejo Estatal Electoral, anexando la "documentación siguiente:

"a) a c) ...

"d) Acreditar que cuentan en el Estado con un "número de afiliados que signifique al menos el "0.13 por ciento de los electores inscritos en el "listado nominal que se hubiere utilizado en la "última elección estatal, y que dichos afiliados "provengan de al menos la mitad de los municipios "de la Entidad. En ningún caso, el número de "afiliados en cada uno de tales municipios podrá "ser inferior al 0.5 % de su listado nominal.

"...

"...

"Para que los partidos políticos nacionales, una vez "aprobada su inscripción, puedan recibir las "prerrogativas del financiamiento público estatal, "deberán cumplir con los requisitos que establece "la fracción II del artículo 27 de esta Ley, en "igualdad de circunstancias con los partidos "políticos con registro estatal.

"..."

"Artículo 32.- Son obligaciones de los partidos "políticos:

"I a XXIII. ...

"Los dirigentes, candidatos o, en última instancia, "los representantes de los partidos políticos "acreditados ante el Consejo Estatal Electoral, son "solidariamente responsables por el uso y "aplicación de los recursos provenientes del "financiamiento público."

"Artículo 38.- Los partidos políticos deberán contar "con un órgano interno encargado de la percepción "y administración de sus recursos generales y de "campaña, el cual deberá tener como responsable a "un contador público titulado, así como de "presentar al Consejo Estatal Electoral los informes "y comprobación correspondiente sobre el origen, "uso y destino de los mismos, conforme al "reglamento que al efecto emita el citado "organismo electoral.

"..."

"Artículo 48.- El Consejo Estatal Electoral cancelará "la inscripción si se trata de un partido nacional, "cuando se presente alguno de los supuestos a "que se refieren las fracciones II, V, VI, VII y VIII del "artículo inmediato anterior, así como en lo "establecido en el artículo 213 de esta Ley en los "casos en que proceda; además, podrá aplicarles "las sanciones que contempla el artículo 212 en "sus fracciones I, II y III de esta Ley.

"..."

"Artículo 212.- Los partidos políticos, sin perjuicio "de las responsabilidades en que incurran sus "dirigentes, miembros o simpatizantes, podrán ser "sancionados:

"I a V. ...

"VI. Con la suspensión de su registro o inscripción "como partido político durante el periodo que "señale la resolución, y

"VII. Con la cancelación de su registro o inscripción "como partido político."

De los preceptos transcritos se desprende que el legislador local establece los requisitos para la participación de los partidos políticos nacionales en las elecciones de la entidad (artículo 26 fracción III inciso d)); requisitos que deben cumplir dichos partidos para que le sean ministradas las prerrogativas del financiamiento público estatal (artículo 26 penúltimo párrafo); establece como sanción por violación a las normas electorales estatales la suspensión y cancelación de la inscripción de los partidos políticos nacionales (artículos 48 y 212 fracciones VI y VII), así como el control de recursos estatales y régimen de responsabilidades por el uso y aplicación de los recursos provenientes del financiamiento público (artículo 32 último párrafo y 38 primer párrafo).

Por lo que se refiere a la fracción III, inciso d) del artículo 26 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, es fundado el argumento planteado por virtud de que al establecer el legislador local como requisito para que los partidos políticos nacionales participen en las elecciones estatales, el que cuenten con un número de afiliados que signifique al menos el 0.13 por ciento de los electores inscritos en el listado nominal en cuyo caso el número de afiliados en cada uno de los municipios no podrá ser inferior de 0.5 por ciento de su listado nominal, resulta innegable que tal disposición contraviene lo dispuesto por el artículo 41, fracción I de la Constitución Federal, pues condiciona la participación de los partidos políticos nacionales en las elecciones que se lleven a cabo en el Estado de San Luis Potosí a cumplir con mayores requisitos que los que la propia Constitución Federal les impuso a este tipo de partidos políticos para obtener su registro nacional con base, entre otros, en aspectos de representatividad en todo el territorio nacional. Así por ejemplo, podría presentarse la situación de que en el Estado de San Luis Potosí, el partido político nacional no tenga representación, pero sí en todos los demás Estados de la República.

Consecuentemente, por lo antes expuesto lo procedente es declarar la invalidez del inciso d) de la fracción III del artículo 26 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, que dispone:

"Artículo 26.- ...

"III. ...

"...

"d) Acreditar que cuentan en el Estado con un "número de afiliados que signifique al menos el "0.13 por ciento de los electores inscritos en el "listado nominal que se hubiere utilizado en la "última elección estatal, y que dichos afiliados "provengan de al menos la mitad de los municipios "de la Entidad. En ningún caso, el número de "afiliados en cada uno de tales municipios podrá "ser inferior al 0.5 % de su listado nominal.

"..."

En cambio, resultan infundados los argumentos relacionados con los artículos 48, primer párrafo y 212, fracciones VI y VII de la propia ley, toda vez que es inexacto que sea competencia exclusiva del Instituto Federal Electoral sancionar a los partidos políticos nacionales con la suspensión o cancelación de su inscripción que le otorgue una autoridad electoral estatal, en atención a que como se ha reiterado a lo largo de la presente ejecutoria, los partidos políticos nacionales están sujetos a un doble régimen, al federal y al estatal, dependiendo de los comicios en que participen.

En este orden de ideas, el artículo 41, fracción I de la Constitución Federal dispone en relación con esos partidos políticos, que **"la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral"**, por otra parte, en términos del inciso i) de la fracción IV del artículo 116 constitucional, se faculta a las legislaturas locales para que tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral así como las sanciones que por ellos deban imponerse.

El análisis sistemático de estos numerales permite concluir que es facultad de las legislaturas locales la de regular lo relativo a los delitos y faltas en materia electoral por incumplimiento a la normatividad respectiva, de lo que deriva que es a las autoridades electorales estatales, a las que les corresponde sancionar a los actores políticos que intervengan en los procesos de la Entidad Federativa de que se trate, entre ellos, a los partidos políticos nacionales, por las infracciones que cometan a la normatividad electoral, inclusive con la suspensión o cancelación de su inscripción.

Es importante aclarar que la facultad de las autoridades electorales estatales, tratándose de partidos políticos nacionales, es la de que en su momento puedan suspender o cancelar únicamente la inscripción que le hubieran otorgado, y no así su registro, por virtud de que éste es expedido por autoridad federal, y es a ésta, a quien en todo caso le corresponde determinar sobre su cancelación, suspensión o permanencia del registro de los partidos nacionales.

Lo anterior no conlleva de manera alguna a concluir que con ese tipo de sanción se impida a los partidos políticos nacionales participar en las elecciones estatales o municipales, pues una cosa es el derecho constitucional que tiene estos partidos a participar en ese tipo de procesos electorales derivado de lo dispuesto en el artículo 41, fracción I, de la Norma Fundamental, y otra, la obligación que tienen de cumplir con la normatividad que regula su intervención en los procesos locales, es decir, el derecho de participar en procesos electorales municipales y estatales deriva de su sola calidad como partidos nacionales, sin embargo, su intervención está sujeta a las disposiciones legales que rijan esos procesos electorales, entre ellas, la de cumplir con las reglas que para la participación en esos procesos el legislador local establece.

En mérito de lo anterior, lo procedente es reconocer la validez de los artículos 48, primer párrafo y 212, fracciones VI y VII, ambos de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.

Tampoco le asiste razón al partido político promovente, respecto, de lo establecido por la legislatura del Estado de San Luis Potosí en los artículos 26 penúltimo párrafo, 32 último párrafo y 38 primer párrafo de la citada Ley Electoral Estatal toda vez que como se ha venido reiterando, los partidos políticos nacionales conforme al sistema normativo que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están sujetos a un doble régimen jurídico, dependiendo del tipo de elección de que se trate, así de ser una elección federal, las disposiciones aplicables serán las relativas al régimen federal, pero de ser una elección estatal, deberá atenderse a las disposiciones locales que rigen la elección y a las federales que rigen al partido político, en términos del artículo 41 de la Constitución Federal que precisa que la ley determinará las formas específicas de su intervención en los procesos electorales, lo que lleva a concluir que esa ley es la que rige el proceso correspondiente.

Por otra parte, acorde con las bases y principios consignados en el artículo 116, fracción IV de la Constitución Federal, las legislaturas de los Estados están facultadas para regular aquellos aspectos vinculados con su régimen financiero tanto para el sostenimiento permanente como para sus actividades tendentes a la obtención del sufragio universal; limitar el límite de las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales, así como los montos máximos de las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes; control y vigilancia del origen y uso de los recursos con que cuentan los partidos políticos, y asimismo prevé las sanciones para el cumplimiento a las disposiciones que se expidan en esa materia.

Consecuentemente, resulta inexacto como lo afirma el promovente, que únicamente al Instituto Federal Electoral le corresponda regular todo lo relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos nacionales, pues esto, es verdad sólo cuando se trate de elecciones federales, pero tratándose de elecciones estatales y municipales conforme a lo antes expuesto, tal regulación corresponde a los órganos electorales estatales, por lo que ninguna violación se actualiza respecto de los artículos 41 y 116, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia número P./J. 52/99, emitida por el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, en la Novena Epoca, consultable en el tomo X, de agosto de mil novecientos noventa y nueve, página quinientos sesenta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente:

> *"DISTRITO FEDERAL. SU ASAMBLEA "LEGISLATIVA ESTA FACULTADA PARA "LEGISLAR SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS "CON LA PARTICIPACION, EN ELECCIONES "LOCALES, DE LOS PARTIDOS POLITICOS CON "REGISTRO NACIONAL. El artículo 122, apartado "C, base primera, fracción V, inciso f), de la "Constitución Federal establece, por un lado, que "en las elecciones locales del Distrito Federal sólo "pueden participar los partidos políticos con "registro nacional y, por otro, que la Asamblea "Legislativa de dicha entidad está facultada para "expedir las disposiciones que rijan esas "elecciones. A su vez, el diverso artículo 41 de la "Carta Magna dispone, en relación con esos "partidos, que "la ley determinará las formas "específicas de su intervención en el proceso "electoral". El análisis relacionado de los "dispositivos mencionados permite concluir que la "referida asamblea está facultada para regular tanto "la participación de los partidos políticos con "registro nacional en las elecciones locales del "Distrito Federal, como aquellos aspectos "vinculados con su actividad permanente que "deban ser objeto de fiscalización o revisión. De ahí "que si el Código Electoral del Distrito Federal "regula cuestiones relativas a la concesión de "ciertas prerrogativas a dichos partidos políticos, a "su régimen financiero y control de los recursos "que eventualmente reciban, a las atribuciones "legales de las autoridades electorales para ese "efecto, al establecimiento de un régimen de "responsabilidades para el caso de faltas "administrativas en general o en el caso de que se "violenten los topes de gastos de campaña, al "establecimiento de frentes como mecanismos de "participación con que cuentan las asociaciones "políticas en la entidad y las obligaciones a que se "encuentran sujetos los órganos de los partidos "políticos, no contraviene los dispositivos "constitucionales mencionados, pues si bien esos "aspectos denotan el carácter permanente de los "partidos políticos, ello no significa que su "regulación sea exclusiva de los órganos "federales."*

DECIMO.- En otro concepto de invalidez el partido promovente señala que el último párrafo del artículo 13, de la referida Ley Electoral Estatal, vulnera el principio de representación proporcional y de legalidad consagrados en las fracciones II, último párrafo y IV, inciso b) del artículo 116 de la Constitución Federal, respectivamente, porque establece la posibilidad de que otro partido político distinto al que de acuerdo a la votación le correspondía la diputación por el principio de representación proporcional, asuma la vacante de diputado. Lo anterior lo considera así porque atendiendo a que el fin de la representación proporcional es beneficiar a aquellos partidos políticos que no obtuvieron la mayoría de los votos, por lo que al establecer el artículo cuya invalidez se demanda, que otro partido será el que ocupe la vacante de diputados de

representación proporcional, transgrede dicho principio al pertenecer a otro partido político el candidato al que se le otorga la vacante, por lo que la asignación deja de ser proporcional a la votación tanto del partido al que le correspondía como a la del partido al que efectivamente se le otorgó.

Ante todo conviene destacar que en reiteradas ocasiones este Alto Tribunal ha sostenido que dentro del sistema político mexicano, el principio de representación proporcional, como complemento del principio de mayoría relativa, tiene como fin hacer vigente el pluralismo político a efecto de que todas aquellas corrientes identificadas con un partido determinado, aun minoritarias en su integración pero con una representatividad importante, pudieran ser representadas en el seno legislativo y participar en ello en la toma de decisiones y, consecuentemente, en la democratización del país, por lo que los objetivos primordiales de dicho principio de representación proporcional, como garante del pluralismo político, son los siguientes:

1.- La participación de los partidos políticos en la integración del órgano legislativo, siempre que tengan cierta representatividad.

2.- Que cada partido alcance en el seno de la legislatura correspondiente una representación aproximada al porcentaje de su votación total.

3.- Evitar un alto grado de sobre-representación de los partidos dominantes.

Estos principios se encuentran inmersos en la fracción XXIII del artículo 3o. de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, que establece:

"Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se "entenderá por:

"...

"XXIII.- Representación proporcional: término con "el que se denomina al principio por el cual se elige "a los candidatos a diputados o regidores, que "estando registrados en las listas o planillas "correspondientes ante el Consejo Estatal Electoral "y que habiendo obtenido el partido político o "coalición que los postula el porcentaje de votación "requerido al efecto, tienen derecho en razón de los "sufragios obtenidos proporcionalmente a la "votación efectiva, a acceder al Congreso del "Estado o a los ayuntamientos según el caso, "mediante las fórmulas que esta Ley establece al "efecto;

"..."

Por su parte, el artículo 13 último párrafo de la Ley Electoral del Estado, cuya validez se cuestiona, así como el 116, fracción III del mismo ordenamiento legal, señalan:

"ARTICULO 13.- ...

"Las vacantes de los diputados de representación "proporcional se cubrirán con su respectivo suplente, y "a falta de éste, por aquellos candidatos del mismo "partido que hubiesen quedado en el lugar preferente "inmediato según la lista votada, una vez asignadas a "cada partido las diputaciones que les correspondieran. "En caso de que no hubieran candidatos que bajo "esta regla pudieran llamarse a ocupar la vacante, "será llamado el candidato de otro partido al que, "de acuerdo a la proporción de votos, "correspondiera el lugar preferente inmediato."

"Artículo 116.- Para el registro de las listas de "candidatos a diputados por representación "proporcional, el Consejo Estatal Electoral "comprobará previamente lo siguiente:

"...

"III.- Que se presenten listas completas de cuando "menos doce candidatos a diputados por el "principio de representación proporcional."

De los preceptos anteriores se advierte, por una parte, que para cubrir una vacante de diputado de representación proporcional, se hará conforme a la mecánica siguiente:

1. En primer lugar, la vacante se cubrirá con su respectivo suplente.

2. A falta del suplente, se cubrirá por aquellos candidatos del mismo partido que hubiesen quedado en el lugar preferente inmediato según la lista votada, una vez asignadas a cada partido las diputaciones que les correspondan.

3. Sólo en caso de que tampoco hubieran candidatos que bajo esa regla pudieran ocupar la vacante, entonces será llamado el candidato de otro partido al que, de acuerdo a la proporción de votos, correspondiera el lugar preferente inmediato.

Por otro lado, que las listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, deberán presentarse con cuando menos doce diputados.

De lo expuesto se observa que únicamente cuando no exista suplente de la vacante de un diputado de representación proporcional ni tampoco candidatos del mismo partido en las listas votadas, sólo en esos casos se convocará a un candidato de otro partido a ocupar la vacante.

Conforme al segundo de los preceptos invocados, la posibilidad de que se pueda nombrar a un candidato de las listas votadas del mismo partido, antes de llamarse a un candidato de otro partido, aparentemente son amplias pues se establece, que como mínimo las listas completas comprenderán doce candidatos.

No obstante lo anterior, esto es, que exista aparentemente un margen amplio de que llegado el caso, pudieran ocupar la vacante diputados del mismo partido, lo cierto es que el solo hecho de que en la norma impugnada se prevea la posibilidad de que un candidato de otro partido pudiera ser llamado para ocupar la referida vacante, atenta contra el principio de representación proporcional, dado que dicha vacante se otorgaría a un candidato de otro partido, por una cuestión técnica legislativa, con lo que sin duda alguna transgrediría el pluralismo político que tutela el referido principio de representación proporcional.

En estas condiciones lo procedente es declarar la invalidez del artículo 13 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, en la porción normativa que establece: **"En caso de que no hubieran candidatos que bajo esta regla pudieran llamarse a ocupar la vacante, será llamado el candidato de otro partido al que, de acuerdo a la proporción de votos, correspondiera el lugar preferente inmediato."**

DECIMO PRIMERO.- Desde diverso aspecto, el partido político accionante, señala que la parte final del último párrafo del artículo 23 de la Ley Electoral Estatal transgrede lo dispuesto por el último párrafo de la fracción III del artículo 41 de la Constitución Federal, toda vez que a través de la norma impugnada se pretende regular el procedimiento de afiliación de los partidos políticos nacionales, cuando tal aspecto corresponde al Instituto Federal Electoral.

Los argumentos antes sintetizados también resultan infundados, por virtud de que el partido accionante parte de un error de apreciación jurídica de la norma impugnada.

En efecto, el artículo 23 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, señala:

> *"Artículo 23.- Los partidos políticos tendrán como "finalidad promover la organización y participación de "los ciudadanos en la vida democrática, y hacer posible "mediante el sufragio, el acceso de éstos a la "integración de los órganos de representación popular, "de acuerdo con los programas, principios e ideas que "postulen.*
>
> *"Los partidos políticos nacionales inscritos y los "estatales con registro, gozarán de personalidad "jurídica para todos los efectos legales. La afiliación de "los ciudadanos a los partidos políticos será libre, "individual y voluntaria, la que deberá constar en el "padrón respectivo.* ***Se tendrá por inexistente "cualquier pacto que limite o reduzca la libertad de "afiliación o de voto."***

Del precepto anterior se desprende, en lo que interesa, que los partidos políticos tienen como finalidad la de promover la organización y participación de los ciudadanos en la vida democrática de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen, así como que la afiliación de los ciudadanos a los partido políticos será libre, individual y voluntaria, previendo que se tendrá por inexistente cualquier pacto que limite o reduzca la libertad de afiliación o de voto.

Como puede observarse, en dicho numeral de manera alguna se establecen reglas o lineamientos tendentes a regular el procedimiento de afiliación de los partidos políticos nacionales, como lo asegura el promovente, antes bien, garantiza el derecho ciudadano de libertad de afiliación política a los partidos políticos, con independencia de su origen (nacional o estatal) que puede derivar en tres vertientes a saber: a) el derecho de afiliarse, b) el derecho de no afiliarse y c) el derecho de dejar de pertenecer a cualquier partido u organización política.

Deriva asimismo del precepto en cuestión, el correlativo derecho de los partidos políticos de promover la participación ciudadana de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen, lo que les autoriza a condicionar la afiliación de sus simpatizantes e incluso de expulsar a aquellos ciudadanos que consideren no acordes con los ideales políticos que postulen.

En consecuencia, al garantizarse en el precepto en cuestión la libertad de afiliación, tanto para los ciudadanos como para los partidos políticos, es claro que la porción normativa impugnada en vez de transgredir disposición constitucional alguna, al establecer que **"se tendrá por inexistente cualquier pacto que limite o reduzca la libertad de afiliación o de voto",** hace acorde y salvaguarda tales principios, con lo que además cumple cabalmente con el sistema electoral implantado en los artículos 35, fracciones I, II y III; 41, fracción I, párrafo segundo y 116, fracción IV inciso a) de la Constitución Federal, y reiterado por la

Constitución Política del Estado de San Luis Potosí en sus artículos 26, fracciones I, II y III; 30, primer párrafo y 36 que establecen:

CONSTITUCION FEDERAL:

"Artículo 35.- Son prerrogativas del ciudadano:

"I.- Votar en las elecciones populares;

"II.- Poder ser votado para todos los cargos de "elección popular y nombrado para cualquier otro "empleo o comisión, teniendo las calidades que "establezca la ley;

"III.- Asociarse individual y libremente para tomar "parte en forma pacífica en los asuntos políticos "del país;

"..."

"Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por "medio de los Poderes de la Unión, en los casos de "la competencia de éstos, y por los de los Estados, "en lo que toca a sus regímenes interiores, en los "términos respectivamente establecidos por la "presente Constitución Federal y las particulares "de los Estados, las que en ningún caso podrán "contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

"La renovación de los poderes Legislativo y "Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, "auténticas y periódicas, conforme a las siguientes "bases:

"I.- ...

"Los partidos políticos tienen como fin promover la "participación del pueblo en la vida democrática, "contribuir a la integración de la representación "nacional y como organizaciones de ciudadanos, "hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del "poder público, de acuerdo con los programas, "principios e ideas que postulan y mediante el "sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo "los ciudadanos podrán afiliarse libre e "individualmente a los partidos políticos;

"...

"ARTICULO 116.- El poder público de los Estados "se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, "Legislativo y Judicial y no podrán reunirse dos o "más de estos poderes en una sola persona o "corporación ni depositarse el Legislativo en un "solo individuo.

"...Los Poderes de los Estados se organizarán "conforme a la Constitución de cada uno de ellos, "con sujeción a las siguientes normas:

"...

"IV.- Las Constituciones y leyes de los Estados en "materia electoral garantizarán que:

"a). Las elecciones de los gobernadores de los "Estados, de los miembros de las legislaturas "locales y de los integrantes de los ayuntamientos "se realicen mediante sufragio universal, libre, "secreto y directo;...".

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI:

"Artículo 26.- Son prerrogativas de los ciudadanos:

"I.- Votar en las elecciones populares y en los "procesos de referéndum y plebiscito que lleven a "cabo las autoridades competentes;

"II.- Poder ser votados para todos los cargos de "elección popular y nombrados para ocupar "cualquier empleo o comisión, teniendo las "calidades que esta Constitución y las leyes "establezcan;

"III.- Ejercer individual y libremente el derecho de "asociarse y reunirse para tomar parte en forma "pacífica en los asuntos políticos del Estado y los "Municipios; y

"..."

"Artículo 30.- El sufragio es el derecho que otorga "la ley a los ciudadanos para participar en la vida "política del Estado y constituye un deber cívico y "legal que se ejerce a través del voto para expresar "la voluntad soberana del individuo. El voto deberá "ser libre, universal, secreto y directo. Las "autoridades garantizarán la libertad y secreto del "mismo.

"..."

"Artículo 36.- Los partidos políticos son entidades "de interés público que tienen como fin promover "la participación de los ciudadanos en la vida "democrática y hacer posible el acceso de sus "candidatos, mediante el sufragio universal, libre, "secreto y directo de los electores, al ejercicio del "poder público, de acuerdo con los programas, "principios e ideas postulados por aquéllos."

En mérito de lo anterior, lo procedente es declarar infundados los conceptos de invalidez antes sintetizados y por consiguiente, reconocer la validez del último párrafo del artículo 23 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.

DECIMO SEGUNDO.- Por otra parte el partido accionante manifiesta que el artículo 20 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí contraviene lo dispuesto por el último párrafo de la fracción I del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer vía indirecta en la Constitución Estatal una residencia menor de la exigida en la Constitución Federal para el ciudadano que pretenda aspirar al cargo de Gobernador del Estado.

Son infundados tales argumentos por virtud de que como lo señala el partido político promovente en su concepto de invalidez respectivo, es la Constitución Local la que en su artículo 73 fracción II establece los requisitos para ser gobernador del Estado, entre ellos, el relativo a la vecindad o residencia de quien aspire a ocupar ese cargo, y no así el artículo 20 impugnado.

En efecto, el citado artículo 20 establece que:

"Artículo 20.- Son elegibles para ocupar el cargo de "Gobernador del Estado, diputados locales y "miembros de los ayuntamientos, las personas que "reúnan los requisitos y no tengan los "impedimentos que la Constitución Política de los "Estados Unidos Mexicanos y la particular del "Estado precisan para cada cargo, y en lo "conducente la Ley Orgánica del Municipio Libre."

Por su parte, el artículo 73, fracción II de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, dispone:

"Artículo 73.- Para ser Gobernador del Estado se "requiere:

"I. ...

"II. Si se tiene la calidad de potosino por "nacimiento, contar con una residencia efectiva no "menor de un año inmediato anterior al día de la "elección y, si se trata de un potosino por "vecindad, la residencia efectiva deberá ser no "menor de tres años contados a partir de la "adquisición de la calidad de vecino;

"..."

Como se desprende de lo transcrito, el artículo cuya inconstitucionalidad se demanda, únicamente establece que son elegibles para ocupar el cargo de Gobernador, las personas que reúnan los requisitos y no tengan los impedimentos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado precisan para ese cargo, situación que por sí misma no resulta contraria a lo dispuesto por el artículo 116, fracción I, último párrafo de la Constitución Federal, pues no precisa específicamente requisito alguno para ocupar el cargo de Gobernador del Estado, sino que remite a la Constitución Federal y a la estatal, por lo que si la Constitución Estatal establece un plazo menor de residencia a la exigida en la Federal, en todo caso, es un vicio atribuible a aquélla y no a la ley electoral estatal.

Por tanto, resultan infundados los conceptos de invalidez aducidos al enderezarse sobre cuestiones que tienen su origen en disposiciones de la Constitución Estatal y que, por ende, debieron hacerse valer mediante la impugnación oportuna a las mismas y no con motivo de las reformas a la ley electoral estatal que ahora se combate.

DECIMO TERCERO.- En otro concepto de invalidez el partido político accionante señala que los artículos 195, primer párrafo y 200 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí vulneran lo ordenado por el artículo 116, fracción IV, inciso e) de la Constitución Federal porque establecen un término de cinco días para que el Tribunal Electoral del Estado resuelva los recursos de inconformidad y de apelación, siendo éste un plazo inconveniente para la resolución de las múltiples controversias electorales que se presentan por virtud de la celebración de comicios en toda una entidad federativa, puesto que los plazos deben ser adecuados, convenientes y suficientes para que los tribunales electorales locales puedan resolver cabalmente y conforme a derecho todas y cada una de las impugnaciones que se les presentan en materia electoral.

El artículo 116, fracción IV, inciso e) de la Constitución Federal, dispone:

"Artículo 116.- ...

"...

"IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en "materia electoral garantizarán que:

"...

"e) Se fijen los plazos convenientes para el "desahogo de todas las instancias impugnativas, "tomando en cuenta el principio de definitividad de "las etapas de los procesos electorales;

"..."

Del precepto transcrito se desprende que impone como obligación a las entidades federativas que en sus Constituciones y leyes fijen los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias de impugnación en los procesos electorales, considerando para ello, el principio de definitividad de sus etapas.

Por su parte, los artículos 195 y 200 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, cuya invalidez se demanda, disponen:

"Artículo 195.- El Tribunal Electoral del Estado, "substanciará de inmediato los recursos de "inconformidad en el orden en que fueren "recibidos, para resolverlos dentro del término de "cinco días naturales, contados a partir del día "siguiente en que se reciba el recurso. Dentro de "este término, el Tribunal Electoral dará vista al "tercero interesado, a efecto de que exprese lo que "a su derecho convenga. La notificación "correspondiente se hará mediante cédula fijada en "los estrados del propio tribunal.

"..."

"Artículo 200.- El recurso de apelación procede "únicamente durante la segunda votación en las "elecciones para la renovación de ayuntamientos y "será resuelto en forma uni-instancial por la Sala de "Segunda Instancia del Tribunal Electoral.

"A través de este recurso podrán impugnarse todos "los actos y resoluciones que se presenten durante "la preparación, desarrollo y resolución de esta "segunda votación, y deberá dirigirse directamente "a la Sala de Segunda Instancia del Tribunal "Electoral, e interponerse, dentro de los tres días "siguientes a aquél que se tenga conocimiento del "acto o resolución que se impugne, ante el Comité "Municipal Electoral que lo hubiere emitido. El "organismo electoral responsable, dentro de las "veinticuatro horas siguientes a la presentación del "recurso, deberá de remitirlo a la Sala de Segunda "Instancia del Tribunal Electoral con un informe, "agregando las pruebas y constancias que obren "en su poder, así como las que el impugnante haya "ofrecido, las que deberán estar debidamente "relacionadas con las impugnaciones o agravios "que se hagan valer. La resolución se pronunciará "dentro de los cinco días siguientes a su recepción, "luego de que la Sala de Segunda Instancia haya "escuchado, en su caso, al tercero interesado, en lo "que a su derecho corresponda.

"..."

Los artículos transcritos se refieren a los recursos de inconformidad y apelación que deberán ser substanciados y resueltos por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, y señalan que el primero deberá resolverse dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al de su recepción, y el segundo, dentro de los cinco días siguientes a su recepción.

Ahora bien, en primer lugar debe señalarse que en la exposición de motivos de la reforma de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, en la que se adicionó la fracción IV al artículo 116 de la Constitución Federal, no se determinó de qué manera debían regularse los plazos, sino únicamente se estableció que éstos fueran convenientes.

En segundo lugar, de los argumentos expuestos por el partido accionante se advierte que al señalar que los plazos establecidos en los preceptos impugnados no son convenientes, lo hace bajo un criterio subjetivo sin explicar las razones concretas de por qué considera que dicho plazo es inconveniente.

No obstante lo anterior, debe señalarse que el plazo establecido en los aludidos numerales, no puede considerarse inconveniente para que el Tribunal Estatal resuelva los recursos que en ellos se establecen, pues atendiendo a que el proceso electoral se conforma de una serie de etapas concatenadas entre sí, que deben irse agotando paulatinamente, no pueden verse suspendidas por plazos prolongados para que se resuelvan las controversias que eventualmente pudieran irse suscitando durante dichos procesos.

En este sentido, los plazos convenientes a que alude el artículo 116 de la Constitución Federal, deben entenderse aquellos que garanticen una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Federal, atendiendo a la naturaleza propia de los procesos electorales, que incluso permitan la revisión, en su caso, por la autoridad jurisdiccional federal.

Por lo tanto, al no demostrarse por parte del partido político accionante que el plazo de cinco días para que se resuelvan las instancias relativas, establecido en los numerales antes citados, es inconveniente, lo procedente es declarar infundados tales argumentos.

DECIMO CUARTO.- En otro concepto de invalidez el partido político promovente considera inconstitucional la reforma al artículo 11, último párrafo de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí que establece que cuando hubiere empate en las elecciones municipales, el Congreso del Estado nombrará un Concejo Municipal que cumplirá sus funciones hasta en tanto se celebre la elección extraordinaria correspondiente, lo cual, al parecer del accionante, es contrario a lo establecido en el numeral 115, fracción I, último párrafo de la Constitución Federal, porque estima que para poder instalar Concejos Municipales, de conformidad con ese precepto se establecen supuestos, entre estos, que no se celebren nuevas elecciones y además, que dichos Concejos Municipales deberán concluir los periodos respectivos y no iniciarlos.

Tales argumentos también devienen infundados en atención a lo siguiente:

El artículo 11, último párrafo de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí establece lo siguiente:

"Artículo 11.- ...

"Asimismo, tratándose de ayuntamientos, si el "empate se presenta en la segunda votación, el "Congreso del Estado nombrará un Concejo "Municipal en los términos de la Constitución "Política del Estado y de la Ley Orgánica del "Municipio Libre, que cumplirá sus funciones hasta "en tanto se celebre la elección extraordinaria "correspondiente."

De lo anterior se desprende que en caso de empate en la segunda votación, el Congreso del Estado nombrará un Concejo Municipal en términos, entre otros de la Constitución Estatal, que cumplirá las funciones del Ayuntamiento hasta en tanto se celebre la elección extraordinaria correspondiente.

Por su parte, los artículos 122, fracción IV y 35 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, en lo conducente, establecen:

"Artículo 122.- En caso de declararse suspendido o "desaparecido un Ayuntamiento, el Congreso "designará de entre los vecinos, un Concejo "Municipal que concluirá el periodo respectivo, si la "causal se da después de un año de ejercicio del "periodo constitucional para el que fue electo, en "caso de que esta circunstancia se presente dentro "del primer año del ejercicio constitucional, el "Concejo Municipal designado gobernará el "municipio hasta en tanto se celebre la respectiva "elección extraordinaria de Ayuntamiento y tomo "posesión la planilla que haya resultado electa. El "mismo procedimiento se observará si ocurre la "renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus "integrantes, si no procediere que entren en "funciones los suplentes.

"Igualmente, el Congreso del Estado designará un "Concejo Municipal que concluirá el periodo "respectivo, determinando los cargos "correspondientes, en los siguientes casos:

"I. a III. ...

"IV. Cuando ninguna planilla hubiese sido "declarada electa, una vez efectuada la segunda "votación a que se refiere el artículo 35 de la "presente Constitución; y

"V. ..."

"Artículo 35.- Cuando en las elecciones para la "renovación de los ayuntamientos ninguna de las "planillas de candidatos obtenga la mayoría "absoluta de la votación total válida emitida en el "municipio respectivo, se llevará a cabo una "segunda votación, excepto en los casos que "establezca la ley.

"...

"Para el caso de que en la segunda votación llegare "a ocurrir un empate, el Congreso del Estado "designará un Concejo Municipal que ejercerá sus "funciones, en tanto se realiza la elección "extraordinaria correspondiente conforme a la ley "de la materia."

Como se observa de los anteriores artículos de la Constitución Local se establece, en lo que interesa, que para el caso de que en la segunda votación llegara a ocurrir un empate, el Congreso del Estado designará un Concejo Municipal que ejercerá las funciones del Ayuntamiento en tanto se realiza la elección extraordinaria correspondiente.

De lo anterior se aprecia que el contenido del numeral 11, último párrafo de la Ley Electoral Estatal, no hace sino reiterar lo dispuesto en el último párrafo del 35 de la Constitución Local, de lo que se sigue que la disposición impugnada tiene su antecedente en la Constitución Estatal por lo que para la impugnación de dicha disposición debieron combatirse previamente los artículos de la Constitución Estatal que contemplan

la designación de un Concejo Municipal en caso de empate en la segunda votación, por ser el antecedente y causa generadora de la reforma que ahora se impugna, lo que no se advierte se haya hecho; por tanto es de considerarse que la reforma a la ley es una consecuencia legal y necesaria de los artículos citados de la Constitución Local, por lo que es innegable que el decreto que motivo el ejercicio de la presente acción es un acto derivado de otro consentido cuya constitucionalidad no puede analizarse independientemente de la Constitución Estatal en que tiene su fundamento.

En consecuencia, lo procedente es declarar infundados los argumentos hechos valer ya que los artículos 122, fracción IV y 35 de la Constitución Estatal, de los que emana el presente impugnado, no fueron combatidos en su oportunidad y no se puede suplir en este aspecto la deficiencia de la queja, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71, segundo párrafo de la Ley Reglamentaria de la Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone:

> *"Artículo 71.- ...*
>
> *"Las sentencias que dicte la Suprema Corte de "Justicia de la Nación sobre la no conformidad de "leyes electorales a la Constitución, sólo podrán "referirse a la violación de los preceptos "expresamente señalados en el escrito inicial."*

DECIMO QUINTO.- Por último en relación a la violación al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se hace examen ni pronunciamiento alguno, toda vez que de la lectura integral de la demanda no se advierte que se hayan hecho valer argumentos en los que se precisara el por qué se estima infringida tal disposición fundamental.

Atento a todo lo expuesto en la presente resolución, al ser parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad, procede declarar la invalidez de los artículos 13, en la porción normativa que establece: ***"En caso de que no hubieran candidatos que bajo esta regla pudieran llamarse a ocupar la vacante, será llamado el candidato de otro partido al que, de acuerdo a la proporción de votos, correspondiera el lugar preferente inmediato.";*** 26, fracción III, inciso d) y 64, fracción X y reconocer la validez de los artículos 10, primer párrafo; 11, último párrafo; 20; 23, último párrafo; 26, penúltimo párrafo; 32, último párrafo; 34, fracción IV; 35, fracción VII, inciso a); 36, fracción II; 38, primer párrafo; 41, último párrafo; 48, primer párrafo; 43, fracción X; 57, fracción III; 76, primer párrafo; 87, fracción I; 107, primer párrafo y fracción IV; 195, primer párrafo; 200 y 212, fracciones VI y VII, todos de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, en términos de los considerandos sexto al décimo cuarto de esta resolución.

Dicha invalidez surtirá sus efectos a partir de la publicación de esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación**.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO.- Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad promovida por el partido político Acción Nacional en contra del Decreto "351", publicado en el Periódico Oficial de la Entidad el ocho de julio de dos mil dos por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.

SEGUNDO.- Se declara la invalidez de los artículos 13, en la porción normativa que establece: ***"En caso de que no hubieran candidatos que bajo esta regla pudieran llamarse a ocupar la vacante, será llamado el candidato de otro partido al que, de acuerdo a la proporción de votos, correspondiera el lugar preferente inmediato."*;** 26, fracción III, inciso d) y 64, fracción X de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí en términos de los considerandos sexto, noveno y décimo de la presente resolución.

TERCERO.- Se reconoce la validez de los artículos 10, primer párrafo; 11, último párrafo; 20; 23, último párrafo; 26, penúltimo párrafo; 32, último párrafo; 34, fracción IV; 35, fracción VII, inciso a); 36, fracción II; 38, primer párrafo; 41, último párrafo; 43, fracción X; 48, primer párrafo; 57, fracción III; 76, primer párrafo; 87, fracción I; 107, primer párrafo y fracción IV; 195, primer párrafo; 200 y 212, fracciones VI y VII de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí.

CUARTO.- Publíquese esta resolución en el **Diario Oficial de la Federación**, en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de nueve votos, excepto por lo que se refiere al reconocimiento de validez de los artículos 48, primer párrafo, y 212, fracciones VI y VII, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, contenido en el resolutivo tercero, reconocimiento que se aprobó por mayoría de cinco votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre

Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero, José Vicente Aguinaco Alemán y Olga Sánchez Cordero de García Villegas; los señores Ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios y Presidente Genaro David Góngora Pimentel votaron en contra y porque se declarara la invalidez de dichos preceptos. No asistieron los señores Ministros Juan N. Silva Meza, por estar disfrutando de vacaciones, y Juventino V. Castro y Castro, previo aviso a la Presidencia. Dada la ausencia del señor Ministro Ponente, el señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia hizo suyo el proyecto.

Firman los señores Ministros Presidente y Ponente que hizo suyo el proyecto, con el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.- El Ministro Presidente, **Genaro David Góngora Pimentel**.- Rúbrica.- El Ministro que hizo suyo el Proyecto, **Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.-** Rúbrica.- El Secretario General de Acuerdos, **José Javier Aguilar Domínguez**.- Rúbrica.

LICENCIADO **JOSE JAVIER AGUILAR DOMINGUEZ**, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de ciento un fojas útiles, concuerdan fiel y exactamente con su original que obra en el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 16/2002, promovida por el Partido Acción Nacional, en contra de la Quincuagésima Sexta Legislatura y del Gobernador, ambos del Estado de San Luis Potosí, se certifica para efectos de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 44 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el punto cuarto resolutivo de su sentencia dictada en la sesión pública de siete de octubre en curso.- México, Distrito Federal, a nueve de octubre de dos mil dos.- Conste.- Rúbrica.